MILITARES Y GUERRILLAS

La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958 - 2016

Segunda Edición

Juan Esteban Ugarriza
Nathalie Pabón Ayala







MILITARES Y GUERRILLAS

La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958 - 2016

Segunda Edición

Juan Esteban Ugarriza
Nathalie Pabón Ayala







Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016 / Segunda edición

Resumen

Este libro presenta una memoria histórica del conflicto armado colombiano reconstruida a partir de archivos militares inéditos. El uso de las piezas producidas por las Fuerzas Militares entre 1958 y el 2016, así como de aquellas incautadas a los grupos armados ilegales, permite presentar una versión histórica que aporta nuevas respuestas a viejas cuestiones sobre cuándo y cómo surgió la confrontación armada entre el Estado y los comunistas revolucionarios y, sobre todo, cómo se desarrolló en el tiempo. No se trata aquí de presentar la versión definitiva del conflicto, sino de contribuir desde una perspectiva particular, la que ofrecen los documentos militares, con una narrativa que servirá para complementar otros esfuerzos de memoria.

Palabras clave: Conflicto armado, Colombia, Fuerzas Militares, historia, archivos militares.

The Historical Memory of the Colombian Armed Conflict based on Military Archives, 1958-2016 / Second Edition

Abstract

This book presents a historical memory of the Colombian armed conflict as reconstructed from unpublished military archives. The use of written pieces produced by the Armed Forces between 1958 and 2016, as well as of other texts seized from illegal armed groups, allows to provide new answers to old questions about how and when the confrontation between the State and communist revolutionaries began, and above all, how it developed over time. This is not the definitive version of the conflict, but nevertheless a contribution from the particular perspective provided by military documents, which offers a narrative that will complement other efforts to preserve the memory of the Colombian conflict.

Keywords: Armed conflict, Colombia, Armed Forces, history, military archives.

Citación sugerida Ugarriza J. E. y Pabón Ayala N. 2017. Militares y guerrillas. L

Militares y guerrillas

La memoria histórica del

conflicto armado en Colombia

desde los archivos militares,

1958 - 2016

—Segunda edición—

Juan Esteban Ugarriza

Nathalie Pabón Ayala

Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958 - 2016 / Segunda edición / Juan Esteban Ugarriza Uribe y Nathalie Pabón Ayala. -- Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017.

x, 398 páginas.

Incluye referencias bibliográficas.

Conflicto armado -- Historia -- Colombia / Guerrillas -- Historia -- Colombia / Archivos militares -- Colombia / I. Título / II. Serie.

303.6 SCDD 20

Catalogación en la fuente — Universidad del Rosario. Biblioteca

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995


Universidad del
Rosario

Editorial Universidad del Rosario

Carrera 7 Nº 12B-41, oficina 501 • Teléfono 297 02 00

editorial.urosario.edu.co

Segunda edición: Bogotá D. C., enero de 2018

Primera edición: Bogotá D. C., mayo de 2017

ISBN: 978-958-738-998-2 (impreso)

ISBN: 978-958-738-999-9 (ePub)

ISBN: 978-958-784-000-1 (pdf)

DOI: doi.org/10.12804/tj978958738999-9

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Diego Aristizábal

Diagramación: Martha Echeverry

Dirección de arte: David A. Reina

Ilustración de portada y contraportada: María Isabel Posada

Infografías y mapas: Liliana Ospina

Tablas y gráficos: Carolina Gómez Andrade

Desarrollo epub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a la universidad ni sus políticas institucionales.

El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co

Autores

JUAN ESTEBAN UGARRIZA

Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berna. Tiene una maestría en Historia de la Universidad de Carolina del Norte. Es profesor asociado de la Universidad del Rosario. En los últimos diez años se ha dedicado a la aplicación de metodologías experimentales para el análisis de la reintegración de excombatientes a la vida civil y la generación modelos de reconciliación con víctimas. Actualmente explora, junto a un equipo interdisciplinario, los sesgos y efectos neurosicológicos del conflicto. Entre 2013 y 2017 fue delegado asesor del Gobierno colombiano para los diálogos con el ELN.

NATHALIE PABÓN AYALA

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Miembro funda-dor del grupo de investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en temas de investigación como: Fuerzas Armadas, Relaciones Civiles Militares, seguridad internacional, seguridad ciudadana, conflicto y posconflicto en Colombia. Es autora de varios artículos y capítulos de libro relacionados con los temas de seguridad y defensa.

Agradecimientos

Agradecemos al Comando General de las Fuerzas Militares y al Ejército Nacional por la disposición de personal en las regiones que hizo posible la revisión de los archivos aquí referenciados. Reconocemos, de igual manera, su respeto total al compromiso de no interferencia en los procesos de revisión, análisis e interpretación de la información recogida, y aceptación de independencia de nuestro trabajo académico. Agradecemos también a Juan Carlos Chaparro por su contribución sustancial en varios capítulos de este libro.

Introducción

Gabriel García Márquez escribió en su libro de memorias Vivir para contarla que "la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla". Por algo la memoria no es un recuento detallado de lo que ocurrió, sino de lo que alcanzamos a recordar.

La memoria humana no es fiable. El cerebro humano no parece haber evolucionado para registrar como una máquina fidedigna los detalles, olores, colores y emociones vividas; más bien guarda y recupera, de manera selectiva, aquellos fragmentos de información que le son más útiles[1]. Al momento de recordar, la información es recuperada y, en el proceso, a veces transformada para llenar vacíos y concordar con el pensamiento presente.

No se trata de un defecto. El cerebro humano es una herramienta fenomenal para planear el futuro, imaginar cursos de acción y tomar decisiones. Simplemente, su función no es recordar, sino usar los recuerdos como un insumo más, maleable y adaptable, para sortear las situaciones de la vida. De ahí que el cerebro altere la memoria del pasado cada vez que intenta recordarlo[2], e incluso que, sistemáticamente, elimine o bloquee información de manera inconsciente[3].

Lo que recordamos típicamente se asocia a aquello que nos ha generado emociones. Por eso, para bien o para mal, nuevas emociones pueden reconfigurar la manera en que recordamos. De ahí que no solo por la experiencia sensorial externa, sino también por el filtro personal interno, resulte imposible que dos individuos puedan tener memorias idénticas sobre un mismo hecho.

Estas memorias fragmentarias y subjetivas se reflejan tanto en los testimonios orales como en los documentos que los individuos construyen. Como bien lo saben los historiadores, no hay documentos objetivos. Quien los redacta, no solo refleja ese sesgo involuntario derivado de la manera en que su mente recuerda, sino también otros sesgos generados de manera consciente o inconsciente por sus orientaciones ideológicas, políticas, culturales, etc. Aun aceptando la existencia de 'realidades incontestables', las memorias al respecto variarán según qué individuo o qué grupos recuerden. Pero la variación en las formas de recordar no obedece únicamente a procesos meramente individuales. Como lo

muestran recientes estudios, los recuerdos pueden ser fabricados e inducidos socialmente, de manera inconsciente para la persona, en forma de falsas memorias[4].

¿Quiere decir esto que las narrativas de quien ha vivido, y los documentos que testifican lo que ha ocurrido, son mentiras? No. Simplemente no reflejan una realidad objetiva, sino la manera en que se recuerdan realidades subjetivas. De ahí que reconocer la existencia de una brecha entre una noción de realidad y una de memoria es indispensable para entender y valorar los alcances de la reconstrucción histórica, dado que, aun con sus limitaciones y de manera más que imperfecta, esta es la forma en que podemos acercarnos a los hechos pasados.

Memoria, historia y verdad

Quienes abordan la memoria como objeto de estudio, típicamente tratan de analizar y explicar, enomenológicamente, cómo se produce y cómo opera, y, sobre todo, cómo nuestra propia existencia inevitablemente se ve afectada por la forma en que aprehendemos el pasado, percibimos y vivimos el presente y vislumbramos el futuro[5].

El mundo del ser humano es el que percibe, no el mundo hipotético objetivo e incontestable. La forma más evidente en la cual la memoria afecta las percepciones del mundo es la forma como el cerebro obtiene información. Lo primero que hacemos cuando intentamos reconstruir o rememorar un hecho, un acontecimiento o una persona, es acudir al testimonio que nos proporciona nuestra propia memoria. A veces se trata de una fotografía, un objeto, un documento, un libro o una persona, pero usualmente recurrimos a aquello que se ha quedado merodeando en nuestra mente con el ánimo de hacer presente lo que ya pasó.

Por supuesto, las personas con experiencias individuales de personas con elementos comunes, expuestas a situaciones similares, van a encontrar que sus memorias, aunque no sean iguales, se parecen. La conjunción de la memoria nuestra y la de los otros es lo que le da sustento y contenido a eso que llamamos memoria colectiva. Podemos hablar de memoria colectiva "cuando evocamos un hecho que ocupaba un lugar en la vida de nuestro grupo y que hemos planteado o planteamos, ahora en el momento en que lo recordamos, desde el punto de vista de [un] grupo"[6]. Se requiere para esto que al unir las memorias individuales "haya bastantes puntos en común entre una y otras para que el recuerdo que nos traen pueda reconstruirse sobre una base común"[7]. De ahí que la memoria colectiva se configure a partir de experiencias vividas y compartidas por un grupo de personas en un momento dado, y que pueden rememorarse en virtud del significado colectivo que tienen para los miembros del grupo. Sin embargo, las versiones de memoria colectiva de diversos grupos humanos pueden claramente divergir entre sí.

Lo que llamamos memoria histórica, en el contexto de las sociedades que superan experiencias traumáticas de violencia, es por definición una construcción social, una elaboración que parte de lo que recuerdan los individuos, así como de documentos, y aspira a ser reconocida de forma

colectiva. La memoria histórica se basa en elementos comunes de aquello que vivieron los individuos para intentar luego la reconstrucción de un mundo intersubjetivo; es decir, construido y tejido alrededor de la subjetividad de las memorias parciales. En la práctica, esa memoria histórica se construye con lo que varias fuentes corroboran, como en el periodismo, y en algunos casos se usan testimonios escritos u orales de testigos de excepción. A pesar de que el producto final estará relativamente cerca de la memoria de cada individuo que participa, no representa completa y perfectamente la memoria de todos.

¿La memoria histórica es entonces imaginaria? La memoria histórica es una forma de memoria colectiva, que no reemplaza la memoria subjetiva individual. Sin embargo, al igual que esta, se encuentra impregnada de subjetividad y es fragmentaria; por tanto, no puede valorarse como 'la verdad' de lo que pasó.

El gran peligro de la construcción de memoria colectiva es pretender que su producto final sea un consenso de todos los miembros de una sociedad. Inevitablemente, la memoria histórica es la construcción de una versión de los hechos a partir de lo que recuerda un grupo de personas. Y, en ocasiones, las memorias compartidas por grupos de personas son contradictorias entre sí. Aun logrando crear memorias colectivas de grupos sociales, pretender que esas memorias se negocien para lograr un consenso global es absurdo. Por eso, los ejercicios de memoria histórica serán exitosos, no en la medida en que construyan una memoria colectiva única de consenso imposible, sino conforme puedan reflejar distintas versiones, algunas complementarias y otras contradictorias, de lo ocurrido.

Esta memoria es claramente una construcción y un artefacto cultural. Por ello, podemos entender la memoria histórica "como un producto cultural que, como resultado de una práctica social, contribuye a producir aquello que se llama pasado". Recordar, desde esta perspectiva, es un "proceso de producción de aquel fragmento del pasado que responde a los intereses sociales, políticos, culturales, identitarios muy particularmente del sujeto individual y, preferiblemente colectivo, que recuerda. Un proceso que tiene forma narrativa, por la palabra, y también conmemorativa. Aquí las palabras son parte de los rituales codificados en los que participa la comunidad de memoria"[8]. Con la realización de ese ejercicio, la memoria no solo se dota de nuevos sentidos, sino que se convierte en una herramienta transformadora del pasado y del presente, en cuanto resignifica esos dos momentos, e incluso modifica, o por lo menos trastoca, la mirada que se tiene del futuro.

Por eso, memoria histórica no es lo mismo que verdad. Ni científica, ni judicial, ni no judicial. Las verdades científicas son siempre relativas y, sobre todo, provisionales. Nuevos descubrimientos llevan a revaluar lo que se da por sentado y cada tanto cambian los paradigmas de la ciencia. Lo que es válido hoy, no lo es mañana, y el valor de la verdad científica es contingente. La verdad judicial, por su parte, es una emanación del poder político. Quienes gobiernan hacen leyes que derivan en un sistema judicial, y los jueces establecen responsabilidades basados en ese sistema. Por eso, en el caso de las postguerras y postconflictos armados, el vencedor nunca es culpable: solo el vencido. Pero esta verdad judicial tampoco es inmutable. Cuando cambia el equilibrio de poderes en la sociedad, también cambia la verdad judicial. Es lo que hemos visto con decisiones judiciales de punto final, obediencia debida, perdón y olvido, entre otras, en las cuales los estatus de culpabilidad son revisados con el paso de los años.

La verdad no judicial, como complemento, trata de escapar de la contingencia de las relaciones de poder, tejiendo un consenso más amplio y, en lo posible, más duradero. Por ello involucra fuerzas sociales más allá de los jueces para equilibrar la toma de decisiones. Pero las verdades no judiciales, usualmente, se materializan en esfuerzos únicos que no se repiten. Normalmente, no hay dos comisiones de la verdad. Y el riesgo es creer que un único ejercicio de verdad no judicial equivale a la verdad definitiva.

Al no existir la posibilidad explícita de revisión, como con las verdades científicas, quien se rebela contra las verdades oficiales no tiene vías para canalizar su divergencia y, en demasiados casos, hemos visto cómo sociedades enteras quedan partidas entre distintas versiones de lo que pasó. La imposición de una verdad oficial, a pesar de intentar ser inclusiva, contribuye a la fragmentación de las sociedades.

Si se retira la pretensión de inmutabilidad a las verdades científicas, judiciales y no judiciales, se abre el camino para preguntarse cuál es el tipo de verdad, así sea imperfecta, que puede contribuir a la superación del conflicto. Es decir, qué tipo de verdad es útil para superar el pasado de violencia, sin generar más traumas ni dividirnos profundamente; lo cual implica tomar decisiones pragmáticas sobre si queremos conocer el detalle de lo ocurrido, o reconocer de manera genérica, pero sin ambages, la existencia y las responsabilidades de los hechos. Y esa verdad será un insumo para la construcción de memorias, memorias históricas e historia.

A la larga, se trata de crear insumos para escribir la historia. Cualquier memoria histórica, entendida como un ejercicio de historia sobre la memoria, podría escribirse con más serenidad en la medida en que quienes la construyen puedan tomar distancia. En particular, los historiadores usualmente señalan la importancia de que haya una distancia temporal, que permita que las coyunturas y los protagonistas directos tengan menos oportunidad de afectarla con su sesgo. Pero la memoria histórica en contextos de superación de conflictos es, en muchos casos, una urgencia, debe hacerse pronto, demasiado cerca aún de los acontecimientos. Al igual que los ejercicios de historia, eso no la inmuniza de la revisión permanente: la historia que contamos hoy no será igual a la de mañana, ni siquiera la que contarán nuestros hijos o nuestros nietos. Lo que escribamos hoy es un inicio y un legado, pero será revisado.

De qué se trata este libro

Al no tratarse de un libro de historia, sino de memoria, no existe un gran argumento sino una serie de narrativas y explicaciones parciales de por qué el conflicto armado en Colombia se desarrolló como lo hizo. Agrupando estos testimonios y explicaciones, este libro presenta dos perspectivas.

La primera perspectiva es la de las Fuerzas Militares. En pleno proceso de profesionalización y transformación doctrinaria, los gobiernos de los años cincuenta las obligaron a convertirse en fuerzas contrabandoleriles. Fue un proceso de doloroso aprendizaje que, finalmente, les concedió una victoria estratégica. Sin embargo, el bandolerismo no era el único producto de la violencia crónica del país desde hacía décadas; simultáneamente aparecieron desafíos de grupos armados liberales, conservadores y comunistas. Las Fuerzas Militares entendían la existencia de una guerra de alcance mundial de carácter militar-ideológico, la guerra anticomunista, que se desarrollaba en Colombia sobre todo en niveles táctico y operacional. Es decir, por décadas, el Estado persiguió el fin del conflicto en el terreno sin una estrategia global militar ni político-social que incluyera, por ejemplo, la reducción de la exclusión social y política.

En los años sesenta, diferentes intentos de plantear dichas estrategias comprehensivas fueron truncados, como fue el caso del Plan Lazo, y solo fueron recuperadas parcialmente a finales del siglo XX: primero, en los años ochenta, con una estrategia que incluía un componente político y social limitado —diálogo y Plan Nacional de Rehabilitación— y un componente militar también limitado —ofensiva contra el M-19 y el EPL—, desconectados entre sí.

A finales de los noventa, hay una recomposición de una estrategia integral, todavía con un componente político y social limitado —de nuevo diálogo y política social—, pero con uno militar amplio y reconectado: el esfuerzo militar entendido como una estrategia para obligar a las guerrillas a sentarse a negociar. Esta estrategia dio frutos a principios del siglo XXI, y logró que las Fuerzas Militares les cerraran a las guerrillas revolucionarias la opción de la vía armada para la toma del poder.

La segunda perspectiva que se desarrolla en este libro es la de las guerrillas. Los primeros capítulos describen una serie de grupos armados que nacen como

unidades concentradas en lo táctico, nivel en el que son derrotados inicialmente. A partir de las derrotas tácticas, las guerrillas inician un ciclo de aprendizaje revolucionario, en el que mientras hay una sofisticación táctica progresiva también empiezan a diseñar estrategias para ganar la guerra. Las Farc, por ejemplo, mostraron al resto de guerrillas cómo alcanzar mayores niveles de sofisticación táctica —el uso simultáneo de autodefensa comunista y guerrilla, por ejemplo— y operativa — planes para sobrevivir y asestar golpes— que les permitiera enfrentar sistemáticamente a las Fuerzas Militares.

El EPL, por su parte, planteó la primera estrategia para ganar la guerra y tomar el poder, la guerra popular prolongada, que buscaba involucrar a las masas en todo el territorio nacional como contexto favorable para la vanguardia militar. El M-19 refinó ese planteamiento de guerra popular al proponerlo como un esfuerzo combinado en distintos escenarios —político, social, jurídico, cultural—, con base en un plan ideológico-militar —la guerra revolucionaria—, que se desarrollaría tanto en el campo y la ciudad, con una perspectiva continental. Parte del éxito del M-19 fue darle preeminencia a lo político sobre lo ideológico para hacer llegar su mensaje a grandes sectores de la población, aunque, al final, fue derrotado militarmente, junto con el EPL, a finales de los ochenta.

En los años ochenta, el ELN consideró, en principio, aplicar la receta prescrita por el Che Guevara para generar una insurrección de masas. Luego, en los noventa, al igual que las Farc, empezó a creer en la posibilidad real de la toma del poder por la vía militar, pero su debilitamiento a principios del siglo XXI lo hizo retornar a una estrategia con preeminencia de lo político y lo ideológico.

Las Farc, que no fueron derrotadas militarmente en los ochenta, sino que acumularon fuerzas durante la década, daban prioridad a lo ideológico —creencias y visiones del mundo que no son negociables— y a lo militar sobre lo político —entendido como el trámite y la toma de decisiones colectivas sobre la agenda de lo público—. Luego de superar en iniciativa a las Fuerzas Militares, las Farc sufrieron en el siglo XXI una derrota estratégica que les obligó a transformarse en una organización política sin armas, decisión desatada en parte gracias al cambio de liderazgo interno.

Este libro presenta la interacción de estas perspectivas. No se trata de legitimar las acciones, sino de entender la manera y los porqués de la forma en que desarrollaron el conflicto armado. Y esa forma, tal como se describe aquí, implicó un daño de grandes magnitudes a la población civil, la degeneración de

los métodos, la contaminación con el narcotráfico y la proliferación de ejércitos privados.

Diseño de la investigación

Si bien otros trabajos de memoria han descrito la afectación a la población civil en el marco del conflicto armado, aún no existe un recuento sistemático de las lógicas internas de las Fuerzas Militares y las guerrillas que ayuden a explicar por qué ocurrió esta afectación. Explicar los actores armados no es justificarlos, sino ayudar a entender el conflicto que permitió que todo tipo de afectaciones sucedieran y por qué, al parecer, se han ido acabando.

Desde el punto de vista metodológico, este es un ejercicio de memoria histórica porque reconstruye la historia como la vivieron los combatientes. En las páginas de este libro se refleja lo que ellos vieron, percibieron y recuerdan y, por eso, solo es un fragmento de memoria. En particular, describimos los hechos como son percibidos desde los archivos de las Fuerzas Militares. Para los soldados, su mundo es el de las narrativas oficiales de la institución y el de sus adversarios, las guerrillas. Por eso privilegiamos el uso de documentos que pueden ser atribuidos a la institución, más que la producción individual de miembros de las Fuerzas Militares que no refleja, necesariamente, el ambiente institucional.

Es importante dejar claro que no somos militares contando la historia, sino terceros académicos. Esto nos permite construir una versión sin pretensiones ideológicas, pero, a la vez, nos limita en la capacidad de reflejar el sentir y la vivencia de los combatientes.

Las hipótesis que guiaron este trabajo giran alrededor de qué factores explican la manera en que las Fuerzas Militares y las guerrillas desarrollaron su conflicto. En esa medida, exploramos cinco factores: dos endógenos, es decir, las decisiones de nivel táctico, operacional y estratégico de las Fuerzas Militares por un lado, y de las guerrillas por otro; y tres factores exógenos: el contexto político-legal; las relaciones de los actores armados con la población civil —el intento de los actores por usar a la población dentro de su estrategia, y la disposición o no de la población con relación a ellos—; y los elementos dinamizadores del conflicto como el narcotráfico, los ejércitos privados y algunos contextos socio-económicos regionales específicos.

El valor principal de esta reconstrucción es el uso profuso de fuentes primarias inéditas, particularmente documentos militares oficiales y otros incautados a los grupos guerrilleros, todos provenientes de los archivos de las Fuerzas Militares.

Si bien somos conscientes de los problemas metodológicos que cualquier trabajo con un archivo documental trae consigo, las piezas analizadas permiten reconstruir un universo de discursos y visiones en el cual los combatientes estaban inmersos. Así el acceso a estos archivos no fuera el ideal, dados los problemas de pérdida de material, incendios, inundaciones, caos archivístico e incluso recelos por parte de los encargados de los archivos, es histórico en sí mismo poder acceder y presentar una versión de la memoria histórica a partir del material revisado. De esta manera, y queremos hacer énfasis en esto, el peso principal de este libro reposa en el uso de documentos de archivos, con la inclusión de testimonios que los complementan.

Como método de recolección de datos, hicimos una preselección de casi cuatrocientos hechos relevantes del conflicto armado, que nos permitían delimitar temporalmente y cualitativamente el tipo de archivos que era necesario buscar. Posteriormente, la estrategia de análisis consistió, en un primer momento, en la reconstrucción histórica de los hechos más relevantes del conflicto mediante los datos recabados en documentos; luego, en una discusión interdisciplinar sobre cuáles son los momentos donde hay un cambio cualitativo del contexto del conflicto armado; y finalmente, en la identificación de los elementos políticos, poblacionales, de seguridad, operacionales e históricos particulares que caracterizaron cada una de las fases del conflicto. En cuanto al estilo, hemos privilegiado, en lo posible, las voces que emergen de los documentos y algunas entrevistas recabadas, tejiendo un relato casi cronológico que narra y analiza el desarrollo del conflicto desde la perspectiva de los combatientes.

El propósito central de este libro es presentar una memoria histórica del conflicto armado colombiano que refleje la manera en que soldados y guerrilleros lo vivieron, y contribuya a explicar el porqué se desarrolló como lo hizo. De esta manera, tratamos de entender las estrategias, operaciones y tácticas empleadas por las Fuerzas Militares y por las guerrillas para intentar derrotar a su adversario en el conflicto armado; indagamos cómo se articuló la acción de las Fuerzas Militares con las directrices políticas y marcos legales en el ámbito nacional; cuál fue el papel de la población civil en el conflicto; cuáles fueron las particularidades de la acción de los grupos armados ilegales en las regiones; en qué condiciones estaban las Fuerzas Militares para enfrentar la situación de conflicto; y qué factores históricos regionales o dinamizadores, como narcotráfico y los ejércitos privados, afectaron la acción de las Fuerzas Militares y las guerrillas. En la exploración de respuestas parciales a estas preguntas, este

libro pretende contribuir a la resolución de un problema fundamental de la memoria histórica del conflicto: la inexistencia de un recuento que incorpore de manera sistemática las fuentes documentales militares y las ponga sobre la mesa.

El punto de partida es el año 1958, en plena época de pacificación, cuando la guerra parecía amainar y el país entraba a un nuevo escenario de gobierno civil. Es obvio que el conflicto ya existía entonces, y eso nos obliga a remitirnos a elementos claves que preceden a esa fecha. Dos documentos encontrados en archivos militares nos dan luces sobre un momento clave: el día en que el Partido Comunista decidió definitivamente confrontar militarmente al Estado, situado por sus protagonistas en 1947. Aquel es el año del cambio cualitativo para los enemigos enfrentados, pues por primera vez uno de los bandos acude al uso sistemático de un aparato militar para el avance de su estrategia —la toma del poder e instauración del comunismo—, y el otro de manera automática responde mediante el uso de la fuerza legal para restaurar el monopolio estatal de la violencia, ya en desafío.

Este libro no describe en detalle el inicio de la insurrección comunista contra el Estado colombiano, organizada desde la segunda década del siglo XX, o las dinámicas de las diferentes violencias organizadas desde entonces por otros actores —guerrillas del Llano, por ejemplo—, sino que retoma aquellos factores claves configurados en la primera mitad del siglo XX y que contribuyen a explicar la dinámica del conflicto armado entre guerrillas comunistas y las Fuerzas Militares desde el retorno de los gobiernos civiles a finales de los años cincuenta.

A partir de entonces, los archivos permiten reconstruir una memoria del conflicto armado en la que antiguos guerrilleros deciden volver a tomar las armas contra el Estado, esta vez bajo la bandera comunista, en tanto que las Fuerzas Militares inician un lento aprendizaje estratégico, operacional y táctico de cómo enfrentar el escenario de guerra irregular desatado en los años sesenta.

Muchas cosas quedan por decir: la descripción del costo humano de los combatientes y sus familias; la manera en que individuos y colectivos entendieron y asimilaron el contexto aquí descrito y actuaron de acuerdo con ello; y, sobre todo, el detalle de las maneras, alcances e implicaciones de la acción de soldados y guerrilleros que abiertamente decidieron en algún momento desafiar la manera de hacer las cosas, y con ello provocaron cambios decisivos en la confrontación.

Quisiéramos que futuros trabajos pudieran acercarse con más detalle a testimonios y memorias individuales, y que enriquecieran con ello el verdadero sentir de los combatientes. Después de todo, no es este el ejercicio definitivo de memoria histórica desde la óptica de militares y guerrillas, pero es un trabajo que captura elementos que aún no están sobre la mesa. Nuevos ejercicios revisarán las tesis aquí sugeridas y en el proceso crearán nuevas memorias.

Notas

[1] Véase Klein, Stan B.; Robertson, Theresa E. y Delton, Andrew W. 2010. Facing the future: Memory as an evolved system for planning future acts. Memory & Cognition 38(1): 13-22; y de los mismos autores 2011. The future-orientation of memory: Planning as a key component mediating the high levels of recall found with survival processing. Memory 19(2): 121-139.

[2] Wimber, Maria; Alink, Arjen; Charest, Ian; Kriegeskorte, Nikolaus y Anderson, Michael C. 2015. Retrieval induces adaptive forgetting of competing memories via cortical pattern suppression. Nature Neuroscience 18, 582-589.

[3] Anderson, Michael C.; Bjork, Robert A. y Bjork, Elizabeth L. 1994. Remembering can cause forgetting: retrieval dynamics in long-term memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 20, 1063-1087.

[4] Patihis, Lawrence; Frenda, Steven J.; LePorte, Aurora K.R.; Petersen, Nicole; Nichols, Rebecca M.; Stark, Craig E.L.; McGaugh, James L. y Loftus, Elizabeth F. 2013. False memories in highly superior autobiographical memory individuals. Proceedings of the National Academy of Sciences 110(52): 20947-20952.

[5] Al respecto véase la primera de las tres partes que componen la obra de Ricoeur, Paul 2010. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

[6] Halbwachs, Maurice 2004. Memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 36.

[7] Ibídem, 34.

[8] Juliá, Santos 2011. Elogio de historia en tiempo de memoria. Madrid: Fundación Alfonso Martín Escudero. Marcial Pons Historia, 132-133.

PARTE I

1958-1978

INSURRECCIÓN,

BANDOLERISMO

Y GUERRILLAS

1964

Durante meses, las Fuerzas Militares prepararon la retoma de los territorios de la autodefensa regular comunista del sur del país. Esperaban desarrollar una operación que se extendería hasta por cinco años. Sin embargo, la activación del Plan de Operaciones Número Dos, denominado Soberanía Gama[1], y el desarrollo de sus distintas fases, fueron acelerados "debido a sucesos previstos llevados a cabo por las cuadrillas de bandoleros que venían operando a su libre capricho en estas tierras desde tiempo pasado". Las acciones que habrían precipitado la operación eran un "ataque alevoso y muerte de tropas del Ejército", el "asalto y muerte de oficiales de las Fuerzas Militares que cumplían una operación de rescate", el "secuestro de civiles e imposición de rescate en dinero", la "amenaza abierta a la institución militar, desafiándola para impedir su acción en esta zona", y el "desconocimiento total de las autoridades legítimas e incitación a una pseudo-autonomía de la región, que tomó el nombre de 'República Independiente de Marquetalia'"[2].

Situada en la cordillera central, el área conocida como Marquetalia se ubicaba en una porción de territorio en Planadas, Tolima, entre los ríos Ata y Rioclaro[3]. El área de influencia de este sitio se extendía a varias inspecciones de Tolima y Huila[4]. Según entendían las Fuerzas Militares, los graves problemas de salud de los habitantes de la zona habían sido mitigados en meses anteriores por la llegada de puestos de salud a Rioblanco y Planadas. Igualmente, persistía un déficit de educadores en las escuelas y un inapropiado abastecimiento de alimentos y víveres, los cuales, si se conseguían, resultaban costosos por el difícil acceso. La economía local se sostenía esencialmente con el cultivo de café, yuca y plátano, y la práctica de la ganadería de pequeña escala. Además de los nativos campesinos, vivían en la zona indios paeces provenientes del Cauca, que recibieron a cientos de familias desplazadas en los años cincuenta desde las zonas de Sumapaz, Génova y Villarica, incluyendo unos cuantos antiguos guerrilleros liberales y algunos descendientes de prófugos de cárceles de antiguos penales ubicados al sur del río Ata, que buscaban alejarse de las autoridades del Estado[5].

Precisamente, el Estado tenía poco control sobre ese territorio. Según el Ejército, la influencia de los grupos armados en la zona se traducía en que "solamente

pueden ejercer su acción aquellas autoridades que cuentan con el directo respaldo de la Fuerza Pública". Quien no lograba asegurar tal protección, muchas veces prefería no actuar "apareciendo como un cómplice de los antisociales"[6].

El trabajo de Manuel Marulanda[7] y el Partido Comunista en la zona había inculcado en los habitantes "apatía hacia el Gobierno y sus Fuerzas Armadas, haciéndoles ver que eran sus peores enemigos y que la única persona en quien deberían confiar era el bandolero y su fusil". Además, "si a esto agregamos el continuo proselitismo y adoctrinamiento comunista mediante conferencias y propaganda muy bien dirigida, tenemos como resultado una masa con mística cimentada difícil de sustraer de su arraigado sentimiento revolucionario"[8].

Cerca de Marquetalia, los movimientos agrarios de Riochiquito (Cauca), El Pato (entre Huila y Caquetá), y Guayabero (entre Meta y Caquetá) ya habían constituido también autodefensas armadas "que desconocen totalmente la autoridad del Estado y actúan directamente bajo las órdenes de individuos de reconocida filiación comunista"[9].

Para abril de 1964, los militares consideraban que la autodefensa comunista de Manuel Marulanda, en la zona de Marquetalia, había asumido ya "una actitud ofensiva". En el área de Rioblanco, Tolima, la baja de tres miembros de autodefensas en febrero fue respondida con un ataque guerrillero a una patrulla motorizada. En abril, "la banda comandada por Pedro Antonio Marín, alias 'Marulanda' o 'Tirofijo', asumió la ofensiva de manera abierta a través de una serie de actos criminales que culminaron con asalto a un helicóptero de rescate, asesinato de dos oficiales y secuestro de un piloto civil". Por contraste, en Riochiquito la autodefensa comunista de Ciro Trujillo mantenía "aparente inactividad"[10].

Dados esos "alarmantes antecedentes, el Gobierno y el alto Mando Militar decidieron afrontar el problema para hallar la solución más favorable". La Operación Marquetalia contra la autodefensa de esa zona del sur del Tolima se describía como una acción 'cívico-militar', enmarcada dentro del plan general conocido como Operación Soberanía, el cual buscaba "lograr la represión de los violentos y el acercamiento pacífico y ayuda proporcionada a las necesidades reinantes [de la población]"[11].

Entre febrero y abril de 1964, las Fuerzas Militares alistaron sus unidades de

choque[12], efectuaron desplazamientos de tropa y apuraron un plan de reentrenamiento intensivo[13]. El 5 de abril de 1964, un sobrevuelo militar sobre Chaparral, Ataco, Planadas y la zona cercana a Marquetalia sería el preludio a la ofensiva que estaba por venir[14]. Previendo el inicio de una operación militar en su contra, Manuel Marulanda "inició el reclutamiento de elementos jóvenes en toda el área de influencia y se abasteció de víveres y elementos de toda necesidad, utilizando el dinero que pagó Avianca por los pilotos secuestrados. Así mismo, se dedicó a la preparación del terreno, incluyendo [la] construcción de fortificaciones, campos minados y caletas en el interior de la selva"[15]. En mayo, el dispositivo de tropas estaba listo para bloquear el movimiento de los comunistas en las áreas de Marquetalia y Riochiquito[16].

El Plan Soberanía Gama debía conducir a la captura o muerte de los principales jefes guerrilleros comunistas que operaban en esa región del sur del Tolima; es decir: Jaime Guaraca, Hernando González, Isauro Yosa (Mayor Lister), Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda), Isaías Pardo, Darío Lozano, Ciro Trujillo, Rigoberto Lozada y otros más que desde tiempos de la guerra en Villarrica se habían asentado en esa escarpada y húmeda región ubicada sobre la cordillera central, en el sur del departamento de Tolima. Los avances efectuados hacia la zona habían estado acompañados de enfrentamientos armados y de consecuentes bajas para ambas partes. Aunque altamente entrenados en la guerra contraguerrillera, y a pesar de contar con ametralladoras, fusiles, carabinas, granadas de mano, morteros y abundante munición, los militares no conocían el terreno en el que se movían, y ello sin duda jugaba en su contra. Por esa misma razón, y en tanto que la movilización por tierra había resultado agotadora para los militares, los comandantes de la operación decidieron incursionar por vía aérea. Efectuaron un masivo y sorpresivo desembarco de tropa valiéndose de los helicópteros que pocos años antes habían adquirido los militares y de algunos aviones que se encargaron de efectuar ametrallamientos sobre la zona, con el fin de que los guerrilleros no les dispararan a los soldados cuando estos pisaran el terreno[17].

Las tropas de cada uno de los batallones involucrados fueron entrenadas minuciosamente en patrullaje, control del área, censo de población y otras tantas cuestiones que revestían especial interés para el desarrollo de la misión. El Ejército había acopiado información diversa relativa a las guerrillas que operaban en la zona, y con base en ella había diseñado varios planes con el ánimo de contrarrestar el accionar de los insurgentes[18]. La concentración de las tropas en sus respectivas jurisdicciones y áreas de operaciones debía efectuarse

con toda rigurosidad, y los comandantes de todas las unidades debían verificar previamente la situación de salud, moral y entrenamiento de los soldados[19].

Para mayo, el Ejército calculaba que en el área de Marquetalia se distribuían de trescientos a cuatrocientos combatientes de autodefensa comunista al mando de Manuel Marulanda y el Mayor Lister, repartidos en unos siete grupos, armados con fusiles, ametralladoras, subametralladoras, carabinas, pistolas, revólveres, escopetas, granadas y bombas caseras. Para asegurar que todos sus hombres estuvieran preparados, Marulanda esperaba la llegada de setenta fusiles, y había comprado raciones de fríjol, panela y maíz. Además, la inteligencia del Ejército calculaba la presencia de unos 225 combatientes en la zona de Rioblanco, otros 150 en Riochiquito, al mando de Ciro Trujillo, y cien más en las zonas de El Pato y Guayabero, al mando de Richard, Diamante y Camargo[20]. El Ejército calculaba que Ciro Trujillo y su grupo podrían mantenerse al margen de una operación en Marquetalia "siempre y cuando la región sea objeto de un tratamiento adecuado por parte del Gobierno en lo que hace relación con construcción de vías, puestos de salud, escuelas y en general de todas aquellas de beneficio común". En su concepto, "la actitud asumida por Riochiquito puede inclinar la balanza favorable o desfavorablemente con relación a la operación Marquetalia"[21]. Pese a este diagnóstico, los grupos de El Pato y Guayabero se decantaron por un apoyo irrestricto a Marulanda en caso de ataque, e incluso propusieron intentar una "intervención armada inmediata" que evitara que, después de Marquetalia, las Fuerzas Militares se volcaran sobre ellos[22].

La alimentación de los miembros de estos focos armados comunistas, evaluaba el Ejército, "es muy pobre, a base de carne seca, plátanos y yuca. Últimamente han adoptado el sistema de llevar alimentos enlatados, especialmente sardinas, leche en polvo y carnes". A pesar de esto "son de una gran resistencia física y están acostumbrados a vivir en la intemperie en caletas que ellos mismos construyen"[23].

La Operación Marquetalia tenía cuatro etapas: concentración de tropas; aislamiento del objetivo asignado; cerco y destrucción de este último; y consolidación final. Para ello, las Fuerzas Militares esperaban desarrollar acciones de inteligencia y contrainteligencia, acciones psicológicas con la población civil, control territorial de zonas aledañas, reentrenamiento intensivo de tropas, establecimiento de bloqueos a vías de escape e instalación de un cerco contra los subversivos, apoyos aéreos a las tropas, asaltos contra los grupos de autodefensa y operaciones de registro[24].

La operación revestía serios y preocupantes riesgos. No era solo la conocida capacidad de combate de sus oponentes, sino también las complejas condiciones geográficas y climáticas de la región, que limitaban considerablemente las acciones que los uniformados se proponían llevar a cabo. Las agrestes y escarpadas montañas, las extensas y tupidas selvas y el permanente régimen de lluvia y humedad, propio de la región, dificultaban el plan de acción y sobre todo el desembarco de las tropas aerotransportadas.

La convicción de que se hallaban en idónea condición moral y militar para acabar con sus oponentes era más que manifiesta en comandantes y los soldados. Consigo tenían la sofisticada preparación y tecnificación obtenida desde su participación en la Guerra de Corea (1950-1953), al igual que la experiencia de combate adquirida tras los largos años de lucha sostenida contra las guerrillas liberales que actuaban en los Llanos Orientales del país, contra las guerrillas comunistas que hacían presencia en la región del Sumapaz y en el sur del Tolima, y contra los grupos de bandoleros organizados al amparo de la violencia bipartidista que el país había padecido durante la última década y media.

Pero la consecución de ese objetivo no era fácil de alcanzar. Además de las adversidades naturales que presentaba el terreno y de la combativa resistencia que oponían los insurgentes, las posibles rutas de acceso que habían sido bloqueadas y el desconocimiento de un terreno tan agreste limitaba el accionar de los uniformados. La angustia que generaba un posible ataque guerrillero desde cualquier flanco, en medio de la espesa selva, hacía que las tropas se mantuvieran en alerta máxima. Además de las trincheras, los atajos y los obstáculos que los insurgentes habían construido, la precisión con que disparaban era otra ventaja que los guerrilleros tenían a su favor.

Al mando de varios oficiales del Ejército, entre los cuales figuraban los coroneles Hernando Correa Cubides, José Jaime Rodríguez y José Joaquín Matallana, las tropas se lanzaron a la ofensiva contra el principal y más importante fortín de resistencia que mantenían las guerrillas comunistas de esta región del país.

El denominado ‘Día D’, señalado para la toma de Marquetalia, era el 28 de mayo de 1964[25]. Antes, el día 22, el ministro de Guerra y el comandante de la Sexta Brigada visitaron la sede del Batallón de Infantería Seis, en Planadas, centro operacional de la misión. Al día siguiente, los soldados del Batallón repartieron doscientos mercados en la vereda El Totumo y prestaron servicios médicos y

odontológicos, al tiempo que el comando emitía la orden de operaciones de asalto. En la tarde, una compañía salió hacia el caserío Casa de Zinc, al noroeste de Marquetalia, para instalar ahí un puesto de mando adelantado[26]. El 27 de mayo, bajo un cielo nublado y lluvioso, las tropas reportaron la ocupación de los primeros objetivos cerca de Marquetalia. Según registraba el Batallón de Infantería Nueve, “banderas blancas ondean en las casas de la región, testimonio de sumisión a la autoridad legítima”[27].

A partir del 28 de mayo, los militares ocuparon poco a poco las zonas que estaban bajo control de la autodefensa comunista, y desarrollaron acciones de registro del área, censos de población, viviendas y ganado, de acercamiento a la población y procesos de “implantación de principios de autoridad”[28]. Antes de la entrada de las tropas del Batallón Colombia al centro de Marquetalia, el 14 de junio, los helicópteros que intentaron ingresar a la zona en donde los insurgentes tenían su mayor fortificación fueron atacados con nutrido fuego. Ninguno fue derribado, pero el fuego recibido fue suficiente para saber que los ametrallamientos previos no habían surtido el suficiente efecto sobre los guerrilleros. Los primeros soldados que se habían desembarcado de los helicópteros empezaron a descender y aseguraron el área. El fuego generado por los guerrilleros fue contestado por los militares con ametralladora y morteros de alto calibre desde los cerros y la maraña; el poder de destrucción de estos instrumentos daba cierta confianza a los uniformados, quienes se habían propuesto avanzar hacia la zona de refugio que los insurgentes habían adecuado y construido en Marquetalia. Las trincheras, los atajos, los campos minados y los ingeniosos obstáculos construidos por los insurgentes entorpecieron el avance y marcaron la diferencia en el campo de combate. Los heridos no tardaron en aparecer. Un cabo, que hacía parte de la patrulla comandada por el general Matallana, fue el primero en caer; el hecho no solo demoraría aún más el complejo avance de la operación, sino que mostraría las dificultades que la situación generaba al momento de evacuar el personal herido. El día transcurrió en medio de los permanentes e imprecisos disparos de los combatientes.

Los militares lograron tomar la zona a medida que la descarga de fuego disuadió a los marquetalianos para emprender la huida: los guerrilleros de Manuel Marulanda abandonaron su base hacia las montañas de la Cuchilla de San Pablo, Tolima[29]. Justo antes, a más de unos cuantos folios, cuadernos, instructivos y reglamentos relativos a la organización interna de la guerrilla, los militares no habían podido desarticular la insurgencia; a más de las bajas propinadas a los militares, los guerrilleros no habían podido defender lo que antes había sido su

inexpugnable refugio. Con la toma del terreno, la misión estaba solo parcialmente cumplida, “restando aún lo principal, que es la captura o eliminación de las cuadrillas hoy disgregadas por toda el área”[30].

En la zona, los militares notaban la fuerte penetración ideológica lograda por los miembros de la autodefensa comunista, y por ello consideraban necesario “integrar un programa de redención socio-económica”, liderada por el Gobierno, “para lograr la liberación total de estas masas de la ideología comunista”. Entendían que “la actividad militar, aunque ha logrado evidentes resultados positivos en algunos aspectos y sectores, no es sin embargo suficiente para la solución de problemas, y por esto, de no contar con la ayuda ofrecida por el campo civil, religioso y de gobierno, es presumible que no logrará resultados definitivos”[31].

Los insurgentes del sur del país harían de la llegada de las tropas a la zona de Marquetalia su mito fundacional. Pero la estrategia armada de los comunistas colombianos y la respuesta militar del Estado, acumulaban ya casi dos décadas de confrontación, lo que marcaría la manera como se abordó la confrontación en los años sesenta. Antes de que el movimiento armado de Marquetalia diera origen a las Farc, en 1966, y de que surgieran otras organizaciones guerrilleras de esa década, militares y guerrilleros arrastraban los efectos de la experiencia de las confrontaciones de comunistas y el Estado en la primera mitad del siglo XX. Tales efectos se describen a continuación, antes de retomar las memorias del conflicto en los sesenta.



Grupo de soldados en la zona de Marquetalia en noviembre de 1964. / Foto: Archivo El Espectador.

Notas

[1] En el marco de la Operación Soberanía, las Fuerzas Militares desarrollaron un plan que correspondía específicamente a una de sus fases, llamada Gama, dentro del cual se desarrolló la Operación Marquetalia.

[2] Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964a. Actividades del comando en la presente Operación. Sexta Brigada, Planadas, Paraíso, Tolima, agosto, 1.

[3] Los mapas militares sitúan a Marquetalia al noroccidente del nevado del Huila, rodeado al norte y al occidente por la quebrada Yarumal, y al oriente por la quebrada Támara.

[4] La autodefensa comunista de Marquetalia tenía influencia sobre las inspecciones de Gaitania, Sur de Ata, Planadas y Santa Rita, en Tolima, y San Luis, Palermo, Órganos, Chapinero y Praga, en Huila. Véase Comando Sexta Brigada 1965a. Apreciación de inteligencia 4, Neiva, 25 agosto, 3.

[5] Ibídem, 2-3.

[6] Comando Sexta Brigada 1964a. Apreciación de asuntos civiles. Ibagué, 11 de

mayo, 3.

[7] Aquí nos referimos a Pedro Antonio Marín, quien adoptó el nombre del sindicalista Manuel Marulanda, cofundador del Partido Comunista en Antioquia.

[8] Comando Sexta Brigada 1965a, op. cit., 12.

[9] Comando Sexta Brigada 1964a, op. cit., 7.

[10] Comando Tercera Brigada 1964. Orden de operaciones 5. Plan de Operaciones No. 2 Soberanía-Gama, 8 de abril, 1.

[11] Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964a, op. cit., 1.

[12] La Sexta Brigada comandaba unidades de choque como el Batallón de Infantería Nueve Boyacá —agregada para la operación—, el Batallón de Infantería 18 'Rooke' y el Batallón de Artillería 6 Tenerife. Como apoyo, contaba con cuatro compañías y un grupo Gil del Comando del Ejército. Véase Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964a, op. cit., 1-2; y Rodríguez, José Jaime 1964. Operación Marquetalia. Revista de Infantería 7, 41.

[13] El 13 de abril de 1964 comenzó la ejecución de la orden de operaciones para la movilización de tropas a la zona. Durante 250 horas, distribuidas en tres semanas entre finales de abril y principios de mayo, las unidades militares que entrarían en Marquetalia recibieron una instrucción intensiva en lanzamiento de granadas, tiro diurno y nocturno, patrullaje, entrenamiento físico, adoctrinamiento y

motivación de lucha, y primeros auxilios. Véase Comando Batallón de Lanceros Uno Boyacá 1964. Plan de instrucción y entrenamiento intensivo. Plan de Operaciones No. 2 Soberanía-Gama, abril; y Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964b. Resumen del Batallón de Infantería Nueve Boyacá, 1.

[14] El Ejército registra otros sobrevuelos a la zona el 9 y el 12 de mayo.

[15] Comando Sexta Brigada 1965a, op. cit., 13.

[16] Comando Tercera Brigada 1964, op. cit., 2; Comando Sexta Brigada 1964b. Anexo C de personal al plan de concentración y relevo. Plan Soberanía, Plan Soberanía-Gama, Ibagué, 6 de abril.

[17] Según el testimonio del general José Joaquín Matallana, quien por aquel entonces detentaba el rango de coronel, aunque el desembarco de tropas se produjo de manera expedita, los soldados no pudieron efectuar una pronta acción contra los guerrilleros porque no conocían el terreno, la zona era sumamente boscosa y las pocas fotografías aéreas que previamente habían tomado solo habían capturado una pequeña parte de la zona en donde estaban incursionado. Véase Alape, Arturo 1985. La paz, la violencia: testigos de excepción. Bogotá: Editorial Planeta, 252-259.

[18] Comando General de las Fuerzas Militares 1964. Procedimientos de combate en el Área de Marquetalia.

[19] Comando Sexta Brigada 1964b, op. cit.

[20] Comando General de las Fuerzas Militares 1964, op. cit., 2-3; Comando Sexta Brigada 1964c. Apreciación de inteligencia 2, área C-4-34. Ibagué, 3; Comando Sexta Brigada 1964d. Apéndice a la apreciación de inteligencia 2, área C-4-34. Ibagué, 16 de mayo, 2, 5; y Comando Sexta Brigada 1965a, op. cit., 13.

[21] Posteriores análisis de inteligencia sugieren que el Partido Comunista “aconsejó a Ciro Trujillo mantener las relaciones con oficiales del Ejército” y que incluso “elementos del Partido Comunista contestaban cierta correspondencia de Ciro Trujillo dirigida a oficiales del Ejército o Comandos Militares”. Véase Comando General de las Fuerzas Militares 1964, op. cit., 5-6; y Comando Sexta Brigada 1965b. Resumen No. 9 complementario del informe periódico de inteligencia No. 11. Neiva, 4 de diciembre, 1.

[22] Comando General de las Fuerzas Militares 1964, op. cit., 6.

[23] Ibídem, 5.

[24] Rodríguez, José Jaime 1964, op. cit., 39.

[25] Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964a, op. cit., 2; Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964b, op. cit.

[26] Una segunda compañía salió ese día hacia la zona rural de Planadas, para instalar un segundo puesto de mando, y una tercera compañía salió un día después desde Ataco hasta Bocas de San Pedro, para instalar un tercero.

[27] Comando Sexta Brigada 1964e. Plan de operaciones C-4-37, citado en Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964b, 4.

[28] Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964a, op. cit., 2-3.

[29] Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964b, op. cit., 6.

[30] Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964a, op. cit., 3.

[31] Ibídem, 4.

Capítulo I

La insurrección comunista

Para entender mejor las lógicas de acción de militares y guerrillas a partir de los años sesenta, resulta necesario revisar aquellos elementos inmediatamente precedentes. En el caso de las Fuerzas Militares, identificamos cinco factores de la confrontación militar e ideológica entre subversivos y Estado en la primera mitad del siglo XX. Para las guerrillas identificamos cuatro elementos claves.

El primer factor que contribuye a explicar la manera en que las Fuerzas Militares abordaron el problema de la amenaza guerrillera desde los años sesenta es el discurso anticomunista derivado de la Guerra Fría, promovido por los partidos políticos desde los años veinte, y definitivamente instalado en la cultura militar durante los años de la dictadura hasta 1958.

El segundo es la impronta —desigual— de la violencia en la cultura política y social del país, producto de guerras anteriores. El uso de la violencia como forma de resolución de las disputas políticas y sociales se había instalado como práctica común en muchos sectores del país, y tanto para militares como para gurrilleros las prácticas violentas de un conflicto armado podían, incluso, considerarse moderadas y de mayor sofisticación militar, en contraste con las atrocidades de las guerras recientes. Sin embargo, mientras la mayoría de los soldados de los años sesenta correspondía a novatos en el servicio y personal recién entrenado[1], los insurgentes eran, en no pocas ocasiones, protagonistas de guerras anteriores, heredadas por sus hijos y parientes, asegurando un acumulado de aprendizaje en el ejercicio de la violencia irregular que de facto los ponía en ventaja frente a su adversario[2].

El tercer factor es la adaptación de la doctrina militar al escenario de guerra internacional contra el bloque comunista, surgido después de las guerras mundiales. La experiencia de una generación de oficiales en la Guerra de Corea de los años cincuenta impulsó a la profesionalización de las fuerzas, su entrenamiento técnico con nuevos manuales, reglamentos y procedimientos, y la creación de nuevas estructuras organizacionales y formas de relacionamiento

internos. Pero, paradójicamente, el esfuerzo dedicado a la adaptación de esta nueva forma de ser y hacer la guerra, aún anclada en preceptos de guerra regular, restaría atención y recursos para la adaptación a las condiciones particulares de la insurgencia en Colombia.

El cuarto factor es la inercia generada por el entrenamiento ‘en caliente’ en guerra irregular que significó la lucha militar contra el bandolerismo, en la que las emboscadas eran menos frecuentes y el escenario se desarrollaba, sobre todo, en zonas urbanas[3]. La dificultad doctrinaria para entender las diferencias entre el adversario contrabandoleril y el puramente guerrillero incrementó los costos humanos y materiales para las Fuerzas Militares durante las primeras décadas del conflicto.

Y el quinto factor es la aplicación del marco legal de 1886, que abría la puerta al involucramiento de civiles en la guerra y daba facultades jurídicas y administrativas a los militares —como jueces y alcaldes militares—, ya que la normatividad de derechos humanos y derecho internacional humanitario permanecía subdesarrollada.

De forma paralela, para entender la lógica de acción de los grupos guerrilleros desde los años sesenta, no solo es necesario acudir al mencionado aprendizaje de cómo hacer la guerra de los guerrilleros veteranos, sino a otros tres elementos adicionales incubados en las décadas anteriores por el Partido Comunista Colombiano y, después, por la insurgencia cubana. Primero, el planteamiento de una estrategia armada para la toma de poder, que en el caso de las organizaciones guerrilleras pasó de concebir insurrecciones populares urbanas a nutrirse principalmente de teorías foquistas y de guerra popular prolongada, que se describirán más adelante. Segundo, la incorporación de principios operacionales para el desarrollo de dicha estrategia, tales como la aplicación de guerra combinada, la acción de masas y el internacionalismo, además del énfasis en la formación interna de la organización y del guerrillero mismo mediante una instrucción militar, política e ideológica sistemática que asegurara su cohesión interna. Y tercero, la indicación detallada de una guía de guerra irregular, para asegurar la ventaja táctica en el terreno frente a las fuerzas regulares mediante el uso de la emboscada y la aplicación de principios de masa y economía de fuerzas, entre otros. De esta manera, la ideología comunista proveyó a las veteranas guerrillas, por primera vez, de un marco estratégico, operacional y táctico de cómo hacer la guerra y, más adelante, de cómo intentar ganarla[4]. A lo largo de los próximos capítulos describiremos la manera en que estos factores y

elementos contribuyeron a explicar las dinámicas y lógicas de acción de militares y guerrilleros en el escenario de conflicto de los años sesenta.

A principios del siglo XX, pocos años después de que los bolcheviques tomaran el poder en Rusia y fundaran la Unión Soviética, los revolucionarios colombianos entraron en contacto, no solo con nueva literatura, ideas y formas de implantación de un Estado socialista, sino con grupos en América y Europa que se consideraban a sí mismos parte de un mismo proyecto de alcance mundial.

En 1926, el naciente Partido Socialista Revolucionario de Colombia (PSR) congregó a diversos promotores de la revolución en Colombia, entre ellos de manera prominente a María de los Ángeles Cano. El PSR trabajó con ahínco para orga-nizar a los obreros de diversas industrias en las principales ciudades, así como trabajadores del campo en zonas como el Magdalena Medio. Las cabezas del naciente partido acudían principalmente a la agitación de masas y la promoción de huelgas y manifestaciones para aglutinar el apoyo ciudadano. Sin embargo, algunos de ellos también recurrieron al uso de la violencia como una forma de catalizar el malestar social contra el gobierno de turno y provocar un cambio de régimen. La aparente inminencia de un estallido social, derivado de la crisis política y económica del país, indujo a sectores del PSR a “estar listos”, lo cual implicaba, entre otras cosas, “la fabricación de bombas en Bogotá y Cali, principalmente”[5]. En esa lógica, manifestaciones que se tornaron violentas, como las de la Ciénaga del Cesar, la masacre de las bananeras de 1928 o las de Yondó, Antioquia, resultaban útiles para los propósitos de acrecentar la animadversión ciudadana contra el Estado[6].

Los revolucionarios colombianos intentaron emular la estrategia bolchevique para la toma del poder y la instalación de un Estado comunista, como lo habían logrado en la Unión Soviética a principios del siglo XX. Vladimir Lenin había difundido por décadas su pensamiento no sólo sobre la estructura del Estado, sino sobre las tácticas y estrategias que permitieran a los revolucionarios en el mundo la toma de poder. Lenin reconocía que en algunos contextos la guerra partisana y de guerrillas podría ser el método adecuado. En su visión el marxismo no se suscribía a una sola forma de lucha, sino que podría contemplar muchas en la medida en que se adaptaran a lo que las masas pudieran ejecutar, tales como huelgas, luchas urbanas de barricadas, revueltas e insurrección armada[7].

En su concepto, la lucha armada podía ser desarrollada por individuos y pequeños grupos con dos objetivos fundamentales: por lado, “la eliminación física de algunos individuos, jefes y subalternos de la policía y el ejército” y por otro “la confiscación de los fondos pertenecientes al gobierno y a ciertos particulares”[8]. Estos actos sólo serían útiles y legítimos, sin embargo, en la medida en que estuvieran conectados con los conflictos sociales y políticos que enfrentan las masas, para lo cual era requisito fundamental que estuvieran bajo el control de un partido comunista[9].

Las referencias a Lenin son prominentes en las comunicaciones internas de los líderes del PSR y también luego del Partido Comunista de Colombia, así como lo van ser luego en las de las Farc[10]. Al usar el nombre “Socialista Revolucionario”, el PSR evitaba la persecución legal a un eventual partido que se llamara comunista, a la vez que resultaba más práctico para “atraer a las masas”[11]. Pero internamente, declaraba a sus organizaciones afiliadas “verdaderos núcleos revolucionarios”, y a sus directivas les atribuía “un carácter de milicia severa cuyos mandatos deben ser acatados incondicionalmente y con la férrea disciplina que el leninismo marxista impone a sus afiliados”[12].

El PSR era, pues, no sólo una estructura política sino también militar. En el Acuerdo 23 de su Asamblea Plenaria de 1928, el PSR declaraba a sus militantes en sindicatos y organizaciones afiliadas “en pie de guerra” y en subordinación a los mandatos y órdenes de la Jefatura Suprema del Ejército Proletario[13]. Todos los miembros del PSR debían suscribir el juramento de lealtad a este “Ejército Rojo”, que los comprometía a “defender y propagar las ideas y tácticas del PSRC como el verdadero y único camino para acabar con la explotación del hombre por el hombre”, a “propagar y defender la necesidad de castigar a los espías y traidores del partido”, y a “estar dispuesto a sacrificarse cuando los intereses del proletariado universal así lo exija”. El país sería dividido en zonas bajo el control de comisarías de guerra, que a su vez desarrollarían una estructura interna de escuadras, pelotones, compañías, batallones y regimientos “teniendo en cuenta el número de soldados rojos, o sea de elementos de auténtica filiación marxista y proletaria”. Cada comisaria, además, se abrogaría el derecho de implementar un “tribunal de justicia militar y podrá decretar inexorablemente la eliminación de los elementos traidores a la causa”[14].

Para el PSR, la “la revolución de los trabajadores ha de conservar las armas durante la lucha y después de la victoria; en ningún caso y por ningún motivo los trabajadores entregarán las armas, porque ellas son la única garantía para

conservar sojuzgada a la clase dominadora"[15].

En 1928, el PSR creía que "la situación objetiva del país era manifiestamente pre-revolucionaria". Pronto, el partido atrajo líderes como Raúl Mahecha, protagonista de la huelga de trabajadores de la Tropical Oil Company en Barrancabermeja en 1924[16]. Mahecha y otro de los líderes del PSR, Alberto Castrillón, se instalaron en Ciénaga y Barranquilla para, a nombre de los comunistas, competir en influencia con otros actores, tales como la Confederación de Sindicatos del Atlántico, sobre los trabajadores de la multinacional estadounidense United Fruit Company[17].

En medio de la huelga de trabajadores de la compañía de finales de 1928, Castrillón arengó a los líderes huelguistas a optar por "inclinarse ante la injuria de la Compañía y a una entrega vergonzosa, o luchar hasta el final desde las barricadas". En un intento por ponerse al frente de la protesta, Castrillón se hizo ungir como presidente de un comité revolucionario "con poderes absolutos, responsable únicamente ante la asamblea de delegados de los trabajadores", cuya táctica de acción sería la de "una retirada revolucionaria: es decir, sabotear e infligir al enemigo tantas pérdidas como fuera posible al mismo tiempo que maniobrar para salvar la vida de los trabajadores"[18].

El 6 de diciembre se produjo la matanza de las bananeras en la estación del ferrocarril de Ciénaga, Magdalena, en la que según los comunistas del PSR cayeron "un centenar de muertos, entre ellos muchas mujeres y algunos niños, y cientos de heridos", bajo fuego de ametralladora. El comité revolucionario de Castrillón esperó junto a las líneas del ferrocarril para "esperar el tren con la tropa en este punto, y con nuestro gran número, pensamos que podríamos causar confusión entre el enemigo, dirigiendo y capturando todas las armas posibles, y seguir hacia las montañas"[19].

Para que el plan hubiera funcionado, los comunistas contaban con que lograrían que el Ejército se abstuviera de reprimirlos. Para Lenin, los soldados que sirven en las fuerzas armadas compartían de muchas maneras las demandas sociales de la población, y por tanto era menester intentar asegurar su solidaridad con las insurrecciones comunistas. Atraer el apoyo de los militares serviría no solo para desactivar uno de los mecanismos de represión de las elites capitalistas, sino para crear un ejército revolucionario fusionado en el que los militares profesionales compartirían su conocimiento con las gentes armadas. "El ejército no puede ni debe ser neutral", decía, y no puede "permanecer al margen de la

lucha". Según estimaba, "el sumarse a las filas de los partidarios de la libertad, el pasarse al lado del pueblo asegurará el triunfo de la causa"[20].

Los comunistas aseguraban que "muchas de las tropas de infantería desertaron hacia los huelguistas, o se negaron a disparar o arrestar"[21]. Durante la huelga, miembros del PSR se encargaron de entregar volantes impresos a los soldados que cuidaban la línea férrea invitándolos a apoyar a los trabajadores[22], pero tal esfuerzo fue insuficiente para evitar que las Fuerzas Militares sofocaran el intento de insurrección.

Con ocasión del conflicto de los trabajadores bananeros, el PSR esperaba "desencadenar la huelga para transformarla en revolución", y había decidido enviar emisarios a todo el país para provocar una "huelga de solidaridad (lo que en Colombia significa la batalla armada)"[23]. Al tiempo, uno de sus principales líderes, Tomás Uribe, "preparaba el movimiento insurreccional conjuntamente con los militares"[24].

Según Mahecha, el PSR contaba en 1928 con "84 grupos disciplinados militarmente en toda la región [Caribe] con sus jefes militares, los cuales estaban dispuestos a entrar en acción si la huelga se hubiera desarrollado en insurrección"[25]. Según su propia versión, el PSR repartió en la zona "revólveres, machetes y escopetas (…) quedando armados mil compañeros" y estimaba que "con los cañones, ametralladoras y fusiles tomados en los cuarteles se hubieran podido armar otros mil compañeros". Sus contradictores dentro del partido, sin embargo, estiman que apenas contaba con "107 rifles y 100 escopetas mal municionadas"[26]. Después de la matanza del 6 de diciembre, los comunistas fueron a las plantaciones de banano y se concentraron en Riofrío, Orihuela y Sevilla, donde se enfrentaron tanto al "ejército, la policía, como [a] los empleados de la United y muchos norteamericanos, todos en números de 500 por lo menos, bien atrincherados y mejor municionados". Luego del fracaso en este combate, "vino la dispersión general de los trabajadores y el 'sálvese quien pueda'"[27].

A pesar del fracaso de convertir la huelga bananera en una insurrección armada, Tomás Uribe, líder del PSR, continuaba con el plan de golpe de Estado con el apoyo de una red de 90 organizaciones de todo el país afiliadas al partido[28]. Un informante denunció ante las autoridades que Tomás Uribe planeaba "volar una fábrica de municiones y los aparatos y edificios del Aeródromo de Madrid". En Bogotá "está acordado no llevar a cabo más destrucciones, limitándose

solamente a sitiarla con las fuerzas revolucionarias de todo el país"; mientras en Medellín "está acordado tomarse los cuarteles del ejército, la policía y los edificios de los servicios públicos"[29].

Mientras las Fuerzas Militares y la Policía estuvieran concentrados en Bogotá con motivo de la instalación del Congreso de la República, los comunistas activarían el plan insurreccional. Documentos de militantes del Partido Comunista describen el siguiente plan a ejecutarse el 28 de julio de 1929: "(1) Coordinar una huelga del Ferrocarril del Pacífico, el río Magdalena y la zona bananera; (2) A medida que las fuerzas armadas se desplazaran, hacer un paro en solidaridad con los ferrocarriles más importantes del interior; (3) Proclamar la huelga nacional; (4) Ocupar oficinas de las empresas y de administración civil en los departamentos; (5) Declarar la insurrección y poner al frente de las masas sus vanguardias adiestradas y sus jefes militares; (6) Transformar el CCC (Consejo Central Conspirativo del PSR) en Consejo Provisional de Gobierno Central y los comandos de zonas en juntas seccionales"[30].

Pero en febrero de ese año, el mismo informante reveló el lugar de residencia de Uribe, que fue arrestado con más de un centenar de bombas[31]. Luego de tal revés, el PSR decidió cancelar su plan insurreccional, y enviar delegados a todo el país para dar a conocer las razones. Sin embargo, en las regiones, los comités del PSR advirtieron que "era imposible detener ya el levantamiento, que las últimas órdenes estaban dadas y que el tiempo no alcanzaría". En algunas otras regiones al parecer ni siquiera se dieron por enterados de la contraorden[32].

El 29 de julio de 1929, un centenar de comunistas armados intentaron tomarse el municipio de El Líbano, Tolima, al tiempo que otros líderes trataron de poner en marcha insurrecciones en Girardot (Cundinamarca), Cali (Valle), La Gómez, Puerto Wilches (Santander) y La Dorada (Caldas). La descoordinación de este esfuerzo, ya desalentado por PSR, culminó con la derrota de los llamados Bolcheviques del Líbano y sus aliados a manos de las Fuerzas Militares.

Tomás Uribe, igual que Alberto Castrillón, fueron juzgados y condenados por un Consejo de Guerra, pero en noviembre de 1929 la competencia de ese tribunal fue anulada y recobraron su libertad[33]. "Uribe Márquez era el alma de la revolución", se lamentaba un cuadro del PSR a finales de 1929. Por ello, la organización de los comunistas alrededor del PSR y su Ejército Rojo "prácticamente quedó terminada con la prisión del compañero Tomás"[34].

La estrategia original del PSR, si bien combinaba métodos legales, ilegales y el uso de la violencia, no constituía todavía una insurrección armada, en ausencia de un uso sistemático de las armas como vía para la toma del poder. Si bien en esos años los miembros del PSR creían que no era posible pensar en la revolución en ausencia de un choque violento contra el Estado, aún no habían tomado la decisión de promover una guerra. Por eso se inclinaban hacia una insurrección popular que se encargara de llevarlos al poder.

La Internacional Comunista, órgano de promoción del comunismo de estilo soviético en el mundo, en una misiva dirigida al PSR en 1929, mostró su descontento por los fracasos de su filial en Colombia. “La experiencia que acaba de hacer el proletariado colombiano y su partido de clase en la huelga de las plantaciones de bananas, si bien dura y penosa, y a costa de grandes sacrificios, ha contribuido, sin embargo, a educar y orientar al Partido hacia una política más justa capaz de remediar sus insuficiencias y sus faltas, y preparar nuevas batallas de clase con más probabilidades de éxito”[35]. A pesar de las amables palabras introductorias, la carta criticaba la carencia de un trabajo de masas que garantizara la solidaridad de distintas capas de la población con tales levantamientos, incluidos sectores del Ejército, que hubieran impedido la acción represiva del Estado. En ausencia de la organización de la población civil alrededor de un partido comunista, la estrategia de provocar la insurrección de las masas “no será más que una conspiración militar, un golpe de estado de generales liberales que se sirven de las masas y del PSR para apoderarse [sic] del poder, que ejercerán contra los intereses de las masas de las cuales se han servido”. La Internacional Comunista criticaba que el PSR “no tenía ninguna preparación seria en el resto de país ni en el ejército para garantizar la seguridad más elemental de los obreros y los soldados durante la huelga. El partido debe, sobre este aspecto esencial, modificar completamente sus métodos de trabajo y preparar, hasta una simple huelga ‘económica’ con todo sentido”[36].

Citando a Lenin, la Internacional Comunista recomendó al PSR afinar sus análisis sobre la existencia o no de una verdadera situación pre-revolucionaria; hacer una reorganización interna del partido a la manera de los partido comunistas de estilo soviético, con una oposición agresiva contra el gobierno y deslindado de cualquier colaboración con liberales de izquierda; organizar desde el partido a grupos de apoyo en sindicatos, ligas campesinas y juventudes que hicieran viable un nuevo intento insurreccional; y “conquistar la simpatía de los soldados” como una “condición del éxito para las luchas de la clase obrera y campesina”[37]. A tales recomendaciones, la secretaria sudamericana de la

Internacional Comunista agregaba “la creación de órganos de combate de masas —comités obreros y campesinos—, para la lucha contra la reacción y el imperialismo”, además de “hacer un trabajo efectivo de la disgregación del ejército, a objeto de poder realizar su lucha independiente de las camarillas del liberalismo y asegurar la dirección del combate al Partido Socialista Revolucionario”[38].

Para la Internacional Comunista, el PSR no estaba preparado “para conducir las masas a la lucha y guiarles con firmeza hasta la victoria”, ni había desarrollado un nivel óptimo de organización, “fortificado su voluntad revolucionaria” o “clarificado su ideología comunista”. Acercarse a sectores del Partido Liberal era, según una nueva carta enviada en 1930, una política “anticomunista” del PSR, en cuanto “nuestra revolución no se prepara en pequeños círculos de conspiradores, independientes de los movimientos de huelgas y de las reivindicaciones de masas, sino mediante el desarrollo mismo de esos movimientos de masa, mediante la multiplicación de las huelgas, la movilización creciente de obreros y campesinos y su atracción a la lucha por el poder y por la revolución”. La acción conspirativa para intentar un cambio de gobierno que no dirigiera a las masas contra el imperialismo y el latifundismo “no es sino el residuo de la vieja ideología del liberalismo pequeño-burgués en las filas del proletariado”, y una política “reformista, socialdemócrata, y tiende a hacer del PSR un partido burgués demagógico, radical socialista o liberal socializante”. De nuevo, criticando la tibieza de la reacción del PSR ante la acción estatal, la Internacional Comunista decía que “el Partido considera que su misión no es llamar a las masas obreras a la lucha, a la acción de solidaridad, sino la de presentarse como árbitro y enternecer en nombre de la humanidad el alma de los gobernantes que seis meses antes habían hecho masacrar a los huelguistas de la zona bananera”[39].

Según explicaba la Internacional Comunista, la estrategia electoral y legal sería subsidiaria a la lucha armada. “El Partido no debe alimentar la ilusión peligrosa de que el gobierno obrero y campesino puede alcanzarse en el curso de una elección presidencial y parlamentaria por la conquista de la mayoría de los sufragios. El Partido toma parte en las campañas electorales y participa en los trabajos parlamentarios solo para extender su agitación entre las masas, movilizarlas, conducirlas a la acción revolucionaria”. En su prognosis, los problemas de los trabajadores “solo serán solucionados por la fuerza […] y no mediante una ‘reforma agraria’ sino desposeyendo a los latifundistas, apoderándose de la tierra, y repartiéndola entre aquellos que la trabajan

expulsando a los imperialistas y sus lacayos”. Luego de pedir la expulsión de los líderes del PSR carentes de posturas revolucionarias, la Internacional Comunista alentaba para que “destruyan la falsa e hipócrita democracia burguesa”, y que la reemplazaran “por la democracia obrera y campesina, por el régimen soviético”. Según concluía, “el poder no será conquistado por los trabajadores sino mediante la lucha violenta, la lucha armada de la masa, que destruya la odiosa caricatura burguesa de la democracia para sustituirla por la representación de los trabajadores exclusivamente”[40].

La adopción de estos postulados de la Internacional Comunista significó para el PSR una ruptura interna. A la vez que se refundaba con el nombre de Partido Comunista de Colombia, en julio de 1930, algunos de sus líderes menos ortodoxos fueron marginados. La ideología comunista ya no sería más una mera fuente de inspiración, sino que empezaría a ser un mapa estratégico, operacional y táctico concreto y sistemático de cómo lograr la toma de poder.

Unos meses después de salir de la cárcel, por su papel en el intento insurreccional de Ciénaga de 1929, Alberto Castrillón fue proclamado candidato presidencial de los comunistas y participó en diversas manifestaciones políticas en lugares como la Plaza de Bolívar y el Teatro Municipal de Bogotá. Aprovechando la coincidencia con el aniversario de la masacre de las bananeras, los comunistas adelantaron manifestaciones en la zona de Ciénaga, Barrancabermeja, Cartagena y varios municipios de Boyacá[41].

La estrategia posterior al fracaso de 1929 procuraba no caer en la “desviación de izquierda” entendida como precipitarse de nuevo a tomarse el poder sin en el apoyo popular y sin tender puentes con diversos sectores. Pero tampoco caer en la “desviación de derecha” que promovía la acomodación y conciliación con los sectores no comunistas. Esto, sin renunciar al objetivo de “la destrucción violenta del régimen actual, para sustituirlo por una dictadura democrática de los obreros y campesinos”[42].

Bajo esas premisas, y no obstante las divisiones internas que surgieron por la adhesión que algunos de sus miembros efectuaron al Partido Liberal y por la radicalidad de otros, los socialistas, organizados ahora como Partido Comunista de Colombia, continuarían desarrollando su trabajo político y partidista legal en el país, e incluso llegarían a candidatizar a uno de sus miembros, Eutiquio Timoté, para la presidencia de la República en 1934. Durante esos mismos años, el Partido apoyaría movilizaciones y huelgas de trabajadores en distintas

regiones del país. Pero ya pasado un tiempo, durante la década de los cuarenta, el Partido reafirmaría su orientación leninista, afianzaría su decisión de luchar contra el régimen bipartidista, calificado como antidemocrático, oligárquico y burgués, y promovería la organización de las autodefensas campesinas en el suroccidente de Cundinamarca y suroriente del Tolima, en donde tenían asiento ligas agrarias integradas por personas que simpatizaban o que habían tenido adhesión política con el gaitanismo[43], con el liberalismo y con el mismo Partido Comunista.

La respuesta a tal estado de cosas no se haría esperar. Los vientos anticomunistas que soplaban cada vez con mayor fuerza en Occidente, no solo tenían su correlato en Colombia, sino que terminarían alentando el conflicto político que se vivía en el país. Desde hacía varios años ese discurso había encontrado seguidores en el país. En 1927, por ejemplo, el ministro de Guerra del gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), Ignacio Rengifo, advertía que “ha surgido un peligro nuevo y temible, quizá el más grande que haya tenido durante su existencia la patria y del cual, en mi concepto no nos hemos ocupado suficientemente o sea en el grado y medida necesario para afrontarlo y vencerlo. ¡Tal es el peligro bolchevique! […] La ola impetuosa y demoledora de las ideas revolucionarias y disolventes de la Rusia del Soviet […] ha venido a golpear a las playas colombianas, amenazando de destrucción y ruina y regando la semilla fatídica del comunismo que, por desgracia, empieza ya a germinar en nuestro suelo y a producir frutos de descomposición y de revuelta”[44].

Unos años después, el presidente Eduardo Santos (1938-1942) aludía las “crecientes denuncias” que muchos sectores sociales, económicos y políticos venían haciendo con respecto a “los desmanes y a la anarquía que la ideología comunista promovía a expensas de los derechos de los trabajadores y a costa del bienestar económico nacional”. Indicaba que, en virtud de tal situación, cursaba un proyecto de ley orientado a “evitar el abuso de la huelga y de impedir que la política comunista y socialista perturb[ara] el desarrollo de las actividades sindicales, sacándolas de su órbita propia, para llevarlos a terrenos en donde solo pueden cosechar un amargo e inmerecido fracaso”[45]. La concepción del comunismo como el germen del desorden y la anarquía que podía extenderse en el país se había popularizado entre sectores empresariales y políticos de orden nacional, regional y local, y la cantidad de huelgas y manifestaciones que se presentaban periódicamente en empresas, fábricas y entidades estatales eran catalogadas como un “mal epidémico”, promovido no en interés de los legítimos derechos de los trabajadores, sino en razón de los “delictuosos” propósitos de la

ideología comunista, ante los cuales el democrático Estado colombiano tenía que precaverse[46].

La sensación de que el país había entrado en una cierta anomia y anarquía social fue una cuestión que empezó a extenderse por distintas regiones de Colombia. Así lo expresaban constantemente los gobernantes, los jueces y las autoridades de distinto nivel, y así lo replicaba la prensa nacional y regional. El turbulento cúmulo de hechos violentos sucedidos en campos y ciudades reafirmaba esa impresión, y, en consecuencia, el establecimiento de medidas extraordinarias o excepcionales empezó a tornarse, a juicio del Gobierno, en una insalvable necesidad. Además de expedir leyes y decretos excepcionales —estado de sitio— orientados a controlar el accionar delictivo que se había desatado en muchas regiones del país, el Gobierno procedió a sacar de sus cuarteles a los militares y a multiplicar el nombramiento de muchos de ellos como alcaldes, inspectores, comisarios e intendentes, confiado en que de esa manera se podría disuadir a los "infractores de la ley" y a los que intentaran perturbar la tranquilidad pública. La anormalidad había llegado a tal punto que, hacia 1946, más de doscientos municipios de los departamentos de Boyacá, Bolívar, Nariño, Cundinamarca, Huila, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima, Atlántico, Magdalena, Cauca y Valle del Cauca estaban bajo el mando de oficiales y suboficiales del Ejército y de la Policía[47].

Comunistas en armas

La subversión comunista contra el Estado colombiano, mientras tanto, manifestó una elevación creciente en su capacidad de daño durante las siguientes décadas. Tanto para la insurgencia como para las Fuerzas Militares, la erupción de la guerra civil bipartidista, exacerbada con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y el levantamiento de las guerrillas liberales del Llano y el sur del país, dejó una impronta sobre las maneras de hacer la guerra.

Hacia finales de los años cuarenta, el Partido Comunista tomó la determinación de pasar de una estrategia de toma del poder, apoyada en el uso de violencia solo en el contexto de la agitación de masas y en el fortalecimiento electoral, para acudir a la confrontación militar permanente contra el Estado. En 1947, el V Congreso del Partido Comunista retomó las tesis marxistas-leninistas de la necesidad del uso de las armas para la toma del poder, en rechazo de otras tesis de la época sobre la posibilidad de triunfar por las vías pacíficas[48]. Según documentos de las guerrillas, "un pleno ampliado del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, realizado en los finales de 1947, señala como tarea inmediata para contrarrestar la violencia terrorista, pasar de inmediato a la organización de la autodefensa popular para responder a la violencia oficial con la violencia organizada y serena de las masas". Según explicaban, "la autodefensa fue una organización armada dirigida por el Partido Comunista, y creció y se hizo fuerte allí donde las circunstancias lo exigieron […] La autodefensa defendía y en realidad defendió los intereses y la vida de los campesinos en vastas regiones, como el Tequendama, Viotá y diez municipios circunvecinos; para luego expandirse a la región del Ariari en los Llanos Orientales, a Montevideo y el Pato en Santander, a San Juan de Rioseco, a Chaparral, a Concepción (Santander del Norte), a las zonas de la Tropical Oil Company, la Shell y la Socony Vacune en Barrancabermeja; en el Magdalena Medio, en la línea del ferrocarril Puerto-Wilches-Bucaramanga y en otros lugares del país"[49].

En sus documentos, las guerrillas comunistas diferenciaban el propósito de la autodefensa regular —estática en el territorio—, del de la guerrilla — móvil y transhumante—, en virtud de que la primera "se da para la defensa de los intereses de la gente de esta o aquella región", mientras la segunda "no lucha por la defensa de sus intereses particulares, no lucha por la tierra, sino por el triunfo

de la revolución; es decir, un combatiente de nuevo tipo, un profesional de la causa”. De ahí que tal movimiento “no es defensivo sino, por el contrario, fundamentalmente ofensivo”[50].

El asesinato del líder liberal de izquierda Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, traería una estela de violencia que, desatada en Bogotá, prontamente se extendería a varias regiones del país. Atrapados por el deseo de venganza, sus seguidores salieron a las calles y el Gobierno respondió tomando medidas extremas a fin de controlar el orden público. En medio de la incontrolable furia que se desató en campos y ciudades en los años por venir, se sacrificaron miles de vidas[51] mediante las más diversas y macabras formas de asesinato[52], y un número indeterminado de edificios y vehículos fueron saqueados e incinerados. El país tendió a salirse de su cauce y pasaría mucho tiempo para que volviera a recuperar la tranquilidad. Colombia empezó a desangrarse por efecto de ese sectarismo político que, como lo dijera el presidente Alberto Lleras Camargo en 1958, llevó a que “la reserva de barbarie que había entre las gentes”, emergiera raudamente hasta conseguir que los colombianos “descendieran brutal y súbitamente a extremos inauditos”[53].

La postura anticomunista no solo se pondría de manifiesto con la declaración que la Conferencia Panamericana promulgó en abril de 1948 en Bogotá, y con la ratificación que los dirigentes del Partido Conservador hicieron de tal declaración, sino también con las mismas medidas que se tomaron desde entonces. Así, por ejemplo, mientras que el presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) insinuaba que los comunistas, apoyados por la Legación Rusa en Colombia, eran los culpables del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, Laureano Gómez Castro, el más afamado y virulento dirigente conservador de la época, no solo atizaba la cuestión afirmando que tanto el Partido Comunista de Colombia como el Partido Liberal eran los responsables de sembrar la anarquía y el desorden, sino que invitaba a realizar una ‘cruzada nacional’ con el propósito de detener esa situación. Al asumir la Presidencia de la República en 1950, y luego de haber sostenido las más amargas discusiones y acusaciones con y contra los liberales, Gómez consideraba que ante el avance de dicha ideología, era preciso “limpiar la mente popular de las punzadoras malezas del materialismo histórico que degradan la persona humana y, abatiéndola, la entregan inerme al castigo de las tiranías colectivistas”[54].

Esa tarea ya venía implementándose, a su juicio, gracias a los buenos oficios que estaba cumpliendo el Ejército. “Para el caso colombiano”, decía Gómez, “debe

anotarse que a la lealtad y heroica decisión de las Fuerzas Militares débese la salvación de la cultura tradicional y que nuestra Nación no gima ahora bajo la tiranía comunista. Como recompensa de tan señalado servicio, el pueblo debe procurar que su Ejército disponga de los medios técnicos adecuados para su cabal eficacia”[55].

La mano dura de Laureano Gómez y su ministro Roberto Urdaneta para controlar la situación de violencia, y para reafirmar la concepción de orden que tenían y profesaban —lucha contra el comunismo y contra todos los demás agentes y doctrinas generadores de anarquía—, se apoyaría en el estamento militar y policial que, para inicios de la década de los cincuenta, contaba con 25 000 hombres adscritos a la Policía, 15 000 al Ejército, 3200 a la Marina y 1200 a la Fuerza Aérea[56]. Con ese importante pie de fuerza, y bajo el axioma de que se debía luchar incesantemente contra comunistas, bandoleros y criminales, el Gobierno fomentaría la confrontación armada contra las organizaciones guerrilleras que había en los Llanos Orientales, en el occidente de Cundinamarca y en el sur del Tolima.

Sin desvirtuar que el accionar contrasubversivo de las Fuerzas Militares se amparaba en consideraciones y mandatos constitucionales y gubernamentales, no había duda de que los uniformados también llevaban a cabo esa tarea imbuidos y movidos por el discurso anticomunista que desde hacía mucho tiempo se venía pregonando en el país y que durante los últimos años se había radicalizado en virtud de las mordaces acusaciones y discusiones sostenidas entre conservadores, liberales y comunistas. Replicando lo que se decía en los directorios conservadores, los militares pusieron de manifiesto que la amenaza a la que estaban enfrentándose no era la de unos campesinos y colonos que se habían alzado en armas, reivindicando el derecho a poseer las tierras baldías que habían colonizado —como estos decían—, sino que se trataba de una lucha contra la amenaza comunista que se cernía sobre el orden estatal legítimamente establecido.

“El comunismo está haciendo una subversión organizada y tiene sus antecedentes desde el movimiento subversivo del nueve de abril”, denunciaba un alto oficial del Ejército, protagonista del desenvolvimiento que tuvo la lucha armada en el oriente del país durante los años cincuenta. “La situación de orden público de los Llanos es un movimiento de insurrección contra las autoridades, es una revolución conducida por fuerzas no regulares, un movimiento provocado por fuerzas políticas contra el Gobierno legítimo […] El comunismo instruye

personal para llevar la subversión a la zona de los campos. Ha empleado cuatro años para preparar esta tarea, para organizar y entrenar personal, para armarlo y distribuirlo de acuerdo con sus fines”[57].

En el Llano, tanto las acciones de los guerrilleros como las de los militares habían dejado una considerable cantidad de muertes. Un ejemplo claro fue lo que aconteció durante el segundo semestre de 1952. Tras haber sufrido grandes reveses que habían dejado más de dos centenares de uniformados muertos, los militares pusieron en marcha la más grande y sofisticada operación contraguerrillera que se hubiera adelantado en el país. Una columna guerrillera vio el desplazamiento que un nutrido grupo de militares realizaba en varios camiones desde la zona norte del Llano hacia Puerto López (Meta) y, de inmediato, prepararó una emboscada. Los resultados fueron contundentes: 96 militares cayeron muertos, cuatro fueron retenidos y apenas uno logró escapar. Las armas y municiones que llevaban quedaron en manos de los insurgentes y con ellas continuarían desplegando acciones en esa vasta región.

La confrontación vendría a resolverse por otra vía y en virtud de los acontecimientos políticos que tuvieron lugar hacia mediados de 1953. Esto es, a partir de la negociación que algunas guerrillas liberales establecieron con el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, en el poder luego del golpe de Estado que derrocó al régimen conservador de Laureano Gómez. La dictadura militar se apresuró primero a ilegalizar el Partido Comunista[58], y se aseguró de que el creciente discurso anticomunista calara en cada miembro de las Fuerzas Militares, asignándole un valor moral de defensa de los valores tradicionales de la sociedad. “El gobierno impedirá que al lado o por encima de la moral cristiana se instaure un concepto materialista del hombre y su tarea”, aseguraba Rojas durante su posesión en 1953. Al año siguiente, reiteraba que “el comunismo ha prosperado en el mundo porque la civilización occidental olvidó que el sustento era el cristianismo”[59]. La alegoría a Dios y a Cristo en las oraciones y prácticas dentro de la cultura militar quedaban asociadas de manera directa al rechazo institucional a la atea doctrina comunista.

Pese a lo anterior, el general Rojas empezó a desbrozar el camino para la eventual desmovilización de las guerrillas de los Llanos, para lo cual promovió y promulgó una ley de amnistía, a fin de que los guerrilleros se acogieran a ella. Tras aceptar la amnistía presentada por el Gobierno, más de tres mil quinientos guerrilleros entregaron sus armas en distintos lugares de los Llanos Orientales. Lo propio hicieron quienes se habían alzado en armas en algunas regiones del

Tolima, Antioquia, Cundinamarca y Santander. Así las cosas, y a pesar de que en medio de las conversaciones y del desarme se profirieron denuncias por el asesinato de algunos guerrilleros, las negociaciones lograron llegar a un feliz término. La sensación que reinó entre los colombianos fue de cierto 'júbilo' debido al desenlace que había tenido la cruenta confrontación armada que se había vivido en los Llanos Orientales.

Mientras tanto, desde finales de los cuarenta, la estrategia de autodefensas le permitía al Partido Comunista acumular una fuerza militar con capacidad guerrillera sin pasar todavía a la ofensiva. En este estado de conflicto de baja intensidad, "las bajas del enemigo fueron muy reducidas y las nuestras muy contadas"[60]. Al tiempo, diversos grupos armados de guerrilla surgieron en diferentes lugares del país fuera del control del partido, como aquellas de ideología liberal que se asentaron en regiones como los Santanderes y los Llanos. Durante los años cincuenta, con la desmovilización de las guerrillas liberales, el Partido Comunista temió quedarse solo en la resistencia armada y atraer la retaliación militar del Estado. Como solución, acudió a un modelo de desmovilización sin desarme. "Los jefes liberales entregaron las guerrillas, quedando el Partido Comunista aislado —sus guerrillas—. Entonces fue imposible sostener la lucha armada, y contra la política de entrega sostuvimos la autodefensa: mantener las organizaciones guerrilleras en pie, aunque no activas"[61].

Según Manuel Marulanda, los primeros grupos o destacamentos guerrilleros que se crearon y establecieron en el sur del Tolima, entre 1949 y 1953, fueron los de Bilbao, Horizonte, La Ocasión, La Quebrada, Río Verde, Herrera, El Agarre y El Socorro, todos en el municipio de Rioblanco y bajo la dirección de los liberales, mientras que bajo la dirección de los comunistas se crearon los grupos de Chicalá, Horizonte, La Marina e Irco en el municipio de Chaparral; El Davis en el municipio de Rioblanco; Paujil y Peña Rica en el municipio de Ataco; Córdoba y Sucre en el municipio de Chaparral (1951); El Davis II en el municipio de Chaparral (1952); Cambrín en Rioblanco; Saldaña o el 'Infierno' en el municipio de Ataco; y Calarma en el municipio de Chaparral (1953)[62].

Según las directrices del Partido Comunista, dos decenas de integrantes en Chicalá constituirían el primero de los núcleos de carácter guerrillero en Chaparral, y esa experiencia se iría replicando lenta pero sostenidamente en otros lugares de la región. A comienzos de 1950, cuando campesinos y colonos huían de la persecución conservadora y se dirigían hacia el sur del departamento

del Tolima, siguiendo un desplazamiento que denominaron ‘Columna de Marcha’, en el cañón del río Cambrí, los comandantes liberales y comunistas realizaron una de sus más significativas reuniones, pues de ella se derivaría una colaboración para el encauzamiento de la lucha armada que de allí en adelante seguiría.

Antes de la desmovilización de las guerrillas liberales estas junto con los comunistas conformaron el Estado Mayor Unificado del Sur, instancia fundamental de orientación de la lucha guerrillera, la cual debía complementarse con la organización y proyección del trabajo político que cada organización realizaría por su lado. Organizado como un enclave guerrillero, los campesinos y colonos se instalaron en El Davis, en el sur de Tolima. Asaltos hechos a comienzos de 1951 en la hacienda El Paraíso, a un retén de la Policía que custodiaba la recolección y el transporte de café en esa región, a una población conocida como La Herrera —en retaliación contra los conservadores—, a otra población conocida como Órganos, en Huila, y a la población de La Gaitania, en Tolima, se convirtieron en puntos de partida de la confrontación armada.

Pero si bien es cierto que la unión de esfuerzos y la efectiva expansión territorial daban cuenta de la solidez que había ganado el proyecto político de acción y reivindicación que comunistas y liberales habían liderado e impulsado en esa región del país, ese proyecto prontamente empezó a mostrar sus fisuras en virtud de las directrices que la dirección nacional del Partido Liberal emitió a sus mandos regionales y locales. Por una parte, luego de haber firmado la paz con los conservadores (1951-1952), el Partido hizo un llamado para cesar la confrontación; y por otro, decidió reasumir el discurso anticomunista, que en pleno surgimiento de la Guerra Fría se había tornado mucho más contundente. Tales instrucciones pronto gestaron un distanciamiento entre comunistas y liberales.

A raíz de las disputas suscitadas en torno al control territorial y poblacional, y las diferencias ideológicas, las autodefensas liberal y comunista entraron en una fase de mutua persecución, hostigamiento y ataque que terminó desgastándolas y ahogando, por lo menos temporalmente, el proyecto político que los comunistas se habían trazado en la región, esto es, la toma de tierras y el aseguramiento de ‘zonas liberadas’, y la cooptación de simpatizantes y militantes para su causa. No obstante, la fuerza militar y política ganada por los comunistas no se apagaría del todo. Pese a los ataques de los liberales, de los conservadores y de las bandas armadas patrocinadas por los terratenientes de la región[63], además de la acción

que adelantaban las Fuerzas Militares y de Policía, los comunistas no solo lograron mantener cierta unidad de mando y organización, sino que lograron incorporar a sus filas a personas que en el corto tiempo pasarían a comandar unidades y expandirse hacia otras regiones del Tolima, el Huila y el Cauca. Esa, en efecto, sería la historia de futuros comandantes guerrilleros como Jacobo Prías Alape, Andrés Bermúdez, Isauro Yosa, Ciro Trujillo y Manuel Marulanda Vélez, quienes siendo muy jóvenes habían integrado la llamada resistencia campesina liberal, y luego pasarían a integrar la guerrilla comunista.

Para cuando Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda crearon el grupo autodefensa armada en la zona de Marquetalia, Tolima, a finales de los años cuarenta, ya el Partido Comunista procuraba aprovechar el acumulado de aprendizaje de la violencia de los veteranos guerrilleros en esta y otras regiones del país. El ataque de Prías al puesto de policía en Aipe, Huila, en julio de 1953, le permitió apoderarse de ocho fusiles y asesinar a siete agentes, pero también llamar la atención de las Fuerzas Militares[64]. No era evidente aún, sin embargo, que este sería un conflicto diferente a otros que le antecedían.

Durante 1954 se produjo una nueva oleada de migraciones de guerrilleros al Sumapaz procedentes del sur de Tolima, comandados por Isauro Yosa, José Castañeda (Richard), Ciro Trujillo, el Capitán Cardenal y otros líderes de ascendencia dentro del movimiento insurgente. Su presencia fue advertida por las unidades del Ejército que se hallaban desplegadas en la región y con ello iniciaron una serie de combates. Durante más de seis meses los choques se hicieron sistemáticos y, en ese mismo lapso, el Gobierno no solo decidió enviar refuerzos, sino que declaró como 'zona de guerra' a la región que se extendía desde los municipios de Cabrera y Sumapaz en Cundinamarca, hasta Cunday en Tolima, en donde además de las unidades militares ya establecidas también entró a funcionar un Comando Operativo a cargo de la Brigada de Institutos Militares.

Hacia finales de 1955, la confrontación de unos tres mil soldados desplegados por los Fuerzas Militares con un número no determinado de guerrilleros había dejado más de 71 militares muertos, alrededor de doscientos heridos, un número no cuantificado de guerrilleros y campesinos muertos, y una creciente ola de migraciones de labriegos hacia distintos municipios de Tolima, Huila y Cundinamarca[65]. El Ejército optó primero por reforzarse y luego replegarse. Para tal efecto, los militares no solo aumentaron el número de efectivos, destinando para ello a los hombres más experimentados —incluyendo a muchos de los que habían participado en la Guerra de Corea (1950-1953)—, sino que extendieron el

tiempo de servicio militar obligatorio de los soldados de dieciocho a veinticuatro meses, concentraron en la región su mejor arsenal —aviones, helicópteros, piezas de artillería, fusilería moderna, radios de comunicación, vehículos de transporte—; iniciaron la creación de la Escuela de Lanceros —emulando la Ranger School del ejército estadounidense—; y empezaron a desarrollar un tipo de entrenamiento militar que incorporaba algunos principios de la guerra irregular.

Tanto el reforzamiento técnico como el cambio táctico resultaban cruciales para los propósitos del Ejército. La movilización de numerosas tropas hacia las áreas de operaciones no garantizaba éxitos inmediatos para el Ejército, sino que más bien generaba cierto desgaste y por extensión a ello cierta desmoralización, no solo porque las tropas eran golpeadas sorpresivamente, mediante la emboscada, sino porque los guerrilleros se escabullían fácilmente por entre caminos, selvas, llanuras o ríos que conocían suficientemente. El Ejército también sufría un desgaste moral al no contar con el apoyo de la población en las zonas de operación guerrillera. Mientras las regiones dominadas por los conservadores y por los liberales que recién habían suscrito la amnistía y la desmovilización resultaron de más fácil acceso para los militares, aquellas dominadas por los comunistas le presentaron una mayor resistencia.

Los combates librados durante ese tiempo habían sido cruentos y permanentes, y aunque el número de hombres caídos en combate nunca se precisó, las acusaciones referidas a los desmanes cometidos por las partes se expresaron por doquier. Mientras los militares acusaban a los guerrilleros de matar traicioneramente a los uniformados, estos eran acusados de cometer vejámenes, no solo contra los guerrilleros que capturaban sino también contra la población civil acusada de colaborar con los insurgentes. En medio de este clima, hacia 1957, los comunistas iniciaron un nuevo desplazamiento hacia Riochiquito, El Pato y Guayabero.

El repliegue territorial que la guerrilla comunista se vio obligada a efectuar durante los últimos años de la década de los cincuenta no se tradujo en su derrota. Los golpes propinados por el Ejército, la ‘contrachusma’ y las ‘guerrillas de paz’[66] habían conducido a que los guerrilleros se replegaran hacia el sur del Tolima, el norte del Cauca, el noroccidente del Huila y hacia otras zonas en las que buscaron refugio y en las que también vieron la manera de reagruparse y reorganizarse política y militarmente. Los guerrilleros comunistas no solo lograron mantener la unidad de mando y organización, sino que tuvieron la

capacidad para seguir manteniendo combates y para conseguir armas, municiones y pertrechos militares que les arrebataban a sus oponentes cada vez que tenían un enfrentamiento armado.

La guerrilla continuó desarrollando acciones armadas al tiempo que el Gobierno, a través de las Fuerzas Militares, hacía lo propio. “Existe un plan subversivo para derrocar las autoridades legítimas”, denunciaba el nuevo gobierno civil en diciembre de 1958, “con la utilización de procedimientos de barbarie [...] contrarios a los principios de la civilización cristiana”[67]. A pesar de levantar brevemente el estado de sitio —excepto en el sur y occidente del país—, ofrecer amnistía e intentar hacer un corte de cuentas para lidiar con el pasado atroz de La Violencia —ordenando una comisión de memoria sobre la violencia reciente —, el país se preparaba menos para la paz y más para la guerra.

Durante unos pocos meses, tras la caída del gobierno militar, la violencia de liberales, conservadores y comunistas pareció amainar. El Partido Comunista se atrevió a hacer público su Congreso en Bogotá, tras los años de ilegalidad durante la dictadura. El líder de la subversión comunista en el Sumapaz, Juan de La Cruz Varela, viajaba ahora a Bogotá a posesionarse como representante a la Cámara como parte de la agrupación más radical del Partido Liberal[68], a pocos asientos de su enemigo mortal Mariachi, como se le conocía a Jesús María Oviedo, también ya en la legalidad. Jacobo Prías Alape, conocido como Charro Negro, y Peligro, remoquete del guerrillero liberal Jaime Castellanos, habían transmutado la sangrienta confrontación de comunistas y liberales a la dialéctica sin armas como dirigentes rivales en el Tolima. Precisamente esta región, cuna de los primeros proyectos guerrilleros para la toma del poder, vio también cómo las firmas del Mayor Marulanda y el Mayor Ciro[69] se unían a una declaración pública de apoyo a aquel proceso de rehabilitación nacional del nuevo gobierno civil[70].

En 1960, la ilusión de paz se desvaneció por completo. En el X Congreso del Partido Comunista de ese año, realizado de nuevo en la clandestinidad, se “planteó que en Colombia se abría la vía original basada en todas las formas de lucha, señalando que la guerra de guerrillas es uno de los métodos más elevados y avanza donde tiene carácter masivo”[71]. Tras la muerte de Jacobo Prías Alape ese año, Manuel Marulanda tomó el mando de la autodefensa comunista de Marquetalia. Desde entonces, las autoridades le acusaron de apoyarse en decenas de subversivos para cometer asaltos a civiles, emboscadas a patrullas, ataques a puestos de policía, asesinatos de militares, policías y campesinos y robos de

ganado, entre otras acciones[72]. Por tercera vez, Marulanda y Ciro Trujillo tomaban las armas y ahora abandonaban definitivamente la civilidad.

Al tiempo que en 1962 las Fuerzas Militares presentaban el Plan Lazo al Gobierno como la primera estrategia integral para poner fin al conflicto, en marzo de ese mismo año recibían un duro golpe, tras caer en una emboscada tendida por los guerrilleros en una zona rural del municipio de Palermo, Huila. Los hechos se produjeron cuando un pelotón integrado por 32 soldados y cuatro suboficiales se trasladaba con el propósito de abastecer a otro grupo de soldados que prestaba servicio en un puesto de mando ubicado en un corregimiento conocido como El Carmen.

De forma sorpresiva, los soldados fueron atacados con disparos de fusiles y carabinas y con detonaciones de bombas caseras. El cruce de disparos no se prolongó durante mucho tiempo, pero fue suficiente para que los guerrilleros lograran su cometido: cuatro soldados perdieron la vida, tres más resultaron heridos; además, cinco fusiles, diez granadas, más de 450 cartuchos y otros tantos implementos militares que hacían parte de la dotación de los soldados, incluyendo las botas y los uniformes de quienes perecieron en el ataque, terminaron en manos de los guerrilleros[73].

La misma suerte volvería a padecer otra unidad militar pocas semanas después del citado hecho cuando realizaba un patrullaje con el propósito de perseguir a un grupo de guerrilleros que operaban en la zona. Dos pelotones debían ejecutar acciones de patrullaje a lo largo de la carretera destapada que comunicaba los corregimientos de Aleluya y El Carmen a fin de identificar las posibles emboscadas que los guerrilleros pudieran perpetrar en contra de las tropas. Al mismo tiempo, otros cuatro pelotones prepararían acciones de emboscadas contra sus oponentes. El primero de esos pelotones debía iniciar la marcha en tres vehículos hacia su predeterminada zona de acción. Al mando de un oficial y cuatro suboficiales, los 32 soldados partieron al cumplimiento de su misión. No habían transitado más de cuatro kilómetros cuando los primeros dos camiones recibieron las ráfagas de fusil y ametralladora descargadas por los guerrilleros. La pericia y el factor sorpresa con que estos solían actuar surtió un efecto inmediato: cinco soldados y el conductor de uno de los vehículos cayeron muertos; dos suboficiales, diez soldados y otro de los conductores resultaron heridos; cinco fusiles quedaron en manos de los guerrilleros y una nueva derrota quedó como lección para los uniformados. Enviar tropas por una carretera que ofrecía todas las condiciones para ser emboscados y desarrollar operaciones en

una zona dominada y plenamente conocida por los subversivos fue, según el balance efectuado por los militares, un acto suicida de lamentables consecuencias[74].

Como respuesta, en 1962, el nuevo presidente de la República advertía una vez más a las guerrillas comunistas que "equivocados andan quienes pretenden extirpar del corazón del pueblo a Bolívar, a Santander, a Córdoba para sustituirlos por enigmáticas siluetas eslavas, cargadas de misterio y de peligro, que nada significan para nuestras gentes, o aspiren a implantar en nuestro suelo la lamentable experiencia barbuda [de la Revolución Cubana]. Que lo sepa bien el pueblo de Colombia: el peligro que corre es gravísimo y pudiere llegar a ser irreparable"[75].



Los guerrilleros liberales enfrentaron a las FFMM en la década de los cincuenta en coordinación con las guerrillas comunistas. / Foto: Julián Lineros.

Notas

[1] A diferencia de los oficiales y suboficiales, muchos formados en la Guerra de Corea.

[2] Muchos líderes e integrantes de las organizaciones guerrilleras surgidas en los años sesenta, o sus parientes, combatieron en frentes guerrilleros liberales en Santander, Caldas, Tolima, Boyacá, Antioquia y los Llanos Orientales durante los años cuarenta y cincuenta. Otros fueron atraídos por el Partido Comunista luego de su desmovilización.

[3] Las Fuerzas Militares debieron aprender dos técnicas básicas de la guerra irregular: el golpe de mano, que consistía en el asalto por sorpresa a un grupo enemigo plenamente localizado; y la emboscada, que consistía en el ataque a grupos en movimiento. Adicionalmente debieron aprender a ejecutar ‘operaciones irregulares’, que consistían en acciones planeadas no como lo haría un ejército regular, sino como una guerrilla.

[4] Cabe destacar, por ejemplo, cómo los textos revolucionarios de Vladimir Lenin sugieren explícitamente el robo de bancos como medio expedito de financiación, y el asesinato de policías y militares, los ataques a puestos de policía, el uso de explosivos y el robo de armas a policías como tácticas típicas a seguir. Textos comunistas posteriores también detallan la utilidad de las acciones de saboteo a infraestructura civil y militar, usada ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. Además, a nivel operacional, Lenin indica la importancia de la

formación ideológica de militantes y cuadros, y la necesidad de cooptar, debilitar e incluso destruir las Fuerzas Militares y de Policía como imperativo para hacer viable la toma armada del poder. Más adelante describiremos la manera en que Partido Comunista Colombiano ensambló los elementos tácticos y operacionales en una gran estrategia de toma armada del poder.

[5] Palabras de Ignacio Torres Giraldo, líder del psr, citado por Editorial 8 de junio de 1975. ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir? Extractos de la revista Proletarización 11, julio de 1975, 24.

[6] Sobre la estrategia del psr en sus primeros años, véase Mejía, Gilberto 1987. Memorias. El Comunismo en Antioquia. Medellín: Ediciones Pepe.

[7] Lenin, Vladimir 1965 [1906]. Guerrilla Warfare. En Lenin Collected Works. Moscú: Progress Publishers, 213-223. Ver también Lenin, Vladimir 1973 [1905]. La guerra de guerrillas. En Lenin. Obras escogidas, tomo III (1905-1912). Moscú: Editorial Progreso, 109-113.

[8] Op. cit., Lenin 1973 [1905], 110.

[9] Ibídem, 111.

[10] La mayoría de los documentos primarios citados del Partido Socialista Revolucionario (PSR) y el Partido Comunista de Colombia (PCC) de esta sección se encuentran disponibles también en la divulgación hecha por Klaus Meschkat y José María Rojas (comp.) 2015, Liquidando el pasado. La izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética. Segunda edición. Bogotá: Taurus y Fescol.

[11] PSR 1928a. Declaración del Comité Central Ejecutivo del PSRC sobre el nombre del partido, Bogotá, 11 febrero.

[12] PSR 1928b. Acuerdo número 23 sobre organización del Ejército Rojo del Partido Socialista Revolucionario. Asamblea Plenaria del Partido Socialista Revolucionario de Colombia, Bogotá, 29 julio.

[13] Esta Jefatura era conocida también con el nombre de Comité Central Conspirativo de Colombia (CCCC).

[14] Op. cit., PSR 1928b

[15] Ibídem.

[16] Mahecha fue condenado por cargos de subversión y homicidio, y pagó diecisiete meses de cárcel. Ver Meschkat, Klaus 2015. Introducción. Del socialismo revolucionario al estalinismo en Colombia, 1927-1933. En Klaus Meschkat y José María Rojas (comp.), Liquidando el pasado. La izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética. Segunda edición. Bogotá: Taurus y Fescol, 20.

[17] Internacional Comunista 1928a. Situación en Colombia, traducido del inglés por Diego Roldán Luna, octubre.

[18] PSR 1929a. Carta de Jaime Nevárez [James Harfield] a Jay Lobstone, Barranquilla, traducida del inglés por Amparo Navarro, 19 febrero.

[19] Ibídem.

[20] Lenin, Vladimir 1965 [1905]. The Armed Forces and The Revolution. En Lenin Collected Works. Moscú: Progress Publishers, 54-57. Ver también Lenin, Vladimir 1973 [1905]. Las Fuerzas Armadas y la revolución. En Lenin. Obras escogidas, tomo III (1905-1912). Moscú: Editorial Progreso, 82-83.

[21] Op. cit., PSR 1929a.

[22] PSR 1930a. La huelga de las bananeras. Informe de A. Becerra sobre la huelga bananera, Pereira, 30 abril.

[23] Conferencia Comunista 1929. Acta de la primera reunión en privado con delegados colombianos a la Conferencia Comunista. Sesión del 27 de mayo por la mañana, Buenos Aires, 27 de mayo.

[24] Internacional Comunista 1929a. Acta de reunión en privado de representantes de la IC con delegados colombianos a la Conferencia Comunista, Buenos Aires, 12 junio.

[25] Ibídem.

[26] Op. cit., PSR 1930a.

[27] Ibídem.

[28] PSR 1929c. Resolución sobre los casos de los afiliados firmantes del artículo aparecido en el diario El Tiempo. Comité Central del PSR, Bogotá, 27 noviembre.

[29] Sin autor 1929. Memorandum. Delación de E. Cárdenas Villate, Bogotá, 1 febrero. Citado en op. cit., Meschkat, Klaus 2015, 177-179.

[30] Editorial 8 de junio 1975, ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir? Extractos de la revista Proletarización 11, julio, 24-25.

[31] Op. cit. Sin autor, 1929.

[32] PSR 1929d. Carta de Rafael Baquero al Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, Bogotá, 8 septiembre.

[33] Meschkat, Klaus 2015. Introducción. Del socialismo revolucionario al estalinismo en Colombia, 1927-1933. En Klaus Meschkat y José María Rojas (comp.), Liquidando el pasado. La izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética. Segunda edición. Bogotá: Taurus y Fescol, 30.

[34] PSR 1929e. Carta de Heraclio Matallana a V. Codovilla, Chiquinquirá, 25 noviembre.

[35] Internacional Comunista 1929b. Carta del Buró de la Internacional Comunista al Partido Socialista Revolucionario (PSR), Moscú, febrero. Citada en Arango, Carlos 1985. Sobrevivientes de las bananeras, segunda edición. Bogotá: Ecoe Ediciones, 161.

[36] Ibídem.

[37] Ibídem

[38] Secretariado Suramericano de la Internacional Comunista 1929. Resolución del Secretariado Sudamericano de la IC sobre la situación del Partido Socialista Revolucionaria de Colombia y sus tareas inmediatas, julio.

[39] Internacional Comunista 1930. Carta del Secretariado Latinoamericano de la Internacional Comunista al Partido Socialista Revolucionario (PSR), Moscú, febrero.

[40] Ibídem. Tales postulados fueron adoptados casi textualmente por el Partido Comunista de Colombia. Ver Partido Comunista 1930a. Manifiesto del Partido Comunista – sección colombiana de la IC en ocasión del primer aniversario de los sublevamientos heroicos de El Líbano, La Gómez y Puerto Wilches, Bogotá, 20 julio.

[41] PSR 1929d. Op. cit.

[42] Partido Comunista 1930b. Informe de Guillermo Hernández Rodríguez, posterior al Pleno Ampliado del PSRC, 5-13 julio.

[43] Movimiento de seguidores del liberal Jorge Eliécer Gaitán.

[44] Ignacio Rengifo 1927, citado Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (compiladores) 2007 [1986]. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Tercera edición. Medellín: La Carreta Histórica, 298.

[45] Eduardo Santos 1938, palabras del discurso de posesión como Presidente de la República, agosto 7 de 1938, citado en Monsalve, Manuel (compilador) 1954, Colombia. Posesiones presidenciales 1810-1954. Bogotá: Editorial Iqueima, 428.

[46] Ibídem, 429.

[47] Ramsey, Russell W. 1981. Guerrilleros y Soldados. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 118.

[48] Editorial 8 de junio de 1975, op. cit., 55-56.

[49] Farc 1979a. Ponencia del Secretariado del Estado Mayor Conjunto en la

celebración del XV aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, 27 de mayo.

[50] Ibídem.

[51] Algunos autores calculan que la cantidad de muertos generados por la violencia durante aquella época osciló entre doscientos y trescientos mil, pero oficialmente no se conoce un registro exacto de víctimas. Al respecto véase Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo 2010 [1962]. La Violencia en Colombia. Dos tomos. Bogotá: Taurus.

[52] Sobre las particulares y siniestras manera de asesinato que se utilizaron durante aquella época, véase Uribe, María Victoria 1994. Matar, rematar, contramatar. Las masacres de la violencia en el Tolima, 1948-1964. Bogotá: Cinep.

[53] Alberto Lleras Camargo 1958, palabras pronunciadas al tomar posesión de la Presidencia de la República el 7 de agosto, citado en Valencia Benavides, Hernán (compilador) 1983. Discursos y mensajes de posesión presidencial. Volumen VII, Tomo II. Bogotá: Imprenta Nacional, 291.

[54] Laureano Gómez Castro 1950, palabras pronunciadas al tomar posesión de la Presidencia de la República el 7 de agosto, citado en ibídem, 218.

[55] Ibídem, 221.

[56] Además de esa fuerza, Ramsey calcula que en el país había aproximadamente 5.000 individuos que habían sido armados ilegalmente por los mandos locales y regionales del Partido Conservador. Véase Ramsey, Russell W. 1981, op. cit., 179.

[57] Sierra Ochoa, Gustavo 1954. Las guerrillas de los Llanos Orientales. Manizales: sin editorial, 5-7.

[58] Acto legislativo 6 de 1954 de la Asamblea Nacional Constituyente, 14 de septiembre, sancionada por el presidente Gustavo Rojas Pinilla.

[59] Gustavo Rojas Pinilla 1953 y 1954, citado en Monsalve, Manuel 1954, op. cit., 119-121.

[60] Informe a la Federación de Trabajadores del Tequendama 1957, citado en Editorial 8 de junio de 1975, op. cit., 65.

[61] Gilberto Vieira, líder del Partido Comunista, citado en ibídem, 66.

[62] Los grupos armados del Partido Comunista de los años cincuenta se agrupaban bajo el nombre de Ejército Revolucionario de Liberación Nacional. Véase Marulanda, Manuel 1973. Cuadernos de Campaña. Sin ciudad: Ediciones Abejón Mono.

[63] Incluidos los llamados ‘pájaros’ liberales, la ‘policía chulavita’ y los ‘patriotas’ conservadores, conformados por civiles armados al servicio de líderes de los

partidos. Muchos miembros de la ‘policía chulavita’ provenían de una vereda llamada Chulavita, localizada en Boavita, Boyacá. Los ‘pájaros’ recibieron ese nombre en razón de la ‘rapidez’ con que actuaban al momento de cometer sus crímenes y luego fugarse.

[64] Las Fuerzas Militares le atribuyeron a Prías Alape decenas de asesinatos selectivos y masacres de civiles, el robo de cientos de cabezas ganado, y varios incendios de ranchos campesinos, entre 1953 y 1960, así como el ataque a un puesto del Ejército en Aipe, Huila, el 7 de diciembre de 1956, en el que murieron dieciséis militares.

[65] Ramsey, Russell W. 1981, op. cit., 237 y ss.

[66] Apoyadas por los terratenientes, la ‘contrachusma’ y las llamadas ‘guerrillas de paz’ eran bandas armadas integradas por militantes de los partidos Liberal y Conservador y por algunos hombres que recientemente se habían desmovilizado de las guerrillas liberales, con el propósito de perseguir y combatir a los guerrilleros comunistas.

[67] Decreto 0329 de 1958, por el que se instauró el estado de sitio en todo el país.

[68] El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL).

[69] Alfonso Trujillo adoptó el nombre de Ciro, conservando su apellido.

[70] La Oficina Nacional de Rehabilitación fue creada mediante decreto 1718 de

1958.

[71] Comando del Ejército 1983a. Apreciación de inteligencia 1. Enero, 68.

[72] Desde que Manuel Marulanda asumió el mando de la autodefensa comunista de Marquetalia, las Fuerzas Militares le atribuyen la muerte de diecisiete soldados entre mayo de 1960 y marzo de 1962, en seis emboscadas a patrullas, un ataque a una base militar y un ataque a un dragoneante ocurridos en los alrededores de Palermo, Huila, y de Gaitania, Tolima. En este período le atribuyen además asesinatos de civiles y desplazamientos forzados. Véase Comando Tercera Brigada 1964. Orden de operaciones 5. Plan de Operaciones No. 2 Soberanía-Gama, 8 de abril, 1; Comando del Ejército 1962c. Caso No. 22. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 246-252; Comando del Ejército 1962d. Caso No. 19. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 219-228; y Moncada, Alonso 1963. Un aspecto de la violencia. Bogotá: sin editorial, 359-360.

[73] Comando del Ejército 1962c. Caso No. 22. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 246-252.

[74] Comando del Ejército 1962d. Caso No. 19. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 219-228.

[75] Valencia, Guillermo León 1963. Discurso del Señor Presidente de la República con Motivo del Día del Ejército Nacional. Revista de las Fuerzas Armadas 7(29): 247-252.

Capítulo II

Un ‘ejército contrabandolero’

La adaptación de las Fuerzas Militares a la guerra irregular se produjo no solo por la experiencia del combate con las guerrillas liberales y comunistas, sino también por el enfrentamiento con los grupos de bandoleros, profesionales de la violencia forjados en las violencias partidistas y guerrilleras. La mezcla de tres guerras simultáneas —bipartidista, bandoleril y comunista— introducía a los militares a un escenario confuso, en el que la capacidad de diferenciar las características del enemigo se convertía en un proceso lento y lleno de reveses.

Si bien los bandoleros causaron gran daño a los soldados durante la primera mitad de los años sesenta, el aprendizaje militar les permitió a las Fuerzas Militares atacar sus debilidades y erradicar el fenómeno hacia 1965. El trato bandoleril hacia la guerrilla comunista ocultaba las particularidades sociológicas y estratégicas que hacían de esta un adversario diferente, y el retraso de los militares para reconocer tal hecho les proveyó a los insurgentes el tiempo y el espacio para sofisticar sus estrategias, operaciones y tácticas.

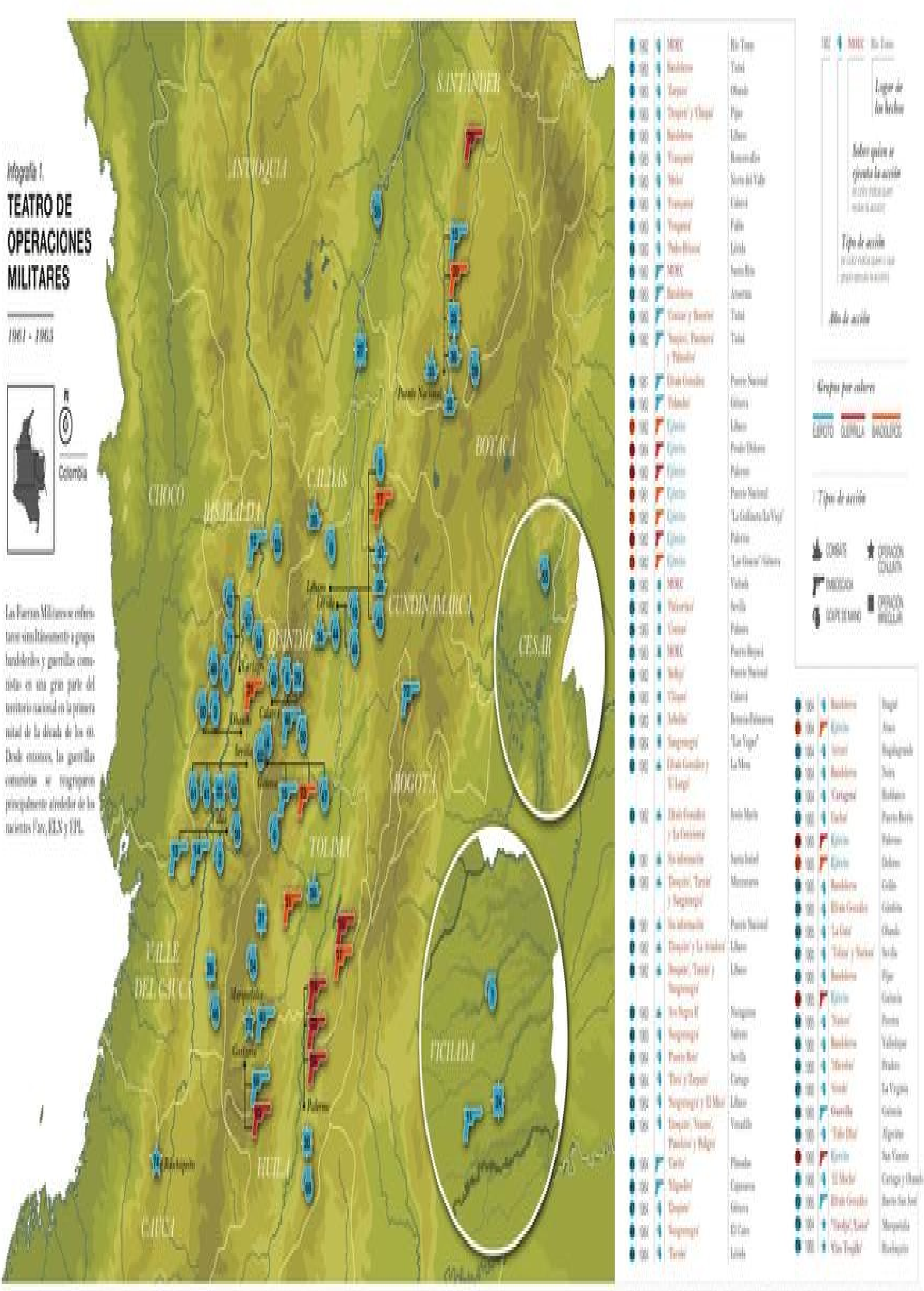
Paradójicamente, el éxito de un ‘ejército contrabandolero’ contribuyó a que los gobiernos de los años sesenta menospreciaran la importancia de intervenciones profundas en las poblaciones de influencia de las guerrillas comunistas, restringiendo a los militares a desarrollar acciones de contención sin una estrategia de cierre del conflicto.

Los grupos de bandoleros eran herederos de una ahogada lucha de resistencia y reivindicación campesina que hundía sus raíces en la organización agraria que se había gestado desde la década de los veinte. En las décadas siguientes, terminarían convirtiéndose en protagonistas fundamentales de la nueva fase de violencia que se suscitó en muchas regiones del país.

Los bandoleros fueron influidos ideológicamente por las disputas partidistas de la década de los cuarenta. Estuvieron inmersos en la abigarrada situación de violencia que vivió el país durante la década de los cincuenta; estaban insertos

en una sociedad rural que los protegía porque reivindicaban las causas y aspiraciones de la tenencia de la tierra y la defensa de la vida; pretendieron ser garantes de la protección y la seguridad que los hacendados, gamonales y políticos locales y regionales requerían para cuidarse, pero también para atacar a sus contradictores y opositores; y, al final, fueron abandonados a su propia suerte cuando las élites políticas nacionales decidieron unirse en causa común —creación del Frente Nacional en 1957-1958—, en tanto que ya no eran útiles para sus propósitos.

Indistintamente de que algunos provinieran de las antiguas guerrillas liberales y comunistas, que otros fueran auspiciados por el conservatismo, que unos cuantos más fueran hombres fugados del Ejército, que algunos otros hubieran sido echados de la Policía por su filiación política y que otros tantos hubieran terminado involucrados por el espíritu de aventura que la situación y el contexto político y social generaba, lo cierto era que en el país se había incubado una generación de hombres que serían reconocidos tanto por sus sonoros sobrenombres como por la temeraria manera en que planearon y ejecutaron sus actos delictivos. Fue esa, ciertamente, la historia que protagonizaron Tarzán, Venganza, Desquite, Pedro Brincos, Chispas, Sangrenegra, Miguelito, El Mico, Palmolive, Avenegra, El Erizo, Misterio, Zarpazo, Melco, Tusta, Cariño, Paticortico, Pielroja, Cenizas, Diamante, Suicida, Almaroja y otros tantos individuos que durante aquel tiempo perpetraron toda clase de acciones violentas en varias regiones de Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas y Quindío. Lo mismo que en algunos municipios de Santander y Boyacá, en donde Efraín González (conocido también como Sietecolores, Juanito o Compadre Juan) perpetró —en nombre propio y en nombre de los jefes locales y regionales del Partido Conservador— algunas de las más sangrientas masacres en contra de campesinos liberales, de células comunistas, de opositores políticos y hasta del propio Ejército y la Policía.



Infografía 1.
TEATRO DE OPERACIONES MILITARES
Colombia
Las Fuerzas Militares se enfrentaron simultáneamente a grupos bandoleros y guerrillas comunistas en una gran parte del territorio nacional en la primera mitad de la década de los 60. Desde entonces, las guerrillas comunistas se reagruparon principalmente alrededor de las nacientes Farc, ELN y EPL.
SANTANDER
ANTIOQUIA
CHOCÓ
RISARALDA
CALDAS
QUINDÍO
CUNDINAMARCA
BOYACÁ
CESAR
BOGOTÁ
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
HUILA
CAUCA
VICHADA
Grupos por colores
EJÉRCITO
GUERRILLA
BANDOLEROS
Tipos de acción
COMBATE
OPERACIÓN CONJUNTA
EMBOSCADA
GOLPE DE MANO
OPERACIÓN IRREGULAR

Si bien es cierto que los asesinatos, las amenazas, los atentados, los robos, las extorsiones y otras tantas acciones criminales ejecutadas en nombre propio o en nombre de sus auspiciadores los hicieron merecedores del rechazo público y oficial, en principio muchos de esos hombres fueron vistos como sujetos que luchaban por justas reivindicaciones, ya fueran de orden personal o colectivo, por ejemplo la legítima defensa ante la persecución de la cual eran objeto por parte de sus contradictores políticos o la defensa de su comunidad ante el asedio de bandas enemigas. Por eso mismo llegaron a ganar y a recibir simpatía y respaldo por parte de los pobladores de algunas regiones. La aparición de los bandoleros se produjo en medio del desconcierto suscitado entre liberales, conservadores y comunistas armados luego de que la organización campesina e insurgente hubiera sido desarticulada, tanto por las amnistías que ofreció el gobierno del general Rojas Pinilla en 1953, como las que luego ofreciera el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo en 1958, así como por efecto de la violencia parapartidista, paraoficial y oficial que obligó a que muchas familias y comunidades se fragmentaran y migraran sin posibilidad inmediata de reagrupación y de reorientación política. Muchos antiguos guerrilleros no solo quedaron con las armas en las manos y sin el vínculo que antaño los ataba a un mando político central, sino que se convirtieron en una suerte de ‘autoridad ilegal’ que operaba como mano justiciera y vengadora en las vastas zonas y regiones en donde desplegaron su accionar.

Esto ocurrió, por ejemplo, con varios insurgentes liberales después de que el oficialismo liberal decidiera promover la desarticulación y la entrega de las guerrillas que ese partido había auspiciado y apoyado desde finales de la década de los cuarenta y durante los primeros años de la década de los cincuenta. Lo propio sucedería con otros hombres que habiendo pertenecido a las guerrillas comunistas decidieron, por razones personales, políticas o ideológicas, hacer de su lucha una causa propia —venganza por asesinato de algún familiar o por el despojo de alguna parcela— o en beneficio de un sector político o económico en particular —líderes políticos o gamonales de la región— valiéndose de las armas y de la formación militar que habían adquirido en sus tiempos de guerrilleros. Fue el caso de Desquite, Pedro Brincos y Sangrenegra, hombres provenientes de Rovira, Líbano y Santa Isabel en Tolima, a quienes las vicisitudes de aquella época de abigarrada violencia unirían en una difusa lucha que no siempre mostraba con claridad los móviles que la alimentaban pero que sí dejaba ver los resultados de las acciones y retaliaciones que ellos y sus contrapartes tomaban en aras de consumar sus particulares propósitos.

Cientos de muertes y actos de violencia extrema protagonizada por los bandoleros no les impedían a muchos de ellos declararse rebeldes políticos. Pedro Brincos, por ejemplo, era militante del comunista Movimiento Estudiantil Obrero y Campesino. Desquite era seguidor del Movimiento Revolucionario Liberal, ala radical del Partido Liberal, y se presentaba como integrante de su brazo armado. Y Sangrenegra manifestaba su apoyo al Partido Liberal, y coqueteaba abiertamente con el MRL, al igual que Tarzán.

Las viejas riñas e inquinas suscitadas y tejidas entre conservadores y liberales alimentaron el accionar y la conducta que aquellos hombres asumieron en dicho contexto. Fue el caso de Efraín González, quien en alianza con los jefes y gamonales del conservatismo se dedicó a perseguir y asesinar liberales en Quindío, Tolima, Boyacá y Santander. Lo mismo ocurrió con Teófilo Rojas, un antiguo guerrillero conocido como Chispas, quien, por el hecho de ser liberal, no solo había tenido que padecer la violencia en carne propia, sino que había visto morir a familiares y amigos a manos de ‘pájaros’ y ‘chulavitas’ en tiempos de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina y Laureano Gómez. Para entonces, el Ejército y la Policía le sindicaban de ser uno de los hombres que más crímenes había cometido en Tolima.

Además de la violencia política, de las diferencias partidistas y de la cruel sed de venganza que alimentaron y nutrieron el accionar de los bandoleros, el lucro económico también constituyó un poderoso aliciente para que muchos hombres terminaran vinculados al accionar delictivo y criminal que durante aquellos años se perpetró en algunas regiones del país. Fue lo que ocurrió con los ‘pájaros’, que operaban en el Valle del Cauca por mandato de los jefes locales y regionales del Partido Conservador, a quienes les pagaban por ‘limpiar’ la zona de liberales o por amedrentar a los opositores políticos. Ejemplos son los de las bandas que se formaron al mando de Tista, Zarpazo, El Mosco, La Gata y otros más que operaron en torno a las zonas cafeteras de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, y cuyo proceder fundamental estuvo orientado por el robo de cosechas, la expulsión de campesinos de sus parcelas y pequeñas propiedades, y por el robo de tierras, del cual se beneficiaban ellos mismos y quienes les pagaban por hacer ese tipo de ‘trabajos’[1].

Organizados en grupos de cinco a veinte hombres —en algunos casos algo más —, e indistintamente de la filiación política y partidista que tuvieran, terminaron convirtiéndose en objetivo militar y contra ellos se desplegó una persecución sistemática que, a largo plazo, arrojaría los resultados que los militares y policías

esperaban —su muerte o captura. Pero al mismo tiempo, significaría reveses para los uniformados, debido a la capacidad de reacción, movilización y escape de los bandoleros, a la impericia que los militares tenían en la realización de ese tipo de acciones, y a su desconocimiento de las zonas en donde adelantaban las operaciones.

Los primeros años de persecución y combate contra los bandoleros resultarían notoriamente adversos para los militares y policías. De acuerdo con las propias fuentes militares, los hechos ocurridos entre finales de 1961 y 1962 ponían de manifiesto las dificultades que los militares tuvieron en un comienzo para enfrentar a los grupos de bandoleros. Según los archivos del Ejército, en tan solo diecisiete acciones acometidas con el propósito de capturar o abatir bandoleros que actuaban en los departamentos de Tolima, Huila y Valle, no solo murieron más de cincuenta oficiales, suboficiales y soldados y más de cuarenta resultaron heridos, sino que se produjo la pérdida de más de sesenta armas largas (ametralladoras, fusiles y carabinas), una considerable cantidad de pistolas, alrededor de medio centenar de granadas, más de cinco mil cuatrocientos cartuchos para armas cortas y largas, y un indeterminado número de implementos de campaña[2].

El 2 de abril de 1962, por ejemplo, un grupo de bandoleros que delinquían en zona rural del municipio de Líbano, Tolima, perpetró una de las más sofisticadas y efectivas emboscadas de las que fueran objeto los militares en aquellos años. No era la primera emboscada de la que eran víctimas los militares y tampoco sería la última. Las operaciones militares que en marzo de 1962 habían adelantado las tropas en esa región contra un grupo de bandoleros que lideraba William Ángel Aranguren, Desquite, no solo habían desembocado en la consumación de varios combates, en la muerte de ocho bandoleros de ese grupo, en la captura de otros cuatro y en la incautación de algunas armas y municiones, sino que habían permitido acopiar valiosa información para los propósitos de los militares.

La información recolectada por los propios militares estimaba que el grupo de bandoleros estaba integrado por cerca de cuarenta hombres armados con fusiles, carabinas y armas automáticas. No obstante, los uniformados no siempre actuaban con la debida precaución y con sorprendente frecuencia caían en las emboscadas que les tendían sus enemigos. Al desplazarse hacia una zona conocida como Santa Teresa, los soldados fueron atacados de manera sorpresiva y contundente; quince de ellos resultarían muertos, otros cinco saldrían heridos y

en manos de los bandoleros quedarían once fusiles, ocho granadas, más de setecientos cartuchos y varias prendas y pertrechos militares[3].

Los militares estaban enfrentándose a un enemigo que hacía la guerra siguiendo unos métodos particulares, para los cuales no parecían estar suficientemente preparados. Las sistemáticas emboscadas, las acciones sorpresivas, la desventaja en el conocimiento del terreno y la impericia en las particulares tácticas de la guerra irregular jugaban en su contra.

Aunque relativamente bien dotados, si se le comparaba con los armamentos e implementos de guerra de los que disponían los bandoleros y guerrilleros, el Ejército colombiano estaba mucho mejor preparado para la realización de acciones y misiones de guerra regular, mas no para la realización de acciones de guerra irregular. Un número importante de oficiales y suboficiales que luchaban contra el bandolerismo y la guerrilla había tenido una buena formación militar, ya fuera porque algunos de ellos habían participado en la Guerra de Corea (1950-1953) o porque habían sido entrenados en la Escuela de Lanceros que se había creado recientemente siguiendo el modelo de entrenamiento militar del ejército de los Estados Unidos, pero aun así los resultados no parecían darse como ellos lo esperaban.

¿Pero cómo sortearon los militares esta situación y a qué tipo de medidas recurrieron para continuar la lucha contra los bandoleros? A propósito de que el presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) catalogó el asunto como un problema de trascendencia nacional[4] y apoyándose en la relativa autonomía que se les otorgó con relación a las cuestiones de orden público[5], los militares entendieron que tenían el respaldo institucional que requerían para seguir actuando en nombre de la ley y de la defensa de la institucionalidad establecida. En tal virtud, mientras que el Gobierno buscaba disuadir a los bandoleros y guerrilleros mediante la implementación de programas sociales y mediante la creación del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), con el ánimo de canalizar y resolver los problemas agrarios existentes en el país, y especialmente en las zonas de conflicto, los militares continuaron desarrollando acciones armadas contra los bandoleros.

El punto de inflexión de la lucha contra el bandolerismo empezaría a gestarse en 1962, y, sobre todo, en las singulares directrices que en esa materia diera el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966): “Cierta atonía moral que principia a presentarse en el país”, decía en su discurso de posesión presidencial,

“le permite creer a las gentes que la responsabilidad del orden público compete exclusivamente a las Fuerzas Armadas de la República y que los ciudadanos corrientes no tienen ningún deber qué cumplir a este respecto. Nada más injusto ni equivocado. No solo las Fuerzas Armadas sino la Nación entera, con todas sus fuerzas vivas, está en el deber de contribuir a extirpar la violencia homicida y criminal de nuestro suelo”[6].

La orientación dada por el presidente Valencia, la sostenida preparación de las unidades militares, las llamadas acciones de inteligencia desarrolladas por los integrantes de la Policía y el Ejército, el pago de recompensas y el involucramiento de población civil como informantes y delatores condujeron a la consumación de los propósitos que las autoridades se habían trazado desde hacía varios años. Tras poner en marcha los planes que los militares habían diseñado para combatir a sus oponentes, el negativo saldo que el Ejército y la Policía venían acumulando empezó a revertirse.

Solo en 1963, los militares y policías lograron dar de baja a más de setenta jefes e integrantes de las cuadrillas de bandoleros. Misterio, Melco, Pielroja, Confite, Topo, Venganza, Alacrán, Pedro Brincos, Perezoso, Cenizas, Diamante, Chispas, Arbolito, Suicida, Pescuezo, Avenegra, Almaroja, Sereno, Caifás, Paticortico y otros tantos bandoleros que operaban y delinquían en distintas regiones del país fueron dados de baja luego de varios años de paciente y persistente persecución y otros más resultaron capturados, juzgados y condenados.

Los militares empezaron 1963 asestando un golpe certero: la muerte de Teófilo Rojas Varón, Chispas. Además de la persecución que los militares habían efectuado en contra de aquel hombre, las pistas e indicaciones otorgadas por un informante cercano al bandolero resultarían de fundamental trascendencia.

Tras saber que Chispas se hallaba por aquellos días de enero en una vereda llamada La Albania, en el municipio de Calarcá, Caldas, los militares emprendieron la marcha hacia el lugar. Lo hicieron desplazándose en horas de la noche a fin de evitar ser vistos por la población, por posibles informantes o por los mismos bandoleros que acompañaban a Rojas Varón. Emboscarlo, tal y como él mismo procedía en sus acciones armadas, fue la estrategia que trazaron los militares. Cuatro patrullas militares, comandadas por un oficial, integradas por once soldados y dos suboficiales cada una, y dotadas con fusiles, ametralladoras, pistolas, granadas y suficiente munición, fueron encargadas de llevar a cabo dicha misión.

Hacia las cinco y media de la tarde del 22 de enero de 1963, las tropas lo avistaron. Vestido con un traje militar perteneciente al Ejército colombiano y acompañado por una mujer y un guardaespaldas, Chispas transitaba por un sendero que comunicaba la finca donde se escondía con la carretera central que conducía al casco urbano del municipio. Unos pocos disparos, efectuados por un tirador escogido, fueron suficientes para abatirlo. Su grupo ya había sido duramente golpeado, pero acabar con su líder era un logro significativo. Una carabina, una pistola, dos granadas y 312 cartuchos le fueron incautados. La colaboración de los informantes, la propaganda promovida contra el bandolero, la autonomía en la realización de la operación y la hábil conducción de las patrullas militares, siguiendo los principios de la táctica contraguerrillera, fueron los elementos claves de aquella operación[7].

El asedio contra los bandoleros no se detendría. Pocos días después de haberse realizado la operación contra Chispas, tropas del Ejército se encargarían de llevar a cabo nuevas operaciones que llevarían al abatimiento de varios bandoleros que operaban y delinquían en límites de los departamentos de Caldas y Tolima. Se trataba del grupo de bandoleros que dirigía Desquite y otro grupo que dirigía Reinaldo Rojas Varón, hermano de Chispas.

El reciente asesinato de catorce campesinos, en el municipio de Génova (28 de enero de 1963) y la masacre de diecisiete personas más en un corregimiento conocido como San Juan (2 de febrero de 1963) eran parte de las acciones criminales que se les había adjudicado a los integrantes de esos grupos, lo mismo que a otra que comandaba Polancho. El temor de que esos bandoleros estuvieran preparando retaliaciones por la muerte de Chispas inquietaba a las autoridades, y por ello mismo habían ordenado realizar patrullajes por toda la región.

El despliegue de operaciones contra los bandoleros se haría cada vez más sistemático. En abril de aquel mismo año, tropas del Ejército darían muerte a Perezoso y Osquitar, dos bandoleros que delinquían en zonas aledañas al municipio de Anserma, Caldas[8]; en mayo, Cenizas y tres miembros de su grupo también serían abatidos en cercanías al municipio de Palmira[9]; en julio morirían Pielroja, Confite y el Topo en una zona rural del municipio de Calarcá[10]; ese mismo mes caerían Venganza, Alacrán y Cantinflas en el municipio de Falán, Tolima; en septiembre, en cercanías a Lérida, Tolima, los hombres abatidos serían Pedro Brincos y uno de sus lugartenientes[11].

Un tiempo después, en zonas aledañas al municipio de Natagaima, Tolima,

morirían todos los integrantes de un grupo de bandoleros que comandaba Gratiniano Rocha o Avenegra II. La misma suerte tendrían Almaroja, Sereno, Caifás, Arrayanales, un hombre identificado como Vicente Afanador y nueve cuerpos más sin identificación[12]. En noviembre, serían abatidos cuatro bandoleros de un grupo que operaba en los alrededores de los municipios de Prado y Dolores, Tolima, y hacia finales de ese mismo año, el 6 de diciembre, dos bandoleros pertenecientes al grupo de Sangrenegra, serían abatidos en zona rural del municipio de Salento, Caldas[13].

Ya en abril de 1964, dos niños que salían de una casa cerca del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, fueron interrogados por una patrulla. "Sí señor, a casa llegaron cuatro individuos armados y están jugando parqués. Mi mamá dice que uno de ellos es Sangrenegra", se lee en el testimonio recogido por los militares. La patrulla rodeó la casa, y pronto se desató un tiroteo. Ave Negra cayó en el lugar, pero Sangrenegra, herido, huyó hacia el pueblo junto con dos bandoleros. La gente no tardó en alertar a las tropas del intento de escape en un bus intermunicipal. En un nuevo tiroteo, Mala Suerte cayó muerto. Pocos minutos después, llegó el turno de Cantinero. El Ejército, con ayuda de perros rastreadores, finalmente halló el cadáver de Sangrenegra en la Serranía de Los Paraguas[14].

Aunque esas y otras tantas operaciones militares acometidas contra los bandoleros tuvieron resonancia en los medios de comunicación, hubo una, llevada a cabo el 9 de junio de 1965, en pleno centro de la capital de la República, que pasaría a la historia tanto por sus objetivos como por su desarrollo y sus resultados. El blanco de las acciones era Efraín González Téllez, bandolero sindicado por el asesinato de un indeterminado número de personas, fugado varias veces del cerco tendido por la Policía y el Ejército y protegido por pobladores y políticos conservadores de su natal región, Puente Nacional, y en Jesús María, Santander.

Varios años de fracasada persecución no habían menguado la intención trazada por los militares para capturar o dar de baja al bandolero, y varios años de lucha sostenida contra sus adversarios no habían amainado la determinación de González para continuar con sus acciones. En tiempos recientes, tropas habían llevado a cabo una sofisticada pero infructuosa operación en el municipio de Gámbita, Santander.

La muerte de su padre, esposa e hijo, tras un combate sostenido con un grupo de

militares en abril de 1961, y las bajas sufridas por las tropas en esa misma ocasión, habían radicalizado la postura asumida tanto por González como la de los uniformados[15]. Aquel estaba decidido a vengar la muerte de sus seres queridos y los militares estaban dispuestos a frenar su accionar delictivo. Muchos muertos había dejado el bandolero a su paso por los departamentos de Quindío, Tolima, Boyacá y Santander. Varios informes elaborados por algunas unidades militares daban cuenta de los movimientos que González había efectuado en los últimos meses, y esos mismos informes permitirían saber que el bandolero se había trasladado adonde, quizá, creyó que podría esconderse: a la propia capital del país.

Datos suministrados por varios informantes serían fundamentales para localizarlo. La posibilidad de que González se hubiera hospedado en una vivienda ubicada en el barrio San José, en pleno centro de Bogotá, alentaba a los militares para proceder de manera perentoria. Pronto estuvieron alistadas la Compañía de Misiones Especiales y el Grupo de Inteligencia de la Brigada de Institutos Militares, lo mismo que un pelotón de la Policía Militar perteneciente al Batallón Guardia Presidencial.

Las tropas debían avanzar inmediatamente, pero de forma cautelosa, hacia el indicado lugar, rodear la vivienda, y evitar cualquier intento de fuga. Cada uno de los cuatro pelotones que integraban la Compañía de Misiones Especiales tomaría posición y control de cada una de las calles y carreras que circundaban la indicada vivienda, mientras que el pelotón de Policía Militar se encargaría de alejar y controlar a los curiosos que se acercaran a la zona.

Pronto, las tropas tomarían posiciones sobre las terrazas y tejados de las casas aledañas. Dos agentes debían ubicarse a la entrada de la vivienda, dos más debían hacerlo por la parte posterior y tres debían hacer el ingreso cautelosamente. Según el plan, una mujer que había servido de informante debía acercarse a la vivienda, golpear la puerta y hacer que esta permaneciera abierta durante el tiempo suficiente para que el Equipo de Asalto pudiera acercarse e ingresar sin mayores obstáculos. Sin embargo, nadie contestó al llamado que la mujer hizo en la puerta; era evidente que González se había percatado de la intempestiva presencia de los militares en la zona y con la misma determinación de otras ocasiones empezó a preparar la contraofensiva y su eventual escape.

Eran las 3:25 p. m. cuando los uniformados iniciaron la operación. Cinco minutos después, los tres integrantes del grupo que debía ingresar a la vivienda

ya se encontraban en su interior. Primero debían requisar cada una de las habitaciones y rincones de la casa. Ya en una ocasión, una omisión de esa naturaleza había significado la fuga del bandolero y esa lección había sido aprendida por los uniformados.

Luego de ingresar, las tropas empezaron a hablar con las personas que se hallaban dentro. Dos mujeres y un hombre estaban siendo interrogados cuando una ráfaga de ametralladora los interrumpió. Uno de los integrantes del Grupo de Asalto había logrado abrir la puerta de una habitación cuando cayó al piso. Otros tres más también fueron impactados por los proyectiles.

Era Efraín González quien había disparado y su acción era más que manifiesta: ni se entregaría ni se dejaría capturar. Casi al instante, y moviéndose con agilidad dentro de la casa, a través de una ventana, González apuntó su arma y disparó contra un soldado que se hallaba en el tejado de una casa contigua. Luego impactó mortalmente a un suboficial que se encontraba en un costado de la vivienda. Tres muertos y tres heridos era el saldo que González había dejado en un par de minutos.

El comandante de la operación ordenó evacuar la vivienda, y al cabo de un tiempo permitió que el dueño de la casa ingresara a buscar a una niña que allí permanecía. Al mismo tiempo, buscó que aquel hombre intentara persuadir al bandolero para que se entregara. Pero todo fue infructuoso. González, quien confiaba en sus capacidades, rechazó la propuesta y se empecinó en continuar su acción.

Había pasado una hora desde que se inició el ataque y nada habían podido hacer los uniformados para neutralizar al bandolero. Tensa era la situación que se vivía fuera de la vivienda y ello mismo obligaba a replantear las acciones que debían tomarse en el instante. Un relevo en la comandancia de la operación se produciría en ese mismo instante y quien ahora asumía esa tarea era el jefe del Estado Mayor de la Brigada, el teniente coronel José Joaquín Matallana.

Su primera decisión fue asaltar la vivienda, lo que fue contestado con ferocidad del bandolero: sus balas dejaron otra víctima mortal. El oficial ordenó entonces lanzarle gases lacrimógenos para obligarlo a salir. Esa idea tampoco surtió el efecto esperado. Al fin, ordenó romper el muro frontal de la vivienda mediante la descarga de varias granadas de mortero, para que los grupos de asalto intentaran hacer su ingreso por tercera vez.

Como en las dos anteriores ocasiones, González descargó sus ráfagas y otro soldado cayó bajo un fuego descargado sin límite de consideración. Habían transcurrido más de cuatro horas desde que se inició el asalto y los costos humanos para los militares eran muy altos. Cinco uniformados habían caído muertos, otros tantos habían tenido que ser evacuados por las heridas recibidas y el bandolero continuaba atrincherado sin haber recibido siquiera una herida que lo inhabilitara para continuar disparando.

El tiempo continuaba su marcha y la oscuridad de la noche tenía que ser contrarrestada con las luces artificiales de los carros de bomberos que habían sido llevados al lugar. Lo mismo se hizo con las luces de los camiones del Ejército y hasta con las lámparas que la Televisora Nacional usaba para sus grabaciones. El comandante de la operación ordenó una nueva arremetida y en esta ocasión la situación fue incluso más adversa para los uniformados. Con todo y que los disparos de mortero habían perforado las paredes frontales de la casa, González mantuvo su retaguardia intacta. Se había atrincherado en la zona media de la vivienda y desde allí había asumido posiciones de combate sumamente efectivas. El intento de ingreso implicaba un riesgo mortal y cada disparo hecho por González así lo ponía de manifiesto. Un suboficial y un soldado más se sumaron a los muertos. Una escuadra de la policía nacional, que también se había sumado a la operación, descargó una considerable cantidad de granadas de gas al interior de la derruida vivienda, pero eso tampoco surtió efecto.

Efraín González se las ingenió para evadir el ataque y para responder. Cuando pocos lo esperaban, el bandolero sacó su brazo por una ventana y disparó su revólver; otro soldado cayó herido. Tan solo unos minutos faltaban para que fueran las ocho de la noche y salió por la parte posterior de la vivienda disparando su subametralladora Madsen. Su decisión fue arriesgada y definitiva. Las balas disparadas por los militares esta vez no fallaron y González se desplomó y con él también cayó el mito de 'hombre invencible' que la gente había construido en torno a su figura.

La larga persecución que durante años le habían hecho las autoridades por fin daba resultados; sin embargo, el costo que se había tenido que pagar para darlo de baja había sido sumamente alto: seis militares muertos y once más heridos era el saldo de la operación. Un total de 53 granadas de mortero, 102 granadas de mano, veinticinco granadas de gas lacrimógeno, cuatro granadas de fusil y 3316 cartuchos de distinto calibre habían sido disparados aquella tarde-noche para lograr el esquivo objetivo[16].

En 1965, las muertes causadas por los bandoleros se estimaban en quinientos, una cifra siete veces menor a la registrada en 1958[17]. Más de cinco años de sostenida lucha contra los bandoleros había dado el resultado trazado por la Fuerza Pública. Tanto la cantidad de bajas causadas como el volumen de material de guerra incautado ponían al descubierto que el Ejército parecía estarse adaptando a una clase de confrontación armada que distaba mucho de su clásica preparación militar y doctrinaria.

De los principios y procedimientos de la guerra regular aprendidos en sus escuelas y de la misma experiencia que muchos de sus integrantes adquirieron en la Guerra de Corea, los militares empezaban a transitar, sin abandonar su clásica formación, hacia una preparación en caliente propia de la guerra irregular. La emboscada, el golpe de mano, el asalto, el pago de informantes, el diseño y la ejecución de labores de inteligencia y la minuciosa preparación de sus hombres para la realización de acciones más cercanas al ejercicio policivo que al militar, daban cuenta de la transformación en curso.

Mientras se producía la aniquilación del fenómeno bandoleril, la insurgencia comunista prontamente se transformaba, lo cual creaba nuevas exigencias para los militares. Lo acaecido en el marco de esta lucha pondría en evidencia las capacidades y las limitaciones que los militares tenían para confrontar a un oponente que ya alcanzaba una manera más sofisticada, organizada y efectiva de hacer la guerra.

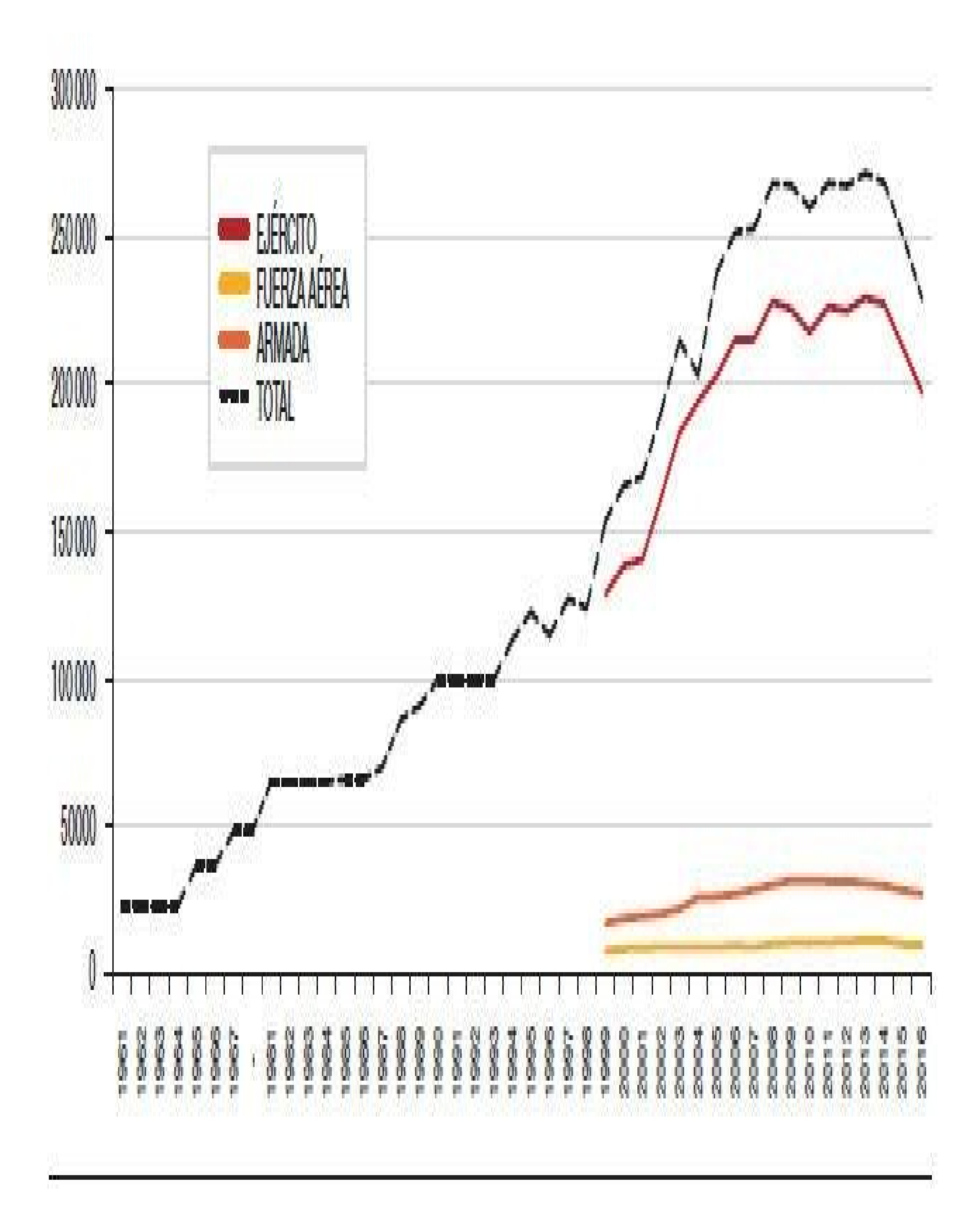
Un nuevo tipo de conflicto

A principios de los años sesenta, el Ejército se planteaba el reto de “aplicar sistemas y modos de la lucha contraguerrillas que evitaran la relativa rigidez de las operaciones regulares”. En su evaluación, consideraba que “así como las guerrillas condicionan su acción a la nuestra, al Ejército le corresponde hacer lo propio: volverse irregular. Es decir, recurrir a procedimientos, sistemas, modalidades flexibles y cambiantes, a la vez que se simplifican y aligeran sus medios, equipo y organizaciones, conservando tan solo aquellos elementos orales, psicológicos y materiales que constituyen una ventaja positiva sobre las fuerzas irregulares”[18].

En medio de este ambiente de adaptación a un nuevo tipo de conflicto, el involucramiento de los militares colombianos en la Guerra de Corea, al igual que su creciente y permanente participación en el control del orden interno, influyó también para que los gobiernos y los altos mandos militares se persuadieran de la importancia y la necesidad de modernizar a las Fuerzas Militares y de Policía. Los testimonios de los militares colombianos que tomaron parte en aquella guerra así lo ratificaron. Tanto la experiencia vivida en el Lejano Oriente, como la observación de la sofisticada dotación y organización logística y operacional del ejército estadounidense, no solo había impresionado a los militares colombianos que participaron en esa contienda bélica bajo el mando de oficiales estadounidenses, sino que había estimulado su deseo de que el ejército colombiano emulara el modelo doctrinario y organizacional del ejército de los Estados Unidos.

Gráfico 1.

TAMAÑO DE LAS FFMM Y COMPOSICIÓN 1961-


300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50000
0
EJÉRCITO
FUERZA AÉREA
ARMADA
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos delMinisterio de Defensa.

Adquirir nuevos y modernos armamentos, optimizar los medios de transporte y comunicación, reorganizar la distribución y operatividad de las tropas y mejorar el entrenamiento de los soldados, debían ser, entre otras tantas cuestiones, los retos que el Ejército colombiano debía afrontar a propósito de los nuevos escenarios políticos, geopolíticos y militares que había generado la Guerra Fría.

Desde 1958, los gobiernos destinaron de manera creciente importantes recursos para el sector defensa con el ánimo de fortalecer la lucha contra la subversión armada. A partir de ese momento, también adquirieron varios helicópteros para el traslado de tropas, modernizaron parte del armamento del Ejército mediante la adquisición de un arsenal de fusiles, fomentaron una industria militar nacional, e incluso adquirieron sofisticados aviones de guerra, pensando en la prevención de eventuales ataques externos.

Pero la modernización de las Fuerzas Militares y de Policía no fue concebida únicamente en términos de su tecnificación y ampliación del pie de fuerza. Además de fomentar esas medidas, tanto el gobierno nacional como la comandancia de la Fuerzas Militares consideraron que para lograr la contención y el eventual ahogamiento de las guerrillas era preciso ‘disputarles’ la popularidad y el apoyo que potencialmente podían recibir de parte de la población civil.

Por esta razón entendían que las acciones institucionales que formalmente le correspondían acometer al Estado en materia de educación, salud, transporte, justicia, seguridad y demás podían estar acompañadas, o ser complementadas, con las acciones que con similar objetivo pudieran desarrollar las Fuerzas Militares. El hecho de que estas fueran, en muchas ocasiones, la única institución a través de la cual el Estado hacía presencia en vastas regiones afectadas por el conflicto fue una cuestión que asumieron como una oportunidad para legitimar la institucionalidad estatal y para contrarrestar la injerencia y el arraigo que las guerrillas pudieran tener y asumir en esas zonas.

Desde 1962, y al amparo de la orientación doctrinal y operacional que el general Alberto Ruiz Novoa había trazado en su famoso Plan Lazo, las diversas unidades tácticas, esto es, los batallones existentes en distintas regiones del país, habían

empezado a implementar acciones cívico-militares con el propósito de perseguir a los grupos armados al margen de la ley —guerrillas y bandoleros—, contrarrestar el apoyo que la población eventualmente pudiera darles, y ganar para su causa la simpatía de los pobladores mediante la implementación de acciones y programas sociales, económicos y cívicos que beneficiaran a las comunidades.

Según lo establecido en el mencionado Plan, el propósito que los militares se trazaron era elemental pero definitivo: "Emprender y realizar la acción civil y las operaciones militares que sean necesarias para eliminar las cuadrillas de bandoleros y prevenir la formación de nuevos focos o núcleos de antisociales, a fin de obtener y mantener un estado de paz y tranquilidad en todo el Territorio Nacional"[19].

En correspondencia con tal propósito, dicha empresa debía ser llevada a cabo, en una primera fase, a partir de la realización de operaciones de rastreo, localización y hostigamiento de los grupos de bandoleros; la creación y el establecimiento de Comités de Coordinación Militar-Civil en zonas regionales y locales; la selección, organización y adoctrinamiento de unidades civiles de autodefensa legal, privilegiando la incorporación de militares y policías retirados y 'personas sobresalientes' de la sociedad que dieran muestras de confianza para la realización de esa tarea, a las cuales se les entregarían armas en momentos críticos; la organización y el entrenamiento de 'equipos de localización' y creación de Centros Conjuntos de Operaciones; la implementación de programas de acción civil —construcción de carreteras, puentes, acueductos, escuelas, centros de salud— a los cuales debía dárseles la misma importancia que se les daba a las operaciones militares; y la organización y el entrenamiento de equipos móviles de inteligencia y operaciones psicológicas.

En un segundo momento, la implementación del Plan debía llevarse a cabo mediante la puesta en marcha de programas de inteligencia positiva y contrainteligencia, es decir, de acciones que condujeran al acopio de toda clase de información sobre la situación en la que se hallaban los bandoleros, sus redes de apoyo, su capacidad de acción y la manera como pretendían actuar ante la presión de las tropas. Dichas medidas debían acompañarse con la implementación de una campaña psicológica con el fin de obtener el apoyo de la población y de hacer que esta se tornara desafecta a los subversivos.

La tercera y cuarta etapa del Plan debían centrarse en la iniciación de las

operaciones de campaña de los Equipos de Localización; el empleo de fuerzas disponibles para el exterminio de los grupos ilegales; el aislamiento de estas de sus fuentes de abastecimiento a través de las medidas de control de la población civil; el desplazamiento de los grupos armados de las áreas pobladas para impedirles el apoyo de la población; la destrucción de las formas de abastecimiento de los subversivos; y la intensificación de medidas y operaciones psicológicas. Finalmente, debía procederse con la implementación de todos los programas que fueran necesarios para generar un ambiente político, social y económico favorable a la población y adverso a los grupos armados[20].

¿Pero cuál fue el balance que los militares hicieron sobre la situación de violencia que se vivía en el país y a qué causas la atribuían? A su juicio, la cuestión hundía sus raíces en la idiosincrasia que desde los pretéritos tiempos de la Conquista había caracterizado a los pobladores del país; en la propensión a cometer toda clase de excesos que solamente podrían ser contenidos con una profunda educación cristiana; en el bajo nivel de vida de los pobladores de muchas regiones del país en donde había déficit de vivienda, alimentación, vestuario, altas tasas de fecundidad, altas tasas de mortalidad, explotación laboral infantil; y en las notorias diferencias entre las clases sociales.

Asimismo, los uniformados consideraban que la violencia, en una suerte de círculo vicioso, también se hallaba alimentada por la creciente tasa de desempleo que se derivaba de la migración forzada de la gente del campo hacia las ciudades, obligándose, por necesidad, a recurrir al pillaje o al robo para poder sobrevivir junto con sus familias. Derivado de lo anterior, el Plan argumentaba que otro de los preocupantes factores que alimentaban y sostenían la violencia era la profunda crisis moral por la que atravesaba la sociedad colombiana, la cual se expresaba en la insensibilidad social, la explotación económica de la violencia, la falta de ética profesional en el desempeño de los cargos, la pérdida de respeto por la vida humana, la honra y bienes de las personas, y la supremacía de lo material sobre lo espiritual.

En relación con los aspectos antes mencionados, los militares argumentaban que la violencia estaba alimentada por el bajo nivel cultural ligado a las altas tasas de analfabetismo; por la dificultad que los jóvenes tenían para formarse profesionalmente, dado el alto costo de la educación; las fallas de la educación privada; los pocos incentivos que había para las personas que pretendían ejercer la carrera pedagógica; la desinformación que generaban los medios de comunicación, deformando los acontecimientos para acomodarlos a

determinados fines; la ausencia de una cultura política o educación cívica, que impedía que las personas se hicieran conscientes de sus derechos, obligaciones, deberes y libertades políticas y electorales, y que, por el contrario, los hacía presa fácil de los extremismos, sectarismos y de la violencia; y por la impronta caciquil y personalista que caracterizaba la política colombiana.

Además de los factores y elementos de orden histórico, sociológico y cultural antes señalados, los militares consideraban que la crítica situación de violencia que se vivía en el país también obedecía a una profunda crisis institucional que se expresaba en la incompetencia e ineptitud de muchos funcionarios públicos que no solo no cumplían con sus funciones y responsabilidades, sino que cohonestaban con los bandoleros en muchas regiones del país; con la manifiesta incompetencia con que el Congreso de la República abordaba los estructurales problemas nacionales, restringiendo sus discusiones a las cuestiones más intrascendentes e inoficiosas del quehacer legislativo; la crisis estructural del sistema de justicia que se expresaba en la parcialización con que se abordaban las investigaciones, los juicios y las condenas; la morosidad en los casos investigados; la impunidad; y la falta de un sistema carcelario adecuado y conveniente a las necesidades que la situación del país demandaba.

La valoración que los militares hacían de la situación de violencia que vivía el país, así como de los factores y los elementos que la determinaban y componían, no terminaba allí. Enmarcados ideológicamente dentro del esquema bipolar que caracterizaba al dividido mundo de la Guerra Fría, los uniformados asumían que el otro gran factor que generaba la violencia en el país era la ideología y el accionar del comunismo.

A este respecto afirmaban que aun cuando hasta el momento esa ideología no había hecho avances significativos, como sí los había logrado en otros países del continente, era indudable que en Colombia esa ideología estaba desarrollándose de manera lenta pero segura, y que ello tenía su mejor expresión en las zonas afectadas por la violencia en las cuales existían células comunistas que mediante su accionar y su furtiva y profusa propaganda buscaban desprestigiar a las instituciones militares del país, infiltrarse dentro de los partidos políticos, manipular las masas trabajadoras y el campo sindical, reeducar a los jóvenes comunistas enviándolos a Alemania Oriental, desprestigiar el Frente Nacional establecido por el bipartidismo, incrementar los frentes guerrilleros y buscar la carestía de la vida para generar la exasperación y la revuelta social[21].

De lo anterior se derivaba que los militares consideraran que el accionar que las células o grupos comunistas realizaban mediante la agitación socio-sindical era la cuestión que más debía preocupar al país, ya que ese factor, a diferencia de lo que ocurría con las guerrillas y con los grupos de bandoleros, no podía ser combatido con medidas militares sino con medidas conjuntas que comprometieran al Estado en la realización de una tarea encaminada a persuadir a los agitadores y a la gente que le seguía de que no había necesidad de hacer una revolución para obtener el mejoramiento de sus condiciones de vida. “Es posible”, indicaba el Plan, “que el movimiento sindical, en caso de que el Gobierno no tome medidas, al entrar de lleno al periodo o etapa de revolución, haga uso de las cuadrillas de bandoleros, aun cuando tal procedimiento le reste altitud al movimiento y aun cuando después del triunfo de la causa vaya a verse la imposibilidad de acabar con elementos bajo todo punto de vista indeseables. De todo esto puede concluirse que la acción contra la violencia no incumbe solamente a las Fuerzas Militares. Debe contemplar, antes que medidas militares, medidas políticas, sociales, económicas, morales y de fomento, de aquellas para conformar una verdadera política de defensa del Estado interior”[22].

Al tiempo que la confrontación armada continuaba desarrollándose, tanto la guerrilla como las Fuerzas Militares diseñaban y ejecutaban estrategias de combate orientadas, en el caso de la insurgencia, a golpear a su oponente, a producir su desmoralización y, en lo posible, a generar la deserción de los soldados; y en el caso de los militares, a enfrentar, someter y derrotar a la guerrilla, confiando en el potencial técnico, armamentístico y logístico con que contaban.

Además de la presión política ejercida por algunos parlamentarios, que desde los estrados del Congreso de la República instigaban la lucha contra las autodefensas comunistas en el sur, la mencionada tecnificación y la preparación que alcanzaron los militares fue otro de los alicientes que persuadieron y orientaron la decisión de planear, implementar y ejecutar la más grande y sofisticada operación contraguerrillera que se hubiera hecho en el país desde que se realizaron los ataques contra las guerrillas comunistas en Villarrica en 1955: la Operación Soberanía Gama de 1964.



Pedro Antonio Marín (sentado) adoptó el nombre de sindicalista Manuel Marulanda y se hizo parte del Partido Comunista. / Foto: Archivos El Espectador.

Notas

[1] Sobre los pormenores del origen, configuración y lógica del bandolerismo véase Sánchez, Gonzalo y Meertens, Donny 1983. Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora Editores.

[2] Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares.

[3] Comando del Ejército 1962a. Caso No. 17. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 196-207.

[4] Alberto Lleras Camargo 1958, palabras pronunciadas al tomar posesión de la Presidencia de la República el 7 de agosto de 1958. En Valencia Benavides, Hernán (compilador) 1983, op. cit., 290.

[5] Histórica e insistentemente citado o referenciado ha sido el discurso que el presidente Alberto Lleras pronunciara en mayo de 1958 en el Teatro Patria de Bogotá en el cual hizo alusión al “natural” deslinde que debía haber entre las jurisdicciones, funciones y misiones de los militares y de los políticos. A su juicio, los militares debían mantener la subordinación, la no deliberación y la

debida obediencia frente al poder civil del Estado, y al mismo tiempo aducía que este no debía injerir en las cuestiones netamente militares de las cuales los uniformados, y solo ellos, debían ocuparse. Véase al respecto Noguera, Aníbal (compilador) 1987. Obras selectas del Alberto Lleras. Tomo VI. Bogotá: Imprenta Nacional.

[6] Guillermo León Valencia 1962, palabras pronunciadas al tomar posesión de la Presidencia de la República el 7 de agosto de 1962, citadas en Valencia Benavides, Hernán (compilador) 1983, op. cit., 312.

[7] Comando del Ejército 1963a. Caso No. 29. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, segunda parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 62-72.

[8] Comando del Ejército 1963b. Caso No. 12. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 136-145.

[9] Comando del Ejército 1963c. Caso No. 26. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, segunda parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 32-42.

[10] Comando del Ejército 1963d. Caso No. 8. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 86-94.

[11] Comando del Ejército 1963e. Caso No. 10. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, primera parte. Bogotá:

Imprenta de las Fuerzas Militares, 105-114.

[12] Comando del Ejército 1963f. Caso No. 39. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, segunda parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 185-196.

[13] Comando del Ejército 1963g. Caso táctico No. 40. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 3-11.

[14] Comando del Ejército 1964. Caso táctico No. 48. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 87-99.

[15] Comando del Ejército 1965a. Caso táctico No. 59. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 227-239.

[16] Comando del Ejército 1965b. Caso táctico No. 72. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 13-33.

[17] Ramsey, Russell W. 1981, op. cit., 318.

[18] Comando del Ejército 1963c, op. cit., 32.

[19] Comando del Ejército 1962b. Plan de Operaciones Lazo, 3.

[20] Ibídem, 3-6.

[21] Ibídem, 10-12.

[22] Ibídem, 13.

Capítulo III

La guerra campesina en el sur

¿Por qué las guerrillas comunistas del sur del país pudieron sobrevivir a la decidida ofensiva militar de los años sesenta? El grupo de autodefensa comunista armada instalado en Marquetalia combatió al Ejército en al menos dos ocasiones entre 1960 y 1962, y debió replegarse en cada caso ante la entrada de tropas en la zona[1]. De manera similar ocurrió con el grupo armado de Ciro Trujillo en la región de El Pato, que se enfrentó al Ejército en 1963. Pese a ello, el posterior retiro de los militares de la zona les permitió permanecer y luego consolidar su dominio territorial. El acumulado armado de los años de la autodefensa comunista le permitía a Manuel Marulanda y a Ciro Trujillo combatir con el Ejército a principios de los años sesenta, antes de verse obligados a desplazarse a nuevos territorios dada la ofensiva militar en su contra desatada en 1964. En particular, regiones como La Uribe, Meta, se convirtieron con el tiempo en los nuevos refugios de fuerzas en fase de acumulación.

Durante los años posteriores a la toma de Marquetalia, la ventaja táctica de las guerrillas de Manuel Marulanda en el uso de la emboscada era evidente. El dominio de dicha táctica en terrenos conocidos por ellos les permitió no solo propinar duros golpes a soldados ignorantes de la geografía local, sino acumular material bélico en la medida que avanzaban sus planes de crecimiento militar.

El uso masivo de la emboscada y la obstinación guerrillera en la formación de cuadros venían acompañados de un refinamiento estratégico significativo. Dejando atrás los años en que se esperaba —y alentaba— el momento de la insurrección popular en las ciudades, para impulsar el triunfo de la revolución comunista, los años sesenta significaron la incorporación sistemática de nuevos mapas generales para ganar la guerra: la guerra popular prolongada, inspirada en la experiencia asiática, y el llamado foquismo[2], como integrador de tácticas guerrilleras de la triunfante insurgencia cubana.

La sofisticación táctica y estratégica de las guerrillas coincide con un momento de declive del interés estatal en la estrategia contenida en el Plan Lazo. En

ausencia ya de un gobierno decidido a atacar las condiciones de surgimiento y pervivencia de los insurgentes, el Estado reducía su plan a un manejo militar que los mismos soldados habían advertido sería insuficiente.

Una vez culminada la toma de Marquetalia, en junio de 1964, el comando del Batallón de Infantería 9, en Planadas, calificó de "un gravísimo error el retiro inmediato de las tropas", dadas las consecuencias "para el destino final de la región"[3]. A partir de entonces, nuevos planes de operaciones prolongaron el trabajo con la población del área, alternando con combates esporádicos y capturas en los meses por venir[4].

En julio de 1964, los militares describían la actitud de la población civil hacia ellos como "de expectativa y recelo debido a los rumores que propaló la cuadrilla de Tirofijo en el sentido de que las tropas entrarían asesinando todas las familias y destruyendo las sementeras". Muchos habitantes se negaban a venderles víveres, como plátanos y yucas, "por miedo a la cuadrilla, la que años anteriores eliminaba a cualquier individuo que se atreviera a abastecer los puestos militares". Tal situación de incertidumbre degeneró pronto en "un recelo mutuo dentro de la población civil, [entre] los que empiezan a culparse unos con otros, tanto [de] participación en la cuadrilla como [de entregar] informes errados a puestos militares sobre posibles bandoleros que nunca lo fueron". En conclusión, "la actitud del personal civil es negativa esencialmente hacia las propias tropas"[5].

El acercamiento de los militares a la población, mediante acciones cívicas, tenía un alcance limitado debido a la incredulidad de la gente. La desconfianza frente al Estado solo empeoraba con la actitud de algunos funcionarios del gobierno nacional, "totalmente indiferentes ante los problemas que viven estas gentes, haciendo caso omiso de sus soluciones con disculpas enteramente incomprensibles"[6].

Hacia finales de 1964, la administración militar de la zona reportaba la creación de almacenes donde los pobladores podían acceder a algunos productos básicos, la construcción de un puente sobre el río Ata, y la adecuación de escuelas, carreteras, pistas de aterrizaje, puestos de salud y redes eléctricas, además de la instalación de una oficina de titulación de tierras. Pese a ello, aún persistía la desconfianza de los pobladores hacia el Estado y sus instituciones[7].

En pleno desarrollo de la Operación Soberanía Gama, los grupos armados de

autodefensa comunista pudieron instalar una asamblea guerrillera el 20 de julio de 1964, la cual proclamó el programa agrario que defenderían las futuras Farc hasta su desmovilización. “Contra nosotros, campesinos revolucionarios del sur del Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca sobre el nudo de la cordillera central, desde 1948 se ha lanzado la fuerza del gran latifundio, de los grandes ganaderos, del gran comercio, de los gamonales, de la política oficial y de los comerciantes de la violencia”, decía su pronunciamiento. “Nosotros hemos sido víctimas de la política de ‘a sangre y fuego’ preconizada y llevada a la práctica por la oligarquía que detenta el poder […] Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen […] La vía pacífica, la vía de la lucha democrática de las masas […] nos fue cerrada violentamente. Y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugamos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”[8].

Según destacaban ellos mismos unos años después, en el Programa Agrario los guerrilleros no solo declaraban su derecho a poseer la tierra en virtud de su condición de trabajadores del campo, sino que plantearon su apuesta por la toma del poder político del Estado en razón del régimen represivo y antidemocrático que habían instaurado las élites bipartidistas mediante el llamado Frente Nacional. La empresa política que se trazaron los insurgentes en aquel entonces era fortalecer el trabajo con las masas; crear un Frente Único del Pueblo, como respuesta al régimen oligárquico impuesto por los liberales y conservadores; operar bajo la lógica de guerra de guerrillas; incorporar las orientaciones políticas dadas por el Partido Comunista, y crear un modelo de autogestión económica que les permitiera su sustento y abastecimiento[9].

“Marquetalia es, pues, el símbolo de esta ya prolongada etapa del movimiento guerrillero moderno en nuestra Patria”, reivindicaban. “Allí mostró la guerrilla comunista de lo que es capaz un núcleo de luchadores revolucionarios con conciencia política, con definición clasista, altivo y beligerante; de lo que es capaz un núcleo de vanguardia, un núcleo armado comunista que pone en el ejercicio de su acción el arte de la guerra de guerrillas móviles. Y fue un reducido núcleo de 45 hombres el que confrontó a dieciséis mil hombres del Ejército”[10].

Agregaban que “antes, y en el curso de la pelea, lanzamos a los cuatro vientos una agresiva y copiosa propaganda explicando el sentido de semejante operación militar contra un núcleo revolucionario calificado de ‘república independiente’

[…] Fue tal el impacto internacional y nacional de nuestra propaganda que un grupo de intelectuales franceses con Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Jacques Duclós a la cabeza dirigieron una carta abierta al gobierno colombiano que es un documento solidario con los resistentes y de protesta contra las clases dominantes del país”[11].

Pese a tal formulación, la Operación Soberanía Gama, que las Fuerzas Militares habían desarrollado contra la retaguardia de la guerrilla comunista que comandaban Manuel Marulanda y Ciro Trujillo en el sur del país, había desembocado en un repliegue estratégico del movimiento armado comunista. De El Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia, los insurgentes se trasladarían hacia el nororiente del departamento de Huila, hacia el norte de Caquetá, el nororiente de Cauca y el suroccidente de Meta. A más de evadir y resistir la sistemática persecución acometida por las tropas del Ejército, los subversivos se replegaron con el ánimo de reorientar su accionar y de definir las acciones político-militares que debían llevar a cabo. En muchos aspectos tenían que empezar de cero: colonizar y adecuar nuevas tierras para el cultivo, levantar viviendas para refugiarse y mantener viva la ideología que habían adoptado.

En los años posteriores a la Operación Soberanía Gama, el Partido Comunista aspiraba a que de su trabajo con las llamadas autodefensas populares, conformadas por iniciativa propia de algunos insurgentes y comunistas en diferentes regiones del país, brotaran sus autodefensas regulares pero “no de manera espontánea, sino siguiendo un plan, una concepción militar. La autodefensa regular se diferencia de la popular de masas porque en el posible enfrentamiento armado operará como guerrilla y no como autodefensa, según lo estipule el plan militar de la regular”[12]. Según indicaba, para que de una autodefensa de masas surja una guerrilla revolucionaria “se requiere que en el seno de la autodefensa se dé el núcleo armado y que ese núcleo disponga de una estructura de mando, de un plan militar, de un conocimiento de la táctica de guerrillas móviles, de un lineamiento de orden estratégico”[13].

Si en 1961 el Partido Comunista hablaba ya abiertamente de la necesidad de combinar todas las formas de lucha, para 1966 evaluaba que al menos en el sur del país “la acción guerrillera se ha convertido en la forma principal de lucha de las masas”. Así, en esa zona “todas las formas de lucha se convierten en auxiliares de la forma principal, la armada”[14].

Luego de su repliegue, y al cabo de unos cuantos meses de reorganización y

planeación política y militar, los núcleos guerrilleros volvieron a entrar en campaña. El primer objetivo de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas[15] fue expandirse regionalmente, creando seis núcleos guerrilleros, y retomar la región de El Pato. Tres núcleos que dirigían Carmelo López, Rogelio Díaz y José de Jesús Rivas debían retomar las zonas de Villarrica, Marquetalia y Riochiquito. A Rigoberto Lozada, Joselo, le encargaron explorar varias regiones de la cordillera central a fin de evaluar las posibilidades de expansión subversiva, mientras que Ciro Trujillo, uno de los más experimentados guerrilleros, debía comandar otro núcleo subversivo destinado a realizar acciones político-militares en Quindío. Ambiciosa era la empresa que aquellos hombres se habían trazado con el ánimo de reposicionar su proyecto político, y para ello tenían que fortalecer su capacidad militar y operacional.

La reaparición de Manuel Marulanda en Inzá, Cauca, con la muerte de diecisiete civiles, en marzo de 1965, le dio nuevas pistas a la persecución militar. Los guerrilleros, ahora reagrupados, lanzaron un ataque a la cárcel del pueblo, y posteriormente atacaron un bus en el que murieron dos monjas[16]. Después de estos hechos, Manuel Marulanda reconocía que "si nuestro prestigio y solidaridad se habían elevado a cien, un acto torpe de irresponsabilidad, de ligereza, nos colocó en cero. Esa es la triste realidad […] Para nuestro pueblo, resulta lo más repugnante, lo más infame el asalto de un bus […] La gente no va a estar en capacidad de comprender esto y simplemente dirá: 'Los de Marquetalia alaraquean con un Programa, dicen cosas muy bonitas, dicen ser los representantes del pueblo y piden solidaridad pero hacen lo mismo que Sangrenegra, Desquite, Efraín González y todos los bandidos'"[17].

En los dos meses siguientes, las tropas fueron víctimas de dos emboscadas en la región del cañón de San Miguel, Huila[18]. En la acción del 14 de abril, los guerrilleros causaron la muerte de un suboficial y heridas de considerable alcance a cinco militares más[19]. Y el 9 de junio, unos treinta guerrilleros vestidos con uniformes camuflados que le habían hurtado a los militares, y armados con fusiles, carabinas, ametralladoras, armas cortas, material explosivo y suficiente munición, esperaron cautelosamente el paso de la patrulla militar que debía relevar a un pelotón, el cual durante los dos últimos meses había estado acantonado en un lugar conocido como La Hacienda.

Desde el mismo momento en que se echó a andar la operación de patrullaje, las fallas se convirtieron en desventajas para los uniformados. El desplazamiento efectuado a plena luz del día y la carencia de baterías para los radios de

comunicación, los pusieron en un riesgo que no tardó en materializarse. Pasadas las tres de la tarde, y después de haber caminado durante unos cuarenta minutos con dirección a su destino, los uniformados fueron sorprendidos con las ráfagas que los guerrilleros descargaron contra ellos: dos soldados murieron al instante y otros dos quedaron gravemente heridos. Tres fusiles, una carabina, un cañón de repuesto y un considerable número de municiones, granadas e implementos de campaña, incluyendo uniformes, menajes y frazadas, quedaron en manos de los atacantes. La pericia de los insurgentes y la excesiva confianza de los soldados volvían a darles el éxito a los guerrilleros y a propinarles un fuerte descalabro a los militares[20]. La emboscada, o técnica de voladura, como triunfalmente lo destacaban los guerrilleros, sería su mejor arma de combate y la ventaja de la cual tendrían que valerse estratégicamente para resistir la superioridad numérica y armamentística del Ejército.

Las tropas, no obstante, seguían intentando vencer al enemigo, no importaban los duros reveses recibidos por parte de las guerrillas. El 12 de junio de 1965, por ejemplo, tropas del Ejército desarrollaron una sofisticada operación militar en zona rural del municipio de Algeciras, Huila, la cual condujo al aniquilamiento de un grupo de guerrilla que operaba en la región y que, según la información acopiada en asocio con las unidades de policía que prestaban sus servicios en Campoalegre y Algeciras, amenazaban, intimidaban y extorsionaban a los campesinos que no 'colaboraban' con el movimiento agrario. Durante varios meses, soldados y suboficiales vestidos de civil habían realizado labores de inteligencia. Su misión inicial consistía en establecer relaciones con algunos pobladores de la región a fin de obtener pistas e informaciones sobre los lugares donde posiblemente se ubicaban los grupos de hombres armados. Valiéndose de los datos acopiados, los uniformados diseñaron su plan de operación.

Cuatro pelotones adscritos se desplazaron hacia una extensa área que comprendía zonas rurales de Algeciras, Toro, La Perdiz, El Quebradón y Rioblanco. Su estrategia consistía en efectuar minuciosos patrullajes, cercar lugares estratégicos en donde se presumía estaban acantonados los guerrilleros para tender emboscadas y dar golpes de mano. El avance de la tropa debía llevarse a cabo en horas de la noche; la niebla, elemento atmosférico característico de aquel montañoso lugar, debía aprovecharse para infiltrarse en la zona procurando no ser detectados, y la comunicación radial entre los pelotones debía mantenerse de manera permanente.

El 11 de junio de 1965, hacia las 4:00 p. m., y tras haber realizado un extenso

recorrido sorteando los naturales obstáculos que tenía la región, las tropas avistaron una pequeña casa campesina rodeada de matorrales, arbustos y espesas vegetaciones. En torno a ella tendieron un cerco. Se sorprenderían al comprobar que justo allí se encontraba Marco Antonio Díaz, jefe de la guerrilla que operaba en la región y que para capturarlo no fuera necesario hacer ni un solo disparo. Pocas veces había sucedido una situación como esta. Persuadido por los uniformados, el hombre capturado no solo prometió entregar a los integrantes de su grupo, sino que se comprometió a delatar al grupo que comandaba Rapidol, hombre con el que supuestamente iba a unirse para fortalecerse mutuamente. El pacto entre los militares y el hombre capturado fue definido: los uniformados harían lo pertinente para que a Díaz se le conmutara la pena que debía pagar por los delitos que se le imputaban a cambio de que este diera la información necesaria que permitiera la captura de los otros subversivos.

Pactado el asunto, Díaz partiría con su grupo hacia un lugar en el que supuestamente se encontraría con el grupo de Rapidol. Las tropas, por su parte, debían preparar una emboscada en un sitio y hora determinados previamente por el capturado. Allí debía efectuarse la captura de los guerrilleros delatados. Sin embargo, nada de lo pactado sucedió; Díaz no se presentó en el lugar indicado y el comandante militar de la operación tampoco preparó la emboscada en el lugar en donde, se suponía, debía efectuarse. Percatado del engaño en el que podía caer, el oficial que comandaba la operación decidió tender la emboscada en un lugar que de seguro sería utilizado por los subversivos cuando intentaran huir: un enorme tronco que servía como puente para atravesar un río que cruzaba por el lugar. Allí esperaron durante todo el día de aquel 12 de junio. Hacia las 8:00 p. m. los guerrilleros aparecieron. Al instante, los uniformados dispararon y Díaz más cuatro de sus lugartenientes cayeron muertos[21].

Diversas operaciones militares se ejecutarían con sistematicidad durante aquellos años. Patrullas del Ejército recuperaron en junio de 1965 el rastro de “huellas de gente calzada y descalza, restos de víveres abandonados — maíz, fríjol, papas—, latas de sardinas, cajetillas de cigarrillos con estampillas del Cauca, dos platos esmaltados y un pocillo, un poncho negro en mal estado y varios pares de zapatos tenis”. Los guías civiles no deseaban continuar por desconocer el terreno, pero uno aceptó continuar en la dirección de rastreo hacia Riochiquito. En el camino encontraron treinta caletas, cada una con capacidad para hasta cinco personas, cuarenta fogones pequeños, restos de una máquina de coser, hachas, antibióticos. El rastro finalmente se perdía a lo largo de una quebrada[22].

Un documento preparado por los guerrilleros entre el 12 y el 15 de julio de 1965, y transcrito por las Fuerzas Militares, definía que “el movimiento armado de Marquetalia es una agrupación guerrillera que se guía por la estrategia y la táctica del Partido Comunista [y] su estrategia culmina con la toma del poder por el pueblo”. Paro ello, “planteamos la necesidad inmediata de unir todas las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas del país en el más grande frente único de todos los colombianos que tengan contradicciones con el imperialismo y con la oligarquía dominante en nuestro país para derribarlos del poder e instaurar un gobierno que realice una reforma agraria revolucionaria antifeudal y libere a Colombia de la coyunda de los grandes opresores norteamericanos”[23].

Este documento determinaba que habría “una sola dirección político-militar” al mando del movimiento armado, la organización partidista y el movimiento de masas de forma simultánea[24], y que “de hoy en adelante el camarada Manuel no participe directamente en los combates con el enemigo”. También prescribía que una comisión se encargaría de elaborar “un plan de estudio y capacitación política de todo el cuerpo armado, así como de enseñar a leer y escribir a los camaradas que no saben”[25]. El documento ordenaba la instrucción de táctica de guerra de guerrillas para ser implementada por “oficiales y suboficiales” guerrilleros, y recomendaba a los guerrilleros “autoeducarse en el espíritu colectivista, esto es, en la propiedad colectiva mientras estemos en este tipo de movimiento guerrillero donde no puede haber cabida para la propiedad individual”. Como guía de conducta con la población civil, amenazaba con sanción el maltrato, los negocios ventajosos, el uso de “palabras indecentes”, la violación de mujeres, la “chismografía”, la embriaguez, el escándalo, negarse a pagar deudas — “a las masas no se les podrá quitar ni una hebra de hilo sino todo lo que ellas presten devolvérselo, o si llegare a dañarse, pagarlo”— y el homicidio, excepto en el caso de “ajusticiamiento de ‘sapos’ y colaboradores de las fuerzas represivas”. Internamente, habría sanción a actos de irrespeto, chistes indecentes, uso de apodos, falta de solidaridad, juego de dinero con cartas o dados, el fingimiento de enfermedades, así como la “traición consciente o inconsciente”, entre otras causales determinadas en el régimen de disciplina. Las sanciones variaban desde un llamado de atención hasta el destierro y el llamamiento a un consejo de guerra, que podría terminar en fusilamiento para los casos más graves de indisciplina. Ese mismo año, el movimiento liderado por el núcleo comunista de Marquetalia se rebautizó como Bloque Sur.

De nuevo, en octubre de 1965, las tropas se lanzaron contra los guerrilleros de

Manuel Marulanda, quienes habían buscado agruparse con la autodefensa de Ciro Trujillo en la zona de Riochiquito. Ambos jefes eludieron el ataque militar y, junto con más de un centenar de combatientes, con familias y algunos simpatizantes "se desplazaron hacia el norte en busca de Marquetalia y zonas selváticas adyacentes, evitando toda posibilidad de contacto con las tropas, excepto algunos secundarios de distracción"[26].

Durante la persecución, los militares pudieron establecer el apoyo del Partido Comunista a los guerrilleros con "armas, municiones, vestuario y propaganda", a través de sus comités en Neiva y Natagaima, así como "la entrada en varias oportunidades (antes de las operaciones militares) de dirigentes políticos e instructores de guerrillas"[27].

Un total de 1474 soldados conformaban la Fuerza de Tarea encargada de perseguir a la guerrilla de Manuel Marulanda desde mediados de 1965, sin contar una unidad adicional de apoyo terrestre y una más de apoyo aéreo[28]. Pese a ello, la inteligencia evaluaba que tal estrategia, meramente militar, no solo ponía al límite los gastos de las Fuerzas, su capacidad de abastecimiento y el nivel de desgaste de los soldados, sino que en ausencia de una estrategia estatal de trabajo con la población hacía más difícil asegurar el apoyo y la información requerida para dar un "resultado decisivo"[29].

Un nuevo intento por culminar la tarea iniciada en la Operación Marquetalia se dio en septiembre de 1965, con la ofensiva en el área de Riochiquito, Cauca. La idea era ocupar "gradualmente puntos críticos de la periferia hacia el centro, con el doble objeto de dominar dicha zona y engañar al enemigo sobre el propósito de la operación"[30]. Sin embargo, la reunión de los guerrilleros, en marcha en esa región durante ese mes, igualmente pudo realizarse.

En mayo de 1966 surgió una nueva oportunidad de coordinación guerrillera. El entonces Bloque Sur recogió los informes de distintos grupos guerrilleros, tales como el denominado Veintiséis de Septiembre, y los movimientos de Marquetalia, Riochiquito y El Pato, para unificar sus posturas alrededor de una guerrilla refundada alrededor de un nuevo nombre: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En noviembre de 1966, recién fundadas las Farc, una nueva emboscada golpeó a las tropas que las perseguían, esta vez en La Cuchilla de San Pablo, Tolima. En ese momento, el rastro de Manuel Marulanda se perdió una vez más. Las

Fuerzas Militares acudieron a los censos de población para vigilar los movimientos de sospechosos en la región y dificultar el abastecimiento de víveres para los guerrilleros[31]. Durante el día, los soldados esperarían ocultos en posición de emboscada y patrullarían durante la noche, para dar la sensación de reducción de la ofensiva militar.

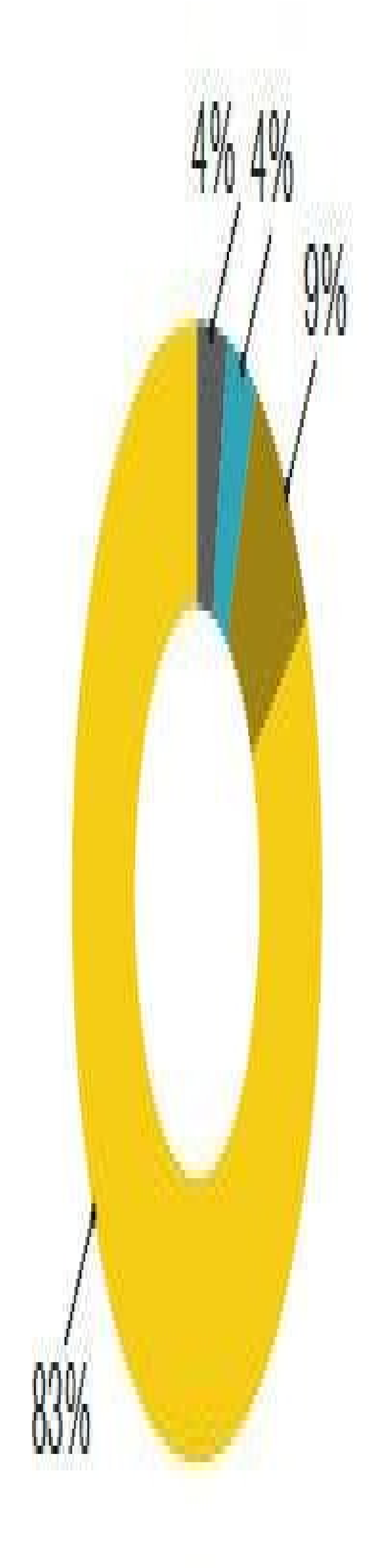
Gráfico 2.

ACCIONES ARMADAS FARC Y GUERRILLAS CAMPESINAS 1955-1980

Las guerrillas comunistas y las Farc se caracterizaron en este período por ejecutar un gran número de emboscadas y asesinatos, y sufrir numerosas bajas y capturas.

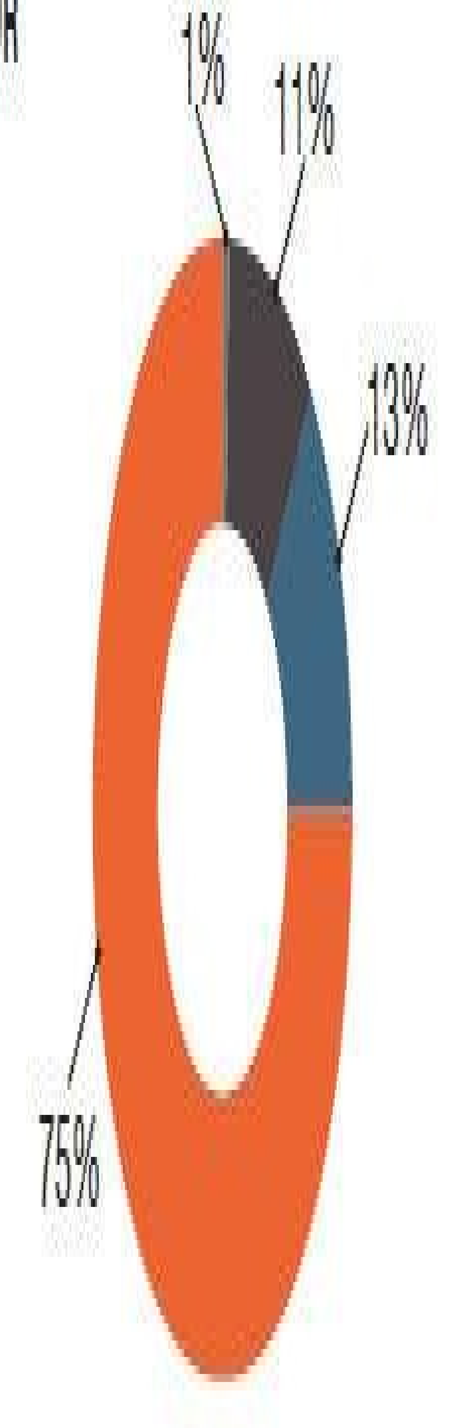
INICIATIVA FARC Y GUERRILLAS DEL SUR

	TOTAL
EMBOSCADAS	110
GOLPES DE MANO	12
ATAQUE CON EXPLOSIVOS	5
ASALTO A BASES DE PATRULLAJE	5



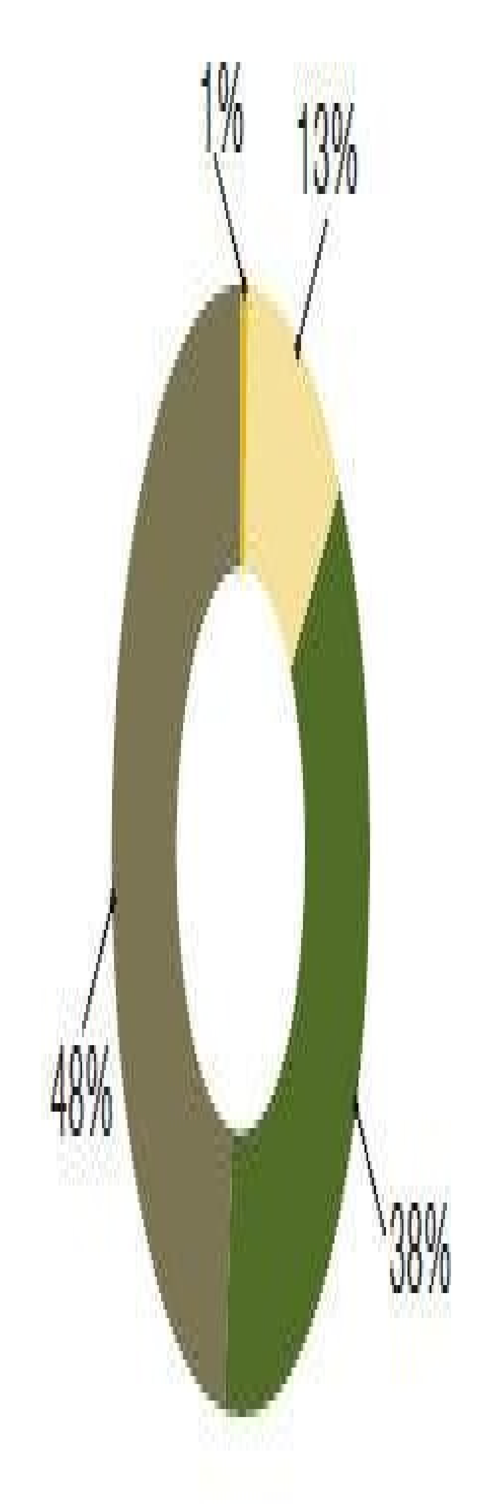
AFECTACIÓN A POBLACIÓN POR FARC Y GUERRILLAS DEL SUR

	TOTAL
ASESINATOS CIVILES	664
SECUESTROS	119
ATAQUES A POBLACIONES	94
ASALTO A BANCOS	9



INICIATIVA FFMM CONTRA FARC Y GUERRILLAS DEL SUR

	TOTAL
BAJAS	409
CAPTURAS	323
COMBATES	113
DESMOVILIZACIONES	8



Fuente: Elaboración propia con datos de Comando del Ejército 1979, 1980, 1981 y 1982. Apreciaciones de inteligencia.

Una nueva patrulla fue destinada a la zona de operaciones el 1.o de febrero de 1967; su desplazamiento debía efectuarse en horas de la noche y durante el día debían acantonarse e instalar puestos de observación. Así procedieron los oficiales y suboficiales que comandaban la tropa. Sin embargo, y luego de unas cuantas horas de extenuante marcha, el comandante de la patrulla decidió dividirla en dos grupos. Su propósito era avanzar con la mitad de los soldados, mientras que la otra mitad, al mando de un suboficial, cuidaría la retaguardia para luego continuar la marcha hacia el amanecer. La orden fue clara, pero desobedecida. Luego de haberse detenido durante algunas horas, el suboficial que comandaba la sección encargada de la retaguardia emprendió la marcha y sobrepasó al grupo que comandaba el oficial encargado de la operación. La distancia entre las patrullas, la excesiva confianza de los cuadros que comandaban la operación y la manifiesta desobediencia con que asumieron las órdenes dadas por el comando del batallón, desembocaron en el más fatídico de los episodios que los uniformados hubieran podido esperar aquel día.

Hacia las 3 p. m. del 3 de marzo de aquel año, la patrulla fue emboscada. Armas largas y cortas fueron accionadas por doquier al paso de la patrulla; los soldados cayeron al instante y al cabo de unos cuantos minutos se avizoró la lamentable escena: dieciséis de los veinticuatro hombres que integraban la patrulla perecieron tras el ataque; cinco más quedaron gravemente heridos y los tres restantes apenas pudieron escapar del cerco. Sin resistencia alguna, los cuerpos y los armamentos de dotación quedaron a expensas de los insurgentes. Los guerrilleros se apoderaron de un formidable arsenal de guerra: nueve fusiles, tres ametralladoras, dos carabinas, dos pistolas, diecinueve granadas, más de mil trescientos cartuchos y un voluminoso y variado material de intendencia quedó en manos de los asaltantes.

La estrategia de tomar las armas y los pertrechos de los soldados había sido una práctica constante de los guerrilleros y en esta oportunidad los insurgentes no vacilaron en apropiarse de ese portentoso botín[32]. Lo sucedido en aquellos años puso de manifiesto que las organizaciones guerrilleras habían adoptado una paciente pero efectiva estrategia de espera y ataque. Sin contar con un

voluminoso pie de fuerza, pero diestra en la realización de emboscadas, las guerrillas empezaron a afianzar su injerencia en distintas regiones del país y su capacidad de control territorial se amplió paulatinamente en el marco de una estrategia que fue construyéndose e instituyéndose al calor de la propia lucha armada.

Pocos meses después, entre septiembre y octubre de 1967, un nuevo intento por capturar o dar de baja a Manuel Marulanda y a Ciro Trujillo se desvaneció en la región de La Francia, Meta, junto al río Duda. Las guerrillas escapaban gracias al auxilio prestado por los pobladores de la zona. “La totalidad de la población de la zona era adicta por convicción o por temor a la fuerza insurgente”, evaluaba el Ejército. El escape de los jefes guerrilleros, una vez más, se explicaba por el “perfecto adoctrinamiento comunista de los habitantes de la zona”[33].

“Para entonces”, decía Marulanda refiriéndose al horizonte de acción que se le impuso a la guerrilla después de los sucesos de Marquetalia, “ya estaba quedando superada la etapa en que el enemigo nos perseguía incesantemente para producirse el fenómeno de que somos nosotros los que proponemos los contactos armados cuando y donde nos interesan. Los cercos de control que trataban de mantenernos alejados del pueblo y el servicio de inteligencia, para detectar nuestro trabajo, lo mismo que los efectos de la guerra sicológica, necesitaban ser neutralizados y la Conferencia [guerrillera] adoptó todo un sistema de actividades que nos han venido reportando resultados excelentes”[34].

Pese a ello, en operaciones desarrolladas entre septiembre y octubre de 1968, los militares dieron un golpe certero a las nacientes Farc. Luego de haber conformado e instaurado su núcleo guerrillero en Quindío, y tras haber llevado a esa misma zona a los núcleos que habían organizado Carmelo López, Rogelio Díaz y José de Jesús Rivas, la guerrilla, al mando de Ciro Trujillo, sufrió uno de los más duros reveses de su historia.

Aunque las cifras relativas al número de guerrilleros que perdieron la vida a raíz de las operaciones que el Ejército lanzó contra los núcleos guerrilleros no fueron reveladas ni por los militares ni por los insurgentes, estos últimos reconocían el duro revés que el accionar de las Fuerzas Militares les había generado. Después de rebautizarse como Farc, en 1966, “Ciro Trujillo convocó a todos los destacamentos, con excepción de Joselo y el de Manuel [Marulanda] y se concentró con la fuerza en el Quindío, no se sabe para qué. Pronto la fuerza fue

detectada por el Ejército, quien se lanzó sobre ella, pero como no había plan militar para una fuerza concentrada, sino planes para operar como destacamento, ni idea clara de la guerra de guerrillas móviles, la fuerza nuestra se replegó desorganizadamente y cada combatiente salió en busca de protección de masas y terreno. Perdimos muchos hombres y el setenta por ciento de las armas […] El comandante Ciro fue un buen cuadro y un hombre valiente y audaz, pero no tenía idea de la táctica militar de guerrillas”[35].

Según Marulanda, el golpe había obedecido a la confianza con que Ciro Trujillo actuó frente a un oponente que cada vez mostraba más decisión y capacidad para doblegar el accionar subversivo; al adormecimiento con que aquel había actuado en lo relativo a la organización de guerrillas móviles; y a la desmedida confianza que había tenido en cuanto al carácter reactivo, que no ofensivo, del Ejército. El descalabro para la insurgencia había sido, ciertamente, de muy alto grado: un incontable número de hombres recientemente incorporados a las filas y la pérdida de un voluminoso arsenal de combate había debilitado sustancialmente el accionar de las Farc y sus posibilidades inmediatas de expansión en esa región del país.

Posteriormente, y tras una larga y persistente persecución en varias regiones de los departamentos de Tolima, Meta y Boyacá, caería el propio Ciro Trujillo. La persecución se había extendido por vastas zonas del centro y el sur del país. Más de tres años de operaciones habían resultado infructuosas para los uniformados, pero su persistencia finalmente daría resultados. Los jefes de las Farc se habían dispersado por distintas regiones del país y Ciro Trujillo se había movilizado hacia los Llanos Orientales y zonas alejadas del departamento de Boyacá.

Las áreas rurales del municipio de Aquitania, Boyacá, estaban entonces bajo la influencia del Partido Comunista. Desde junio de 1968, Ciro Trujillo lideraba allí un frente de las Farc y estaba dedicado al “adoctrinamiento subversivo a campesinos en reuniones denominadas Asambleas”, así como “Organización de células comunistas campesinas”, “organización de grupos de auto-defensa campesina”, “repartición de propaganda subversiva entre los campesinos”, “organización de enlaces con las poblaciones urbanas”, y “organización armada y de comunidades por radio”. Al tiempo, el Ejército intentaba hacer presencia, entre otras cosas, para desarrollar acciones cívico militares y buscar la “eliminación de grupos infiltrados en el área”[36].

Previamente al desarrollo de la operación que conduciría a la muerte de aquel

jefe guerrillero, los militares habían determinado que en las zonas rurales los insurgentes habían estado fomentado la “propaganda comunista” y haciendo esfuerzos para reclutar hombres para su organización. Por las acciones de la Policía y del Ejército, las autoridades habían efectuado capturas y acopio de información sobre redes de apoyo y desplazamientos, al igual que rutas de abastecimiento de los subversivos.

En julio, “surgió el rumor de la presencia en el área mencionada de dos sujetos desconocidos en la región, uno al parecer era Ciro Trujillo (a. Mayor Ciro); también al parecer se encontraba Manuel Marulanda Vélez (a. Tiro Fijo)”[37]. Los militares empezaron a diseñar un complejo dispositivo de operaciones, y el comandante de la Primera Brigada ordenó actuar con total sigilo hasta dar con la ubicación exacta de Trujillo. Los soldados debían determinar con precisión las áreas de operaciones de cada una de las unidades militares y policiales que debían intervenir, asegurando el contacto permanente entre todas. Mientras desarrollaban este cerco, los patrullajes de rigor continuarían, a fin de no despertar sospechas entre los informantes y simpatizantes de la insurgencia.

El seguimiento de las órdenes se efectuó de manera detallada y el cerco que finalmente se tendió para capturar a Trujillo empezó a estrecharse. En la madrugada del 15 de septiembre de 1968, un equipo de contraguerrillas avanzó hacia El Morro, un corregimiento del municipio de Aquitania. Allí se encontraba su objetivo. El sigiloso avance de las tropas, no obstante, fue delatado por el ladrido de los perros que custodiaban la casa en donde se hallaba Trujillo. Pronto se desató el cruce de disparos y, para desconcierto de los uniformados, Trujillo logró escaparse. Varios días transcurrieron para que las tropas volvieran a saber del paradero del guerrillero y cuando se dispusieron a capturarlo, esta vez en el corregimiento de Macanal, Aquitania, el guerrillero volvió a fugarse. Su capacidad para escabullirse, guardadas todas las proporciones, parecía recordar la capacidad de fuga que en su momento había tenido Efraín González. A pesar del impasse, la persecución continuó desarrollándose. Patrullajes, controles de vías, infiltraciones, retenes e indagaciones hicieron parte de la extensa y sostenida operación desplegada por los uniformados. Mómbita, una jurisdicción del municipio de Aquitania, fue el lugar hacia donde las autoridades dirigieron su atención. La información recolectada entre pobladores de la región les indicó que allí se encontraba Trujillo.

Era la madrugada del 5 de octubre de 1968 cuando los militares se aproximaron al lugar en Aquitania en el que efectivamente se refugiaba el líder guerrillero.

Tras identificar una casa donde se encontraba Trujillo y otros tres individuos, la rodearon. En ese momento, de nuevo unos perros delataron la presencia de tropas, y cuatro guerrilleros salieron en desbandada abriendo fuego. Tres de ellos fueron dados de baja, incluyendo a Ciro Trujillo.

Si bien las Farc habían logrado sobrevivir a la ofensiva militar de los años sesenta, a la vez mostraban los límites de la estrategia de acumulación de fuerzas adoptada por el Partido Comunista. Los reveses de los años sesenta ponían en duda sus posibilidades reales de éxito, y quienes no estaban convencidos de la idea del Partido de esperar y fortalecerse mientras no estuvieran dadas las condiciones favorables para la toma del poder se inspirarían en el modelo cubano para intentar otra forma más expedita de subvertir el Estado. Eran tiempos en que la revolución cubana sembraba en una nueva generación de comunistas la idea de que el momento era propicio para pasar a la ofensiva y en definitiva lanzarse a la toma del poder.



Patìo Rimento, fra Minuti

di Calvacurì del Comun=

cuent del padre

Camillo Tami..

El sacerdote Camilo Torres poco antes de su ingreso a la guerrilla del ELN en 1966. Su pipa fue encontrada por el Ejército dentro de los implementos que portaba el día de su muerte. / Fotos: Archivo El Espectador y Quinta Brigada.

Notas

[1] Farc 1979a. Ponencia del Secretariado del Estado Mayor Conjunto en la celebración del XV aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, 27 de mayo.

[2] El guerrillero argentino Ernesto Che Guevara teorizó que con la creación de un pequeño foco guerrillero que enfrentara a un ejército oficial sería posible estimular a la población a levantarse en contra del Estado, generando así una insurrección revolucionaria y un cambio de gobierno.

[3] Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964c. Posibilidad retiro inmediato de tropas. Planadas, Paraíso, Tolima, 25 de julio.

[4] Entre el 28 de mayo y el 28 de junio de 1964, las tropas reportaron la captura de sesenta personas —de las que fueron liberadas veinte— y la baja de nueve subversivos. Después de la Operación Marquetalia, se ejecutaron otros planes de operaciones hasta finales de diciembre tales como los denominados Seguridad, Vigilancia, Peine, Colador, Fumigación, Cernidor, Esfuerzo, Registro, Integración, Ocupación, Protección y Cometa, con los que se pretendía asegurar el control de la zona, proteger a la población campesina e indígena de ataques armados, ganarse el apoyo de la gente y aprehender a Manuel Marulanda y Ciro Trujillo. Véase Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964d. Anexo al plan de operaciones 7 Vigilancia. Ataco, Tolima, 13 de junio; Rodríguez, José

Jaime 1964, op. cit.; y Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964b. Resumen del Batallón de Infantería Nueve Boyacá, 9-12.

5 El Ejército calculaba que, previamente a la acción militar del 19 de mayo, unas setecientas personas habían salido desplazadas del área. Véase Comando Sexta Brigada 1964a. Apreciación de asuntos civiles. Ibagué, 11 de mayo, 2; y Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964e. Actitud de la población civil en el área. Planadas, Paraíso, Tolima, 25 de julio, 1.

6 Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964f. Actividades de Gobierno en la zona. Planadas, Paraíso, Tolima, 25 de julio, 1.

7 Comando Batallón de Infantería Nueve Boyacá 1964g. Apreciación de asuntos civiles y gobierno militar. San Miguel, Tolima, diciembre, 3, 6.

8 Declaraciones citadas en Farc 1979a, op. cit.

9 Bloque Sur 1966. Informe de Marquetalia y Riochiquito a la segunda conferencia del Bloque Sur.

10 Farc 1979a, op. cit.

11 Ibídem.

[12] Ibídem.

[13] Ibídem.

[14] Informe del X Congreso del Partido Comunista 1966, citado en Editorial 8 de junio 1975, ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir? Extractos de la revista Proletarización 11, julio de 1975, 176-177.

[15] Luis Alberto Morantes, miembro del Partido Comunista asignado a las Farc, y número dos de la organización guerrillera.

[16] Según el Ejército, setenta guerrilleros al mando de Manuel Marulanda y cincuenta más de Ciro Trujillo atacaron Inzá, Cauca, con el fin de aprovisionarse de armas, dinero y vestuario. Véase Comando Sexta Brigada 1965b. Resumen No. 9 complementario del informe periódico de inteligencia No. 11. Neiva, 4 de diciembre, 2.

[17] Marulanda, Manuel 1968. Documento autocrítico del Movimiento Guerrillero de Marquetalia.

[18] Una tercera emboscada se produjo en julio, en La Araña, Huila. Estas emboscadas las producían grupos de unos veinte hombres. Véase Comando Sexta Brigada 1965a. Apreciación de inteligencia 4, Neiva, 25 agosto, 13-14, 18.

[19] Comando del Ejército 1965c. Caso táctico No. 63. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte.

Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 273-285.

[20] Comando del Ejército 1965d. Caso táctico No. 68. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 327-336.

[21] Comando del Ejército 1965e. Caso táctico No. 69. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 337-348.

[22] Comando del Ejército 1965g. Caso táctico No. 63. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 273-285.

[23] Asamblea General Guerrillera 1965. Conclusiones de la Asamblea General Guerrillera realizada los días 12-13-14 y 15 de julio.

[24] El documento expresa que “la política del movimiento revolucionario de Marquetalia es la política del Partido Comunista contenida en su Declaración Programática, en la Resolución Política del Noveno Congreso y en las Conclusiones de los Plenos 27-28-29 y 30”.

[25] Ibídem.

[26] El Ejército reportaba que junto con Marulanda y Trujillo se encontraban los grupos comandados por Joselo y Tarzán. Comando Sexta Brigada 1965c. Anexo

A de informaciones a la Orden de Operaciones 11, Plan Cometa segunda fase, 15 de octubre.

[27] Comando Sexta Brigada 1965a, op. cit., 20.

[28] Comando Fuerza de Tarea Sexta Brigada 1965. Apreciación de personal 1. Orden de operaciones 9, Neiva, 24 de agosto, 1-2.

[29] Comando Fuerza de Tarea Yunque 1965. Apreciación de situación del área SW del Tolima y NE del Huila. Neiva, 27 agosto, 6.

[30] Comando Sexta Brigada 1965d. Plan de Operaciones Cometa BR6. Ibagué, 7 de septiembre, 2.

[31] Comando Sexta Brigada 1966. Orden de operaciones 1, Plan de Operaciones Cometa, tercera fase. Neiva, 5 de enero, 4.

[32] Comando del Ejército 1967. Caso táctico No. 74. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 49-64.

[33] Comando del Ejército 1973a. Guerrillas y contraguerrillas. Caso de contraguerrillas. Operación Júpiter. Documento inédito.

[34] Marulanda, Manuel 1973. Cuadernos de Campaña. Sin ciudad: Ediciones Abejón Mono.

[35] Farc 1979a. Ponencia del Secretariado del Estado Mayor Conjunto en la celebración del XV aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, 27 de mayo.

[36] Comando del Ejército 1968. Caso táctico No. 76. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 73-90.

[37] Ibídem.

Capítulo IV

La guerra de los estudiantes del Che: el primer ELN

La Revolución Cubana de 1959 sembró en una nueva generación de comunistas la idea de que el momento era propicio para pasar a la ofensiva y, en definitiva, lanzarse a la toma del poder. Desafiando el planteamiento del Partido Comunista de que en el país aún no había condiciones objetivas para la revolución, ni un adecuado trabajo de organización de las masas, una nueva generación de líderes de las Juventudes Comunistas (Juco), las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL) —ala radical del Partido Liberal—, y del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (Moec) viajaron a Cuba con la intención de aprender de la experiencia de una revolución hecha en años, y no en décadas.

Los archivos militares fechados entre 1965 y 1975 permiten presentar en detalle las acciones armadas de la época y los aprendizajes del naciente Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo se caracterizó en esos años por su capacidad para disputar inicialmente el apoyo de la población a las autoridades civiles y militares en Santander, y a la vez por su incapacidad para responder al masivo despliegue de tropas que hicieron de esta guerrilla su blanco principal, tras la toma de Marquetalia en el sur del país. Esta ofensiva militar, apoyada en ambiciosas acciones cívicas en términos de vivienda, vías y salud, le permitió a las Fuerzas Militares generar una asfixia territorial en el ELN que, al optar por desplazarse hacia el oeste, sucumbió al cerco militar en una zona en la que carecían de arraigo. Las acciones mediáticas, los secuestros y el asesinato de policías y militares atrajeron la atención hacia este primer ELN desde finales de los sesenta, hasta llevarlo a la debacle.

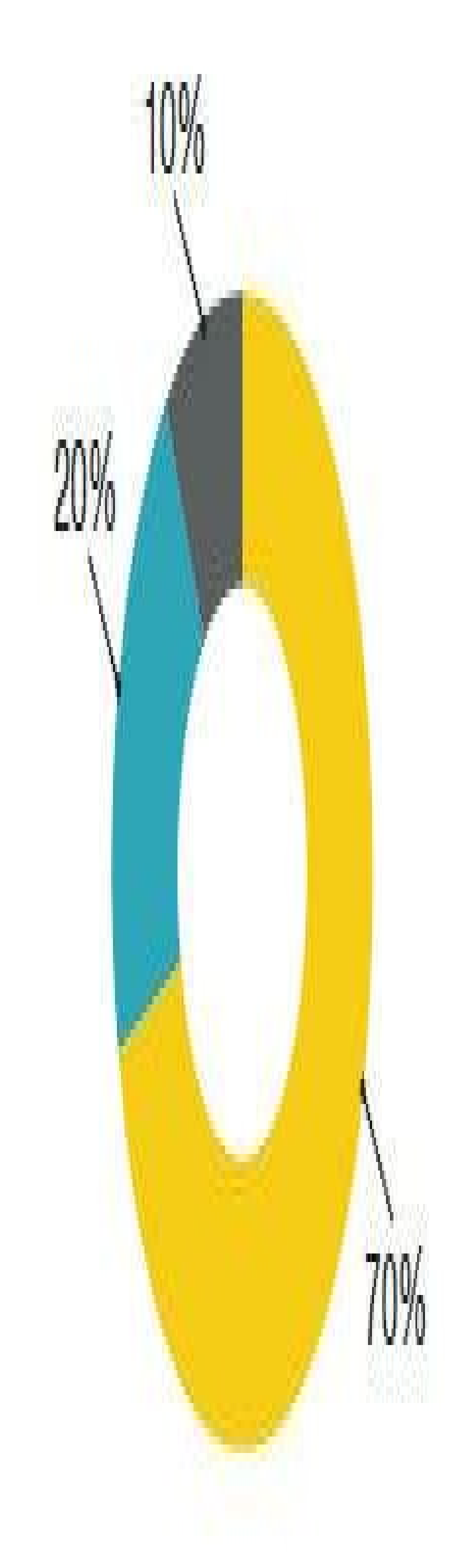
Gráfico 3.

ACCIONES ARMADAS ELN 1965-1980

Relativo a su tamaño, el ELN fue gravemente afectado por las capturas y desmovilizaciones en este período.

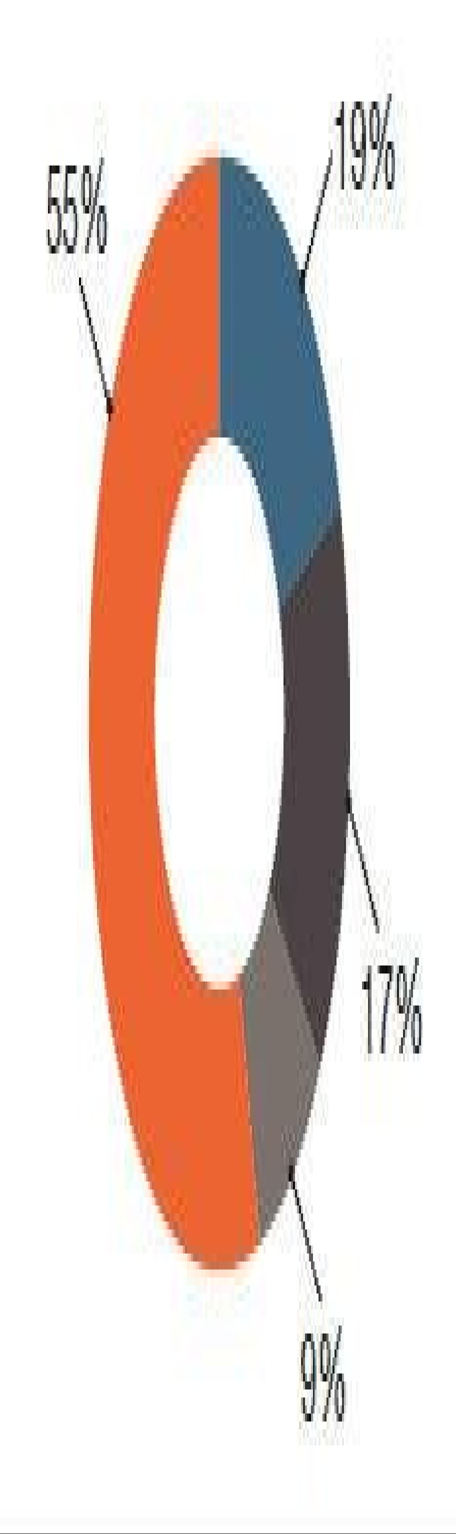
INICIATIVA DEL ELN

	TOTAL
EMBOSCADAS	38
ASALTO A BASES DE PATRULLAJE	11
ATAQUE CON EXPLOSIVOS	5



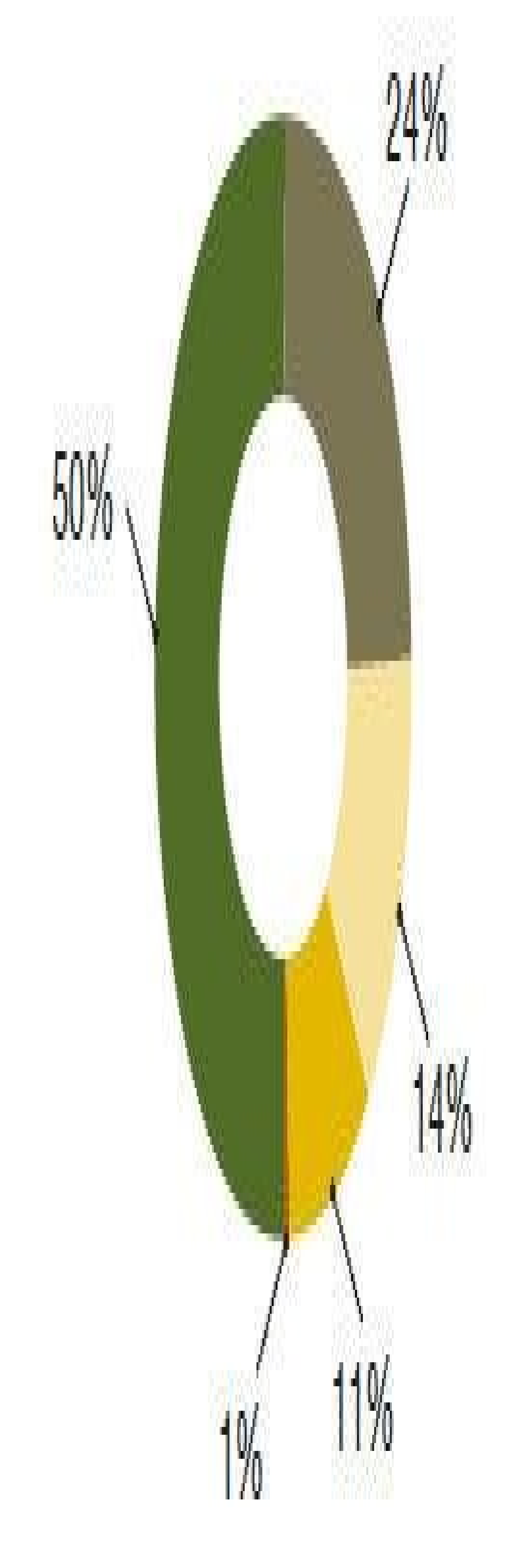
AFECTACIÓN A POBLACIÓN POR EL ELN

	TOTAL
ASESINATOS CIVILES	76
SECUESTROS	26
ATAQUES A POBLACIONES	23
ASALTO A BANCOS	13



INICIATIVA FFMM CONTRA EL ELN

	TOTAL
CAPTURAS	264
BAJAS	128
COMBATES	72
DESMOVILIZACIONES	57
ASILOS	4



Fuente: Elaboración propia con datos de Comando del Ejército 1979, 1980, 1981, 1982. Apreciaciones de inteligencia.

A pesar de significativos triunfos obtenidos mediante emboscadas, asaltos y golpes de mano, los documentos militares reflejan debilidades estructurales en el primer ELN tales como los problemas de liderazgo, la falta de compartimentación para proteger su información, la falta de cohesión interna, su aislamiento de los movimientos afines en la ciudad, la falta de disciplina interna ideológica, la vulnerabilidad de las redes de apoyo por capturas masivas, la decisión de concentrar guerrilleros en unos pocos territorios, la infiltración de inteligencia de las Fuerzas Militares y el rechazo generado entre la población a su decisión de acudir al secuestro.

A pesar de las dificultades, este grupo guerrillero no tuvo una caída definitiva, debido a la persistencia del respaldo de grandes redes de apoyo urbano, que proveían reposición de los combatientes muertos y capturados, el surgimiento de un nuevo liderazgo en 1975, más preparado ideológica y militarmente, y la suspensión de operaciones militares en su contra tras la decisión gubernamental de volcar la atención hacia otras amenazas.

Fuera del Partido Comunista, la principal oposición a los partidos Liberal y Conservador en los años sesenta provenía de los liberales radicales del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), cuyas bases coquetearon también con la vía armada. En esos años, la alianza electoral de los liberales rebeldes con los radicales comunistas era pragmática pero vergonzante. Del movimiento de Juventudes del MRL, varios habían partido para Cuba a instruirse en la guerra de guerrillas del Che Guevara, mientras otros abrazaban sin ambages, desde la legalidad, las posturas más extremas del marxismo leninismo.

Tanto miembros de las Juventudes del MRL, como jóvenes pro-soviéticos del Partido Comunista y los maoístas del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (Moec) hicieron parte de los más de sesenta becados del Gobierno cubano a principios de los años sesenta para estudiar los principios básicos del comunismo y la revolución. En plena instrucción política, se desató la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1962. Algunos dejaron la isla, dada la inminencia de una guerra mundial. Otros más, sin embargo,

aceptaron quedarse a defender —y luego propagar— el comunismo con las armas.

Primero en las montañas del Valle del Cauca y Antioquia, y luego en los Llanos y hacia lo profundo de la selva, el médico Tulio Bayer, y sus aliados estudiantes y obreros del Moec, fueron protagonistas de breves aventuras guerrilleras[1]. En 1961, catorce infantes de marina, al mando de un cabo y un teniente, se atrevieron a salir desarmados a la plaza de un pequeño caserío en Vichada, para no intimidar a indígenas y campesinos. Fueron presa demasiado fácil de tres guerrilleros del Moec, que pronto se apoderaron de su equipo y armamento dejados en el alojamiento.

También en 1961, una bomba instalada en la plaza de armas de la sede del Batallón Palacé, en Buga, estalló la noche del 24 de diciembre, mientras las familias disfrutaban un espectáculo de fuegos artificiales. El ataque causó la muerte de diez militares y 35 civiles, incluyendo varios niños, y heridas a ciento ocho personas. El presunto autor del hecho, un hombre nacido en Buenaventura llamado Gustavo Nest Barabas, proveniente de una familia comunista de padre alemán y madre polaca, había infiltrado el batallón en calidad de talabartero. En su casa, las autoridades encontraron documentos que lo relacionaban con el Moec.

Pese al desafío inicial, con rapidez se extinguieron algunos de esos focos encendidos en Cuba. El Batallón Colombia, con su experiencia en la Guerra de Corea, fue desplegado para combatir a los núcleos guerrilleros del oriente en los años sesenta y posteriormente en el centro y en el sur del país. Luego de aniquilar la guerrilla de Tulio Bayer en Vichada[2], fue remitido a la región de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, dados los “rumores sobre formación clandestina de núcleos guerrilleros de carácter castro-comunista”. Sindicado de ejercer “control de una vasta región mediante la comisión de hechos violentos y el secuestro de personas importantes”, el líder del Moec Federico Arango cayó en combate en septiembre de 1963[3]. Así, fueron eliminados por las Fuerzas Militares los focos guerrilleros en el Magdalena Medio, los Llanos, Vichada, Urabá, Antioquia y el sur de Bolívar. Pero uno, en Santander, pervivió.

En sus primeros años, las juventudes liberales radicales fueron la base política del naciente Ejército de Liberación Nacional (ELN), y origen de varios de sus futuros combatientes y aun de su comandancia[4]. Este primer ELN se gestó con la decisión de siete de los becarios del Gobierno cubano que trajeron a Colombia

como plan de trabajo la implantación de la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, cuyo objetivo era impulsar la lucha revolucionaria[5]. Los becarios que recibieron instrucción militar en Cuba y regresaron al país en 1963 incluían un miembro del Partido Comunista, dos antiguos miembros de las Juventudes Comunistas de este partido, un miembro del Moec, y un integrante de las juventudes del MRL[6]. Esta ‘brigada’ definió su llegada a Santander por la no existencia de grupos bandoleros que pudieran confundir a la gente, por las condiciones geográficas favorables, y las posibilidades de desarrollo y de apoyo sindical unidas a la economía del petróleo.

Los más cercanos simpatizantes del movimiento guerrillero fueron estudiantes universitarios y sindicalistas, y es desde estos sectores que empezó el trabajo político y urbano, que sería articulado a la acción militar rural en San Vicente del Chucurí[7]. Con una procedencia política variada, establecidos los contactos, organizadas las redes logísticas urbanas y rurales, consolidado el grupo base y definida la zona de operaciones, el 4 de julio de 1964 el ELN inició su primera marcha guerrillera hacia la selva, con dieciocho integrantes.

Ya ubicados en el cerro de Los Andes, en San Vicente, donde organizaron el campamento y se dio inicio al proceso de capacitación y entrenamiento, las dificultades se hicieron evidentes. “Con mínimos recursos, pobre vestimenta, armamento deficiente y gran moral, aprendieron a conocer el terreno, […] manejar su precario armamento, a practicar rígidamente reglas de disciplina y medidas de seguridad, a conocer los principios elementales de la guerra irregular y la teoría política”[8].

El comandante de la organización, Fabio Vásquez, decidió dar a conocer el grupo guerrillero ante la opinión pública mediante una primera acción armada, conocida como la toma de Simacota. En diciembre de 1964, un total de veintidós guerrilleros iniciaron un recorrido hacia esta zona, la cual contaba con un puesto de policía con cinco agentes. El batallón más cercano quedaba en El Socorro, a una hora por carretera.

Según el registro de anotaciones de la Quinta Brigada, el ELN asesinó a un sargento y dos agentes de la Policía durante la entrada a Simacota[9]. De acuerdo con la narrativa del ELN, “los compañeros con las armas recuperadas fueron recorriendo el pueblo, llevaron a la gente para la plaza y les echaron un discurso: que éramos del Ejército de Liberación Nacional, que esta era una lucha de todos unidos, liberales y conservadores, que éramos hermanos y no podía haber

pasiones políticas, que la lucha era entre los ricos y por igualdad. Era el 7 de enero de 1965. Allí Fabio leyó el Manifiesto de Simacota"[10]. Según los archivos militares, los guerrilleros tuvieron tiempo de robar 3000 pesos de la Caja Agraria, 2000 pesos a una sede de Bavaria, "y a varias personas de la población, en dinero y elementos varios, la suma de $6000"[11].

Después de dos horas de estar el ELN en Simacota, abasteciéndose y haciendo discursos en la plaza sobre los objetivos de la lucha guerrillera, llegó una patrulla militar. Esta fue recibida con el estallido de unas minas. Murieron allí un par de soldados y uno de los primeros militantes del ELN, Pedro Gordillo, Parmenio. La acción de Simacota le permitió al ELN obtener cuatro fusiles siete milímetros y algunas armas cortas, dos fusiles punto 30, dinero, drogas y víveres. Unos días después, la persecución militar derivó en la captura de tres guerrilleros más.

Después de Simacota, el ELN empezó a correr mayores riesgos en algunas acciones[12], lo cual le permitió aumentar el número de militantes, y fortalecer sus redes urbanas y sus condiciones logísticas. En agosto, la brigada recibió la alerta del propietario de una finca y su mayordomo de que dos hombres armados con una escopeta y un revólver preguntaban en la zona por el dueño de forma amenazante. En un carro, salió una patrulla rumbo a la finca, antes de encontrarse con un hombre que abría unos hoyos junto a la carretera, en el sitio conocido como Cruz de Mayo, en el corregimiento de Yarima. En ese momento, un grupo de guerrilleros armados de fusiles, escopetas y revólveres atacó la patrulla militar. Cuatro soldados y un civil que les servía de informante murieron en la acción y dos soldados más quedaron heridos. Un guerrillero que se lanzó sobre uno de los cuerpos para robar su arma cayó bajo el fuego militar[13].

El Manifiesto de Simacota dejaba claro que el ELN iniciaría una lucha armada de clases, no de partidos, asumiendo un discurso de liberación nacional del imperialismo estadounidense, y el objetivo de derrocar al Gobierno y obtener el poder para las clases populares.

Entre los simpatizantes que empezaron a acercarse a la organización guerrillera estaba el sacerdote Camilo Torres, quien llevaba un acumulado importante de trabajo político con el Frente Unido y quien cumplió un rol protagónico para la identidad ideológica y política de la organización. Torres se incorporó a las filas del ELN en octubre de 1965, y estuvo durante tres meses dedicado a entrenarse militarmente, tiempo que no le alcanzó para adquirir todas las habilidades que se requerían para el combate. A su vez, apoyaba la formación en lectura y escritura

de algunos de sus compañeros.

En septiembre de 1965, un viejo amigo de infancia de Camilo Torres llegó trasladado desde Bogotá a Santander como comandante de la brigada de la zona. Era el coronel Álvaro Valencia Tovar[14]. El nuevo comandante de la brigada, en la línea de sus superiores defensores del antiguo Plan Lazo, dedicó un tiempo en los primeros meses de su función a reunirse con autoridades civiles, agricultores, ganaderos y grupos de pobladores para discutir acciones que mitigaran los problemas del campo, desarrollar un plan de viviendas que reemplazara la presencia de tugurios y discutir planes de asistencia en salud y construcción de nuevas vías. Su perfil como conferencista público sobre los problemas sociales y económicos del país hizo que la Universidad Industrial de Santander, gremios, empresas y autoridades lo invitaran con frecuencia a hablar con estudiantes, sindicalistas y campesinos[15].

Mientras tanto, el ELN continuaba con su escalada militar. Dos soldados más murieron en una nueva emboscada el 22 de enero de 1966. Los sobrevivientes de la unidad militar le pidieron al coronel Valencia no ser relevados y darles la posibilidad de buscar “un contacto [armado] que les diese una oportunidad de rehabilitar su nombre”[16]. Al mes siguiente los soldados tuvieron su revancha. Según las anotaciones de la brigada, “en el sitio denominado Cañón del Pilar, Patio Cemento, sobre la vía a Riosucio y a tres horas del corregimiento de El Carmen, municipio de San Vicente, en el día de hoy 15 de febrero, aproximadamente a las 11:30 horas, se produjo un encuentro entre bandoleros armados y tropas de la Quinta Brigada que se encontraban cumpliendo misiones de seguridad rural”[17]. Luego de describir la muerte de cuatro militares y las heridas infligidas a tres más, las anotaciones detallan la reacción de la patrulla, la captura de tres armas de largo alcance, que estaban en poder de los guerrilleros, y la muerte de cinco de ellos, encabezados por el exsacerdote Camilo Torres Restrepo. Sería el propio comandante de la brigada y antiguo amigo quien diera a conocer la noticia al país. Luego de hacer lavar el cuerpo en una finca cercana, el coronel Valencia optó por enterrar los restos en medio de un encierro de cacaotales y dos árboles marcados con cruces, junto a una carretera de San Vicente del Chucurí[18].

La muerte de Camilo Torres en Patio Cemento impactó fuertemente a la organización guerrillera, y la puso en una perspectiva de guerra que requería de conocimientos militares que aún no habían adquirido en la práctica, y en ello constituía su mayor debilidad. La teoría del foco insurreccional se agotaba en

medio de contradicciones políticas y golpes militares dados por la Fuerza Pública.

Pese al revés militar, Camilo Torres se convirtió desde entonces en un símbolo del grupo guerrillero. Según Fabio Vásquez, “la revolución, decía Camilo Torres, no solamente es permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos”[19]. Así lo hizo entre otros el grupo Golconda de sacerdotes revolucionarios, surgido en los años sesenta, en parte impulsados por el ejemplo de Camilo Torres, que continuó reuniéndose en la década siguiente con otros movimientos clericales del continente, denunciando la injerencia estadounidense y los gobiernos de la ‘burguesía criolla’ de la región. Estos movimientos religiosos alegaban que, si bien el Papa advertía contra la politización de los sacerdotes y que “Cristo no fue un revolucionario político”, también aseguraba que “la Iglesia no sería indiferente a las injusticias sociales[20].

En 1966, solo unos días después de sobrevivir a una bomba puesta por el ELN en un parque donde realizaba un acto público en Bucaramanga[21], el coronel Valencia firmaba una resolución que convocaba a un Consejo de Guerra Verbal en Pamplona, Norte de Santander, a un grupo de miembros del ELN acusados de rebelión, homicidio agravado, robo militar, robo común y otros conexos, y a diecisiete más en ausencia por esos y otros delitos cometidos en Santander y Bogotá[22]. Como resultado, los jueces militares condenaron a trece guerrilleros, y absolvieron a 33 personas, algunas de ellas reconocidos miembros del ELN[23].

El Estado colombiano, en sus tres ramas, había optado por darle una solución principalmente militar a un fenómeno que desbordaba este ámbito. Como consecuencia, las Fuerzas Militares enfrentaban la estrategia subversiva de guerra haciendo uso de tres herramientas: la fuerza bélica, las facultades administrativas —como alcaldes militares en algunas zonas— y las facultades legales —que les permitían juzgar y condenar a los insurgentes.

El juzgamiento de la subversión tomó forma de Consejos Verbales de Guerra, herramienta existente en la justicia penal militar desde 1958 —Decreto 250 del Gobierno militar[24]. Amparados en la Constitución de 1886, los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974) autorizaron y promovieron que tribunales militares juzgaran a civiles en el marco del estado de sitio, en vigencia de forma intermitente pero sistemática desde entonces en el país[25]. Así, el Gobierno de 1965 autorizó que los Consejos Verbales de Guerra investigaran y juzgaran

“todos los delitos y las conductas antisociales de competencia de la Justicia Penal Militar”[26]. La Corte Suprema de Justicia avaló también el juzgamiento de civiles por los militares de “hechos que atenten contra la existencia y fines de la institución o contra la existencia de la Nación y organización del Estado”, en tanto estos juicios no se desarrollaran “en tiempos de paz”[27].

La prolongación de los estados de sitio desde entonces permitió que se produjeran tres Consejos Verbales en los que se juzgaba de manera masiva y relativamente expedita a cientos de acusados de pertenecer al ELN, muchos de ellos en ausencia: el de Pamplona, en 1966; otro en Bogotá entre diciembre de 1968 y diciembre de 1969, alimentado por las capturas de información e individuos en operaciones militares contra la organización, y en el que se condenó a más de ochenta personas; y uno más en El Socorro, Santander, en 1973, que fue finalmente trasladado y finalizado en Bogotá en 1974.

En 1966, el ELN tenía un solo frente, el José Antonio Galán, dividido en comisiones que operaban esencialmente en el departamento de Santander y se desplazaban hacia las zonas del Magdalena Medio antioqueño, haciendo exploraciones en zonas de colonización. Tras la muerte de Camilo Torres, creó un segundo frente con su nombre que quedó a cargo de algunos miembros fundadores de la organización.

En aquellos años, los miembros del ELN enfrentaban el acoso de las tropas, que ocasionalmente les causaban bajas, capturas y decomiso de armas, drogas y material de intendencia, pero sufrían también de las mortales emboscadas guerrilleras. En 1967, las acciones del ELN atrajeron de manera decidida la acción del Ejército. El 9 de marzo, mientras robaban un tren del Ferrocarril del Atlántico, en el Magdalena Medio santandereano, cerca de Puerto Opón, Fabio Vásquez y sus guerrilleros invitaron a un periodista mexicano para que filmara la acción y completara con ello un reportaje al grupo. Luego de detonar explosivos que descarrilaron el tren, los guerrilleros dispararon sobre los vagones, y asesinaron a seis policías. Como botín, los guerrilleros se llevaron fusiles, ametralladoras, revólveres, uniformes y alrededor de trescientos mil pesos en efectivo[28].

Audios que recogían la acción de asalto fueron transmitidos por cadenas radiales en Cuba y en Colombia. Y en una serie de reportajes publicados en la revista Sucesos, de México, y reproducidos por la chilena Punto Final, los líderes del ELN no solo se presentaron en público, sino que se quejaron de la indiferencia

del Partido Comunista y las nacientes Farc para con su movimiento. Luego de solicitar que “se nos permitiera enviar una delegación nuestra a conversar con el compañero Marulanda para el estudio de las experiencias político-militares de ambos movimientos”, Vásquez criticaba la respuesta oficial del Partido Comunista, la cual era que “el compañero Marulanda ha sido informado por nuestro partido de las actividades de ustedes, que no le han gustado al partido. El partido, el Estado Mayor de las Farc y el propio comandante Marulanda Vélez han considerado que tales relaciones no serán posibles hasta tanto no haya un entendimiento con la política del Partido Comunista”[29].

Dos meses después, la información suministrada a las autoridades por el periodista encargado de los reportajes antes mencionados le permitió a las Fuerzas Militares ubicar los refugios de los líderes guerrilleros. “Gracias a sus informes se logró la captura de varios jefes subversivos”, registró la Quinta Brigada, así como “la captura de los diferentes elementos subversivos afiliados a sindicatos petroleros de Barrancabermeja”[30]. Un total de dieciséis personas fueron capturadas en Santander y Bogotá y pusieron al descubierto los miembros, la estructura y los planes de la organización. En particular, la revelación de entonces estudiantes universitarios como miembros del ELN se tradujo en un debate público[31]. Según concluía el coronel Valencia en ese año, “el estado latente de inquietud socio-económico, unido a las circunstancias residuales de una violencia no del todo extinguida, constituyeron un fenómeno ambiental para intentar una nueva forma de subversión, de perfiles inconfundiblemente Castristas, en la cual se integraron gentes de muy diversos orígenes, desde el delincuente común hasta el universitario desorientado o aventurero”[32].

La guerrilla optó por ejecutar algunas acciones de distracción de las tropas, que facilitaran su escape de los cercos militares que les habían causado múltiples bajas y capturas por casi un año luego del ataque al tren, luego de entrar en una relativa inactividad a la espera de que amainara la presión. Además del asedio a los guerrilleros, “las redes urbanas que constituían el apoyo esencial de las organizaciones guerrilleras han sido totalmente destruidas”, comentaba el coronel Valencia en agosto de 1967, “motivo por el cual las propias guerrillas han quedado aisladas de sus fuentes de sustento y apoyo”. De hecho, el siguiente Consejo de Guerra contra el ELN, en Bogotá, recibiría decenas de capturados desde Santander. El 15 de diciembre de 1967, el coronel Valencia dejaba la brigada con la idea de que, como había expresado poco antes, el ELN “no constituye por el momento una amenaza de importancia”[33].

Solo en agosto de 1968, una emboscada en San Pablo, Bolívar empezó a dar indicios claros del paradero de los guerrilleros. El ELN se movía hacia el oeste, y pronto cruzaría hacia la zona de Remedios, Segovia y Zaragoza, en Antioquia. Desde entonces, las Fuerzas Militares retomaron la pista de una guerrilla revigorizada, pero aún a la defensiva.

Las Fuerzas Militares continuaban la persecución. Ya en Antioquia, el 19 de enero de 1969, una veintena de guerrilleros del ELN intentó rescatar a dos compañeros en la cárcel de Remedios, acción fracasada que le costó la vida a un guerrillero. Habiendo retomado el rastro al ELN, soldados de una patrulla del Ejército, que esperaban dar un golpe de mano cerca de allí, en el sitio El Desquite, sobre la quebrada El Rayo, decidieron ocultarse y esperar. Ese 17 de marzo se oyó entonces un ruido cerca a la quebrada. La patrulla logró situarse en un claro del terreno donde divisó dos guerrilleros en la cañada. Tras los disparos, uno cayó muerto y otro logró escapar. Ese mismo día el comandante de la patrulla se enteró de que cerca de allí el ELN se atrevía a realizar un nuevo asalto a un tren pagador, esta vez de la compañía Frontino Gold Mines de Segovia. Con parte de sus soldados, salió en un vehículo hacia el lugar, pero fue emboscado. Murió un suboficial, y dos soldados quedaron heridos. Mientras tanto, con el ataque al tren, el ELN se hizo a un botín de 6000 pesos y el Ejército a una ubicación más precisa de dónde buscar[34]. La información abandonada por los guerrilleros en su huida ante la presión militar debilitaba cada vez más el secreto del cual tanto dependían.

Luego del asalto al tren en Segovia, y con ayuda de un guerrillero capturado, el Ejército lanzó una nueva operación en el Magdalena Medio antioqueño. Allí encontraron material y documentos, entre ellos el plan de trabajo de la secretaría política del partido comunista en Segovia, manuales de inteligencia, apreciación, combate y sabotaje de la Escuela de Lanceros de Melgar, manuales para construir minas y explosivos “de todas las especies”, editados en Cuba, libros de cartografía, cuadernos usados de lectoescritura para niños con temas revolucionarios, apuntes sobre adoctrinamiento y documentos de ingreso a la guerrilla[35].

Ante la dificultad para huir, la guerrilla optó por hacerle al Ejército su accionar tan costoso y doloroso como fuere posible. Una seguidilla de emboscadas en Antioquia y Santander dividió el foco de atención militar. En la vereda La Ye de El Carmen del Chucurí, Santander, un grupo de soldados recogía agua a finales de agosto de 1969 para aprovisionar la base. Al retirarse, los soldados viajaban

colgados de las bardas del vehículo, con el arma suspendida del hombro o terciada en la espalda. A lo lejos, la patrulla vio que una mujer vestida de rojo, al advertir la presencia del vehículo, corría en la misma dirección en que se transitaba.

Después de haber sobrepasado el sitio donde la mujer corría, una bomba puesta en el centro de la carretera hizo explotar la parte delantera del vehículo. El personal que viajaba a los lados se arrojó a tierra y se dispersó, mientras que el conductor aceleraba a toda marcha llevando dos soldados heridos y dando aviso de lo ocurrido. Luego de un fuego intenso que duró unos cuantos segundos, el sargento a cargo del grupo salió de la cuneta donde se refugiaba con la carabina en alto, suplicando que no lo fueran a matar. Apenas entregó su arma, fue asesinado de un tiro en la cabeza, en tanto que los soldados heridos fueron despojados de sus armas y atendidos. Los guerrilleros afirmaron entonces que la lucha revolucionaria solo iba dirigida contra el personal de cuadros y no contra campesinos y obreros bajo servicio militar obligatorio. Los soldados, dispersos, sin comandante y aturdidos por la explosión, nada hicieron, excepto uno, que disparó tres veces su carabina, sin resultado alguno[36].

El grupo del ELN en Santander, al mando de Fabio Vásquez, seguía obteniendo resultados positivos en sus acciones militares[37], principalmente con el mejoramiento en la labor de inteligencia que le permitía conocer las debilidades de la Fuerza Pública, el conocimiento del terreno, el apoyo de algunos habitantes de la región y las acciones sorpresa que favorecían el éxito. En contraste, el grupo de Juan de Dios Aguilera se hallaba en grandes dificultades para obtener resultados similares en Antioquia.

El Grupo Especial Alfa del Ejército tenía como objetivo localizar y capturar a los integrantes del grupo de Aguilera en el área de Remedios. A mediados de julio de 1970, dos equipos vestidos de civil, identificados como parte del grupo guerrillero, repartieron propaganda subversiva tratando de obtener por todos los medios confianza para establecer contacto con Aguilera. Un niño de diez años les relató cómo su padre le había llevado comida al monte a unos señores desconocidos, lo que el padre corroboró. Al llegar a una zona montañosa, los militares encubiertos hallaron las huellas frescas de quienes debían estar a pocas horas de allí. Divididos en dos equipos, A y B, los militares prosiguieron la búsqueda. El grupo guerrillero de Aguilera se encontró de frente con el equipo B, iniciándose un combate por varios minutos. El equipo A presionó con fuego por el lado izquierdo, haciendo emprender la huida de los guerrilleros, quienes

dejaron los equipos que cargaban[38]. Uno de ellos murió, otro desapareció y el jefe del grupo, Juan de Dios Aguilera, quedó herido[39].

Solo en 1972, el ELN volvió a enfrentar a las patrullas militares acudiendo a las emboscadas con la frecuencia de unos años atrás. Ese año, contaba con cinco grupos principales: el de Fabio Vásquez Castaño, que ya se ubicaba en la zona de Nechí, El Bagre, sur de Bolívar y Bajo Cauca, entre Antioquia y Bolívar; el de Ricardo Lara, en Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar; el de Luis Carlos Hernández, Isidro, en la cuenca del río Magdalena, entre Antioquia y Santander; el de Luis José Solano en San Vicente del Chucurí, Santander; y el de los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño, en Amalfi, Remedios, Segovia y Zaragoza, Antioquia.

En junio de 1972, en Santa Rosa, Bolívar, una patrulla del Ejército escuchó que cuatro sujetos pedían información sobre cómo llegar a diferentes sitios en la carretera de Simití a Santa Rosa, y un campesino reportó luego que dos hombres habían llegado a su casa a exigir que consiguieran víveres para ellos. El Ejército inició el reclutamiento de informantes en la zona, y se basó en sus indicaciones, en lugar de hacer patrullajes y reconocimientos que lo delataran. Al fin, el 26 de junio un combate terminó en intercambio de disparos de carabina y granadas con el grupo de Fabio Vásquez, que salió huyendo en desbandada, y abandonó sus pertenencias, material de guerra y muchas medicinas, intendencia y víveres. La información incautada le permitió al Ejército descubrir a decenas de militantes del ELN en Antioquia, Santander, Cesar y Bogotá, que terminaron compareciendo ante un nuevo Consejo de Guerra en 1973[40].

Los años de persecución les dieron suficiente información a los militares para intentar dar un golpe de gracia. Y para ello, en 1973 ya estaba en marcha el llamado Comando Operativo 10, una instancia de coordinación entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que, inicialmente desde Santander, trataría de cumplir ese objetivo. Apoyándose en técnicas de infiltración, empleo de medidas de contrainteligencia y apoyo de población civil para obtención de información, el Comando empezaría a dar sus primeros golpes.

Operación Anorí: el fin del primer ELN

41

Desde finales de los años sesenta, el ELN había encontrado en el secuestro su fuente de financiación más lucrativa. Los pagos de rescate le significaban ingresos por decenas de miles de pesos de la época, que muy pronto fueron convirtiéndose en millones. Pero a la vez, esta práctica pronto los condenó a su casi desaparición. Luego de capturar una carta enviada por medio de un estafeta, el Ejército recibió una pista del paradero de los líderes del ELN. En enero de 1973, el múltiple secuestro cometido por Fabio Vásquez en Ayapel, cerca de Nechí, Antioquia, a cinco familiares de industriales de la zona[42], puso al Ejército en dirección de lo que ese año se convertiría en la peor derrota militar del grupo guerrillero de su historia.

En la madrugada del 21 de febrero de 1973, un contraguerrillero detectó pisadas cerca de un cogedero de agua y cortes de machete en una zona rural de Remedios, Antioquia. Al reconocer al jefe guerrillero Luis Carlos Hernández, Isidro, lanzó una granada y disparó, dándole muerte[43].

Luego de ese primer golpe militar, las acciones para liberar a secuestrados del ELN en Santander y Antioquia provocaron varios combates durante 1973 y nuevas pistas para los militares sobre dónde golpear. Siguiendo el rastro de los secuestrados, las Fuerzas Militares realizaron un despliegue por tierra, agua y aire destinado a cercar a la guerrilla. Un primer asalto masivo para atrapar a Fabio Vásquez en los alrededores de la quebrada La Trinidad, en mayo, resultó infructuoso.

Pero la guerrilla aún conservaba la capacidad de engañar y atraer al enemigo a su propio terreno. En plena persecución del ELN, dos soldados de civil fueron a buscar abastecimientos para una patrulla cerca de Amalfi. Ese 24 de junio de 1973 fueron capturados, torturados y asesinados. Al ver que los soldados no regresaban, una patrulla salió a buscarlos. La guerrilla abrió fuego y arrojó una granada sobre ellos en la carretera. La acción dejó cinco soldados y un suboficial heridos[44].

A finales de julio de 1973, el Comando Operativo 10 se reubicó en Medellín. Para entonces estaban reunidos cerca de Amalfi, Antioquia, el grupo de Antonio

y Manuel Vásquez, con un centenar de guerrilleros. El grupo acordó que atravesarían la región hasta la desembocadura del río Anorí, donde se reuniría con el resto del ELN para planear una incursión en Córdoba.

Para el momento el ELN contaba con importante apoyo de la población en la zona y en Medellín, principalmente de campesinos, obreros del sector petrolero y grupos de izquierda tradicional que, sin duda, permitían a los miembros del grupo reabastecerse, alimentarse y encontrar rutas de acceso y escape. Sin embargo, Anorí tenía unas características diferentes dada la tradición conservadora de su población y las dificultades geográficas.

El ELN, con sus grupos reunidos, decidió en junio de 1973 realizar algunas acciones contra militares y policías en Salazar, Amalfi, con el fin de obtener algunas finanzas y fortalecer la experiencia militar. Esta acción le dio una nueva alerta al Ejército sobre la ubicación y capacidad del grupo guerrillero. La columna guerrillera de los hermanos Vásquez comenzó entonces a detectar los patrullajes del Ejército en la zona. La dirección del grupo se reunió, evaluó la situación y planeó el trabajo que se debía seguir inmediatamente. Aún no sabía de la magnitud de la operación por venir.

El mes de agosto transcurrió en medio de crecientes dificultades para la guerrilla; tres en especial: por una parte, a la adversidad del terreno y el desconocimiento de este, se sumó la temporada de invierno que fue cruda e hizo la zona, habitualmente fría, mucho más inhóspita para una guerrilla proveniente de tierras bajas y cálidas; por otra parte, los campesinos que comenzaron a encontrar se mostraron temerosos y renuentes a colaborar, incluso, en la venta de comida y animales; por último, internamente, la situación de desmoralización de algunos integrantes fue creciendo: comenzaron a perderse los bienes colectivos de la guerrilla —como la panela—, y a disminuir el paso de la marcha, con el objeto de madurar las deserciones, lo que obligó a una vigilancia permanente.

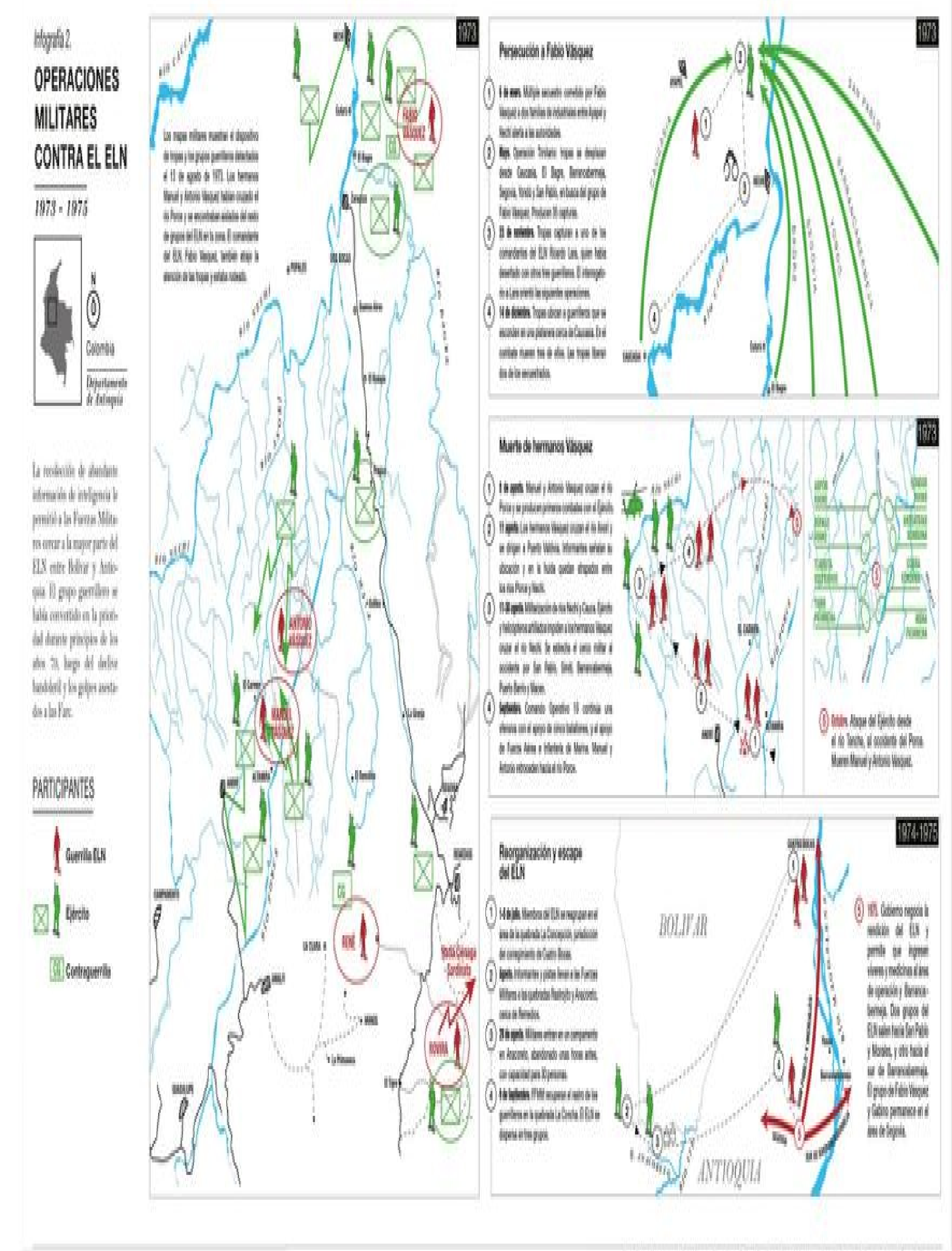
Los hermanos Vásquez ya habían caído en el cerco. Luego de algunos combates en agosto, los informantes civiles revelaron al Ejército que un grupo de guerrilleros, entre los que se encontraban Manuel y Antonio Vásquez, estaban atrapados entre los ríos Porce y Nechí. El ametrallamiento de los helicópteros artillados y el elevado caudal de los ríos les impedían cruzar las aguas. El Comando Operativo 10 había desarrollado un plan de reentrenamiento con el apoyo de un cazador de la zona, que les instruyó sobre cómo moverse, seguir pistas y no dejar rastro. Con el refuerzo de cinco batallones de Ejército, y apoyos

de Fuerza Aérea y de la Infantería de Marina por los ríos y quebradas de la zona, el Comando hizo imposible el escape para los guerrilleros.

El creciente conocimiento de la zona, junto a la disponibilidad de víveres y recursos enviados desde Medellín, les permitió a los militares moverse con mayor comodidad. A su vez, algunos campesinos aceptaron tener en sus fincas soldados vestidos de civil que hacían labores de inteligencia, e incluso identificar sus casas con un pañuelo blanco en el techo, lo que le permitía a los militares reconocerlas desde el aire. En ocasiones los campesinos entregaban comida y ayuda a los guerrilleros, que abandonaban el área sin sospechar que las tropas los seguían.

La deserción de guerrilleros durante esos meses permitió a las tropas no solo obtener la ubicación y el recorrido de los distintos grupos, sino conocer las condiciones, capacidades y modo de operar de cada uno. Los combates de pequeños grupos con el Ejército le fueron desfavorables y pronto la guerrilla quedó diezmada. El 19 de octubre, luego de infructuosos intentos por cruzar el río Nechí, los hermanos Manuel y Antonio Vásquez retrocedieron. Atrapados por el caudal de aguas intransitables, entre los ríos Porce y Tenche, fueron rodeados y muertos por las tropas.

Las operaciones militares continuaron durante meses, en búsqueda de los demás grupos del ELN dispersos en la zona. La información provista por Ricardo Lara, capturado el 23 de noviembre, contribuyó, según el Ejército, a orientar las operaciones siguientes. En diciembre, un campesino de una red de inteligencia rural pagada con anticipación reveló haber visto tres sujetos cogiendo plátanos en Caucasia. Tras ubicarlos en una platanera, los guerrilleros sostuvieron un combate con el Ejército en el que murió el jefe del grupo y fueron rescatados dos de los secuestrados de la zona de Nechí[45].



Infografía 2.
OPERACIONES MILITARES CONTRA EL ELN
1973 - 1975
Colombia
Departamento de Antioquia
La recolección de abundante información de inteligencia le permitió a las Fuerzas Militares cercar a la mayor parte del ELN entre Bolívar y Antioquia. El grupo guerrillero se había convertido en la prioridad durante principios de los años 70, luego del declive bandolero y los golpes asestados a las Farc.
PARTICIPANTES
Guerrilla ELN
Ejército
Contraguerrilla
1973
Persecución a Fabio Vásquez
1973
Muerte de hermanos Vásquez
1973
Reorganización y escape del ELN
1974-1975
BOLÍVAR
ANTIOQUIA

Las capturas masivas de esos años derivaron en un nuevo Consejo de Guerra Verbal en 1973. El tribunal militar se valió de la información incautada al ELN durante las operaciones en la región de Anorí para sindicar a más de doscientas personas de pertenecer a las redes urbanas del ELN en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y San Vicente del Chucurí. En 1974, fueron condenados finalmente medio centenar de personas, mientras otros, al levantarse temporalmente el estado de sitio, fueron remitidos a la justicia ordinaria[46].

Entre quienes fueron procesados incluso estaba la madre de Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, y sus hermanos, relata uno de los militares participantes[47]. "El Consejo de Guerra tiene problemas, entre ellos que el grupo de abogados son rebeldes convencidos. Todos se desplazaban a El Socorro, a un batallón. Desde el primer día se escucha 'viva el ELN' en el recinto. El presidente del Consejo pedía silencio. A las 8 a. m., el presidente pedía hacer comparecer a los detenidos, pero estos se rehusaban a entrar a la sala. 'Hagámoslos comparecer a la fuerza', decía. La policía los sacaba a punta de culatazos y los tipos llegaban al atril descalabrados, sangrando. Hubo lectura de miles de folios. Duramos tres meses en El Socorro y no pasamos de la lectura del proceso. Los abogados alegaron que en El Socorro no estaban dadas las garantías ni el ambiente imparcial para el juicio. La Corte falló y ordenó cambiar de El Socorro a Bogotá. Al final se condenaron algunos"[48].

El ELN, intentando frenar el avance del Ejército con sus compañías de contraguerrilla y apoyo de helicópteros artillados, atacó en enero de 1974 una base militar cerca de la quebrada Santa Bárbara y realizó una emboscada en la zona de Zaragoza, Antioquia[49]. Los militares, sin embargo, se enteraron de que un grupo de guerrilleros visitó varias fincas cerca de El Bagre, preguntando por la presencia de tropas y pidiendo abastecimientos. Luego de seguir los rastros guerrilleros con ayuda de un guía, el Ejército llegó hasta un campamento. Tras rodearlo, las tropas lanzaron un golpe de mano, iniciando con una granada y luego fuego nutrido, con lo que provocaron tres bajas y dos capturas. En esa acción, fue rescatado un tercer secuestrado de la zona de Nechí, después de un año de cautiverio[50].

Cuando la desmoralización comenzó a cundir en algunos guerrilleros, Fabio Vásquez inició un proceso de reagrupamiento de toda la fuerza guerrillera que quedaba, trabajo que le tomaría varios meses. Durante ese tiempo, preparó el desarrollo de una asamblea para evaluar la situación política, ideológica y militar

de la organización después de Anorí. En 1974, cuando la intensidad de las operaciones militares había bajado, el ELN se concentró en Remedios, Antioquia, a orillas de la quebrada Anacoreto, para celebrar una asamblea que le diera un nuevo norte al disminuido grupo guerrillero.

La manera en que el ELN hizo la autocrítica de su desastre militar desembocó en nuevos fusilamientos internos y en un interrogante sobre el futuro de esta organización[51]. Ya en julio de 1974, los informantes campesinos de la región guiaron a las tropas hasta las quebradas Rastrojo, La Concepción y Anacoreto. Los guerrilleros alcanzaron a terminar su asamblea y huir del lugar, dejando apenas un pequeño grupo para contener el avance de las tropas[52].

Ese mismo mes, emisarios hicieron contactos con el presidente de la República a nombre del ELN. El Gobierno decidió entonces enviar también a un emisario y al gobernador de Bolívar para hacer contactos con los reductos del grupo guerrillero. Tras algunos intentos fallidos en Medellín, y reuniones en Bello y Cartagena, los delegados le aseguraron al Gobierno que existía una oportunidad real de que el ELN depusiera las armas.

A finales de 1974, un enfermo y cuestionado Fabio Vásquez salió hacia Cuba, privando al ELN del último miembro de su Estado Mayor original y único comandante sobreviviente. Quien asumió como segundo al mando tras Anorí, Hernán, apenas si tuvo tiempo de ejercer como jefe. En diciembre, en una emboscada fallida al Ejército en un sitio conocido como Mesa Verde, junto a la quebrada La Cianurada, en Segovia, perdió la vida, y Gabino se convirtió de facto en el nuevo comandante de la organización.

Los hechos de 1975 determinaron que el ELN continuaría con vida. Luego de provocar catorce muertes al Ejército en una emboscada en San Pablo, tomarse la población de Morales, Bolívar, y atentar contra un coronel, el grupo consiguió negociar con el Gobierno la llegada de víveres y el levantamiento del cerco militar en la zona.

El comandante de la Quinta Brigada se desplazó a Barrancabermeja a mediados de 1975, dada la inminencia de la entrega del ELN. “Suspendimos operaciones militares para permitir que se rindieran”, cuenta un testigo. “Pero no se veía nada. El gobernador de Bolívar le echaba la culpa al Ejército diciendo que ‘no han llegado a tal sitio y no se van a entregar porque tiene controlados los caminos’. El Ejército había suspendido acciones militares. Le dije al gobernador:

‘cojamos un helicóptero con el delegado del Gobierno y vamos a ver dónde están las tropas’. Salimos en el helicóptero los tres. Las tropas estaban reunidas, no patrullaban. Tras diez días, les dije: ‘esto es una comedia, no hay entrega, me voy para Bucaramanga. No sigo en esta pantomima’. Y ahí terminó la famosa entrega. Permitimos que llegaran enfermeras y recursos de Cartagena, que entregaran víveres a la guerrilla. Ahí se reencaucharon esos guerrilleros por la tregua que dimos”[53].

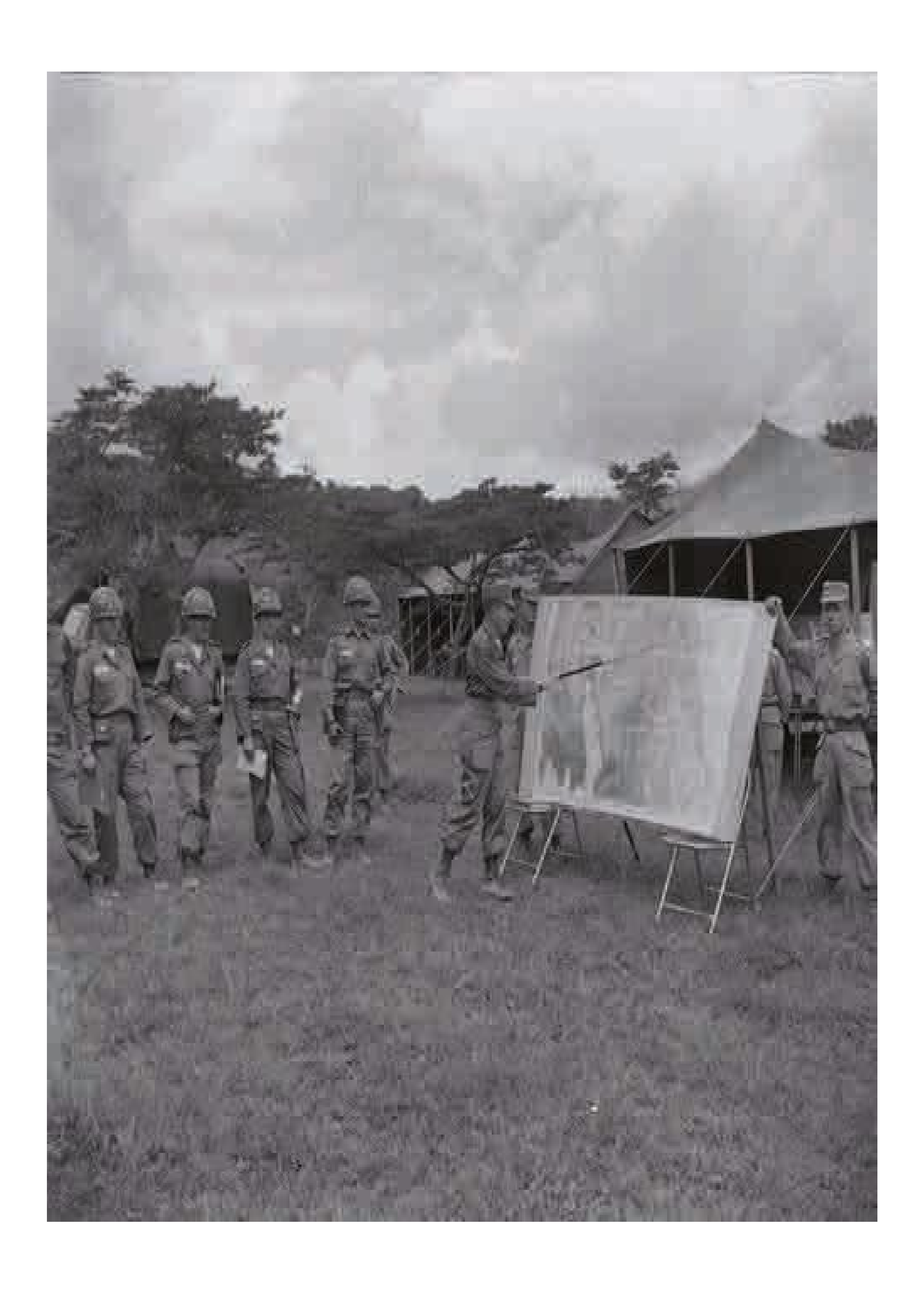
Con el levantamiento del cerco militar, el ELN pudo sacar a un grupo de guerrilleros desde San Pablo y Morales, Bolívar, hacia Norte de Santander y Cesar, donde refundarían el frente Camilo Torres, y tuvo un respiro para el frente José Antonio Galán, que permanecía entre Bolívar y Antioquia, y ahora contaba con una salida hacia el sur de Barrancabermeja.

Fabio Vásquez había ordenado la incorporación al ELN de militantes urbanos de Bogotá y Medellín, muchos de ellos provenientes de sindicatos y organizaciones estudiantiles. Si bien este reclutamiento traería otro tipo de contradicciones dentro de la organización, consolidó una masa crítica que le permitió al ELN seguir con vida. Las tomas de Arenales y Monterrey, incluyendo emboscadas al Ejército, y el asesinato del general Ramón Arturo Quiñónez en Bogotá, en septiembre de 1975, enviaban exactamente ese mensaje[54].

Vivo, pero en crisis, el ELN apenas operó militarmente en los meses siguientes[55]. Las Fuerzas Militares, por el contrario, aún buscaban asestarle el golpe final. Las capturas en San Lucas, Bolívar, le permitieron al Ejército hallar la pista del jefe de la red urbana del ELN y su gente. “Se movilizaban en un Suzuki verde, y siguiéndolos les ubicamos todas las casas”, cuenta un testigo militar. En febrero de 1977, el Ejército allanó cinco residencias en Bogotá y capturó a decenas de miembros y simpatizantes urbanos del ELN. “Ubicamos a Gabino y a la mujer, quienes vivían cerca del barrio Normandía. Llegamos una noche a las 11 p. m. y lo encontramos cuando entró a la casa. El tipo nos detectó, porque usamos unos camperos fáciles de identificar y salió. El hombre tomó una acera sin iluminación y nosotros detrás en un carro, pero ¿quién da la orden de ‘darle’ a este tipo? Tocó dejarlo ir”[56].

La concentración de recursos y esfuerzo de las Fuerzas Militares permitió debilitar sistemáticamente a este grupo guerrillero, pero de una manera poco eficiente. La destrucción progresiva del primer ELN tuvo un costo alto en vidas de soldados, heridos y pérdidas de material. Armas, material de guerra y, sobre

todo, más de una década de experiencia guerrillera quedaron en manos de los insurgentes, que usaron todo esto para reconstruir su organización. La desarticulación del ELN no fue total, al igual que el aplastamiento militar a las guerrillas del sur durante los años sesenta no fue definitivo. Y durante los años por venir, las Fuerzas Militares sufrieron las consecuencias de aquellas victorias inconclusas.



El entonces coronel Álvaro Valencia Tovar enseña a los soldados de la Escuela de Infantería un mapa de las zonas más afectadas por la violencia a finales de 1962. / Foto: Archivo El Espectador.

Notas

[1] El líder fundador del Moec habría sido asesinado en Tacueyó, Valle del Cauca, por sus propios compañeros. Véase Andrade, Luis Alberto 1993. Violencia política y conflictos internos. En: Valencia Tovar, Álvaro 1993. Historia de las Fuerzas Militares volumen III. Ejército. Capítulo XI. Bogotá: Planeta, 121-122.

[2] Comando del Ejército 1962e. Caso táctico No. 24. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, segunda parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 8-19.

[3] Comando del Ejército 1963h. Caso táctico No. 27. En Fuerzas Militares 1964. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, segunda parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 43-51.

[4] Mientras Fabio Vásquez llegaba de Cuba ungido como comandante militar del ELN en 1963, su hermano Manuel oficiaba desde el JMRL el liderazgo político de forma clandestina, antes de unirse abiertamente a la guerrilla unos meses después.

[5] Unos veintisiete colombianos viajaron a Cuba a recibir educación ideológica a principios de los años sesenta. De ellos, once pidieron recibir entrenamiento

militar por ocho meses, de los cuales sólo siete lo culminaron. Al regresar a Colombia en 1963, estos siete se convirtieron en fundadores del ELN: Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Heriberto Espitia, Ricardo Lara Parada, José Merchán, Mario Hernández y Luis Rovira. En Cuba, Fabio Vásquez fue designado como el dirigente principal de la naciente organización.

[6] Adicionalmente Fabio Vásquez obtuvo la beca a través de su hermano, Manuel, miembro de las Juventudes del MRL.

[7] En esta zona operó una década atrás la guerrilla liberal de Rafael Rangel, algunos de cuyos veteranos contribuyeron al establecimiento del ELN.

[8] Arenas, Jaime 1971. La guerrilla por dentro. Análisis del ELN colombiano. Tercera edición. Bogotá: Tercer Mundo, 43.

[9] Comando Quinta Brigada 1965a. Libro de anotaciones. Asalto a Simacota. 7 de enero.

[10] López Vigil, María 1989. Camilo camina en Colombia. México: Editorial Nuestro Tiempo, 61.

[11] Comando Quinta Brigada 1965a, op. cit.

[12] En febrero, un mes después de la toma de Simacota, un grupo de guerrilleros del ELN armados con una ametralladora Madsen, revólveres y pistolas atacó el puesto de policía de Papayal, en Rionegro, Santander, dio muerte a dos agentes

de policía y a dos civiles. El ataque les proveyó nuevos fusiles, escopetas y revólveres. Una compañía salió en persecución de los atacantes. Véase Comando Quinta Brigada 1965b. Libro de anotaciones. Asalto a Papayal, febrero.

[13] Comando del Ejército 1965f. Caso táctico No. 70. En Fuerzas Militares 1965. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, tercera parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 349-357; véase también Comando Quinta Brigada 1965e. Libro de anotaciones. Emboscada patrulla base Yarima, 15 agosto.

[14] Comando Quinta Brigada 1965c. Libro de anotaciones. Traslado un señor oficial superior, agosto.

[15] Véase por ejemplo Comando Quinta Brigada 1965d. Libro de anotaciones. Conferencia en S.AS. Planes sobre erradicación de tugurios, 4-5 agosto.

[16] Comando Quinta Brigada 1966a. Libro de anotaciones. Viaje al El Carmen, 3 de febrero.

[17] Comando Quinta Brigada 1966b. Libro de anotaciones. Asalto patrulla en Patio Cemento, 15 de febrero.

[18] Sobre el paradero del cuerpo de Camilo Torres, véase Revista Vea 1975, No. 171, 29 de enero-4 de febrero, 14-17.

[19] Fabio Vásquez citado en Menéndez, Mario Renato 1967. El Ejército de

Liberación Nacional de Colombia. Revista Punto Final (Chile) 34, agosto, 6.

[20] Véase Comando del Ejército 1979. Apreciación de inteligencia 2, 55; y Comando del Ejército 1980. Apreciación de inteligencia 3, junio, 25-26.

[21] El ELN intentó de nuevo asesinar al ya general Valencia el 8 de octubre de 1971, con un atentado en Bogotá.

[22] Comando Quinta Brigada 1966c. Resolución 0052, 28 de marzo. Citada en Libro de anotaciones. Consejo de Guerra por hechos en Simacota. 1.o de abril.

[23] Las condenas se referían entre otros hechos a los asaltos de Simacota y Papayal, y el asesinato de dos empleados de la campaña antimalaria en Lebrija, Santander. Véase Comando Quinta Brigada 1966d. Libro de anotaciones. Resultados Consejo de Guerra, 27 de mayo.

[24] Los Consejos Verbales de Guerra también fueron aplicados a delincuentes comunes, a los que se juzgaba masivamente, y en ocasiones en sitios públicos, por delitos como asalto, cohecho, asociación para delinquir, contrabando o secuestro, o a miembros de la Fuerza Pública involucrados en delitos.

[25] La Ley 141 de 1961 adoptó el Decreto 250 de 1958 como legislación permanente.

[26] Según el Decreto 1290 de 1965, la ley penal militar aplicaría contra quienes hubieren cometido delitos “contra la existencia y seguridad del Estado o contra

el régimen constitucional colombiano”, asociación para delinquir, secuestro, extorsión, incendios u “otros delitos que envuelven un peligro común”.

[27] Sentencia del 4 de octubre de 1971.

[28] Comando Quinta Brigada 1967a. Libro de anotaciones. Asalto al tren en zona del Carare. 9 de marzo.

[29] Menéndez, Mario Renato 1967, op. cit., 5.

[30] Comando Quinta Brigada 1967b. Libro de anotaciones. Publicaciones de diferentes diarios comentan informes del Ministerio de Defensa en relación con el periodista Menéndez, junio.

[31] Comando Quinta Brigada 1967c. Libro de anotaciones. Comentarios en general de la prensa, mayo.

[32] Declaraciones de Álvaro Valencia Tovar para el Diario El Siglo en 1967, citadas en Comando Quinta Brigada 1967d. Libro de anotaciones. En Colombia ‘No hay Estado guerrillero’, hay ‘desconocimiento de instituciones armadas’ dice el coronel Valencia Tovar, junio.

[33] El ya general Valencia reasumiría la comandancia de la Brigada entre 1968 y 1970. Véase Comando Quinta Brigada 1967e. Libro de anotaciones. ‘El ELN no es una amenaza’ declara el comandante de la Quinta Brigada, agosto.

[34] Comando del Ejército 1969a. Caso táctico No. 78. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 101-113.

[35] Ibídem.

[36] Comando del Ejército 1969b. Caso táctico No. 86. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 189-200.

[37] El 15 de marzo de 1970 un suboficial salió de la base a encontrarse con un informante. En la cantina El Buen Amanecer, en donde se encontró con dos civiles conocidos, se sitúo cerca a la radiola y tomó asiento dando espalda a la entrada de la cantina; segundos después, un sujeto que se encontraba en la entrada del establecimiento, en compañía de otros dos, se levantó de su silla fingiendo que se dirigía hacia la radiola y al llegar cerca de donde se encontraba el suboficial, le disparó sobre la nuca. Comando del Ejército 1970a. Caso táctico No. 88. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 211-218.

[38] Comando del Ejército 1970b. Caso táctico No. 93. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 265-274.

[39] Juan de Dios Aguilera fue ejecutado por integrantes del ELN el 29 de mayo de 1971, acusado de ser responsable de la muerte de otro de los líderes del ELN, José Ayala, de promover la división y fraccionamiento de la organización, así

como de la ejecución de tres militantes de su grupo.

[40] Comando del Ejército 1972. Caso táctico No. 98. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 327-340.

[41] Bajo el título de Operación Anorí se entiende aquí el conjunto de acciones militares realizadas por el Comando Operativo 10 entre enero y octubre de 1973.

[42] Las Fuerzas Militares lograron la liberación de tres de ellos.

[43] Véase Comando Quinta Brigada 1973. Libro de anotaciones. Bajas, 21 de febrero; y Comando del Ejército 1973b. Caso táctico No. 101. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 367-376.

[44] Comando del Ejército 1973c. Caso táctico No. 105. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 409-418.

[45] Comando del Ejército 1973d. Caso táctico No. 108. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 445-454.

[46] Ya en los años ochenta, el Gobierno decidió que los civiles dejarían de ser juzgados por militares luego de “realizados los Consejos de Guerra Verbales en

curso y reglamentada debidamente la Reforma Constitucional de la justicia". Véase Presidencia de la República 1980. Respuesta del Gobierno colombiano al informe de Amnistía Internacional, abril, 41.

[47] La mayoría fue dejada en libertad en pocos meses, y menos de cincuenta individuos fueron juzgados.

[48] Entrevista a General en retiro, Bogotá, 7 de julio de 2016.

[49] En la emboscada muere el sacerdote español Domingo Laín, quien había ingresado a la guerrilla a finales de los años sesenta.

[50] Comando del Ejército 1974a. Caso táctico No. 110. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 467-476.

[51] De tener unos 250 combatientes rurales en 1973, ahora el ELN contaba con alrededor de solo setenta.

[52] En el combate, murió el líder de la red urbana del ELN en Bucaramanga. Véase Comando del Ejército 1974b. Caso táctico No. 116. En Fuerzas Militares 1974. Casos tácticos de guerra de guerrillas en Colombia, volumen 18, cuarta parte. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 525-534.

[53] Entrevista a General en retiro, Bogotá, 7 de julio de 2016.

[54] En mayo de 1988, el ELN asesinó a otro alto oficial que había operado en su contra en la región de San Vicente del Chucurí. Ese día, guerrilleros abrieron fuego sobre las tropas que custodiaban al coronel Rogelio Correa Campos, mientras se reunía con un grupo de campesinos en el sitio de Llana Caliente, en la vía que conduce de Barrancabermeja a Bucaramanga. Murieron el coronel, otros tres militares y doce civiles en el fuego cruzado.

[55] En mayo de 1975, el ELN se tomó Santa Rosa de Simití, Bolívar, y en enero de 1977 emboscó a una patrulla militar en Honduras, Norte de Santander. Después, en abril de 1977, lanzó un ataque contra un puesto militar en Tarquí, Tarazá, y luego en mayo atacó La Victoria, en Sabana de Novillo, Cesar. En julio, atentó contra un sargento mayor del Ejército.

[56] Entrevista con sargento mayor en retiro, Bogotá, 10 de septiembre de 2016.

Capítulo V

La consecuencia de las victorias inconclusas

La revisión de los documentos guerrilleros de los años sesenta revela que, a pesar de un despliegue militar de amplias proporciones, las nacientes Farc atribuyeron su supervivencia durante esa década a la capacidad de garantizar la colaboración de muchos de los pobladores de sus zonas de influencia. En pleno desarrollo de operaciones militares, las Farc fueron capaces de hacer reuniones de planeación de lo que sería su ruta de guerra en los años por venir.

Los planes de la guerrilla gravitaban alrededor de tres ideas principales: el entrenamiento político, militar e ideológico de sus miembros les garantizaría contar con combatientes de calidad; la expansión y el fortalecimiento de las redes de apoyo en el campo les permitiría seguir eludiendo la acción de las Fuerzas Militares; y la acumulación gradual de fuerzas les haría pasar rápidamente de ejecutar acciones clásicas de guerrilla a combinarlas con acciones que los asemejara más a un ejército regular, creciendo en combatientes y poder de fuego para atacar unidades militares enteras, en lo que denominó 'guerra de movimientos'. La claridad sobre este mapa estratégico estuvo presente en la mente de los comandantes desde entonces, aunque solo en los años ochenta declararan oficialmente estar listos para cumplirlo.

Las Fuerzas Militares tenían claro, por su parte, que la disputa por la población civil determinaría el curso del conflicto. Para contrarrestar los avances de las Farc, los gobiernos de esta década ordenaron a los militares organizar a la población civil para que, armada, se defendiera de la guerrilla y apoyara las operaciones oficiales. Los manuales militares de la época detallan la manera en que las juntas de autodefensa civil y las organizaciones de defensa civil disputarían el apoyo activo de la población.

Dentro del Partido Comunista, quienes consideraban insuficiente el trabajo de las Farc, se volcaron a crear juntas patrióticas y otro tipo de organización social y comunitaria como prioridad, antes de pensar en una fuerza militar. Separados de la línea soviética del Partido, y abrazando las ideas de la Revolución China,

crearon en 1968 el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Luego de la Operación Soberanía Gama de 1964, las Fuerzas Militares instalaron un cerco alrededor de las vías de acceso de la región, arrojaron propaganda antiguerrillera desde el aire y activaron juntas de autodefensa civil para apoyar su acción. Con el paso desde la región de Marquetalia hacia Riochiquito en ese año, los guerrilleros habían decidido unificar el mando, y en octubre se constituyó el núcleo denominado Bloque Sur. “Desde el principio, la política a seguir era continuar los carteos con los militares para aplazar la agresión a Río”, describe un documento del Bloque Sur de esa época. Una vez se produjo la ofensiva militar, cuatro destacamentos guerrilleros iniciaron una marcha desde Riochiquito con miles de familias hacia el Sumapaz, Cauca, Valle del Cauca y Meta. “Nos hemos trazado la norma de pagar todo cuanto les sea solicitado o tomado a los campesinos pobres sin distinción de colores políticos, a los amigos y simpatizantes y en general a las masas”, narraba el Bloque Sur. “Esta política financiera nos ha permitido diferenciarnos de los bandoleros que van por ahí matando y robando sin preguntar de quién se trata”[1].

Luego de las operaciones militares en Marquetalia y El Pato, los guerrilleros reportaron que Riochiquito “ya está anillada, donde nuestras heroicas guerrillas combaten ferozmente”[2]. Una de las acciones para frenar el avance militar, fue la ejecución de los que consideraban infiltrados. “Las primeras acciones de limpieza contra los sapos comenzaron a los dieciocho días después de la muerte de nuestros compañeros. El primero salió del partido, un renegado y conocedor del terreno y guía del ejército. Después siguieron los demás. Fue así como al enemigo, más tarde, le fue difícil seguir golpeándonos”. La guerrilla aseguraba haber causado más de un centenar de bajas al Ejército, y apreciaba “con muy buen resultado la técnica de la voladura como método moderno, permitiéndonos sorprender con mayor éxito al enemigo”. En esos meses, “la guerrilla ha tenido la solidaridad de los movimientos de izquierda, como el MRL y elementos del Moec de Chaparral [y] del propio Partido [Comunista] que han contribuido a solucionar algunos problemas como ración de campaña, botas, ropa, drogas, porque estos amigos y aliados han correspondido”[3].

En 1965, el entonces Bloque Sur, que agrupaba la mayoría de guerrillas del sur del país, invitó al sacerdote Camilo Torres “a visitar nuestro movimiento, cosa que desgraciadamente no se llevó a cabo. Camilo Torres, hombre que hubiera podido aglutinar a grandes sectores populares, redujo su actividad política a la abstención electoral y a la lucha armada, a la cual, consecuente con sus palabras,

se vinculó a solo ocho meses de actividad política de masas. Fue un gran error político de Camilo abandonar la acción de masas y un gran error de la dirección militar del ELN al enfrentar a Camilo, sin ninguna experiencia, al combate armado”[4].

Para entonces, el Bloque Sur atribuía la derrota militar de otros focos guerrilleros en el país a manos de las Fuerzas Militares a “[uno], la ninguna comprensión política de lo que es la realidad colombiana y lo que son las fuerzas armadas; dos, inexistencia de una organización capaz de analizar y encausar el movimiento; tres, una política clara sobre cómo hay que actuar con las masas, vivir con ellas y ganarse la simpatía y apoyo, factores fundamentales para la existencia de cualquier movimiento armado. Es por eso que solo nuestro movimiento y el ELN han podido soportar las arremetidas del enemigo […] Es así como han venido cayendo paulatinamente grupos armados en el Valle del Cauca, Magdalena, Caldas y Santanderes”[5].

Por aquellos años, Manuel Marulanda escapó, al menos, a dos intentos de captura. En uno de ellos, Marulanda y sus guerrilleros emboscaron una patrulla del Ejército cerca de Rioblanco, Tolima, a finales de 1973, atrayendo las tropas hacia las caletas donde se escondían. Uno de sus hombres de confianza, Jaime Guaraca, fue capturado y enviado a Cali, varios guerrilleros cayeron muertos, y Marulanda y su gente debieron esconderse en una caleta a solo metros de sus perseguidores. Quince días después, decidieron arriesgarse a escapar del cerco militar cruzando en fila india a través de un claro que, a pesar de dejarlos expuestos, les proveyó la ruta de huida.

Las Farc, desde el principio, se propusieron la toma del poder, y para ello pasarían de ser guerrillas a constituirse poco a poco en un ejército que tomara territorios de forma temporal, y luego de forma definitiva. En los sesenta, apenas cumplían la primera fase de su guerra. “Mientras las Farc no produzcan los lineamientos generales para una guerra de movimiento, que es el comienzo de la estrategia en el terreno práctico, nosotros estamos obligados a desarrollar nuestras tareas a base de táctica”, se resignaban en esos años[6].

Las autodefensas civiles legales y la acción cívica de las Fuerzas Militares pusieron a las guerrillas a la defensiva. Según los manuales de instrucción militar de los sesenta, “la junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que

amenacen el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate". Respecto al uso de armas, los manuales estipulaban que "el armamento y equipo necesario para dotar a las juntas de autodefensa debe ser comprado por los miembros de esta; la unidad militar presta el apoyo necesario para su adquisición y expedición de salvoconductos. En algunos casos, pueden dotarse gratuitamente con armamento decomisado a las guerrillas". En términos de mando, "la junta de autodefensa debe tener un control directo de la unidad militar de la zona de combate y para ello el comandante designa un oficial o un suboficial encargado de transmitir las órdenes correspondientes y de entrenar la agrupación". Las autodefensas civiles no podían realizar acciones ofensivas. "Además de la misión básica de esta organización, que es el rechazo violento de las acciones guerrilleras en su región, la junta de autodefensa puede en situaciones especiales ser utilizada en las siguientes misiones: (1) guardias o centinelas de instalaciones críticas. (2) Patrullas de reconocimiento móviles que recorren áreas críticas de poblaciones y veredas. (3) Puestos fijos de guardia sobre aquellas vías por donde haya peligro de ataques de guerrillas. (4) Control de individuos extraños que entren o salgan de la región. (5) Información a la unidad militar sobre actividades subversivas, de individuos o grupos. (6) En operaciones de control, registro y destrucción, para lo cual se pueden dotar de armas y municiones de uso privativas de las Fuerzas Militares, por el tiempo que dure la acción"[7].

Junto a las autodefensas civiles, la defensa civil causaba estragos en las redes de apoyo de la guerrilla. "La llamada organización de la defensa civil en el campo, así como las juntas comunales en las zonas militares, están casi totalmente en manos de elementos hostiles al pueblo y al movimiento revolucionario", se quejaban las Farc en 1968. "En las reuniones donde el partido tiene las masas organizadas, la política de acción comunal, de acción cívico-militar o defensa civil, no logra de manera total sus objetivos, aunque produce daños"[8].

La lucha por la simpatía de la población estaba en el centro de la confrontación. "Todos los camaradas del curso […] lograron darse perfecta cuenta de cómo el ejército agita su política en la población civil […] El ejército vive dedicado en todas estas zonas a predicar que sí presta apoyo a la población civil, vacunando contra la viruela, inyectando a los moradores, prestando servicios veterinarios, realizando con el curso de las gentes ciertas obras como escuelas, ramales de carreteras, caminos vecinales, construcción de algunas casas que por deterioro u otros motivos no prestan un servicio suficiente, creando un clima favorable para el ejército en busca de la confianza perdida entre las masas. Mientras unos

construyen las obras, como es natural con el concurso de la gente del lugar, en las mismas veredas desarrollan una labor ideológica y política y se muestran muy simpáticos con las gentes”[9].

Las Farc entendían la importancia de responder haciendo trabajo político con la población en sus áreas de influencia como lo proponía la guerra popular prolongada. “Cuando se dispone de una masa organizada y politizada por la guerrilla, masa a donde la guerrilla ha hecho nacer la mística revolucionaria, donde la guerrilla influye en ella, puede haber el enemigo que haya, y la guerrilla puede transitar, puede moverse de un lugar a otro, por en medio de las tropas enemigas. Puede inclusive, permanecer varios días en la zona infectada de Ejército sin ser localizada, porque las masas se encargan de todo lo que sea necesario”[10].

Durante 1968 se hizo evidente la división ideológica que se venía gestando dentro del Partido Comunista alrededor de cómo hacer la revolución. El 6 de enero un grupo armado hizo una toma violenta en el corregimiento de Ure, en Montelíbano, y oficialmente inició su ofensiva militar. Este grupo, conocido como el Ejército Popular de Liberación (EPL), era la expresión armada de una facción dentro del Partido Comunista Colombiano que no deseaba seguir la línea soviética ni la estrategia armada de las Farc. “Partidos para esperar la revolución no son revolucionarios sino evolucionistas, es decir, burgueses”, sentenciaba en una carta Pedro Vásquez, futuro fundador del EPL, ante el Partido Comunista[11].

Desde 1965, un grupo de hombres armados había hecho aparición en la zona para apoyar los levantamientos campesinos en Urabá y los límites entre Antioquia y Córdoba. Para fin de año, empezó a realizar acciones violentas contra algunos campamentos de salud y desarrollo instalados por el Gobierno en la región. El plan era que las “bases de apoyo serían la retaguardia segura para la guerrilla ‘gracias al exterminio del enemigo en su territorio; permitirán el desarrollo de las milicias populares y permitirán formar, con base en los mejores hombres de las guerrillas y de las milicias, los primeros destacamentos regulares del Ejército Popular de Liberación’”[12].

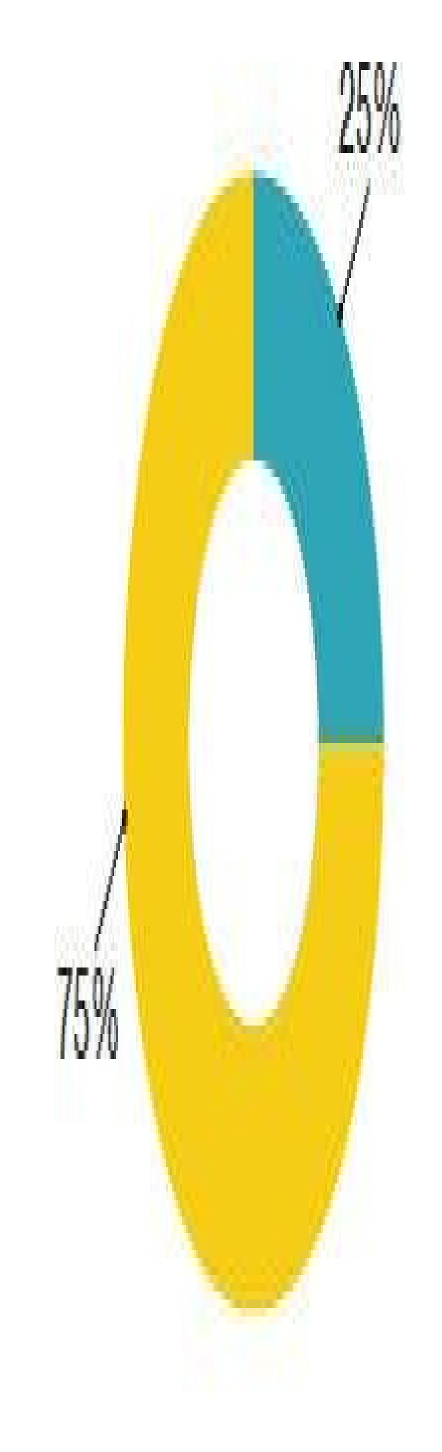
Gráfico 4.

ACCIONES ARMADAS EPL1967-1980

El EPL apeló en este período principalmente a las emboscadas. Después de las Farc, fue el grupo más combatido por las Fuerzas Militares.

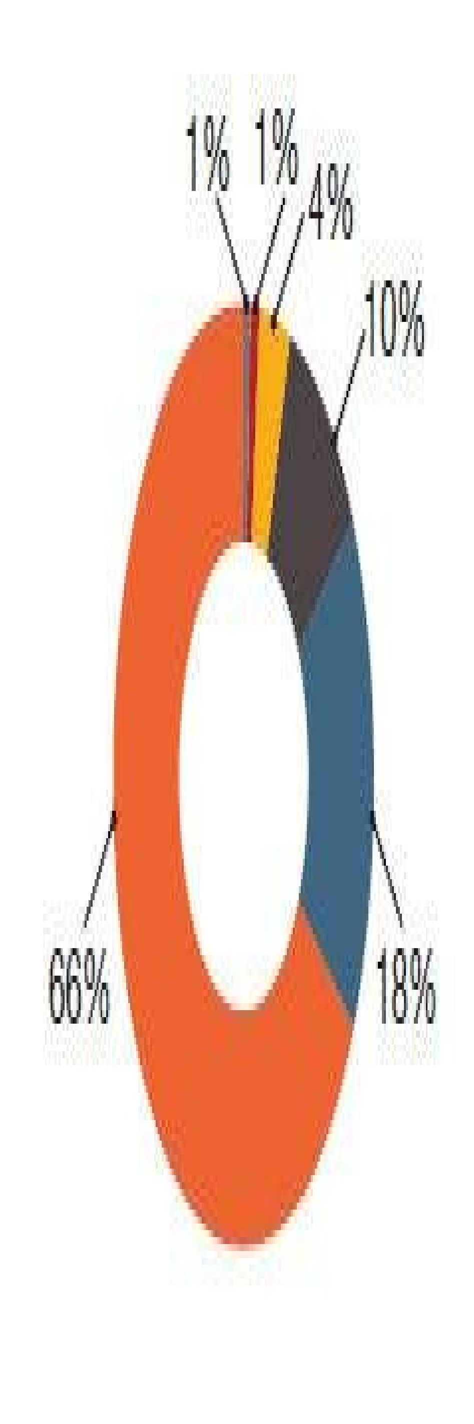
INCIATIVA EPL

	TOTAL
EMBOSCADAS	30
ASALTO A BASES DE PATRULLAJE	10



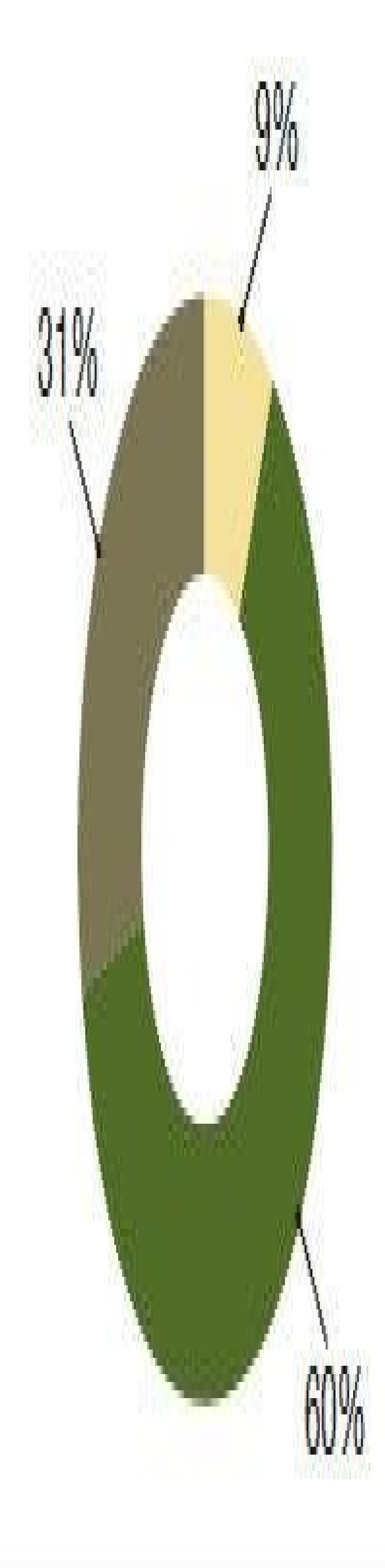
AFECTACIÓN A POBLACIÓN POR EPL

	TOTAL
ASESINATOS CIVILES	88
SECUESTROS	24
ATAQUES A POBLACIONES	13
ATAQUES A VEHÍCULOS	5
ATAQUES A ENTIDADES PÚBLICAS	2
ASALTO A BANCOS	1



INICIATIVA FFMM CONTRA EPL

	TOTAL
CAPTURAS	365
BAJAS	173
COMBATES	55



Fuente: Elaboración propia con datos de Comando del Ejército 1979, 1980, 1981 y 1982. Apreciaciones de inteligencia.

El EPL, como se ha dicho, provenía de una facción dentro del Partido Comunista más cercana a la versión comunista china que a la soviética. Esta facción, denominada Partido Comunista Marxista Leninista, línea china (PCML), planteaba igualmente "la toma del poder por medio de la lucha armada llevada desde el campo a la ciudad", pero haciendo énfasis en la construcción de una base popular de apoyo sólida previo al lanzamiento de una ofensiva armada. El cisma del Partido entre la línea soviética y la línea marxista-leninista, a su vez, generaba divisiones y roces entre las diversas agrupaciones estudiantiles y sociales que se identificaban con una u otra versión.

El mismo año de la aparición pública del EPL, dos de sus comandantes fundadores cayeron en operaciones del Ejército[13], tras un cerco militar en Córdoba. Solo hasta los años setenta pudieron empezar a reconstituirse militarmente. Además de la presión de las Fuerzas Militares, el EPL tendría que soportar la presión de las Farc, siempre recelosas de lo que veían como una disidencia del Partido Comunista. Esta rivalidad duraría siempre. A finales de la década, el Ejército consideraba que el distanciamiento ideológico de ambas facciones "y especialmente las ambiciones de índole personal de sus dirigentes, no permitirá en un futuro cercano la integración"[14].

En 1969, los miembros de las Farc realizaron su tercera conferencia nacional. Ese año las Farc reiteraron su decisión de crear una escuela nacional de formación ideológica "para el estudio de la teoría de la guerra preventiva y la guerra del pueblo con base en el curso de la guerrilla cubana. La idea fue dar base al futuro desarrollo de nuestros cuadros"[15]. Según escribían, "el plan militar que salió de esta Conferencia constaba de nuevas áreas de lucha manteniendo las anteriores. Hubo plan de organización política y de masas, de educación, propaganda, así como otros planes de orden reservado"[16].

En la incipiente escuela de comandantes se impartían "tres meses teóricos sobre el conocimiento de los materiales que son puestos en práctica, como son: filosofía marxista, economía política marxista, línea política y programa del partido, programa agrario de los guerrilleros, guerra preventiva, su filosofía,

ideología política, estrategia y táctica, técnicas de guerra irregular, práctica y experiencias confrontados en cuadros sinópticos con los nuestros, régimen interno y charlas culturales. Todos esos materiales contribuyen eficazmente en la preparación del nuevo tipo de comandante”. Las Farc dispusieron para la escuela cursos de más de un año: “tres meses de teoría, seis de práctica colectiva bajo el mando de un comandante que disponga de algunos conocimientos de la guerra contraguerrillera; seis meses de práctica individual […] Los otros tres meses estarán para la realización de reuniones con el comando, coordinando planes, realizando balances que no son muy fáciles de hacer por las dificultades que se nos presentan impuestas por el enemigo”[17].

Ya a principios de los setenta, las Farc ponían acento en la necesidad de “la educación política, ideológica y cultural de cada combatiente”, incluyendo, por ejemplo, “lograr corregir las malas palabras dentro del núcleo guerrillero, con el fin de ir formando el nuevo tipo de combatientes que nuestro pueblo exige”[18].

Luego de los reveses militares de los primeros años, las Farc aseguraban en su conferencia de 1974, la quinta, que volvían a tener “una fuerza semejante a la que se hizo presente en la Segunda Conferencia [realizada en 1966]”[19]. Tras disolver la comisión nacional de finanzas, las Farc ordenaron a cada frente encargarse de su propio recaudo y contabilidad, entregando cualquier excedente de su presupuesto aprobado al Estado Mayor Central. Cada guerrillero de las Farc, además, empezó a recibir una asignación anual de trescientos pesos —unos once dólares de esa época[20].

Las demandas al Gobierno contemplaban “la entrega gratuita de la tierra” a campesinos necesitados, titulación, anulación de deudas, aumento de salarios a los trabajadores de campo y ciudad, reforma universitaria, “procesamiento y castigo para los reaccionarios civiles y militares que han realizado a partir de mayo de 1964 ‘la guerra de exterminio’ contra supuestas repúblicas independientes”, libertad de ‘presos políticos’ y “anulación de todos los procesos contra guerrilleros y contra personas civiles acusadas de subversión”, e indemnización “a todos los campesinos cuyas propiedades les fueron arrebatadas a partir de mayo de 1964”[21]. Al tiempo, las Farc esperaban que el ELN suspendiera “su campaña anti-comunista” y contra el Partido Comunista, y manifestara su disposición de crear un Frente Patriótico de Liberación Nacional.

Durante la sexta conferencia de 1978, la “más pródiga y rica que han realizado las Farc”, la comandancia decidió que era el momento de dar un salto cualitativo

en su guerra: “Pasar de la guerrilla a la organización de un Ejército Revolucionario. Este ejército se llama Farc-EP, es decir, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo”[22]. Luego de meses de preparación, las Farc desarrollaron “proyectos de estatutos, de reglamento de régimen disciplinario y de normas de comando que conocemos. Hubo en la conferencia un balance general de la actividad del movimiento guerrillero, de su trabajo por la organización de partido y masas, educación, propaganda, finanzas. Como otra de las tesis trataba de la necesidad de pasar, en las áreas guerrilleras, a la organización clandestina del partido, se aprobó la idea. Con ella se está trabajando en la actualidad, con el fin de preservar la organización partidaria de los golpes del enemigo. Hubo reajuste del Estado Mayor Central, del cuerpo de mando y se constituyeron los Estados Mayores de Frente, de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento”[23].

En esta conferencia “se creó en firme el Secretariado del Estado Mayor Central, que venía funcionando desde el Pleno del Estado Mayor de enero de 1973. La conferencia produjo en sus lineamientos el plan general nacional, que luego el Secretariado asignó a los diversos frentes por medio de los Estados Mayores de frente, de conformidad con sus áreas y la importancia táctico estratégica de cada sector, y dentro del contexto general del plan nacional que no conoce sino el Secretariado”[24].

A pesar del entusiasmo inicial, las Farc se dieron cuenta, pocos años después, de que muchos de sus planes habían quedado en el papel. “Hasta ahora nos hemos regido por un plan general para operar en guerrillas móviles, realizar la inteligencia necesaria, ubicar objetivos militares de importancia, concentrar la fuerza de todo un frente, inclusive la fuerza de varios frentes, dar golpes de repercusión nacional, hacer las peleas que el terreno, la fuerza y la disposición combativa nuestra permitieran, y si era necesario, desplazarnos de nuevo en guerrillas móviles para acciones de menor alcance y volver a repetir el ciclo, es decir, repetir lo anterior. Este plan general fue distribuido en planes de frente para un periodo de cuatro años. En la realidad los planes de frente no fueron cumplidos a cabalidad, lo que significa que el plan general no se cumplió tal cual se diseñó. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿por qué no pudimos cumplir los planes trazados por la Sexta Conferencia? [...] En nuestro entender, el factor determinante que impidió el cumplimiento de los planes fue el hecho palmario de que mientras el Ejército ha cambiado su modo de operar, las Farc prosiguen en su misma táctica. Por otra parte, es probable que tanto Estados Mayores de frente, como el mando en general, tengan dificultades para conducción de tropas

guerrilleras a nivel de planes, y además que puede no existir el suficiente dominio en cuanto al trazo y cumplimiento de las misiones militares señaladas [...] Si nosotros logramos en esta conferencia promover siquiera doscientos comandantes más y si como todo lo indica ya contamos con la posibilidad real de obtener armas, habría que decir, sin caer en ilusiones, que pronto tendríamos un ejército”[25].

La autocrítica por el no cumplimiento de sus metas los llevó a revisar el perfil de sus integrantes. La preocupación por el reclutamiento de menores hizo que las Farc intentaran prohibir en 1978 “reclutar personal menor de quince años en el caso de los hombres y, en el caso de las mujeres, menores de diecisiete años”. Además, para estimular a sus guerrilleros, las Farc decidieron crear la ‘orden de Marquetalia’ para premiar el desempeño militar; la ‘orden Isaías Pardo’ para premiar acciones en el combate; y la ‘orden Jacobo Prías Alape’ para premiar “a los destacados en la cuestión política y don de gente”[26].

Justo al contrario del EPL, las Farc habían dado prioridad a lo militar sobre el trabajo de masas. “Hasta ahora las Farc van por su lado haciendo lo que pueden desde el punto de vista militar, sin que sus planes contemplen o se asiente en la perspectiva real del desarrollo del movimiento general de masas […] Es un defecto que estamos obligados a corregir en el inmediato futuro”[27].

Además, ya las Farc reconocían problemas con el Partido Comunista, por lo que creó una comisión que sirviera para resolverlos[28]. Según las Farc, una ponencia presentada en 1979 ante el pleno del Partido Comunista aseguraba que “es necesario liquidar las Farc, ya que antes que bien producen graves dolencias al partido y causan daño al trabajo legal […] Jacobo Arenas encabeza una tendencia divisionista en el partido y es quien ha formulado la tesis de crear un partido clandestino, ajeno al verdadero Partido Comunista de Colombia”[29].

A finales de la década de los setenta, las contradicciones internas, el efecto de las continuas operaciones militares y el limitado impacto de la lucha guerrillera motivarían el intento de nuevas formas de lucha a una nueva generación de insurgentes.

Notas

[1] Bloque Sur 1966. Informe de Marquetalia y Riochiquito a la segunda conferencia del Bloque Sur.

[2] Movimiento Guerrillero Móvil 26 de septiembre de 1965. Informe político y militar a la Segunda conferencia Guerrillera Nacional del movimiento guerrillero 26 de septiembre del sur del Tolima, 21 de septiembre.

[3] Ibídem.

[4] Bloque Sur 1966, op. cit.

[5] Ibídem.

[6] Farc 1968. Cuestiones de orden práctico y recopilación de experiencias de orden técnico de las guerrillas en el balance final de la práctica del primero curso de comandantes de las Farc en el área de operaciones militares”. En Farc (sin fecha). Manual de operaciones de las Farc, 154.

[7] Comando del Ejército 1969c. Reglamento de guerrillas y contraguerrillas. Versión temprana mecanografiada, 159-161.

[8] Farc 1968, op. cit., 148.

[9] Ibídem, 147-148.

[10] Ibídem, 156.

[11] Calvo, Fabiola 1985. EPL. Diez hombres, un ejército, una historia. Bogotá: Ecoe, 16.

[12] Partido Comunista Marxista Leninista 1966. Documentos del Segundo Pleno del Comité Central, septiembre, citados en ibídem, 41.

[13] Uno de ellos era Pedro Vásquez.

[14] Comando del Ejército 1979, op. cit., 35.

[15] Farc 1979a, op. cit.

[16] Farc 1969. Conclusiones políticas y militares de la III Conferencia de las Farc, 14-22 de abril; y Farc 1979a, op. cit.

[17] Farc 1968, op. cit., 168.

[18] Farc 1970. Conclusiones de organización del Segundo Pleno Ampliado del Estado Mayor de las Farc, 16-20 de febrero.

[19] Unos doscientos cincuenta combatientes. Véase Farc 1974a. Conclusiones político-militares de la V Conferencia de las Farc, 4-10 de septiembre; y Farc 1979a, op. cit.

[20] Farc 1974b. Conclusiones de la V Conferencia, 4-10 de septiembre; y Farc 1979a, op. cit.

[21] Ibídem.

[22] Farc 1978a. Conclusiones político-militares de la Sexta Conferencia Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, 18-25 de enero; y Farc 1979a, op. cit.

[23] Ibídem.

[24] Ibídem.

[25] Farc 1979a, op. cit., Farc-EP 1981a. Planteamientos para la reunión del 25. Secretariado con ayudantías. 10 de septiembre; y Farc-EP 1982a. VII Conferencia Nacional de Guerrilleros. Plan Cisne 3 para 21 días, del 4 al 25 de agosto de 1980.

[26] Farc 1978b. Conclusiones de la VI Conferencia Guerrillera. 18-25 de enero; y Farc 1979a, op. cit.

[27] Ibídem.

[28] Ibídem.

[29] Farc 1979b. Reunión del Secretariado del Estado Mayor Central con las ayudantías. Problemas internos del Partido, noviembre.

PARTE II

1974-1985

LA GUERRA EN EL CAMPO

Y LA CIUDAD



Urna donde se hallaba la espada de Bolívar, después del robo por parte del Movimiento 19 de Abril

en 1974. / Foto: Archivo El Espectador.

Capítulo VI

La guerrilla en las ciudades

La irrupción de una nueva guerrilla, el M-19, cristalizó el aprendizaje que los guerrilleros de los años setenta habían tenido del conflicto revolucionario en Colombia y el espejo de otras experiencias en el mundo. Los documentos del M-19 de esos años describen al menos tres elementos que la nueva guerrilla deseaba incorporar de los grupos ya existentes: la estrategia maoísta de guerra popular prolongada como plan de guerra, como lo proponía el EPL; la creación a largo plazo un ejército regular capaz de enfrentarse a las Fuerzas Militares, según lo planteaban las Farc; y la ramificación de la guerra más allá del campo, hacia las ciudades y en conexión con las guerras revolucionarias que se estaban dando en el resto del continente, como empezaba a sugerir el ELN de entonces.

A estos tres aprendizajes de la experiencia de sus predecesores, los comandantes del M-19 sumaron dos planteamientos adicionales que terminaron de consolidar su identidad guerrillera: primero, la necesidad de concentrarse no solo en el terreno militar, sino también hacer la guerra jurídica, política, económica, social y cultural; y segundo, la conveniencia de moderar el discurso, apelando cada vez menos al lenguaje marxista y comunista, y más a uno cercano a ideas de apertura democrática y nacionalismo.

Como dejan claro en sus propios documentos internos de los años setenta y ochenta, las demás guerrillas no estaban convencidas de que esta nueva organización estuviera en condiciones de liderar la revolución en Colombia, y la idea del M-19 de crear un frente único guerrillero, con un tamaño tal que pudiera enfrentarse y derrotar a las Fuerzas Militares jamás se consolidó.

Al combinar actos de propaganda con secuestros, asesinatos y atentados concentrados en zonas urbanas, la guerra del M-19 desafiaba inicialmente la lógica de acción de las Fuerzas Militares, acostumbrada a los combates con las fuerzas guerrilleras en el campo. Luego de su casi desaparición, a finales de los años setenta, la comandancia del M-19 apostó por crecer militarmente mientras confrontaba al Ejército, ahora en campos de batalla rurales, aunque esto le

significaba exponerse a grandes golpes militares, a lo que las demás guerrillas, que habían optado por acumular y conservar sus fuerzas, no se atrevían.

Quienes formaron parte de la élite guerrillera del M-19 se cruzaron muchas veces con otros contemporáneos insurgentes para luego impulsar cada cual sus propios proyectos. Compañeros de colegio y luego en grupos estudiantiles de Caldas, Iván Marino Ospina terminó fundando el M-19 y Manuel Vásquez el ELN. Álvaro Fayad, estudiante, seguidor y amigo del sacerdote Camilo Torres, no se uniría a la guerrilla camilista sino al nuevo grupo en gestación.

Para los miembros de las Juventudes Comunistas que llegaban a las Farc, en 1966, no había mayores tareas militares. Su tiempo se iba en charlas con los campesinos y transcribir documentos de la organización. Pero el pensamiento de algunos se mantenía fijo en cómo ganar la guerra. “La guerra hay que llevarla a donde más les duela”, le decía Marulanda al joven responsable político de su grupo, Jaime Bateman[1], impulsándolo a organizar la guerrilla en la ciudad y atraer nuevos miembros a la insurrección en el campo.

Al Partido Comunista no le hizo gracia la idea de una guerrilla urbana que se atravesara en el camino del trabajo legal. Bateman fue expulsado del partido a inicios de los setenta. La misma suerte corrió su compañero asignado al grupo de Ciro Trujillo, Iván Marino Ospina, salvado por su comandante de fusilamiento por traición[2]. A su vez, los hijos del vicealmirante Juan Antonio Pizarro dejarían las Farc también para, poco después, reunidos en Bogotá, iniciar todos juntos una nueva guerra.

La derrota en las elecciones presidenciales de 1970, convenció a miembros de la Alianza Nacional Popular, Anapo, que solo mostrando los dientes evitarían un nuevo fraude en su contra[3]. El ‘secretario de agitación’ del Partido, Fayad, consiguió armas cortas y subametralladoras, y llamó con eso la atención del grupo de los expulsados miembros de las Farc. Así, en 1973, en Cali, el grupo de Bateman y Ospina y los anapistas radicales sellaron el pacto de nacimiento del clandestino Movimiento Anapista 19 de Abril (M-19)[4].

Una tarde de enero de 1974, los miembros del M-19 condujeron en Bogotá hasta la zona este del Parque Nacional. Dos de ellos, con gafas y vestidos como elegantes turistas, se pasearon por el jardín de la Quinta de Bolívar. Querían asegurarse de que no quedara nadie en el recinto. Antes de que el portero cerrara de forma definitiva la reja, uno de ellos, exmilitar, se abalanzó contra él y lo

golpeó en la nuca. Entraron cinco al recinto, sacaron de un talego sus armas y se enfundaron las capuchas. En el salón París encontraron una desprevenida visitante. En segundos quedó tendida, amordazada y amarrada en el suelo. El vidrio de la urna central estalló, y se apoderaron de la espada de plata de Simón Bolívar, que una de las guerrilleras envainó entre sus botas y ocultó entre su gabardina. Se llevaron también las espuelas y los estribos del Libertador. Unos autos los esperaban a la salida. En poco más de media hora, la Quinta había sido abandonada, pero antes habían dejado las paredes pintadas con grafitis y consignas que hacían alusión al grupo[5]. Pocas horas después, el mismo grupo irrumpió en el Concejo de Bogotá, apenas resguardado por dos hombres incapaces de impedir que los muros también fueran vandalizados con grafitis. Uno de los guerrilleros portaba uniforme de mayor del Ejército[6]. Casi al tiempo, otro grupo dejaba propaganda en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. "Las conquistas populares solo serán duraderas [...] en la medida en que [...] estén respaldadas por el poder de las armas [...] Convocamos a toda la militancia del partido a [...] ganar las elecciones de 1974"[7]. Con esta acción, el M-19 dejaba claro su deslinde de la estrategia del Partido Comunista, y abrazaba la idea de convocar a un movimiento amplio de izquierdas para intentar convertirse en gobierno.

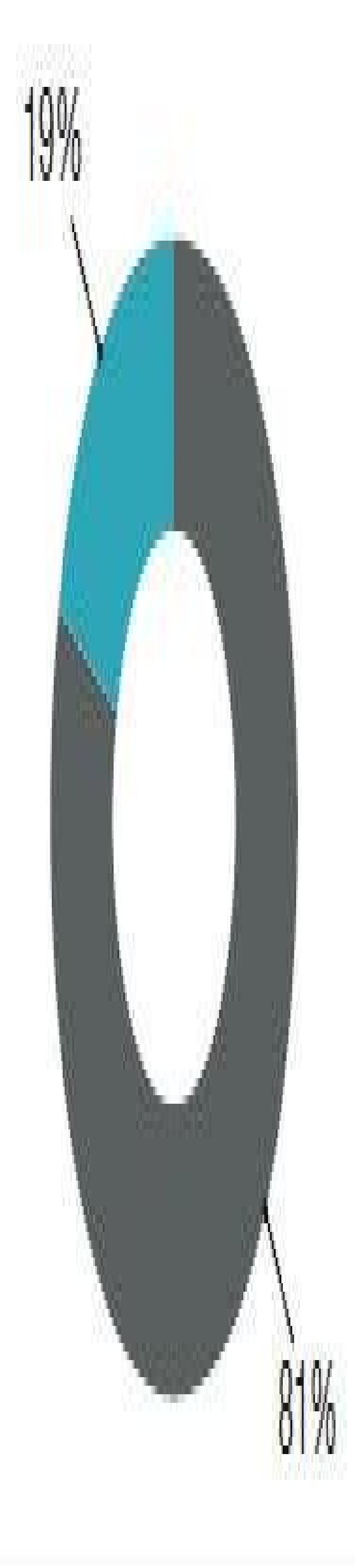
Gráfico 5.

ACCIONES ARMADAS DE M-19, 1974-1980

Las capturas sufridas por el M-19 casi condenan al grupo a la desaparición durante este período. Sus acciones contra entidades públicas y en las carreteras le otorgaban gran visibilidad urbana.

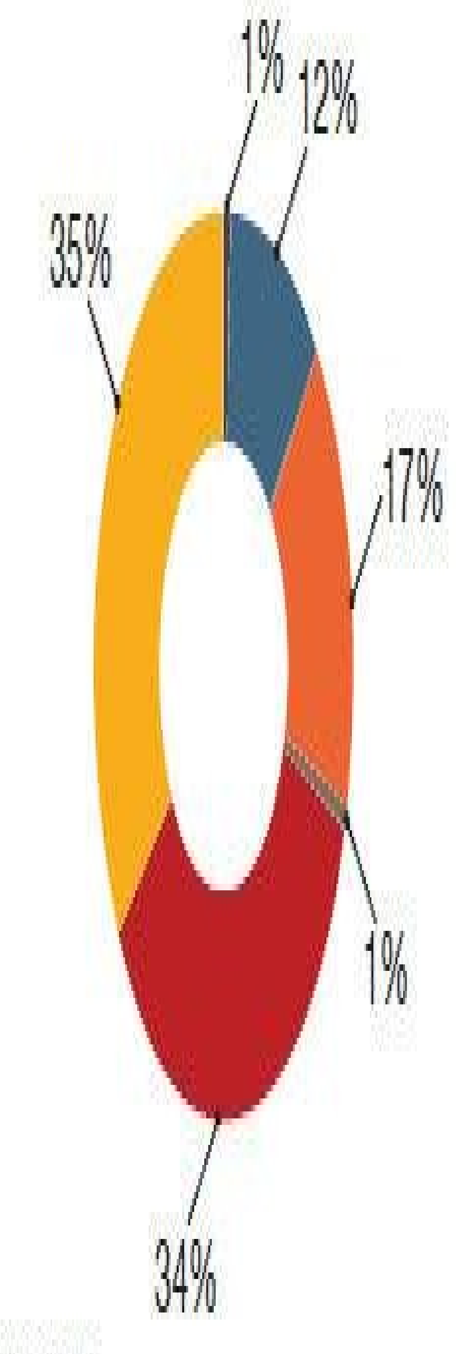
INICIATIVA DEL M-19

	TOTAL
ATAQUE CON EXPLOSIVOS	21
ASALTO A BASES DE PATRULLAJE	5



AFECTACIÓN A POBLACIÓN POR M-19

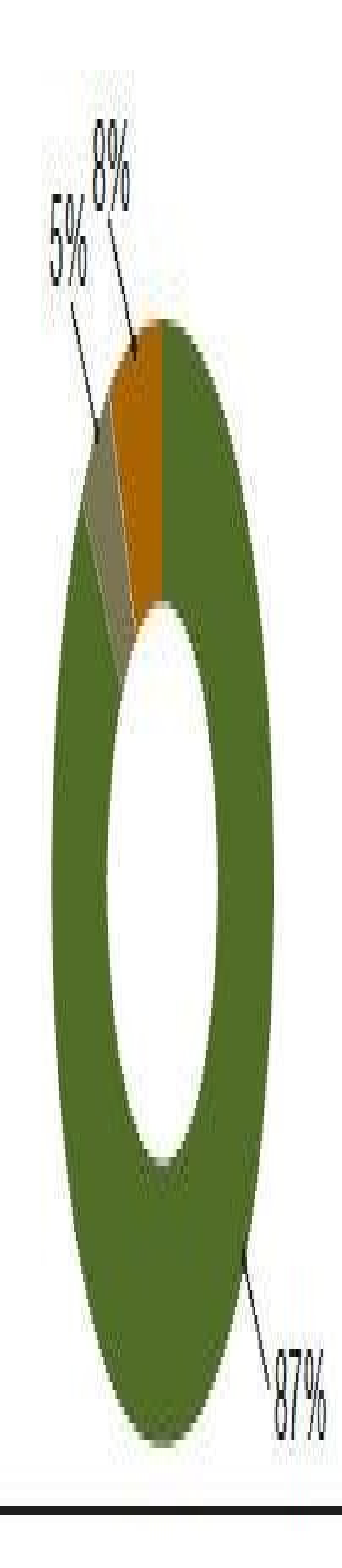
	TOTAL
ASALTO A VEHÍCULOS	55
ASALTO A ENTIDADES PÚBLICAS	54
ASESINATOS CIVILES	26
SECUESTROS	19
ASALTO A BANCOS	2
ATAQUES A POBLACIONES	1



Nota: En 1980, el M-19 se tomó el consulado de Bolivia en Bogotá y la Embajada de la República Dominicana

INICIATIVA FFMM CONTRA M-19

	TOTAL
CAPTURAS	309
ASILOS	28
BAJAS	18



Fuente: Comando del Ejército 1979, 1980, 1981 y 1982. Apreciaciones de inteligencia.

Con gran desconfianza, las Farc prohibieron en 1974 “toda relación con contacto” con el M-19 debido a la “posible infiltración en el Partido y en las Farc de este grupo, donde se alojan elementos provocadores de los servicios de inteligencia del enemigo”. Aquellos que pasaron de las Farc al M-19 fueron tildados de ‘desertores’. Ellos “hacen anticomunismo desde un grupo en cuyo seno actúa el provocador y agente del enemigo Iván Ospina”[8]. Ya para 1978, las Farc cambiaron de opinión y optaron por “buscar la coordinación de acciones armadas con otros grupos subversivos, tales como el M-19 y el ELN”. Sin embargo, advertían que “se trata de compañeros fuertemente influidos por la ideología de la pequeña burguesía, en quienes no hay absoluta seguridad ni se puede confiar […] De todas maneras, nosotros no cerramos las puertas a la unidad de acción”[9].

En los años setenta, el nuevo grupo guerrillero combinaba actos coloridos que buscaban generar simpatía popular, con hechos de guerra y cruda violencia. Justamente antes del robo de la espada de Bolívar, la prensa publicó una curiosa campaña publicitaria de expectativa. “Parásitos gusanos… ? Espere M-19 [...] Decaimiento, falta de memoria… ? Espere M-19 [...] Falta de energía, inactividad… Espere M-19”. Ya hecha pública, la insurgencia entraba amable a un colegio en Bogotá para izar una bandera; dejaba estandartes y ofrendas en la calle al líder popular Jorge Eliécer Gaitán; cantaba el himno nacional mientras irrumpía en la Universidad Nacional; se tomaba un teatro en Zipaquirá para hacer su escena; y robaba miles de litros de leche, ropa y alimentos en Cali, Bogotá y Medellín para regalar a los más necesitados[10].

Al tiempo, el asalto a bancos y el secuestro también se convertían en parte del sello de las guerrillas del momento[11]. El primer millón de dólares que recibió el M-19 provino del rescate pagado para la liberación del gerente de la multinacional Sears, secuestrado por el grupo insurgente. Este dinero les permitió fundar empresas, invertir en negocios legales y finca raíz, y financiar el grupo en los años por venir[12]. Combinando la motivación económica y la oportunidad de hacer propaganda, gerentes, empresarios, embajadores, periodistas y políticos fueron víctimas de secuestro en esos años.

Un caso de gran impacto fue el secuestro del líder sindical José Raquel Mercado en 1976[13]. Desde el día uno fue sedado y puesto en una celda bajo tierra, en una de las llamadas 'cárceles del pueblo'. El líder fue acusado de "deslealtad con la clase trabajadora"[14]. Guerrilleros que actuaban como jurados juzgaron por días a Mercado en un 'consejo revolucionario', evaluando el pedido del 'fiscal' de condenarlo a la pena capital, mientras la autodefensa de Mercado clamaba inocencia en traje de prisionero. 'Culpable', sentenciaron los jurados.

La ciudad se llenó de panfletos del M-19. "Vote sí o no, y haga sentir su voto", pedían al 'pueblo' para definir la culpabilidad de Mercado. "Escriba diciendo sí o no a la prensa y revistas de izquierda y de oposición. A la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Unión de Trabajadores de Colombia… A las demás organizaciones sindicales. A la Junta Comunal, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc"[15]. En billetes, paredes y lugares públicos algunos aceptaron el llamado a pronunciarse.

"Mercado sí es culpable", se leía en un grafiti, según la foto que ilustraba el comunicado del M-19 en el que intentaba presionar al Gobierno a un arreglo. "Conmutación de la pena a cambio de: 1-reintegro de los trabajadores despedidos. 2-estabilidad laboral. 3-reproducción de este periódico en la gran prensa"[16]. La negativa del Gobierno traería la retaliación. "Lo han abandonado a su suerte", justificaba uno de sus captores. Una segunda votación entre los guerrilleros reiteró la condena a muerte. Dos disparos acabaron con la vida de Mercado en la madrugada de un 19 de abril. Vestido de nuevo con su ropa, fue abandonado frente al parque El Salitre, en Bogotá[17].

La Conferencia Nacional del M-19 del año siguiente, 1977, discutió por primera vez una estrategia para la toma del poder. "La construcción del socialismo implica irremediablemente la destrucción del Estado oligárquico"[18]. Para ello, adoptarían la estrategia de guerra popular prolongada, con una visión continental.

El nombre de 'guerra popular' venía de la idea de involucrar a las masas, a "la mayor participación de todas la clases y estamentos sociales", no en determinadas regiones o focos, "sino en todo el territorio nacional"[19]. El M-19 consideraba que las guerrillas de la época hacían "una guerra de vanguardia, una guerra local, de élites, circunscrita a determinadas áreas geográficas, alejadas de las masas [...] En la práctica, alejada de la guerra popular"[20]. El grupo apostaba por una guerra prolongada, pues esperaban con el tiempo cambiar la correlación

de fuerzas, inicialmente a favor del Estado. Pero rechazaban la idea de acumular un ejército antes de lanzar una ofensiva, como buscaban las Farc, o esperar que su ejemplo motivara una insurrección popular, como proponía el ELN. En su lugar, Bateman insistía en crecer como 'ejército' mientras se combatía y "pelear todos los días [hasta] que se dé la gran batalla"[21].

De ahí que, en lugar de dispersar la fuerza en diversos frentes, como las Farc, el M-19 apostaba por concentrarla en un solo ejército. "Nosotros tenemos un solo frente, el del sur, pero mantenemos una actividad constante. Si diecisiete frentes guerrilleros implicaran un gran accionar militar yo estaría de acuerdo", explicaba Bateman. "Pero fíjese, en la práctica no sucede eso. Todo lo contrario. No hay actividad militar [...] Se trata de eso, de tener una fuerza militar sólida. Tener una guerrilla que se transforme, en el proceso, en un ejército regular"[22]. Finalmente, planteaban una guerra continental, bajo la idea de que "crear dos, tres o más Vietnam en América Latina es la estrategia para enfrentar al imperialismo"[23].

Al año siguiente, 1978, el M-19 creó su primera estructura organizacional político-militar con línea de mando, con el objetivo de que lo político —sobre todo la búsqueda del apoyo de las masas— armonizara con la estrategia de guerra y la visión ideológica. Para ello, además de 'oficiales' y 'aspirantes', el M-19 se valdría de 'colaboradores' que servirían de lazo con la población[24].

En tal reorganización, el grupo de la llamada 'Anapo socialista', con un pie en el M-19 y otro en el partido legal, no pudo mantener más tal equilibrismo: a finales de ese año sus líderes, como el representante a la Cámara, Carlos Toledo, se fueron a engrosar las filas guerrilleras, al tiempo que el M-19 fraguaba el robo de armas más grande de la historia del país[25]. Este grupo sabía que las setenta armas robadas a la firma transportadora Thomas de la Rue, dos años antes, no serían suficientes para conducir a Colombia hacia una guerra civil. Por eso alquilaron una casa en el norte de Bogotá, separada apenas por una calle del Cantón Norte. Durante cuatro meses, integrantes del M-19 se dedicaron a excavar un túnel de 72 metros hasta llegar al piso de los depósitos del Ejército. En la tarde del 30 de diciembre, abrieron un pequeño orificio por el que introdujeron un periscopio. Vieron que el lugar estaba vacío. Con un gato hidráulico, empujado por el motor de un carro, lograron romper un hoyo suficiente para que entrara una persona. Mientras dos guerrilleros hacían ruido con pólvora frente a la casa, el resto empezó la extracción de armas el 31 de diciembre en la mañana. En la tarde del primero de enero de 1979, habían logrado evacuar varios camiones llenos de fusiles, granadas, ametralladoras,

carabinas, revólveres, pistolas, escopetas y munición[26]. Uno de los fusiles tenía una etiqueta amarilla que indicaba que había sido recuperada en Patio Cemento, Santander, y que pertenecía al sacerdote Camilo Torres, muerto en ese lugar una década atrás. Cuando el Ejército se dio cuenta, la mayor parte de las armas había sido robada y, en su lugar, quedaban grafitis y una gran bandera del M-19[27].

Parte del armamento robado llegó a Caquetá y, según el M-19, sirvió para iniciar su campaña militar en el sur. Otras armas fueron almacenadas en Zipaquirá, otras más fueron enviadas a Cuba y unas pocas fueron usadas el año siguiente en la toma de la embajada de República Dominicana[28].

Inmediatamente después del robo, la mayoría de líderes del M-19 viajó a Centroamérica y dejó abandonadas una decena de propiedades en el país, sobre todo en Bogotá. Pero tal huida no evitó el contraataque oficial.

Solo dos días después del robo, el Ejército encontró en Bogotá una de las 'cárceles del pueblo', donde estuvo secuestrado ocho meses el empresario Nicolás Escobar, de la petrolera Texaco[29]. De acuerdo con el testimonio de uno de los suboficiales que participó en la operación, el Ejército hizo un seguimiento de meses a las actividades de dicha 'cárcel' en el barrio Lucerna. "El doctor Toledo Plata[30], ubicado en Bucaramanga, tenía un conductor de apellido Gaitán y a ese conductor lo habían tenido trabajando ahí en el barrio Lucerna haciendo la 'cárcel del pueblo'. Pero él no sabía dónde quedaba eso. Inteligencia logró abordarlo y se comprometió a colaborar para tratar de encontrar eso. Duramos con ese señor casi un mes, porque decía: 'Yo me acuerdo que es más o menos por aquí'. Al lado estaban construyendo algo. Le conseguimos trabajo como obrero a un cabo para que mirara cuál era el movimiento de esa casa. Teníamos las placas de todos los carros, los movimientos".

Sin tener toda la información deseable, decidieron entrar. "En la entrada de la cocina, junto a la papelera de un baño, se bajaba una baldosa. Ahí había una argolla pegada a una plataforma corrediza. Al bajar la argolla se corría una plancha del piso que conducía a una plataforma. Por ahí se bajaba en un ascensor de compensación de fuerzas. No podía ser ni muy pesado ni muy liviano, mínimo tres personas. Por este ascensor se bajaba a la 'cárcel del pueblo'. Donde yo entré, había una cama empotrada con su reja. A cinco metros de profundidad. Cuando empezaron a disparar hacia arriba, se armó un tiroteo terrible. Bajamos y encontraron al doctor Nicolás Escobar Soto. Lo mataron. Estaban unos 'oficiales mayores'[31], entre ellos José, que era uruguayo. Los dos murieron. En el cuaderno

que se les quitó, había un documento donde tenían escrito: en caso de que el enemigo los frentiara, ellos morían y moría el secuestrado. Se sacó por el ascensor el cadáver. El comandante nos dijo: ‘uy, ¿qué pasó?’ [estaba] supremamente acabada la persona, no se parecía en nada”[32].

En los seis meses siguientes, el Ejército registró alrededor de setenta operaciones en veintiún municipios del país que dejaron cientos de capturados[33], incluido Iván Marino Ospina en Cali[34], cinco uruguayos (tres de ellos antiguos guerrilleros tupamaros)[35], un sacerdote del grupo Golconda[36] y seis indígenas con armas y equipo militar[37].

En septiembre de 1979, dos helicópteros aterrizaron en un campo cerca de Bolívar, Santander. Desde una casa, dos centinelas opusieron resistencia y murieron en el tiroteo. Según recuerda un oficial que protagonizó la operación, “a los dos minutos salieron unas mujeres con niños en brazos, y unos guerrilleros se entregaron junto con Carlos Pizarro. Llamé a un oficial y le alisté un helicóptero a Margoth, su madre y viuda del almirante Pizarro, para que lo visitara en Cimitarra”[38]. En pocos meses, el Ejército recuperó las armas robadas del Cantón, que estaban escondidas, sobre todo, en caletas de Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué y Bucaramanga[39]. Los dirigentes del M-19 habían dicho que robaron el 70 % de la bodega del Cantón, unas siete mil[40], aunque el Ejército contabilizó una pérdida de menos de seis mil[41].

Un total de 247 presuntos miembros del M-19 fueron arrestados en el lapso de un año[42]. Los jueces militares dictaron autos de detención en unidades operativas y los juzgaron en Consejos Verbales de Guerra[43]. Para 1982, la cifra de detenidos llegó a 560[44]. A raíz de las detenciones, un Comité por los Derechos Humanos, presidido por un excanciller y conformado por exmagistrados, periodistas, sindicalistas, políticos de izquierda, académicos y artistas, inició una campaña de denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales[45], coincidiendo con las mismas denuncias que entonces hacía el M-19[46], y con campañas impulsadas por las Farc[47]. Todas fueron negadas por el gobierno de la época[48]. La discusión sobre el tema se prolongó en la prensa por años y, aunque no condujo a mayores sentencias judiciales[49], contribuyó a ambientar varias ofertas de indulto por parte del Gobierno[50]. Para el Ejército, las acusaciones eran producto de “elementos de izquierda” que promovían campañas de descrédito contra las Fuerzas Militares[51], para “quitarles el apoyo de la población” y “reducir la capacidad de estas para desarrollar una acción eficaz contra los subversivos, principalmente la relativa a obtener inteligencia a través de los interrogatorios, pues esta ha sido la principal

vulnerabilidad de las organizaciones subversivas”[52].

El contraataque de las Fuerzas Militares, luego del robo de las armas, les permitió “conocer con bastante exactitud su organización, ideología [...], el dispositivo rural y urbano, sus sistemas de operación. [En 1979] sus dirigentes e integrantes, en su mayoría, estaban detenidos o plenamente identificados”[53]. Tal evaluación precipitó a algunos analistas militares a sugerir que el M-19 estaba “casi extinguido”[54].

Guerra combinada

Durante su Conferencia Nacional de 1979, cerca de Bogotá, el M-19 reconoció la muerte reciente de al menos nueve comandantes y el encarcelamiento de quince más, así como la baja de un centenar de guerrilleros de base. En aquel entonces, el M-19 era para las Fuerzas Militares “prioridad número uno”, por encima de las Farc, el ELN y el EPL[55].

La recuperación del M-19 como organización, después de su desmembramiento militar, se puede explicar, en parte, por la convicción ideológica de sus miembros, muchos de los cuales regresaron a la organización después de ser capturados y liberados[56]. “Muchos de los integrantes de la organización son individuos con buen nivel cultural y excelente estructuración revolucionaria”, evaluaba el Ejército en 1980. “Continuamente es obligatorio para sus miembros la asistencia a seminarios, cursillos ideológicos y de instrucción militar”[57].

La liberación de todos sus presos fue esgrimida por los líderes del M-19 como una de las motivaciones para hacer la toma de la embajada de la República Dominicana en Bogotá, en 1980. Aunque el botín obtenido se contaba también en dinero y armas. En total dieciséis personas, catorce de ellas embajadores, fueron secuestrados por dos meses a partir de la toma, hasta que el comando armado se desplazó al aeropuerto de Bogotá, dejó en libertad a seis y viajó en un avión cubano hacia la isla, donde liberó al resto[58]. Tanto el presidente de Cuba, Fidel Castro, como el jefe del M-19, Jaime Bateman, se comunicaron con el presidente de la República para negociar la liberación de trescientos presos y la entrega de un millón de dólares que Bateman aseguró haber recibido[59]. “Cuando todo el mundo creía que estábamos enterrados [...] que nos habíamos asilado [...]”, se jactaba el M-19, “surgimos de las cenizas y nos tomamos la embajada”[60].

Aun sin conseguir la liberación de los integrantes del M-19, el tema de la amnistía se tornó en debate nacional. El M-19 acudió a la toma armada de emisoras para exigir libertad sin condiciones a sus presos, al secuestro de un congresista ponente de una ley de amnistía restringida y a la interferencia de la señal abierta de televisión del país. En varias ocasiones los colombianos vieron interrumpidos sus programas por la señal de Revolución TV M-19[61]. El lanzamiento de la candidatura presidencial de Bateman, en 1980, a través de televisión y radio, coincidía con la promoción, por parte de algunos líderes de

izquierda, de un frente democrático legal en el que participaran dirigentes del M-19, el ELN, el Partido Comunista, dirigentes gremiales, escritores, periodistas y políticos liberales y conservadores ‘progresistas’, algunos de los cuales apoyaban tal proyecto[62].

A pesar del lenguaje de sus documentos fundacionales, el M-19 buscaba distanciarse públicamente del dogmatismo ideológico. Bateman aseguraba que el M-19 “no es un movimiento marxista-leninista” y “no es un movimiento que tiene como bandera el socialismo […] Nuestro movimiento es nacionalista […] Tenemos pluralismo ideológico. El 80 por ciento de los militantes son católicos”[63]. Paralelamente a los esfuerzos de la izquierda legal por crear un movimiento de coalición, el M-19 decidió crear un frente amplio de masas para promover su plataforma política, a la vez que mencionaba la existencia de miembros de la política y la sociedad colombiana como dirigentes clandestinos de su movimiento[64]. Dicho frente sería desmantelado después, cuando el M-19 decidió regresar a la clandestinidad y enfocarse en la lucha armada en el sur[65].

En 1980, desde Panamá, y luego desde Costa Rica, Bateman, Toledo y el recién fugado Iván Marino Ospina, invitaban al Gobierno a dialogar y promover una amnistía amplia, al tiempo que la estrategia de guerra en el sur empezaba a escalar. “No estamos planteando una revolución profunda”, matizaba Bateman, “estamos planteando una revolución dentro de los marcos de la actual situación del país […] Aun más, estamos dispuestos a legalizar nuestra actividad”[66].

El año siguiente, sin embargo, el Ejército reportaba la casi destrucción de las columnas rurales en Barrancabermeja y Cauca[67]. “La falta de experiencia en la lucha rural y el desconocimiento del terreno fue adverso para sus integrantes”, evaluaba sobre el M-19 a inicios de la década. “Esta situación […] debe explotarse al máximo […] antes de que los grupos guerrilleros […] adquieran experiencia, conocimiento del terreno y logren el apoyo de la población civil”[68].

Para principios de la década, el M-19 se organizaba en estructuras de varias columnas guerrilleras —llamadas Regionales— en Bogotá, Boyacá, Bucaramanga, Magdalena, Ibagué, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Medellín. Estas estructuras sumaban unos quinientos integrantes. Además, desplegaba grupos de guerrillas rurales —llamadas Móviles— en los límites del Huila, Cauca y Caquetá, entre Cauca y Valle, en Tolima, Boyacá y Barrancabermeja, que sumaban quinientos miembros más. Esto sin contar con unidades más pequeñas en todo el occidente del país, desde la costa Caribe hasta Putumayo[69].

Dentro de todas las estructuras, la regional en el Caquetá, denominada Frente Sur, había logrado consolidarse en el área y ejecutar algunas acciones exitosas, incluyendo la toma del corregimiento de Currillo, en Belén de los Andaquíes, y su cuartel de policía, y emboscadas para detener la reacción del Ejército[70]. Con casi cuatrocientos hombres, esta regional representaba el 30 % de la organización[71].

La campaña en el sur iba a recibir un impulso con la invasión de dos grupos del M-19 que regresaban de Cuba y Centroamérica a las costas de Chocó y Nariño. Pero la incursión terminó mal. En 1981, la captura de un camión lleno de armas entre Mocoa y Pasto, ocultas entre chontaduro y coco, puso en alerta al Ejército, que recibió por sorpresa al grupo de Tumaco con una fuerza de cuatro batallones. Tras la muerte de trece guerrilleros y la captura de veintisiete más, unos cincuenta guerrilleros huyeron a Ecuador. Tras poco tiempo de camino hacia el poblado de Robalindo, un grupo de policías suspicaces detuvo la marcha de los foráneos vestidos casi todos de uniforme caqui estadounidense. En días, el grupo, incluyendo a Carlos Toledo, fue deportado hacia Colombia y enviado a la isla de Gorgona, donde continuaría el Consejo Verbal de Guerra iniciado hacía más de un año.

Solo un mes después, 37 guerrilleros caían abatidos en las selvas del Chocó, incluidos dos comandantes[72], y un centenar fueron capturados junto con más de doscientos fusiles, subametralladoras, lanzacohetes y pistolas. Tras el éxito del golpe de mano militar, el Gobierno decidió suspender relaciones con Cuba, acusada de patrocinar el asalto de la costa Pacífica y entrenar a los guerrilleros para la acción. El colofón del fracaso guerrillero llegaría meses después. En noviembre de 1981, un buque de la Armada Nacional combatió durante tres horas, cerca del puerto de Buenaventura, con los tripulantes del barco Karina, de bandera hondureña y proveniente de Alemania, que transportaba uno de los cargamentos de armas más grandes que se hubiera visto en el país. Perseguido desde su paso por el Canal de Panamá, el hundimiento del barco se llevó consigo un millón de dólares invertidos por el M-19 y otras guerrillas. “La orden que tenían los compañeros”, aseguraba Bateman, “era de no dejar caer el barco en manos del enemigo. Eso fue lo que hicieron, hundir el barco”[73]. Con el secuestro de un avión de Aeropesca, el M-19 consiguió rescatar unos quinientos fusiles trasbordados del Karina antes de llegar a Chocó, de los cuales doscientos de todas formas terminaron en manos del Ejército cuando los halló en una caleta en Caquetá.

Pese a los reveses, ya el M-19 empezaría a cristalizar alianzas militares con los demás grupos guerrilleros. En 1981, el M-19 anunciaba en Medellín, a través de su señal ilegal de televisión, la acordada unidad de acción con el ELN[74]. Mientras tanto, a la vez que el M-19 desarrollaba su campaña en el sur y el Pacífico, las Farc dinamitaban un puente en el río San Pedro, en San Vicente del Caguán —matando a seis soldados—, secuestraban al alcalde de Belén de los Andaquíes y, con ataques de bazucas y granadas, tomaban Puerto Solano y San José de la Fragua, todo en Caquetá.

Prolongando la escalada en 1981, el Frente Sur del M-19 coordinó el secuestro de un helicóptero en Putumayo que transportaba tacos de dinamita. Un mes después del robo del helicóptero, el M-19 hizo explotar la planta eléctrica de la estación de bombeo de Ecopetrol entre Orito y Puerto Asís, y abrieron las válvulas para derramar unos doscientos barriles de crudo. El M-19 prolongó su arremetida en 1982 con ataques en Bogotá contra el Presidente, contra el procurador y contra la embajada de Israel. La presión armada, calculaba el grupo, los conduciría al logro de su anhelada amnistía.

La ola de secuestros llegó entonces al puerto de las mafias. Al secuestrar hombres del círculo de Pablo Escobar, el M-19 desataría una fuerza violenta que con los años se volvería contra ellos y arrasaría a su paso con la vida de decenas de miles durante más de dos décadas de justicia privada[75].

El país observaba a un M-19 dispuesto a poner sangre en la guerra. Además de las bombas en edificios públicos y universidades, robos a bancos y acciones de propaganda armada, el grupo guerrillero atacó con morteros el Palacio de Nariño en julio de 1982, como lo había hecho un año antes. “Hoy los despertamos nuevamente con el fuego de nuestros morteros”, reconocía el M-19, “porque con el pueblo colombiano recordamos su Gobierno como el desastre de la tolerancia y de la intransigencia […] reafirmamos ante el pueblo y ante el presidente electo […] nuestra disposición al diálogo”[76].

De amnistías y treguas rotas

El nuevo gobierno en 1982 mejoró la oferta de amnistía a los grupos guerrilleros con la esperanza de iniciar un primer proceso de paz para darle salida negociada a la guerra[77]. Si bien fueron las Farc quienes primero prestaron atención al llamado presidencial, pronto el M-19 se subiría también al bus de la paz, logrando la excarcelación de sus miembros por medio de la ley de amnistía[78].

En junio de 1983 se cumplían dos meses de la caida de la avioneta que cobró la vida del líder máximo del M-19, Jaime Bateman, cuando viajaba en compañía de un senador conservador y dos de sus compañeros de filas entre Santa Marta y Panamá. Apelando a una nueva interferencia televisiva, comunicaron su alianza con las Farc. Posteriormente, en octubre, Ospina y Fayad se reunieron en Madrid con el presidente Belisario Betancur, y precipitaron su decisión de abordar el proceso de paz de forma conjunta con sus colegas de las Farc.

"El Presidente dice que va a hacer la paz. Se reúne con guerrilleros en Palacio, se va a España y allá van los guerrilleros", comentaba al respecto un exministro de Defensa militar del momento. "Las relaciones [del Gobierno] eran muy distantes con el mando militar. El que mandaba no era el ministro de Guerra, sino el de Comunicaciones. Era el que iba a Corinto a hablar con el M-19. Eso no nos podía gustar a nosotros [los militares], pero fuimos respetuosos a regañadientes". Agrega que "llevar guerrilleros a Palacio sin contarle a uno, reunirse clandestinamente con esos, tener un civil haciendo y deshaciendo... Nosotros no estábamos de acuerdo con eso"[79]. La amnistía ofrecida desde el gobierno anterior podría generar, temían los soldados, una "intensificación de la acción subversiva […] principalmente [de] los presos liberados y de aquellos […] que se sienten estimulados por su propia apreciación de impotencia y debilidad del sistema para reprimirlos"[80]. Tal era la descoordinación entre el esfuerzo militar y la política de paz, que los soldados percibían múltiples interferencias a su labor por parte de los funcionarios del Gobierno, quienes no parecían actuar con el conocimiento del Ministerio de Defensa y que en ocasiones obligaban a la suspensión de operaciones[81].

Pero la iniciativa de paz no detuvo los planes de guerra. Durante el inicio de 1984, el Ejército persiguió en repetidas ocasiones a un grupo de guerrilleros dedicados a detener vehículos en las afueras de Florencia, Caquetá, pintarles grafitis y llenarlos de panfletos. Los miembros del M-19 asumieron que, con tal

distracción a las tropas, y la policía ocupada en época de elecciones, no encontrarían mayor resistencia en el centro de la ciudad.

El 7 de marzo de 1984 en la mañana, unos 120 guerrilleros llegaron en dos buses de servicio público y tres camionetas desde la carretera que desde Neiva lleva a Florencia. Ya en la ciudad, el comandante Boris distribuyó a su gente en cuatro grupos que de inmediato entraron a atacar: un grupo se tomó las instalaciones de un edificio de la Gobernación, e inició un incendio que arrasó con archivos y oficinas; otro, vestido con prendas del Ejército, mató al guardia de la cárcel para facilitar el escape de 93 presos y robar algunas de las armas del lugar; un tercer grupo se instaló afuera del batallón Juanambú para abrir fuego desde distintos ángulos; el grupo más numeroso atacó la plaza principal de Florencia y, rápidamente, asaltó cinco de los bancos del lugar. Las tropas en el batallón no sabían qué hacer. Sin plan de reacción, los comandantes y la plana mayor del batallón agruparon de manera instintiva a los soldados en pequeñas unidades que disparaban a todos lados sin saber de dónde venía el ataque. En medio del caos, despegó desde un patio del batallón un helicóptero artillado que, con poco combustible y el motor desajustado, espantó a los grupos guerrilleros[82].

Solo un mes después, el M-19 repetía una toma exitosa, al hacer rendir el cuartel de policía de Corinto, Cauca, robar armamento y equipos, y usar la acción para proponer un diálogo nacional y un cese del fuego. En agosto, Carlos Pizarro, quien junto con varios miembros de la cúpula del M-19 había aceptado la amnistía el año anterior para salir de la cárcel y viajar a Cuba, ahora estampaba su firma en un acuerdo con el Gobierno para un cese del fuego bilateral y la convocatoria de diálogo nacional[83], en el mismo lugar de la toma, como vocero principal para los diálogos de paz[84].

Para el M-19, el diálogo nacional llegó justo en pleno crecimiento militar. Durante esos años, en el sur del país, “la gente entraba en masa a la guerrilla”, recordaba uno de los comandantes del M-19 durante una conferencia guerrillera. “Uno pasaba por un pueblo, y salían todos los estudiantes. Los compañeros organizaron no sé cuántos comandos de lucha local —trescientos, cuatrocientos — y el entusiasmo estaba a la orden del día […] Había una concepción: la de construir un ejército, concentrar fuerzas, concentrar mandos, y darle regularidad a las operaciones”[85].

En los meses posteriores, el Ejército y el M-19 se enfrentaron en varias ocasiones cerca de Yarumales, Cauca, donde el grupo guerrillero instaló un

campamento para organizar su IX Conferencia Nacional en febrero de 1985[86]. Para mayo, había campamentos en los barrios populares de Cali, en Pradera (Valle), Bogotá, Zipaquirá, Medellín, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla, así como diversos combates de Ejército y guerrilleros entre Cauca y Valle[87]. Sin autorización del Gobierno, el M-19 aprovechó el campamento de Yarumales para reunirse con periodistas y líderes políticos y sociales, así como representantes extranjeros y de otras guerrillas, motivando las operaciones del Ejército.

"Durante la tregua, mientras no hubiera cese de operaciones, las tropas podían actuar en todo el territorio nacional", narra un exministro de la época. "Hay cordón, el Ejército está ahí en las áreas, pero no salía a patrullar"[88]. El M-19 se quejaba de los "retenes militares en los caminos […], la permanencia de la tropa en los puntos que se había comprometido a desalojar […] el control de vías, y el hostigamiento a los habitantes de la región"[89], y en junio de 1985 declaró rota la tregua. En cuestión de días se lanzó a la ofensiva, primero contra un puesto de policía en Génova, Quindío, y posteriormente en Riofrío y Bolívar (Cauca).

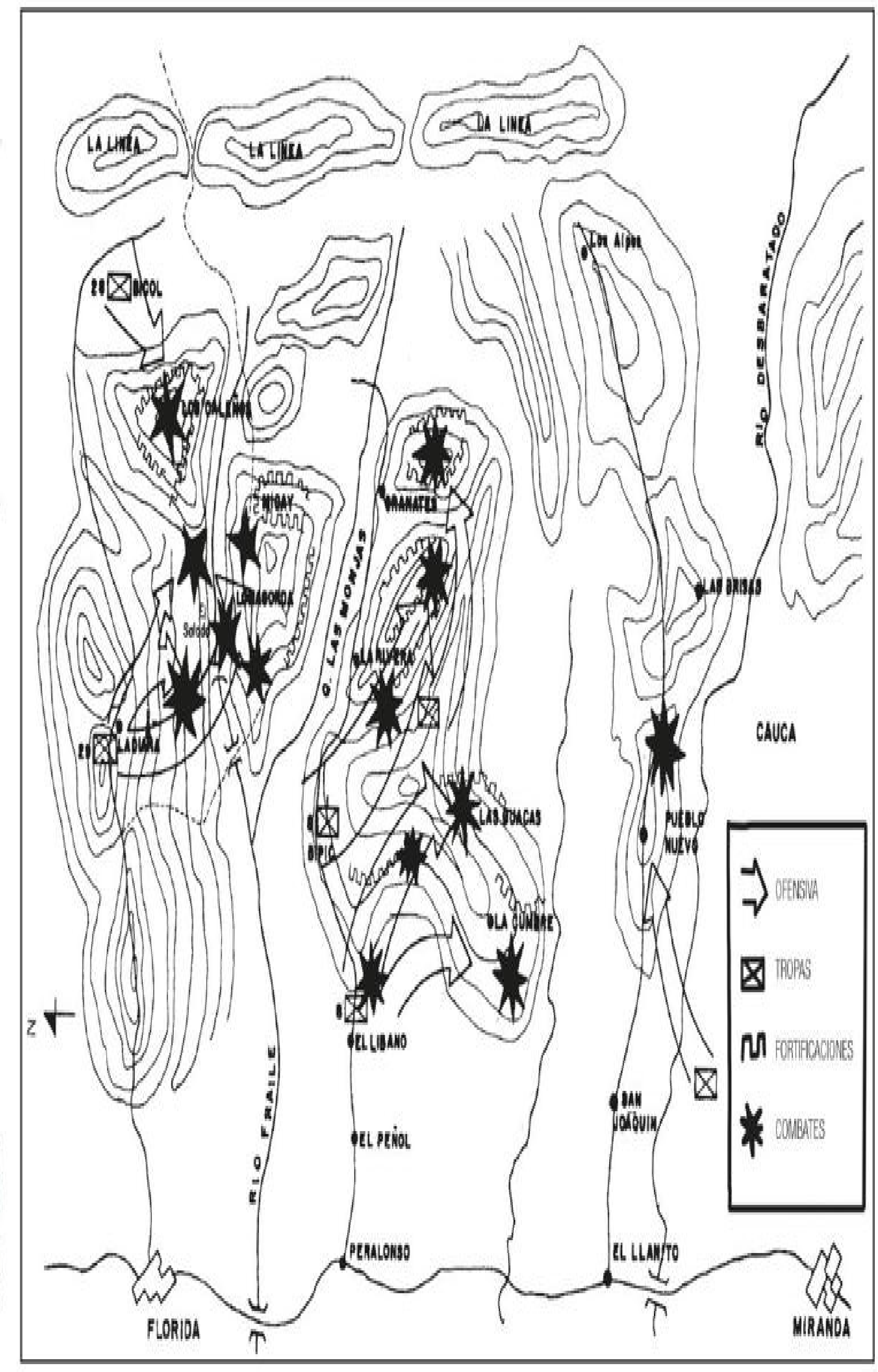
Rota la tregua, la insurgencia sintió la escalada de la Fuerza Pública en su contra. Una madrugada de agosto, en un tiroteo que duró dos horas, la Fuerza Pública terminó con la vida de Iván Marino Ospina en una casa del barrio Los Cristales, en Cali. Ya en septiembre, el Ejército lanzó la operación Clamor Vallecaucano contra guerrilleros del M-19 y sus aliados en Florida, Valle. En el área se encontraban Álvaro Fayad y Carlos Pizarro con 120 guerrilleros, junto con sesenta guerrilleros del frente Ricardo Franco[90] y el Movimiento Armado Quintín Lame[91], con quienes planeaban operaciones conjuntas que agudizaran la guerra.

Un campesino de camuflado sirvió de guía para las tropas hasta una fortificación en la parte alta del sector de Las Guacas. Varios de los cerros estaban fortificados. Entonces el Ejército desató fuego de helicópteros, y con el apoyo de la Fuerza Aérea provocó la huida de los guerrilleros. Con el avance de tropas, en medio de las bajas temperaturas, fueron descubriendo el lugar de la reunión, en el cerro La Gorda, y un pelotón de tanques, que seguía la pista, cayó en un retén guerrillero que los recibió con balas de fusiles y cohetes[92]. Luego, durante las operaciones de ese mes en Tuluá, el Ejército se valió de personal de la región para la ubicación exacta de los guerrilleros del M-19 y golpearlos con tropas y pelotones mecanizados[93]. Decenas de guerrilleros y soldados murieron en las dos operaciones.

Dibujo 1.

COMBATES DE EJÉRCITO Y M-19 EN VALLE DEL CAUCA

1985



El M-19 fortificó algunos cerros cercanos a la zonas urbanas del Valle del Cauca para defenderse de la ofensiva militar, como lo muestra el ataque a sus posiciones en 1985.

Fuente: Comando Octava Brigada. Caso táctico 8/86.

El contraataque del M-19 fue feroz. En la madrugada del primero de octubre, ochenta insurgentes se lanzaron en el cañón de La Virgen, municipio de Rioblanco, contra una casa en la que se encontraba toda una compañía de contraguerrillas, con lanzacohetes, ráfagas de ametralladora, cohetes, granadas de mano y fusil. Parte de la compañía huyó de la casa y se salvó, pero la guerrilla se llevó como botín veintisiete fusiles, seis lanzacohetes, granadas y material de guerra. Como si fuera poco, dos suboficiales y dos soldados fueron retenidos y presentados como prisioneros de guerra[94]. Después, junto con el frente Ricardo Franco, atacó en octubre con fusiles y granadas la plaza principal de Miranda, Cauca, incluyendo la estación de policía, bancos y oficinas públicas.

Ese mismo mes, el M-19 arrendó casas en tugurios y barrios aledaños en Armenia para preparar explosivos. Camuflados y en arrastre bajo, los guerrilleros se movieron cuando empezó la noche del 19 de octubre hacia una cañada que limitaba con el Batallón Cisneros. Al cruzar, lanzaron de inmediato bombas incendiarias contra los alojamientos y el casino de oficiales, e intentaron poner explosivos a un helicóptero en tierra. Con bombas, destruyeron una torre de energía y dejaron las instalaciones del batallón a oscuras. En el tiroteo murió una mujer cargada de explosivos. La sorpresa de los soldados fue mayor al ver que el M-19 se atrevía a atacar de tal forma una unidad militar con “audacia y determinación suicida […] explicable únicamente si se considera un estado de alienación mental de los grupos subversivos, o un alto grado de concientización de sus adeptos”[95]. Pero la acción más suicida estaba por venir.



Campamento de las Farc en La Uribe (Meta), conocido como Casa Verde, objetivo de la Operación Colombia lanzada por las Fuerzas Militares en 1990. / Foto: Archivo El Espectador.

Notas

[1] Entrevista a Jaime Bateman en Lara, Patricia 1982. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Cuarta edición. Bogotá: Punto de Partida, 103.

[2] Ibídem, 90.

[3] La facción llamada Izquierda Anapista se reunió en Villa de Leyva en 1971 para proponer una plataforma de gobierno alrededor de la idea de un 'socialismo a la colombiana'. Véase Comando General de las Fuerzas Militares 1979. Movimiento 19 de Abril (M-19). Documento Escuela Superior de Guerra, 2.

[4] Esta es la fecha de la derrota de la Anapo en las elecciones de 1970. Para el Ejército, la Anapo había sido infiltrada por radicales del Movimiento de Liberación Nacional de Colombia (MLNC), grupo conformado por ex-miembros de otros grupos comunistas que tenían lazos con los insurgentes Tupamaros de Uruguay. El MLNC habría considerado la Anapo como "la organización política más representativa de las masas populares", por lo que esperaba controlarla en el futuro. Véase Comando del Ejército 1979, Apreciación de inteligencia 2, 95; y Comando General de las Fuerzas Militares 1979. Movimiento 19 de Abril (M-19). Documento Escuela Superior de Guerra, 2.

[5] Motatto, Efraín; Suárez, Armando; Graciano Jorge y Torres, Jaime 1980. Los testigos. M-19. Bogotá: Editorial Presencia, 114-118.

[6] Comando General de las Fuerzas Militares 1979, op. cit., 3.

[7] El grupo apoyaba abiertamente las aspiraciones presidenciales de la Anapo. Véase M-19 1974. A los patriotas. Órgano del Movimiento Anapista 19 de abril, No. 1 (enero).

[8] Farc 1974b. Conclusiones de la V Conferencia, 4-10 de septiembre.

[9] Farc 1978b. Conclusiones de la VI Conferencia Guerrillera, 18-25 de enero.

[10] Comando General de las Fuerzas Militares 1979. Movimiento 19 de Abril (M-19). Documento Escuela Superior de Guerra, anexo A.

[11] Durante los primeros años, el M-19 también realizó decenas de acciones de propaganda armada incluyendo quema de vehículos, uso de petardos e incursiones armadas en universidades, colegios, oficinas y sitios públicos en los que repartían arengas y panfletos.

[12] Comando del Ejército 1980. Apreciación de inteligencia 3, junio, 76, 80. Véase también Morris, Hollman 2001. Operación Ballena Azul. Las armas del Cantón Norte. Bogotá: Intermedio, 14.

[13] Era presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).

[14] Motatto et al. 1980, op. cit., 242.

[15] Ibídem, 287.

[16] El comunicado hacía referencia a un conflicto laboral en un ingenio del Valle del Cauca. Véase M-19 1976. Veredicto popular: condenado a muerte. Órgano del Movimiento Anapista 19 de Abril, No. 14 (abril).

[17] Motatto et al. 1980, op. cit., 304, 313.

[18] M-19 1977. V Conferencia Nacional. Elementos para la construcción de una estrategia de poder, febrero, 40.

[19] Ibídem, 41.

[20] Según el M-19, la guerra de las Farc y del ELN de la época se definía como de vanguardia, donde la confrontación está definida solo por la presencia militar de los guerrilleros: "donde está la vanguardia está la guerra; desaparece la vanguardia y desaparece también la guerra". En contraposición, su propuesta de guerra popular debía librarse "en todos los terrenos de la actividad social: legal, ilegal, político, militar, reivindicativo, ideológico, cultural, económico, etc.", para que así permitiera construir 'poder popular'. Por esto, el M-19 también denominaba su estrategia como de guerra popular combinada. Véase M-19 1977, op. cit., 41-41; y M-19 1978. VI Conferencia Nacional. Concepción y estructura

de la OPM, marzo, 14.

[21] Entrevista a Jaime Bateman realizada en 1982, citada Casa Editorial Pisando Callos 2008. M-19. Testimonio histórico. Habla la comandancia. Bogotá: Casa Editorial Pisando Callos, 24.

[22] Entrevista a Jaime Bateman realizada en 1982, citada en Riveros, Ligia 1982. Habla Bateman. Entrevista en el Putumayo en desarrollo de la VIII Conferencia del M-19. Revista Cromos 3371, 31 agosto.

[23] Durante la toma de la embajada de Nicaragua en 1978, y de la sede el Colombo Americano de Medellín en 1980, el M-19 aprovechó para arengar a favor de los sandinistas y los guerrilleros de El Salvador respectivamente. Véase M-19 1977, op. cit., 51.

[24] M-19 1978, op. cit., 23.

[25] Toledo había sido detenido tras el asesinato de José Raquel Mercado y luego dejado libre. Comando del Ejército 1979, op. cit., Véase también Lara, Patricia 1982, op. cit., 40-41.

[26] Comando del Ejército 1979, op. cit., 101.

[27] Para un recuento detallado, véase Morris, Hollman 2001, op. cit.

[28] Ibídem, 103.

[29] Comando del Ejército 1979, op. cit., 101.

[30] Entonces congresista de la Anapo, y miembro del M-19.

[31] Uno de los rangos más altos dentro de la línea de mando del M-19.

[32] Entrevista con suboficial en retiro, Bogotá, 10 de agosto de 2016. El M-19 culpa al Ejército de estas muertes. Véase Morris, Hollman 2001, op. cit., 107.

[33] Algunos miembros del M-19 huyeron y obtuvieron asilo en Panamá, Ecuador, México y Francia.

[34] Ya había sido arrestado por unos meses en 1970 por rebelión, luego de dejar las Farc. En 1980 escaparía de la cárcel La Picota, de Bogotá.

[35] Los guerrilleros Tupamaros habrían dado asistencia técnica al M-19 para el manejo interno de la organización, y la ejecución de obras de ingeniería como la construcción de túneles y ‘cárceles del pueblo’. Véase Comando General de las Fuerzas Militares 1979, op. cit., 19-20.

[36] Ibídem, 10.

[37] Pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Estas capturas dejaron al descubierto el trabajo político del M-19 en el Cauca, y la manera en que empezaba a coordinar sus acciones en la región con el Movimiento Armado Quintín Lame. En 1980, 58 indígenas fueron juzgados en Consejos Verbales de Guerra por pertenencia al M-19. Véase Comando del Ejército 1979, op. cit., 116-117; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 76.

[38] Entrevista a General en retiro, 30 de julio de 2016. Pizarro sería luego trasladado a Bogotá.

[39] A junio de 1979, el Ejército reporta 3.489 armas largas y cortas recuperadas, y cinco bajas guerrilleras. Fueron encontrados además campamentos en Yondó (Antioquia) y Remolinos (Caquetá), y seis nuevas 'cárceles del pueblo'. Comando del Ejército 1979, op. cit., 101-115.

[40] Morris, Hollman 2001, op. cit., 100.

[41] Fueron robadas 5796 y recuperadas 5500 según Comando del Ejército 1980, op. cit., apéndice 13. El nuevo estimado en 1981 fue de 5789 armas robadas y 5249 recuperadas. En 1982 las armas recuperadas sumaban 6132. Véase Comando del Ejército 1981. Apreciación de inteligencia 1, enero, 6, anexo F; y Comando del Ejército 1982. Apreciación de inteligencia 2.

[42] Sin contar los detenidos y puestos en libertad.

[43] En estos Consejos también fueron juzgados treinta acusados de pertenecer al

EPL, de los que diez fueron condenados. Véase Comando del Ejército 1979, op. cit., 76, 94.

[44] Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo F; y Comando del Ejército 1982, op. cit.

[45] Vásquez, Alfredo y veintisiete firmantes más 1985. Carta al Presidente.

[46] M-19 1979. VII Conferencia Nacional. Colombia 1982. Junio, 23.

[47] Las Farc señalaban en 1985 que "en torno al drama de las torturas nosotros hemos hecho una formidable campaña nacional y también internacional". Véase Farc-EP 1985a. Informe central al Pleno de Estado Mayor de las Farc-EP. 27 de diciembre de 1984 - 2 de enero.

[48] El Gobierno de entonces fue acusado de promover las violaciones a los derechos humanos bajo el amparo de las normas contenidas en lo que se conoció como el Estatuto de Seguridad. Ver Presidencia de la República 1980. Respuesta del Gobierno colombiano al informe de Amnistía Internacional, abril.

[49] En 1985 el Consejo de Estado condenó a la nación por torturas a Olga López de Roldán en la Brigada de Institutos Militares en 1979.

[50] Vásquez, Alfredo y catorce firmantes más 1980. Declaración del Comité por los Derechos Humanos, Trópicos. Crítica y réplica 5, julio-agosto, 22-23.

[51] Comando del Ejército 1982, op. cit., 18.

[52] Para los interrogatorios, el manual de inteligencia de combate ordenaba el tratamiento de subversivos capturados como 'prisioneros de guerra', categoría protegida por el artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra de 1949. Véase Comando del Ejército 1981, op. cit., 29; y Ejército Nacional 1978. Manual de inteligencia de combate EJC 2-3. Segunda edición.

[53] Comando del Ejército 1979, op. cit., 122; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 81.

[54] Comando General de las Fuerzas Militares 1979, op. cit., 8.

[55] M-19 1979, op. cit., 23.

[56] Con la Ley 35 del 19 de noviembre de 1982, aproximadamente ochocientos miembros del M-19 fueron amnistiados, así como 252 de las Farc, un centenar del ELN, noventa del EPL y más de cien de otros grupos menores. Véase Villarraga, Álvaro 2013. Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia. Colombia Internacional 77, 112.

[57] Comando del Ejército 1979, op. cit., 118; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 77.

[58] Ibídem, 75.

[59] El Ejército calculaba que el M-19 había recibido aproximadamente medio millón de dólares. Véase Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo F. Véase también Lara, Patricia 1982, op. cit., 180.

[60] Bateman, Jaime 1982. VIII Conferencia Nacional del M-19. Discurso inaugural. San Miguel, Putumayo, 7 de agosto.

[61] El M-19 interrumpió la señal de televisión abierta por lo menos veintiocho veces en las principales ciudades del país y la de radio en cinco emisoras durante 1980. Véase Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo F, 2.

[62] El movimiento Firmes discutió de manera seria apoyar la candidatura de Jaime Bateman a la Presidencia. Este movimiento, junto con el Partido Comunista y otros grupos menores presentaron una lista única a las elecciones parlamentarias de 1982, y obtuvieron apenas un escaño en el Senado y otro en la Cámara. Véase Comando del Ejército 1981, op. cit., 11; y Comando del Ejército 1983a. Apreciación de inteligencia 1, enero, 68, 74. Véase también Suárez, Hernán 1980. Nómina de candidatos para un frente democrático. Trópicos. Crítica y Réplica 5, julio-agosto, 26-49.

[63] Los intentos por mostrar una imagen más amable ante la opinión contrastaban con la continua práctica del secuestro, como el del misionero estadounidense Chester Allen Bitterman, asesinado en marzo de 1981. Véase Jaime Bateman citado en Riveros, Ligia 1982, Op. cit.

[64] Estas personalidades eran llamadas ‘oficiales superiores especiales’. Véase M-

19 1982a. VIII Conferencia Nacional. La organización político-militar. Anexos 1 y 2; y Comando del Ejército 1983a, op. cit., 97-98.

[65] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 197.

[66] Bateman, Jaime 1980. Rueda de prensa en San José de Costa Rica, 1.o de julio.

[67] Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo F, 2.

[68] Comando del Ejército 1979, op. cit., 121; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 81.

[69] Comando del Ejército 1979, op. cit., 96-97; Comando del Ejército 1980, op. cit., 74, 100; Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo F, 2; y Comando del Ejército 1982, op. cit., 5-6.

[70] Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo F, 3.

[71] El Ejército calculaba en 1982 que el M-19 incorporaba un poco más de mil integrantes en siete estructuras urbanas y cuatro rurales. Véase Comando del Ejército 1982, op. cit., 5-6.

[72] José Elmer Marín, quien había escapado de La Picota junto a Iván Marino

Ospina un año antes, y Carmenza Cardona, conocida como La Chiqui, protagonista de la toma de la embajada de República Dominicana.

[73] Jaime Bateman citado en entrevista de Riveros, Ligia 1982, op. cit., Testimonios militares sugieren que artilleros del Ejército desde tierra causaron el hundimiento con lanzamiento de granadas, provocando la muerte de catorce de los diecisiete tripulantes del Karina. Sobre esta versión, véase El Tiempo 1982. Catorce los guerrilleros muertos en el hundimiento del 'Karina'. 5 de octubre, 1A.

[74] Según el Ejército, esta alianza habría incluido un aporte de cinco mil dólares del M-19 al ELN. Véase Comando General de las Fuerzas Militares 1979, op. cit., 9.

[75] El secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de unos de los narcotraficantes más poderosos del país y socios de Pablo Escobar, motivó la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), antecesor inmediato del fenómeno descrito después como paramilitarismo. En 1982, el M-19 justificó el secuestro de un avión de Aerotal como forma de denunciar la inacción del Estado contra el MAS.

[76] M-19 1982b. Carta al Presidente, julio.

[77] El presidente sancionó una amnistía general para los delitos políticos —rebelión, sedición o asonada— y conexos, cesación de procesos contra acusados y extinción de la pena para condenados, por medio de la Ley 35 del 20 de noviembre de 1982.

[78] En noviembre de 1982, el M-19 propuso al Gobierno acogerse a su propuesta de amnistía en cuanto fuera acompañada de un armisticio entre la guerrilla y las Fuerzas Militares por seis meses. Véase Comando del Ejército 1983a, op. cit., 218.

[79] Entrevista a General en retiro, Bogotá, 7 de julio de 2016.

[80] Comando del Ejército 1981, op. cit., 29.

[81] Entrevista a General en retiro, Bogotá, 22 de octubre de 2012.

[82] Comando Operativo Doce 1984. Caso táctico 2/84 BR-9. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 7-23.

[83] Por el M-19 firmó toda la comandancia, a excepción de Carlos Toledo, que fue asesinado ese mismo mes en una calle de Bucaramanga poco después de ser amnistiado. Posteriormente al asesinato, y justo antes de la firma de la tregua, el M-19 incursionó en Yumbo, quemó la Alcaldía y sostuvo sangrientos combates con el Ejército. La lista de 'oficiales superiores' del M-19 que permanecían detenidos por el Ejército en 1982 y fueron beneficiarios de la amnistía incluía a Álvaro Fayad, Luis Otero, Antonio Navarro, Rosemberg Pabón, Andrés Almarales, Israel Santamaría, Afranio Parra y José Yamel Riaño. Véase Comando del Ejército 1982, op. cit., anexo E, 1-2.

[84] Véase Comisión de Negociación y Diálogo del Gobierno Nacional y M-19 1984. Acuerdos de Corinto. Firmados en Corinto y El Hobo, 24 de agosto.

[85] M-19 1985a. IX Conferencia Nacional. Intervención de Antonio Navarro Wolff. Los Robles, febrero, 4.

[86] Según el M-19, el Ejército no solo cercó sus campamentos en Yarumales, sino que además lanzó una ofensiva con siete mil efectivos. Pese a eso, el acuerdo de tregua fue ratificado el 4 de enero de 1985, demarcando una línea de separación de un nuevo campamento de la guerrilla en Los Robles y la ubicación de tropas del Ejército. Véase entrevista a Antonio Navarro en Jiménez, Rubén 1986. M-19: paz y guerra en Colombia. Cuadernos Políticos (México) 45, enero-marzo, 97-98.

[87] En este contexto se produce un atentado en Cali contra la comandancia del M-19 amnistiada desde 1983, que deja heridos, entre otros, a Antonio Navarro.

[88] Entrevista a General en retiro, Bogotá, 7 de julio de 2016.

[89] M-19 1985b. Al poder jurisdiccional, a la nación colombiana. Comunicado 6 de noviembre.

[90] Disidencia de las Farc.

[91] El Quintín Lame era una guerrilla indígena surgida de los grupos de autodefensa organizados en 1973 por el Partido Comunista Marxista Leninista en Cauca. Luego de colaborar y entrenar con el M-19, empezó a actuar como guerrilla en 1982. Dado que su fuerza estaba constituida por indígenas que convivían en sus comunidades, las Fuerzas Militares no desarrollaron planes

ofensivos contra ese grupo.

[92] Comando Tercera Brigada 1985. Caso táctico 8/85 BR-3. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 391-403.

[93] Comando Octava Brigada 1985a. Caso táctico 8/85 BR-8. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 411-420.

[94] Un quinto soldado había sido secuestrado cinco meses atrás tras un combate en Buga. El M-19 asegura haber entregado quince soldados a la Iglesia en 1985. Véase Comando Batallón Caicedo 1985. Caso táctico 4/85 BR-6. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 35-45. Y entrevista de Antonio Navarro en Jiménez, Rubén 1986, op. cit., 82-104.

[95] Comando Octava Brigada 1985b. Caso táctico 2/85 BR-8. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 25-33.

Capítulo VII

El desafío multiplicado

El inicio de la década de los ochenta coincidía con un crecimiento acelerado del poder militar guerrillero. El teatro de operaciones de las Fuerzas Militares sufrió una gran transformación respecto al de los años sesenta, ahora dominado por guerrillas expertas en emboscadas, acciones de alto impacto en las ciudades y con capacidad de coordinación en el ámbito nacional.

Gracias a su capacidad de infiltrar la institución militar y de comprar información a algunos de sus miembros, las Farc habían obtenido en los años setenta copias de órdenes de operaciones de las Fuerzas Militares que pusieron al desnudo las fortalezas y debilidades de las unidades contraguerrilleras. Los documentos incautados posteriormente por el Ejército a las Farc reflejan el cuidadoso estudio que hicieron de la estrategia militar oficial y las maneras de contrarrestarla. Este es el origen de la llamada ‘nueva forma de operar’, una serie de preceptos militares que con los años se incorporaron al entrenamiento de los comandantes guerrilleros y le permitieron golpear duramente a policías y militares en los años noventa. Ahora las Farc, como el nuevo ELN, abrazaban abiertamente la idea de guerra popular prolongada, cada cual desde su propia interpretación, lo que les proporcionaba un mapa estratégico concreto y una guía táctica precisa de acciones para intentar derrotar a las fuerzas del Estado y tomar el poder.

El relativo éxito del M-19 para robar la atención de la población en Colombia e insertarse en la discusión política había provocado que las demás guerrillas intentaran emularla. Mientras el M-19 coqueteaba con la idea de crear un movimiento político legal y participar en elecciones, las Farc destinaban varios de sus comandantes a liderar un movimiento político legal alejado de un discurso marxista y que apelara a ideas que generaran menor resistencia en la mayoría de la sociedad, como la justicia social y la democracia. En las Farc, la flexibilidad política y militar empezaba a asomar detrás de la ideología, el dogma y las ideas fijas no negociables, pero sus rivales revolucionarios y enemigos políticos se combinaron violentamente para asfixiar su estrategia.

La experiencia del conflicto dejaba también enseñanzas en el ELN. Además de replicar el éxito del M-19 al morigerar el discurso público marxista sobre la idea de destruir el Estado, algunas facciones planteaban incluso la relevancia de hacer política legal. La ideología revolucionaria, sin embargo, apuntaba en otra dirección. Las ideas del cristianismo marxista revolucionario habían triunfado en 1979, con la toma del poder del Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua, país con el que estrechaba lazos y renovaba su fe en las posibilidades de triunfo. La incorporación por parte del ELN de la estrategia de guerra popular prolongada durante los años ochenta significaba que, al igual que el M-19, y sobre todo las Farc, debía iniciar la construcción de un ejército regular, con el objetivo de vencer las Fuerzas Militares del Estado para garantizar la toma del poder. Para entonces ya no era prioridad intentar provocar la insurrección de masas por la que trabajaron en las décadas pasadas.

En pleno crecimiento militar, las guerrillas tenían incentivos para acumular y preservar sus fuerzas mediante el trabajo político. De otro lado, las Fuerzas Militares enfrentaban una grave crisis presupuestaria que les impedía garantizar el control de la amenaza guerrillera en todo el país. Su fortalecimiento interno estaba en la cima de sus prioridades. Paradójicamente, el proceso de paz abierto en esta década por el gobierno de Belisario Betancur proveyó el contexto en el cual las guerrillas avanzaron con su plan estratégico de toma del poder y las Fuerzas Militares dieron un primer gran salto cualitativo.

Durante la primera mitad de los ochenta, el Ejército activó 65 nuevas unidades tácticas y operativas y unos 240 batallones, compañías, grupos, escuelas y comandos[1]. Además del tamaño, durante esos años, las Fuerzas Militares hicieron un esfuerzo por mejorar la calidad de sus acciones, mediante el robustecimiento de sus servicios de inteligencia[2], y la destinación de mayor tiempo de entrenamiento psicológico, moral y táctico de sus soldados bachilleres y regulares[3].

En lo estratégico, el país se dividió en seis teatros de operaciones llamadas divisiones, en los que se desarrollarían planes regionales contra las amenazas de seguridad internas y externas[4]. Las Fuerzas Militares detectaban como factor crítico en los teatros de operaciones la "coordinación estrecha entre las Fuerzas Militares y los organismos del gobierno", dado que la "superposición de entidades puede producir desperdicio de esfuerzos e incluso conflictos que perjudican al final el cumplimiento de la misión". La delimitación de los teatros de operaciones pretendía prevenir "una posible colisión de competencias" al

especificar áreas bajo el mando único de un comandante, y subordinar cuando fuera posible la acción de unidades de policía, servicios de seguridad y prisiones al plan militar[5].

Las Farc ya habían avizorado el problema de la coordinación en el terreno tiempo atrás. Al crear un Estado Mayor de comandantes en 1965, contaban con un cuerpo de líderes con capacidad de mando en las regiones que a la vez actuaban coordinadamente gracias a su participación en esta instancia. La creación del secretariado en 1973, como órgano ejecutivo superior, y de los bloques que agrupaban sus frentes en 1982, eran a la vez su respuesta a la nueva manera de hacer la guerra que proponían los teatros de operaciones de las Fuerzas Militares.

Todos los planes de reingeniería en las Fuerzas Militares, sin embargo, demoraron en implementarse por la brecha estructural entre las necesidades financieras de este esfuerzo y las destinaciones presupuestales. Entre 1984 y 1986, las apropiaciones por ley cubrían apenas una tercera parte de los gastos de funcionamiento del Ejército, mientras las inversiones que suponía el plan de robustecimiento permanecían casi sin fondos[6]. En tanto la amenaza guerrillera aumentaba, las Fuerzas Militares no solo tenían problemas para crecer proporcionalmente, sino que operaban con material de guerra y armamento envejecidos. Apenas en 1985, el Ministerio de Defensa compró unos ocho mil fusiles israelíes, con lo que logró renovar tan solo el 15 % de las armas de dotación del Ejército[7].

Mientras el M-19 insistía en su idea de crecer mientras combatía, otros cuatro 'ejércitos irregulares' se formaban lentamente para desafiar al Ejército de Colombia. En términos generales, para el Ejército de la época, "los grupos armados fuera de la ley […] no son solo organizaciones guerrilleras, sino también bandoleros […] que secuestran, asaltan bancos, roban el comercio, extorsionan y aterrorizan campesinos inocentes y matan soldados y agentes de la República. En resumen, son facinerosos fuera de la ley, reclamados por las autoridades que operan con tácticas de guerrillas"[8]. Descartando motivaciones altruistas, consideraba que "quieren aparecer ante el país como revolucionarios idealistas, limpios y animados por principios políticos, cuando en realidad están enriqueciéndose cada día más con los numerosos millones de pesos y dólares que están recibiendo por los atracos a los bancos, los secuestros y las extorsiones". Por ello, buscarían "enviar dineros a sus familiares para abrir cuentas en dólares en el extranjero, posiblemente para disfrutar de ellos más

tarde”[9].

La subestimación del adversario en lo político, sin embargo, no se reproducía en lo militar. Según las instrucciones de contraguerrilla, “es importante crearle la conciencia [al soldado] de que cuando va a orden público va a matar, acabar con el enemigo y nunca con el temor de que lo van a matar […] El bandolero es cobarde cuando lleva las de perder, corre y los jefes siempre tratarán de ir a cubierta de la dura realidad de la guerra”[10]. Al mismo tiempo las instrucciones advertían que, sin embargo, “se prohíbe el maltrato de palabra u obra y el empleo de medios violentos para obtener la información”[11].

El Ejército consideraba que los problemas de tipo social que aquejaban al país “favorecen las acciones del enemigo […] ya que los grupos subversivos explotan esta actitud de la población estudiantil y trabajadora para penetrar en su mente”[12]. Los problemas económicos y sociales eran, en ese contexto, “la mejor materia prima para el proselitismo y las actividades subversivas por parte de los agitadores y comunistas”[13]. El empleo de tropas del Ejército en el manejo del malestar social, por parte de los gobiernos de la época, tales como los del Paro Cívico de 1977[14], “distrae el 70 por ciento de los efectivos y medios de la Fuerza, con el consiguiente perjuicio para el cumplimiento de la misión referente a la defensa interna y externa del Estado contra grupos subversivos armados”. Eran comunes las llamadas de funcionarios y políticos en las regiones a los comandantes de las brigadas presionando el levantamiento de huelgas, manifestaciones u obstrucciones de las vías, incluso, sugiriendo hacer “lo que tengan que hacer”[15].

Las Fuerzas Militares describían la existencia de la llamada ‘población civil insurgente’, descrita como una “masa heterogénea” que luego de un trabajo psicológico por parte de las guerrillas “logra su adhesión a las causas revolucionarias”. Pese a su dispersión, “es dirigida y activada por grupos minoritarios de agitación, que operan de forma clandestina, a través de normas claramente definidas y que han probado su efectividad en movimientos insurgentes de otras épocas y latitudes”. La guerrilla, por su parte, representa “el brazo armado de la revolución o la insurgencia”[16]. Como consecuencia, las Fuerzas Militares distinguían “dos tipos de acciones revolucionarias: (1) Acciones de tipo civil que se llevan a cabo dentro de las estructuras formales de la sociedad y, (2) Acciones de tipo militar que son conducidas por los grupos guerrilleros”[17].

En respuesta, la guerra contrainsurgente tendría que emplear “acciones de tipo político, económico, sicológico, sociológico, militar y paramilitar”, asegurando a la vez el apoyo de la población civil[18]. “La debilidad natural de las fuerzas guerrilleras desde el punto de vista militar se compensa con el apoyo del elemento humano del campo de combate”, analizaban los militares, “el cual las protege de las acciones del Ejército y les suministra apoyo logístico y de inteligencia necesario para garantizar su supervivencia hasta el final”. De ahí que “sin la población civil, la guerrilla queda a merced de la suerte y reducida peligrosamente a sus vulnerables medios materiales, que no representan amenaza militar de consideración”[19].

Al describir la lógica de los planes de guerra insurgentes, los militares identificaban como parte estructural la infiltración de civiles “hacia entidades claves del gobierno y de las Fuerzas Armadas, con el fin de entorpecer los planes que en su contra se elaboren”[20]. Solo después de consolidado el aparato militar, la insurgencia civil se manifestaría abiertamente, en la medida en que “los grupos subversivos organizan y dirigen movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos, etc., para crear el máximo número de problemas y obligar al Gobierno a dispersar esfuerzos e impedir que pueda dedicarse a realizar sus programas”. En tal escenario, los guerrilleros “comienzan actividades que tienen como fin ampliar su zona de influencia, acrecentar su fuerza, reunir material bélico e iniciar el debilitamiento de la fuerza militar de la nación”. En las etapas finales de este proceso, la insurgencia tomaría control de las instituciones y territorios, y movilizaría una insurrección general de la población para facilitar la toma del poder[21].

En medio de este clima social adverso, y con un Ejército distraído de su labor principal, los grupos guerrilleros eran percibidos no solo como una amenaza militar al Estado democrático, sino también desde el punto de vista ideológico. En la visión de las Fuerzas Militares, “la acción de infiltración se ha ejecutado y ha resultado efectiva, principalmente en los campos sindicales, estudiantiles y clericales […] lo cual ha permitido que en el ambiente estudiantil exista un número considerable de jóvenes comunistas y alto porcentaje de estos con tendencias revolucionarias”[22]. La infiltración y adoctrinamiento también afectaba a las mismas Fuerzas Militares, “siendo los blancos predilectos los mandos inferiores y las escuelas de formación de cuadros”[23].

La vulnerabilidad de las Fuerzas Militares a la infiltración en esos años venía dada por los “mediocres” estudios de seguridad “que se realizan con motivo del

reclutamiento militar en Colombia de cuadros y personal civil". Además, "los sistemas de ficheo y antecedentes son muy regulares, [y] por esta razón es muy fácil para los grupos subversivos incorporar sujetos sin antecedentes en las instituciones armadas"[24]. De ahí que las Farc de esos años se preguntaran "cómo aprovechar en beneficio de la lucha revolucionaria las contradicciones en el campo enemigo, cómo atraer una parte del Ejército, la Armada y la Aviación al lado de la lucha popular"[25].

El clima político del país, a principios de los años ochenta, generaba una gran incertidumbre entre los militares, "dada la falta de conciencia del verdadero peligro que sobre el país se cierne"[26]. En particular, temían que "si los grupos de izquierda, apoyados por un sector del Partido Liberal, logran alcanzar la unión […] o de continuar las izquierdas trabajando en total y absoluta libertad en el adoctrinamiento, organización y reclutamiento de sus brazos armados, llegaremos en muy corto tiempo a la época del no retorno, donde el problema dejaría de ser solamente de la Nación, sino una supervivencia del personal uniformado"[27]. En la mentalidad de los soldados, la guerrilla tenía la capacidad de promover ideas políticas que socavaran la capacidad de acción de las Fuerzas Militares hasta el punto de debilitarlas al extremo y hacerlas incapaces de enfrentar la amenaza comunista.

El Partido Comunista había logrado infiltrar varias organizaciones estudiantiles de colegios y universidades, y grupos radicales universitarios por fuera de sus Juventudes Comunistas. Al Ejército le llamaba la atención que "el estudiante universitario colombiano ha venido dando en los últimos años muestras de un grado de radicalización política que carece de precedentes en la historia del país […] Se nota su presteza para responder negativamente a las políticas del Gobierno y su confrontación con la Fuerza Pública […] Este es un fenómeno que se presenta con toda claridad a partir de la instauración del Frente Nacional"[28]. El estudiantado de la época "se ha convertido en un objetivo codiciado por los movimientos de izquierda que pretenden llevar la subversión a los claustros. En esta labor encuentran especial apoyo en el magisterio que, previamente, ha indoctrinado los estudiantes extremistas que, por su agresividad y fanatismo, se imponen sobre la mayoría de sus compañeros, quienes se muestran indiferentes o temerosos de sus actuaciones y procedimientos"[29].

Algunas agrupaciones universitarias y eclesiásticas mostraban abierta simpatía por la lucha armada[30], evidenciando la perdurable atracción hacia el sacerdote guerrillero Camilo Torres. En esta línea, las Fuerzas Militares describían que un

“significativo número de sacerdotes y religiosos […] han incrementado su intervención en política, especialmente en las poblaciones pequeñas […] En forma individual algunos sacerdotes, especialmente de provincia, han prestado su apoyo decidido a los grupos armados e, incluso, han participado en acciones beligerantes”[31].

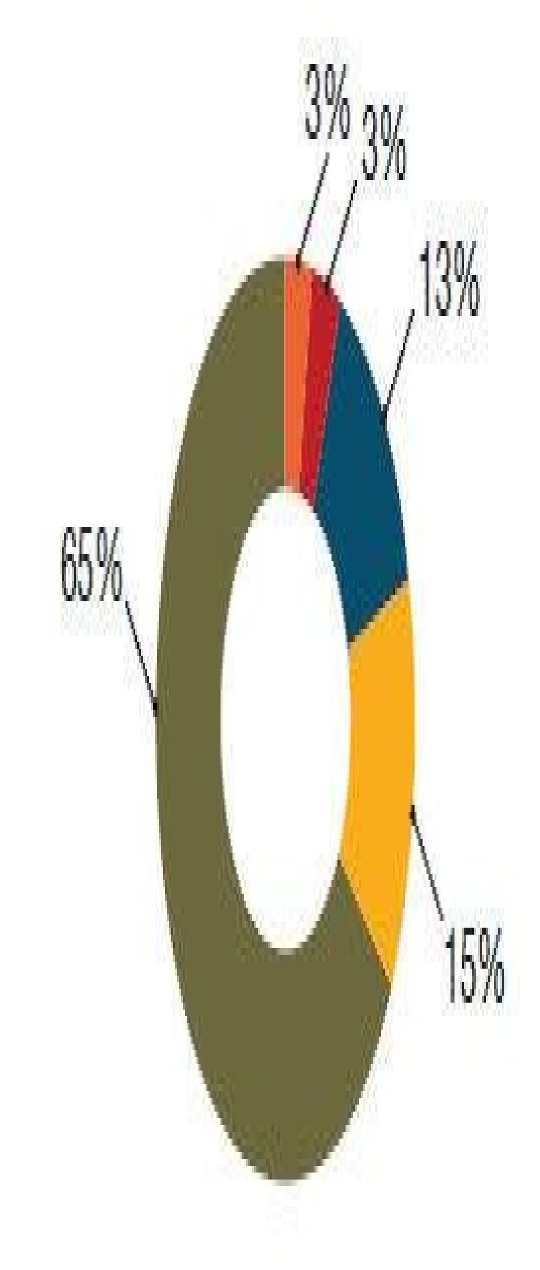
Gráfico 6.

ACCIONES ARMADAS DISCRIMINADAS POR GRUPO RESPONSABLE 1955-1980

Las guerrillas principalmente urbanas, como el M-19, el ADO y el EPL-PLA, se caracterizaban por el uso masivo de explosivos. Las guerrillas más rurales como las Farc, el EPL y el ELN encontraban ventaja táctica contra militares y policías en el uso de la emboscada.

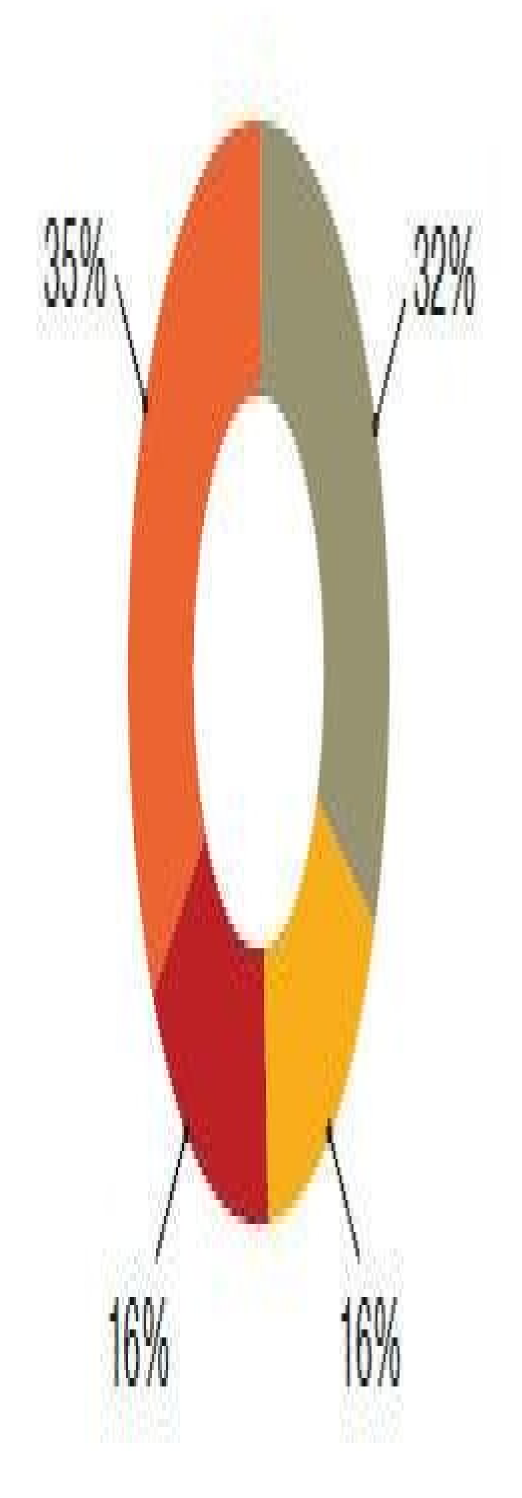
ATAQUES CON EXPLOSIVOS

	TOTAL
EPL-PLA	94
M-19	21
ADO	19
FARC	5
ELN	5



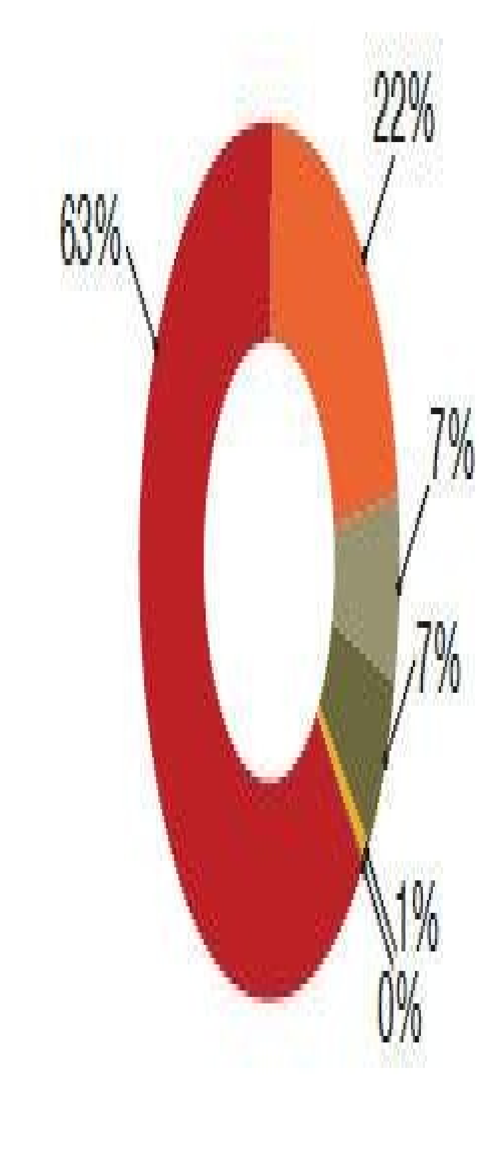
ASALTOS A PUESTOS MILITARES

	TOTAL
ELN	11
EPL	10
FARC	5
M-19	5



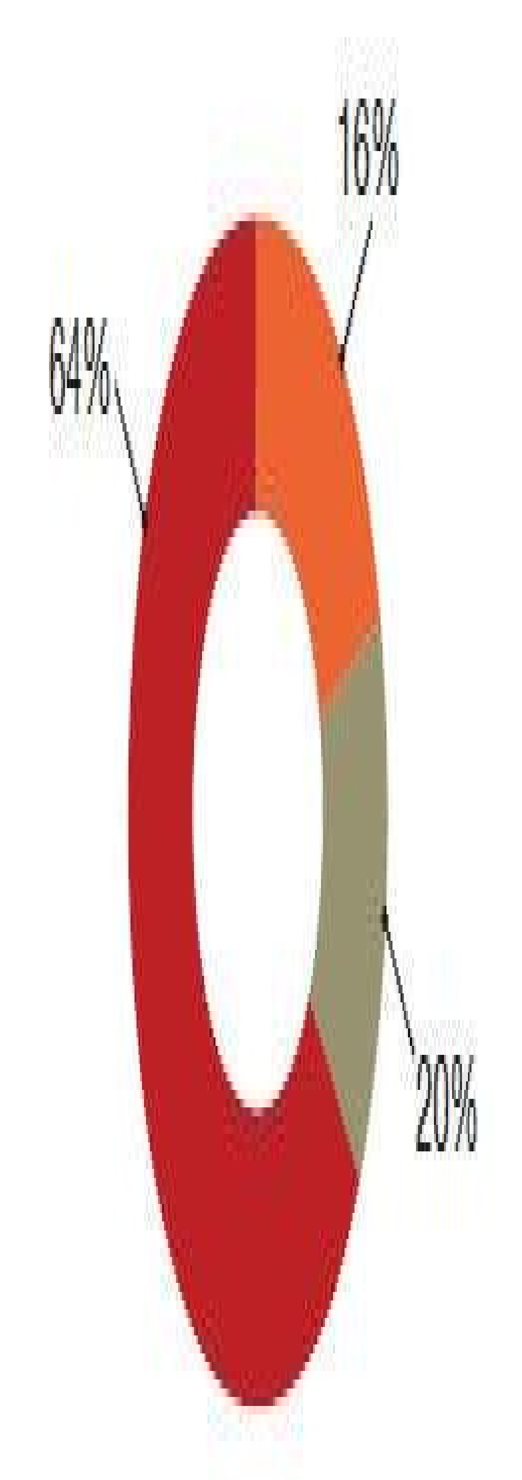
MUERTES A MIEMBROS DE FFMM

	TOTAL
FARC	323
ELN	114
EPL	36
EPL-PLA	34
M-19	4
ADO	1



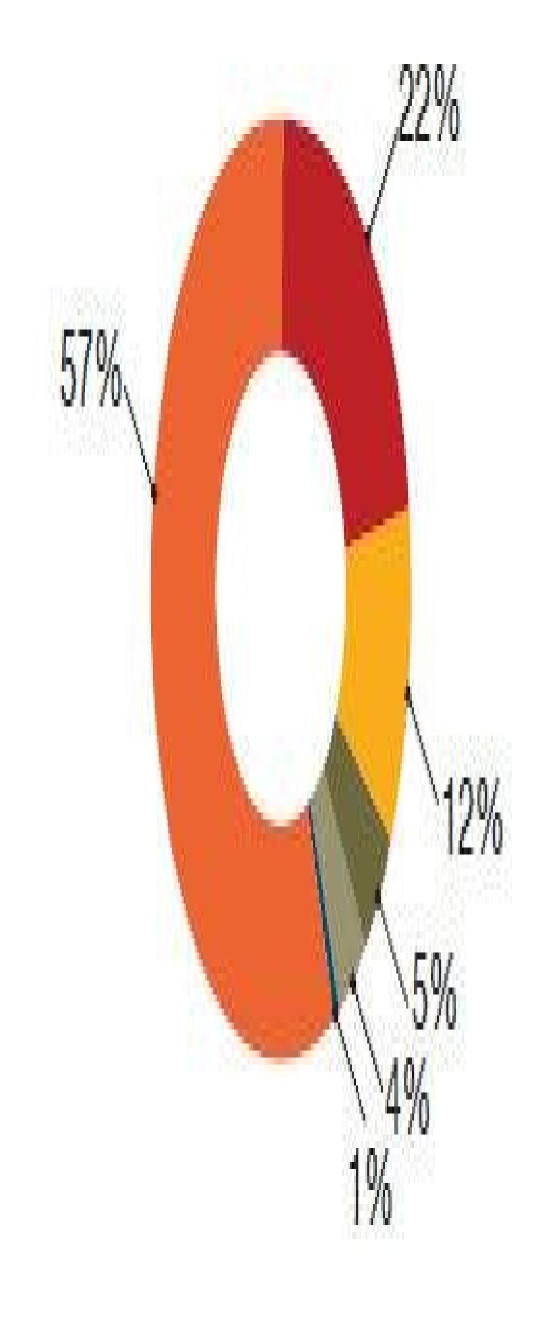
EMBOSCADAS

	TOTAL
FARC	122
ELN	38
EPL	30



ARMAS ROBADAS

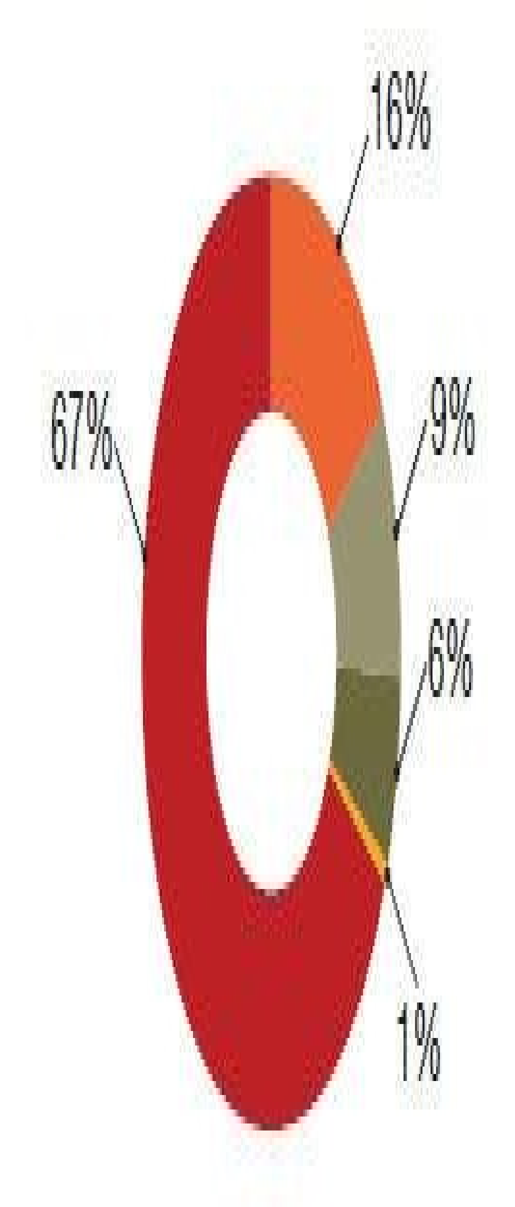
	TOTAL
ELN	591
FARC	225
M-19	121
EPL-PLA	50
EPL	41
ADO	6



Nota: se excluyen 5788 armas extraídas por el M-19 en 1979 del Cantón Norte en Bogotá.

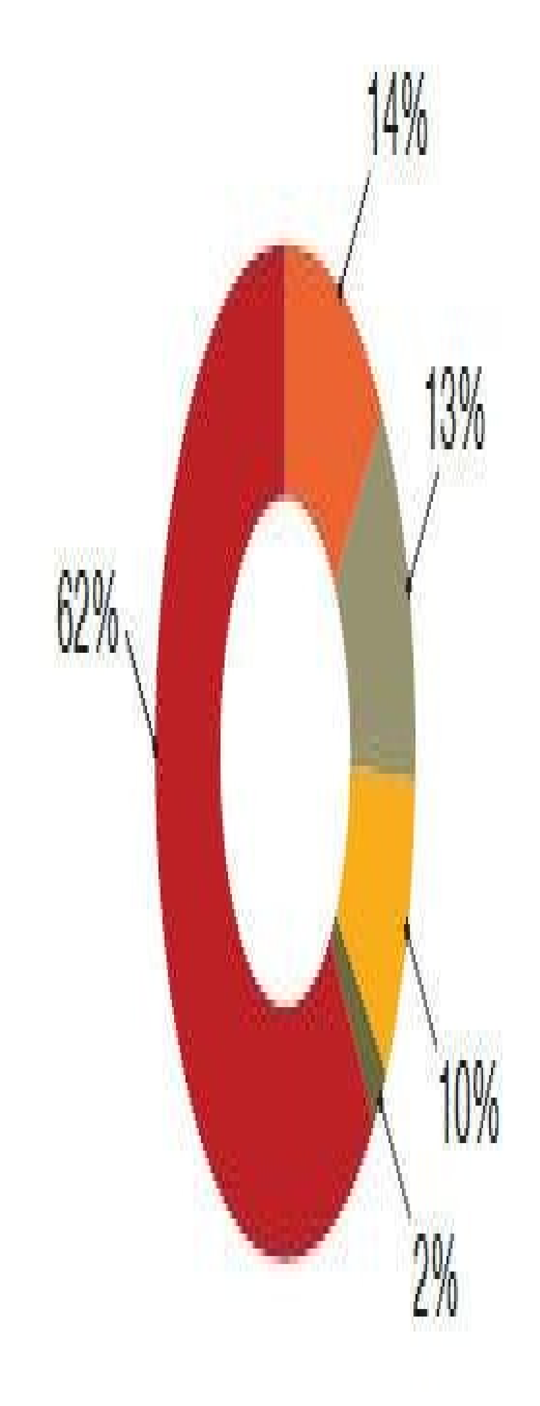
ATAQUES A POBLACIONES

	TOTAL
FARC	94
ELN	23
EPL	13
EPL-PLA	9
M-19	1



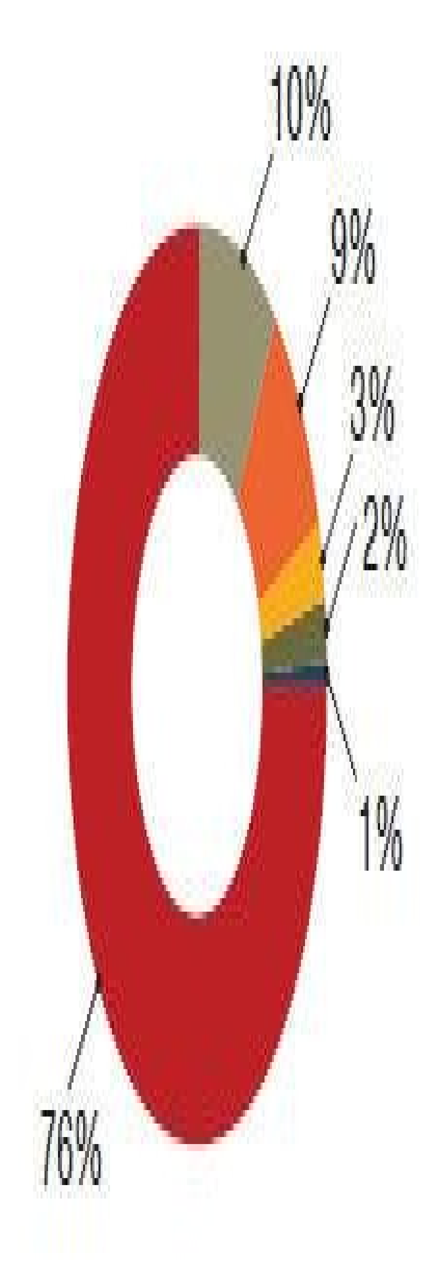
SECUESTROS

	TOTAL
FARC	119
ELN	26
EPL	24
M-19	19
EPL-PLA	4



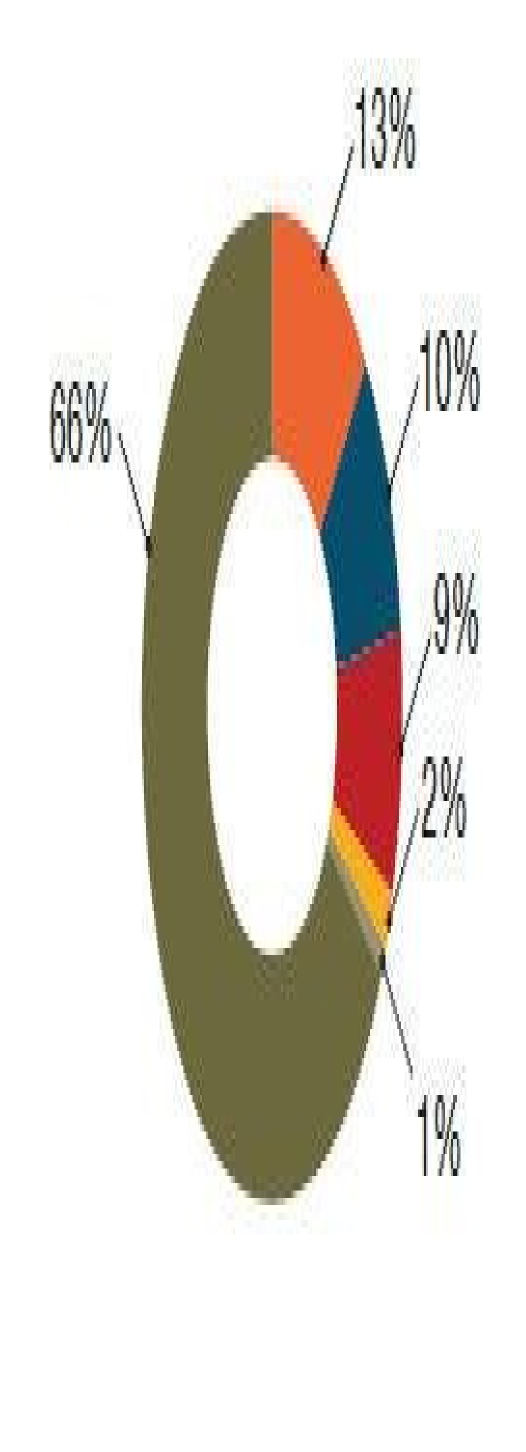
ASESINATO DE CIVILES

	TOTAL
FARC	664
EPL	88
ELN	76
M-19	26
EPL-PLA	19
ADO	6



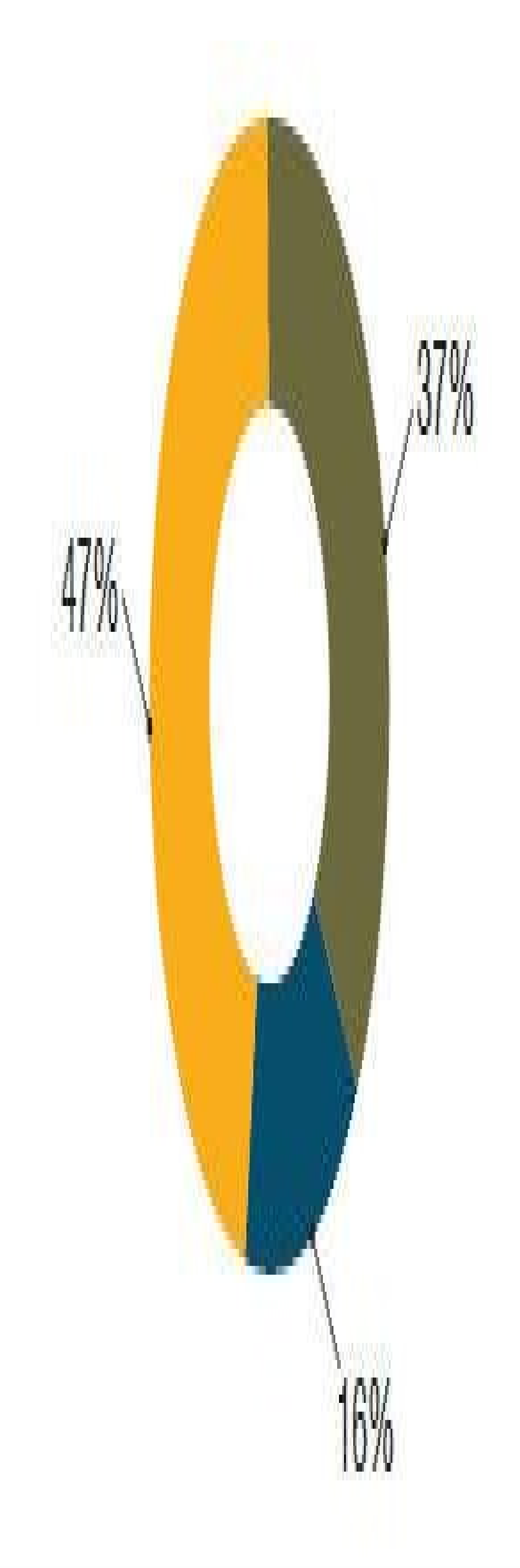
ASALTOS A BANCOS

	TOTAL
EPL-PLA	68
ELN	13
ADO	10
FARC	9
M-19	2
EPL	1



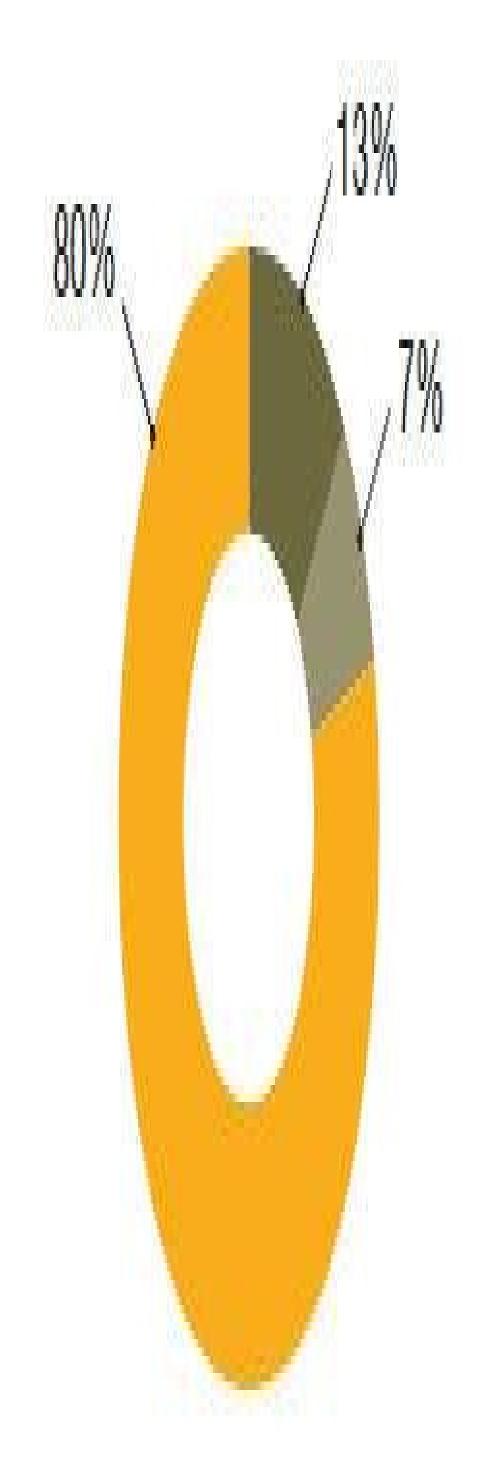
ASALTOS A ENTIDADES PÚBLICAS

	TOTAL
M-19	54
EPL-PLA	43
ADO	19



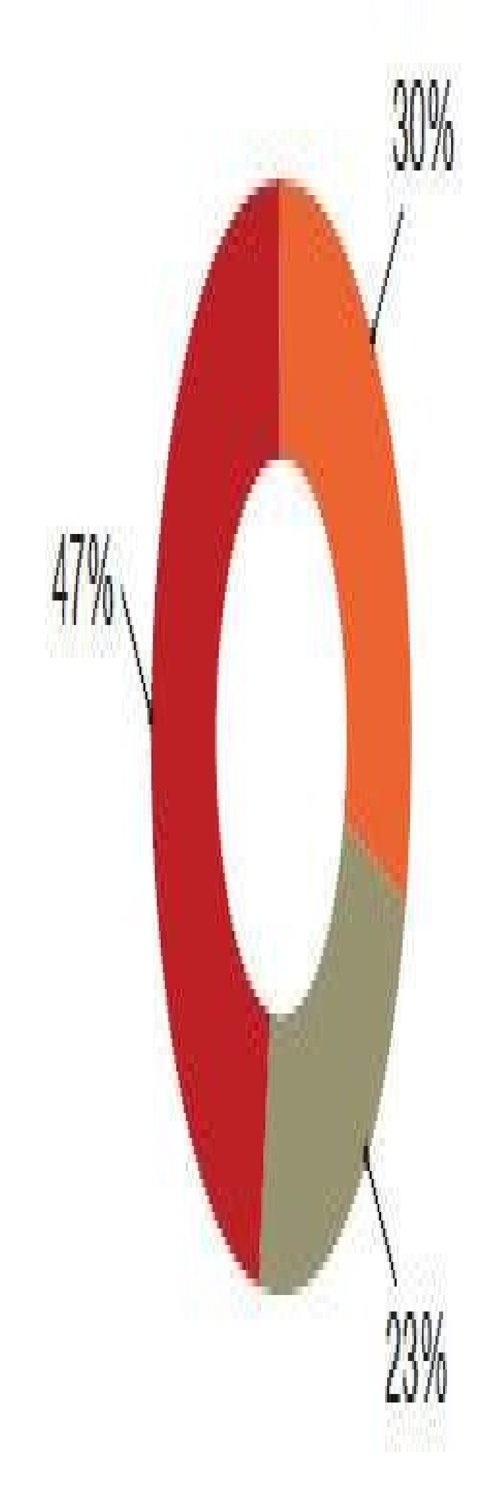
ASALTOS A VEHÍCULOS

	TOTAL
M-19	55
EPL-PLA	9
EPL	5



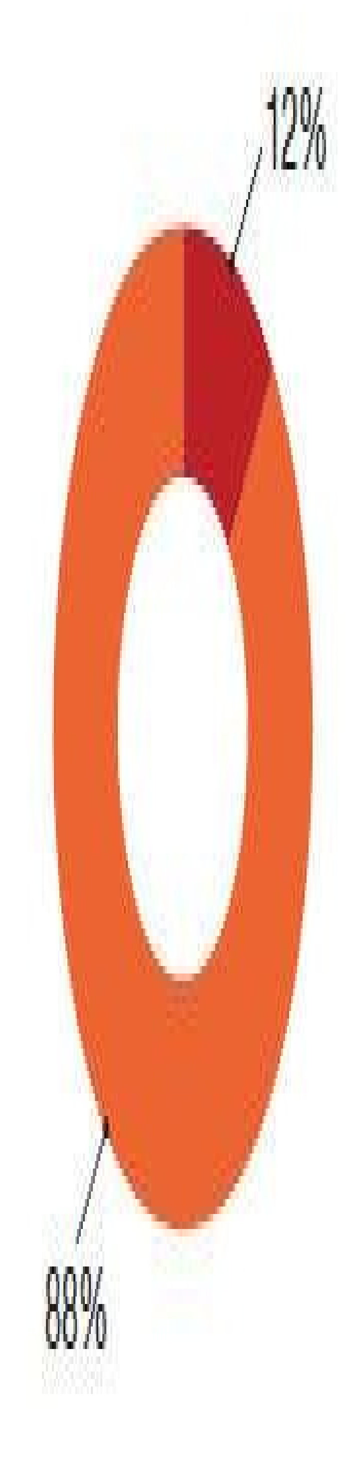
COMBATES CON LAS FUERZAS MILITARES

	TOTAL
FARC	113
ELN	72
EPL	55

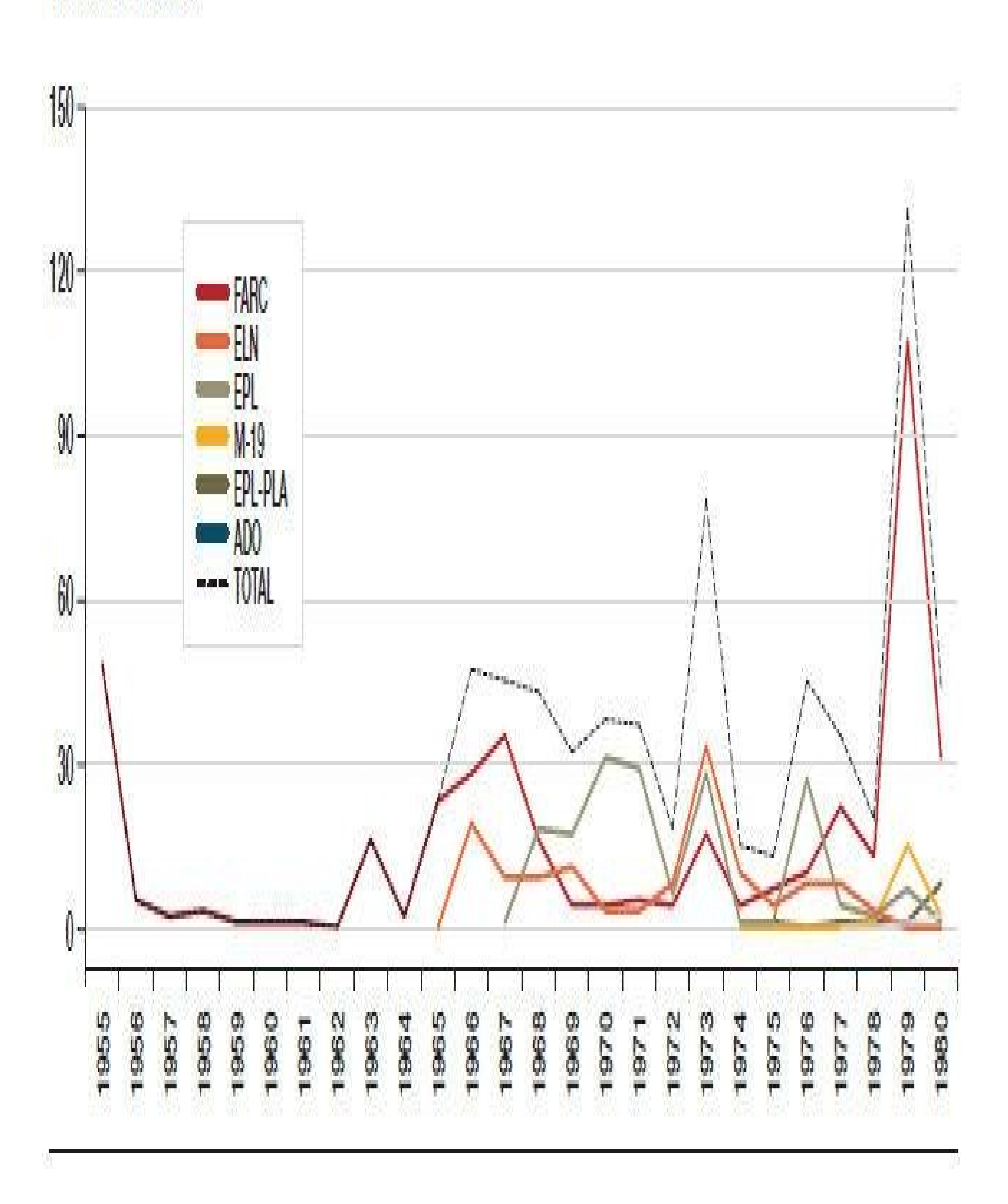


DESMOVILIZACIONES DE GUERRILLEROS

	TOTAL
ELN	57
FARC	8



TOTAL ACCIONES



Fuente: Elaboración propia con datos de Comando del Ejército 1979, 1980, 1981 y 1982. Apreciaciones de inteligencia.

El Ejército también ponía atención a la continua actividad del Grupo Golconda durante la década de los setenta, y su coordinación con otros grupos del continente comprometidos con "la creación de un comité especial de lucha contra la Agencia Central de Inteligencia [de Estados Unidos], CIA, [...] Medidas especiales para reprimir la acción de las Fuerzas Armadas [y ejercer] presión a la alta jerarquía eclesiástica para que desista de su pensamiento conservador y se una al esfuerzo en pro de los oprimidos"[32]. De ahí que el Partido Comunista se planteara "reclutar nuevos adeptos dentro del Clero para llegar más fácilmente a las mentes de las clases campesinas y urbanas menos favorecidas"[33].

Además, el Partido Comunista había logrado "orientar y dirigir" la que el Ejército estimaba era la tercera confederación sindical más grande el país[34]. Contaba, asimismo, "con un grupo reducido de sacerdotes simpatizantes"[35]. Con sus simpatizantes, el Partido proyectaba crear "el Frente Patriótico de Liberación Nacional, cuya base será la unión de las clases obreras y campesinas, dando cabida a caracterizados elementos de la clase media (intelectuales, profesionales, estudiantes, maestros, empleados y artesanos) que hayan demostrado su adhesión al partido"[36].

La nueva forma de operar de las Farc

Tras el M-19, el segundo de los ejércitos irregulares en construcción era las Farc. Su principal fortaleza, por encima de las demás organizaciones guerrilleras, era su “excelente experiencia de combate, buen entrenamiento y un excelente conocimiento del terreno”[37]. De ahí que poseían “una excelente red de informantes urbanos y rurales que los mantienen informados de los movimientos de la tropas […] A los campesinos, especialmente a las mujeres, les pagan sobreprecios por los alimentos y víveres adquiridos […] El campesino es adoctrinado de tal forma que cree ciegamente en el éxito del movimiento.”[38] Además, “adelantan campañas de desprestigio contra las tropas con el propósito de que los campesinos repudien la presencia de estas en las regiones de influencia”[39]. Como resultado, “la población civil de las áreas donde operan los apoyan incondicionalmente y les sirven de informantes o de estafetas”[40].

Una de las razones para que sus miembros mostraran “una excelente moral” y seguridad personal era el hecho de que en aquella época “sus integrantes [eran] oriundos de las regiones donde operan y residen con sus familiares, parientes y amigos”, con algunas excepciones[41]. Por el contrario “los jefes de cuadrilla son trasladados periódicamente”[42]. Según describía el Ejército, los guerrilleros, “por lo general, usan uniformes que constan de dril verde, gorra o gorro verde y botas de caucho negras. En menos escala, dril habano y uniformes camuflados. […] Tienen prohibido ingerir bebidas alcohólicas hasta embriagarse. […] Al bandolero raso no se le permite tener mujer, pues esta distrae la atención de la lucha. Los jefes siempre andan con sus concubinas. Los problemas sexuales son comunes, por eso no les permiten salir a mantener contacto con mujeres. Existe respeto mutuo y buen trato entre los bandoleros rasos”[43]. En contraste, “los jefes, con alguna frecuencia, amenazan con fusilar a los integrantes de cuadrilla, por lo cual algunos de sus componentes desertan”[44].

La cohesión de los miembros de las Farc, tras quince años de guerra, no solo se derivaba de su formación militar sino ideológica. “Los nuevos integrantes de las cuadrillas son jóvenes campesinos cuyas edades oscilan entre los 16 y 22 años [....], seleccionados por los Comités del Partido Comunista entre los miembros mejor adoctrinados”[45]. Era evidente que los comandantes “mantienen una constante preocupación por la preparación política dentro de los miembros de la guerrilla […] Sus cabecillas cumplen exactamente las órdenes impartidas por el

Comité Central del PCC. Las informaciones sobre existencia de 'Escuelas de Cuadros' de las Farc confirman aspiraciones planteadas con anterioridad por el PCC, buscando una mejor preparación y responsabilidad en los integrantes que constituyen el 'elemento militar'"[46].

Desde finales de los años sesenta, para sostener su esfuerzo de crecimiento en miembros, las Farc tomaron la decisión de "darle mucha importancia al adoctrinamiento, a la capacitación de los cuadros políticos, mediante el desarrollo de cursos [y] creación de bibliotecas"[47]. En 1978, los estatutos reiteraron que "las Farc son parte integrante del partido [comunista]" y que "cada escuadra, unidad básica o mínima es al mismo tiempo célula del partido"[48]. En 1982, las Farc reiteraban que los guerrilleros tendrían que seguir una disciplina de "educación diaria y permanente […] estudio individual, controlado a través de resúmenes y discusiones […] alfabetización y cultura general, charlas políticas sobre diversos temas, […] hora cultural diaria, nociones de política, geografía, historia, poesía, canto y noticias". Adicionalmente, tendrían cursos especiales sobre estatutos, normas y reglamentos de la organización, así como instrucciones sobre "qué es y por qué lucha el partido comunista"[49]. Como parte de su nueva estrategia de guerra, reconocían como una de sus tareas más importantes "nuestra formación ideológica, el dominio de la línea política del partido, despertar en nosotros un verdadero espíritu comunista y meterle el diente con entusiasmo y decisión al cumplimiento y superación de los planes"[50].

Sin embargo, su capacidad táctica para sobrevivir no los había llevado al camino de la toma del poder. El Partido Comunista en los años setenta todavía combinaba en su plan de guerra las estructuras de guerrillas con las de autodefensas regulares. Además, todavía enunciaba como un tercer tipo de estructura de apoyo a las 'autodefensas populares de masas', descritas como núcleos de simpatizantes armados, no orgánicos a las Farc[51]. Estas autodefensas eran "concebidas como 'organizaciones de masas' capaces de apoyar en cualquier momento a las 'cuadrillas armadas'"[52].

Para las Fuerzas Militares, estos grupos "se constituyen en los elementos de control de la población, de apoyo logístico y de inteligencia. A su vez, reciben entrenamiento en guerra de guerrilla, participan en acciones de combate y algunos se incorporan al grupo de forma permanente […] La participación de la población civil en las acciones de los grupos subversivos compromete a esta cada vez más a prestarle su apoyo y negárselo a la Fuerza Pública". En la

práctica, los militares entendían que las autodefensas regulares y de masas “instalan los elementos más indispensables para apoyar al grupo armado como son: talleres de sastrería y zapatería, armerías, puestos de socorro y campos de entrenamiento”, de manera que los guerrilleros pudieran contar con un apoyo permanente de material logístico y de intendencia[53].

Por más de una década, las Farc esperaron el momento adecuado para el salto cualitativo que ya se disponían a dar. Pero ya en su Conferencia Guerrillera de 1978, las Farc, por fin, tomaron la decisión de conformar su ‘ejército revolucionario’ para cubrir todo el país y prepararse para la guerra de movimientos[54]. Para ello, esperaban contar con al menos un frente en quince departamentos del país en 1980, y un total de treinta para 1982[55]. Luego, durante su Séptima Conferencia Nacional Guerrillera, desarrollada en Meta en 1982, las Farc apostaron por acumular en dos años un total de quince mil guerrilleros[56].

Tres factores contribuyeron al rápido crecimiento de las Farc en esos años. Primero, una aceleración en las prácticas de reclutamiento, “sin distingos entre hombres y mujeres […] entre los 15 y 30 años”[57]. Segundo, el que el Ejército se concentrara en esos años en su guerra con el M-19, hacía que las bajas infligidas a las Farc fueron mínimas, lo cual contribuía a su crecimiento sostenido[58]. Y tercero, la rápida expansión territorial de las Farc de esos años, que favorecía el reclutamiento entre los campesinos de sus zonas de influencia y se aprovechaba de la lenta construcción de una red de autodefensas tejida desde los años cuarenta[59].

Para financiar tal crecimiento, las Farc establecieron las cuotas de recursos que cada frente debía aportar a la organización, apelando a la extorsión de empresas en ciudades y el campo, secuestros y el control de la explotación de la coca mediante el cobro de gramaje[60], y el inicio de relaciones de colaboración con los carteles del narcotráfico[61]. En regiones de Antioquia —como Urabá—, Santander, Caquetá, Meta y Magdalena Medio, los dueños de haciendas iniciaron un éxodo hacia las ciudades, huyendo del riesgo de secuestro, de las ‘cuotas obligatorias’ a ganaderos y la repartición de sus cosechas con las Farc[62].

Pero tal multiplicación de fuerzas vendría acompañada de un cambio significativo en la manera de hacer la guerra: la llamada nueva forma de operar. Durante su Conferencia Nacional de 1982, las Farc concluyeron que el Ejército había logrado adaptarse a la guerra de guerrillas y era necesario cambiar el escenario a su favor. Tras tener en sus manos copias de órdenes operativas de

comandos de contraguerrillas[63], las Farc estudiaron las tácticas de las tropas y concluyeron que “para enfrentar la guerra irregular de las guerrillas, el ejército se hace cada vez más irregular”[64].

“A golpes de experiencia”, analizaban, el Ejército “está introduciendo un nuevo modo de operar que se concreta en la acumulación, evaluación y compartimentación de inteligencia especializada para un nuevo modo de operaciones militares de contraguerrilla, y luego, para la práctica de una táctica que evita el uso de caminos, trochas asentadas y otras vías de uso común u obligado, para burlar la confrontación con la táctica de la guerrilla que ha sido fundamentalmente la de emboscadas”[65]. Tener a un Ejército avanzando “a campo traviesa” no solo limitaba las posibilidades de emboscarlo, sino que “la guerrilla queda en inferioridad de condiciones, combatiendo a un enemigo que no da blanco”[66].

Por ello, desde finales de los setenta, las Farc dejaron de esperar las tropas para emboscarlas desde un sitio fijo, para salir por ellas, ‘asediándolas’, y así recuperar la iniciativa y la sorpresa, yendo a la ofensiva. Como un ensayo de esta nueva forma de operar, tres grupos de 35 guerrilleros se desplazaron de forma coordinada en la región del río Guayabero en agosto de 1980. “La misión fundamental de las tres unidades era detectar y ubicar patrullas enemigas y comunicar la novedad a las demás unidades para que se concentraran, ultimar los detalles del momento, producir el movimiento hacia el objetivo, asediarlo y asaltarlo”[67]. Según escribieron las Farc, “dio la casualidad que el Ejército también operaba exactamente en esos mismos días, en la misma área, con tres contraguerrillas llamadas Águila 1, Águila 2 y Águila 3”, cada una de quince a cuarenta hombres[68].

La táctica de coordinación de los tres grupos guerrilleros, que incluía el uso de “una franja roja frontal en el sombrero, gorra o cachucha”, por parte de cada guerrillero, y un trabajo previo de conocimiento detallado del terreno para el desplazamiento, logró asediar de manera sostenida a una sola de las tres contraguerrillas, Águila 2, en un proceso sistemático de “ubicación, asedio sostenido, asalto y copamiento del enemigo”. Con el asedio, las Farc habían logrado dispersar la tropa y aislar la compañía de soldados, contra la que concentraron su poder de fuego[69].

Para lograr este cambio en la manera de hacer la guerra, las Farc dispusieron cursos para cuadros y comandantes[70], e incluso la creación de una escuela de

cadetes[71], pero por un tiempo los golpes recibidos del Ejército reflejaban que "nuestro nuevo modo de operar está todavía en el papel, mas no en la mente de nuestros mandos"[72].

Este cambio táctico y operacional venía acompañado de una nueva estrategia, con la que las Farc esperaban poco a poco combinar la guerra de guerrillas básica con la denominada 'guerra de movimientos'. Su plan estratégico de 1982 planteaba lanzar la primera gran ofensiva para la toma del poder en ocho años, acumular veinticinco frentes y quince mil hombres, crear redes de apoyo civiles[73] y tomarse la cordillera oriental en dirección a Bogotá[74]. En 1985, ya hablaban de crear 48 frentes y agrupar veintiocho mil combatientes, incluyendo ocho mil comandantes.

El aprendizaje mutuo de Fuerzas Militares y guerrillas no solo se quedaba en el terreno de lo militar. Según las Farc, "nuestro movimiento hace ya varios años se planteó la tarea de salirle al paso a la acción cívico militar del Ejército, con acciones concretas nuestras en beneficio de los campesinos, especialmente en las áreas de las guerrillas. Esa tarea fue la de realizar en casas y fincas de campesinos ciertas obras de beneficio familiar o colectivo, como la instalación por medio de canales de madera o guadua, bocatomas u otros medios del servicio de agua, la apertura de un camino o una trocha esenciales, la refacción o el arreglo de los desperfectos de las casas, la hechura de bateas, pilones y otros elementos indispensables en la vida de las familias. Eso se hizo en varias oportunidades y en casas de campesinos amigos con resultados magníficos, ya que obritas de esta naturaleza despiertan en la gente gran simpatía por el movimiento guerrillero"[75].

Las Farc, compitiendo con el M-19, se preocuparon por acercarse a los indígenas del Cauca, ya que operaban en su zona de influencia. Incluso, respaldaron los movimientos indigenistas en la invasión masiva de tierras de los setenta[76]. Como resultado, lograron que algunos indígenas se comprometieran a "suministrar armas y apoyar las acciones armadas" de las dos organizaciones guerrilleras[77].

Las Farc aún eran entendidas por el Ejército como un brazo orgánico y funcional del Partido Comunista legal. "Ante la detención de elementos subversivos comprometidos con su brazo armado (Farc), emitió instrucciones a sus diferentes organismos para que trabajen con grupos en la clandestinidad pero sin abandonar los planes trazados […] buscando que no se declare ilegal el Partido"[78]. De ahí que promoviera la infiltración y control, tanto del Ejército mismo[79] como de

diversos centros académicos y culturales, editoriales y asociaciones sociales de diversa índole que el Ejército denominaba de “fachada”. Este trabajo de infiltración contribuía no solo a promover reclutamientos sino que también servía para implementar una campaña para “minar la moral y ética profesional de los miembros de las Fuerzas Militares” con acusaciones de violaciones a los derechos humanos[80]. Sin ambages, el Ejército entendía que una de las directrices del partido era “incrementar la actividad guerrillera, con el fin de desgastar paulatinamente a las fuerzas del orden, a través de ‘acciones guerrilleras’, en zonas donde las cuadrillas puedan combatir ventajosamente”[81].

A diferencia de otras organizaciones guerrilleras, que despreciaban la política legal, las Farc apostaban a participar electoralmente y en la agitación social sin renunciar a la lucha armada. “No solamente debemos parar acciones”, decían sobre las elecciones de 1982, “sino participar activamente en la campaña electoral”[82]. La necesidad de prepararse para un eventual golpe militar, además era citada por el Partido Comunista como una justificación para “las acciones armadas en combinación con los paros cívicos y las huelgas obreras”[83].

Las Farc decidieron apoyar “la organización y movilización del electorado en la organización de comandos electorales, de Frente Único o Frente Patriótico en todas las áreas de las Farc”. Como parte de esta estrategia, decidieron detener sus acciones militares entre noviembre de 1981 y mayo de 1982, coincidiendo con las elecciones legislativas y presidenciales[84]. Para justificar este cese, las Farc aseguraron públicamente que no querían que “los altos mandos militares fascistas dispongan de pretextos para impedirle al electorado expresar su opinión en las urnas […] Hacemos un llamado a los militares progresistas […] para que rechacen las tentativas golpistas […] El pueblo […] está obligado a alzarse para evitarle al país una tiranía militar tipo Pinochet”[85].

Las Farc apoyaron los candidatos de la llamada Unión Nacional de Oposición (UNO)[86]. “Es un bonito nombre, pero es un cascarón. La fuerza fundamental de la UNO es el partido comunista”, explicaban. “Las Farc, que son ante todo partido comunista, están obligadas a movilizar las masas de las regiones de las áreas guerrilleras para que voten por los candidatos de la UNO […] Los frentes deben invertir dinero en la campaña electoral en sus áreas operacionales”[87]. A pesar de todo, la receptividad a sus mensajes y su capacidad de movilización fue pobre. La coalición obtuvo menos del 2 % de los votos en las elecciones legislativas de 1982.

En pocos años, las Farc se embarcarían en una nueva aventura electoral, dirimida, esta vez, no solo con votos y propaganda armada, sino también con fuego.

La división maoísta

El ‘ejército irregular’ del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)llegaba dividido a la década de los ochenta. El nuevo liderazgo surgido después del descalabro militar en los años anteriores se atrevió a desafiar la línea tradicional y plantear una guerra urbana combinada con el esfuerzo rural[88]. Adicionalmente, otra facción proponía incluso postergar la lucha armada hasta que lograran “preparar primero ideológica y políticamente a las masas”[89]. Como resultado, la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) terminó en la práctica dividida también en dos grupos, que representaban la línea tradicional y la nueva línea que se autodenominó EPL-PLA[90].

En 1980, los cinco frentes rurales y seis regionales urbanas del EPL sumaban unos 170 miembros. En su intento por expandirse, el EPL había apoyado activamente los movimientos indígenas del Cauca en sus reclamos por recuperar tierras para sus resguardos de manos de terratenientes de la región. En los ochenta, el EPL tomaría la trascendental decisión de crear un frente en Urabá y, en las cuentas del Ejército, había logrado casi duplicar su número de efectivos[91]. Mientras que la guerrilla se esforzaba en organizar a la población rural de Antioquia y Córdoba en las llamadas ‘brigadas de apoyo’, ‘brigadas de producción’ y ‘juntas patrióticas’, su actividad armada se concentraba en actividades de secuestro, extorsión y robo de armas en emboscadas a la Fuerza Pública[92]. Durante las etapas de inactividad armada, “los combatientes se emplean como trabajadores [del campo] para obtener su alimentación”. El EPL de esos años demostraba gran capacidad de reclutamiento en sus áreas de influencia dado que sus miembros “son campesinos que laboran ahí y están bastante adoctrinados”[93]. La simbiosis de los combatientes del EPL con la población creaba situaciones tan confusas como el combate entre tropas del Ejército contra diecisiete guerrilleros que se presentó en Ituango. Los guerrilleros estaban armados con escopetas, y una mujer y su hijo menor, que hacían parte de este grupo, terminaron muertos[94].

La línea EPL-PLA, por su parte, contaba con unos 360 miembros dedicados a hacer explotar bombas de bajo poder, asaltos bancarios y extorsiones en las ciudades, reclutando para ello estudiantes, obreros y campesinos sin mayor experiencia armada. El EPL-PLA creció con el reclutamiento de miembros de la entonces Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), y sus acciones

se concentraron sobre todo en Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Tunja, Ibagué, Florencia y el eje cafetero. Para 1983 ya contaba además con cinco frentes rurales, que sumaban cien integrantes a su fuerza urbana, calculada en seiscientos miembros, sin contar milicias que podían llegar a ser hasta dos mil[95].

Paralelamente a la lucha armada, el PCML apostaba por la infiltración de los sindicatos de grandes empresas del país, particularmente en Antioquia, Valle y Santander, así como grupos estudiantiles en las universidades del país que eran atraídos a su escuela de formación de comandantes[96].

En abril de 1980, el partido dio un viraje estratégico al decidir "romper los vínculos de amistad, cooperación e intercambio militar con el partido comunista de China en razón a que el pensamiento de Mao Tse Tung, de expansión comunista internacional, carece en todos sus aspectos de los principios marxista-leninistas"[97]. Como consecuencia, el PCML "erradicó de su seno la doctrina de Mao Tse Tung, guiándose única y exclusivamente por los principios marxista-leninistas y con el apoyo del Partido de los Trabajadores de Albania"[98]. Previamente, el PCML participó en Tirana, capital albanesa, de la declaración de partidos marxistas-leninistas de Suramérica en apoyo al modelo comunista de este país[99]. El cambio en orientación política vino acompañado ese año, sin embargo, de la reiteración de su estrategia de guerra popular prolongada, combinando movimientos de masas estudiantiles y sindicales con la creación de un 'ejército' — el EPL.

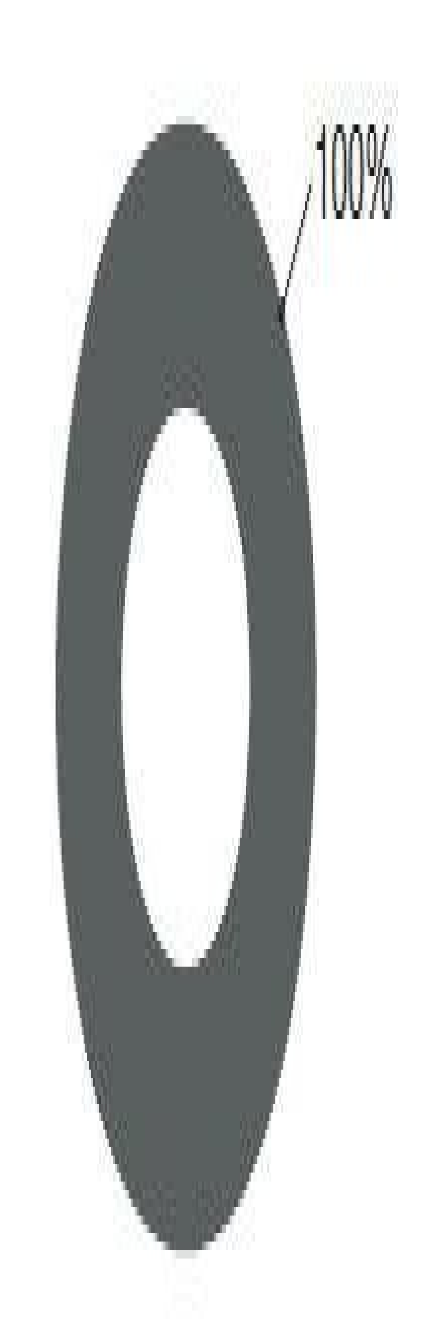
Gráfico 7.

ACCIONES ARMADAS EPL-PLA 1975-1980

EL EPL-PLA apeló al uso masivo de explosivos en zonas urbanas, eludiendo el combate con la autoridades. Eso no impidió que fuera desarticulado mediante capturas en este período.

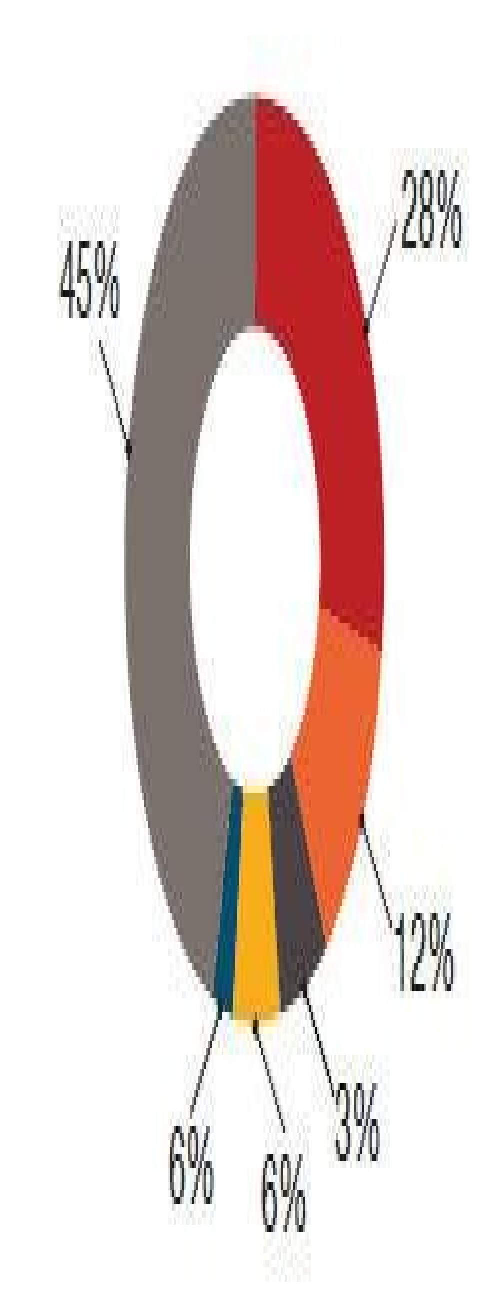
INICIATIVA DEL EPL-PLA

	TOTAL
ATAQUE CON EXPLOSIVOS	94



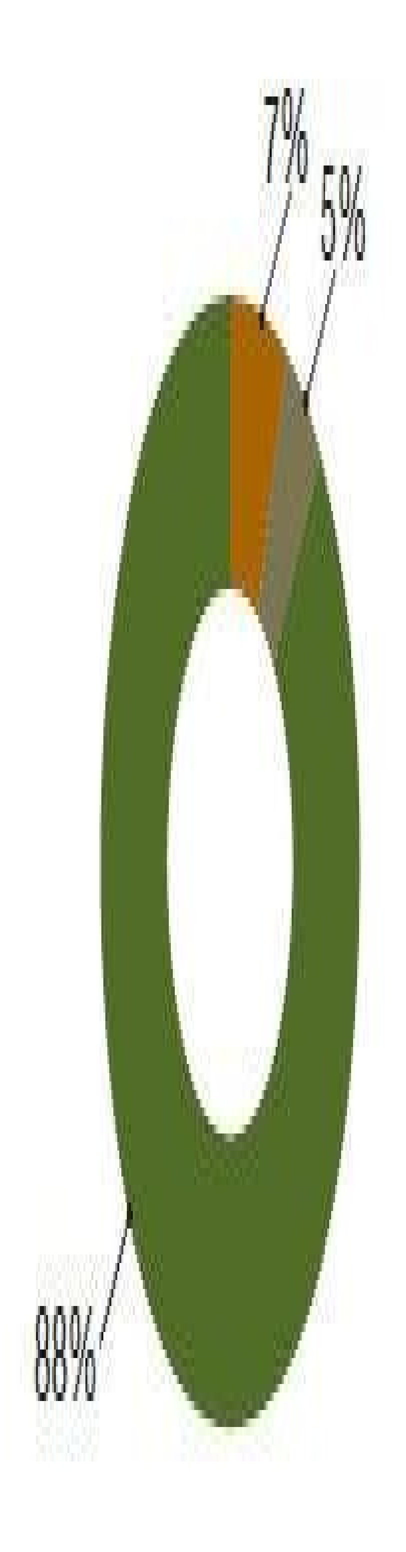
AFECTACIÓN A POBLACIÓN POR EL EPL-PLA

	TOTAL
ASALTO A BANCOS	68
ASALTO A ENTIDADES PÚBLICAS	43
ASESINATOS CIVILES	19
ATAQUES A POBLACIONES	9
ASALTO A VEHÍCULOS	9
SECUESTROS	4



INICIATIVA FFMM CONTRA EL EPL-PLA

	TOTAL
CAPTURAS	240
ASILOS	20
BAJAS	12



Fuente: Elaboración propia con datos de Comando del Ejército 1979, 1980, 1981 y 1982. Apreciaciones de inteligencia.

Las escisiones y divisiones internas continuaron durante la década de los ochenta. En 1983, una nueva tendencia decidió crear el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el año siguiente apareció el movimiento guerrillero Patria Libre. En 1985, el EPL contaba con trescientos miembros en sus frentes rurales, un centenar más en estructuras urbanas y cientos de milicianos. Pero si bien su exitoso trabajo de masas les permitió incorporar rápidamente cientos de combatientes en corto tiempo, al punto de conformar una fuerza que duplicaba al M-19 en 1990, su poca preparación militar le impidió consolidar una fuerza capaz de enfrentar la ofensiva que el Ejército lanzaría a finales de la década.

El ELN en reconstrucción

El Ejército de principios de los años ochenta asumía que el ELN, el cuarto 'ejército irregular', de alguna manera emanaba de la estrategia del Partido Comunista legal y, por eso, lo describía como el brazo armado de la "línea castrista" del Partido[100].

El Ejército estaba al tanto de la división interna que sufría el ELN. Interpretaba que mientras la línea tradicional "sigue las orientaciones políticas de sus fundadores y considera que el foco guerrillero es el que crea las condiciones favorables para llevar la lucha a las ciudades, y de esta forma desarrollar el partido y alcanzar el poder", la línea de replanteamiento "expresa que la lucha armada debe originarse y desarrollarse en la ciudad hasta crear las condiciones para llevarla al campo". Según el Ejército, durante la pugna interna, los líderes de replanteamiento habrían intentado convencer a los miembros de uno de los dos frentes guerrilleros del ELN de unirse a su facción[101].

Oficialmente, la corriente de replanteamiento se disolvió en 1979, cuando sus líderes decidieron que "cada exmilitante continuaría en la lucha por la democratización del país". Quienes no aceptaron este planteamiento, regresaron al ELN[102]. Para inicios de los ochenta, los líderes de esta línea, con presencia en varias ciudades[103], "se reincorporaron a la línea tradicional, mientras que las bases se fusionaron en otras corrientes de izquierda, especialmente Firmes y M-19"[104].

Desde las operaciones de Anorí, el ELN mantenía solo dos frentes guerrilleros en actividad[105], uno dirigido por Gabino, entre Antioquia y Córdoba, y uno más dirigido por el sacerdote español conocido como el Cura Pérez[106], entre Norte de Santander y Cesar. Incluyendo ambos frentes, el ELN no contaba en 1980 con cien combatientes rurales, aunque sí con un número mayor de miembros de grupos urbanos en los Santanderes, Antioquia, las costas Atlántica y Pacífica, Bogotá, Boyacá, Huila y Caquetá[107].

La actividad militar de esos años era baja: desde Anorí hasta 1980, el Ejército solo registraba tres ataques a poblaciones, el secuestro de dos extranjeros en Cesar —una mujer y su hijo—, y actividades como la proyección de "diapositivas relacionadas con supuestas torturas [de la Fuerza Pública]" en un teatro de Bogotá, así como "la izada de la bandera en una escuela de

Bucaramanga”[108]. La interpretación del Ejército señalaba que tal inactividad reflejaba su dedicación “al entrenamiento, crecimiento y al trabajo político […] Al parecer no les interesa por ahora comprometerse en acciones que motiven en su contra operaciones por parte de las Fuerzas Militares”[109]. En esos años, pequeños grupos armados, que incorporaban antiguos miembros del ELN y otras guerrillas, realizaban atentados a nombre de este grupo, sin obedecer a su mando central[110].

Pese al debate ideológico interno, la organización mantenía un control sin fisuras del aparato militar. “Cualquier actividad u operación que se pretenda realizar, solamente es planeada por el ‘Estado Mayor’ y divulgada al bandolero raso faltando un breve lapso para su ejecución”[111]. En algunos casos “emplean el ‘ajusticiamiento’ como medio represivo con aquellos individuos que consideran colaboradores de las tropas o antisociales desertados vinculados a esta. Asimismo, con aquellas personas catalogadas como ‘nocivas’ para la organización o los moradores de las regiones donde actúan”[112]. De igual forma, en su esfuerzo por mantener el apoyo de la población en sus zonas de operación, “utilizan procedimientos amables y suministro de apoyos relacionados con asistencia sanitaria, educacional y económica”[113].

Dentro del proceso de reorganización interna, el ELN de la época atrajo grupos cercanos al clero, así como diversos círculos estudiantiles en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, que le permitieron organizar al menos cinco regionales urbanas con casi doscientos integrantes[114]. Así, la nueva dirección del grupo en los ochenta incorporaba exsacerdotes, sociólogos, médicos y abogados[115]. Tal renovación introdujo cambios en la cultura de la organización, tales como “el derecho de opinión de toda la militancia, la salida voluntaria de la guerrilla y el derecho a elegir lo que mejor le convenga en el aspecto sentimental y llegar inclusive hasta el matrimonio”, lo que daba pie a nuevas controversias internas[116].

El fraccionamiento del ELN llegó a su fin cuando en 1982 se acordó, en una reunión nacional de frentes y regionales en Sucre, la centralización del mando en la Dirección Nacional Provisional, en cabeza del Cura Pérez[117].

Pero la gran sacudida a su crisis interna llegaría en 1980, con la aparición del frente Domingo Laín, en Arauca, inicialmente con alrededor de treinta integrantes dispuestos a unirse al ELN. Ya para 1983, el ELN convocó a su llamada ‘primera reunión’ contando con redes urbanas en dieciséis

departamentos y cuatro frentes rurales, con unos doscientos integrantes en las ciudades y 150 en el campo[118]. Como consecuencia, el número de acciones armadas, ataques a la Fuerza Pública y actos de propaganda empezó a crecer[119]. El Ejército reconocía su dificultad para asestar golpes al ELN, dado “lo escarpado del terreno, abrupto y montañoso en las zonas donde operan”[120], por lo cual se hubiera necesitado “un entrenamiento especial, conocimiento y permanencia en dichas áreas” para evitar que se convirtieran “en factores negativos”[121].

En 1983, el ELN reiteró su objetivo inmediato de la toma del poder[122]. Sin embargo, se trataría inicialmente de una revolución que aglutinara un amplio espectro político, dada la impopularidad del modelo socialista. Una vez en el poder, Colombia sería dirigida hacia el socialismo[123].

Como primera fase de su estrategia planteada en 1983, el grupo guerrillero se propuso posicionarse como defensor armado de las causas sociales, aprovechando el malestar y las promesas incumplidas de los gobiernos del momento. Tácticamente, el ELN procuraba incorporar las doctrinas de la guerra popular prolongada de Mao y los manuales de guerrilla del Che y los comunistas de Vietnam. Además, para magnificar su imagen, se proponía replicar la estrategia del M-19 de realizar acciones armadas de impacto político, esperando que las tomas de poblaciones y lugares públicos, y el uso de explosivos y hostigamientos despertaran el interés de la sociedad en sus reivindicaciones políticas[124]. En este contexto, un grupo secuestró a nombre del ELN al hermano del presidente de la República en noviembre en 1983, a quien liberó dos meses después[125].

Durante la segunda fase de su estrategia, que debería iniciar en pocos años, construirían un aparato militar capaz de enfrentarse al Ejército, tal como lo venían proponiendo las Farc[126]. Para ello, seguirían el ejemplo de esta organización al iniciar un proceso de creación de frentes a partir de otros ya existentes[127]. Este plan de crecimiento los llevó a acumular unos seiscientos combatientes en 1985, distribuidos en ocho frentes rurales, y doscientos más en sus regionales urbanas. Finalmente, el ELN saltaría a una tercera fase que tendría como objetivo promover una insurrección de masas en la que “la toma del poder será inevitable”[128].

Además de la idea de generar acciones militares de resonancia política, el ELN de la época incorporó otras tres enseñanzas de la experiencia del M-19: primero,

unificar la dirección política y la militar en una sola organización, al mando de una Dirección Nacional; segundo, formar a todos sus miembros como militares y políticos en teoría marxista leninista y guerra de guerrillas[129], y tercero, no dispersar sus frentes guerrilleros, sino concentrarlos para, llegado el momento, enfrentar al Ejército[130]. El aprendizaje de los errores del primer ELN, y de los aciertos y fracasos de las demás guerrillas del país, le permitiría a los camilistas sobrevivir en el tiempo hasta convertirse en el siglo XXI en la última guerrilla de América Latina.

Además de los grupos guerrilleros mencionados, el Ejército consideraba una amenaza, empezando la década de los ochenta, a una insurgencia llamada Autodefensa Obrera (ADO), un grupo que operaba principalmente en Bogotá, pero también en Barranquilla, Cali, Medellín y Tunja, como filial de los partidos comunistas seguidores de Trotski en la región[131]. Además de sus grupos de estudio para planear la unificación de la clase obrera, el ADO recurría a secuestros, robos de bancos, asesinatos de líderes políticos y sociales, y hacía propaganda armada en colegios y sitios públicos[132]. Sus integrantes, que sumaban un poco menos de cien en 1982, eran considerados "altamente beligerantes" y provenientes "de sectores marginados"[133]. Para el Ejército, "los jefes del movimiento [tenían] una mediocre estructuración política pero con una doctrina de anarquizar la nación"[134]. Precisamente, su baja disciplina interna hizo a sus miembros vulnerables a los arrestos y muertes, tanto así que para 1983 el Ejército consideraba que el ADO estaba "casi destruido"[135]. Este grupo se adhirió a las treguas firmadas en 1984 y nunca más regresó a la lucha armada.

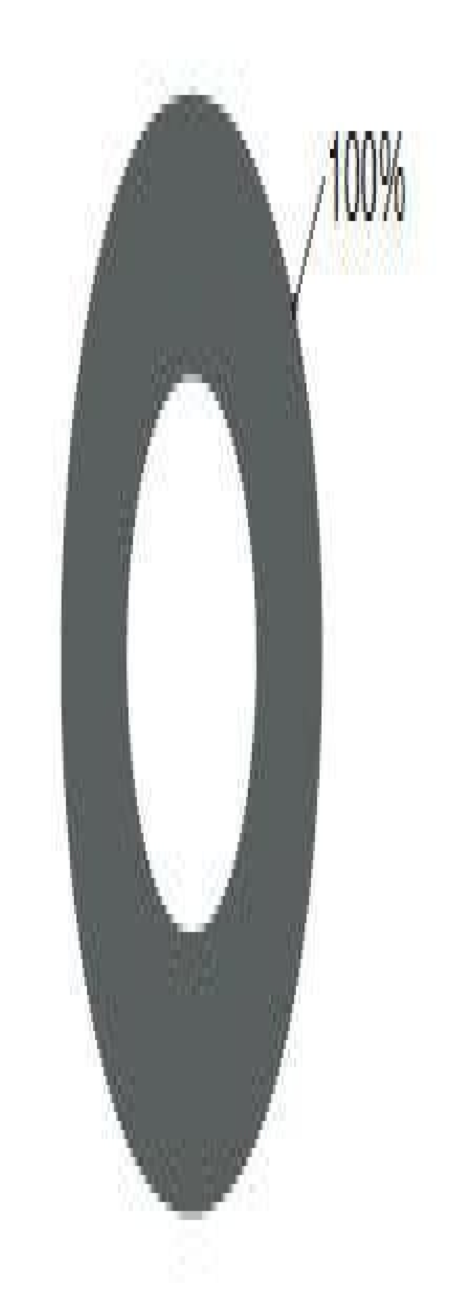
Gráfico 8.

ACCIONES ARMADAS ADO 1977-1980

El ADO apeló esencialmente al ataque con explosivos en las ciudades. En ausencia de combates, la Fuerza Pública lo redujo principalmente mediante capturas.

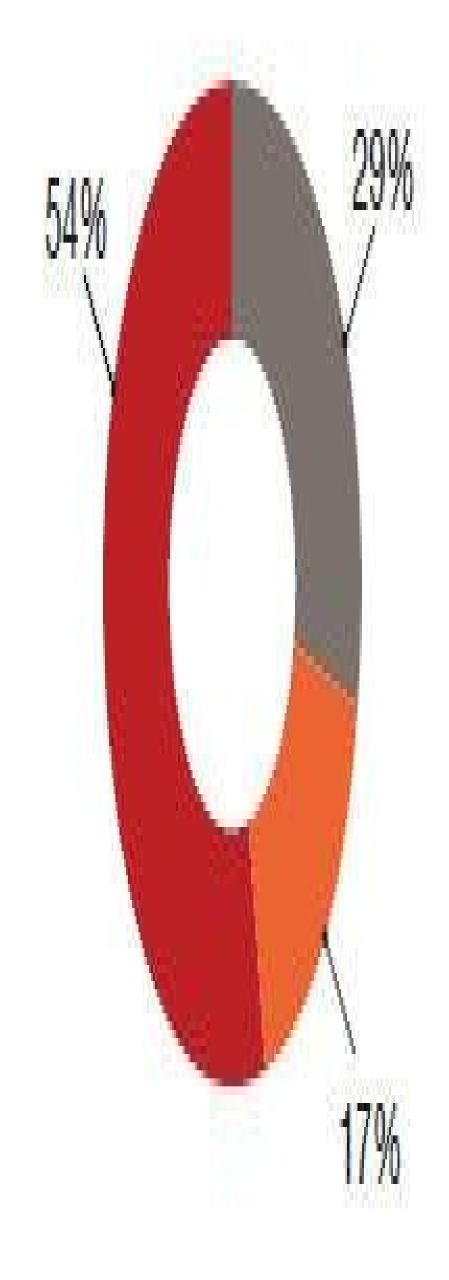
INICIATIVA DEL ADO

	TOTAL
ATAQUE CON EXPLOSIVOS	19



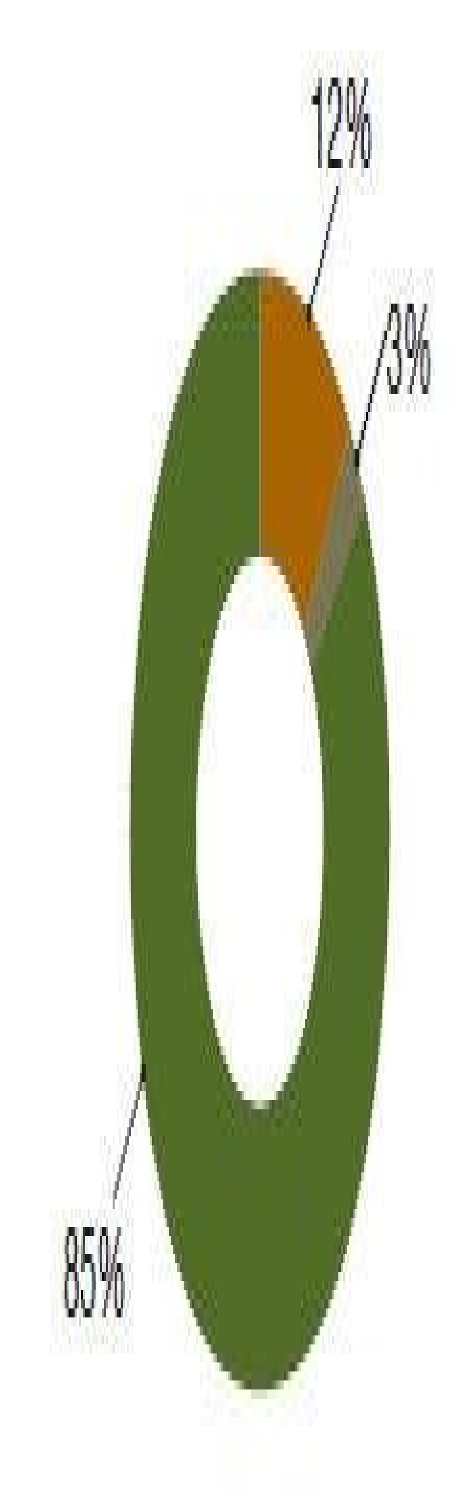
AFECTACIÓN A POBLACIÓN POR EL ADO

	TOTAL
ASALTO A ENTIDADES PÚBLICAS	19
ASALTO A BANCOS	10
ASESINATOS CIVILES	6



INICIATIVA FFMM CONTRA EL ADO

	TOTAL
CAPTURAS	87
ASILOS	12
BAJAS	3

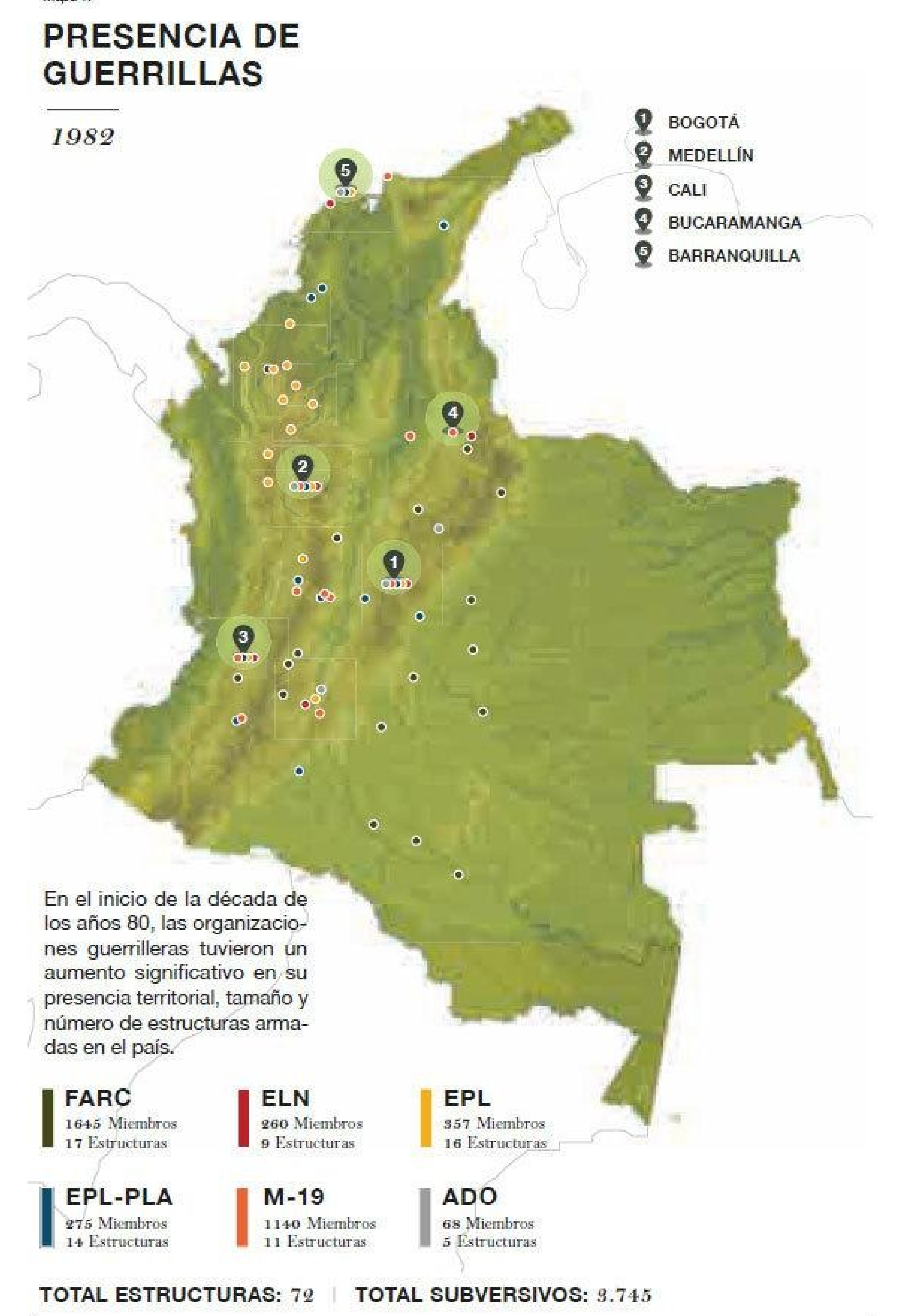


Fuente: Elaboración propia con datos de Comando del Ejército 1979, 1980, 1981 y 1982. Apreciaciones de inteligencia.

Mapa 1.

PRESENCIA DE GUERRILLAS

1982



En el inicio de la década de los años 80, las organizaciones guerrilleras tuvieron un aumento significativo en su presencia territorial, tamaño y número de estructuras armadas en el país.

FARC
1645 Miembros
17 Estructuras

ELN
260 Miembros
9 Estructuras

EPL
357 Miembros
16 Estructuras

EPL-PLA
275 Miembros
14 Estructuras

M-19
1140 Miembros
11 Estructuras

ADO
68 Miembros
5 Estructuras

TOTAL ESTRUCTURAS: 72 | **TOTAL SUBVERSIVOS:** 3.745

Otra de las organizaciones de guerrilla urbana de esos años se denominaba Organización Revolucionaria del Pueblo. Algunos panfletos y documentos sugieren que desde 1977 intentó infiltrar organizaciones campesinas y sindicales, pero se hizo tristemente célebre en 1982 por el secuestro, tortura y asesinato de la líder política liberal Gloria Lara. En medio de un proceso judicial defectuoso, catorce de sus líderes fueron capturados ese mismo año, dejados en libertad en 1983, y posteriormente huyeron en busca de asilo a Europa y Suramérica. En 1992, un juez los absolvió del crimen, y, solo después de la apelación de la Fiscalía, dieciséis de ellos fueron condenados en ausencia.

La autodefensa legal y los ejércitos privados

El cobro de extorsiones por parte de las Farc, intensificado a raíz de su plan de expansión, ya generaba, a principios de los años ochenta, "protestas e inconformismo de parte de un gran número de ganaderos, que han decidido denunciarlos públicamente"[136]. La Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), amparada inicialmente en las leyes de autodefensa civil, decidió escalar sus acciones y pasar a la ofensiva. El éxito temprano de esta organización para defenderse de la guerrilla pronto llamó la atención del grupo de narcotraficantes que antes habían decidido crear la organización Muerte a Secuestradores (MAS).

Durante 1982, las organizaciones de autodefensa como la entonces legal Acdegam, al ser asociadas con el MAS, empezaron a adquirir una connotación negativa en el imaginario social. En julio, el Partido Comunista, en carta al presidente, exigía "la "desactivación del MAS" y un debate sobre "el papel de las FFAA"[137]. A finales de ese año, el Movimiento Firmes, aliado del Partido Comunista, señalaba abiertamente a los 'grupos paramilitares' como los "protagonistas de la violencia desatada recientemente"[138]. Las acciones de MAS eran interpretadas por ellos como "la encarnación de la teoría neofascista de la Seguridad Nacional […] que dan carta blanca a organizaciones de torturadores y asesinos"[139].

La Procuraduría envió en 1983 un informe al presidente de la República sobre el MAS. En este, describía sus acciones como "una forma encubierta de justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad"[140]. Sin embargo, una vez logrado el cometido de venganza y amedrentamiento de los guerrilleros, el MAS parecía haberse desvanecido, pero "ya había marcado una huella en la desesperada vida nacional", al punto de crear una falsa apariencia de existencia de un "movimiento nacional unificado". Según el informe, "lo que empezó bajo la divisa de muerte a secuestradores, se abrió luego a todo tipo de delito, de represión y de víctima y se convirtió en muerte a todo el mundo, a cualquiera, por todo, por los más diversos motivos"[141].

Como resultado, "a este mecanismo criminal de contraofensiva social, económica y política han venido paulatinamente cediendo y apelando, en forma cada vez más recurrente y masiva, distintos sectores de nuestra población, en la

ciudad y en el campo, para combatir las más diversas manifestaciones del conflicto social. Finqueros y ganaderos, comerciantes, líderes de la nueva política lugareña o regional, o simples activistas de esos que siempre brotan y proliferan en torno a todo desastre, para azuzarlo, aprovecharlo o acrecentarlo, han venido encontrando fácilmente agentes para reprimirlo todo a su gusto"[142].

La mentalidad emergente de distintos sectores de la sociedad, que justificaba el uso de ejércitos privados como instrumento, tanto de lucro económico como resolución de disputas sociales y políticas, ayudaría en la multiplicación de estos grupos en los años por venir[143]. Sería el narcotráfico, sin embargo, el encargado de nutrir ese fenómeno social y convertirlo en una amenaza militar[144].

Los recursos con los que contaban los carteles del narcotráfico les permitieron visitar las organizaciones de autodefensas legalmente constituidas y cooptarlas con dinero y provisión de armamento de guerra como fusiles y granadas[145]. En este proceso de mutación, aquellos miembros del Ejército, retirados por mal comportamiento, o soldados regulares retirados después de su servicio obligatorio, fueron presas fáciles de las ofertas de dinero y un proyecto militar naciente. Y algunos activos también. "En ese tiempo, poquitos oficiales o suboficiales tenían carro", relata un suboficial en retiro. "Los parqueaderos de las unidades andaban vacíos. Pero de pronto, uno veía a un capitán o a un sargento parqueando un carro, y uno sabía que había algo raro"[146]. Según un informe de la Procuraduría, un total de 163 individuos, entre ellos 59 militares activos, pertenecieron al MAS. "Personas vinculadas directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas se han dejado arrastrar por esta corriente de disolución nacional", dice. "Con ello han desbordado indudablemente los límites de la misión encomendada por sus instituciones"[147]. La gran escalada de violencia de estos ejércitos privados, sin embargo, todavía no comenzaba.



La noche del 6 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia en Bogotá ardía en llamas luego de la toma por parte del M-19 y los combates con el Ejército y la Policía. / Foto: Felipe Caicedo. Archivo El Tiempo.

Notas

[1] Ministerio de Defensa 1982. Disposiciones administrativas.

[2] En 1985, el Ministerio de Defensa creó la Dirección de Inteligencia de Ejército, el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia y el Batallón Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia. Véase Ministerio de Defensa 1985a. Resolución 612, 19 de febrero.

[3] Ministerio de Defensa 1983a. Directiva permanente 300-3 sobre instrucción de los soldados. Modificatorio de 1983.

[4] Ministerio de Defensa 1983b. Disposición 2.

[5] Comando del Ejército 1987a. Reglamento de combate de contraguerrillas, cuarta edición. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 171-174.

[6] Solo con adiciones presupuestales, el Ejército poco a poco fue cubriendo su déficit durante esos años. Véase Ministerio de Defensa 1984. Directiva transitoria. Adición presupuestal 1984.

[7] Ministerio de Defensa 1985b. Directiva transitoria 44. Instrucciones para la recepción, revisión y transporte material reservado.

[8] Ejército Nacional 1979. Instrucciones generales para operaciones de contraguerrilla. Bogotá: Litografía Ayudantía General Comando Ejército, 197.

[9] Ibídem, 198, 202.

[10] Ibídem, 198, 204.

[11] Ibídem, 40.

[12] Comando del Ejército 1982. Apreciación de inteligencia 2. 9.

[13] Comando del Ejército 1979. Apreciación de inteligencia 2, 20.

[14] Según las Farc, el paro "puso en aprietos a la oligarquía dominante, que apeló a la fuerza pública, primero para amedrentar al pueblo y luego para sofocar la insurgencia popular. Pero seguramente lo más importante del paro cívico nacional fue que logró poner en evidencia lo decisivo de la unidad de la clase obrera, base de la unidad para la lucha del pueblo. La combinación de todas las formas de lucha de masas no es una consigna sino la política para la etapa actual de la revolución colombiana". Véase Farc 1978b. Conclusiones de la VI Conferencia Guerrillera, 18-25 de enero.

[15] Entrevista a General en retiro, Bogotá, 11 de abril de 2016.

[16] Comando del Ejército 1987a, op. cit., 20.

[17] Ibídem, 26.

[18] El término 'paramilitar' describía entonces las actividades de apoyo civil a la acción militar contempladas por la ley y las políticas de gobierno, sin ninguna connotación peyorativa. Véase Comando del Ejército 1987a, op. cit., 26.

[19] Ibídem, 74.

[20] Ibídem, 78.

[21] Ibídem, 23-24.

[22] Comando del Ejército 1981. Apreciación de inteligencia 1, enero, 31.

[23] Algunos miembros de Farc se infiltraron como escritores en el periódico Estrella Dorada, de circulación entre las Fuerzas Militares, posando como soldados. Comando del Ejército 1981, op. cit., 29; Comando del Ejército 1982, op. cit., 9; y Comando del Ejército 1983a. Apreciación de inteligencia 1, enero,

137.

[24] Ibídem, 178.

[25] Farc-EP 1982a. VII Conferencia Nacional de Guerrilleros. Plan Cisne 3 para 21 días, del 4 al 25 de agosto de 1980. Véase también Farc-EP 1981a. Planteamientos para la reunión del 25. Secretariado con ayudantías. 10 de septiembre.

[26] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 96.

[27] Ibídem, 96.

[28] Comando del Ejército 1979, op. cit., 16; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 19.

[29] Las protestas estudiantiles se incrementaron en los setenta con los Consejos de Guerra contra profesores y estudiantes acusados de militancia en grupos armados. Véase Comando del Ejército 1979, op. cit., 55; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 34.

[30] Ibídem, 20.

[31] Ibídem, 25.

[32] Ibídem, 26.

[33] Comando del Ejército 1979, op. cit., 35.

[34] Las Fuerzas Militares estimaban que la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) contaba con cuatrocientos mil afiliados, más o menos una sexta parte de los trabajadores sindicalizados en las grandes confederaciones.

[35] Comando del Ejército 1980, op. cit., 34.

[36] Ibídem, 41.

[37] Ejército Nacional 1979, op. cit., 197.

[38] Comando del Ejército 1980, op. cit., 57-58.

[39] Comando del Ejército 1979, op. cit., 65.

[40] Comando del Ejército 1980, op. cit., 61.

[41] “Quien tenga familia en regiones aledañas al Pato es trasladado a otro frente”. Véase ibídem, 56.

[42] Comando del Ejército 1979, op. cit., 64; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 62.

[43] Comando del Ejército 1979, op. cit., 64; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 57.

[44] Comando del Ejército 1982, op. cit., 42.

[45] Comando del Ejército 1979, op. cit., 69; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 61.

[46] Comando del Ejército 1979, op. cit., 70; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 59.

[47] Comando del Ejército 1981, op. cit., 138.

[48] Farc-EP 1978c. VI Conferencia Nacional de Guerrilleros. Estatutos. Artículo 2.

[49] Farc-EP 1982b. Conclusiones Generales de la Séptima Conferencia Nacional de las Farc-EP, 4-14 de mayo. Conclusiones de educación.

[50] Farc-EP 1981a, op. cit.

[51] Véase Comando del Ejército 1981, op. cit., 30; y Farc-EP 1981a, op. cit.

[52] Comando del Ejército 1979, op. cit., 69; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 59.

[53] Comando del Ejército 1987a, op. cit., 83.

[54] Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo A.

[55] El Ejército estimaba que en 1980 ya contaban con mil guerrilleros en once frentes rurales, uno urbano y un 'estado mayor'. Para 1982, ya se contaban quince frentes rurales. En 1983, estimaba más de mil quinientos hombres en veintitrés frentes rurales y uno urbano. Véase Comando del Ejército 1980, op. cit., 42, 50-52; Comando del Ejército 1982, op. cit., anexo A; y Comando del Ejército 1983a, op. cit., 108.

[56] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 108.

[57] Ibídem, 133.

[58] Ibídem, 133.

[59] Ibídem, 108.

[60] Desde finales de los setenta, los frentes en la zona de Vistahermosa y San Vicente del Caguán aplicaron su ‘reglamento del comportamiento del cultivador’, con el que cobraban ochenta pesos por gramo de cocaína semiprocesada. Luego los frentes fueron autorizados por las Farc para el cobro de ‘impuesto’ también a comerciantes y exportadores. En 1983, las Farc autorizaron el cobro de cincuenta mil pesos por hectárea cultivada y 45 mil pesos por kilo procesado. Véase Farc-EP 1982c. VII Conferencia Nacional de Guerrilleros. Informe central a la Séptima Conferencia, mayo; y Comando del Ejército 1983b, Conclusiones de la VII Conferencia Farc-EP y su cumplimiento.

[61] Comando del Ejército 1982, op. cit., 42.

[62] Además de estas fuentes de recursos, la Unión Soviética contribuía con formación a algunos de sus cuadros y donaciones esporádicas pero importantes al Partido Comunista. Véase ibídem, 44; y Comando del Ejército 1983a, op. cit.

[63] El Ejército incautó de las Farc copia de las órdenes de operaciones 29 y 32 de 1980 del comando de la compañía de contraguerrillas Águila, que operaba en La Uribe, Meta.

[64] Farc-EP 1982c, op. cit.

[65] Ibídem.

[66] Ibídem.

[67] Ibídem.

[68] Ibídem.

[69] Las Farc se refieren a esta operación como Plan Cisne 3, desarrollada cerca de Puerto Crevaux, y describen la muerte de tres soldados y la rendición de catorce más, que fueron dejados en una escuela, cerca de una base militar en La Uribe. Véase Farc-EP 1981a op. cit.; y Farc-EP 1982a, op. cit.

[70] Farc-EP 1983. Informe central al Pleno Ampliado del Estado Mayor Central de las Farc-EP. Octubre.

[71] Las escuelas de Farc impartían cursos de "inteligencia […] conducción de tropas […] de Estado Mayor, de comunicaciones, de topografía y levantamientos planimétricos, cartografía y orientaciones con brújulas, explosivos y ciencias apológicas, o sea el conocimiento científico sobre armamento, y otras especializaciones de singular importancia para un Ejército Revolucionario". La escuela nacional de entrenamiento era consideraba por Farc el frente No. 17 en 1982. Véase Farc-EP 1982a, op. cit.; y Farc-EP 1985a. Informe central al Pleno de Estado Mayor de las Farc-EP, 27 de diciembre de 1984 - 2 de enero.

[72] Farc-EP 1985a, op. cit.

[73] Organizaciones clandestinas llamadas ‘núcleos de solidaridad’, conformados por grupos de al menos tres individuos. Este modelo copiaba la red de apoyos que le permitieron sobrevivir a la Operación Soberanía en 1964.

[74] Véase Farc-EP 1981a, op. cit.; Farc-EP 1982a, op. cit.; Farc-EP 1982d. VII Conferencia Nacional de Guerrilleros. Planteamiento estratégico; y Comando del Ejército 1983b, op. cit.

[75] Farc-EP 1982c, op. cit.

[76] Comando del Ejército 1980, op. cit., 75.

[77] Ibídem, 28.

[78] Ibídem, 24, 33.

[79] El Ejército detectó guerrilleros infiltrados entre soldados y estudiantes de las escuelas de cadetes y suboficiales. Véase Comando del Ejército 1983b, op. cit.

[80] Comando del Ejército 1979, op. cit., 34, 39-40; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 35-37.

[81] Comando del Ejército 1979, op. cit., 35.

[82] Farc-EP 1981b. La campaña electoral y las tareas de los diversos frentes de las Farc. Documento del Secretariado.

[83] Dentro de las Farc también había convencimiento de que un sector del Ejército planeaba un golpe militar. Véase Comando del Ejército 1981, op. cit., 4; y Farc-EP 1982c, op. cit.

[84] Ibídem.

[85] Farc-EP 1981c. Declaración electoral del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Octubre.

[86] Esta coalición agrupaba al Partido Comunista y facciones del Anapo, del Partido Liberal y del Moir.

[87] Farc-EP 1981b, op. cit.

[88] Comando del Ejército 1980, op. cit., 44.

[89] Esta tercera facción se conocía como la tendencia proletaria. Véase ibídem, 45.

[90] Pedro León Arboleda fue uno de los líderes del EPl muertos en la ofensiva del Ejército en los setenta. Luego de que esta facción expresara sus divergencias con el Partido en 1973, decidió la conformación de su propio grupo armado en 1975. Comando del Ejército 1983a, op. cit., 182.

[91] Para 1983, contaba además con hasta mil quinientos milicianos. No se incluye el frente Francisco Garnica, que para 1979 fue expulsado del EPl "por incumplir consignas y trabajos encargados". Véase Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo B; y Comando del Ejército 1983a, op. cit., 169.

[92] Comando del Ejército 1979, op. cit., 76; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 67, 69, 92.

[93] A pesar de esto, el Ejército estimaba que "la forma de realizar la ejecución de los llamados 'ajusticiamientos' ha mermado su apoyo entre la población". Véase Comando del Ejército 1983a, op. cit., 176, 181.

[94] En la huida, los guerrilleros dejaron abandonado un bebé de ocho meses. Véase Comando del Ejército 1979, op. cit., 79.

[95] Aprovechando la oferta de amnistía, dieciséis universitarios miembros del EPL-PLA salieron en libertad en 1983. El EPL-PLA terminó siendo reducido militarmente por el Ejército y muchos de sus miembros se desmovilizaron o fueron absorbidos por otras guerrillas hacia 1985. Ese año, el frente Pedro León Arboleda del EPL empezó a actuar en la zona de Entrerríos, Carolina, San Pedro y Gómez Plata en Antioquia. Véase Comando del Ejército 1979, op. cit., 84, 93; Comando del Ejército 1980, op. cit., 69, 94; Comando del Ejército 1982, op. cit., anexo D; y Comando del Ejército 1983a, op. cit., 183-184, 187.

[96] Comando del Ejército 1979, op. cit., 48-49; Comando del Ejército 1981, op. cit., 10; y Comando del Ejército 1983a, op. cit., 89.

[97] Comando del Ejército 1981, op. cit., 7.

[98] Ibídem, 7.

[99] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 91.

[100] Comando del Ejército 1979, op. cit., 22; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 20.

[101] Comando del Ejército 1979, op. cit., 38; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 63.

[102] Sin firma 1980. Replanteamiento ELN. La propuesta de Bateman favorece a toda la izquierda. Trópicos. Crítica y réplica 5, julio-agosto, 19.

[103] Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Aguachica. Véase Comando del Ejército 1983a, op. cit., 85.

[104] Comando del Ejército 1979, op. cit., 38; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 43.

[105] El tercer frente, José Solano Sepúlveda, vivía un proceso de desintegración hasta su desaparición en 1979. Algunos de sus miembros se reintegraron a la vida civil, y otros se desplazaron a Arauca. Pronto, estos últimos serían germen de un nuevo frente, el Domingo Laín, el más fuerte militarmente del ELN en los años por venir.

[106] Manuel Pérez, también conocido como Poliarco, llegó al ELN en 1969 junto con otros dos sacerdotes españoles afines al Grupo Golconda: Domingo Laín, quien murió en las operaciones de Anorí al tratar de recuperar el arma de un soldado emboscado —igual que Camilo Torres—, y José Antonio Jiménez Comín, víctima de una picadura mortal de una araña el mismo año de su ingreso.

[107] Comando del Ejército 1979, op. cit., 70; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 62.

[108] Comando del Ejército 1979, op. cit., 71; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 62, 91.

[109] Comando del Ejército 1982, op. cit., 15.

[110] Un ejemplo es el de las llamadas Brigadas Negras en Medellín, que amenazaron con atentar contra la infraestructura industrial de la zona a principios de la década de los ochenta, pero todos sus miembros conocidos fueron capturados por las autoridades. En la zona petrolera de Orito, Putumayo, la Fuerza Unida Popular de Acción Guerrillera, Fupag, quedó desmantelada al sufrir la captura de sus siete líderes principales, antes de que una treintena de jóvenes llegara desde Medellín a incorporarse.

[111] Comando del Ejército 1980, op. cit., 73; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 64.

[112] Sobre los 'ajusticiamientos' en el ELN, véase Medina, Carlos 2008. Ejército de Liberación Nacional. Notas para una historia de las ideas políticas. ELN 1958-2007. Manuscrito. Véase también Comando del Ejército 1980, op. cit., 73; y Comando del Ejército 1980, op. cit., 65.

[113] Comando del Ejército 1980, op. cit., 72; Comando del Ejército 1980, op. cit., 64; y Comando del Ejército 1982, op. cit., anexo E.

[114] Comando del Ejército 1979, op. cit., 38; Comando del Ejército 1982, op. cit., anexo B; y Comando del Ejército 1983a, op. cit., 86.

[115] Comando del Ejército 1982, op. cit., 12.

[116] Comando del Ejército 1982, op. cit., 12-13.

[117] Ese mismo año, veinte condenados del ELN se acogieron a la amnistía del gobierno y regresaron a la civilidad. Comando del Ejército 1983a, op. cit., 86, 15.

[118] El ELN reconocía en 1984 cuatro regionales que agrupaban sus estructuras urbanas. Adicionalmente, el ELN tendría una comisión externa operando en El

Salvador y Panamá, y una en Nicaragua alrededor de una agrupación conocida en ese país como la Tendencia Unitaria Camilo Torres. Véase Comando del Ejército 1983a, op. cit., 148, 158.

[119] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 149-155.

[120] Ibídem, 164.

[121] Ibídem, 165.

[122] Ejército Nacional 1983. Cartilla conferencias ELN No. 90. Plan general ELN, 3.

[123] Ibídem, 5-6.

[124] Ibídem, 28-30.

[125] Según el Ejército, los autores del secuestro fueron expulsados del ELN.

[126] Ejército Nacional 1983, op. cit., 30.

[127] Esta metodología de creación de nuevos frentes se conoce como ‘desdoblamiento’.

[128] Ejército Nacional 1983, op. cit., 33.

[129] Ibídem, 38.

[130] Ibídem, 45.

[131] Existían varias filiales del trotskista Partido Obrero Revolucionario en Suramérica, de los que se desprendían diversos grupos armados, uno de ellos en Colombia desde 1971. Véase Comando del Ejército 1979, op. cit., 123; Comando del Ejército 1980, op. cit., 82; y Comando del Ejército 1983a, op. cit., 234.

[132] El ADO asesinó al exministro Rafael Pardo Buelvas en 1978 y a un senador en 1980. Véase Comando del Ejército 1980, op. cit., 83-85.

[133] Comando del Ejército 1979, op. cit., 127; Comando del Ejército 1980, op. cit., 86; Comando del Ejército 1981, op. cit., anexo D; y Comando del Ejército 1982, op. cit., anexo F.

[134] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 238.

[135] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 241.

[136] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 138.

[137] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 69.

[138] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 74.

[139] Farc-EP 1982c, op. cit.

[140] Procuraduría General de la Nación 1983. Conclusiones de la investigación de la Procuraduría sobre el 'MAS', 4 de febrero.

[141] Procuraduría General de la Nación 1983, op. cit.

[142] Ibídem.

[143] Además del afán de lucro, los patrocinadores de los ejércitos privados buscaban con ellos la defensa discursiva de valores básicos relacionados con la propiedad privada, la libertad individual y el progreso. Véase Gutiérrez, Francisco y Barón, Mauricio 2006. Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia. Notas para una economía política del paramilitarismo. En Gutiérrez, Francisco (coord.) Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: Norma, 267-309.

[144] Para una descripción de la expansión de los ejércitos privados en Colombia

desde 1982, véase Garzón, Juan Carlos 2005. La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica. En Rangel, Alfredo (ed.) El poder paramilitar. Bogotá: Planeta, 47-135. Sobre el contexto político regional que propició el crecimiento de los ejércitos privados durante los años ochenta y noventa, véase Romero, Mauricio 2003. Paramilitares y autodefensas 1982-2003. Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.

[145] Reyes, Alejandro 1991. Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y sus consecuencias. Análisis Político 12, enero-abril, 40-48.

[146] Entrevista con suboficial en retiro, Bogotá, 15 de abril de 2016.

[147] Procuraduría General de la Nación 1983, op. cit.

Capítulo VIII

Toma y retoma del Palacio*

* Los autores agradecen al coronel en retiro Carlos Arturo Velásquez Peláez por su sustancial contribución documental para la elaboración de este capítulo.

En octubre de 1985, el radiograma 37762 de la Dirección de Inteligencia lo advertía: “M-19 pretende tomarse edificio Corte Suprema [de] Justicia día 17-OCT-85. Cuando 24 magistrados estén reunidos tenerlos como rehenes para hacer fuertes exigencias a Gobierno”. Un grupo de guerrilleros había sido capturado cuando tenía en su poder planos de las sedes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, en el Palacio de Justicia, que fueron interpretados como parte de un plan de secuestro a magistrados a efectuarse, casualmente, el mismo día en que el presidente de Francia visitaba Bogotá[1].

Antes, el Ejército había tomado nota de informaciones de regular y baja credibilidad[2] que hablaban de la pretensión del M-19 de cometer un “acto terrorista de resonancia nacional en Bogotá”[3], atacar instalaciones militares y gubernamentales y antenas de comunicaciones en el municipio de Chocontá[4], incluso, atentar contra el Palacio de Justicia[5]. Las informaciones de mayor credibilidad con las que contaba el Ejército hasta ese momento, corroboradas por sus agentes de inteligencia, sugerían la posibilidad de una “escalada terrorista de impacto nacional e internacional”[6] en Bogotá, asaltos a puestos de policía, instalaciones de organismos de seguridad y a cuarteles militares[7], ingreso a edificios militares e infiltración en patrullas rurales y urbanas[8].

Pocos días después de desbaratarse el plan del 17 de octubre, una ambulancia azul y blanca se acercó en contravía a la caravana del comandante del Ejército. Por tres minutos, guerrilleros del M-19 ametrallaron el automóvil del general. Los atacantes desparecieron y los ocupantes del automóvil apenas sufrieron heridas leves.

Mientras las Fuerzas Militares evaluaban la manera de evitar una escalada armada del M-19 en Bogotá con múltiples ataques, la Policía elaboró en septiembre un plan "para la defensa del complejo Plaza de Bolívar (Capitolio Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Palacio de Justicia, etc.)"[9]. La Policía Nacional realizó un estudio de seguridad en agosto que produjo una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad del Palacio. Mayores controles en las entradas, la instalación de un circuito cerrado de televisión y uno de alarmas, fueron algunas recomendaciones que, sin embargo, no fueron atendidas en su totalidad[10]. Según la Policía, algunos magistrados se sentían incómodos con la escolta y "manifestaron el deseo de que se retirara el refuerzo de la policía porque se había militarizado el Palacio"[11].

Durante meses, la amenaza del M-19 fue tomada en serio, y al descubrir los planes para el 17 de octubre, la Policía dispuso un refuerzo al Palacio con una docena de agentes armados con fusiles, que fue luego disminuido "por voluntad […] del Presidente de la Corte" cuando no se hicieran reuniones plenarias de la Corte Suprema[12]. Una vez concluida la visita del presidente francés a Bogotá, al no haberse producido ninguna acción de relevancia, la amenaza empezó a ser desestimada[13].

El Ejército no tenía un plan de reacción específico para la defensa del Palacio de Justicia porque no estaba dentro de sus funciones. El Plan Tricolor de la defensa nacional, sin embargo, obligaba a cada brigada a desarrollar su propio plan de reacción frente a posibles amenazas[14]. Desde 1982, como una medida especial ante el volumen de indicios sobre ataques en todo el país por parte de las guerrillas, las Fuerzas Militares nombraron para cada brigada un 'oficial de guarnición' encargado de verificar que las unidades militares estuvieran listas en todo momento para movilizarse, en caso de necesidad. Cada brigada tendría que tener al menos una unidad de unos 45 hombres con vehículos, raciones de campaña, víveres, municiones, comunicaciones y equipos de primeros auxilios suficientes para soportar hasta 48 horas de operaciones continuas[15]. Cuando se produjo el asalto del M-19 al Palacio, al menos doce unidades militares estaban listas para contraatacar[16].

En la mañana del miércoles 6 de noviembre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia recibió en su oficina a un capitán que oficiaba como director de Contrainteligencia de la Policía. Le solicitó la protección de su familia dado que saldría de viaje a Europa en los próximos días. Cerca del mediodía, el joven capitán recibiría una llamada del magistrado quien, con voz de preocupación,

decía haber escuchado disparos en el sótano[17].

En el plan original del M-19, un grupo de 42 guerrilleros saldría de una vivienda al sur de Bogotá para dirigirse en dos camionetas y un camión a la entrada del sótano del Palacio. Luego, se tomarían los dos primeros pisos del edificio con fuego de ametralladoras, fusiles, minas y granadas. Pero solo los dos primeros vehículos, con 35 guerrilleros —no todos uniformados—, llegaron al lugar, dado que el tercero, al tomar un giro equivocado, se retrasó, y ya no tuvo tiempo de entrar[18]. Al regresar al Palacio poco antes del mediodía, para atender el llamado del presidente de la Corte, el capitán entró al sótano que, en ese momento, estaba a oscuras. Lo que alcanzó a ver fue sorprendente: un grupo de guerrilleros descargaba de un vehículo las piezas de una ametralladora. Pronto, se inició un intenso tiroteo de guerrilleros y escoltas. Pese a la muerte de un par de guerrilleros, el M-19 consiguió avanzar hacia el primer piso, y el capitán decidió salir hacia la Casa del Florero[19].

Dos vigilantes y el administrador del edificio fueron asesinados mientras el M-19 avanzaba hacia el primer piso, dejando detrás un campo minado y asegurada la puerta del Palacio. El M-19 había logrado infiltrarse en el Palacio con meses de anticipación[20]. Así, en el momento indicado, unos siete miembros del M-19, que antes se hacían pasar por abogados y estudiantes de Derecho y esperaban en varios pisos el momento del asalto, sacaron sus armas e hicieron tiros al aire para amedrentar a los civiles, que fueron encerrados en las oficinas. Uno de esos guerrilleros encubiertos se había topado unos minutos antes, de manera accidental, con el comandante del Ejército en el primer piso. Aquel, convaleciente aún del atentado sufrido el mes anterior, había entrado a una diligencia desarmado, escoltado solo por un sargento que tenía una pistola, pues decidió dejar a toda su escolta armada fuera del edificio. Aunque los guerrilleros se asustaron al verlo, el general supuso en ese momento que el rostro de aquellos jóvenes reflejaba el temor natural de quien nunca había visto a un general. Minutos después de que este dejara el edificio, el M-19 inició el ataque[21].

El primer grupo de guerrilleros tomó los dos primeros pisos, y un segundo grupo se encargó del tercero y del cuarto. En el cuarto piso, tres comandantes del M-19 retuvieron a veintisiete personas, incluido el presidente de la Corte Suprema. Este, durante toda la tarde, se comunicó telefónicamente con políticos, periodistas y oficinas del Gobierno buscando un cese al fuego.

La primera reacción del Comando de la Brigada Trece fue enviar al Batallón

Guardia Presidencial a hacer frente a los asaltantes, impidiéndoles consolidar el control del Palacio, mientras otras tres unidades se encargaban de proteger la Plaza de Bolívar y las calles y edificios aledaños. Minutos después, ocho unidades mecanizadas estaban listas para actuar, equipadas con veinticuatro carros blindados con tres líneas de llantas, torretas de ametralladoras y orificios a los costados para disparar desde el interior[22]. Gracias a la entrada de la caballería, el comando guerrillero perdió la ventaja inicial de ataque. El tiempo y la capacidad de fuego no fueron suficientes para que el M-19 tomara el control total del Palacio. Ahora, en desventaja, la situación parecía irremediable, y los guerrilleros recibían fuego de tropas dentro del edificio y balas de ametralladoras desde edificaciones cercanas.

Uno de los carros urutú entró al sótano, pero como la altura del techo era demasiado baja, la ametralladora dispuesta en la torreta chocó contra el concreto y cayó del vehículo. Los soldados fueron recibidos con fuego de ametralladora mientras empezaron a explotar las minas instaladas por todo el lugar. En medio del feroz ataque, los nueve soldados decidieron no salir del carro, pero era tal el calor y el humo generado por el fuego que se exponían a la asfixia o a que una granada penetrara alguno de los orificios del blindaje. La decisión fue retirarse, pero alcanzaron a salir con ellos varias de las personas atrapadas por la toma.

El M-19 había dispuesto una de sus ametralladoras en el segundo piso, frente a la entrada del edificio. Luego de que las fuerzas desactivaran los explosivos puestos en la entrada, uno de los carros cascabel aplastó la puerta del edificio. Exaltados en ánimos, los soldados de los batallones de Artillería y Guardia Presidencial penetraron detrás del vehículo, gritando a toda voz la oración patria del Ejército: “¡Colombia Patria mía, te llevo en mi corazón…!”

Tres carros de combate entraron al corredor central, desde donde podían observar las escaleras laterales y los cuatro pisos del Palacio. Usando los cascabel como escudo, y aprovechando su capacidad de fuego con dos ametralladoras y un cañón cada uno, hicieron su ingreso decenas de soldados, policías, detectives y miembros de la defensa civil. Los tres carros se alinearon para enfrentar el fuego de la ametralladora y hacer posible el avance de las tropas por las escaleras de los costados oriental y occidental del edificio.

Cada carro venía cargado no solo de hombres sino de medio centenar de granadas de todo tipo. Al estallar las primeras minas artesanales al paso de los carros, la aventura podría haber terminado. Asombrosamente, ni las llantas se

habían dañado. Los soldados, policías y agentes tomaron posiciones dentro del edificio. Los guerrilleros estaban cubiertos detrás de los muros de los pasillos, pero podían ver toda la acción de las tropas en la planta principal. Los disparos parecían surgir de todas direcciones. Utilizando muebles de la biblioteca, los soldados llegaron al segundo piso, haciendo que los guerrilleros subieran la ametralladora al tercero. Aprovechando su nueva posición, los militares intentaron usar explosivos para abrir boquetes en los baños donde se escondían los guerrilleros entre el segundo y el tercer piso. No tuvieron éxito. Desde entonces, los guerrilleros quedaron confinados al cuarto piso y a la escalera occidental, entre el segundo y el cuarto.

Policías y soldados formaron una cadena humana desde la puerta del Palacio hasta la Casa del Florero, a donde eran conducidas las decenas de personas que eran rescatadas. Entre ellas, el hermano del presidente de la República. En la Casa, el Ejército y la Policía intentaban determinar quiénes eran sospechosos y debían ser entregados a la Policía Judicial[23].

El presidente de la República y los miembros del Gobierno escuchaban en el Palacio de Nariño un casete con las demandas del M-19, las cuales incluían la convocatoria "a un juicio público contra el gobierno de Belisario Betancur"; que la Corte Suprema se pronunciara "sobre la constitucionalidad del acuerdo del cese del fuego y Diálogo Nacional", reconociera "el rango institucional de los acuerdos", y examinara "quiénes cumplieron a cabalidad y quiénes incumplieron"; también exigía espacios diarios en la prensa, radio y televisión para difundir sus comunicados y documentos; y "la presencia en este tribunal, del presidente Belisario Betancur, o de su delegado, para que responda de manera clara e inmediata a cada una de las acusaciones contra el actual gobierno"[24].

Acusaban al Gobierno de "mala fe y engaño contra la nación" y de "romper la tregua mediante continuas agresiones contra las fuerzas populares alzadas en armas que suscribieron el acuerdo". Exigían, además, que "comparezcan en este juicio los miembros de la Comisión de Verificación [de los acuerdos]", y "que se hagan públicas las actas levantadas por esta comisión". Preparados para resistir varios meses atrincherados con el control del Palacio, los miembros del M-19 esperaban difundir un comunicado asegurando "que esta guerra la están perdiendo ellos —los representantes de las minorías— y hoy se erige una fuerza de mayorías que convoca a la patria entera a desterrar para siempre a los malos gobernantes e imponer desde el Gobierno la voluntad nacional"[25].

La posibilidad de que el Presidente pudiera ser juzgado y condenado por tal ‘tribunal’ hacía inconcebible para el Gobierno aceptar las demandas de la guerrilla. El Consejo de Ministros, en el que estaba presente el ministro de Defensa militar, estaba al tanto de las operaciones que se decidían en la Casa del Florero y consensuaba la decisión de no negociar. En ausencia de un equipo de crisis preparado para negociar tomas de rehenes, como la de la Embajada Dominicana en el gobierno anterior, el único plan disponible en el corto plazo era militar.

Para ese momento, el jefe del comando guerrillero[26] se había atrincherado en una oficina del cuarto piso con varios rehenes. Amenazando la vida del presidente de la Corte con una ametralladora, aquel insistía al Presidente que ordenara el cese del fuego mientras su voz se escuchaba en vivo por la radio.

Al final de la tarde, un grupo especial de la Policía, que llegó en varios helicópteros, intentó entrar por la azotea hasta el cuarto piso[27]. Aunque los uniformados alcanzaron a penetrar la puerta de acero, los guerrilleros los recibieron con fuego intenso, y decidieron regresar a la terraza con varios heridos, luego de ver morir a un capitán[28]. Los rehenes quedaron en medio del fuego cruzado que se acentuó con el apoyo de las tropas del Ejército desde abajo con disparos y cargas explosivas[29].

Los guerrilleros del M-19 se atrincheraron en los dos baños entre el segundo y el cuarto piso junto con decenas de rehenes. Los vidrios del Palacio se derretían por el calor de los incendios, uno en el sótano que se había producido en la mañana, otro en el auditorio del primer piso en la tarde —sobre el que guerrilleros lanzaban expedientes en llamas desde los pisos superiores—, y uno más en el cuarto piso[30]. Como respuesta, las tropas lanzaban cohetes y balas de cañón desde fuera. Las llamaradas y el humo obligaron una vez más a los vehículos blindados y a las tropas a abandonar el edificio al caer la noche. En medio del fuego y las balas, algunos rehenes encontraron la manera de escapar, entre ellos la esposa del ministro de Gobierno. El fuego solo fue controlado por los bomberos hacia la medianoche, pero el calor y el humo se prolongaron un día más.

A las dos de la mañana del jueves, las ametralladoras de los carros de combate regresaron para abrir fuego por la entrada principal del Palacio. Aunque ya no había llamas, el calor y el humo eran insoportables y varios soldados sufrieron quemaduras al tocar los pisos y los muros, obligándolos a salir de nuevo.

Durante la madrugada, los disparos de cohetes y cañones terminaron por abrir boquetes en los muros del Palacio por los que escapaba parte del humo y el calor. Para entonces, muchos de los cuerpos de los fallecidos el día anterior ya habían sido calcinados.

Un periodista alcanzó a escuchar algo sobre el inicio de la 'operación rastrillo' y lo transmitió en directo por la radio[31]. Los guerrilleros acorralados en el baño se enteraron y supusieron que se trataba de la ofensiva final. Un estruendo sacudió el baño entre el segundo y tercer piso, y varios pedazos de los muros cayeron al piso. Un boquete se abrió en la pared exterior, generando una vía de entrada para las tropas. El último reducto del M-19, con más de sesenta rehenes, sin casi municiones y con una bomba lista para detonar, aguardaba el desenlace. En medio del fuego cruzado, los heridos y las mujeres salieron por la puerta del baño, al tiempo que las tropas hacían su ingreso[32].

Luego de ametrallamientos y lanzamientos de cohetes desde fuera del Palacio, la última explosión, hacia las 3:20 p. m., dejó en silencio la Plaza de Bolívar. Inicialmente el Ejército calculaba que dieciocho guerrilleros del M-19 habían muerto en la operación de retoma[33]. La prensa registró la muerte de once magistrados, 31 funcionarios auxiliares, otros doce civiles, cuatro agentes, cuatro policías y un militar[34]; adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de doce personas, incluyendo una guerrillera, y las torturas a cuatro personas más. Aunque se presume la muerte de entre 95 y 115 personas durante la toma[35], la alteración de la escena forense, incluyendo el movimiento, lavado y entierro de los cuerpos en fosas[36], o la ausencia de registros sistemáticos de evacuados o heridos en hospitales, ha impedido desde entonces establecer certezas sobre los detalles del combate, y el número exacto, identidad y circunstancia de quienes murieron.

Desde principios de los ochenta, el Ejército asumió la existencia de tratos del M-19 con la mafia, a pesar del desprestigio ante la opinión pública que tal relación implicaba[37]. De hecho, la Policía tenía indicios de que las personas capturadas por las interceptaciones a comunicaciones de los magistrados tenían lazos con el Cartel de Medellín[38]. El 6 de noviembre en la mañana, la sala constitucional de la Corte Suprema se disponía a discutir el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, que afectaba a los carteles de la droga del momento. El incendio del cuarto piso del Palacio de Justicia destruyó los expedientes en su contra y los magistrados a cargo terminaron muertos. Desde entonces, y años después de los hechos, el M-19 luchó por desacreditar la idea de su alianza con

el narcotráfico para la realización de la toma. El M-19 justificó su acción dos días después diciendo que habían acudido al tribunal "para someterse a él y no para ser instrumento de coacción a la libre voluntad de los honorables magistrados"[39], quienes "son nuestros anfitriones y solo su sentido patriótico guiará sus acciones"[40]. Insistía en haber defendido "las vidas de las personas retenidas aun a costa de las propias […] Desde el comienzo buscamos conversaciones, pero en ningún momento planteamos la disposición a la rendición humillante y vergonzosa […] El Gobierno pretende distorsionar los objetivos de la Operación 'Antonio Nariño por los Derechos del Hombre' y negar su carácter político, aduciendo falsos compromisos entre la democracia en armas y el narcotráfico […] Desde las guaridas de una imaginación criminal y negando toda lógica, quiere hacer creer al mundo que provocamos el incendio de nuestro albergue, el cual alojaba también a otro centenar de personas"[41].

Al año siguiente, con una terrible lección aprendida, el Comando General de las Fuerzas Militares dispuso la creación de una compañía de fuerzas especiales para Bogotá que impidiera que un hecho similar se volviera a repetir[42].

Notas

[1] Véase El Bogotano 1985. Desbaratado plan de toma y secuestro en la Corte, 18 de octubre, 7; El Tiempo 1985a. Por anónimos extreman medidas de seguridad en el Palacio de Justicia, 18 de octubre de 1985, 4B; El Siglo 1985. Hallan plan del M-19 para ocupar Palacio de Justicia, 18 de octubre, 8.

[2] Según los manuales de inteligencia de combate del Ejército, solo las informaciones de fuentes tipo A y B se consideraban verdaderas o probablemente verdaderas, en tanto que provenían de agentes de inteligencia; las de fuentes tipo C correspondían a medios de comunicación, niños y ancianos; las D eran fuentes dudosas pero con posible información valiosa, como miembros de grupos subversivos; las E, fuentes de poca credibilidad; y las F provenientes de anónimos, que se consideraban rumores que no era recomendable tener en cuenta. Las informaciones de inteligencia recibían además una calificación de exactitud en una escala de 1 a 6. El No. 3 correspondía a hechos sobre los que no había información de que fueran a suceder pero que podrían ocurrir. Véase

Ejército Nacional 1978. Manual de inteligencia de combate EJC 2-3. Segunda edición.

[3] Comando Brigada Trece 1985a. Radiograma 018179, 12 de agosto de 1985. Evaluación F-3.

[4] Comando Brigada Trece 1985b. Radiograma 019320, 5 de septiembre de 1985. Evaluación C-3.

[5] Comando Brigada Trece 1985c. Radiograma 019875, 21 de septiembre. Evaluación C-3.

[6] Comando Brigada Trece 1985d. Radiograma 018399, 14 de agosto. Evaluación B-3.

[7] Comando Brigada Trece 1985e. Radiograma 020225, 1.o de octubre. Evaluación B-3.

[8] Comando Brigada Trece 1985f. Radiograma 021062, 23 de octubre. Evaluación B-3.

[9] Departamento de Policía de Bogotá 1985. Plan táctico para la defensa del complejo plaza de Bolívar (Capitolio Nacional, Alcaldía Mayor y Palacio de Justicia). Bogotá, septiembre.

[10] La oficina de contrainteligencia de la Policía había logrado capturar en el norte de Bogotá a dos personas que interceptaron llamadas de los magistrados. Véase Declaración en 2006 del Jefe de Contrainteligencia de la Sijin de la Policía durante los días de la toma del Palacio.

[11] Esta versión es puesta en entredicho por Gómez, Jorge A.; Herrera, José R. y Pinilla, Nilson 2010. Informe final. Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Bogotá: Universidad del Rosario, 101-103. Véase declaración del director de la Policía Nacional durante los días de la toma del Palacio, citada en Ministerio de Defensa 2012. Documentos de defensa del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dirección de Defensa Jurídica Integral. Archivo caja 80.

[12] Declaración del Director de la Policía Nacional durante los días de la toma del Palacio, citado en Ministerio de Defensa 2012, op. cit.

[13] Entrevista a oficial en retiro, agosto de 2016.

[14] Comando General de las Fuerzas Militares 1985a. Plan Tricolor, 1.o de febrero.

[15] Comando General de las Fuerzas Militares 1982. Reglamento de servicio de guarnición. Quinta edición. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares.

[16] Estas unidades de reacción correspondían a las escuelas de Infantería, Artillería, Caballería, Ingenieros y Logística, el Grupo Rincón Quiñónez, el Batallón Miguel Antonio Caro, el Batallón Baraya, el Batallón Guardia Presidencial, dos batallones de Policía Militar y una recién creada compañía de

soldados voluntarios de contraguerrillas rurales apostada en la Escuela de Artillería.

[17] Declaración en 2006 del jefe de Contrainteligencia de la Sijin de la Policía durante los días de la toma del Palacio.

[18] La versión del Informe de la Comisión de la Verdad de 2010 habla de un plan de 41 guerrilleros, de los cuales 35 habrían llegado al Palacio. El Informe sobre el Holocausto, de 1986, habla de veintiocho alzados en armas. El comunicado del M-19 del 11 de noviembre habla de "nuestra columna de 42 combatientes". Para contrastar las versiones véase Serrano, Jaime y Upegui Carlos 1986. Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985). Tribunal Especial de Instrucción; Gómez, Herrera y Pinilla 2010, op. cit., 112-113; y M-19 1985c. Declaración del M-19 tras la masacre del Palacio de Justicia. Comunicado, 9 de noviembre.

[19] Declaración en 2006 del jefe de Contrainteligencia de la Sijin de la Policía durante los días de la toma del Palacio.

[20] Documentos del día de la toma sugieren que empleados de la cafetería habían hecho labores de inteligencia para los guerrilleros. Véase Diario operacional de COE de Ejército 1985, anotación del 6 de noviembre, 15:30 horas.

[21] El General declara que su presencia en el Palacio minutos antes de la toma es prueba de que el mando militar no tenía confirmación de los planes del M-19. Véase Gómez, Herrera y Pinilla 2010, op. cit., 111.

[22] Durante los ochenta, al Ejército 'se le pusieron ruedas' con la adquisición 128

vehículos blindados tipo cascabel, 54 urutú, y 105 carros adicionales de transporte. Véase Ministerio de Defensa 1983c. Directiva transitoria 8. Administración de blindados.

[23] En el segundo piso de la Casa funcionaba un puesto desde donde el comandante de la Brigada Trece del Ejército y el comandante de la Policía de Bogotá coordinaban la operación de retoma del Palacio. Véase Declaración del jefe de Contrainteligencia de la Sijin de la Policía durante los días de la toma del Palacio 2006.

[24] M-19 1985d. Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Comunicado, 6 de noviembre.

[25] M-19 1985b. Al poder jurisdiccional, a la nación colombiana. Comunicado 6 de noviembre.

[26] Andrés Almarales y tres de sus compañeros de toma habían sido indultados entre 1983 y 1985.

[27] El llamado Grupo de Operaciones Especiales (Goes), recién venido de entrenamiento en España en tácticas de desembarco aéreo.

[28] Véase Ministerio de Defensa 2012, op. cit.

[29] Gómez, Herrera y Pinilla 2010, op. cit., 147.

[30] El incendio del sótano se produjo durante el tiroteo y la entrada de un carro blindado; no es claro si el segundo y el tercer incendio fueron provocados accidental o deliberadamente. Según una versión oficial, el incendio del cuarto piso se produjo alrededor de las 12:30 p. m., cuando no habían entrado aún los carros de combate al Palacio ni iniciado el bombardeo de cañones y cohetes. Véase Gómez, Herrera y Pinilla 2010, op. cit., 150; y Ministerio de Defensa 2012, op. cit.

[31] En el argot militar no se usa el término 'rastrillo', por lo que su significado no es evidente.

[32] Véase Ministerio de Defensa 2012, op. cit.

[33] Según el informe de 2010, el M-19 habría apostado al menos 35 guerrilleros en el Palacio, de los que solo dos salieron vivos: dos mujeres camufladas entre los civiles. Una de ellas está oficialmente desaparecida y la otra es la única sobreviviente conocida del comando guerrillero. Para contrastar las versiones, véase Comando General de las Fuerzas Militares 1985a, op. cit., 12; Gómez, Herrera y Pinilla 2010, op. cit.; Ministerio de Defensa 2012, op. cit.; y Corte Interamericana de Derechos Humanos 2014. Caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.

[34] Véase El Espectador 1985a. Cinco muertos y veintisiete heridos en las FA, 8 de noviembre, 32; El Tiempo 1985b. Once magistrados muertos; 85 el total de las víctimas, 9 de noviembre, 39.

[35] Gómez, Jorge A.; Herrera, José R. y Pinilla, Nilson 2010, op. cit., 213-214.

[36] Funcionarios de Medicina Legal de la época sugieren que había temor entre quienes manejaban los cuerpos de que un comando guerrillero intentara recuperarlos violentamente, por lo que habrían intentado deshacerse de ellos rápidamente.

[37] Comando del Ejército 1983a, op. cit., 230.

[38] Declaración del Jefe de Contrainteligencia de la Sijin de la Policía durante los días de la toma del Palacio 2006.

[39] M-19 1985c. Declaración del M-19 tras la masacre del Palacio de Justicia. Comunicado, 9 de noviembre.

[40] Esta expresión fue usada en el comunicado que prepararon para el día de la toma.

[41] M-19 1985e. Declaración del M-19. Comunicado, 11 de noviembre.

[42] Comando General de las Fuerzas Militares 1986. Resolución 1. Por la cual se crea una compañía de fuerzas especiales.

PARTE III

1984-1992

LA PAZ COMO ESTRATEGIA

DE GUERRA



Entrega de armas del M-19 a la Internacional Socialista en Santo Domingo (Cauca), en 1990.

Carlos Pizarro (foto), jefe de esta guerrilla, se convirtió en candidato presidencial ese año, pocas semanas antes de ser asesinado. / Foto: Archivo El Espectador.

Capítulo IX

El fin de la guerra popular

Los archivos militares registran un aumento constante de los combates con el M-19 durante los años ochenta. Enfrentamientos que a menudo involucraban decenas de combatientes simultáneamente. La vulnerabilidad de las guerrillas exclusivamente urbanas a las capturas y allanamientos militares y policiales empujaron al M-19 a acelerar sus planes de crear un ejército regular, sin contar con el respaldo de fuerza y experiencia de otras guerrillas como las Farc. Su decisión de crecer mientras estaba a la ofensiva expuso su fuerza de manera fatal.

Los militares, gracias al acumulado en información de inteligencia sobre el M-19 y sus integrantes, y su decisión concentrar unidades de Ejército, Fuerza Aérea y Armada contra esta guerrilla —y posteriormente contra el EPL— provocaron la derrota estratégica de estas dos agrupaciones, ahora convencidas de su incapacidad de tomarse el poder de forma violenta.

Paradójicamente, las características de este momento histórico no reflejan en apariencia que se haya producido una victoria desde el punto de vista militar. Las reformas de finales de los ochenta a las Fuerzas Militares señalaban un rumbo de recorte de sus facultades administrativas y judiciales —como alcaldes y jueces militares—, y de su autonomía con la llegada de un ministro de Defensa civil en 1990. Más determinante, desde 1989, el Gobierno y las Cortes decidieron limitar las formas de colaboración de la población civil con los militares, sobre todo restringiendo el uso de armas y su participación en operaciones. Si bien cualquiera de estas reformas pudo ser deseable, hicieron entrar a los militares, en la última década del siglo XX, en un proceso de reacomodamiento más que de reconocimiento. En este proceso, la clara decisión del mando de eliminar cualquier trato con grupos armados de civiles, ahora ya convertidos en ejércitos privados por cuenta de los recursos del narcotráfico, no se convirtió automáticamente en un deslinde efectivo por parte de mandos medios y tropa. Esta lucha interna se prolongaría en las décadas por venir.

La crisis financiera de las Fuerzas Militares se prolongó hasta 1985, cuando las adiciones al presupuesto permitieron empezar a concretar la reestructuración planeada. Ese año, el país fue dividido en seis campos de operaciones militares, cinco zonas navales y cinco zonas aéreas[1]. Los comandantes de las brigadas del país, además, seleccionarían los mejores soldados que terminaban su servicio obligatorio para conformar compañías de soldados voluntarios, "buscando darles a las brigadas un elemento de combate altamente entrenado con prioridad en la ejecución de operaciones ofensivas de contraguerrillas", que fueron activadas en marzo de 1986[2]. Como estímulo a las tropas, a partir de junio de 1987, el Ejército empezó a otorgar la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público para "premiar al personal que desarrolle acciones fuera del común en cumplimiento del deber en operaciones contra el enemigo"[3]. Para "obtener éxitos contra los grupos alzados en armas", rezaba el Comando del Ejército, "se hace necesario despertar la mística profesional, excelente moral y espíritu de cuerpo [que permitan] mantener siempre la iniciativa"[4].

El número de tropas disponibles tampoco se compadecía con la magnitud del desafío guerrillero. "Los efectivos con que cuentan las Fuerzas Militares en este momento", advertía el ministro de Defensa en 1989, "los cuales ascienden a ciento veintidós mil ochocientos ocho hombres […], aún es insuficiente si se tiene en cuenta la extensión territorial, la población del país [y] la responsabilidad asignada de mantener la integridad territorial, la soberanía y control del espacio marítimo y aéreo"[5].

Pese al esfuerzo presupuestal, las carencias todavía afectaban "notoriamente la capacidad operativa de la Fuerza Aérea", impidiendo que las tropas de tierra pudieran tener los apoyos aéreos críticos para su operación[6]. Adicionalmente, las Fuerzas Militares aún no habían resuelto el problema del poco conocimiento del terreno y sus habitantes, lo que las ponía en desventaja ante las guerrillas. "Las unidades de combate", decía el Ejército en 1990, "así como las tropas en operaciones, muestran poca o ninguna capacidad para obtener información sobre el enemigo que actúa en zonas asignadas para operar"[7]. Esta situación las hacía tan dependientes de los guías locales para moverse en el terreno como en 1960. La forma de tratar con estos guías y sus funciones eran muy poco claras y dependían del arbitrio de los comandantes de las unidades, situación que apenas fue reglamentada hacia 1988[8].

La tregua de las Farc

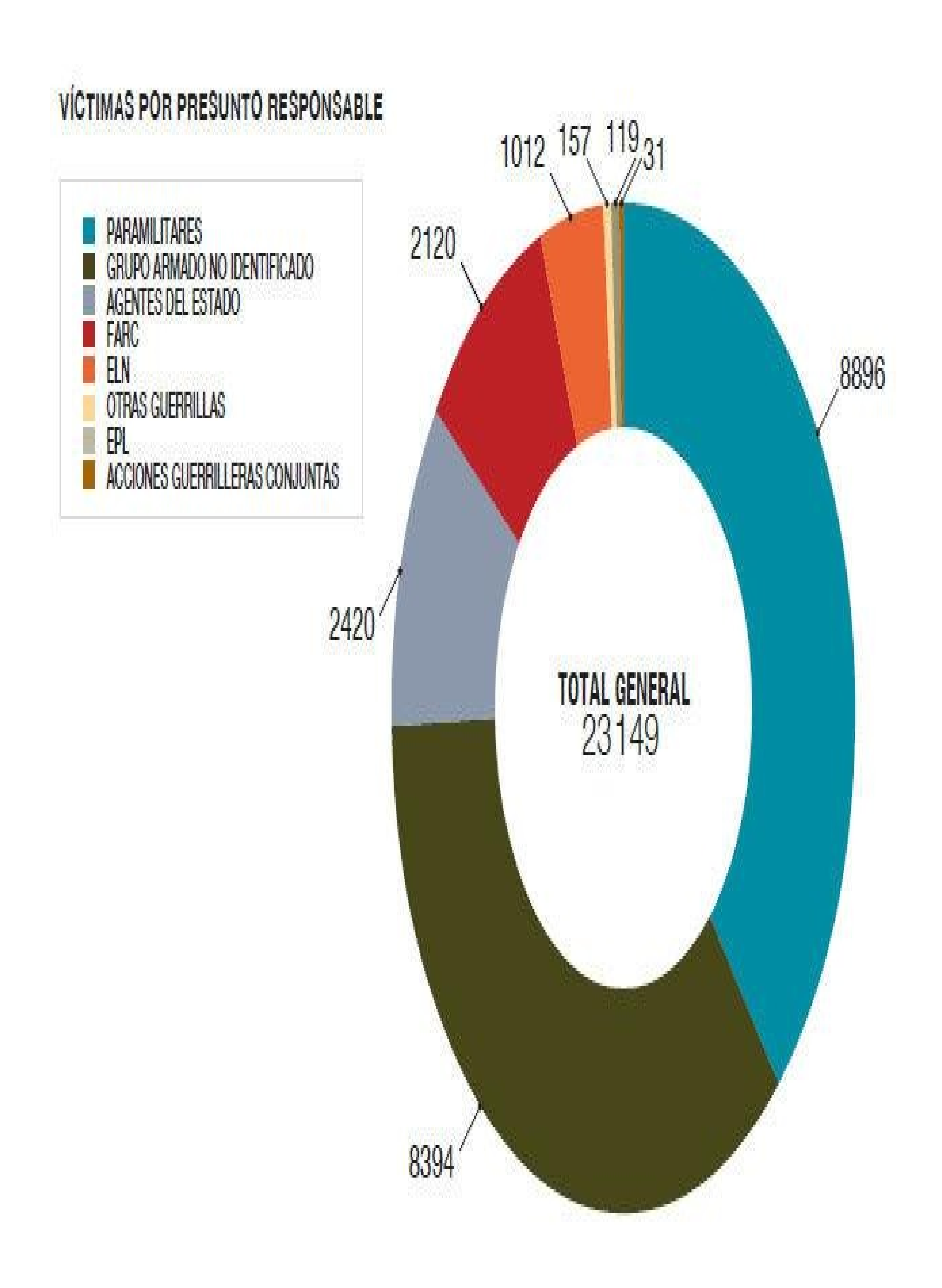
El 28 de marzo de 1984, las Farc habían firmado una tregua con el Gobierno, que fue seguida por las treguas del M-19, el EPL y el ADO ese mismo año. El Ejército, al ver limitada su acción, temía que se establecieran nuevas ‘zonas liberadas’ o ‘repúblicas independientes’ en regiones de su influencia[9]. Para los guerrilleros, por el contrario, la tregua era “una concesión que las Farc hace al Gobierno”[10].

A mediados de la década, y coincidiendo con la tregua, las Farc mostraban una reducción en el número de acciones armadas, que buscaba favorecer la participación de sus bases, esta vez en la primera convención de la Unión Patriótica[11]. Un mes antes de su lanzamiento, las Farc describían a la Unión Patriótica como un “movimiento político propio con miras a participar en la próxima justa electoral que se avecina”[12]. Desde entonces, acusaban al Ejército de organizar “grupos de matones tipo MAS […] con el objetivo de asesinar campesinos que han ido demostrando su descontento con la actual situación económica y social en el país […] Para estas actividades se valen de elementos antisociales llamados lúmpenes de la sociedad para que cometan toda clase de atrocidades contra la población”[13]. A pesar de estas acusaciones, la izquierda de la época también denunciaba amenazas y atentados contra el Partido Comunista y la Unión Patriótica que eran atribuidos al frente Ricardo Franco[14].

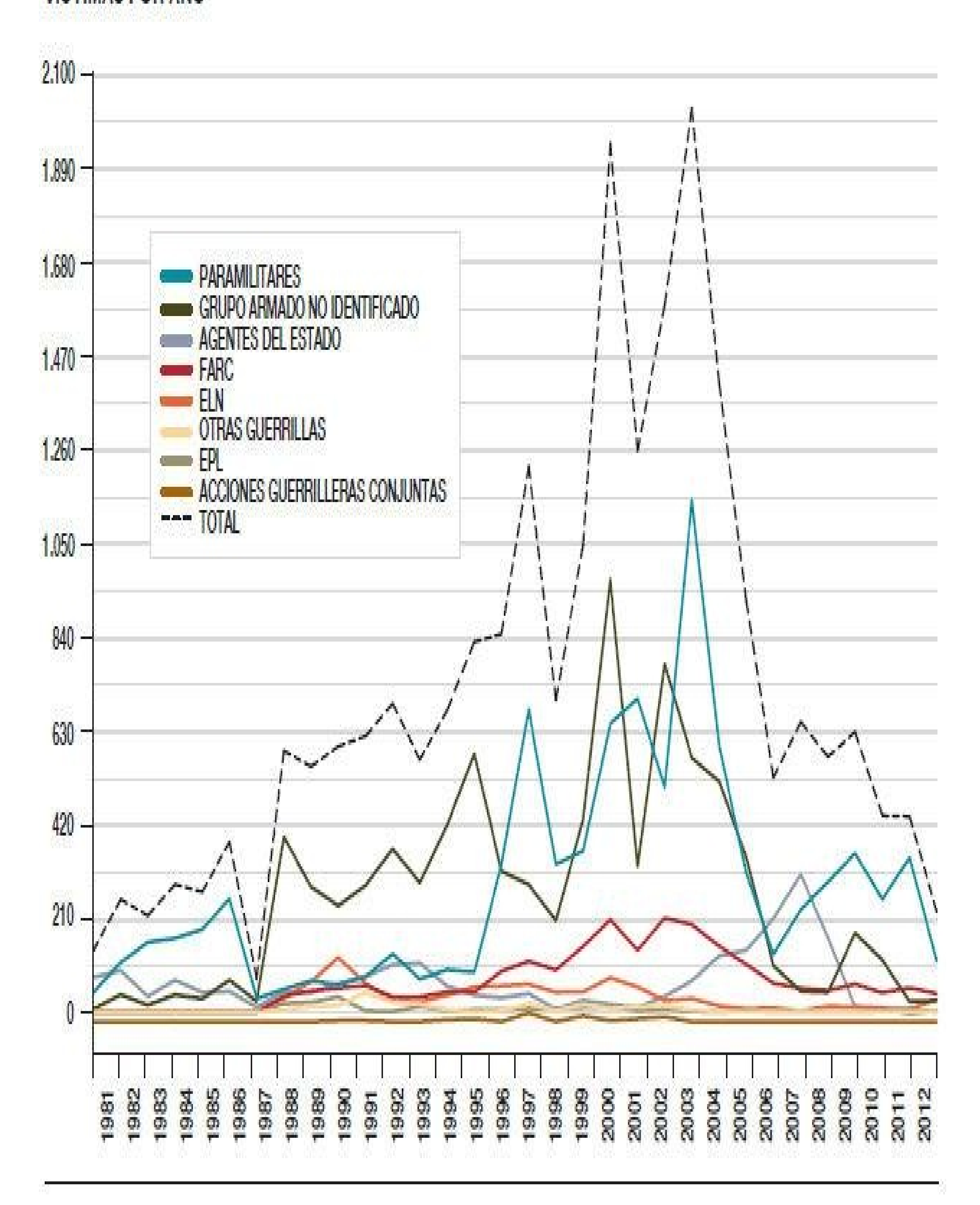
Gráfico 9.

ASESINATOS SELECTIVOS 1981–2012

La mayor parte de asesinatos selectivos -ataques de hasta tres víctimas- en este período son atribuidos principalmente a autores no identificados y a los grupos de autodefensa, con un pico histórico hacia el año 2003.


VÍCTIMAS POR PRESUNTO RESPONSABLE
PARAMILITARES
GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO
AGENTES DEL ESTADO
FARC
ELN
OTRAS GUERRILLAS
EPL
ACCIONES GUERRILLERAS CONJUNTAS
1012
157
119
31
2120
8896
2420
TOTAL GENERAL
23149
8394

VÍCTIMAS POR AÑO

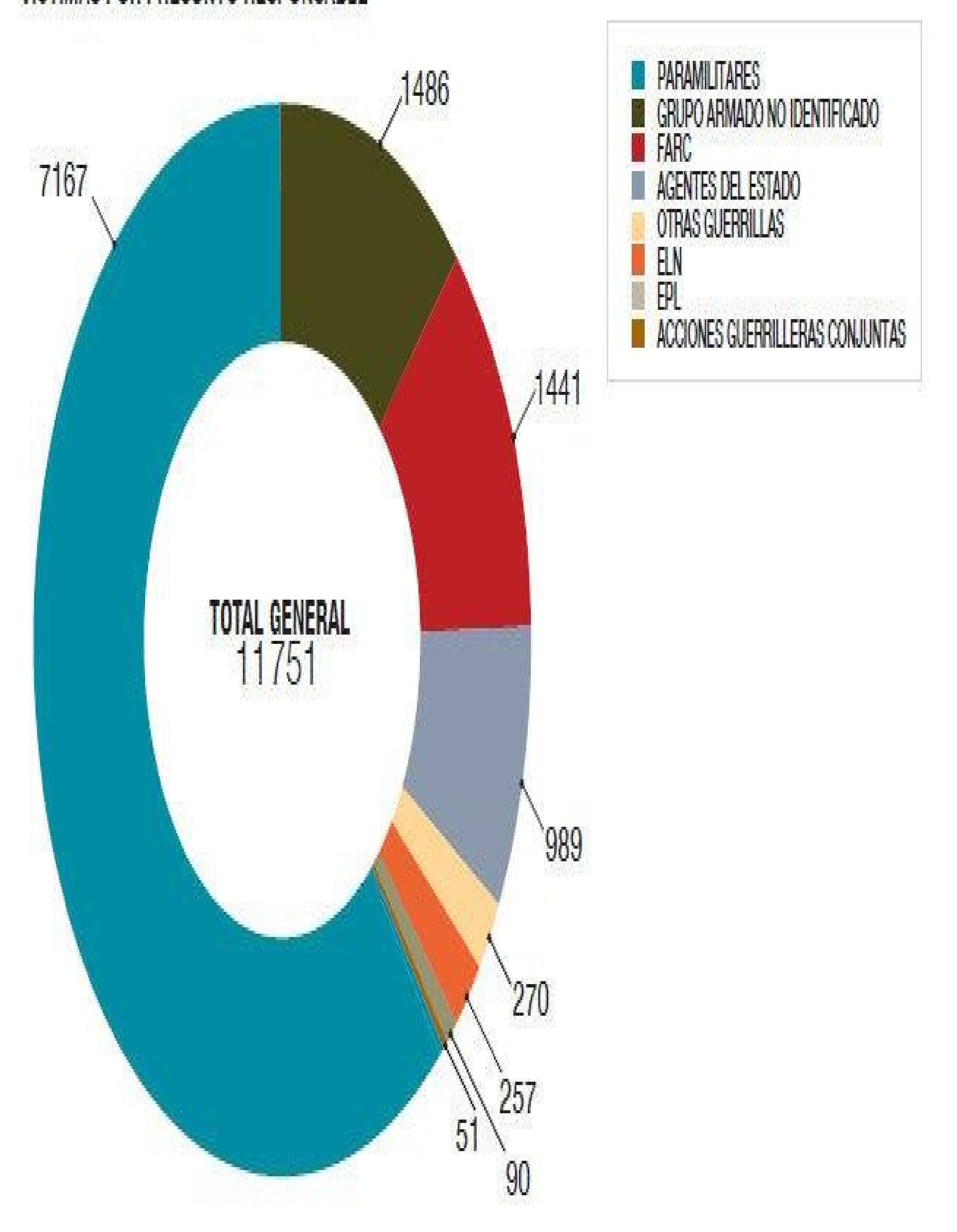


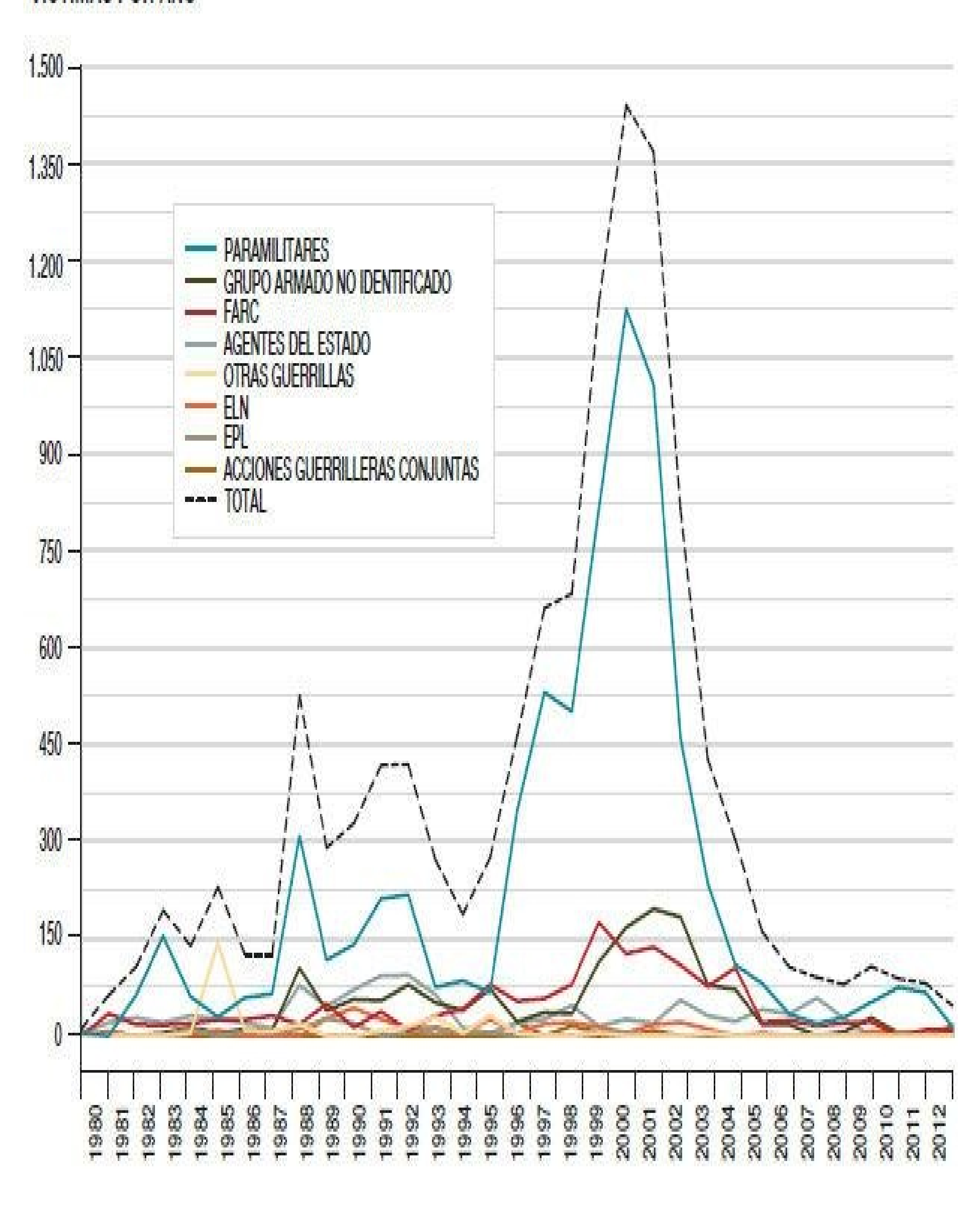
Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Memoria Histórica.

Gráfico 10.

VÍCTIMAS DE MASACRES 1980–2012

El pico histórico de masacres -ataques de cuatro víctimas o más- en este período es el año 2000. La mayoría de casos son atribuidos a los grupos de autodefensa y a autores no identificados.


VÍCTIMAS POR PRESUNTO RESPONSABLE
PARAMILITARES
GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO
FARC
AGENTES DEL ESTADO
OTRAS GUERRILLAS
ELN
EPL
ACCIONES GUERRILLERAS CONJUNTAS
1486
7167
1441
TOTAL GENERAL
11751
989
270
257
51
90



VÍCTIMAS POR AÑO
1.500
1.350
1.200
1.050
900
750
600
450
300
150
0
PARAMILITARES
GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO
FARC
AGENTES DEL ESTADO
OTRAS GUERRILLAS
ELN
EPL
ACCIONES GUERRILLERAS CONJUNTAS
TOTAL
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Memoria Histórica

Los documentos de trabajo de la Unión Patriótica analizaban que "frente al dilema paz sobre la base de reformas estructurales en el plano político, económico o social, o guerra expresada en la concepción de la guerra interior, del 'basta ya', de la política de tierra arrasada, de la doctrina de la seguridad nacional, se abre paso la primera alternativa"[15]. Por ello, proponían "la formación de un gran movimiento político de las masas populares que sepa oponerse al régimen, dejando sin piso el juego bipartidista". Para ello, proponían buscar "la reforma a la totalitaria carta constitucional […] El anclaje básico debe ser la soberanía popular, hoy negada, y los mecanismos que, como el referéndum, los plebiscitos y la elección popular de gobernadores, comisarios e intendentes, la viabilicen. Es necesario la plenitud del sufragio universal a cambio del 'voto función'"[16]. Adicionalmente, la UP se planteó "movilizar la conciencia ciudadana en contra de los crímenes de dirigentes políticos de oposición, de periodistas, jueces y magistrados y de simples ciudadanos a manos de grupos de sicarios que actúan en la impunidad"[17]. Durante su lanzamiento ante tres mil invitados, en mayo de 1985, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, la UP no solo reiteró estos planteamientos y la exigencia del levantamiento del estado de sitio, sino que retransmitió declaraciones de Manuel Marulanda, el M-19 y el ADO alrededor de la necesidad de la unidad de la izquierda.

En paralelo, el Partido Comunista apostó por una estrategia de "agitación y reclutamiento", además del acercamiento a procuradurías locales y comisiones de paz para presionar por el mantenimiento del cese al fuego por parte de las Fuerzas Militares y Policía, y para apoyar la creación de una nueva agrupación sindical: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fundada en 1986[18].

En marzo de 1986, las Farc renovaron la tregua[19], pero continuaban sus acciones militares. En la mañana del 11 de agosto de 1986, uno de los dos vehículos de escoltas del jefe del Estado Mayor de la Quinta Brigada empezó a fallar en la carretera de Bucaramanga a Barrancabermeja. Tal fue la falla mecánica, que no pudo continuar el trayecto y tuvo que regresar a la base. En la llamada Curva del Diablo, unos cincuenta guerrilleros atacaron el vehículo con ametralladoras, fusiles, pistolas, dinamita y granadas. El auto perdió el control y se volcó. Un

suboficial y seis soldados quedaron expuestos al fuego mortal[20]. Para las Fuerzas Militares resultaba inaceptable sufrir los ataques guerrilleros en medio de un proceso de paz que, sentían, les impedía desatar su poder de fuego.

El conflicto no impidió que las Farc continuaran haciendo política. Ese año en septiembre, la Unión Patriótica lanzó como candidato presidencial a Jacobo Arenas, quien se retiró aduciendo falta de garantías por parte del Gobierno. Quien lo sucedió fue el abogado Jaime Pardo Leal. Bajo su liderazgo, la agrupación obtuvo tres escaños en el Senado, nueve en la Cámara y casi trescientos concejales y diputados.

En medio de la tensión generada por la participación de las Farc en la política legal mientras ejecutaba acciones armadas, la tregua quedó rota de facto el 16 de junio de 1987. Ese día, casi doscientos guerrilleros de las Farc instalaron varias cargas explosivas en los taludes de la carretera que va de Puerto Rico a San Vicente, en Caquetá. Adelante del área minada, las Farc atravesaron algunos vehículos civiles que parecían varados para detener a las tropas en caso de que fallara el plan. Pero el plan no falló. Cuatro explosiones sucesivas voltearon un primer vehículo, causando gran número de muertos. El segundo vehículo frenó, desembarcó e inició la contraemboscada, pero el nutrido fuego causó más bajas. El sobrecupo de soldados apiñados en dos camiones, el armamento que se trabó en varias ocasiones y el claro "dominio total de la población" por parte de los guerrilleros, contribuyeron al revés táctico de las tropas[21].

Rota la tregua luego de este ataque, las Farc se prepararon para retomar su guerra "luego de casi cinco años de inactividad militar"[22]. Durante los primeros meses, los comandantes de frente no parecían todavía entender la nueva forma de operar y la estrategia ofensiva. "La mayoría de los frentes", evaluaban, "no han soltado amarras"[23].

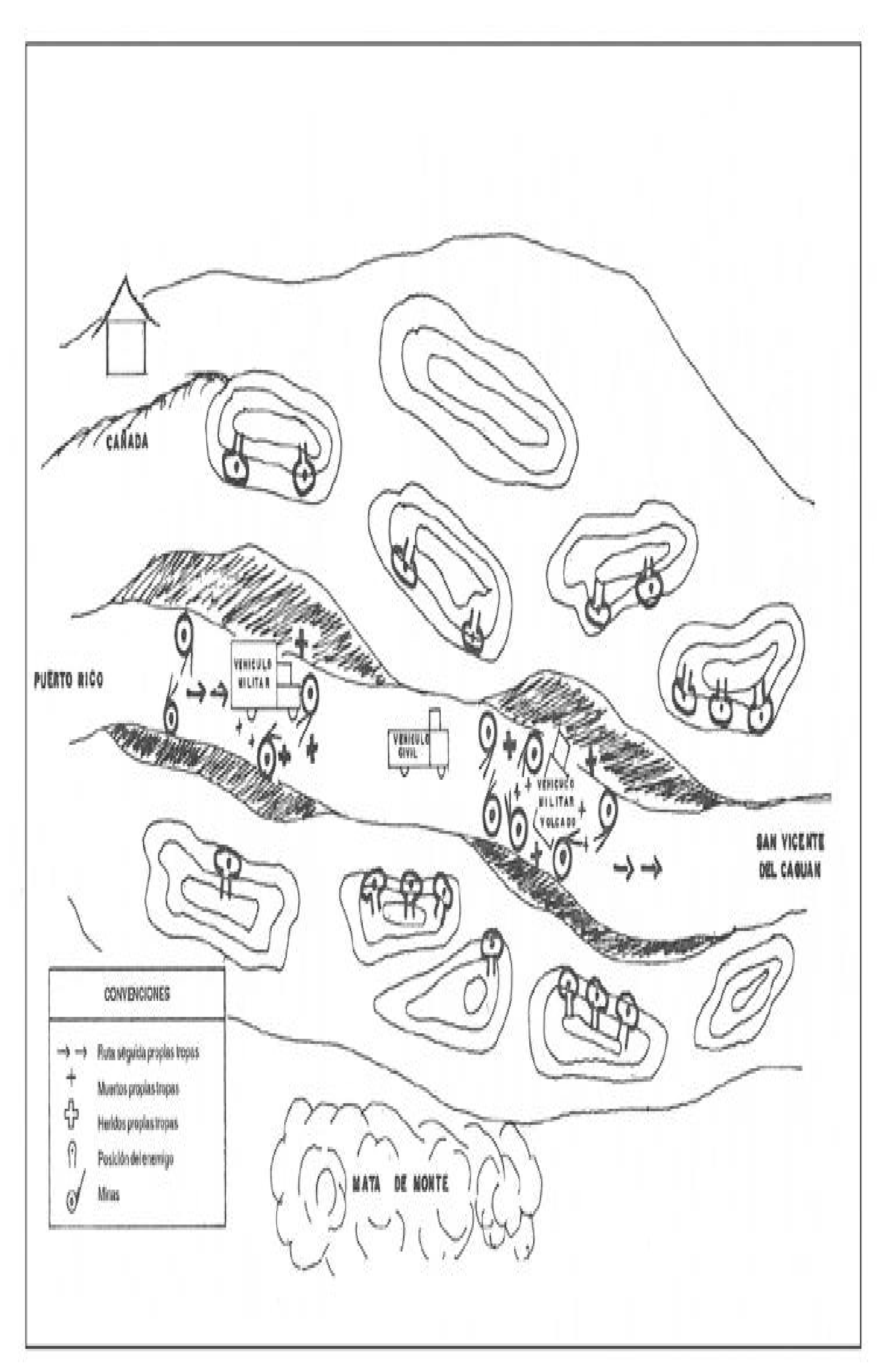
Eso no impidió que, en diciembre de ese año, ochenta guerrilleros aprovecharan la distracción navideña para golpear al Ejército. Un pelotón se desplazaba en siete vehículos de Orito a Puerto Colón, en Putumayo, para llegar a Nariño y disfrutar allí del permiso navideño. Después de un pinchazo, la batería del jeep se descargó, y por segunda vez quedaron a merced en la carretera. Solucionado el percance, ya casi llegando a una base, uno de los camiones sufrió de nuevo dos pinchazos. Finalmente, lograron llegar, reponerse y salir de nuevo. Minutos después, un circuito eléctrico activó la dinamita instalada a un costado de la carretera. Tres vehículos quedaron atrapados en la emboscada. Los guerrilleros

gritaban que se rindieran, que estaban rodeados, y los heridos decidieron entregar sus armas[24].

Dibujo 2.

EMBOSCADA DE FARC A PATRULLA EN CAQUETÁ

1987



La emboscada de las Farc contra una patrulla militar en Puerto Rico, Caquetá, en 1987, derivó en la orden del Ministro de Defensa de lanzarse a la ofensiva contra esta guerrilla. Este hecho puso fin de facto a la tregua firmada con el Gobierno Nacional en 1984.

Fuente: Comando Décimo Segunda Brigada, Caso táctico 2/87.

Pese a estas acciones, las Fuerzas Militares consideraban que “al dar preponderancia al frente político, las Farc han mermado últimamente su actividad armada directa contra la fuerza pública, pero no contra la población civil campesina, a la cual han continuado intimidando y sometiendo al asesinato, al secuestro, a la extorsión y el boleteo. En algunas zonas del territorio nacional son acusadas por los partidos políticos tradicionales de ser las causantes de las muertes de sus miembros, con el objeto de garantizar su influencia en esas zonas y de presionarlas para alcanzar resultados favorables a sus partidarios en los próximos comicios electorales”[25].

La combinación de lucha legal e ilegal continuaría. En enero de 1989, la persecución a las Farc en Simacota, Santander, terminó con la muerte de una guerrillera “quien portaba un carné de la UP, doble dotación de armamento, el cuadro de material de intendencia de toda la cuadrilla y su equipo de campaña”[26]. La UP apenas sobreviviría como organización civil en medio de la guerra y Jaime Pardo Leal caería en medio de las balas.

Simultáneamente, el ELN ya lograba afectar la navegación por el río Magdalena, secuestrando y asaltando embarcaciones. “De la misma manera, algunos alcaldes, autoridades y personas de importancia regional y nacional han sido secuestrados para utilizarlos como mensajeros de propuestas carentes de toda lógica gubernamental y democrática”. Para el Gobierno, en 1989, “se registra un estado de ánimo pesimista en la opinión pública por el incremento de la violencia, materializada en los actos terroristas protagonizados por el ELN contra los oleoductos e instalaciones petroleras”[27].

Los ejércitos privados se consolidan

En los años ochenta, las autodefensas que se amparaban en la ley colombiana vivían su propia guerra interna. Su alianza con los carteles del narcotráfico pronto degeneró en rivalidad. En medio de tal disputa uno de sus promotores originales en Puerto Boyacá, el congresista Pablo Guarín, fue asesinado en 1987. La muerte del jefe de autodefensa Henry Pérez, unos años después, afianzó el control del narcotráfico sobre los ejércitos privados[28]. Entre 1988 y 1989, al tiempo que varias masacres en Santander, Córdoba y Antioquia sacudieron al país, en las que cayeron civiles acusados de pertenecer a la Unión Patriótica o al EPL, el llamado Movimiento de Autodefensa Campesina intentaba agrupar a decenas de grupos armados anti-guerrilla surgidos en todo el país.

El señalamiento de complicidad con las autodefensas, ahora fuera de control y de la ley, empezó a preocupar al Ejército, en tanto que policías y militares fueron acusados de maltratar a la población y colaborar con un finquero llamado Fidel Castaño, al que en Córdoba conocían como Rambo[29].

Un grupo de denunciantes de la época clamaba en enero de 1989 que “el municipio de Valencia se está acabando, señor Procurador, y nadie dice ni hace nada por salvarlo. Esta situación la conoce bien el señor Gobernador del departamento y los comandantes del Ejército y la Policía Nacional, División Córdoba […] El terror cunde por todas partes. Los habitantes no se atreven a salir a las calles”[30]. El mes siguiente a la denuncia, el Batallón Junín recibió un informe de patrullaje en la finca Costa de Oro en Tierralta, donde, días antes, grupos armados habían quemado unos ranchos campesinos, “para destruir subversivos que se encontraban en el sector”. En el informe se decía que “el área se encontraba desocupada y [con] muy poca vivienda […] [El] nombre del personal simpatizante con el enemigo no se pudo ubicar por el poco tiempo […] No se tuvo resultado positivo ni se encontraron huellas del enemigo”[31], aunque se comprobó que la agresión había ocurrido, “sin tener información de quién lo ejecutó”[32]. Un mes después, en marzo, un nuevo informe de patrulla hablaba del “registro sobre la hacienda Las Tangas e inmediaciones a esta con el fin de destruir grupos armados”. Luego de ir en planchón desde Valencia y cruzar una quebrada, la patrulla llegó a Las Tangas el 22 de marzo en la madrugada. Según reporta el Ejército, “los trabajadores de esas haciendas se mostraron simpatizantes con el Ejército […] No se logró tener contacto con el enemigo,

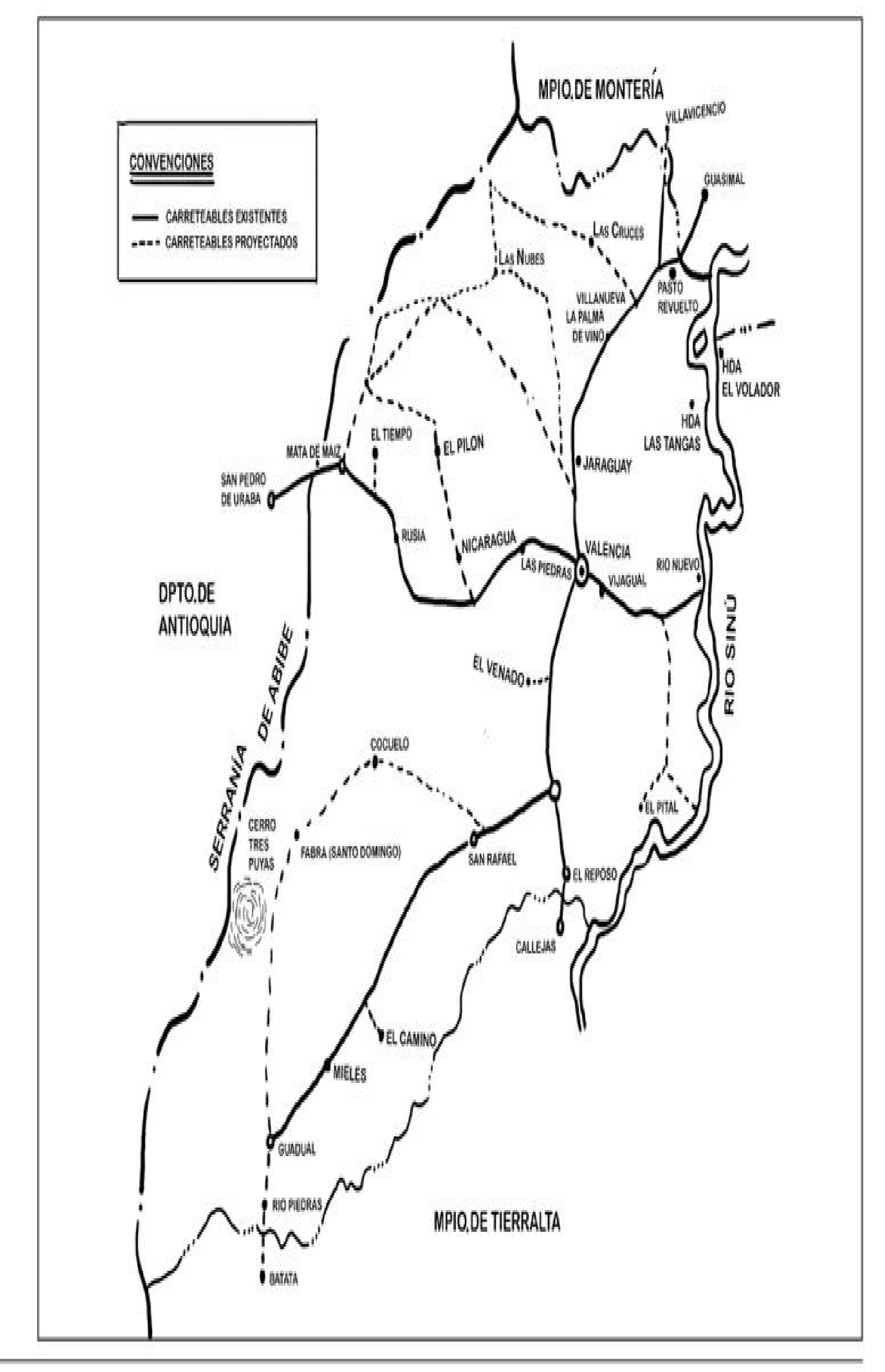
pero se ejerció un control eficaz del área”[33]. Una segunda patrulla en las casi mil cuatrocientas hectáreas de Las Tangas, el 4 de junio, se dispuso para “capturar o dar de baja a grupos subversivos”. Allí se tenía información de que “existían trabajadores armados en número de cien hombres con campo de entrenamiento como sede de autodefensa dirigida por narcotraficantes”[34]. Al llegar, esta vez en la noche, el informe reporta haber constatado que los residentes del área “son colaboradores del grupo […] No se logró capturar al enemigo debido a que ya estaban alertados por parte de la Policía y el DAS con los allanamientos [previos]”[35].

Para las Fuerzas Militares crecía la presión para intervenir en la situación de violencia desatada por los ejércitos privados. Un sacerdote venido de Medellín, que oficiaba en una parroquia de Tierralta, recibió por esos días un cuadro desde Centroamérica, en el que se hacía una alegoría de la represión del dictador haitiano de la época. El sacerdote quedó tan conmovido, que lo hizo pintar en el altar mayor de la iglesia. Según testigos, muchos pobladores interpretaron el cuadro como una ofensa contra el Estado y sus Fuerzas Armadas. Los ánimos de algunos se fueron contra el sacerdote, hasta que dos sujetos que iban a pie lo abalearon en una calle en plena tarde, en junio de 1989[36].

Dibujo 3.

ZONA DE INFLUENCIA DE EJÉRCITOS PRIVADOS EN CÓRDOBA

1989



La finca Las Tangas era el principal centro de entrenamiento y operaciones de los ejércitos privados de la casa Castaño.

Fuente: Documentos Batallón de Infantería Treinta y Tres.

Un nuevo patrullaje fue dispuesto para finales de junio entre Tierralta y Valencia "para desarrollar labores de inteligencia [con el] fin de establecer la situación de las investigaciones por los homicidios ocurridos en esa localidad". En Valencia, las tropas recibieron información de personas desaparecidas de las que "nadie da razón alguna, ni los familiares y menos la población"[37]. Para ese momento, los casos quedaron sin resolver, sin que los militares pudieran poner fin a la intervención de los ilegales.

En medio de la mutación de las organizaciones paramilitares de autodefensa en ejércitos privados ilegales, al servicio de terratenientes y narcotraficantes, estas siguieron haciendo parte de la estrategia estatal de lucha contra la insurgencia hasta 1989[38]. Pero las Fuerzas Militares pronto verían que aquellas organizaciones civiles de apoyo de los años sesenta, con las que trabajaron al amparo de la ley, no hacían más parte de su control[39]. Las organizaciones paramilitares de autodefensa, mutadas en ejércitos privados, aunque desempeñaban un papel de aliadas teóricas en la lucha antisubversiva —como originalmente fueron concebidas—, actuaban de manera autónoma del Estado, e incluso a finales de los ochenta, a favor de los carteles del narcotráfico. Para las Fuerzas Militares eran no solo trasgresoras del monopolio de las armas y seguridad del Estado —con los costos de legitimidad que implicaba—, sino también agentes parásitos de las economías locales, un adversario en la guerra contra el narcotráfico, y un elemento deslegitimador de su misión de defensa de la vida y los derechos constitucionales de los ciudadanos[40]. En ese contexto, el Gobierno decidió prohibir el uso de autodefensas como estrategia de apoyo armado civil al Estado, dado que "bandas de sicarios, escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, son responsables de actores perturbadores del orden público". El Gobierno decidió suspender la autorización para que las autodefensas legales pudieran adquirir y utilizar armas "consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas", aunque seguía permitiendo el apoyo de los civiles "en actividades no agresivas"[41]. El mismo día, el Gobierno creó una comisión asesora de alto nivel para combatir el fenómeno[42], y un cuerpo especial armado "de hasta mil hombres" de la Policía Nacional para perseguir a los integrantes de las autodefensas[43].

Desde entonces, el Comando General de las Fuerzas Militares eliminó de sus manuales la organización de la población civil armada como parte de la

estrategia de contraguerrillas. El ministro de Defensa militar alertaba que "algunos de estos grupos pasaron de la prevención a la acción, creciendo con un espíritu de desquite o de venganza hacia los grupos insurgentes y sus brazos políticos, financiados por la misma comunidad, que es víctima de la subversión, y por grupos de narcotraficantes, que aprovecharon su infraestructura organizacional para infiltrarse y dominar zonas. Por ello cuentan con equipos, armamento y entrenamiento […] Fueron bautizados inapropiadamente como paramilitares, con el afán político de la subversión de identificarlos con la Fuerza Pública"[44].

Lejos de intimidarse por esta reacción, los ejércitos privados de la Casa Castaño respondieron publicando sus estatutos, renombrados ya como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de un Estado Mayor conjunto. En ellos, se justificaban en "la necesidad de defender la vida, honra y bienes de los campesinos honrados y trabajadores de los atropellos a que vienen siendo sometidos durante muchos años por parte de la guerrilla, y que ante la incapacidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas para someter dicho fenómeno nos vimos en la obligación de armarnos y de organizarnos para dar respuesta militar a la agresión de la cual somos víctimas". Desde entonces advertían de sus excesos, al argumentar que "la legítima defensa no es una fórmula matemática, es una fórmula humana". Las ACCU se propusieron "capacitar y adiestrar mandos y líderes campesinos para la conducción de grupos de autodefensa campesina" y "realizar las operaciones militares que sean necesarias", difundiendo "las desventajas que tendría en Colombia un sistema totalitario comunista". Adicionalmente, advertían que "no consideramos enemigos a las Fuerzas Armadas del Estado. Por tal motivo eludiremos cualquier tipo de enfrentamiento con ellas. No obstante, ante una situación de inminente captura por parte de las mismas, se autoriza a los integrantes del frente de choque para repeler dicho ataque". Las ACCU sugerían en sus estatutos que "serán respetados los militantes de los partidos políticos de la guerrilla, siempre y cuando estos se limiten a cumplir sus funciones exclusivamente políticas y no integren ocasionalmente columnas armadas en incursiones violentas […] Respetaremos a todo tipo de personas al margen del conflicto, pero no consideramos como tales a guerrilleros camuflados de campesinos que desarrollen labores de espionaje y que posteriormente conducen a la comisión de secuestros o incursiones violentas en poblaciones". Finalmente, prometían que en caso de que "grupos guerrilleros hagan su reinserción a la vida civil, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, por sustracción de materia, desaparecerán como surgieron"[45].

A través de un fugaz movimiento político, las autodefensas del Magdalena se justificaban asegurando que "allí el Gobierno y los políticos habituales fracasaron". La guerrilla, "lejos de ofrecer soluciones a esta masa de problemas sociales y económicos, los fueron agravando […] En el Magdalena Medio, la conjunción de ganaderos y campesinos valientes y de militares reflexivos y patriotas pudo obrar el milagro de dejar sin pueblo a la guerrilla y de que esta, carente de piso social, desapareciera"[46].

El fallido ‘ejército único’ del M-19

Las ideas de unión entre las guerrillas venían al menos desde los años setenta. En 1978, las Farc, el EPL, el ELN y el M-19 intentaron unirse alrededor de la idea de un ‘frente de liberación nacional’ al estilo salvadoreño[47], sin lograr concretarlo. El M-19 apeló a la estrategia de los acuerdos bilaterales de unidad con el ELN en 1978, con las Farc en 1983 y con el EPL en 1984. Además, el M-19 experimentó las operaciones conjuntas con el frente Ricardo Franco y el Quintín Lame en Cauca, y con el EPL en Urrao, Antioquia, con el objetivo de alcanzar “dos inaplazables propósitos […]: construir el ejército único y su gobierno democrático”[48]. Según estimaba el comandante del M-19 en 1982, “en Colombia existen cinco grupos guerrilleros, veinticinco frentes […] Eso significaría que si todas las guerrillas actuaran dentro de un mínimo de actividad militar, el país estaría en una situación totalmente diferente”[49].

Desde mediados de 1985, la Coordinadora Nacional Guerrillera apostó por la integración de un solo ‘ejército irregular revolucionario’ con las guerrillas del M-19, EPL, el frente Ricardo Franco[50], el Movimiento Armado Quintín Lame[51] y la llamada Trilateral —instancia de coordinación entre los marxistas Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Independiente Revolucionario Patria Libre (MIR) y ELN desde 1984. Simultáneamente, en el terreno político promovía la realización de una Asamblea Nacional Popular de carácter constituyente como salida al conflicto armado. Con la llegada de las Farc y la expulsión del Ricardo Franco[52], la organización pasaría a llamarse Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

La Coordinadora nunca fue un gran ejemplo de unidad. A principios de la década, las Farc se preocupaban porque “nuestras relaciones con otros movimientos armados no son halagadoras. Hoy esas relaciones están muy por debajo del estado en que las hallamos anteriormente”[53]. Las Farc criticaban la dirigencia del M-19 porque “nos califican de traidores […] y creen ser los únicos depositarios de la verdad revolucionaria y los más grandes conductores de la lucha armada”, y consideraba al EPL una organización en crisis. Con el ELN, por el contrario, las conversaciones “andan en buena tónica”[54]. Con su ingreso, sin embargo, las Farc esperaban lograr “la coordinación en acciones armadas y en un futuro la unión de los diferentes grupos bajo la dirección político-militar de las Farc”[55].

A su vez, el ELN calificaba las estrategias y tácticas del Partido Comunista como "equivocadas" y las de las Farc como "erróneas", en particular por su idea de separar la dirección política de la militar, "tanto geográficamente como teóricamente[56]. Al EPL lo consideraba "prácticamente desarticulado" al no entender que la "acumulación [de fuerzas] no puede ser previa a la lucha revolucionaria abierta y decisiva, sino en desarrollo de esta"[57]. Una eventual unión con las demás guerrillas solo se consideraría necesaria en una etapa posterior "para decidir el triunfo de la revolución, no para provocar el proceso revolucionario de inmediato"[58]. A pesar de estas diferencias, el ELN veía la colaboración con las Farc, el EPL, el Quintín Lame y el M-19 como necesaria[59].

El EPL, por su parte, consideraba que el M-19 subestimaba la lucha política en su obsesión de construir el 'ejército único'; que el ELN se concentraba en su propio plan militar de toma del poder; que las Farc estaban comprometidas en un 'juego político' con el Gobierno del que recibía 'regalos y presentes'; mientras que el EPL era el único movimiento "con aspiraciones de poder y, en consecuencia, combina la lucha armada con la política, obteniendo presencia tanto en el campo como en la ciudad"[60]. Adicionalmente, los años de rivalidad ideológica de las líneas soviética y marxista-leninista, contribuyeron al distanciamiento entre las Farc y el EPL. A raíz de las campañas de propaganda en su contra por parte del EPL, e incluso de un episodio de deserción masiva hacia este grupo, las Farc decidieron acometer varias incursiones armadas contra este desde finales de los setenta y aun durante su convivencia dentro de la Coordinadora Guerrillera[61].

Junto con el Quintín Lame, el M-19 construyó paralelamente su Batallón América, incorporando miembros de otras guerrillas de Ecuador y Perú. Con las tomas de Jambaló, Silvia y Belalcázar, en Cauca, de 1986, la idea de una guerrilla suramericana empezaba a ser realidad. Al mando de Carlos Pizarro, decenas de integrantes del ecuatoriano Alfaro Vive Carajo, y del peruano Sendero Luminoso, planeaban su ofensiva entre Valle y Cauca junto con cientos de guerrilleros del M-19 y el Quintín Lame. Durante todo el año, los combates y las emboscadas mutuas dejaron decenas de muertos entre soldados y el Batallón América[62].

Además de Cuba, la internacionalización de la guerra en los ochenta había llevado al M-19 a buscar apoyos, entrenamiento y armas en Libia, Panamá y Nicaragua[63]; al EPL a coordinar grupos de apoyo marxistas leninistas en España, Ecuador, Francia, Nicaragua y Surinam[64]; y al ELN a hacer presencia en

Centroamérica. Para entonces, la guerrilla colombiana ya era vista como un problema para sus vecinos: Venezuela acusó al ELN de asesinar a quince miembros de su Guardia Nacional en la frontera con Arauca y al M-19 de instalar campamentos en su territorio[65]. Brasil denunciaba un campamento de este último grupo guerrillero en su lado de frontera cerca de Mitú[66] y Ecuador también lo acusaba de participar del secuestro de un banquero ecuatoriano en Guayaquil.

El año 1986, sin embargo, marcó el declive militar del M-19. Tras la muerte en Bogotá de Álvaro Fayad, en marzo, Carlos Pizarro asumió como su líder principal. Desde entonces, las acciones más relevantes del M-19 fueron el ataque con morteros a la embajada estadounidense y a las instalaciones de una embotelladora de ese país en Bogotá, y al intento de asesinato del ministro de Gobierno. En noviembre, el cerco militar de las Fuerzas Militares en Cali, con miles de soldados, los convenció de que la guerra popular había fracasado.

En febrero de 1987, el M-19 ya estaba hablando de paz[67]. Desde entonces, su estrategia de acercamientos con el Gobierno incluyó el secuestro del líder conservador Álvaro Gómez en mayo de 1988. Dos meses después, luego de que el Gobierno aceptara que el M-19 hiciera su cumbre por la paz en Cauca, y posteriormente se reuniera con políticos en Usaquén — en Bogotá— y en La Mesa —Cundinamarca—, Gómez fue liberado. Desde septiembre de 1989, el M-19 declaró públicamente su intención de convertirse en un movimiento político legal, y el 5 de octubre de ese año, durante su Décima Conferencia, en Santo Domingo, Cauca, sus miembros votaron por la dejación de las armas y el fin del conflicto con el Estado.

La derrota del EPL

Para el EPL, la guerra popular tampoco había dado resultado. Desde 1986, se dedicó a acercarse a fuerzas políticas y sociales de Córdoba, Urabá, Medellín y Santander, incluida la Unión Patriótica, en el intento de construir un 'frente popular' que denunciara la 'violencia oficial y el 'terrorismo de Estado'[68].

La muerte de uno de sus fundadores, conocido como Ernesto Rojas[69], sacudió a toda la organización. "Este rudo golpe de la reacción constituye una pérdida sumamente grave para nuestra organización militar, por lo que él significaba como dirigente esclarecido y como comandante capaz"[70]. Sin él, el EPL, en tregua desde 1984[71], no contaba con un vocero que hablara a la vez por el aparato militar y el PCML. Su nuevo comandante, el antiguo jefe militar Francisco Caraballo[72], se dedicó a multiplicar sus estructuras armadas en Caldas, Risaralda, Antioquia y Norte de Santander. Para 1987, el EPL había logrado acumular una fuerza de unos setecientos combatientes distribuidos en ocho frentes rurales y seis urbanos, con presencia en catorce departamentos[73], sin contar con milicias y grupos de apoyo político como las estudiantiles Juventudes Revolucionarias de Colombia.

Respecto al EPL, el Gobierno decía que "actúa como las Farc […] Ha anunciado el cese del fuego y reducido un poco su actividad armada en algunas zonas. Sin embargo, en otras persiste en la violencia para explotar la actividad económica del área"[74]. En coordinación con las Farc, el EPL atacó en agosto de 1988 la base militar de Saiza, en Tierralta, Córdoba, mientras los otros asediaban el puesto de policía del municipio, causando destrozos, incendios y la muerte de mujeres, hombres y niños en el corregimiento. Haciéndose pasar por miembros de una brigada de salud, los guerrilleros del EPL hicieron unas labores de inteligencia sobre la base que les permitieron detectar los campos minados que la custodiaban. Tras usar ganado sobre los campos para activar las minas y despejar su entrada, tomaron como rehenes a once soldados. Así, ambas guerrillas habían logrado con éxito lanzar un ataque simultáneo de grandes proporciones a dos unidades fijas, incluida una base militar, lo que anticipaba el tipo de acciones guerrilleras que vendrían la década siguiente.

Gracias a la red de informantes, el Ejército pudo localizar uno de los campamentos principales del EPL en Córdoba, que tenía casi dos kilómetros cuadrados. En la vereda Mutatá, de Puerto Libertador, que el Ejército describía

en noviembre de 1989 como “de clima cálido […] malsano, palúdico y regado de sur a norte por el río San Jorge, de bastante caudal en esta época del año”, tres batallones atacaron un campamento ribereño “totalmente rodeado de elevaciones […] lo cual hace casi imposible un avance terrestre sin ser detectado”. Allí esperaban la resistencia de casi doscientos guerrilleros de las ‘fuerzas especiales’ del EPL y los estudiantes de su escuela de comandantes[75]. Primero, las tropas se infiltraron cerca del campamento. Luego del bombardeo y ametrallamiento de los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea, uno de los batallones, con un centenar de contraguerrillas, descendió desde el aire hasta el campamento y una compañía atacó por tierra. Uno de los helicópteros cayó bajo el fuego de las ametralladoras guerrilleras. Ya en tierra, sus tripulantes tuvieron que ser rescatados por las contraguerrillas. Por cuatro días, las tropas se tomaron el campamento bajo la protección permanente, como nunca antes, del fuego y apoyo aéreo. Una guerrillera herida en una trinchera confesó que sabían desde el día anterior del desembarco y que por eso varios guerrilleros salieron del campamento, y que “habían alcanzado a reaccionar porque los aviones hicieron una pasada de norte a sur y no lanzaron bombas, después volvieron a pasar y ahí sí lanzaron las bombas; si una de ellas hubiera caído en la construcción que servía de aula, los muertos hubieran sido muchos porque estaban a esa hora en instrucción”[76].

Seis meses después, el Ejército asaltó un nuevo campamento cerca de Tierralta. Para esta operación, las tropas “lograron que la población civil colaborara con información”, cansada de las extorsiones del grupo[77].

Los golpes militares se sucedieron. Para febrero de 1990, un sector del EPL, liderado por su comandante militar, Bernardo Gutiérrez[78], optó por dialogar su desmovilización con el Gobierno. El resto del EPL, aún al mando de Francisco Caraballo, pero carente de líderes de tropa, languidecería militarmente en los años por venir.



Guerrilleros del ELN recibiendo instrucciones de sus dirigentes en los años ochenta. / Foto: Lope Medina. Archivo Semana.

Notas

[1] Comando General de las Fuerzas Militares 1985b. Disposición 16, 18 de junio. Las jurisdicciones de las seis divisiones del Ejército se delimitaron en la Disposición 30 de 1989.

[2] Comando del Ejército 1986a. Oficio 46606 sobre directiva transitoria 300-6.

[3] Comando del Ejército 1990a. Directiva 300-6, anexo B, Planes y operaciones a la directiva transitoria, apéndice 1, 8.

[4] Ibídem, anexo B, apéndice 1, 9.

[5] Ministerio de Defensa 1989. Memorias de Guerra 1988-1989. Bogotá: Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 67.

[6] Comando del Ejército 1990b. Directiva 300-6, anexo C. Normas sobre el empleo de apoyo aerotáctico.

[7] Comando del Ejército 1990a, op. cit., apéndice 1, 10.

[8] Comando del Ejército 1988a. Oficio 40857 del 24 de junio. Normas para el empleo de guías.

[9] Comando Sexta Brigada 1986. Oficio 004432, Ibagué, 16 de octubre, 1.

[10] Comando del Ejército 1986b. Apreciación de inteligencia, 14.

[11] Comando General de las Fuerzas Militares 1985c. Situación interna del país comprendida entre el 30-oct al 06-nov-85, 12 de noviembre, 8.

[12] Farc-EP 1985b. A forjar la Unión Patriótica. Columna Roja Órgano informativo del 21 frente de las Farc-Ep, abril, 1.

[13] Ibídem, 2.

[14] La UP acusaba al Ricardo Franco de "atentar contra destacados dirigentes del Partido Comunista Colombiano […]; poner bombas contra las sedes de la Unión Patriótica y de Partido Comunista además de amenazar de muerte a los dirigentes de las Farc y de la UP. Véase Herrera, Braulio 1985. Primer Congreso Nacional Unión Patriótica. Informe de la Coordinadora Nacional Provisional de la Unión Patriótica. 14-16 de noviembre, 1; y El Tiempo 1985c. Reivindican cuádruple crimen. 14 de octubre, C8. El Espacio 1985. Toda la cúpula comunista está sentenciada. 29 de agosto, 3.

[15] Herrera, Braulio 1985, op. cit., 1.

[16] Todos estos elementos fueron incorporados en la Constitución de 1991. Véase Unión Patriótica 1986a. Guía de trabajo (proyecto). Documento preparatorio para reunión de trabajo.

[17] Unión Patriótica 1986b. Memorando sobre las tareas para la jornada del 22 de octubre. Bogotá, 30 de septiembre.

[18] Comando Segunda Brigada 1984. Oficio 002338, Barranquilla, 16 de abril.

[19] Firmaron también los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño del ELN.

[20] Comando Quinta Brigada 1986. Caso táctico 7/86 BR-5. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 113-119.

[21] La emboscada dejó veintisiete militares muertos y cuarenta y seis heridos. Véase Comando Décimo Segunda Brigada 1987. Caso táctico 2/87 BR-12. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 121-131.

[22] Farc-EP 1987a. Pleno Ampliado del Estado Mayor de las Farc-EP. 25-29 de diciembre de 1987.

[23] Ibídem.

[24] Comando Tercera Brigada 1987. Caso táctico 1/87 BR-3. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 135-145.

[25] Guerrero Paz, General Manuel 1989. Saludo del Ministro de Defensa nacional a los honorables senadores y representantes. En Ministerio de Defensa, Memorias de Guerra 1988-1989. Bogotá: Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, XII.

[26] Comando Batallón de Infantería Cuarenta. Caso táctico 2/89 BR-14. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 445-457.

[27] Guerrero Paz, Manuel 1989, op. cit., XIII.

[28] Gutiérrez, Francisco y Barón, Mauricio 2006, op. cit.

[29] Para la inteligencia militar de la época, Fidel Castaño operaba desde tres fincas: 'Las Tangas', junto al río Sinú, cerca de Valencia; 'Jaraguay', cerca de Tierralta; y 'Los Campanos', más pequeña que la anterior, cerca de Jaraguay, propiedad de José Vicente Castaño, hermano de Fidel. El Ejército tenía información de al menos siete haciendas más que colaboraban con la Casa Castaño: Pasto Revuelto Uno y Dos, Las Pampas, Santa Mónica, San Luis, Palmasola, El Volador y Roma. Véase Comando Décimo Primera Brigada

1989a. Oficio 2492. Montería, 11 de julio; Comando del Ejército 1989a. Oficio 42865. Bogotá, 10 de julio, 7-9; Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989a. Informe investigación. Montería, 18 de julio; y Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989b. Informe patrullaje, 28 de julio.

[30] Carta anónima fechada en enero de 1989 y enviada al Procurador General de la Nación y conocida posteriormente por medios de comunicación y el Batallón Junín.

[31] Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989c. Envío informe patrullaje. Tierralta, 16 de febrero.

[32] Además de las autodefensas de Fidel Castaño, en el área operaba también un frente de Farc. Véase Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989d. Oficio 1550. Montería, 8 de junio.

[33] Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989e. Envío informe patrullaje. Tierralta, 23 de marzo.

[34] Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989f. Oficio 1550. Montería, 8 de junio.

[35] Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989g. Envío informe de patrullaje. Tierralta, 6 de junio.

[36] Comando del Ejército 1989a, Oficio 42865. Bogotá, 10 de julio, 9-11.

[37] Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1989b, op. cit.

[38] Los manuales militares de contraguerrilla continuaban hasta entonces describiendo la organización de juntas de autodefensa y grupos de defensa civil para que la población “puede defenderse contra las acciones que las guerrillas lleven a cabo contra ella”, con dotación de armas, y con capacidad de apoyar a las tropas “en emergencia de tipo militar”. Véase por ejemplo Comando del Ejército 1987a, op. cit., 321, 328-330.

[39] En 1990, la Casa Castaño secuestró a cuarenta y tres personas en Pueblo Bello, Córdoba, y luego las asesinó. Lo mismo hizo con un senador conservador por el que pedían cientos de millones de pesos de rescate, y al que ejecutó cuando creyó que el Ejército adelantaba una operación de rescate.

[40] Gutiérrez, Francisco y Barón, Mauricio 2006, op. cit., 301.

[41] Decreto 815 del 19 de abril de 1989, declarado exequible por la sentencia 1949 de 1989, de la Corte Suprema de Justicia.

[42] Decreto 813 del 19 de abril de 1989.

[43] Decreto 814 del 19 de abril de 1989.

[44] Ministerio de Defensa 1989, op. cit., XVI.

[45] Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 1990. Estatutos. Julio.

[46] Valenzuela, Armando 1989. Con las manos atadas. Bogotá: Ediciones Movimiento de Restauración Nacional, Morena, 37-41.

[47] Comando General de las Fuerzas Militares 1979, op. cit., 10.

[48] La incursión en Urrao fue presentada como la primera acción de la Coordinadora Nacional Guerrillera. Véase Comando General de las Fuerzas Militares 1985c, op. cit., 11; El Espectador 1985b. Cruentos combates con M-19 en Cauca. 10 de noviembre, 48; y El Espectador 1985c. Siguen combates en Cauca. 11 de noviembre, 51.

[49] En su lista, incluía al Movimiento Armado Quintín Lame. Véase Jaime Bateman citado en entrevista de Riveros, Ligia 1982, op. cit.

[50] Disidencia de las Farc.

[51] Grupo armado indígena de la zona de Cauca y Tolima.

[52] El frente Ricardo Franco fue expulsado luego de la masacre de Tacueyó, en Cauca, en la que su comandante ordenó el asesinato de más de ciento treinta miembros de sus propias filas por sospecha de infiltración del Ejército. El comandante del frente fue arrestado en 1995 y asesinado en su celda en el 2002.

En 1994 fue asesinado en Bogotá otro de los comandantes del frente, Hernando, hermano de Carlos Pizarro.

[53] Farc-EP 1981b. Conclusiones de la reunión del Secretariado con ayudantías. 10-12 de septiembre.

[54] Farc-EP 1982c. VII Conferencia Nacional de Guerrilleros. Informe central a la Séptima Conferencia, mayo.

[55] Comando del Ejército 1980. Apreciación de inteligencia 3, junio, 41.

[56] Además, el ELN sufrió en esa época bajas en enfrentamientos armados con las Farc en el sur del país, Arauca y Cesar. Véase Ejército Nacional 1983. Cartilla conferencias ELN No. 90. Plan general ELN, 20-21.

[57] Ibídem, 21.

[58] Ibídem, 25.

[59] El PRT había decidido firmar la tregua con el Gobierno, mientras ELN y el MIR se fusionaron en 1987 en la llamada Unión Camilista ELN (Uceln), nombre que usó la organización hasta inicios de los noventa, cuando volvió a denominarse ELN.

[60] Comando del Ejército 1987b. Oficio 36244, Bogotá, 7 de abril. 3.

[61] EPL y Farc chocaron violentamente en Urabá y Meta en 1986 y 1987. Véase Comando del Ejército 1981. Apreciación de inteligencia 1, enero, anexo B; Comando del Ejército 1983a, op. cit., 176; y Comando del Ejército 1987c. Apreciación EPL, 6.

[62] Comando Tercera Brigada 1986. Caso táctico 1/86 BR-3. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 421-432.

[63] García Durán, Mauricio; Grabe, Vera y Patiño, Otty 2008. The M-19's Journey. From Armed Struggle to Democratic Politics. Berghof Transitions Series 1. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 13.

[64] El EPL incluso decidió enviar un grupo de combatientes a Nicaragua en apoyo del gobierno sandinista. Comando del Ejército 1987c, op. cit., 11-12.

[65] El Tiempo 1985d. Guerrilleros se desplazan a Venezuela. 13 de octubre; El Tiempo 1985e. Venezuela rechaza provocación del EPL. 13 de octubre, 2A-3A; Revista Semana 1987. Vientos de guerra. Edición 164, 22 de julio.

[66] El Mundo 1985. En la toma de Miranda, nueve muertos y seis heridos, 18 de octubre, 10.

[67] Ese año, luego de casi dos años de cautiverio, liberaron a la hija del banquero Jaime Michelsen.

[68] Sus esfuerzos en la costa Atlántica fueron menos efectivos. Véase Comando del Ejército 1987d. Oficio 36260. Bogotá, 7 de abril, 2.

[69] Óscar William Calvo.

[70] EPL 1987. EPL renueva su compromiso de combatir y vencer.

[71] El EPL firmó la tregua en 1984 en acto en Medellín, mientras el M-19 lo hacía en Corinto y El Hobo, Cauca.

[72] Armando Ramírez.

[73] Comando del Ejército 1987c, op. cit., 10

[74] Guerrero Paz, General Manuel 1989, op. cit., XII-XIII.

[75] En el área de Puerto Libertador se encontraban también algunos guerrilleros de Farc.

[76] El Ejército calcula entre veinticinco y cuarenta guerrilleros muertos en la

llamada ‘Operación Mutatá’. Véase Comando Décimo Primera Brigada 1989b. Caso táctico 7/89 BR-11. Oficio 4159, Montería, 18 de noviembre.

[77] Comando Brigada Móvil Uno 1990. Caso táctico 15/90 BRIM-1. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 313-25.

[78] Antiguo militante de las Farc.

Capítulo X

Fuerzas Militares a la ofensiva

La participación del M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT en la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, sin duda, impulsó reformas significativas y profundas, pero aún distantes de las que aspirarían unas guerrillas triunfantes, como las que imaginaban ser las Farc y el ELN. Para estas, la revolución aún no había terminado. Los archivos militares revelan una profunda autocrítica dentro de las Fuerzas Militares, en búsqueda de una respuesta del porqué estas dos guerrillas no habían sufrido las derrotas de las demás. El acumulado en fuerza, redes de apoyo y experiencia por parte de estas guerrillas contrastaba con la dispersión militar en tareas contraguerrilleras y contra el narcotráfico. Las Farc y el ELN habían sido exitosas en su estrategia de dispersar soldados y recursos militares en la protección de la infraestructura e industria nacional al punto de limitar sus posibilidades de concentrar su fuerza de forma suficiente para asestarles un golpe significativo.

A finales de los años ochenta, las Fuerzas Militares lanzaron una ofensiva contra las guerrillas con el fin de convencerlas de dar definitivamente el paso para reintegrarse a la vida civil. A inicios de 1989, el comando del Ejército ordenó el incremento de “la iniciativa en las operaciones contra los grupos subversivos y terroristas en todo el territorio nacional”[1]. Los objetivos militares serían, entre otros, las “instalaciones fijas de los grupos subversivos y terroristas” y la protección de “áreas de oleoductos y de transporte fluvial de petróleo. Áreas de instalaciones petroleras, carboneras y de otras industrias en zonas rurales. Áreas de líneas de conducción eléctrica. Áreas de poblaciones normalmente atacadas por los grupos subversivos. [Y] áreas de intensa acción de asesinatos, secuestros y extorsiones por grupos guerrilleros”[2].

La dejación de las armas de la mayoría de integrantes del M-19 se produjo el 8 y el 9 de marzo en campamentos instalados en Caloto, Cauca y Suaza, Huila. El día 9, el M-19 y la Internacional Socialista, organización garante del proceso, firmaron el acta final de dejación en Santo Domingo, Cauca. Ese día, Carlos Pizarro tomó su arma, la envolvió en una bandera de Colombia y la depositó en

el largo mesón donde reposaban decenas de fusiles de la guerrilla. El mismo día se firmó en la Casa de Nariño el acuerdo de paz entre el Gobierno, partidos políticos, el M-19 y la Iglesia Católica “en calidad de tutora moral y espiritual del proceso”[3].

La amnistía e indulto otorgados por el Gobierno, y ratificados luego por el Congreso, abrieron el camino para que la ahora Alianza Democrática M-19 participara de las elecciones presidenciales de 1990. El asesinato de Carlos Pizarro en Bogotá, en abril, atribuido a la Casa Castaño, pudo haber significado el fin del proceso. Pese a ello, la dirigencia exguerrillera decidió continuar en la civilidad. Con esta decisión, no solo lograron una votación histórica para la izquierda colombiana en las elecciones presidenciales[4], sino que obtuvieron más adelante una tercera parte de las curules de la Asamblea Nacional Constituyente[5], pieza clave de la estrategia de Gobierno para intentar el cierre definitivo del ciclo de violencia guerrillera. Los acuerdos alcanzados en los meses siguientes implicaron la asignación de curules adicionales en la Asamblea: una al PRT[6], dos al EPL[7] y una al Quintín Lame[8].

Para 1991, se habían desmovilizado unos 3300 guerrilleros de estos grupos, incluyendo un poco menos de mil del M-19 y casi dos mil del EPL. A estos cuatro grupos, se sumaron cuatro más que al final de siglo entraron en proceso de reintegración a la vida civil. Pasado el proceso constituyente, el Gobierno alcanzó nuevos acuerdos de desmovilización con los Comandos Ernesto Rojas —disidencia del EPL— en 1992, y la Corriente de Renovación Socialista —disidencia del ELN—, las milicias populares de Medellín[9] y el frente Francisco Garnica —disidencia del EPL— en 1994, que contribuyeron a subir la cifra de desmovilizados durante ese periodo a 6500[10]. Los planes de la época ofrecían apoyo de reinserción en dinero, créditos, programas de capacitación, educación formal, apoyo con capitales semilla para la creación de microempresas, y fondos estatales para la constitución y el funcionamiento de fundaciones y cooperativas[11].

La nueva realidad de los años noventa cambió el escenario para los soldados. Los Consejos Verbales de Guerra ya no podrían ser usados para juzgar y condenar a guerrilleros[12], y se restringieron las facultades para declarar el estado de sitio —ahora renombrado ‘de conmoción interior’[13]. Sin embargo, aunque el Comando del Ejército entendía que la ejecución de operaciones militares “son obligaciones ineludibles e indelegables de los miembros de la institución que tienen en sus manos la responsabilidad de comando”[14], a la vez “corresponde al

Presidente de la República, como Jefe del Gobierno, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado". Era claro además que "es responsabilidad de los Gobernadores, como agentes del Presidente de la República [...], responder por las relaciones y los mecanismos de coordinación entre las distintas instancias del manejo del orden público", y que "es atribución de los alcaldes en su carácter de Jefes de la administración municipal o distrital [...] conservar el orden público de conformidad con la ley"[15].

Para 1990, las Fuerzas Militares ya habían activado los nuevos teatros de operaciones para el Ejército y la Fuerza Aérea y Armada[16], y se habían identificado seis áreas críticas del país en trece departamentos[17]. Desde entonces, el número de soldados voluntarios empezó a aumentar en detrimento de los soldados regulares que prestaban su servicio militar[18]. Los voluntarios, se reiteraba, "solamente se deben emplear en operaciones de contraguerrillas"[19].

Pese a estas medidas, las tropas aún no estaban preparadas para la nueva fase de la guerra que se venía. Un ejemplo era lo inseguro que resultaba el uso de vehículos pesados en carreteras sin pavimentar. Cierto día, un campesino alertó a las tropas de un retén guerrillero en una carretera de Sogamoso, en Boyacá. Un pelotón se desplazó junto con carros de combate para registrar cada puente y cada alcantarilla en búsqueda de explosivos en el área. De pronto, los soldados escucharon fuego y detonaciones donde se encontraba otra tropa. Al intentar auxiliarla, una explosión hizo que un carro cascabel se volcara, sin que los demás vehículos pudieran reaccionar[20].

Otro elemento de desventaja para las tropas era el avance de las guerrillas en el control de la población en sus áreas de influencia. El comandante de la Quinta Brigada solía desarrollar acciones sociales en las áreas de operación. Colaboraba con tropas en los centros de acopio y los puertos, pero tales acciones, muchas veces, resultaban insuficientes para cambiar la marea, ya que la gente prefería no revelar la presencia de guerrillas, y en ocasiones las ayudaba[21].

Poco a poco, las Fuerzas Militares fueron entendiendo que la razón de algunos "fracasos operacionales" estaba "en el descuido total en la aplicación del principio de la seguridad, cuyo fin esencial es la conservación del poder de combate". Esto debía aplicarse no solo para las tropas de tierra. En los ríos, la situación no era muy diferente, y con frecuencia botes escoltas de barcos remolcadores y patrullas se exponían a los disparos desde ambas orillas[22]. Para

contrarrestar esta situación, recordaban que “la mejor defensa es el ataque”, y que “las operaciones de contraguerrillas son eminentemente ofensivas”[23].

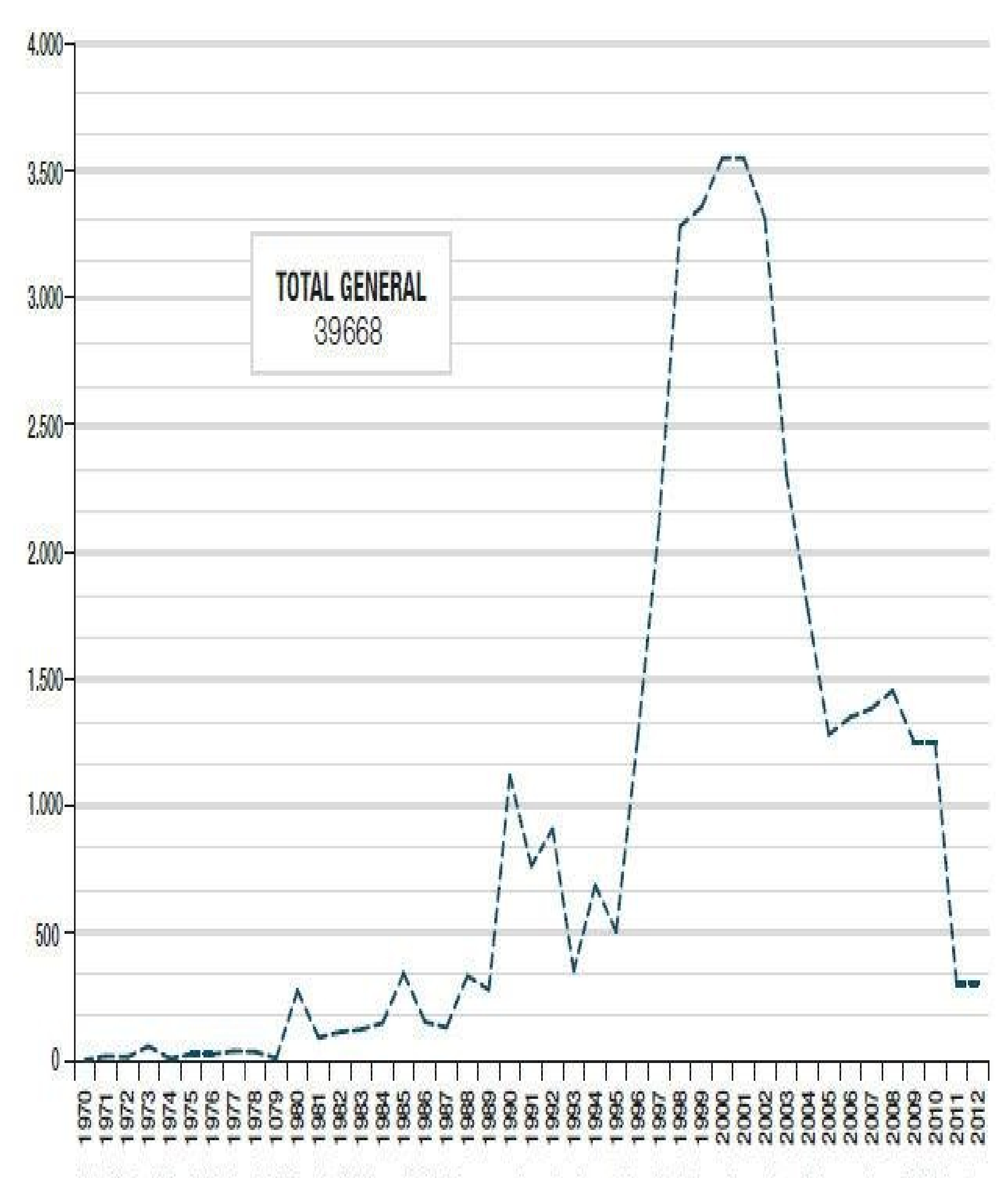
A pesar de esto, no todas las acciones sobre los hombros de los soldados a principios de la década eran ofensivas. Desde 1988, las Fuerzas Militares debían patrullar y cuidar las redes de energía del país[24], así como las carreteras principales[25], y además apoyar operaciones contra el secuestro[26]. Asimismo, el Gobierno activó comandos operativos conjuntos en Urabá y Arauca, destinados a proteger la industria del banano y el oleoducto Caño Limón-Coveñas[27]. Tal sobrecarga solo empeoró con la decisión de que los militares dirigieran también operaciones contra los carteles de la droga, como apoyo a la misión principal que cumplía la Policía en ese campo[28].

En enero de 1990, el Ejército logró ubicar el campamento principal del llamado bloque Oriental de las Farc, conocido como ‘Casa Cuña’, al norte de Mesetas, en Meta[29]. Con guías de la zona, las tropas lograron infiltrarse y pronto se desataron combates. Mientras el fuego de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea caía sobre los cerros, algunos guerrilleros se apostaron en las alturas para dispararles desde allí y alejarlos de los corredores aéreos. El campamento finalmente fue hallado y destruido, pero la gran mayoría de guerrilleros logró escapar con todo su armamento y equipos. La población civil de la zona contribuyó al escape. “Las Farc”, estimaba el Ejército, “desde hace mucho tiempo atrás, trasplantaron colonos adoctrinados, los cuales hacen parte de las redes de información, apoyo de abastecimientos y milicias bolivarianas”. La existencia de un gran campamento, sin embargo, llamaba la atención, dado que “la intención de retener el terreno, por parte del enemigo, contradice la esencia de la guerra irregular”[30].

Gráfico 11.

SECUESTROS 1970-2012

A partir de 2002 hay una reducción sistemática de los secuestros en Colombia. Los casos de secuestros masivos en carreteras se incrementaron en los años 90 y decayeron con el inicio del nuevo siglo.



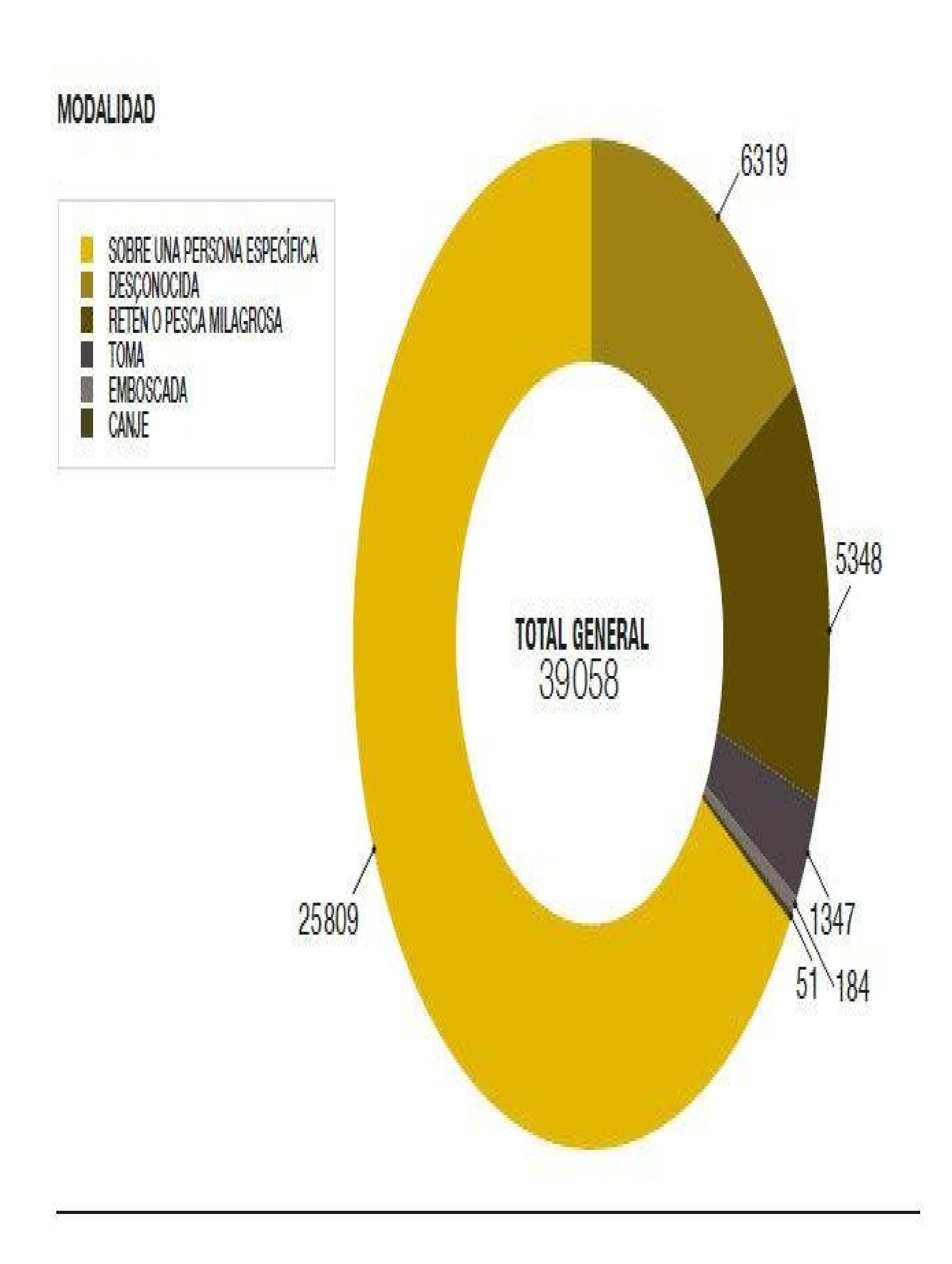
Nota: Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 69% de los secuestros de este periodo está relacionado con el conflicto armado, y el 91% de estos casos fue ejecutado por las guerrillas. Ver CNMH 2013. ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 64-65.

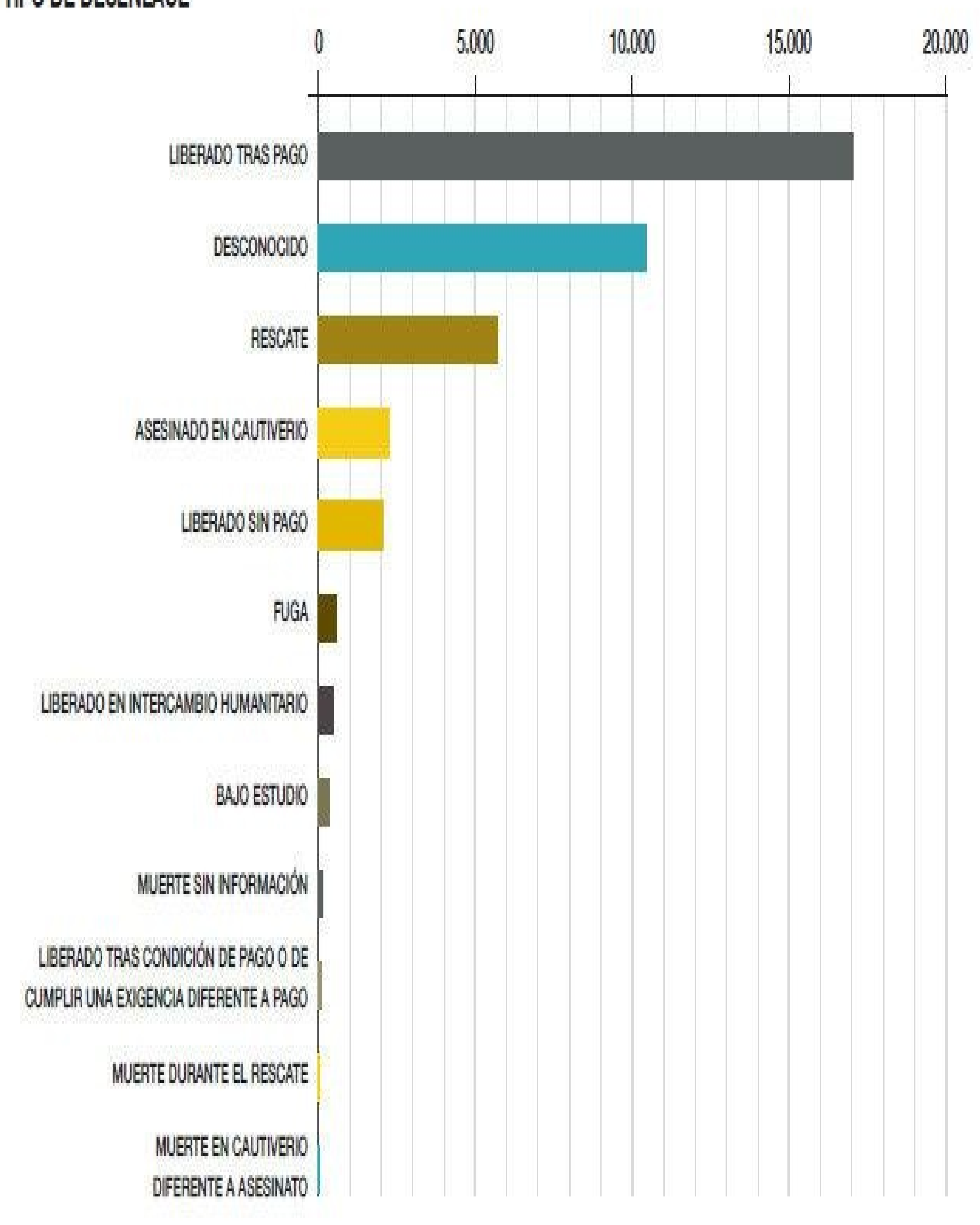
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa, Fondelibertad, Fiscalía y prensa.

Gráfico 12.

SECUESTROS POR MODALIDAD 1970-2010

A partir de 2002 hay una reducción sistemática de los secuestros en Colombia. Los casos de secuestros masivos en carreteras se incrementaron en los años 90 y decayeron con el inicio del nuevo siglo.


MODALIDAD
SOBRE UNA PERSONA ESPECÍFICA
DESCONOCIDA
RETEN O PESCA MILAGROSA
TOMA
EMBOSCADA
CANJE
6319
5348
TOTAL GENERAL
39058
25809
1347
51
184


TIPO DE DESENLACE
0
5.000
10.000
15.000
20.000
LIBERADO TRAS PAGO
DESCONOCIDO
RESCATE
ASESINADO EN CAUTIVERIO
LIBERADO SIN PAGO
FUGA
LIBERADO EN INTERCAMBIO HUMANITARIO
BAJO ESTUDIO
MUERTE SIN INFORMACIÓN
LIBERADO TRAS CONDICIÓN DE PAGO O DE CUMPLIR UNA EXIGENCIA DIFERENTE A PAGO
MUERTE DURANTE EL RESCATE
MUERTE EN CAUTIVERIO DIFERENTE A ASESINATO

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa, Fondelibertad, Fiscalía y prensa.

En diciembre de 1990, las Fuerzas Militares lanzaron una operación a gran escala, con más de dos mil soldados y fuerzas especiales, para acabar con el liderazgo de las Farc[31]. De acuerdo a la información recogida, el grupo guerrillero había construido todo un complejo de campamentos y fincas cerca de La Uribe, Meta, durante los años de la negociación con el Gobierno. Este complejo incluía dos helipuertos; un campamento para Jacobo Arenas, Alfonso Cano y Raúl Reyes, con zonas de recreación, odontología, casa de comunicaciones y un edificio de residencia de cinco alcobas, con salón de conferencias, biblioteca, porcelanas, licoreras, escritorios y fuentes de energía solar; un campamento para Manuel Marulanda, con alojamientos para 35 guerrilleros y uno más para el jefe de las Farc, y dos lugares de descanso; una escuela de entrenamiento de comandantes bajo el mando de Timochenko, en la que Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano instruían no solo en técnicas militares y políticas, sino también en filosofía y psicología social; y el campamento de Casa Verde, en el que las Farc se reunían cotidianamente con emisarios políticos, sociales y del Gobierno; y la residencia Casa Nueva, residencia de Jacobo Arenas. El bombardeo a Casa Verde y demás campamentos de las Farc "no tuvo la eficacia esperada, ya que los subversivos, tal como lo mencionan, tenían previsto la utilización de los denominados 'roticos', que vienen a ser áreas subterráneas"[32]. Dos días después del inicio de la Operación Colombia, la comandancia de las Farc inició su repliegue, protegida por guerrilleros que les servían de contención a las tropas. Los guerrilleros se desplazaron hacia el río Tigre desde donde se dispersaron[33].

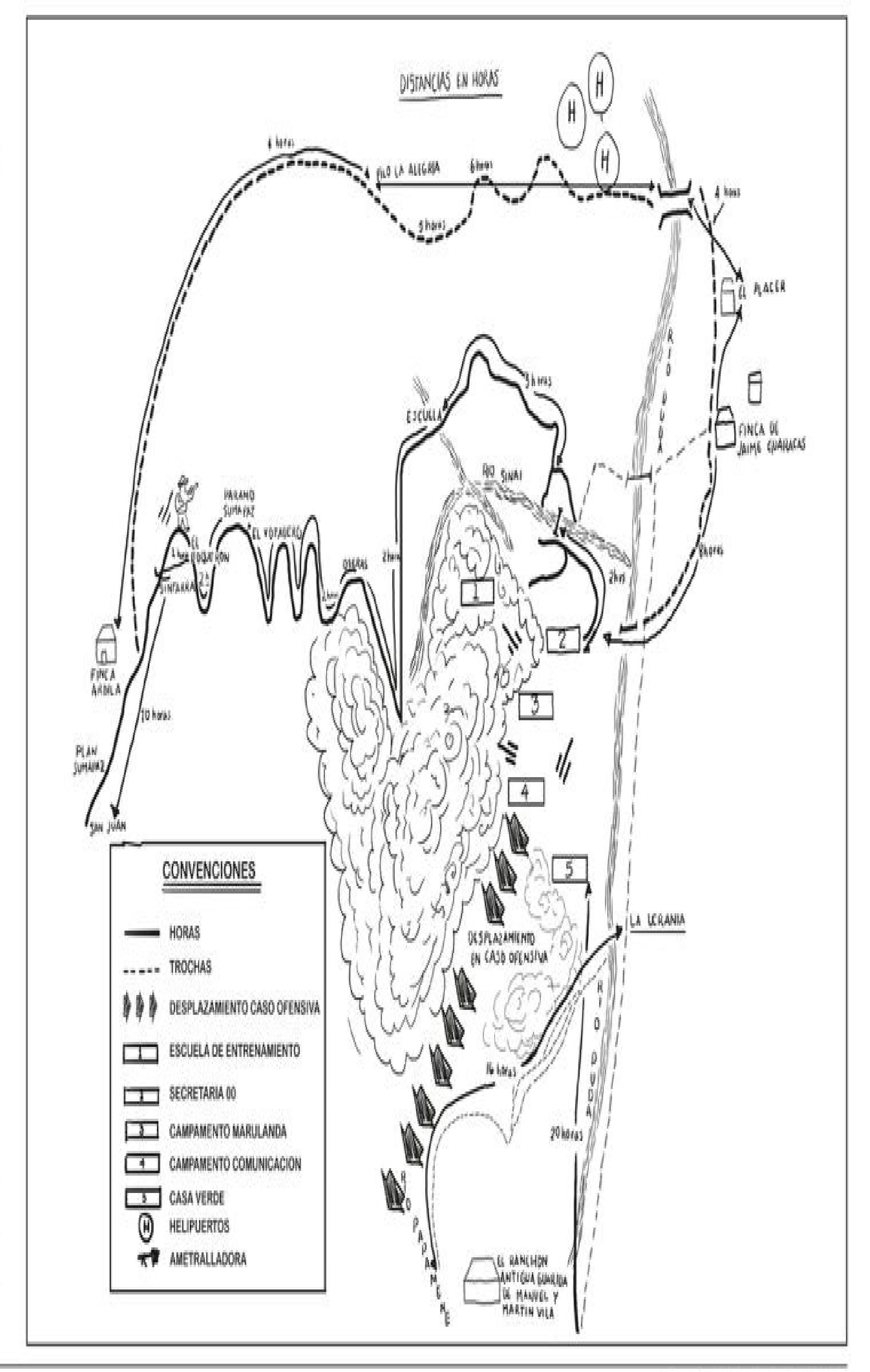
Durante todo 1991, el Ejército procuró mantener presencia en la zona, y desarrollar acciones de censo, propaganda y colaboración con la población en temas como la reforestación, arreglo y pintura de escuelas y hogares infantiles, aseo público, fiestas tradicionales, jornadas odontológicas, médicas y veterinarias, de peluquería y alfabetización, y entrega de mercados para intentar evitar el regreso de las Farc. Pese a ello, en diciembre de ese año, el Ejército reportaba la necesidad de ejecutar "operaciones de contraguerrillas en las áreas donde los subversivos tienen más influencia sobre la población civil"[34].

Años después, la inteligencia militar concluiría que el secretariado de las Farc conocía con antelación los planes concernientes a la Operación Colombia. "Las cuadrillas escogieron los guerrilleros más antiguos y experimentados para engañar sobre la ubicación geográfica de los cabecillas y así evitar posteriores infidencias que pusieran en riesgo la seguridad. Las cuadrillas ubicaban fácilmente a las patrullas por falta de medidas efectivas de contrainteligencia. Los guerrilleros seguían el trillo y las huellas dejadas por la tropa para ubicarla y, posteriormente, desarrollar hostigamientos y ataques permanentes. La tropa no tenía conocimiento de las condiciones de terreno y clima. En el manejo de este aspecto, las Farc siempre llevaron la delantera. No se desarrollaron por un tiempo suficiente los puestos de observación. Se notó mucho afán por los resultados. Los corredores de movilidad eran los mismos que habían utilizado durante todo el tiempo, incluso desde los primeros años (1960), con la diferencia de que ahora eran más extensos y con mayor infraestructura. Dichos corredores fueron clave para el repliegue de los grupos. La base social que las Farc poseían en esta región, especialmente en La Uribe, fue fundamental para neutralizar el efecto de la operación militar. Como si fuera poco, no se tuvieron en cuenta las vías de escape, y el bloqueo y control de los abastecimientos no fueron aplicados con severidad como en otras ocasiones. Las tropas fueron afectadas por malestares y enfermedades propias del clima frío. Si estaba despejado, en muy poco tiempo se cubría de neblina o llovía, característica que los terroristas conocían bien y aprovecharon a su favor. Al personal que operaba en las partes más altas (páramos) le suministraban sulfato ferroso, vitamina C, brandy con lechera [y] emulsión de Scott. La extensión del territorio hizo imposible el registro de todas las áreas. La orden que tenían los terroristas era hostigar permanentemente a las patrullas, buscando llevarlas al desespero para que cometieran errores. De esta forma lograron, en muchas oportunidades, romper los cercos y salir de las áreas de operaciones. Los grupos de las Farc pusieron en práctica el sistema de la 'oreja': daban la vuelta hacia la retaguardia de la patrulla y caminaban paralelamente hacia su vanguardia, luego aparecían, de un momento a otro, sobre los punteros. Dejaron grupos de hostigamiento sobre lugares de paso obligado, y esto causó heridos y bajas y obstruyó el avance de la patrulla. En la niebla, los terroristas disparaban sin objetivo definido para que las tropas respondieran, así descubrían su ubicación. Las cuadrillas interceptaron las comunicaciones, esto hizo que cuando la tripulación de los aviones le indicaran a la patrulla que se corriera mil metros para poder disparar sobre el área del objetivo, los terroristas también se corrían esos mismos mil metros. Con el tiempo, se encontraron grandes campamentos subterráneos (tipo Viet Cong), difíciles de detectar por tierra e imposible de hacerlo desde el aire"[35].

Dibujo 4.

CASA VERDE Y CAMPAMENTOS DE FARC EN LA URIBE

1990



Dentro del complejo militar de las Farc cerca de La Uribe, Meta, se encontraba Casa Verde, lugar de reunión con autoridades y figuras políticas y sociales durante los años de la tregua, hasta el bombardeo militar de 1990.

Fuente: Central de Inteligencia Militar del Ejército.

Así como las Fuerzas Militares cambiaban para ir a la ofensiva, las Farc hacían reingeniería a sus propios planes. En 1989 volvieron a revisar su plan estratégico de guerra. Ahora se disponían a acumular, en tres años, un total de dieciocho mil guerrilleros distribuidos en sesenta frentes. Esos números deberían multiplicarse hasta 32 mil hombres en ochenta frentes durante la segunda fase, y luego, para 1996, lanzar la 'primera ofensiva generalizada' para la toma del poder[36]. Pero primero, para preparar la ofensiva, los objetivos inmediatos eran "paralizar la economía del país, afectando el sector energético […], [la] adquisición de armamento sofisticado, incluyendo misiles tierra-aire […] y aislar la capital de la República mediante el bloqueo de las principales vías"[37].

Si bien a inicios de los noventa no habían logrado cumplir las expectativas creadas en 1982[38], los objetivos en materia de ingresos "fueron logrados o quizá superados en vista de la gran influencia directa e indirecta en la producción de cocaína y recientemente el cultivo de la amapola, así como el producido de los secuestros"[39]. Este crecimiento militar y económico, sin embargo, contrastaba con "el aislamiento de la fuerza guerrillera con los sectores de masas", razón parcial del fracaso del experimento de la Unión Patriótica[40].

A inicio de los noventa, el Ejército consideraba que el 'nuevo modo de operar' apenas había sido usado por las Farc y su "capacidad táctica no ha evidenciado mayores avances"[41]. Sin embargo, estaban en marcha una serie de acciones que favorecerían el inicio de su ofensiva[42]. Primero, la urbanización del conflicto, coordinada con el ELN y el EPL dentro de la Coordinadora Guerrillera, e impulsada por ellos con la creación de Milicias Bolivarianas[43]; segundo, el uso masivo de comunicaciones para intentar indisponer a las masas contra las Fuerzas Militares[44]; tercero, el asesinato de inspectores de policía y militares de permiso para desterrar a la fuerza pública de sus zonas de influencia y retaguardia estratégica[45]; y cuarto, el desarrollo de una campaña de desgaste de las Fuerzas Militares. Sobre este último punto, las Farc planteaban desde 1982 que su plan de toma del poder, rebautizado en 1989 Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, "sitúa su fuerza principal en el centro de su despliegue, que es la cordillera oriental, mientras que la guerra guerrillera se desarrolla en todo el país". Según analizaban, aún no estaban preparados "para una confrontación de ejércitos regulares, sino para la de un ejército revolucionario irregular con el ejército oficial". Por ello, a la vez que "el Plan General trata de la toma de bases militares, poblaciones y otros objetivos de conformidad con el nuevo modo de

operar, la misión de las columnas y compañías móviles […] es provocar el desplazamiento del Ejército Oficial, desgastarlo, desmoralizarlo y paralizar la vida económica del país […] El golpeteo de las fuerzas guerrilleras se hará en dirección a las ciudades”[46]. Las Farc esperaban consolidar su fuerza principal sobre la cordillera oriental, y con un ejército disperso por todo el país entrar a Bogotá. Más de cinco mil miembros de autodefensas regulares comunistas se asentarían en dicha cordillera para apoyar el avance de unos quince mil guerrilleros por la montaña hacia Bogotá, desde Putumayo hasta la Sierra Nevada del Cocuy. Al tiempo se produciría la toma de Villavicencio, Florencia y Mocoa para aislar a la capital de los Llanos, retaguardia estratégica de las Farc[47]. En ese momento, “las Farc y otras fuerzas revolucionarias que hayan participado en la contienda asumen el poder. Se convocará a un plebiscito para que al pueblo se le dé una nueva constitución y una serie de leyes democráticas […] Si los Estados Unidos intervienen militarmente […] la guerra asumiría otro carácter: de guerra civil a guerra patria”[48]. Tomado el control de Bogotá, harían ‘ajusticiamientos’ de líderes de oposición, e iniciarían la duplicación de su fuerza hasta sesenta mil guerrilleros[49].

En 1990, las Farc y el ELN siguieron ensayando la combinación de sus fuerzas para atacar al Ejército. En la madrugada del 23 de febrero, tres vehículos llegaron hasta el área de unas colinas que rodeaban la base militar de Segovia, Antioquia. La inteligencia militar sabía que en algún momento se podría producir un ataque, pero no cuándo, dónde, ni cómo. Algunos individuos con trajes de policía y de civil bajaron de los autos y se instalaron en posiciones de tiro. En minutos, la base estaba siendo atacada por todos los flancos con armas automáticas y explosivos. Sin trincheras ni fortificaciones para defender la base, la acción guerrillera logró su cometido: además de la muerte de un suboficial y seis soldados, las tropas sufrieron el secuestro de doce soldados[50]. En muchas de estas acciones conjuntas, los guerrilleros gritaban a los soldados emboscados que les perdonaban la vida, pero que se rindieran y entregaran su armamento[51].

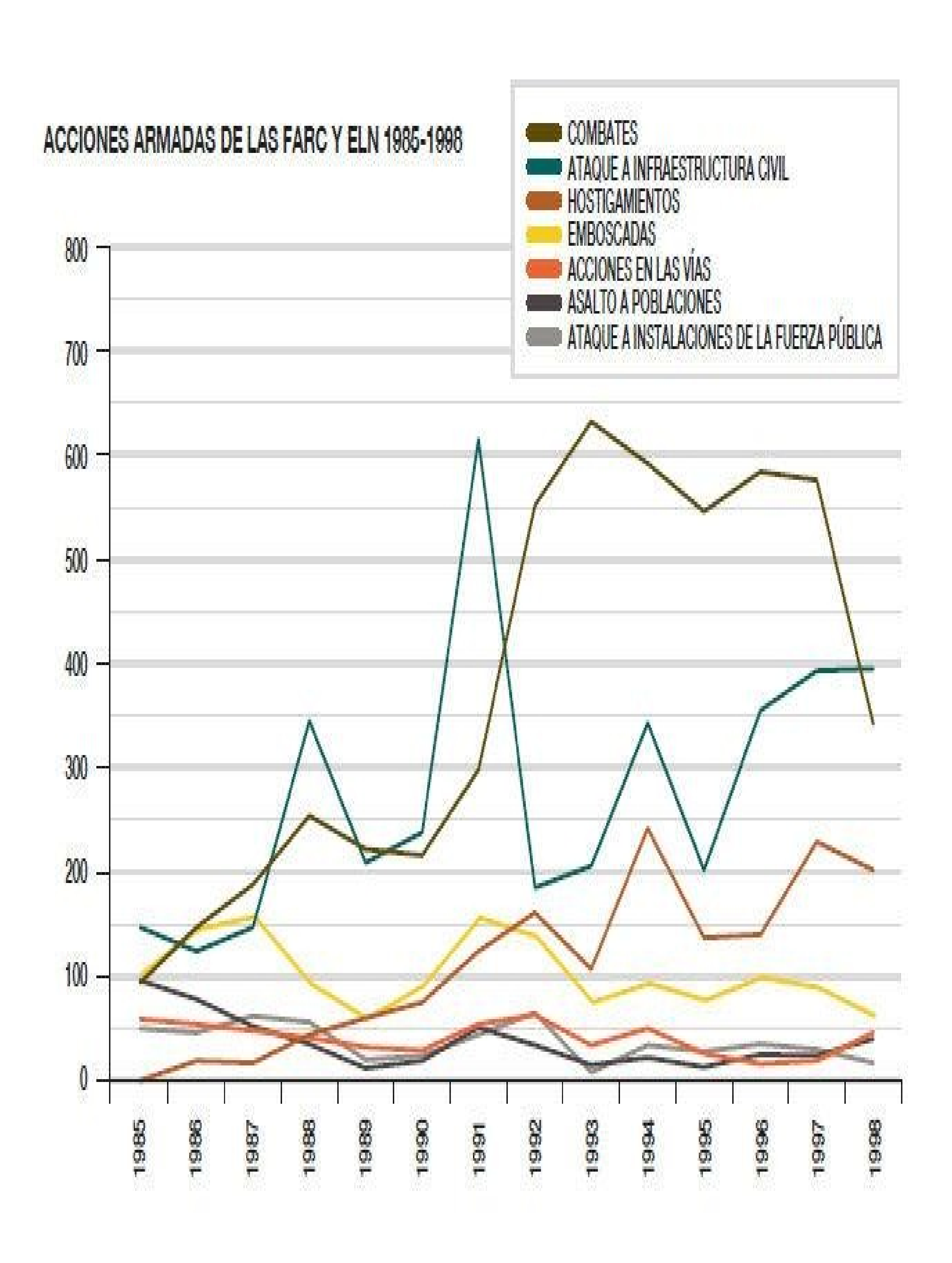
Pero no todos estos ataques tuvieron éxito. En noviembre, las Farc y el ELN intentaron tomarse Tarazá, Antioquia, para lo cual concentraron cerca de cuatrocientos guerrilleros en la zona. De forma simultánea, un grupo atacó la estación de policía del pueblo, el palacio municipal y la base militar, mientras otro atacaba la estación de policía de Cáceres, no lejos de allí. Semanas antes, las tropas habían pasado por un curso de reentrenamiento y como pocas en el país tenían la moral en alto y la táctica fresca para repeler el ataque. Con el apoyo de dos helicópteros artillados y una compañía de contraguerrilla, las tropas de

infantería lograron forzar la retirada guerrillera, y dar de baja a veinte de sus integrantes. En aquel ataque también murieron nueve soldados[52].

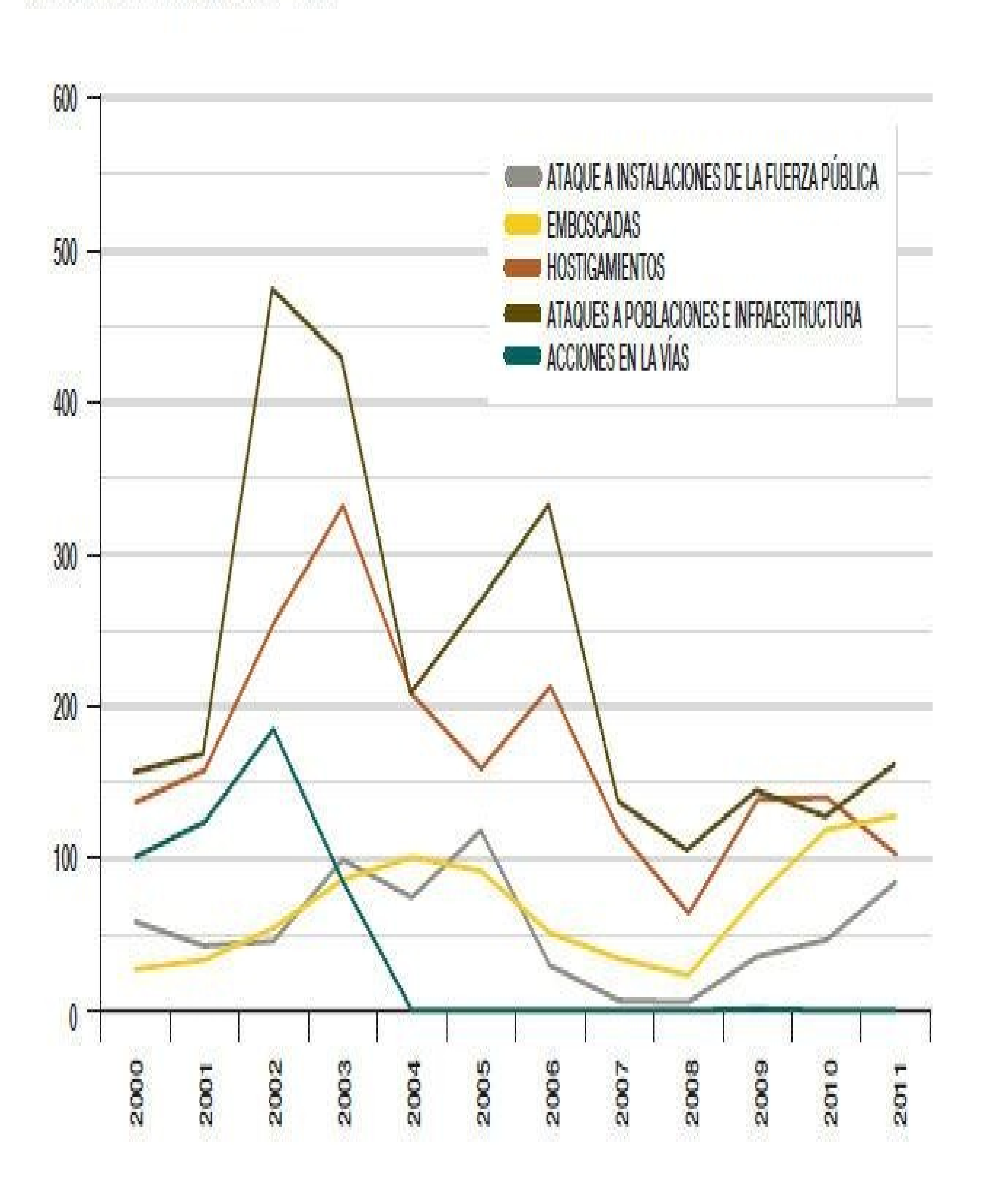
Gráfico 13.

ACCIONES ARMADAS FARC Y ELN 1988-2012

Después de 2002, las Farc escalaron sus ataques a poblaciones, a la infraestructura civil y a puestos militares, así como el uso de emboscadas y hostigamientos. A partir de 2005, es notable el declive de su capacidad armada.

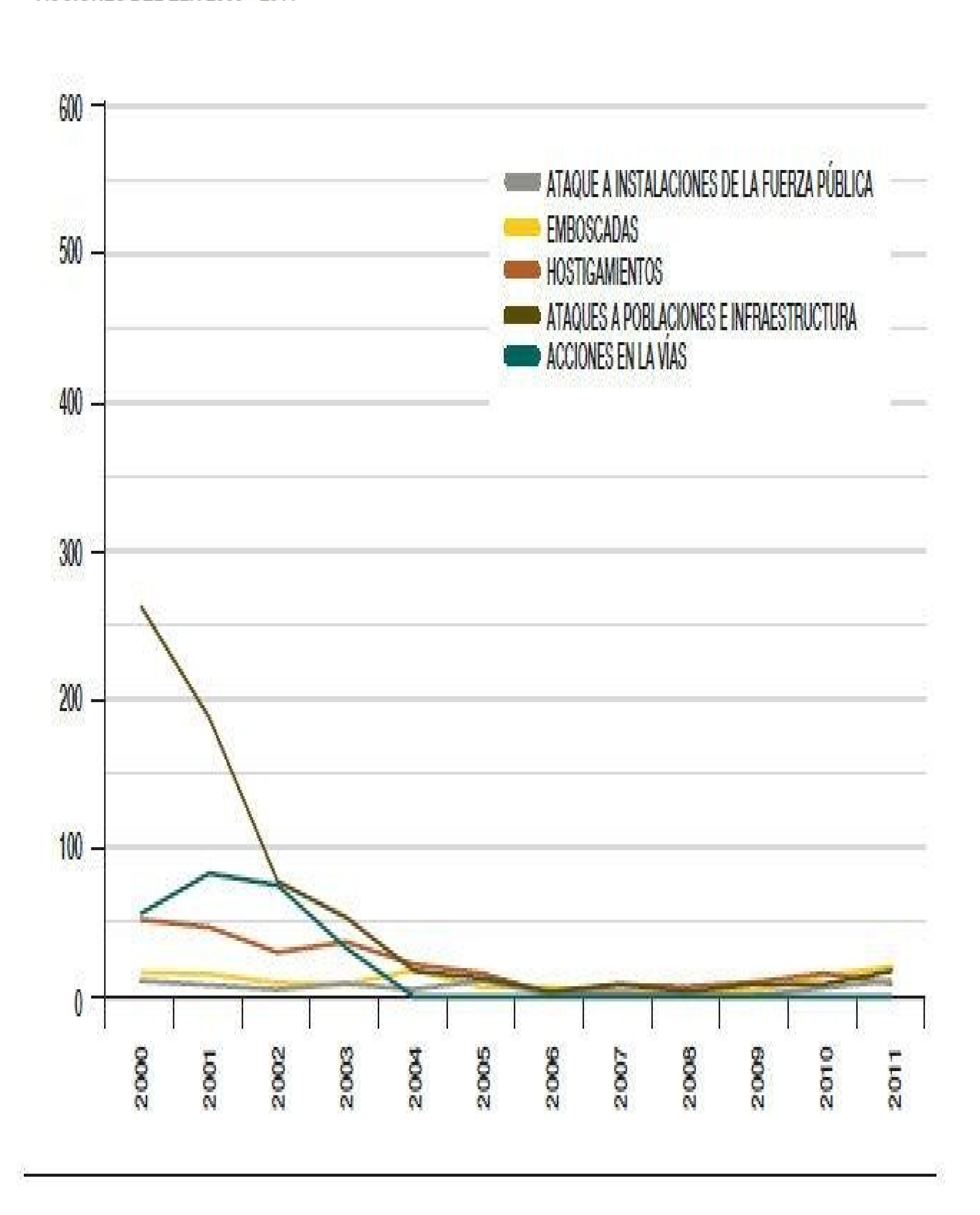


ACCIONES ARMADAS DE LAS FARC Y ELN 1985-1998
COMBATES
ATAQUE A INFRAESTRUCTURA CIVIL
HOSTIGAMIENTOS
EMBOSCADAS
ACCIONES EN LAS VÍAS
ASALTO A POBLACIONES
ATAQUE A INSTALACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998



ACCIONES DE LAS FARC 2000 - 2011
600
500
400
300
200
100
0
ATAQUE A INSTALACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA
EMBOSCADAS
HOSTIGAMIENTOS
ATAQUES A POBLACIONES E INFRAESTRUCTURA
ACCIONES EN LA VÍAS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ACCIONES DEL ELN 2000 - 2011



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa y Otero, Diego 2007. Las cifras del conflicto colombiano.Bogota: Indepaz.

Antes de intentar la toma de una base militar, la nueva forma de operar de las Farc sugería primero la aplicación del llamado ‘asedio diluido’. Mediante este tipo de operaciones, una fuerza diluida en grupos pequeños golpeaba incesantemente tropas más numerosas, incluso instalaciones militares, para “producir en el adversario una sensación de asfixia que contribuiría a acelerar el desplome moral de los mandos y tropas […] Este modo de operar exigía un elevado grado de moral en los guerrilleros, una sólida preparación política y combativa y una red de base firme y abnegada”. La idea básica era “obligar al enemigo a pasar a la defensiva [y] someter a las guarniciones aisladas a intenso desgaste moral y material, coordinado con una profunda acción política, tanto en la tropa como en la población”[53].

El asedio diluido permitía, una vez dispersa la tropa, aplicar el principio de masa, acumulando poder de fuego contra una unidad aislada hasta “causarle grandes bajas”. El objetivo final de impactar psicológicamente a los soldados y la población era el de “debilitar la voluntad de lucha” y “fomentar las tendencias a desligar su suerte de la causa perdida del gobierno oligárquico y al servicio del imperialismo”. Para ello, las Farc disponían que los soldados capturados fueran “enviados al campo enemigo, tratados con todo respeto y auxiliados desde el punto de vista sanitario. Además, se les plantea los motivos de la lucha y se responsabiliza de la sangre derramada al Gobierno por su explotación y sometimiento al imperialismo. Incluso a los oficiales que no sean criminales se les debe poner en libertad y en muchos casos conservando su arma de cintura”[54].

El 9 de enero de 1991 por la noche, el Mono Jojoy desplegó a 150 hombres con fusiles, lanzacohetes y armas cortas, y a unos cincuenta milicianos, contra una base militar ubicada en el cerro Girasol. Las Farc usaron reservistas del Ejército para tener información sobre la base, y vengarse de la toma de La Uribe. Allí funcionaba una estación repetidora de enlace para la Cuarta División, con sistemas de defensa perimétrica, incluyendo zanjas de arrastre, campos minados, minas claymore y tarjetas de tiro para ametralladora. En medio de neblina y oscuridad, la defensa fue fútil. Usando artefactos ensordecedores, causaron pánico y desconcierto en las tropas, que recibían la lluvia de fuego de los

guerrilleros y se sentían acorraladas contra el borde del precipicio del cerro. Murieron un suboficial y un soldado, fueron secuestrados diecisiete militares, y las Farc se apoderaron de abundante material de guerra. Un soldado cubierto vio dónde los guerrilleros arrastraban sus bajas y pudieron contabilizarlas en unos veintiséis caídos[55]. Según el Ejército, el Mono Jojoy "se desespera y no mide las consecuencias de una acción, por cuanto es impulsivo y no está 'enseñado a perder'. Esta situación se reflejó durante la toma a la Base Militar de Girasol en enero de 1991, donde fueron dados de baja más de 60 terroristas, por lo cual fue sancionado algún tiempo por el secretariado"[56].

La toma del cerro Girasol inauguró la gran ofensiva que las Farc desataría contra tropas y bases militares durante el resto de la década.

La paz de la Coordinadora

Mientras las Farc se desataban, sus socios de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar apuntaban aún a seguir en la acumulación de fuerzas, al amparo del diálogo con el Gobierno. Tras tomarse la embajada de Venezuela en Bogotá, las Farc, el ELN y el EPL aseguraban que "nos trasladamos a la ciudad de Bogotá, luego de afrontar inmensos riesgos, para facilitar la iniciación de las conversaciones"[57]. El Gobierno accedió a dialogar primero en Cravo Norte, Arauca, y luego en Caracas. Las reuniones de 1991 del Gobierno y la Coordinadora se concentraron sobre todo en discutir un cese del fuego y hostilidades y el combate con los ejércitos privados, ya renombrados por las partes como 'paramilitares'[58]. En las cuatro rondas, entre junio y noviembre, se descartó definitivamente la presencia de estas guerrillas en la Asamblea Constituyente, aún en curso, y las discusiones de verificación del cese entraron en un punto muerto. El intento de golpe de Estado en Venezuela de febrero de 1992 obligó a las partes a sentarse entonces en Tlaxcala, México, donde las discusiones giraron alrededor de los grupos de autodefensa, el secuestro y la protección a la población civil[59].

Desde 1986, el ELN se propuso crear un plan táctico de toma del poder de alcance nacional, controlado estratégica y financieramente por su Dirección Nacional y el Comando Central, el cual empezó a desarrollarse en firme en 1989. En ausencia de una inminente insurrección de las masas, este plan implicaba la creación de unidades a semejanza de un ejército regular para combinar la guerra de movimientos con la de guerrillas, y así intentar derrotar a las Fuerzas Militares[60].

Dibujo 5.

ATAQUE DE FARC AL CERRO GIRASOL

1991

El ataque al cerro Girasol de 1991 demostró la efectividad de la nueva forma de operar de las Farc. Los soldados quedaron atrapados entre el filo de la montaña y las oleadas de guerrilleros que atacaban por la única vía de acceso.

Fuente: Comando Séptima Brigada. Caso táctico 1/91.

Era claro que su mayor fuerza militar se concentraba en Arauca. En mayo de 1991, una compañía de contraguerrilla decidió pernoctar muy cerca del casco urbano de Arauquita. El comandante compró un cerdo y escucharon por radio un partido de fútbol. El comandante decidió quedarse en el mismo sitio una segunda noche, y unos cien guerrilleros atacaron. El resultado: un suboficial y diez soldados murieron[61].

Mientras acumulaba su fuerza militar, el ELN se concentró en aprovechar la elección popular de alcaldes, decidida en 1986, para cooptarlos y hacerlos parte de su estrategia de toma del poder. Según el Cura Pérez, su comandante, para finales de esa década "ya hay alcaldes que antes de presentarse nos consultan, planifican con nosotros, y después son elegidos por la comunidad. Elegidos oficialmente, pero ya de acuerdo con nosotros. En otras zonas, mientras se elegía oficialmente a los alcaldes, la comunidad estaba eligiendo a la par sus cabildos alternativos. En eso estamos. En eso, que es crear la democracia". A tal declaración, Gabino añadía: "Por eso decimos que en algunas zonas de Colombia los revolucionarios ya hemos tomado el poder. Y que lo estamos construyendo, preparando así el día del triunfo"[62]. Con ello, el ELN ponía en marcha su plan de crear un embrión de Estado mediante la promoción del 'poder popular', entendido como una forma de autoorganización no capitalista de la sociedad en lo económico y lo político. El poder popular le permitiría al ELN gobernar, y para ello no se conformarían con ejercer veeduría sino control de las administraciones municipales en donde hacían presencia. Entre 1988 y 1992, el ELN secuestró a medio centenar de alcaldes en sus áreas de influencia, algunos de los cuales fueron víctimas mortales de sus 'juicios populares'[63].

Dibujo 6.

ATAQUE DE ELN A PATRULLA EN ARAUQUITA

1991

PUESTO SALUD
LA ESMERALDA
ESCUELA
CASERIO LOS CORROS
FINCA

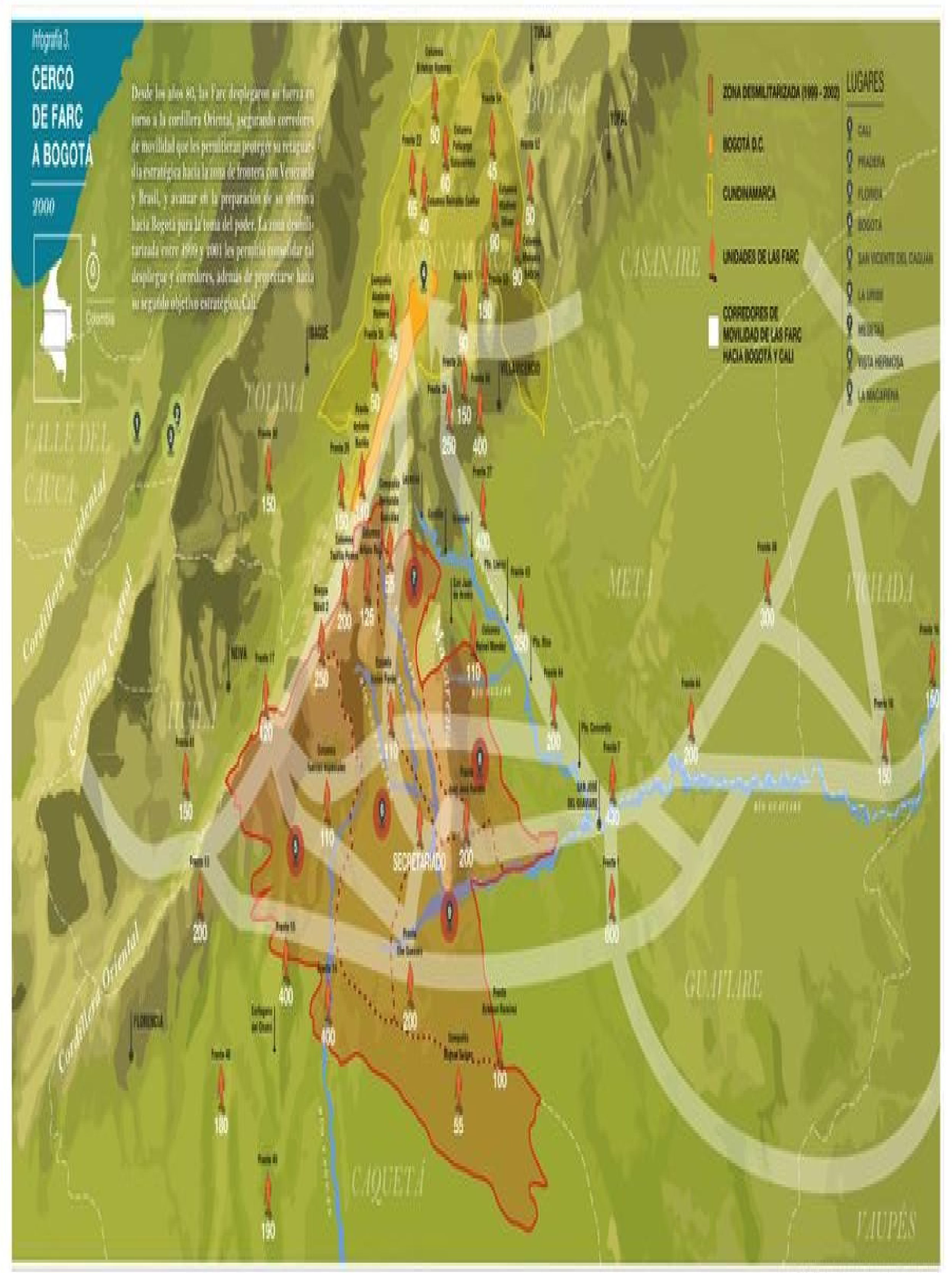
CONVENCIONES
ENEMIGO
CERCA
CACAOTAL
PALMERAS
HERIDOS
MUERTOS
CAMINO FINAL

El poder militar del ELN gravitó desde finales de los años 80 alrededor del Frente de Guerra Oriental. El ataque a una patrulla en Arauquita, en 1991 demostraba su capacidad de fuego y control sobre esta zona del país.

Fuente: Comando Operativo Dos. Caso táctico 13/91.

La facción del EPL que decidió seguir en armas continuó operando en Cauca, Antioquia, Valle, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, con unos 120 combatientes[64], luego de recibir nuevos golpes en los campamentos del área de Tierralta en 1991, y de Necoclí en 1992[65]. Al tratar de compensar su debilidad militar con acciones de gran impacto, el EPL decidió secuestrar al ex ministro Argelino Durán en marzo de 1992, quien murió pocos días después en cautiverio. “Su retención”, justificaba el EPL, “la consideramos por razones eminentemente políticas un acto legítimo de guerra. […] Rechazamos del gobierno nacional la utilización del fallecimiento por razones naturales de Durán Quintero como un pretexto para ejercer presiones indebidas sobre la delegación de la Coordinadora en México”[66]. Pese a este comunicado, las Farc comentarían después que “nadie pudo entender cómo, cuando la Coordinadora dialogaba en México, uno de sus integrantes secuestraba personas en Colombia, disfrazando con motivaciones políticas inocultables pretensiones económicas. Este comportamiento no solo le quitó piso creíble a la Coordinadora, sino que sirvió de pretexto al gobierno para abandonar la mesa y modificar las reglas del juego”[67]. Para junio, el Gobierno dio el portazo definitivo a los diálogos con la Coordinadora[68]. El único camino era la guerra total.

La Estrategia Nacional contra la Violencia, presentada por el Gobierno en 1991, recogía el espíritu del Plan Nacional de Rehabilitación de los años anteriores de articular inversión social y presencia estatal en las regiones afectadas por la violencia, pero esta vez dándole una importancia mucho mayor al componente militar.


Infografía 3.
CERCO DE FARC A BOGOTÁ
2000
Colombia
Desde los años 80, las Farc desplegaron su fuerza en torno a la cordillera Oriental, asegurando corredores de movilidad que les permitieran proteger su retaguardia estratégica hacia la zona de frontera con Venezuela y Brasil, y avanzar en la preparación de su ofensiva hacia Bogotá para la toma del poder. La zona desmilitarizada entre 1999 y 2001 les permitió consolidar tal despliegue y corredores, además de proyectarse hacia su segundo objetivo estratégico, Cali.
ZONA DESMILITARIZADA (1999 - 2002)
BOGOTÁ D.C.
CUNDINAMARCA
UNIDADES DE LAS FARC
CORREDORES DE MOVILIDAD DE LAS FARC HACIA BOGOTÁ Y CALI
LUGARES
CALI
PRADERA
FLORIDA
BOGOTÁ
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
LA URIBE
MESETAS
VISTA HERMOSA
LA MACARENA
TUNJA
BOYACÁ
CUNDINAMARCA
CASANARE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
META
VICHADA
GUAVIARE
CAQUETÁ
VAUPÉS
Cordillera Occidental
Cordillera Central
Cordillera Oriental
SECRETARIADO

Pese a ello, el impulso a los Consejos de Seguridad en las regiones, presididos por las autoridades civiles, se prestaba, según los militares, "para injerencia de funcionarios públicos en las decisiones de operaciones y movimientos de tropas, que pueden crear dificultades en la autonomía de mando", aunque confiaban que la autonomía militar para el desarrollo de operaciones continuaría "sin variación alguna"[69]. En su concepto, "es importante establecer el principio republicano de que las Fuerzas Armadas están sujetas al poder civil, pero […] las autoridades civiles no pueden limitar las acciones militares contra la subversión"[70].

La llegada de un ministro de Defensa civil, después de varias décadas de ministros militares, había contribuido a agilizar el cabildeo por recursos ante el Congreso, con lo que fue posible continuar con la "profesionalización progresiva" de las Fuerzas Militares. Esta profesionalización significaba, entre otras cosas, nivelación salarial y la creación de nuevas brigadas móviles y compañías especiales de Ejército y Armada, que sin embargo los militares no consideraban suficientes para contrarrestar el nivel de amenaza guerrillera[71].

Si bien el Ejército también asestó en esos meses algunos golpes tácticos, como emboscadas y contraataques[72], era claro que el accionar de las guerrillas ponía a las unidades militares al límite y "en estado crítico de total comprometimiento y limitación de unidades de reacción"[73] por la falta de disponibilidad de tropas. Luego del fin de los diálogos de paz con la Coordinadora Guerrillera en 1992, el ministro de Defensa prometió derrotar militarmente a las guerrillas en año y medio[74]. Pero poco a poco fue quedando claro que la iniciativa militar estaría pronto del lado de la insurgencia.

Notas

[1] Comando del Ejército 1989b. Orden de Comando 005, 3 de febrero, 1.

[2] Ibídem, 3-5.

[3] Gobierno Nacional, Partidos Políticos M-19 e Iglesia Católica 1990. Acuerdo político. 9 de marzo.

[4] Un total de 754 740 votos, el 12,7 % del total.

[5] La AD-M19 obtuvo el 27,3 % de los votos (950 174). De setenta curules, la lista de la ADM-19 obtuvo diecinueve y la Unión Patriótica dos. En contraste el Partido Liberal obtuvo veinticuatro, el Partido Conservador nueve, y el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez (conservador) obtuvo once. El Movimiento Estudiantil obtuvo una, el Movimiento Cristiano Evangélico dos, y los indígenas dos más.

[6] Acuerdo final firmado en la vereda Don Gabriel, municipio de Ovejas, Sucre, el 28 de diciembre de 1990.

[7] Acuerdo final firmado en Bogotá el 15 de febrero de 1991. Los miembros del EPL se desplazaron a Apartadó, San Pedro de los Milagros, Montería, Pereira, Villa del Rosario, Cúcuta y Cartagena para la dejación de armas.

[8] Acuerdo final de paz firmado en Caldono, Cauca, el 17 de mayo de 1991.

[9] Con esta negociación se desmovilizaron miembros de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, de las Milicias Metropolitanas de Medellín y de las Milicias Independientes del Valle de Aburrá.

[10] Villarraga, Álvaro 2013. Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia. Colombia Internacional 77, 117.

[11] En 1991, casi mil miembros de las autodefensas de la Casa Castaño, del Magdalena Medio y Cundinamarca también se desmovilizaron. Para un análisis sobre el proceso de reintegración de la época, véase Varios autores 2000. De las armas a la democracia, tomo II. Bogotá, Ministerio del Interior, Instituto Luis Carlos Galán para el Desarrollo de la Democracia; y Turriago, Gabriel y Bustamante, José María 2003. Estudio de los procesos de reinserción en Colombia 1991-1998. Bogotá: Alfaomega y Fundación Ideas para la Paz.

[12] Aunque con la sentencia 1562 del 5 de marzo de 1987 de la Corte Suprema suspendió los Consejos de Guerra a civiles, la Constitución de 1991 se encargó de enterrarlos definitivamente.

[13] Constitución Política de 1991, artículo 213.

[14] Comando del Ejército 1990a, op. cit.

[15] Presidencia de la República 1991. Decreto 2615, 19 de noviembre. Publicado en Diario Oficial 40.168, 20 de noviembre. Este decreto además regulaba los Consejos de Seguridad en los municipios, departamentos y regiones, presididos por las autoridades civiles.

[16] Comando del Ejército 1990c. Directiva 300-6, apéndice 1 al Anexo A Organización del Ejército.

[17] Área 1: Norte de Santander, Cesar, Noreste de Boyacá y Arauca; Área 2: Urabá, Córdoba y Sur de Sucre; Área 3: Magdalena Medio; Área 4: Bajo Cauca; Área 5: Huila, Caquetá, Meta Noreste y Norte del Guaviare; Área 6: cordillera central al sur del Nevado del Tolima. Véase Comando del Ejército 1990b, op. cit.

[18] En 1990, el número de regulares se redujo en 4.607 hasta un total de 76.867; ese mismo año, el número de voluntarios se incrementó en 2.676 hasta un total de 6.384. Véase Comando del Ejército 1990c, op. cit.

[19] Véase Comando del Ejército 1990c, op. cit.

[20] Comando Primera Brigada 1992. Caso táctico 6/92 BR-1. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 185-195.

[21] Comando Quinta Brigada 1991. Caso táctico 3/91 BR-5. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 161-169.

[22] Comando Fuerza Fluvial Flotilla del Oriente 1991. Caso táctico 1/91 CFZF (ARC). En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 199-217.

[23] Comando del Ejército 1990b, op. cit., 12, 18.

[24] Un nuevo impuesto decretado en febrero de 1991 ayudaría a financiar el plan de emergencia energético-vial. En 1992, existían 199 puntos críticos del sector eléctrico atendidos por cuatro compañías de contraguerrilla en el noreste de Antioquia, Chivor, Valle del Cauca, Huila y la costa Atlántica. Véase Comando del Ejército 1988b. Oficio 41237, 15 de noviembre. Control Redes Energía; y Pardo Rueda, Rafael 1992. Saludo del ministro de Defensa Nacional a los honorables senadores y representantes. En Memoria al Congreso 1991-1992. Bogotá: Ministerio de Defensa Nacional, 40-41.

[25] El Ejército alertaba en 1991 sobre cifras “alarmantes” de incendios y asaltos a carreteras. Véase Comando del Ejército 1990d. Oficio 45925, 11 de abril. Seguridad vial y modalidad operativa; y Comando Séptima Brigada 1991a. Oficio 1195. Villavicencio, 30 de enero.

[26] Para 1991 había doce unidades antiextorsión y secuestro (Unase) dirigidas por Ejército. Véase Comando del Ejército 1989c. Oficio 45146, 10 de febrero, Acciones contra secuestro; y Comando Cuarta División 1991. Oficio 3556. Villavicencio, 24 de junio.

[27] En 1992, existían 166 puntos críticos del sector hidrocarburos atendidos por seis unidades de contraguerrilla y dos de la Armada. Véase Ministerio de Defensa 1989, op. cit., 5; y Pardo Rueda, Rafael 1992, op. cit., 40.

[28] Aunque la Policía Nacional estaba encargada de la lucha contra los carteles, el Plan Tormenta de 1992 involucró a más de seiscientos soldados de tres batallones y tres unidades especiales y de contraguerrilla en el planeamiento y desarrollo de una operación para capturar a Pablo Escobar. Adicionalmente, el Ejército apoyaba las operaciones antidroga en el sur del país con compañías antinarcóticos. Véase Comando Cuarta Brigada 1992. Plan de operaciones Tormenta. Oficio 9534, Medellín, 26 de julio; y Comando Tercera Brigada 1992. Directiva Operacional Transitoria 20/92. Oficio 1455. Cali, 12 de agosto.

[29] El Ejército incluso pensaba que Jacobo Arenas, número dos de las Farc, podría estar en dicho campamento.

[30] Comando Séptima Brigada 1990. Caso táctico 5/90 BR-7. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 301-312.

[31] Estado Mayor Cuarta División 1990. Personal participante en la Operación Colombia. Villavicencio, 18 de diciembre.

[32] Comando del Ejército 1990e. Documentos de preparación de Operación Colombia.

[33] Comando del Ejército s.f. Ubicación Farc, 34.

[34] Comando Batallón de Infantería Veintiuno 1991. Oficio 4361. Granada, 26 de diciembre, 3.

[35] Los detalles de esta operación fueron parafraseados. Véase Comando del Ejército 2002a. Oficio 083509. Experiencias Operación Colombia. Bogotá, 20 de marzo.

[36] Farc-EP 1989. Pleno del Estado Mayor, La Uribe, 10-17 de mayo.

[37] Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Estudio alcances y desarrollos estrategia Farc, 24 de enero de 1992.

[38] El Ejército estimaba que Farc estaban conformadas en 1992 por unos 5.500 guerrilleros distribuidos en cuarenta y tres frentes. Véase Comando General de las Fuerzas Militares 1992, op. cit., 6, 9.

[39] Ibídem, 6.

[40] Ibídem, 15.

[41] Ibídem, 15.

[42] Las Farc analizaban con detalle la reorganización de las Fuerzas Militares en Divisiones, la que calificaban de corrección a una falla estructural en su conducción de la guerra. Véase Farc-EP 1989, op. cit.

[43] Como estrategia urbana, el Pleno de Comandantes del 17 de mayo de 1989 ordenó "organizar una vasta red de juntas comunales, de comités de usuarios, de sindicatos, de juntas de todo tipo, de deportes entre la juventud y uniones de lucha a su lado; organizar la reunión bolivariana del pueblo, cuyas organizaciones de bases son los Núcleos Bolivarianos; la organización partidaria con el nombre de Uniones Solidarias para la actividad clandestina; las Milicias Bolivarianas bajo la dirección de los frentes y las normas de autodefensas regulares, cambiándoles el nombre más no el contenido; hay que ayudar a influir sin hacer ostensible el desarrollo y trabajo de la Unión Patriótica". Véase Farc-

EP 1989, op. cit.

[44] Comando Batallón Palacé 1991. Análisis de documentos 1. Buga, 26 de marzo.

[45] Comando del Ejército 1986c. Oficio 40330. 16 de mayo. Seguridad de personal e instalaciones.

[46] Farc-EP 1982d. VII Conferencia Nacional Guerrillera. Planteamiento estratégico. Mayo 4-14; y Farc-EP 1989, op. cit.

[47] Comando Cuarta División 1992. Análisis Plan Estratégico Farc.

[48] Farc-EP 1989, op. cit.

[49] Para esta ofensiva, las Farc calculaban que requerirían de unos dieciséis mil millones de pesos. En la tercera fase, construirían un ejército regular para la ‘defensa de la revolución’ con 120 mil efectivos, a un costo de 32 mil millones de pesos. Véase Comando Cuarta División 1992. Análisis Plan Estratégico Farc.

[50] Comando Décimo Cuarta Brigada 1990. Caso táctico 1/90 BR-14. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 57-66.

[51] Comando Cuarta Brigada 1990a. Caso táctico 21/90 BR-4. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 149-159.

[52] Comando Cuarta Brigada 1990b. Caso táctico 5/90 BR-4. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 73-83.

[53] Farc-EP 1987b. Asedio diluido.

[54] Ibídem.

[55] Comando Séptima Brigada 1991b. Caso táctico 1/91 BR-7. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 85-95.

[56] Comando del Ejército 2002, op. cit., 1-2.

[57] Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 1991. Comunicado.

[58] Gobierno Nacional y Coordinadora Guerrilla Simón Bolívar 1991. Declaración. Caracas, 25 de junio.

[59] Justo antes, la Coordinadora Guerrillera envió una carta al Congreso con fecha

25 de enero de 1992 en la que proponía tres espacios de 'encuentros de la nación' para hablar del modelo económico, recursos naturales y energéticos, la función social del Estado, corrupción, Fuerza Pública, paramilitares, derechos humanos, impunidad, democracia, el tema agrario, la unidad nacional y la reparación a las víctimas.

[60] Esta es una reedición de la idea de crear un 'ejército revolucionario' junto con otras organizaciones guerrilleras. Como complemento, se armarían 'también autodefensas de masas' como unidades de apoyo civiles.

[61] Comando Operativo Dos 1991. Caso táctico 13/91 CO-2. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 99-107.

[62] López, María 1989. Camilo camina en Colombia. México: Editorial Nuestro Tiempo, 222.

[63] El Ejército reporta secuestro de alcaldes en Cauca, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Antioquia, Chocó, Valle y Huila. Véase Comando Quinta Brigada 1992. Oficio 0403. Bucaramanga, 29 de enero; y Comando Segunda Brigada 1995a. Oficio 0100. Valledupar, 21 de enero.

[64] Comando del Ejército 1993a. Apreciación grupo disidente del EPL. Línea Francisco Caraballo.

[65] Comando Brigada Móvil Uno 1990, op. cit., 313-325. Véase también Comando Séptima Brigada 1992. Caso táctico 7/92. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y

publicaciones de las Fuerzas Militares, 221-227.

[66] EPL 1992. Comunicado. Montañas de la Guajira, 2 de abril.

[67] Farc-Ep 1993a. Informe a la VIII Conferencia de las Farc-Ep. Comandante Jacobo Arenas. Estamos Cumpliendo.

[68] En comunicado conjunto, Gobierno y la Coordinadora anunciaron que los guerrilleros regresaban a Colombia. Véase Gobierno Nacional y Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 1992. Comunicado, 29 de junio.

[69] Comando Cuarta División 1991, op. cit., 5.

[70] Comando Cuarta División 1991, op. cit., 6.

[71] Comando Cuarta División 1991, op. cit., 5.

[72] Comando Séptima Brigada 1992. Caso táctico 7/92 BR-7. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 221-227.

[73] Comando Séptima Brigada 1991c. Oficio 3569. Villavicencio, 18 de abril.

[74] A finales de 1993, el Gobierno logró la aprobación de la Ley 104 del 30 de diciembre para crear incentivos a las desmovilizaciones individuales y colectiva de guerrillas.

PARTE IV

1992-2002

GUERRA TOTAL



Luego de la toma de las Farc a la base militar del cerro Patascoy, en 1997, un grupo de soldados llevaba a cabo operaciones militares en medio de una densa niebla. / Foto: James Arias. Archivo El Tiempo.

Capítulo XI

Choque de estrategias

La caída de la Unión Soviética y el bloque comunista en Europa del Este coincidió con un momento de crecimiento militar y financiero de las Farc y el ELN, y de declive del EPL y el M-19. Las discusiones internas que reflejan los

documentos de las Farc y el ELN, a principios de los años noventa, reflejan que si bien la crisis ideológica mundial del socialismo no les fue indiferente, pusieron todos sus recursos disponibles para garantizar la cohesión de sus grupos, particularmente mediante la intensiva instrucción militar, política e ideológica, y la reformulación de su discurso, más en términos de un socialismo todavía por construir y en pro de la defensa de principios nacionalistas.

Desde 1978, las Farc habían iniciado una nueva fase de acumulación de fuerzas —en número de integrantes—, de refinamiento táctico-militar —con la puesta en marcha de la nueva forma de operar—, estratégico — con el planteamiento y ajuste permanente de su plan de toma del poder— e ideológico —al reformular su discurso socialista-nacionalista y su plan de entrenamiento técnico y político de su tropa—, que empezó a mostrar resultados tangibles hacia 1991. Desde entonces, los archivos militares describen en detalle casi una década de golpes de gran impacto simbólico y estratégico asestados a policías y militares que revelan no solo los resultados de esta fase de preparación guerrillera, sino el tipo de falencias en las Fuerzas Militares que los hicieron posibles.

Una de las fallas estructurales del Estado en esos años fue la ambigüedad de sus representantes a la hora de resolver uno de los debates más cruciales desde el punto de vista estratégico del conflicto: cuál debía ser el límite y las formas de la colaboración de la población civil con autoridades civiles y Fuerzas Militares en el contexto del conflicto. Divididos entre quienes apoyaban y quienes rechazaban la posibilidad de que los civiles pudieran armarse para la guerra, abrieron un boquete para profundizar el cisma entre el alto mando y algunos miembros de la institución militar, y consolidar las pretensiones de legitimidad social que los ejércitos privados, ahora denominados autodefensas, se abrogaban

para justificar su accionar.

En 1992 las Farc ya habían logrado ubicar nueve frentes en la cordillera oriental, con presencia en las carreteras entre Neiva y Florencia, Bogotá y Villavicencio, y Sogamoso hasta Yopal. Además, habían recuperado su presencia en la zona de La Uribe, cerca de sus campamentos bombardeados en 1990, acumulando un total de 48 frentes[1]. Además, ya habían retomado el plan de formación de comandantes interrumpido por la ofensiva de las Fuerzas Militares[2].

Rotos los diálogos, la escalada de violencia guerrillera se extendió por once departamentos y el Gobierno se vio forzado a decretar el Estado de Conmoción Interior[3]. Con su decreto, el Gobierno puso precio por las cabezas de los líderes de las Farc, el ELN y el EPL, y lanzó una campaña de propaganda en todo el país para fomentar las delaciones[4].

La violencia afectó no solo a los combatientes, sino, principalmente, a civiles, entre ellos políticos y excombatientes. De los más de mil miembros de partidos políticos asesinados, entre 1985 y 1992, cerca del 60 % correspondían a militantes de la Unión Patriótica[5]. Para la Defensoría del Pueblo "aunque muchas masacres en Colombia tienen diverso origen, en los últimos años parecieran tener la finalidad de intimidar y castigar a miembros, simpatizantes o a los supuestos partidarios de la oposición. Estas masacres son realizadas por grupos de extrema derecha, paramilitares o sicarios al servicio de los mencionados grupos". Por su parte, el Movimiento Esperanza Paz y Libertad, que reunía a los desmovilizados del EPL perdió su personería jurídica por no lograr más de cincuenta mil votos en 1991, y para el año siguiente ya contaba con más de cien asesinados[6]. Según la Defensoría del Pueblo, "los asesinatos son atribuidos en una gran mayoría a una campaña de exterminio ordenada por el máximo líder de la disidencia del EPL, Francisco Caraballo, quien habría firmado un acuerdo con los comandantes de las Farc y el ELN para aniquilar a los exintegrantes de grupos insurgentes que firmaron los acuerdos con el Gobierno"[7].

El ELN empezó a crecer vertiginosamente a lo largo de los oleoductos en construcción y a prosperar en las zonas de riqueza minera de Antioquia, Bolívar, Cesar y La Guajira. En 1992, tanto las Farc como el ELN empezaron a hacer presencia activa en la región del Cerrejón, en La Guajira. "Han estado efectuando campañas de proselitismo y adoctrinamiento con el fin de ganar nuevos adeptos jóvenes que se unan al grupo para infiltrar las compañías explotadoras de carbón". La población de la zona "ha perdido la confianza en las

instituciones, debido a que estas no han mostrado un comportamiento ejemplar y en algunos casos la corrupción se ha perfilado dentro de los mismos”[8]. En febrero de 1992, las Farc y el ELN atacaron tropas y emboscaron a tres vehículos que cuidaban el Oleoducto Central de Colombia. Lo hicieron aprovechando el “absoluto dominio de la población civil en el área de combate” y la “excelente inteligencia sobre propias tropas”[9].

La captura de Francisco Galán[10] en 1992, en Bucaramanga, supuso un golpe para el ELN, pero no uno que pudiera descarrilar sus planes. “Sabemos que guardas con celo de artista los secretos más sagrados”, decía una carta del ELN enviada a su celda. “Comandante y amigo: desde ese calabozo mal oliente seguimos recibiendo tus órdenes”[11]. Galán portaba un mapa detallado de la infraestructura petrolera del país. El Ejército venía preparándose desde septiembre para una arremetida dinamitera contra oleoductos y poliductos, así como la red de centrales y estaciones de energía por parte de las Farc y el ELN[12].

Para asegurar la disciplina táctica militar y política, los frentes del ELN realizaban sus asambleas para evaluar y reajustar los planes derivados de la comandancia central, incluyendo la instalación de cabildos abiertos, juntas de gobierno y otros espacios de ‘poder popular’. De igual manera, debían elaborar planes de formación para sus guerrilleros, documentos de estudio, seminarios y cursos político-militares[13]. Para el trabajo ideológico con la población, disponían de individuos “sin antecedentes subversivos, de capacidad económica definida y generalmente profesionales [que] trabajan en materialización de planes de inversión ante entidades del Estado […] dirigiendo finalmente la creación de cooperativas, proyectos de explotación pecuaria, comercial, pequeña industria y tiendas comunitarias”[14]. Como parte de su plan financiero, el ELN apelaba a la “adquisición y robo de ganado; […] proyectos de autoconstrucción de vivienda de interés social, para lo cual se piensa en invertir en la comercialización de materiales de construcción; proyecto[s] maderero[s] […]; comercialización de carbón […]; acopio y procesamiento de tomate […]; tiendas comunitarias y una cooperativa donde se adquiere la cosecha directamente al campesino, eliminándole el intermediario […]; adquisición de minas de oro y maquinaria pesada […]; titulación de predios por parte del Incora a militantes del grupo […]; [e] incentivación y promoción de microempresas a nivel urbano”[15].

Aunque el ELN no planeaba lanzar todavía una ofensiva militar de gran escala, el Ejército creía que sí buscaba la realización de actos de gran impacto mediático, por ejemplo, con “la preparación de pilotos con aras a ser utilizados

en actividades de tipo terrorista”[16], o la realización de magnicidios[17]. En paralelo, el ELN había logrado cooptar un buen número de concejales, alcaldes y gobernadores y ahuyentar a otros, para implementar su plan de cogobierno, que se extendió con relativo éxito durante toda la década[18]. A pesar de esto, el Gobierno aceptó, en 1995, iniciar un diálogo con el ELN sobre humanización del conflicto, que apenas duró unas semanas[19].

Paralelamente, gracias a una operación en Bogotá, el Ejército constató que el EPL aún editaba sus revistas y periódicos y que contaba con cientos de hombres en frentes rurales y urbanos por todo el país[20]. En 1994, su líder Francisco Caraballo se atrevió a visitar Bogotá para reunirse clandestinamente con su red de apoyo, su esposa y su hijo. El Ejército detectó su desplazamiento desde el centro de la ciudad a una finca en Cajicá. Unos 34 soldados, en cinco grupos, asaltaron la finca y lograron su captura y la de seis personas más, incluyendo cuatro miembros del mando central y el estado mayor de esta guerrilla[21].

“Reconocemos su plena autoridad”, respondía el EPL a Caraballo tras la captura. “Le corresponde ser también nuestro principal representante y vocero y, en caso de que el Gobierno decida realizar negociaciones con la insurgencia, ha de ser usted también nuestro principal negociador […] Camarada: el EPL está firme en su juramento de combatir y vencer”[22]. Pese a tales declaraciones, la desmoralización producida desembocó en la desmovilización de casi cincuenta guerrilleros en Montería en 1996[23], y muchos decidieron entrar a formar parte de los grupos de autodefensa de la Casa Castaño.

En su afán por reconstituirse, el EPL se dedicó durante toda la década de los noventa a la matanza de drogadictos y delincuentes, propaganda armada, retenes, incendio de vehículos, extorsiones, secuestros, protección de cultivos ilícitos y asesinatos selectivos[24].

Desde la cárcel, Caraballo siguió escribiendo proclamas ideológicas en nombre del Partido Comunista Marxista Leninista. Aspiraba a que el Gobierno decretara una zona de despeje militar para liberar secuestrados civiles del EPL, participar de las posibles mesas de diálogo con la sociedad civil y el ELN acordadas en Maguncia, y lograr su propia liberación en calidad de negociador, para recuperar así notoriedad nacional. La respuesta de las Fuerzas Militares fue la baja en combate de Nené, principal comandante del EPL en el terreno[25].

En 2008, Caraballo obtuvo su libertad condicional y los reductos del EPL han

continuado editando su revista, enviando comunicados y realizando congresos a nombre del PCML, sin que el Gobierno reconozca la existencia de un conflicto armado activo con este grupo.

Un destino similar tuvo la disidencia del M-19, conocida como el Movimiento Jaime Bateman Cayón (MJBC)[26], un grupo de “inconformes con una posición adoptada por miembros entreguistas de los claros ideales que pregonaba el desaparecido movimiento M-19”[27]. Usando algunas armas que el M-19 no entregó, los disidentes empezaron a extorsionar entre Valle, Cauca y Quindío, algunos usando uniformes policiales y militares[28]. Luego de su aparición pública en 1993, con el ataque a una patrulla de la policía en Pradera, Valle, el hostigamiento a un puesto de policía en Caloto y un asalto bancario en Miranda, Cauca[29], al año siguiente apelaron al secuestro de un presentador de televisión para impulsar una salida negociada con el Gobierno[30]. En febrero de 1996, el Gobierno aceptó instalar una mesa de negociación cerca de Miranda, Cauca, en una ‘zona de distensión’ desmilitarizada en territorio de los indígenas paeces[31].

Acusando al Ejército de ametrallar y bombardear la zona de distensión, el MJBC se levantó de la mesa en abril. El Gobierno aseguró que las Farc, en medio de combates con el Ejército, ingresó a la zona desmilitarizada y atrajo a las tropas[32]. Tras el fin de los diálogos, el Movimiento inició un lento proceso de disolución[33], y aunque en 1999 realizaron acciones armadas contra poblaciones y puestos de policía en Cauca, nunca pudo recuperarse de la muerte de su líder, Rommel[34], quien cayó en combates con el Ejército en Caicedonia, Valle, en el 2000[35]. Algunos desmovilizados del MJBC continuaban presos en 2016.

Ideología en la post-Guerra Fría

A pesar de la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este, las Farc insistían en 1993 que "en los tiempos que corren, la lucha ideológica ha adquirido un papel preponderante. El movimiento revolucionario ha tenido y tiene que enfrentar una verdadera avalancha de la ideología burguesa y reaccionaria, que ha sido dirigida fundamentalmente a desestimular y a confundir a los sectores revolucionarios y progresistas, no solo para mantener al pueblo bajo la ideología del capitalismo, sino para entronizar dentro del movimiento revolucionario el pesimismo, la confusión, la resignación y el desestímulo por la lucha como instrumento para el cambio social y al mismo tiempo, liquidar al socialismo como opción política para la humanidad"[36].

Para rechazar los procesos de desmovilización recientes, aseguraban que "muchos revolucionarios de convicciones y de fundamentos ideológicos endebles creyeron que el ideal socialista de construcción de una sociedad más justa y humana era de verdad una utopía sin vigencia histórica, como lo aseveraba la propaganda imperialista. Muy pronto, esa izquierda arrepentida se unió al coro del capitalismo, y la socialdemocracia, que al tiempo que entonaba el réquiem por el socialismo, se proclamaba alternativa. Renegaron de su militancia comunista y se convirtieron en desertores ideológicos. Para ellos, los que permanecimos firmes en nuestras convicciones quedamos convertidos en seres prehistóricos insensibles a los 'nuevos vientos' que recorrían al mundo; y desde la otra orilla nos instaban a aprovechar el 'último cuarto de hora', si queríamos ingresar 'decorosamente' al sistema político vigente. Para luchar contra esto es necesario desarrollar una campaña por la educación y la elevación del nivel político, ideológico y cultural de todos los combatientes farianos"[37].

La comandancia reiteró entonces las órdenes dadas en 1982: garantizar "educación diaria y permanente de los combatientes; cada guerrillero llevará un libro en su equipo […]; estudio individual controlado a través de resúmenes y discusiones; alfabetización y cultura general, charlas políticas sobre diversos temas, y control educativo en la célula; 'hora cultural' diaria: nociones de política, geografía, historia patria, poesía, canto y noticias. Estas actividades educativas y culturales se incluirán en el horario militar del Comando". Pero en esta ocasión, ordenó dos cosas más: "Desarrollar una intensa campaña educativa que dote a todos nuestros combatientes de elementos fundamentales del Ideario

Patriótico Bolivariano y del marxismo-leninismo, como herramientas principales del trabajo ideológico interno y del trabajo con la población"; y "fomentar la cultura fariana que se expresa a través de la música, la poesía, el cuento oral y escrito, el teatro, para difundirla en las horas culturales, en las reuniones de célula, en actos con la población y por medios como Resistencia, revistas, casetes, discos y videos"[38].

Apegarse a la doctrina socialista le había permitido a las Farc "formalizar relaciones con las repúblicas de Cuba, Nicaragua y Vietnam. Los cubanos nos ayudaron con un curso militar, los nicaragüenses con albergue y los vietnamitas con intercambio de experiencias y conocimientos, con buenos resultados". Además, lograron "desarrollar una política de relaciones fraternales con partidos y organizaciones revolucionarias de países vecinos en la idea de construir desde ahora la solidaridad antiimperialista de los pueblos andinos, por si los Estados Unidos intervienen en Colombia en los momentos decisivos de la confrontación. En cumplimiento de esta política de relaciones y solidaridad, suministramos entrenamiento en guerra de guerrillas a compañeros del Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil, y quisimos atender la solicitud que en ese mismo sentido nos hicieran amigos panameños, pero estos no llegaron […] Hemos desarrollado acciones militares en territorio ecuatoriano, brasilero y recientemente en Perú, así como finanzas en Venezuela y Panamá"[39].

Años después, Manuel Marulanda se quejaba de que antes "aparecía la Unión Soviética a la cabeza de la lucha mundial contra el capitalismo y el imperialismo, y en su respectivo orden los demás países socialistas como la gran esperanza del proletariado mundial y la lucha de liberación nacional de los pueblos. Hoy solo nos lamentamos de no tener una vanguardia de esta naturaleza que apoye la lucha de la liberación de los pueblos. Las Farc no contamos con la ayuda solidaria de una potencia socialista que nos permita encarar la lucha con más fortaleza en el campo militar por no contar con el apoyo en armas y hasta en dinero"[40].

La era post-soviética obligó a muchas insurgencias marxistas del mundo a incorporar elementos nacionalistas en su discurso que les ayudaran a recuperar vigencia. Y habiendo aprendido de la experiencia exitosa del M-19, las Farc aceleraron su proceso de nacionalización de su revolución con el fin de la Guerra Fría. "Hemos ratificado la tarea de proseguir las huellas de la gesta emancipadora del Libertador, Simón Bolívar, cuyas metas quedaron truncas por la traición de una aristocracia incapaz de entender el papel de los pueblos en la

construcción de las nuevas sociedades", decían en 1993[41].

Hasta su muerte en 1990, Jacobo Arenas se sintió personalmente atraído por la interpretación soviética del Bolívar revolucionario y lo consideraba un dirigente progresista. "Nos consideramos los legítimos herederos de la lucha patriótica y revolucionaria de Bolívar", decía en 1984[42]. Las enseñanzas marxistas de la historia de Colombia, dictadas a los guerrilleros de las Farc por instrucción de Arenas, empezaron a hacerse compatibles con la imagen del 'Bolívar guerrillero'. Las Farc crearon una Cátedra Bolivariana en sus escuelas, construyeron una Biblioteca Bolivariana y publicaron múltiples panfletos para promover su esfuerzo de propaganda. En un tiempo en el que la Guerra Fría entre los bloques Occidental y Soviético empezaba a descongelarse, Bolívar servía para anunciar la última ofensiva de los marxistas colombianos. No es casualidad que la campaña militar de toma del poder adoptara en 1989 el nombre de Bolívar, y que el nuevo vehículo de movilización de masas, que reemplazaría a la Unión Patriótica, se denominara Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia.

Entre 1993 y 1997, la imagen histórica de Simón Bolívar sufrió un cuidadoso proceso de reformulación en manos de las Farc. Su Bolívar proveería una visión de futuro para los revolucionarios, desprovistos de ella tras la caída del comunismo soviético y de Europa del Este.

Para llenar el término 'bolivarianismo' de contenido ideológico, las Farc tenían que desarrollar un conjunto de ideas coherentes para entender el pasado a su manera y así visualizar el futuro que ellos ofrecían. La historia nacional de Colombia, en particular el período de Independencia, tenía que ser reescrito. Presentado como la antítesis de otros líderes históricos, Bolívar se convirtió en manos de las Farc en un burgués con conciencia de clase que entendió que las injusticias del sistema de producción colonial justificaban la insurrección. Así, la reevaluación histórica de Bolívar hecha por las Farc después de la Guerra Fría fue la de un mártir víctima de los líderes políticos del siglo XIX cuyos intereses privados abortaron una dictadura democrática destinada a producir un cambio social revolucionario. Y para remover las trabas a ese cambio, las Farc proponían a finales del siglo XX una 'doctrina militar bolivariana', en la que las Fuerzas Militares solo cumplirían funciones de protección de frontera, sin injerencia en asuntos internos[43].

La incorporación discursiva del prócer le daba a las Farc una proyección

continental, bajo la idea de la ‘patria grande’ bolivariana y latinoamericana, dentro de una visión mítica de una guerra por la ‘segunda y definitiva independencia’. Apoyadas en el discurso de la unidad regional, las Farc participaron activamente en la creación de dos organizaciones continentales: el Congreso Bolivariano de los Pueblos y la Coordinadora Continental Bolivariana[44]. Ambas organizaciones agrupaban partidos políticos de izquierda y movimientos que desafiaban el sistema económico posterior a la Guerra Fría y los tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos. Mientras el Congreso ofrecía legitimidad a la idea de unidad y ‘resistencia’ contra el imperialismo, la Coordinadora ofrecía de manera explícita apoyo a la lucha armada[45]. En particular, la Coordinadora señalaba como parte de su tarea principal la creación de diversas organizaciones en cada país de América Latina y el Caribe, y el establecimiento de brigadas de bolivarianos internacionalistas.

Las minutas de las reuniones regulares del Foro de São Paulo demuestran también la participación activa de miembros de las Farc entre 1990 y 2007. En estas reuniones, compartieron espacios públicos de trabajo con partidos políticos legales de izquierda que terminaron llegando al poder, como el Movimiento V República venezolano, el Partido de los Trabajadores brasilero y el Frente Amplio uruguayo. Igualmente, este foro les permitió reunirse abiertamente con partidos que tuvieran pasado insurgente, como el FMLN salvadoreño, el Frente Sandinista nicaragüense, el Partido Comunista cubano y el URGN guatemalteco. Es representativa la participación en 1996 de Raúl Reyes en el Foro desarrollado en San Salvador; y en 1998 de Marcos Calarcá, quien hizo parte de un taller junto con Shafik Handal, representante de la antigua guerrilla salvadoreña del FMLN y luego vicepresidente de su país, y otros representantes de los partidos de izquierda mexicanos PAN y PRI, la guerrilla guatemalteca URNG y los partidos de la Izquierda Unida española, en México[46].

En 1999, el Mono Jojoy explicaba que “estamos hablando con algunos partidos comunistas del sur y centro América, buscando armar lo que mandó o planteó Jacobo Arenas y el resto del Secretariado aprobó, de un movimiento revolucionario latinoamericano que sigue el pensamiento de Simón Bolívar, pero eso hasta ahora es lo más teórico, y hemos avanzado en el campo internacional, pero son más los dólares que gastamos en presupuesto de esas comisiones que lo que realmente nos es rentable en las otras partes del desarrollo del plan”. Hasta entonces, el discurso bolivariano era útil a la guerrilla, según ella, solo “en la parte de propaganda, la ayuda de solidaridad, en médicos, en medicinas. [Pero] en millones de dólares, en armamento para hacer esta revolución, no resultan,

eso es carreta”[47].

Hacia la primera ofensiva

Desde finales de 1992 y hasta abril de 1993, el Mono Jojoy envió a un comandante regional una buena cantidad de uniformes verdes, mudas de civil, dinero, carpas y plásticos cerca de La Uribe, Meta, todo para la preparación de su Conferencia Nacional Guerrillera número ocho[48].

Tras años de tensión, la Conferencia de 1993 significó para las Farc la separación de facto del Partido Comunista. La reingeniería de la organización implicó que giraría desde entonces alrededor del nuevo Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3). Todos los guerrilleros serían miembros del partido, y cada escuadra se entendería como una célula de este[49].

Para entonces, creían que la toma del poder estaba cerca. Según las Fuerzas Militares, las Farc decidieron "conformar un grupo de setenta sabios o intelectuales entre dirigentes y personalidades del país que serían reclutados y trasbordados ideológicamente en el transcurso de cuatro años". Para 1998, cuando las Farc esperaban haber lanzado su ofensiva final sobre Bogotá, estos sabios "impulsarán abiertamente la insurrección general, haciendo un llamado a toda la población colombiana para que participe activamente en la desobediencia civil, desconociendo el régimen de gobierno del momento". Al tiempo, los frentes "atacarán simultáneamente a todas las unidades de la Fuerza Pública", y las milicias "se dedicarán a derribar torres de interconexión eléctrica, puentes sobre las principales carreteras, actos terroristas en las hidroeléctricas, acueducto y la industria en general"[50].

De manera pública, las Farc proponían "trabajar por un nuevo gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional capaz de conducirnos a la paz. Estamos proponiendo una plataforma para un nuevo gobierno de mayorías, que trabaje por la convocatoria de una nueva constituyente, que sea respetada en las decisiones que tome, tenga representación de todos los sectores de nuestra nacionalidad y pueda abordar sin temores los temas que le fueron reprimidos por el gobierno en la Constituyente de 1991"[51].

Como respuesta a los escenarios de operaciones de las Fuerzas Militares, las Farc habían creado dos bloques de frentes en el sur y en el oriente del país. A partir de 1993, retomaron la idea de dividir el país en siete bloques, con sus estados mayores para el manejo de frentes también en las zonas Magdalena

Medio, Caribe, centro, occidente y noroccidente[52].

Para asegurar la posibilidad de coordinar la acción de varias unidades en un solo ataque, en 1993 las Farc hicieron énfasis en asegurar el control de corredores estratégicos, no solamente sobre la cordillera oriental, sino también sobre otros espacios que les permitieran comunicar los frentes y los bloques entre sí[53].

Para lograrlo, los cuadros serían formados en la escuela militar del Secretariado, la cual además empezaría a crear unidades de fuerzas especiales para todos los frentes. Los cursos serían además específicos para el tipo de acciones que esperaban desarrollar en adelante: si "son para destruir la aviación de una base militar, esta es la preparación. Si es para penetrar a una base militar y destruirla, esta es la preparación. Si es para dejar una ciudad sin luz, su preparación es para ello. Si es para causar grandes incendios en los depósitos de gasolina, su preparación es para ello, y así nos evitamos formar unidades superiores a las demás que son muy variadas […] Cuando comiencen a resultar la artillería y las ametralladoras anti-aéreas, es indispensable conseguir los instructores para dicho manejo"[54].

Las Farc estimaban ya que necesitarían 52 millones de dólares para financiar la ofensiva general y tomar el poder. Para conseguirlos, además de los cobros de gramaje y secuestros, las Farc advirtieron que "las empresas transnacionales, las grandes empresas por ramas industriales y de servicios (sector automotriz, financiero, de transporte, bananero, siderúrgico, cementero, bebidas y alimentación, etc.) serán gravadas con un impuesto para la paz a favor de nuestra organización, correspondiente al cinco por ciento anual sobre utilidades". Además, "todos los frentes y bloques deben examinar con suficiente cuidado los distintos lugares donde hay minería, etc., para que desplacen unidades que comiencen el control de estos, y así ver cómo podemos comenzar a obligarlos a que paguen el impuesto para el sostenimiento"[55].

Según las Farc, los planes de instalar autodefensas regulares en sus áreas de influencia habían fracasado "porque algunos dirigentes degeneraron su accionar en franco vandalismo". Otros problemas del plan estratégico eran la falta de médicos en las filas, el poco crecimiento de las milicias, el retraso en la conformación de seiscientas columnas móviles "para permitir la movilización de las unidades, de tal manera que un mando, sin ser un gran experto, pueda conducir una compañía a cualquier parte del país y encarar pelea donde se le ordene", y la falta de emisoras para la emisión de su propaganda[56].

Desde el punto de vista logístico, las Farc reportaban haber logrado "conseguir aviones, carros, camiones, motores fuera de borda, canoas y hasta mulas, pero esta política no fue entendida y los aparatos adquiridos fueron acabados antes del inicio de las grandes acciones. Hoy sabemos que todo está convertido en chatarra y cuando vamos a comenzar la movilización de las tropas a lo largo del país, no disponemos de los medios para ello. Sin lugar a dudas, fue uno de los mayores errores en esta etapa"[57].

Desde 1990, el Ejército arreció contra la comandancia de las Farc, en busca de propinar un golpe contundente como los sufridos por las guerrillas que antes terminaron desmovilizándose. Las guerrillas empezaban a sentir el efecto de la entrada cada vez más frecuente de la Fuerza Aérea en el conflicto. "El uso de la aviación", decía un guerrillero del EPL a través de una emisora clandestina, "ha sido intensiva mediante el bombardeo y la utilización de las tropas helicoportadas"[58]. Después del ataque a Casa Verde, el Ejército ingresó a la zona del Sumapaz, en 1994, en persecución de los principales líderes guerrilleros. Al lograr ingresar a casas y fincas frecuentadas por ellos, pudieron recabar documentos de las Farc con los que construyeron lecciones aprendidas del porqué no se había logrado el objetivo de cuatro años atrás[59].

Una poderosa autocrítica dentro de las Fuerzas Militares revelaba la situación interna de las tropas en 1995. Desde el Gobierno y la comandancia, "se continúan evaluando los resultados operacionales por el número de bajas enemigas, sin tener en cuenta el impacto de este indicador en la organización enemiga, en la población civil y en la propia institución". Pero peor aun, "los brotes de corrupción moral que se presentan al seno de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, a causa de la infiltración y/o penetración por el narcotráfico, y otros delitos, como el contrabando, delincuencia común y subversión, han ocasionado desconfianza y animadversión en parte de la ciudadanía. La pérdida de los valores morales, aunque aislados, desdibuja la imagen de la Fuerza Pública, todo esto se complementa ocasionalmente, con los excesos en el tratamiento a la población civil, hasta incurrir en violaciones de los Derechos Humanos"[60].

En contraste, la guerrilla "ostenta un fácil manejo de sus relaciones públicas, nacionales e internacionales, coordinando sus intereses con los de las ONG de izquierda. Aprovechan las coyunturas políticas y sociales para manipular propagandísticamente y ampliar sus espacios de acción"[61]. La guerrilla "tiene correlaciones con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG),

especialmente de izquierda nacionales que, apoyadas por las foráneas y en evidente acuerdo con los grupos izquierdistas, han lanzado una ofensiva contra el Estado y contra las Fuerzas Armadas, sindicándolas de violaciones recurrentes de los Derechos Humanos, campaña a través de la cual buscan obtener resultados tangibles representados en sanciones económicas y arancelarias, así como a presiones internacionales sobre el Estado colombiano”[62].

Por todo lo anterior, las Fuerzas Militares “están perdiendo la guerra en el ámbito político y judicial, frente a la sagacidad de la subversión y sus aliados […] Se encuentran relativamente incomunicadas frente a la opinión pública […] No existe una estrecha comunicación con la ciudadanía […] Es claro que los subversivos están perdiendo en el terreno militar, pero avanzan a pasos agigantados en lo político mediante el manejo de la guerra sicológica”[63].

Como resultado, “las organizaciones subversivas constituyen una seria amenaza como factor que limita el desarrollo económico de la nación”, analizaban las Fuerzas Militares en 1995, “sin que con ello se concluya que están en condiciones de tomarse el poder”[64]. Algunos estudios, sin embargo, sugerían que las guerrillas estaban ganando desde el punto de vista de la iniciativa militar. Desde 1990, y durante el resto de la década, se evidencia una proporción mayor de acciones armadas por iniciativa de las Farc[65] respecto a los combates desarrollados por iniciativa de las Fuerzas Militares[66]. La percepción de algunos formadores de opinión en 1996 era que el Estado estaba ‘perdiendo la guerra’[67].

Las Farc se sentían fuertes. Desde finales de 1994, junto con sus socios de la Coordinadora Guerrillera, esperaban que el Gobierno desmilitarizara el municipio de La Uribe para retomar allí los diálogos rotos[68]. La negativa del Gobierno[69] se tradujo pronto no solo en una ofensiva militar de gran escala, sino en el asesinato y secuestro de decenas de militares, policías, alcaldes y concejales[70]. Como respuesta, el Gobierno optó en los años siguientes por definir ‘zonas especiales de orden público’ y darles facultades por decreto a los militares para censar y registrar la viviendas, propiedades y vehículos de sus habitantes[71].

La confederación de autodefensas

La Coordinadora Guerrillera acordó en 1993 denunciar sistemáticamente las acciones de los grupos de autodefensa “haciendo hincapié que en Colombia los principales promotores y conductores del paramilitarismo son los mandos de las bases militares del Ejército Nacional”[72].

Una oleada de las masacres más grandes vistas en Urabá[73], atribuidas a las autodefensas, coincidía con la desaparición de Rambo[74]. La preocupación de los mandos militares por las acciones de las autodefensas y por los efectos contra su imagen era evidente. “A nivel nacional se ha venido incrementando la comisión de delitos contra la integridad física de los ciudadanos, tales como masacres, torturas y hechos atroces, en los cuales han participado elementos integrantes de los llamados ‘grupos de justicia privada’ o ‘paramilitares’”[75]. A través de circulares desde 1992, el Comando del Ejército reiteraba que “una vez más se prohíbe rotundamente el acceso a las unidades y dependencias militares de personas de las cuales se tengan indicios o certeza que conforman dichos grupos, a fin de evitar el posible comprometimiento de personal militar y civil al servicio de la Fuerza. Los comandos, a todos los niveles, deben actuar en forma enérgica e inflexible para combatir las mencionadas organizaciones delincuenciales”[76].

Sin decirlo públicamente, para las Fuerzas Militares era un hecho que algunos políticos y narcotraficantes estaban detrás del auge de los grupos de autodefensa[77]. Además, el Gobierno había autorizado, desde 1994, armar a civiles con armamento “de uso restringido” a través de “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada” y las cooperativas de “servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada” conocidas como Convivir[78].

El debate sobre la legalidad y conveniencia de las Convivir enfrentó a diferentes autoridades del Estado. La Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia defendía que “las asociaciones Convivir fueron constituidas con el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legítimamente constituidas […] para que estas puedan operar con mayor efectividad en su tarea diaria de combatir el delito y cumplir con el deber de garantizarle a los colombianos la seguridad que tanto reclaman”[79]. En comunicación dirigida a la Asamblea Departamental, la Secretaría explicaba que “la promoción y difusión de las asociaciones corresponde al Gobierno. En el caso concreto de Antioquia, hemos ejecutado una tarea de ilustración y

divulgación de la forma como deben operar a través de la Redis —reunión diaria de inteligencia y seguridad— que se ejecuta todas las mañanas en el despacho del señor Gobernador y a la cual, cotidianamente, asisten los representantes de todas las instituciones del Estado, los jefes de los gobiernos municipales y la ciudadanía que desea participar con el Gobierno en el efectivo control del orden público”[80].

El Ministerio del Interior aseguraba, en 1995, que “no pretende el Gobierno, de ninguna manera, estimular el paramilitarismo. Son organizaciones que no pueden tener ningún carácter punitivo. Que si están armados solamente pueden tener armas de defensa personal”[81]. En 1997, el Ministerio reiteraba que “las Convivir nacieron de la necesidad sentida por los ciudadanos de organizarse frente a las amenazas del secuestro, robo, la vacuna, la asechanza guerrillera y la delincuencia organizada […] En ese sentido, las Convivir no deben ser consideradas un acelerador sino un antídoto del mal llamado paramilitarismo […] El Gobierno Nacional, tal como yo lo señalé, no propicia y no favorece la conformación de grupos de autodefensa”[82].

En contra de estas posturas se pronunció la Fiscalía. “Las Convivir usurpan el monopolio estatal de la fuerza […] Las actividades cumplidas por las ‘Convivir’ involucran a los civiles en la contienda armada y los hacen participar directamente en las hostilidades […] Al lado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional [existen] organizaciones privadas de civiles que portan armas de guerra con el pretexto de enfrentarse a la insurgencia y a la criminalidad común […] Con la organización de las Convivir, el Estado colombiano ha caído de nuevo en el error de promover la aparición de ‘actores armados’ que agravan los problemas de represión ilegal y guerra sin contenciones. Todavía es tiempo de corregir esa gravísima equivocación”[83]. Como resultado de este debate, la Corte Constitucional ordenó que las Convivir solo podrían usar armas de uso civil, no militar, como un servicio de vigilancia ordinario[84].

En 1996, el Comando de las Fuerzas Militares insistía, a través de una orden permanente al Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que los grupos de autodefensa “se deben perseguir porque son delincuentes que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía en general, con los cuales no se debe tener ninguna clase de consideración ni se debe ser indiferente ante su accionar delictivo”. Durante los años siguientes, el Comando del Ejército dio la orden a todas las unidades de cortar cualquier vínculo con grupos de autodefensas. A su vez, dicha orden fue reproducida por los comandantes de brigada a cada comandante de

batallón. Un ejemplo es la serie de cartas enviadas por el Comando Operativo Siete de la Segunda Brigada a cada uno de los comandantes de batallones donde se transcriben las órdenes de "evitar vínculos personales o institucionales" con grupos de autodefensas. "No debe proporcionarse apoyo […] [ni] aceptarse apoyos económicos, materiales o de otra índole de personas u organizaciones de las que tenga conocimiento de actuar al margen de la ley […] Evitar que personal militar expida recomendaciones para adquirir municiones o explosivos, solicitar empleo o definir la situación militar a individuos influenciados por narcotraficantes o paramilitares […] Debe dedicarse esfuerzo de inteligencia y contrainteligencia al pleno conocimiento del circulo de amistad del personal de la unidad, especialmente de aquellas que frecuentan las instalaciones militares"[85]. De igual manera, en 1998, el comando del Batallón de Infantería 33, con sede en Montería, se reunió con todo su personal para leer de nuevo los oficios y circulares presidenciales y de Comando del Ejército al respecto y hacerle firmar un acta de compromiso[86].

Pese a estos esfuerzos, "la inteligencia militar ha podido establecer que el crecimiento de las organizaciones de 'justicia privada' ha involucrado, o trata de hacerlo, a oficiales, suboficiales retirados de la Fuerza Pública, ofreciendo sumas de dinero como en el pasado sucedió con otras organizaciones fuera de la ley"[87]. Por esa razón, el Comando de las Fuerzas Militares ordenó "a todas las unidades para que cuando se tenga información o sospecha sobre personal militar retirado vinculado con estas organizaciones y que pueda representar riesgo para la integridad, la moral, el prestigio y buen nombre de las Fuerzas Militares se informe y se restrinja el acceso de dichas personas a las instalaciones militares, con el fin de evitar que por nexos con antiguos compañeros de trabajo induzcan al personal activo a participar en actividades delictivas"[88].

Además, dada la preocupación de que el compromiso estratégico de no usar civiles en la guerra podría estar siendo violado a nivel táctico, en 1999 el Comando de las Fuerzas Militares ordenó a los comandantes de las tres fuerzas que "cuando se tengan indicios o se produzcan denuncias contra integrantes de las Fuerzas Militares, se coloquen personas y medios para adelantar las investigaciones a que haya lugar, con el fin de hacer claridad y establecer plenamente la responsabilidad del caso, desarrollando las acciones jurídicas, administrativas y disciplinarias a que haya lugar. Las Fuerzas Militares no aceptan ningún tipo de relación con grupos de autodefensa, rechazan su accionar, los combaten decididamente y colaborarán con toda la autoridad para su captura. Por tal motivo, cualquier personal vinculado a la Institución que tenga algún

nexo con estos grupos al margen de la ley debe responder penal y disciplinariamente por sus actos”[89].

Tras haberse impuesto con sangre en Urabá, las autodefensas de la Casa Castaño se dispusieron a ‘recuperar’ zonas en el norte y sur del país, así como entrar a los Llanos[90]. Así se acercarían a la zona de influencia de ELN en el nororiente del país, y periferias con presencia de las Farc, tales como Putumayo y, sobre todo, zonas de explotación minera, petrolífera y de cultivos ilícitos[91]. Además, desde finales de los ochenta, ejércitos privados habían incursionado también en la Sierra Nevada de Santa Marta y las ciudades cercanas, en alianza con la Casa Castaño, para controlar el cultivo de marihuana y posteriormente de coca[92].

A inicios de 1997, las autodefensas de Urabá y Córdoba se confederaron con las del Magdalena Medio, los Llanos y el suroriente de Antioquia para dar vida a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su acto inaugural fue el ingreso, en julio de ese año, a Mapiripán, Meta. Unas semanas atrás, las Farc habían ingresado a ese municipio para realizar un ‘juicio popular’ a las autoridades civiles. Luego, empezaron a circular en Guaviare unos folletos titulados ‘Colombia libre’, firmados por las AUC. El 2 de julio, dos camiones con poco menos de un centenar de personas, extrañas para los pobladores de la región, salieron del occidente de San José del Guaviare hacia un sitio en el que se pusieron uniformes camuflados. Desde allí, viajaron al sureste de Mapiripán, donde tomaron unas lanchas que los llevaron al municipio[93]. La brutalidad de la masacre cometida significó un punto de quiebre en la degradación de la guerra colombiana.

Las AUC afirmaban la “naturaleza político-militar del movimiento”, surgido por “la conducta omisiva del Estado en cumplimiento de claras normas constitucionales que le ordenan garantizar la vida, el orden social, la paz ciudadana, el patrimonio económico, cultural y ecológico de la nación, la justicia social y económica, la libre participación democrática, la seguridad pública, etc.”. Con las guerrillas, decían, “comparten el mismo origen en cuanto a las causas objetivas de su surgimiento”, aunque rechazaban “que bajo la égida de la acción reformista que las grandes mayorías exigimos al Estado la insurgencia armada asesine, extorsione y secuestre a quienes precisamente son víctimas de la negligencia del Estado”. Todo esto les llevaba a afirmar que ya existía “un tercer actor levantado en armas”, dispuesto desde entonces a “una salida política negociada que allane el camino definitivo a la paz”. Sus llamados a crear mesas de negociación tripartitas con Estado y guerrilla serán una constante en sus

declaraciones hasta el periodo de su desmovilización. De ahí que recibieran “con satisfacción” el llamado del presidente de la República a que se hicieran presentes en “la mesa de negociaciones […] no obstante consideramos que la negociación debe ser tripartita en una sola mesa de trabajo”[94].

Para justificar sus acciones contra civiles, las AUC afirmaban que la guerra colombiana “exige una relación muy estrecha entre los grupos de acción y la población civil, hasta el extremo de afirmarse que todos los habitantes de una región dominada por cualesquiera de los bandos son potencialmente combatientes, bien en su condición de simpatizante activos […] [o] simpatizantes pasivos que asumen la tarea de no ver nada, no oír nada y especialmente no saber nada […] Los simpatizantes activos o pasivos están revertidos de una importancia casi comparable con la del combatiente activo”, dado que el guerrillero típicamente “desaparezca camuflado entre la población[95].

En diciembre de 1997, el Gobierno decidió crear un bloque de búsqueda contra los ‘grupos de justicia privada’. De este hacían parte la Fiscalía, la Procuraduría, el Ejecutivo y las Fuerzas Militares y de Policía[96]. Este bloque coordinaría el uso de las unidades tácticas disponibles de las Fuerzas para perseguir y capturar a miembros de estos grupos[97]. Unos quince días después de la creación del bloque de búsqueda, el Comando del Ejército ordenó desplegar un plan de “operaciones ofensivas a gran escala contra las áreas bases y de apoyo de los grupos de justicia privada”. Para ese momento, existían, aproximadamente, veintitrés estructuras con unos setecientos integrantes del todo el país, la mitad de los cuales estaban bajo el control de la Casa Castaño[98].

Entre 1997 y 2000, el Ejército reportó un poco más de trescientas capturas y unas 120 bajas de miembros de grupos de autodefensas[99]. Hasta principios de 2001, la Policía les endilgaba unas setenta masacres y más de doscientos casos de asesinatos selectivos[100], incluyendo aquellos caídos bajo la advertencia de las AUC de “ajusticiar a todos los candidatos [en elecciones] que directa o indirectamente están haciendo el juego sucio en complicidad con la guerrilla”[101]. Con mayor insistencia que en el pasado, el Ejército ordenó a sus unidades no usar el término ‘paramilitar’ sino hablar de ‘grupos de justicia privada’, ‘autodefensas’ o ‘delincuencia común organizada’[102].

Las Farc roban la iniciativa

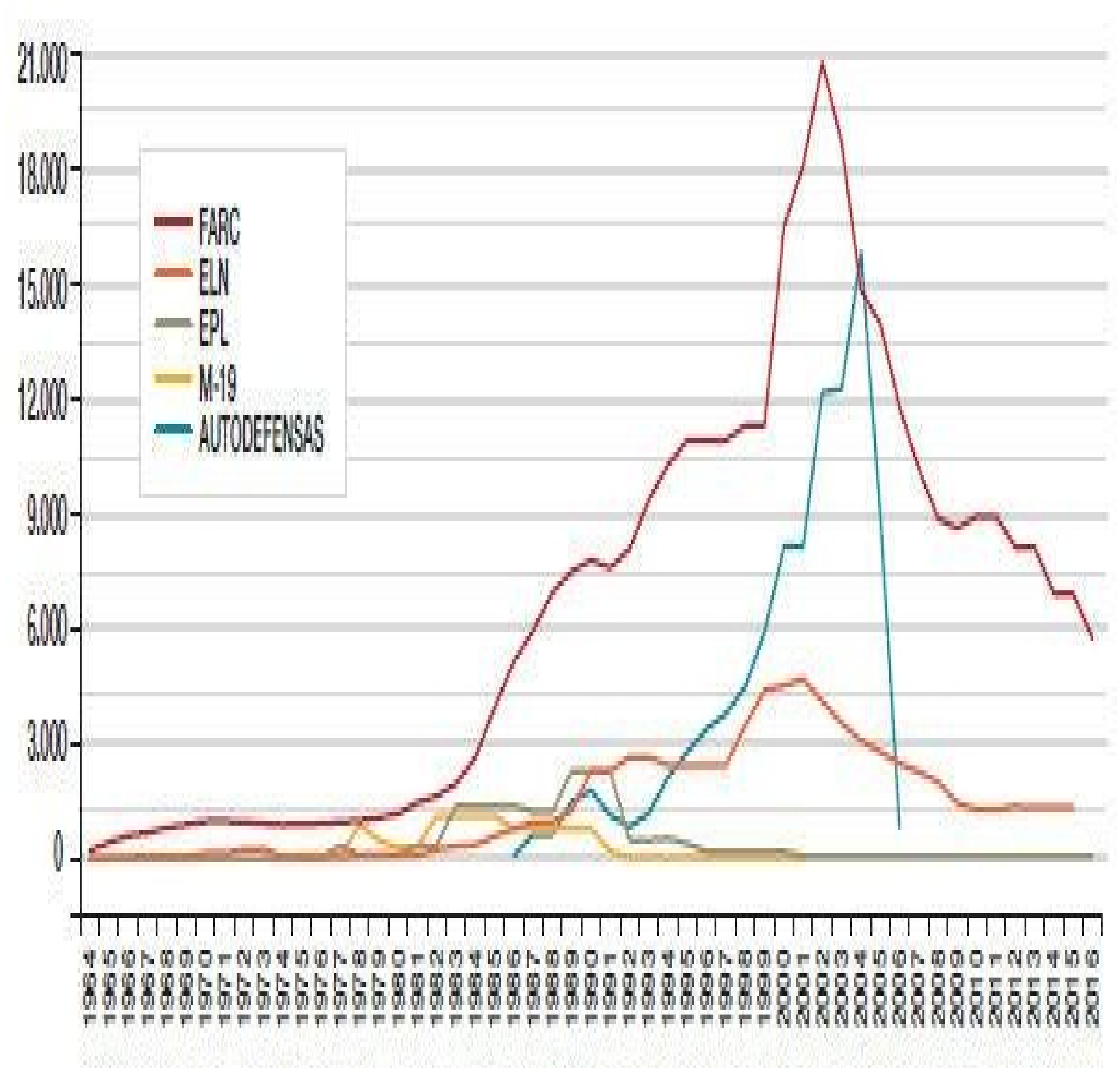
Las Farc experimentaron durante la segunda mitad de la década con la movilización masiva de la población civil contra las Fuerzas Militares y de Policía. Durante una operación en Remolinos del Caguán, el Ejército capturó a uno de los mandos medios más relevantes de las Farc[103], luego de herirlo en una pierna y obligarlo a refugiarse en una droguería. Allí, “había cambiado su fisionomía con el propósito de confundir a las autoridades”, mientras le prestaban primeros auxilios. Con los documentos incautados durante esas semanas, el Ejército había establecido que para 1996 las Farc venían “suplantando la autoridad en una buena parte del territorio caqueteño […] Vienen ejerciendo a su acomodo el denominado cogobierno. Es evidente la manipulación a las juntas de acción comunal, las cuales los reconocen como autoridad”[104]. Aprovechando esta fortaleza, proyectaban “una marcha por parte de los campesinos de la región del Caguán hacia la ciudad de Florencia, apenas inicien las fumigaciones contra los cultivos ilícitos”[105].

Gráfico 14.

MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES 1964-2016

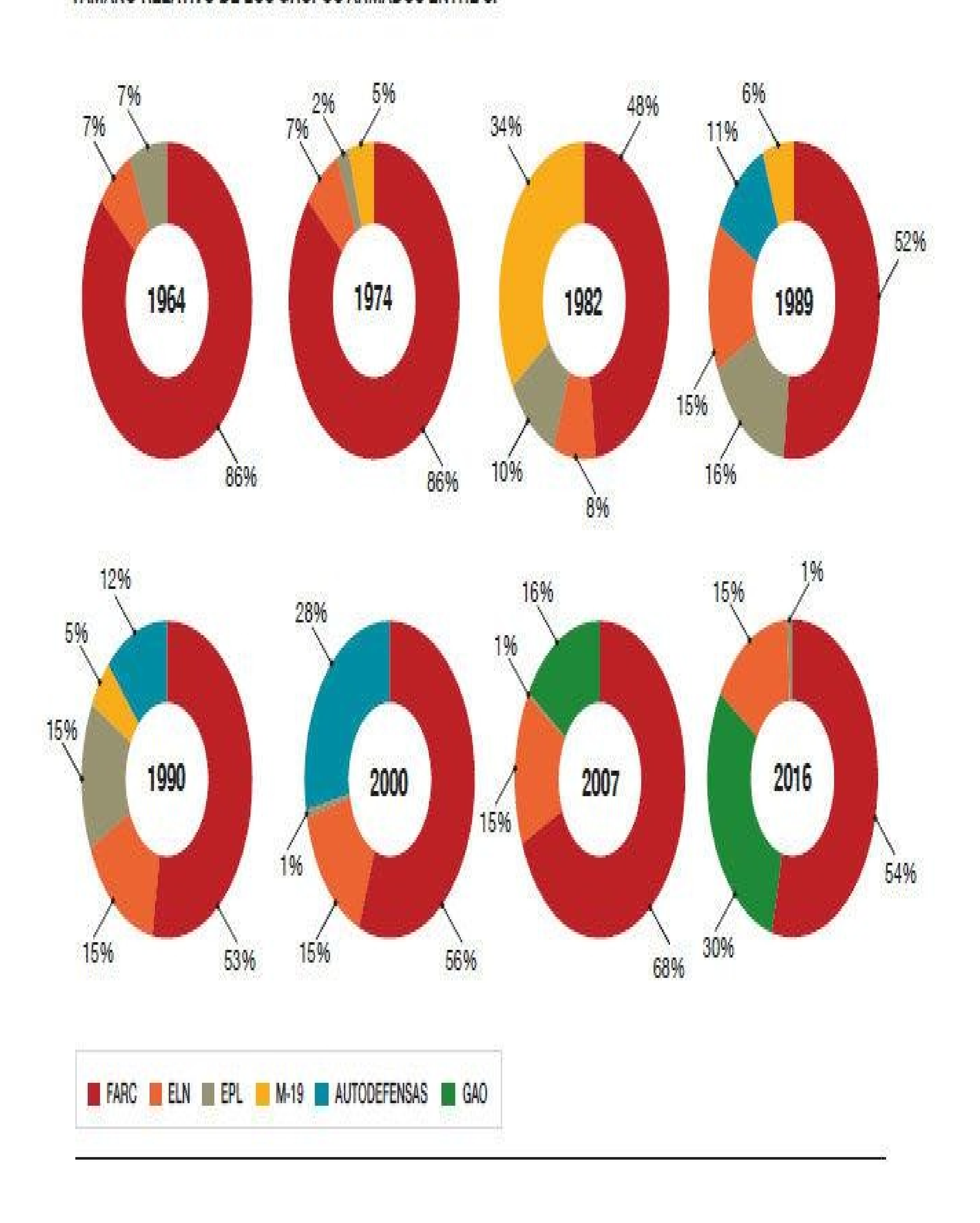
A partir de la década de los 80 hay un crecimiento exponencial del número de miembros de grupos armados ilegales, que alcanza su pico histórico hacia 2002.

NÚMERO DE MIEMBROS POR AÑO



NOTA 1: Las Fuerzas Militares calculaban que las autodefensas sumaban poco más de 15000 miembros en 2004. Pese a ello, en los años siguientes se desmovilizaron más de 35000.

NOTA 2: En diciembre de 2016, las Fuerzas Militares calculaban que se desmovilizarían 6263 guerrilleros de las Farc y 7686 milicianos.


TAMAÑO RELATIVO DE LOS GRUPOS ARMADOS ENTRE SÍ
1964
7%
7%
86%
1974
2%
5%
7%
86%
1982
34%
48%
10%
8%
1989
6%
11%
52%
15%
16%
1990
12%
5%
15%
15%
53%
2000
28%
1%
15%
56%
2007
16%
1%
15%
68%
2016
15%
1%
54%
30%
FARC
ELN
EPL
M-19
AUTODEFENSAS
GAO

GAO: otros grupos armados organizados.

Fuente: Elaboración propia con datos de Central de Inteligencia Militar del Ejército.

Suficiente documentación describía el control de las Farc sobre la población cocalera, así como la administración de fincas de cultivo ilícito, laboratorios y pistas de aterrizajes del narcotráfico en Guaviare[106]. Según una evaluación militar, "las Farc vienen actuando calculadamente en el negocio de la coca. Solo se comprometen en las etapas de cultivo y procesamiento, dado que ellos les representan suficientes recursos económicos, y no asumen la etapa de comercialización porque frente al gobierno de Estados Unidos se convierten en narcotraficantes y la extradición se les haría una realidad"[107].

En mayo de 1996, el Gobierno determinó que cinco departamentos con cultivos ilícitos en el sur del país serían considerados 'zonas especiales de orden público'. Como respuesta, a mediados de agosto, masas de campesinos cocaleros salieron a las calles y se concentraron junto a un puente del río San Pedro en la vía hacia Florencia, Caquetá. Allí, un poco menos de doscientos soldados se apostaron y ubicaron concertinas y barricadas sobre el puente, para bloquear el paso de miles de manifestantes[108].

Luego de dos semanas de tensiones, una de las patrullas fue entonces atacada por la turba. Los cocaleros "lanzaron contra la tropa toda clase de elementos, con palos, piedras, garrotes, botellas con gasolina (bombas caseras molotov), ácido sulfúrico, amoníaco, varilla en punta, machetes, cuchillos y puñales, obligando a hacer uso de los gases lacrimógenos"[109]. Los soldados "no contaban con escudos y cascos adecuados que los protegieran de las piedras y elementos lanzados por la masa de marchantes. El viento se encontraba en contra, disminuyendo el efecto de las granadas lacrimógenas lanzadas, que no causaron la dispersión de la turba"[110].

Tres días después, el alcalde de Florencia, acompañado de un obispo, intentó dialogar con los manifestantes junto al río, diciéndoles que "no los quería ver en Florencia, ya que complicaban la situación, lo cual enardeció a la muchedumbre". Aunque el obispo trató de calmar los ánimos, "la masa se dirigió violentamente al puente"[111]. Luego, "se escucharon disparos hechos desde la

turba con armas largas y cortas de diferentes calibres, desde distintas partes de la carretera […] En esas circunstancias fue robado, por parte de los marchantes, [un] fusil […] Ante la mediación de la Cruz Roja y el personero de Montañita, fue entregado en calzoncillos, herido y maltratado [un] soldado”[112].

Los policías, protegidos con “escudos y cascos antimotines, pudieron enfrentar la turba”, apoyados por los carros cascabel del Ejército[113]. Durante la asonada, algunos vehículos, camiones y viviendas fueron saqueados, varias fincas fueron incendiadas, un campesino murió y dieciocho más resultaron heridos, y una veintena de militares fueron atacados con machetes, piedras y puñales[114].

Luego de estos eventos, las Farc continuaban enviando manuscritos a diferentes organizaciones sociales y entidades privadas para que “se vinculen en forma activa con el paro que se está realizando en el pueblo caqueteño” y “se unan a la marcha campesina”. Durante todo el segundo semestre de ese año, el país asistió a marchas cocaleras en Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y el sur de Bolívar que movilizaron a más de diez mil personas.

Un poco antes, en abril de 1996, una patrulla militar luchaba por llegar a una base en el páramo en Puerres, Nariño, pese al recalentamiento de los motores de sus seis vehículos en medio de las pendientes, la nubosidad y las bajas temperaturas. Cuando ya habían llegado a una zona en bajada, una explosión sacudió dos de los vehículos. Durante dos horas las tropas estuvieron combatiendo la emboscada de más de cien guerrilleros hasta que la munición se agotó. El oleoducto transandino de la zona fue reventado y pronto el petróleo empapaba los vehículos y algunos de los soldados. Los carros fueron incendiados, y los soldados fueron rematados y desarmados. Unos más lograron escapar en medio de la lluvia hasta una casa cercana, otros se ocultaron en los matorrales. En total 31 militares terminaron muertos[115]. Con esta emboscada mortal se inauguraba una serie de reveses militares que marcarían el rumbo del conflicto durante el resto de la década.

A finales de agosto de 1996, un centenar de guerrilleros atacó el puesto de mando de un batallón de contraguerrillas en Guaviare, causando la muerte de un suboficial y dos soldados profesionales. Como respuesta, el Ejército envió tres compañías de una brigada móvil al río Guayabero, apoyadas por transporte aéreo. Algunos miembros de esas compañías decidieron acampar en una vereda de La Carpa, San José del Guaviare, y comenzaron a hablar con gente de la escuela, de la fonda y de la tienda. “Algunos se acercan a una finca donde se

ordeñaba el ganado y reciben leche, otros miembros de la patrulla se dedican a lavar ropa, otros se dedican al baño personal, otros a observar un partido de balonpié y el resto a jugar billar". En la madrugada, cuando las tropas dormían, tres grupos que sumaban casi cuatrocientos guerrilleros, atacaron el campamento. Un total de veinticuatro militares murieron, y las Farc se apoderaron de fusiles, ametralladoras, lanzagranadas, mortero, radios y anteojos de visión nocturna[116].

Días después de los eventos de La Carpa, y después de varios combates en Putumayo, un grupo de soldados fue trasladado a una base considerada 'de descanso', donde "no ocurría nada y no había presencia de bandoleros". Pese a ello, los radiogramas llegados a la base indicaban lo contrario. Una noche a finales de agosto, mientras los soldados se disponían a guardar su armamento y acostarse a dormir, recibieron fuego de explosivos y ráfagas de ametralladoras desde todas las direcciones. Rápidamente, algunos soldados fueron capturados por los guerrilleros. A la mañana del día siguiente la base de Las Delicias había sido copada. Uno de los sobrevivientes narró cómo uno de los centinelas, al iniciarse el ataque, "se volteó y disparó contra los soldados que se encontraban formados"[117]. Ocho meses antes, guerrilleros se habían empleado en una finca al norte de la base. Con el tiempo, se fueron ganando la confianza de los militares. Les vendían verduras, jugaban fútbol en las instalaciones y compartían actividades de pesca. Con la información recolectada, construyeron una réplica de la base militar cerca de Remolinos del Caguán, en donde se practicó la toma[118].

Según los primeros informes del Ejército, los sesenta soldados secuestrados en Las Delicias habían sido trasladados aguas abajo por el río Caquetá hasta unos campamentos en La Macarena, Meta, cerca del lugar donde se encontraba Manuel Marulanda. Pero información posterior los ubicaban entre Putumayo y Caquetá, e incluso en campamentos en territorio ecuatoriano[119].

Tras dos meses de secuestro, los familiares de los soldados y oficiales de la reserva del Ejército lideraron unas marchas con pañuelos blancos en Bucaramanga y Cúcuta para exigir la liberación. Ese mismo mes, el Gobierno decidió aceptar la condición de las Farc de desmilitarizar dos municipios de Caquetá y zonas aledañas. La guerrilla respondió exigiendo también la desmilitarización de un tercer municipio[120].

Durante el acto de liberación en Cartagena del Chairá[121], en junio de 1997,

Fabián Ramírez leyó un comunicado en nombre de Manuel Marulanda en el que condicionaba un proceso de paz si se desmontaba “la teoría de la seguridad nacional y el paramilitarismo, junto con las cooperativas Convivir, despenalizan la protesta popular, suspenden los decretos represivos y zonas especiales de orden público, introducen cambios democráticos en las estructuras del Estado y el régimen político y despejan algunos municipios”[122]. Con el despeje, las Farc consideraron que “por primera vez somos reconocidos oficialmente como fuerza beligerante ante el mundo, comprobándose así la existencia de un conflicto social armado”[123]. Desde entonces, las Farc no solo atacarían bases y patrullas, sino que empezarían a secuestrar militares y policías de manera masiva[124].

Durante el cautiverio, los guerrilleros intentaron convencer a los soldados de la justeza de su lucha, culpando al Gobierno y a las élites del país por la situación del conflicto. Para ello no solo les hablaban, sino que les suministraban grabaciones de música y consignas subversivas. Las evaluaciones psicológicas efectuadas por el Ejército a los liberados evidenciaban la preocupación no solo del trauma y la depresión leve que demostraban varios, sino el posible adoctrinamiento ideológico de algunos de ellos. Según el Ejército, algunos guerrilleros se despidieron de los cautivos “con lágrimas en los ojos al ver que los soldados iban camino hacia la libertad”[125].

Durante el segundo semestre de 1997, más de cien guerrilleros se concentraron entre Nariño y Putumayo para reunirse con líderes políticos, establecer cuotas de gramaje, impuestos y reclutamiento. En diciembre, algunos de sus panfletos anunciaban el asalto al puesto de policía de Buesaco, Nariño, pero el día 21 el Ejército detectó una emboscada preparada en el río Guamués. Ya era claro que su objetivo sería la base del cerro Patascoy, en San Juan de Pasto[126].

Seis meses antes, una inspección militar había recomendado instalar concertinas de alambre y campos minados para resistir un eventual ataque, e incrementar los controles sobre los trabajadores civiles que entraban a la base[127]. En julio, las declaraciones de un desmovilizado y un radiograma advertían de la posibilidad del ataque. Estas declaraciones y radiogramas se repitieron durante todo el semestre. Una de las principales preocupaciones de los militares responsables era la dificultad de dar apoyo a la base, pues solo había una ruta de acceso a través del río Guamués y una trocha veredal. A falta de un reforzamiento adecuado, los militares optaron por “construir muñecos de trapo y colocarlos en la noche, así como llevar perros con el fin de complementar los sistemas de seguridad”, además de llevar al cerro un pelotón extra de soldados[128].

Cada tres meses, las tropas debían ser relevadas, debido a lo malsano del clima helado en el cerro. "Actualmente se encuentra allí un pelotón, cuando en realidad la construcción y el espacio es para una sección", advertían las inspecciones. "El agua potable es escasa. Los períodos de abastecimiento son largos por la dificultad y costo que tienen para su ubicación en la base. Un apoyo en caso de ataque es casi imposible por aire y tierra dada la distancia, la lluvia y la neblina permanentes. El terreno dificulta los apoyos aéreos, el rigor del clima afecta notoriamente la salud del personal que presta la seguridad […] Lo anterior, obliga un estudio juicioso para el traslado de la base". La moral y disciplina de las tropas dejaba mucho que desear. Durante esos meses, "seis soldados marihuaneros se evad[ieron] de la base regresando ocho días después" para luego "formar una especie de sindicato que no acataba las órdenes", y a dos soldados les dieron permisos de ausencia sin que el comandante del batallón lo supiera[129].

Por contraste, coincidiendo con el relevo de noviembre, unos informantes desmovilizados describieron cómo cientos de guerrilleros en la cordillera se entrenaban para el ataque, usando una maqueta para simular la base. "El entrenamiento es tan extenuante por los rigores del clima que tuvieron que ser seleccionados los antisociales más resistentes a estos factores para poder llevar a cabo la acción"[130].

A mediados de diciembre, un radiograma advertía una vez más que con la concentración de "bandoleros del bloque sur Farc, en número aproximado de doscientos antisociales, […] pretenden efectuar incursión próximos días copamiento Base Militar Patascoy y/o Base Militar Puerres". Era tal la inminencia del ataque, que el padre de uno de los oficiales de la base se comunicó por sistema de microondas con su hijo y le advirtió de la posibilidad de un ataque a la base, según la información que el mismo obtuvo en el comando de policía de Pasto[131].

A la madrugada del día siguiente, la estación repetidora de comunicaciones del cerro dejó de reportarse. Abordo de un avión, el comandante del batallón trató de hacer un reconocimiento del cerro, pero la visibilidad era nula. Solo en la tarde, un habitante de la zona le confirmó que la base había sido atacada. Un batallón de contraguerrillas logró alcanzar la base al día siguiente, apoyado por vuelos helicoportados.

En la noche, un suboficial sobreviviente telefoneó al comando del batallón para

informar lo ocurrido. Luego de una repentina explosión de madrugada, un grupo de guerrilleros empezó a gritarle a los soldados por sus nombres. El disparo de un lanzacohetes impactó directamente en el alojamiento de los soldados, que no tenía muros de protección. Los centinelas no estaban en puestos de guardia sino en sus alojamientos, y nadie activó los campos de minas de protección. En medio del fuego guerrillero, cuatro soldados bajaron por un peñasco, pero uno perdió el equilibrio y cayó al abismo. Otro, al ser herido, se quedó atrás, y fue envuelto en sacos de campaña y dejado a ochocientos metros de la base. Los demás llegaron al río Guamués donde fueron auxiliados por una familia de colonos[132].

Al llegar la contraguerrilla a la base, un día después, encontraron cinco soldados muertos y las instalaciones destruidas. El frío los encalambraba y no lograron sacar los cadáveres. Según el Ejército, los guerrilleros acudieron “al dopaje para contrarrestar la hipotermia”, lo cual “fue un factor determinante”. Las tropas, finalmente, encontraron al soldado herido, que fue auxiliado, y días después el cuerpo del soldado que cayó al abismo. Para ese momento, los guerrilleros se replegaban velozmente llevándose consigo a dieciocho militares secuestrados en grupos de cinco o seis[133].

Días después cuatro batallones de la recién creada Brigada Móvil Tres llegaron a la base de Tres Esquinas, en Caquetá. Desde el primer momento, los soldados se enzarzaron en múltiples combates con las Farc en la zona, pero pronto la mitad del personal se dispersó: algunos fueron enviados a Putumayo, otros intentaron rescatar a los soldados secuestrados de Patascoy y otros más salieron de licencia.

Por esos días, dos compañías de soldados cayeron en el fuego de ametralladoras y morteros, al tiempo que los guerrilleros aplicaron presión psicológica para motivar la rendición de las tropas. Era tal la situación, que para marzo de 1998 el comando del batallón trató de motivar a los soldados, pero algunos manifestaron “que no desean combatir por juzgar que el enemigo es demasiado”[134].

En medio de la baja moral de combate, los soldados incumplieron prohibiciones básicas, como el no consumo de bebidas alcohólicas, no empleo de caminos controlados por población civil afecta a la guerrilla, no instalación de campamentos cerca de casas o poblados, no cocinar con leña que pudiera delatarlos, y no permanecer más de un día en un mismo lugar. Incluso, en Peñas Coloradas, algunos frecuentaron prostíbulos, atropellaron a prostitutas, efectuaron robos al comercio, contrajeron deudas, hicieron tiros indiscriminados

y, en general, demostraron “maltrato a la población civil”[135].

Las tres compañías de la brigada fueron finalmente atacadas ese mes. Era tal el conocimiento que los guerrilleros tenían de la tropa, que llamaban por sus nombres a los soldados en medio del combate. De hecho, una supuesta informante que decía que un comandante la había golpeado, fue guía de los soldados por un mes. Al convivir con ellos, pudo conocer hábitos, tácticas, vulnerabilidades y formas de operar, antes de salir del área días previos al ataque. Con granadas de mano y de mortero, los soldados enfrentaron las oleadas de guerrilleros para evitar ser aniquilados. Una aeronave fantasma los apoyó lanzando granadas de iluminación y ametrallamiento durante unas cinco horas, hasta cerca de la medianoche; de esta forma, logró detener la ofensiva guerrillera hasta que debió retirarse para reabastecer combustible.

A la mañana siguiente, los aviones de apoyo resultaron poco efectivos en medio de la nubosidad. Incluso algunos de ellos confundieron a los soldados que pedían ayuda con los guerrilleros, y procedieron a bombardear, pero las tropas lograron evadir la acción. Tres helicópteros llegaron al fin desde Putumayo, pero no pudieron desembarcar al ser impactados por disparos. Arrastrándose por el campo, los soldados lograron reagruparse y soportar la jornada consumiendo flores, semillas y maíz. En su desplazamiento, observaron una gran cantidad de soldados asesinados[136]. En medio de un repliegue desordenado, un grupo de 58 militares terminó secuestrado por las Farc[137].

Los mandos militares no pudieron evitar la autocrítica ante los reveses sufridos. “No se estudió —ni se estudia— al enemigo y no se conocen sus nuevas tácticas de operar, cuando evidentemente el enemigo, cualitativamente, evolucionó de guerra de guerrillas a una guerra de movimiento o de posiciones, en donde se emplea con gran propiedad los principios de la masa y la sorpresa con el fin de aniquilar al adversario sin importar los costos de bajas guerrilleras en un combate abierto”[138]. Los guerrilleros “evacúan los muertos con verdadera eficacia, lo cual evita la desmoralización en sus filas, generando desconcierto en la tropa porque no conoce los resultados de sus operaciones”[139]. La guerrilla “realizó un entrenamiento riguroso, el cual se refleja en la mística, el compromiso, las convicciones y la fe en la causa. En un video de entrenamiento de las fuerzas especiales de las Farc, se evidencia la intensidad, la repetición, la disciplina individual y la práctica en áreas de similares características en donde han de delinquir”. Durante el combate, “los grupos de guerrilla disparaban sin protegerse ofreciendo blanco a las propias tropas y ello les causó bajas dentro de

sus filas. Efectuaban asalto frontal para intimidar a las propias tropas”[140].

La evaluación continúa diciendo que “la guerrilla sigue siendo cada día más astuta, en razón de que a través de un señuelo conduce a las tropas a terrenos desventajosos y zonas de aniquilamiento […] El enemigo realizó operaciones ofensivas iniciales, empleando las modalidades de hostigamiento y destrucción, colocando en ejecución la maniobra de asedio diluido”[141].

Dibujo 7.

TOMA DE LAS FARC A CERRO PATASCOY

1997

N

Cerro de Patascoy

H

200 Metros

Camino
Única vía de acceso

A las Joyas

A pesar de las alertas existentes, poco pudieron hacer los soldados del cerro de Patascoy para evitar la toma por parte de guerrilleros de las Farc. El ataque por la retaguardia y un costado de la base militar cortó cualquier vía de escape fuera del precipicio.

Fuente: Comando Decimo Quinta Brigada. Caso táctico cerro de Patascoy, 8 enero 1998.

Además, “la inteligencia militar desconoce el verdadero dispositivo, composición y fuerza de cada una de las cuadrillas […] Las tropas no se encuentran preparadas para conducir operaciones en la selva, en razón a que el paludismo y la leishmaniasis afectan la salud, los morteros son inoperables, los radios pierden su capacidad de enlace y el combate cuerpo a cuerpo es la técnica de enfrentamiento predominante […] Si los soldados voluntarios no tienen una alta moral, motivación y compromiso después de un fracaso operacional, se presentan muchas deserciones, generando gran pérdida de efectivos y de la capacidad operacional de la unidad”[142].

Mientras este era el panorama en el sur del país, las Farc disputaban el control de Urabá con los grupos de autodefensas. A inicios de 1997, el secuestro de un grupo de extranjeros y de unos niños, la toma armada de Riosucio y el secuestro de unos infantes de marina en Juradó motivaron a las Fuerzas Militares a intentar un rescate que además redujera la influencia guerrillera en la zona de Mutatá. Las acciones armadas de Ejército y Fuerza Aérea fueron seguidas después por incursiones de guerrillas y autodefensas, provocando un éxodo masivo de unas tres mil quinientas personas hacia Turbo, Bocas del Atrato y Panamá[143].

En los primeros días de agosto de 1998, las Farc apostaron ochocientos guerrilleros alrededor del batallón de infantería de Pavarandó, en Mutatá, Antioquia. El Ejército tenía en la zona unos mil hombres en cuatro batallones, combinando bachilleres de policía militar, voluntarios y regulares, encargados, entre otras tareas, de proteger cuatro mil desplazados de Pavarandó. A los pobladores de Pavarandó, los guerrilleros “les pidieron que se quedaran en sus casas, que ellos venían por los ‘chulos’ o soldados”. A un civil “lo ajusticiaron por ser el jefe de los paramilitares de Pavarandó”. De un par de fincas, robaron casi quinientas cabezas de ganado pertenecientes, “según el comentario general, a una familia de auxiliadores de los paramilitares que habita en San Juan de Urabá”[144].

Al ver próximo el combate, el comando decidió devolver los bachilleres a Medellín. El 3 de agosto, el comandante de la brigada alertó a sus unidades en Pavarandó de la inminencia de un ataque, el cual se produjo solo unas horas después. En medio de la oscura noche en la selva y un “clima tropical húmedo, ardiente y malsano”, tres compañías de contraguerrilla que se movían por Mutatá fueron atacadas con granadas de mortero y de fusil por guerrilleros que usaban

bengalas de humo para ocultarse y de iluminación para ubicar las tropas. La guerrilla tenía control de vías de desplazamiento del corregimiento y del cerro principal, y no había dónde escapar. Las tropas reaccionaron con sus granadas de mano sin mayor visibilidad, y pronto se perdió la comunicación entre las tres compañías. En arrastre bajo, los guerrilleros disparaban en fogonazo al arma de los soldados para inutilizarlos, mientras otros usaban granadas de mortero en área abierta para provocar el 'ablandamiento' de su enemigo. Los guerrilleros, usando uniformes militares y haciéndose pasar por ellos, empezaron a llamar a los soldados. Al ubicar una casa donde se refugiaba una de las compañías, la hicieron explotar con dinamita antes de retirarse, ante la llegada de una compañía de apoyo en un helicóptero Arpía[145].

Tres soldados sobrevivientes salieron a la carretera. Allí los encontró fortuitamente una comisión de la Defensoría del Pueblo local "en muy lamentables condiciones físicas y emocionales; uno de ellos estaba descalzo. Luego de llegar al corregimiento, encontramos el puesto de la base militar totalmente destruido, lo mismo que los 'cambuches' donde duermen los soldados". Posteriormente al ataque guerrillero, varios ciudadanos reportaron "haber visto por los lados de Apartadocito un grupo de paramilitares que estaba concentrado en ese lugar y no saben a quiénes va a atacar; la zozobra de estos habitantes es que por el hecho de ser respetados por los guerrilleros y no haber resultado ninguno de ellos muerto en los enfrentamientos, los paramilitares tomen venganza contra estas comunidades"[146].

Dado que la guerrilla evacuaba sus muertos y heridos en camiones de forma planificada, no fue posible saber el número de sus bajas. "A nadie tienen que responderle por sus muertos", analizaba el Ejército para explicar la motivación suicida de muchos de los combatientes guerrilleros. La guerrilla "vive un ambiente de triunfalismo entre sus combatientes, se viene causando desprestigio a las fuerzas regulares y desconcierto en la opinión pública. Solo a través de golpes contundentes a la subversión se puede recuperar la confianza de la población civil". Finalmente, diagnosticaba que "es absolutamente indispensable adquirir material de alta tecnología como sistema FLIR[147] o satelital que permita la ubicación de las concentraciones guerrilleras, con el propósito de bombardear, primero las posiciones enemigas, y posteriormente efectuar los desembarcos aerotransportados"[148].

Luego del desastre de Pavarandó, el Ejército ordenó perseguir a los guerrilleros para rescatar a los secuestrados e impedir, además, una posible toma de

Murindó. Una noche, mientras acampaban en la selva en Tamborales, un centinela alertó porque había escuchado ruidos. Sorprendido, se encontró frente a frente con un hombre que le disparó y le causó la muerte. Minutos después, sus compañeros descubrieron que el atacante era un soldado que pensaba infiltrarse en un campamento guerrillero. Después, con la ayuda de guías, los soldados llegaron hasta cierto lugar de la selva, pero luego los guías se rehusaron a seguir por tratarse de zonas desconocidas. Las tropas tuvieron que continuar solas, muy juntas unas contraguerrillas de otras. En la noche, un suboficial se extravió tratando de buscar a quien lo relevaría del puesto de centinela. Al llegar a un campamento, encendió su linterna e iluminó a un grupo de guerrilleros. Su reacción fue disparar y salir huyendo. Al encontrar su campamento, contó lo ocurrido y las contraguerrillas se dirigieron de inmediato hacia la zona. Apenas entraron al área, recibieron fuego desde todos los costados. “Muchos guerrilleros estaban arriba en los árboles y los que se acercaban a las tropas se relevaban en forma permanente manteniendo todo el tiempo un alto volumen de fuego”. Solo la entrada de helicópteros artillados les permitió salir del cerco. Los guerrilleros obligaron a un soldado que había sido secuestrado a que llamara por radio y pidiera apoyo de un helicóptero para evacuar soldados heridos, y de esta forma engañaron a las tropas y a la tripulación. Una vez se aproximó la aeronave, fue atacada con 95 impactos de bala. El piloto quedó herido[149].

“Después de unas seis horas de combate, lograron romper el cerco y avanzar en dirección al noroeste buscando salir al río; durante ese desplazamiento se observaron niños e indios muertos”. Testimonios de los soldados sugieren que “aproximadamente unos 63 bandoleros fueron dados de baja, en su mayoría hombres y mujeres muy jóvenes”, al tiempo que sufrieron la muerte de 42 militares y el secuestro de veintiuno[150].

El intento de rescate de los secuestrados de Pavarandó no tuvo en cuenta que “un personal de soldados se encontraba enfermo de paludismo y el día del contacto no tenían ninguna capacidad de combatir”. Además, “el desconocimiento del terreno donde se desarrolló la operación por parte de las tropas no les permitió maniobrar” y “no se calcularon los riesgos de la operación, debiendo ser necesario realizar fuegos de ablandamiento previo al pasar el río Chocó […] Las tropas creyeron que el movimiento que realizaban no era detectado. Sin embargo, por la dificultad del terreno, debieron moverse durante el día en donde fácilmente eran seguidos por campesinos e integrantes de la cuadrilla que informaban la posición. Esto explica cómo fueron atacados por todos los costados”. La conclusión del Ejército fue que “las tropas no están preparadas

para conducir operaciones en la selva, donde las enfermedades tropicales diezman su capacidad de combate, los radios pierden su capacidad de enlace y el combate cuerpo a cuerpo se vuelve la técnica predominante, donde las tropas se enfrentan a un enemigo superior cinco o más veces”[151].

El mismo día del ataque en Pavarandó, dos compañías militares fuera de la base hicieron contacto con los guerrilleros e iniciaron combates. Pronto, fueron copados y perdieron comunicación con el comando del batallón de infantería en Miraflores[152]. Monitoreando sus comunicaciones, la base supo que las Farc se llevaron veinte militares secuestrados. En ese momento, los doscientos militares de la base empezaron a recibir una lluvia de cilindros de gas, convertidos en bombas explosivas[153], y granadas de mortero, que precedieron el asedio de casi mil guerrilleros. Unas horas después, dos aviones llegaron a apoyar a los soldados con artillería, pero apenas diez minutos después de su aparición debieron regresar a recargar combustible y munición. Solo cuando un avión fantasma sobrevoló, las Farc cesaron el fuego por un tiempo. Apenas se retiró, volvieron a atacar con cilindros y granadas. Al mismo tiempo, una base cercana de la policía antinarcóticos estaba siendo atacada y destruida, y varios agentes fueron secuestrados. Esto puso al límite la capacidad de reacción de las fuerzas oficiales. Finalmente, once helicópteros llegaron a la base, trayendo consigo tropas de contraguerrillas que hicieron que la guerrilla se replegara definitivamente con 73 militares secuestrados. En el área quedaron trece muertos[154].

Solo un día después, las Farc atacaron La Uribe, Meta. Desde hacía cinco meses, las Farc disparaban ocasionalmente hacia la base militar del municipio, mientras concentraban sus guerrilleros alrededor de pistas de aterrizaje y campamentos en la zona. Un comandante de las Farc llevaba semanas impartiendo órdenes a los habitantes de La Uribe para abandonar la región a menos que se hicieran miembros del Partido Comunista, la Unión Patriótica o las Farc. Él reunía a las familias y les advertía que no podía “entrar ninguna persona extraña si no es autorizada por ellos. Además, quienes no tengan familia en estas veredas no pueden permanecer allí”. El Mono Jojoy estaba reuniendo varios frentes guerrilleros en límites con Vichada para rodear a La Uribe. El Ejército decidió enviar nuevas compañías de contraguerrilla a la zona. Entonces, una mañana, sonó la alarma en el cerro El Salero. El comandante de la brigada llegó a dirigir personalmente las operaciones, apoyado por aviones Tucano que ametrallaban y bombardeaban a los atacantes. Las Farc sacaron al padre de una capilla del pueblo para atrincherarse allí con granadas de mortero y de fusil, así como en el

internado y en el colegio, pues sabían que los militares no podrían dirigir su fuego contra la población civil. Hacia el mediodía, las Farc empezaron a lanzar cilindros de gas y granadas de mortero, que se alternaban con el ametrallamiento de los Tucano. El combate duró todo el día, hasta que en la noche el comandante de las Farc decidió retirar sus muertos e irse en camiones. Al tiempo, hostigaba con disparos a los aviones que intentaban evacuar los heridos militares, que requirieron del apoyo de un avión fantasma y, luego, de helicópteros artillados[155].

"Los ataques suceden simultáneamente en varios lugares del país", reportaban las Fuerzas Militares, "con lo cual los refuerzos del Ejército y la Fuerza Aérea se tornan impotentes para atender transitoriamente la situación presentada". La respuesta tendría que ser "dotar la Fuerza Aérea de medios que permitan atender por lo menos dos situaciones simultáneamente en cada División con misiones de apoyo de fuego y transporte de tropas", y apelar a la "inteligencia electrónica" para saber quiénes y cuántos guerrilleros existen en cada zona del país[156].

Las Farc habían sacado ventaja de lo que las tropas llamaban el 'cerco invisible' mediante "campos minados y bloqueos de las principales vías de acceso, utilizando la población civil inerme como escudo"[157]. Además, el uso de pipetas de gas "ha permitido que las Farc aumenten su poder de fuego, destrucción y sevicia, ya que algunas son dotadas de elementos químicos y otros artefactos explosivos"[158]. Por el contrario, la contundencia de los contraataques militares se veía disminuida dado que "el sobrevuelo de aeronaves pone de sobreaviso cualquier operación que desarrollen las tropas"[159].

La política de recompensas a informantes ya mostraba sus límites. "Las informaciones por insignificantes que sean son justificadas hasta el punto de convertirlas en acreedoras de recompensas, desconociendo que la búsqueda de informaciones es fundamentalmente una responsabilidad de las redes de inteligencia". Sin embargo el liderazgo del Ejército apreciaba que "no es absolutamente cierto que el país se volvió un país de mercenarios, y en cambio sí es cierto que aún existen muchos colombianos de todos los estratos que están dispuestos a aportar desinteresadamente información"[160].

Desde 1994, el nuevo gobierno había optado por restablecer un proceso de paz con las guerrillas e involucrar a distintas fuerza sociales e institucionales para acompañar un eventual diálogo. Esta instancia de acompañamiento se convirtió luego en el Consejo Nacional de Paz, vigente desde 1998 en las dos décadas por venir. Al mismo tiempo, el Gobierno reconocía la necesidad de reforzar las

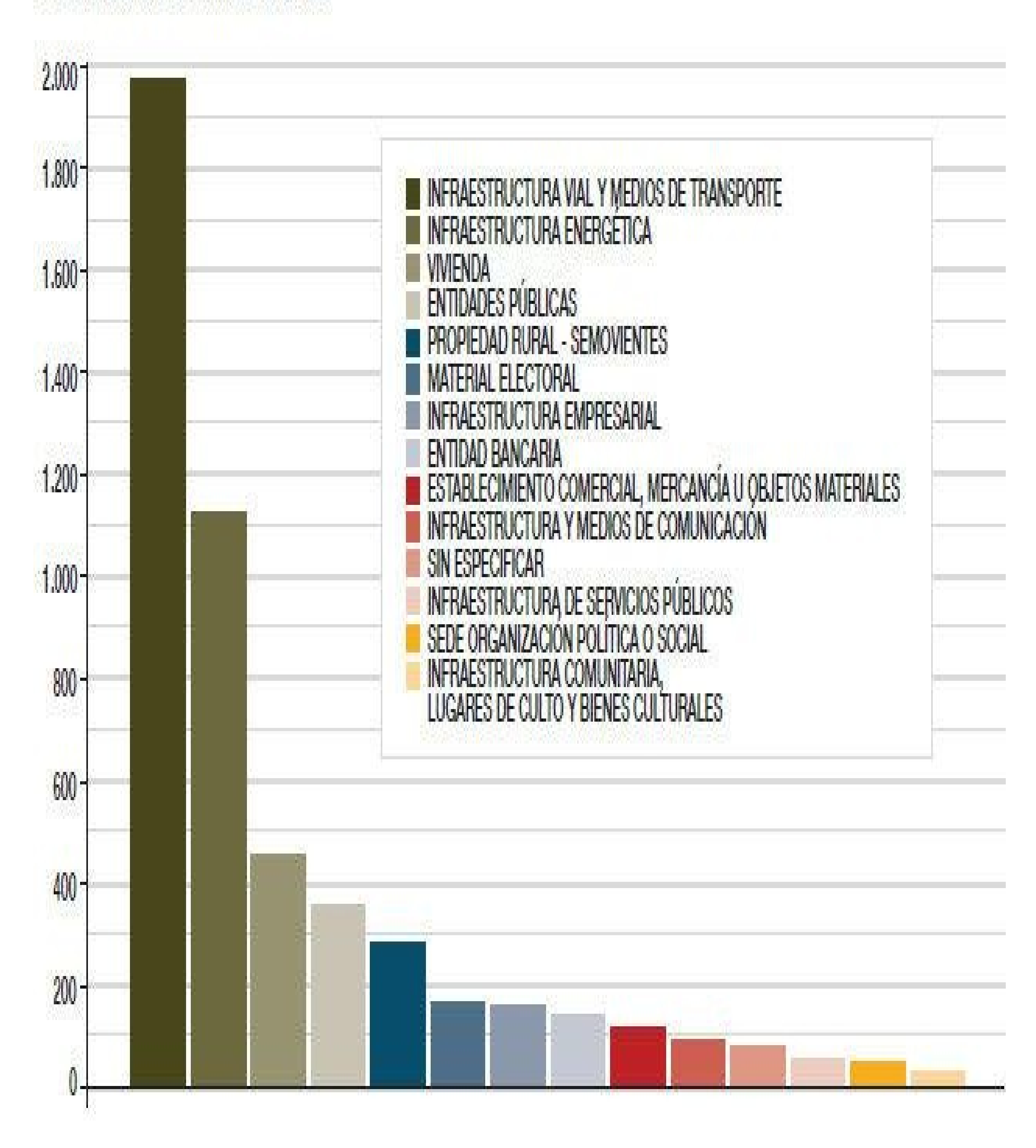
Fuerzas Militares. “Requerimos unas Fuerzas Armadas fuertes, preparadas y bien dotadas. Si son débiles, no organizadas y desmotivadas, el futuro es el fracaso”, advertía el ministro de Defensa. “Se requiere presupuesto para mejorar su dotación, organización para mayor eficiencia y una legislación apropiada para que puedan desenvolver su actividad profesional”. Concluía que “debemos rodear a nuestras Fuerzas Armadas para exigirles; lo que es equivocado es sentarnos en calidad de espectadores”[161]. Para el Ejército era “la primera vez que una propuesta de paz involucra todo un Estado, representado por las ramas del poder, la Iglesia, las organizaciones sindicales, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas”[162].

Un día después del pronunciamiento del Ministerio de Defensa, el Gobierno reconoció a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y al Movimiento Jaime Bateman Cayón como interlocutores válidos de un eventual proceso de paz sin cese del fuego, y propuso abrir un gran ‘cabildo nacional por la paz’ aprobado por voto popular, y compuesto de foros regionales y mesas de trabajo municipales como pasos previos a una Asamblea Nacional Constituyente[163].

Gráfico 15.

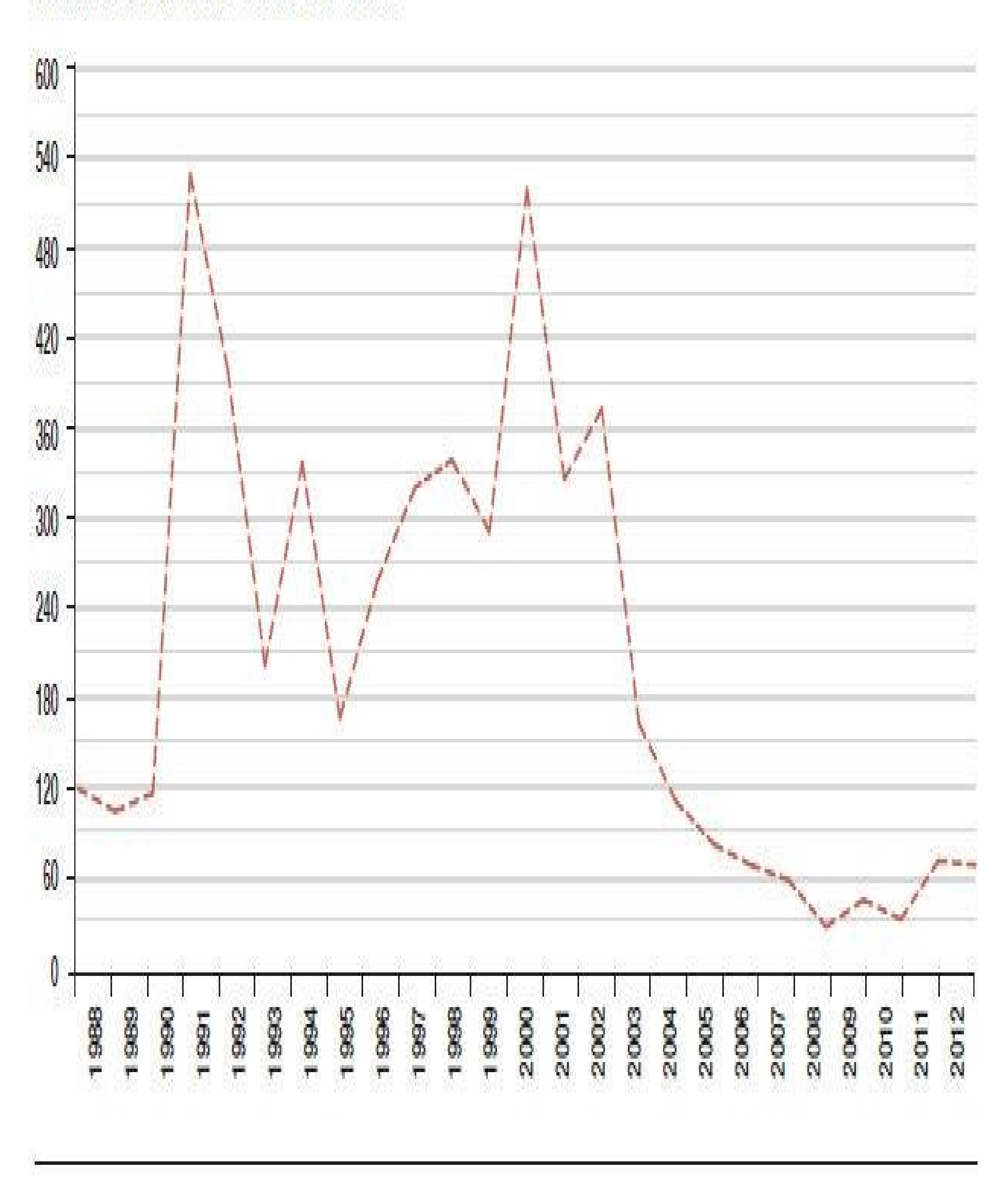
DAÑOS A BIENES CIVILES 1988-2012

La afectación de la acción guerrillera contra bienes civiles se concentró en la infraestructura energética y vial, como parte de su estrategia de provocar el colapso del Estado, afectando con ello a la población.



TOTAL DAÑOS A BIENES CIVILES
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEDIOS DE TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
VIVIENDA
ENTIDADES PÚBLICAS
PROPIEDAD RURAL - SEMOVIENTES
MATERIAL ELECTORAL
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
ENTIDAD BANCARIA
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, MERCANCÍA U OBJETOS MATERIALES
INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SIN ESPECIFICAR
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
SEDE ORGANIZACIÓN POLÍTICA O SOCIAL
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA,
LUGARES DE CULTO Y BIENES CULTURALES

TOTAL DAÑOS A BIENES CIVILES POR AÑO



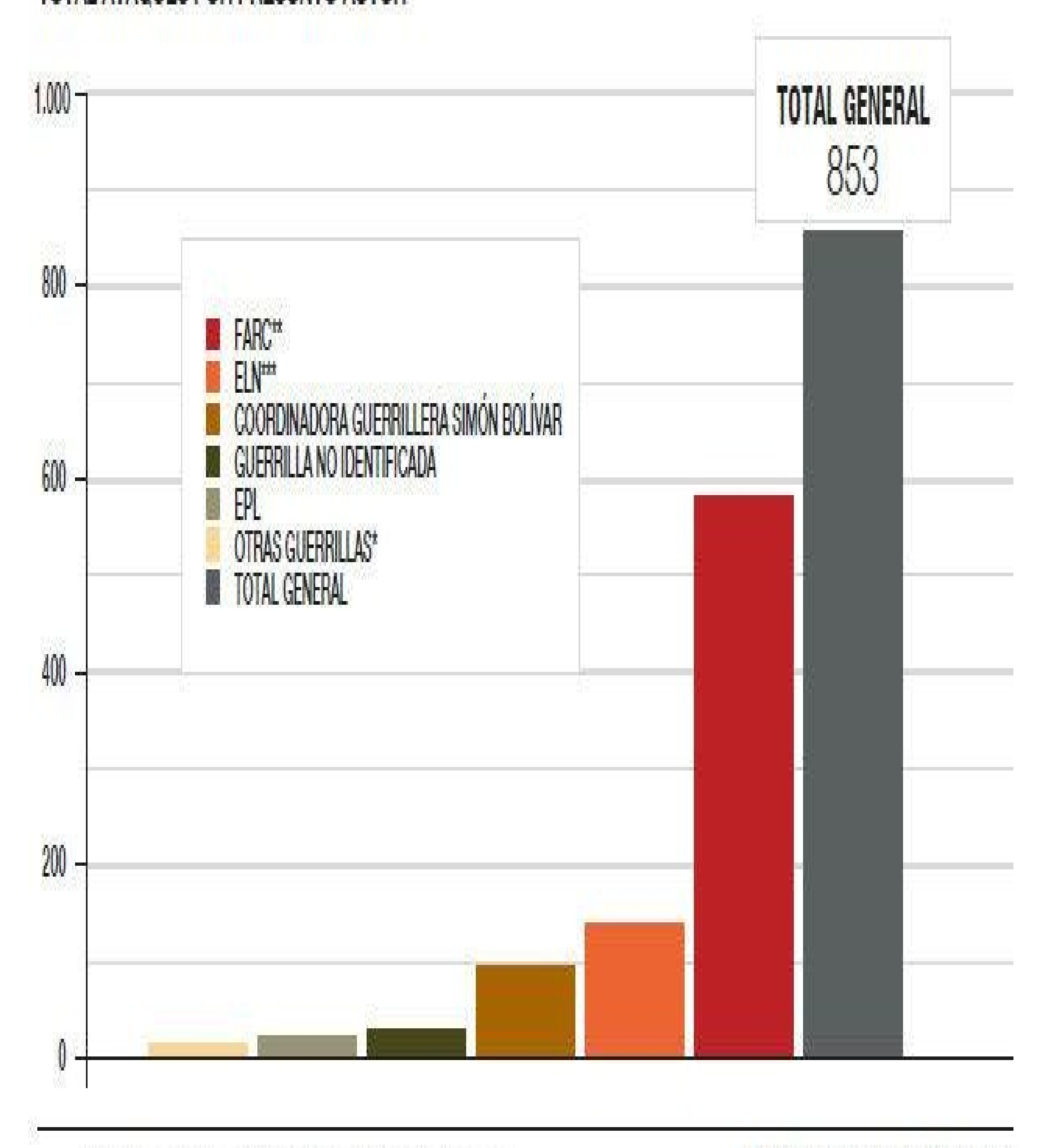
Fuente: Elaboración propia con datos del grupo de Memoria Histórica.

Gráfico 16.

ATAQUES A POBLACIONES 1988-2012

Las Farc fueron las mayores responsables de ataques a poblaciones, en las que típicamente destruían edificaciones policiales, estatales y civiles.

TOTAL ATAQUES POR PRESUNTO AUTOR



* Incluye las guerrillas: JEGA, Movimiento Jaime Bateman Cayón, EMP y ERG

** Incluye acciones conjuntas con EPL y MJBC

*** Incluye acciones conjuntas con EPL y EMP

Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo de Memoria Histórica.

Luego de un fallido contacto entre Gobierno y ELN en España[164], representantes de la sociedad, incluyendo miembros del recién creado Consejo Nacional de Paz, firmaron junto al ELN, en Alemania, una declaración que daba inicio a un proceso de paz con esa guerrilla en 1998. Este acuerdo también pretendía buscar un puente con el Gobierno Nacional, proteger a la población civil e impulsar una Convención Nacional constituida por espacios de diálogo en todo el país que, eventualmente, llevara a una Asamblea Nacional Constituyente[165].

Pero la iniciativa de personalidades de la sociedad también se había extendido a los contactos con las autodefensas. En julio de 1998, se reunieron con las AUC en el Nudo del Paramillo y firmaron una declaración conjunta en la que se anunciaba el inicio de un proceso de paz. Los firmantes civiles se comprometían a ejercer sus “buenos oficios tendientes a que el Gobierno Nacional, como representación política del Estado, respalde los compromisos aquí consignados”, que versaban sobre la protección a la población en medio del conflicto[166].

Las AUC aprovecharon el clima de paz de ese año para reiterar su intención de lograr una “solución política negociada” con el Gobierno, presentándose como “una organización nacional de resistencia civil en armas” y como “actores válidos del actual conflicto” dispuestos a dialogar sobre “democracia y reforma política; modelo de desarrollo económico; fuerza pública en el Estado social de derecho; reforma agraria; ordenamiento territorial y descentralización; reforma urbana; medio ambiente y desarrollo sostenible; e hidrocarburos y política petrolera”[167]. Estos temas quedaron mencionados en el acuerdo.

La pausa estratégica

El nuevo gobierno, desde agosto de 1998, retomó parte de estas propuestas de paz y formuló las suyas propias: el presidente lideraría, personalmente, un futuro proceso de paz con las Farc; habría una zona desmilitarizada para los diálogos con este grupo guerrillero; las negociaciones iniciarían en medio de la guerra, es decir, sin cese del fuego; las Fuerzas Militares se vincularían a una eventual mesa; y la comunidad internacional serviría como facilitadora. Respecto al ELN, el Gobierno retomó los contactos con miras a establecer una mesa de diálogo en una segunda zona desmilitarizada. Desde antes de la posesión del nuevo gobierno, el Comando General de las Fuerzas Militares anunció a todas las unidades militares del país su apoyo al futuro proceso de paz y creó un 'comité de análisis y seguimiento' al proceso de paz para asesorar al mando[168].

El Ejército calculaba que en 1998 había en el país más de 21 mil guerrilleros y más de doce mil milicianos, sin contar con el "mal denominado 'paramilitarismo' como expresión de la transformación de las autodefensas en grupos armados fuera de la ley"[169].

El líder de autodefensa Carlos Castaño aparecía ya en 1998 en el trío de objetivos operacionales principales establecidos por el Ejército, junto con Joaquín Gómez y el Mono Jojoy, de las Farc[170]. "Se debe intensificar el esfuerzo de búsqueda de inteligencia para ubicar a los cabecillas de grupos de delincuencia organizada", reiteraba ese año el comando del Ejército. "En recientes capturas y bajas ocasionadas a los grupos de delincuencia organizada, se ha evidenciado la presencia de personal retirado de la Fuerzas […] Es esencial instruir a todo el personal de la Fuerza para que cuando se tenga información o sospecha sobre personal militar retirado vinculado con estas organizaciones, y que pueda representar riesgo para integridad, la moral, el prestigio y el buen nombre de la institución, se informe y se restrinja su ingreso a las instalaciones militares"[171]. Para describir estas organizaciones, aseguraba que "fueron creadas y financiadas por el narcotráfico, para la protección y cuidado de sus bienes y propiedades, laboratorios para el procesamiento de alcaloides, cultivos, etc. Sus integrantes devengan sueldos que van desde $150 mil en adelante y gran parte de estos son exintegrantes de los organismos de seguridad del Estado"[172].

Por su parte el ELN esperaba poder consolidar en pocos años una fuerza militar que le permitiera controlar el norte industrial del país desde Medellín hasta

Barranquilla y Barrancabermeja; el oriente petrolero de Casanare, Arauca y Boyacá; y el Pacífico sur desde Nariño hasta el Valle del Cauca. Desde esas tres zonas, cercarían al gobierno en Bogotá[173]. Hacia 1998, el Ejército calculaba que su fuerza estaba compuesta por casi cuatro mil quinientos guerrilleros y cuatro mil milicianos distribuidos en unos 37 frentes rurales y nueve más urbanos, además de unas quince compañías móviles y un frente internacional[174]. Estas unidades guerrilleras se agrupaban a su vez en los llamados frentes de guerra Norte, Nororiental y Suroccidental, y en las áreas estratégicas que denominaban petrolera (Arauca, Boyacá y Casanare), minera (sur de Bolívar), industrial (Antioquia), cafetera, central (Cundinamarca), bananera (Magdalena), carbonífera (frontera norte con Venezuela) y de zonas urbanas[175]. Una vez duplicara el número de estructuras armadas y cuadriplicara su número de integrantes, el ELN se lanzaría a cercar militarmente a Medellín, Barrancabermeja y Bogotá[176]. "Somos un nuevo poder, un embrión de Estado, que ha reemplazado en muchas partes del territorio nacional al deficiente Estado colombiano", le atribuye una de las asistentes a la reunión de la sociedad con el ELN en Alemania a uno de los comandantes guerrilleros[177].

Mientras tanto, en octubre de 1998, el ELN iniciaba los preparativos para su convención con la sociedad civil en San Francisco, Antioquia, con el acompañamiento de la Iglesia Católica de Alemania y el Gobierno de España, y la presencia de sus voceros ya excarcelados Francisco Galán y Felipe Torres. En ese municipio, el ELN liberó a varios concejales y alcaldes secuestrados unos meses antes[178]. Para entonces, a la par de su presión a los alcaldes, y cooperación con algunos mandatarios y líderes sociales, el ELN realizaba labores de proselitismo en zonas donde se concentraban víctimas desplazadas por la violencia, con el fin de fortalecer su proyecto político[179].

Ese año, el ELN y las Farc sintieron la arremetida de las autodefensas en las serranías de San Lucas —entre Sucre y Bolívar—, del Perijá —entre Cesar y Norte de Santander—, y la Sierra Nevada de Santa Marta[180]. "Es difícil saber la cantidad exacta de bajas sufridas por los bandos en disputa, dada la naturaleza del conflicto y medios de lucha utilizados por las partes", estimaba el Ejército. Las muertes de autodefensas y guerrilleros se contaban por decenas. "En varias ocasiones, la población civil ha sido utilizada como escudo humano por parte de los subversivos", y los alcaldes de las zonas planeaban incluso "presentar su renuncia ante el Presidente de la República"[181]. Al final, el ELN perdió varios de sus campamentos en esta región.

A la par del retroceso territorial, el grupo guerrillero debía reponerse en 1998 de la muerte de su máximo líder, el Cura Pérez. Ese año la ciudadanía sintió con fuerza la vigencia del ELN con secuestros masivos en las ciudades y la quema total de Machuca, un caserío del municipio de Segovia, en Antioquia, el 18 de octubre. Tras atentar contra el Oleoducto Central de Colombia a la medianoche, el incendio producido en el crudo y gases vertidos en el río Pocuné consumió más de sesenta viviendas, produjo quemaduras letales a más de un centenar de habitantes y heridas a decenas más, sin contar la destrucción de la fauna y flora del bosque tropical aledaña. En octubre, el ELN aseguró mediante comunicado público que "no es responsable del incendio que produjo la tragedia". En esta versión, luego de hacer estallar el oleoducto Colombia, los guerrilleros se retiraron y, posteriormente, "una mano criminal" produjo el incendio[182].

Un mes después, en un nuevo comunicado, el ELN aceptó que "fue un error grave de los compañeros que ejecutaron la acción en cuanto a que se equivocaron en la apreciación de las consecuencias que podía ocasionar el derrame de crudo. No midieron correctamente el peligro que representaba esa acción para la población que estaba al lado de abajo". Gabino, comandante del ELN, agregaba que "la gente de Machuca es nuestra familia. Ellos saben que fue un error"[183].

Los análisis de inteligencia militar indicaban que por aquella época el ELN se había propuesto adquirir una base financiera que le permitiera fortalecer y ampliar sus frentes de guerra hacia diversas zonas del país, aspirando a que, al cabo de tres años, cada frente contara con una base económica que oscilara entre los dos mil y tres mil millones de pesos provenientes de distintas fuentes, tales como la producción autogestionaria, los contratos legalmente contraídos a través de empresas fachada, el cobro por la producción de hoja de coca en sus zonas de injerencia, el cobro de impuesto a las empresas nacionales y extranjeras que desarrollaran actividades en sus zonas de operación y la obtención de dineros producto de extorsiones[184].

El ELN apeló durante esos meses a una ola de secuestros masivos como táctica de guerra. En septiembre de 1998, en la vía de Medellín a El Retiro, una veintena de guerrilleros instalaron un retén armado. Algunos vehículos se negaron a parar y las balas guerrilleras terminaron asesinando a tres mujeres, incluyendo una madre que viajaba con sus dos hijas menores, y una estudiante que fue ejecutada al resistirse al secuestro. Los guerrilleros huyeron con seis secuestrados antes de que las autoridades pudieran reaccionar.

A inicios de 1999, el Gobierno descartó la posibilidad de crear una zona desmilitarizada para dialogar con el ELN en medio de los crecientes casos de secuestro. Meses después, este grupo secuestró un avión con sesenta pasajeros que salía de Bucaramanga a Bogotá, haciéndolo aterrizar en una pista clandestina en Bolívar.

Los antecedentes de este hecho se remontan a 1992[185]. Ese año, José María Ballesta le enviaba a su padre "el más cariñoso y revolucionario saludo" a través de una carta en la que prometía "seguir el ejemplo de su hermano" y "acompañar a su padre hasta las últimas consecuencias", en tanto "lo que debemos hacer cada uno de los colombianos es no vacilar un solo instante para defender nuestro país a costa de lo que sea". Para ese momento, Ballestas reportaba haber pasado "los exámenes de capacidad y habilidad" y pronto acabaría "el curso de tierra"[186].

Siete años después, un grupo de pasajeros de un avión que viajaba entre Bucaramanga y Bogotá se pusieron máscaras y avisaron al resto que se trataba de un secuestro. Esa mañana de abril de 1999, Ballestas condujo el avión comercial hasta un sitio cercano a Simití, Bolívar, donde un grupo de guerrilleros los recibió para iniciar una larga marcha. En chalupas avanzaron con cuarenta secuestrados por un río y luego, en vehículos y a pie, fueron trasportados por semanas a varias casas y campamentos. Uno de los secuestrados empezó a mostrar síntomas de resfrío, que empeoró con los días. Ni sueros ni inyecciones pudieron salvarle la vida. Según uno de los secuestrados, los captores decían que "hacían esto era por la convención. Que querían unir bastantes gremios a nivel nacional y que querían que la convención fuera en cuatro municipios, que pedían despeje, y que no querían que fuera en Alemania, pero que si ya les tocaba entonces iban y la hacían allá". El secuestro, según los guerrilleros, obedecía a que el ELN "había firmado un acuerdo con el gobierno en una fecha […] y que el gobierno no había querido hacerlo [cumplir], que [en el Gobierno] creían que estaban acabados, pero que ellos no estaban acabados"[187].

Cuando el ELN iba a dejar en libertad a un bebé y a cinco personas mayores, un grupo de las AUC entró a la zona. Los guerrilleros manifestaron que entonces "ya no iba a haber liberación, que ellos habían pedido un despeje para entregarnos a nosotros, [para] que no hubiera complicaciones en el momento de la entrega […] Después, como a las diez de la mañana nos dijeron que así haya despeje o no haya despeje, 'nosotros lo[s] vamos a liberar'"[188]. Luego de unas liberaciones parciales, solo a finales de 2000, el ELN puso en libertad a la última secuestrada. El año siguiente, Ballestas fue capturado en Venezuela, extraditado

y, posteriormente, condenado y recluido en Colombia.

En mayo de 1999, después de otra acción en Cesar, donde siete personas fueron raptadas, una treintena de guerrilleros del ELN ingresó a la iglesia La María en Cali para secuestrar a más de un centenar de personas. Minutos después del secuestro, el Ejército inició la persecución de tres camiones y una camioneta. Luego de tiroteos y de la acción de un pelotón blindado a la salida de Cali, 64 personas, entre niños y adultos, fueron rescatadas. Los guerrilleros dividieron a los 56 secuestrados restantes en tres grupos, que se dirigieron a los municipios de Buenaventura, Buenos Aires y Jamundí. Solo en diciembre de ese año, y tras el pago de rescates en dinero, el ELN liberó el último de ellos[189]. Para completar dos meses de raptos masivos, en junio el ELN usó varias lanchas para secuestrar a nueve personas que navegaban en la Ciénaga del Torno, cerca de Barranquilla[190].

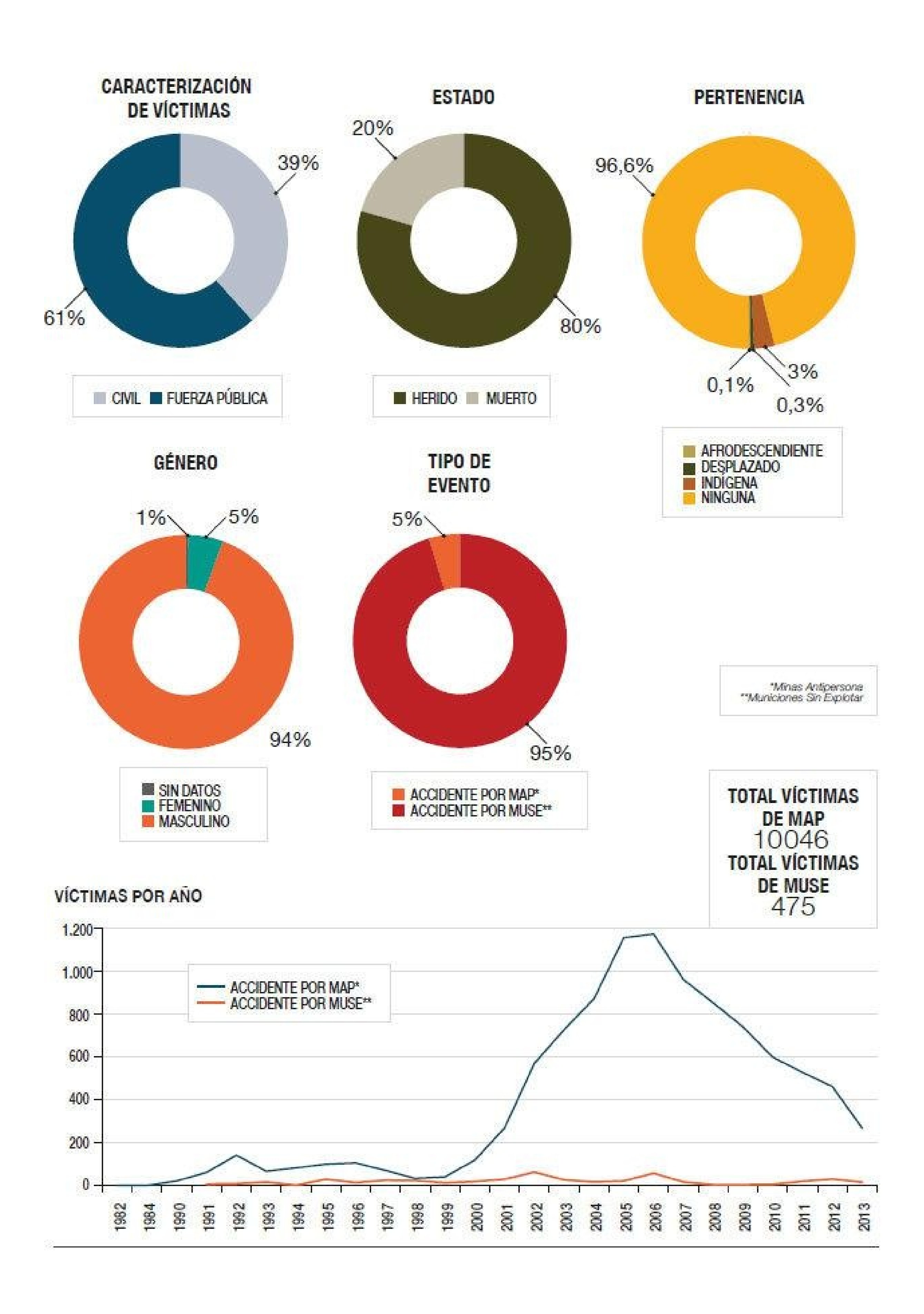
Como si fuera poco, en enero de 2000, el ELN provocó una crisis energética de gran magnitud al destruir veintiséis torres de conducción de energía en Chocó y Antioquia, lo cual generó apagones en esos dos departamentos y una desconexión de la red de energía hacia el resto del país. Mientras el Ejército apoyaba las labores de reparación, el ELN se lanzó contra el sistema de carreteras. En febrero de 2000, los alzados en armas tuvieron secuestradas a más de mil personas en casi seiscientos vehículos atrapados en la carretera Medellín-Bogotá. Esa “es la vía de transporte de los burgueses por la cual movilizan sus riquezas, que debe ser de todos o no es de nadie”, justificaba una transmisión radial guerrillera[191].

Ese mismo mes, el ELN también interrumpió las vías Medellín-Puerto Berrío y Yarumal-Valdivia y sembró minas en el trayecto La Unión-Sonsón. Después de una semana de combates, varios batallones y compañías de soldados, apoyados por la Fuerza Aérea, liberaron a los secuestrados y desatascaron un bloqueo de vías que paralizó el corazón de Antioquia[192]. La batalla por las carreteras y torres de energía de Antioquia continuó por meses. Los secuestros, quemas de vehículos, bloqueos, asesinatos, campos minados, explosiones, emboscadas y combates continuaron[193].

Gráfico 17.

VÍCTIMAS DE MINAS 1892-2013

Las víctimas de minas antipersona alcanzaron un primer pico en 1992, pero se elevaron a sus más altos niveles históricos entre 1999 y 2006, en coincidencia con el repunte de la ofensiva de las Fuerzas Militares contra las guerrillas.


CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS
39%
61%
CIVIL
FUERZA PÚBLICA
ESTADO
20%
80%
HERIDO
MUERTO
PERTENENCIA
96,6%
3%
0,1%
0,3%
AFRODESCENDIENTE
DESPLAZADO
INDÍGENA
NINGUNA
GÉNERO
1%
5%
94%
SIN DATOS
FEMENINO
MASCULINO
TIPO DE EVENTO
5%
95%
ACCIDENTE POR MAP*
ACCIDENTE POR MUSE**
*Minas Antipersona
**Municiones Sin Explotar
TOTAL VÍCTIMAS DE MAP
10046
TOTAL VÍCTIMAS DE MUSE
475
VÍCTIMAS POR AÑO
1.200
1.000
800
600
400
200
0
ACCIDENTE POR MAP*
ACCIDENTE POR MUSE**
1982
1984
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa.

El crecimiento en tamaño y envergadura de las operaciones militares exponía al ELN a contraataques de las Fuerzas Militares como nunca antes. En la tarde del 17 de septiembre de 2000, decenas de guerrilleros vestidos con camuflado militar, y algunos con distintivos de la Policía, entraron a dos restaurantes y una hacienda en el kilómetro 18 de la vía de Cali a Buenaventura. En total 59 personas fueron secuestradas. La reacción del Ejército y la Fuerza Aérea cercó pronto a los secuestradores cerca del río Naya. Los militares dieron de baja a quince y capturaron a veinticinco más. Mes y medio después, a cambio de la liberación de los secuestrados[194], el Gobierno dio la orden al Ejército de dejar huir a sus captores. Entre los soldados quedó la sensación de haber logrado una victoria incompleta.

Al tiempo, las autodefensas se quejaban por la detención de sus hombres por parte del Ejército. "Nos ha dolido, pues parece que obedece más a una política de compromiso con la guerrilla o al deseo de ascenso o medalla al mérito de algún suboficial [...] No es nuestra política enfrentarlos, ni tampoco a ningún organismo del Estado […] [pero] nuestra presencia seguirá siendo constante en este corredor estratégico de la guerrilla y la delincuencia que la apoya"[195].

Mientras tanto, a pesar del éxito relativo de su ofensiva, las Farc reconocían que "el déficit de mandos en todos los bloques en la actualidad es bastante grande, a pesar del permanente esfuerzo por lograr la formación político-militar en la escuela, a tal punto que hay momentos complicados para cubrir vacíos en los diversos frentes de trabajo, lo que pone al orden del día la necesidad de redoblar esfuerzo en la formación de mandos para el trabajo de masas, el combate político, ideológico y militar promocionándolos a partir de los cursos y con un control permanente". Aún no habían logrado consolidar hospitales y medios de transporte terrestre y fluviales masivos para cada bloque, aunque ya habían creado corredores de movilidad para comunicar sus bloques de guerrilleros[196].

Al hacer un balance de lo logrado, las Farc afirmaban que "la consecución de armamento en este periodo nos ha permitido un salto cualitativo en nuestro proceso de conformación como ejército del pueblo, que hemos conseguido no solamente en los combates permanentes desarrollados por todo el país, sino que

logramos realizar una compra grande y cubrir las necesidades básicas, producto de nuestro crecimiento. Por eso el déficit por bloques y comandos en la actualidad no es demasiado grande, teniendo en cuenta que es posible conseguir armas a pesar de los controles del enemigo y la falta de una infraestructura terrestre, aérea y marítima que debemos construir; con todo ello vamos bien en la materia”[197].

Respecto a la zona desmilitarizada, explicaban que “adelantamos los diálogos con el Gobierno como parte del plan estratégico, debemos analizar hasta dónde podremos avanzar en el logro del objetivo, de acuerdo a las circunstancias políticas y de confrontación existentes, buscando que ante la opinión siempre quede clara nuestra voluntad por encontrar salidas políticas, dejando en el Estado terrorista la responsabilidad del agotamiento de esa opción”[198].

Mientras tanto, el área que solicitaba el ELN para su zona de encuentro correspondía a la de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, en Bolívar, y Yondó, en Antioquia, que en su totalidad sumaban alrededor de cinco mil seiscientos kilómetros cuadrados. Esta zona se ubicaba muy cerca del área en la que el primer ELN había sido derrotado militarmente en los años setenta, y junto a su zona de presencia histórica en los Santanderes. Este territorio abría un corredor estratégico entre la frontera con Venezuela y la serranía de San Lucas, por el cual también se desplegaban estaciones petroleras y poliductos. Con el Gobierno, el ELN alcanzó a plantear la posibilidad de iniciar allí un proceso de erradicación manual de cultivos ilícitos y la ejecución de planes de desarrollo alternativos para las comunidades. Pero en 2000, unos quince mil manifestantes organizados realizaron una decena de bloqueos de carreteras y fluviales en la zona para evitar que el Gobierno decretara la zona desmilitarizada[199].

En el municipio de Cantagallo, Bolívar, “el ELN buscaba continuar con el dominio de esa zona”, estimaba el Ejército, “pues la orden del antisocial Carlos Castaño es la de lograr tomarse por la fuerza el área general de esta zona”[200]. El Ejército acusaba al ELN de cometer “masacres a campesinos especialmente en el sur del departamento de Bolívar, ya que estos han participado activamente en marchas contra el despeje del área de encuentro para esta organización subversiva”[201]. Al tiempo, denunciaba que “estos bandoleros de las AUC vienen adelantando actividades delictivas en contra de la población civil en los cascos urbanos de diferentes municipios, donde con ayuda de las redes urbanas asesinan a humildes ciudadanos que se niegan a colaborar con esta organización y apoyen

a antisociales de las Farc y ELN, incrementando así el caos y la discordia de los habitantes”[202]. En este contexto, la zona desmilitarizada para el ELN nunca se concretaría[203].



En 1999, las Farc consiguieron que el Gobierno desmilitarizara cinco municipios con el fin de realizar diálogos de paz. En la imagen, los jefes de esta guerrilla en San Vicente del Caguán, en septiembre de 1999. / Foto: León Darío Peláez. Archivo Semana.

Notas

[1] Comando Cuarta División 1992. Análisis Plan Estratégico Farc.

[2] Comando Brigada Móvil Uno 1992. Oficio 2759. Granada, 29 de septiembre.

[3] En los Santanderes, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Valle, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Cesar. Véase Comando del Ejército 1992. Directiva Especial 121/92. Bogotá, 11 de diciembre, 2.

[4] El pago de recompensas se reglamentó mediante el Decreto 1793 de 1992. Por Manuel Marulanda y el Cura Pérez, se ofrecieron mil millones de pesos; por los miembros del secretariado de las Farc —Raúl Reyes, Alfonso Cano, Timochenko, Mono Jojoy e Iván Márquez— o Gabino, quinientos millones; por Francisco Caraballo del EPL, cien millones; por otros sesenta y cinco comandantes, entre cuarenta y cien millones; por líderes de milicias, entre diez y veinte millones.

[5] En las elecciones de 1991, la Unión Patriótica logró una curul en el Senado y tres en la Cámara. Véase Defensoría del Pueblo 1992. Informe del Defensor del Pueblo para el Gobierno, el Congreso y el procurador General de la Nación.

Estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza Paz y Libertad. Octubre, 59-60.

[6] Las Farc pidieron perdón público en el 2016 por la masacre de La Chinita, en Apartadó. Véase ibídem, 49.

[7] Defensoría del Pueblo 1992, op. cit., 89.

[8] Comando Batallón Cartagena 2005. Apéndice 1 al Anexo B de inteligencia del Plan de Campaña 2004-2006, 2, 4.

[9] Comando Fuerza de Tarea Colombia 1992. Caso táctico 5/92 BR-14. En Comando General de las Fuerzas Militares 1992. Compilación de casos tácticos. Bogotá: Imprenta y publicaciones de las Fuerzas Militares, 171-184.

[10] Gracias a un informante, Gerardo Bermúdez, quien era el cuarto hombre del Comando Central detrás del Cura Pérez, Gabino y Antonio García, fue capturado en una casa cuando portaba documentos falsos de periodista.

[11] ELN 1992. Carta de la UC-ELN a nuestro comandante Francisco Galán 'Kiko'. 12 de diciembre.

[12] Solo el poliducto transandino Orito-Tumaco había recibido nueve ataques con dinamita en el primer semestre de 1992.

[13] Comando Segunda Brigada 1993a. Apreciación ELN, 5-9.

[14] Comando Segunda Brigada 1993b. Oficio 2790. Barranquilla, 14 de marzo, 5.

[15] Comando Segunda Brigada 1993b, op. cit., 6-7.

[16] Comando Vigésima Brigada 1993. Oficio 7597 'Vuelo secreto'. Bogotá, 2 de septiembre.

[17] El Ejército atribuyó al ELN el atentado en Bogotá al ministro de Hacienda en enero de 1994. Seis meses después fue capturado en Bogotá Felipe Torres —Carlos Velandia—, jefe de las redes urbanas. Véase Comando Vigésima Brigada 1994a. Oficio 429. Bogotá, 17 de enero.

[18] Véase Comando Segunda Brigada 1994a. Oficio 0065. Valledupar, 16 de enero; Comando Segunda Brigada 1995b. Oficio 1869. Valledupar, 29 de noviembre; Comando Segunda Brigada 1994b. Oficio 2790. Barranquilla, 14 de marzo; Comando Segunda Brigada 1996a. Oficio 0021. Valledupar, 19 de enero; Comando Segunda Brigada 1996b. Oficio 132. Valledupar, 3 de febrero; Comando Segunda Brigada 1996c. Oficio 0319. Valledupar, 18 de febrero; Comando Segunda Brigada 1997a. Oficio 0932. Valledupar, 18 de junio; Comando Segunda Brigada 1997b. Oficio 1356. Valledupar, 5 de septiembre.

[19] Los voceros del ELN en este diálogo eran Francisco Galán y Felipe Torres, quienes exigieron que el Gobierno creara condiciones para nuevas reuniones en La Uribe, Meta, en zona despejada para la Coordinadora Guerrillera. Gobierno Nacional 1995. Memorando interno para el Comisionado para la Paz. 31 de julio. En Documentos del Gobierno Nacional, 401, 417.

[20] El EPL todavía hacía presencia en la costa Atlántica, Córdoba, Santanderes, Antioquia y Caldas, y en barrios marginados de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta.

[21] Comando del Ejército 1994. Caso táctico 2/92. BACI1.

[22] EPL 1994. Parte de la IV Conferencia al Comandante Caraballo. Montañas de Urabá, noviembre.

[23] Entre los desmovilizados figura el futuro líder de la banda criminal más grande de Colombia en los años por venir, Dairo Antonio Úsuga. Junto a ellos, se desmovilizaron veintiséis guerrilleros de las Farc. Véase Ministerio de Defensa 1996, op. cit.; y Ministerio de Defensa 1996. Certificación 037. Programa para la Reinserción, 2 de octubre.

[24] Estas acciones incluyeron el asesinato del párroco de Cáchira, Santander, en 1999. Véase Comando Batallón de Infantería Mecanizada Seis 1994. Últimas actividades del EPL.

[25] En enero de 2000, Hugo Carvajal fue herido en combates desarrollados en Matanza, Santander. Quince días después, tropas del Ejército encontraron su cuerpo en una fosa. Nené había sido capturado en 1993.

[26] En sus inicios, se identificaron como Frente Jaime Bateman Cayón.

[27] Movimiento Jaime Bateman Cayón 1993. Comunicado a la opinión pública.

[28] Según Ejército, un grupo de unos cuarenta disidentes del Quintín Lame operaron también en Cauca durante 1993 bajo el nombre de movimiento Álvaro Ulcue Chocue.

[29] Comando Tercera Brigada 1993. Oficio 0352. Cali, 8 de febrero.

[30] Según el Gobierno, el MJBC tenía unos doscientos integrantes. Véase Comando Octava Brigada 1993. Informe de Entrevista No. 12. Armenia, 14 de septiembre; Movimiento Jaime Bateman Cayón 1994a. Carta a la nación con motivo de la liberación de Alfonso Lizarazo. 17 de noviembre; Movimiento Jaime Bateman Cayón 1994b. Comunicado. En busca de una salida negociada. 17 de noviembre; y El Tiempo 1995. Se inicia proceso de paz con el grupo Bateman. 13 de octubre; Vicepresidencia de la República 2004. Los derechos humanos en el departamento de Valle. Bogotá: Programa Presidencia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 4.

[31] Gobierno Nacional 1996a. Folleto divulgativo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre las conversaciones Gobierno Nacional-Movimiento Jaime Bateman Cayón. marzo. En Documentos del Gobierno Nacional, 597.

[32] Gobierno Nacional 1996b. Informe de los verificadores del incidente armado en la zona de distensión, en las conversaciones de paz con el Movimiento Bateman Cayón. 20 de marzo. En Documentos del Gobierno Nacional, 557-558.

[33] Francisco Caraballo envió comunicados de apoyo a los diálogos del

Movimiento Jaime Bateman Cayón con el Gobierno Nacional en Miranda, exigiendo que en ellos se juzgara a militares por crímenes de guerra y violaciones al DIH.

[34] Manuel Antonio Villegas.

[35] Según el Gobierno, la mayoría de sus miembros desertaron hacia las Farc. Vicepresidencia de la República 2003. Panorama actual del Valle del Cauca. Bogotá: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 6.

[36] Farc-EP 1993b. VII Conferencia Nacional de Guerrilleros. Conclusiones generales. 27 de mayo - 3 de abril.

[37] Farc-EP 1993a, op. cit.

[38] Farc-EP 1993b, op. cit.

[39] Farc-Ep 1993a, op. cit.

[40] Marulanda, Manuel 2002. Carta. Camaradas del Secretariado. Miembros del Estado Mayor Central y mandos, junio.

[41] Farc-EP 1993c. VIII Conferencia Nacional Guerrillera. Declaración política.

Nuevo gobierno para alcanzar la paz.

[42] Arenas Jacobo 1990, Paz, amigos y enemigos. La Abeja Negra, 36; Arango, Carlos 1984, Farc veinte años: De Marquetalia a la Uribe. Bogotá: Ediciones Aurora, 51.

[43] Farc-EP 1993d. VIII Conferencia Nacional de Guerrilleros. Plataforma de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional. Abril.

[44] Luego rebautizado Movimiento Continental Bolivariano, contó en el 2003 con Manuel Marulanda como uno de sus presidentes honorarios, al lado de subversivos como el boliviano Felipe Quispe Huanca, y el líder del peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos.

[45] Ugarriza, Juan E. 2009. Ideologies and Conflict in the post-Cold War. International Journal of Conflict Management 20(1), 82-104

[46] Además, el International Institute for Strategic Studies británico publicó una extensa selección de material que probaría la presencia y relaciones de miembros de las Farc en Venezuela y Ecuador desde los años noventa hasta la primera década del siglo XXI. Véase International Institute for Strategic Studies 2011. The Farc Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of 'Raúl Reyes'. Strategic Dossier. Londres.

[47] Pese a ello, Raúl Reyes aseguraba en el 2007 que las condiciones estaban dadas para concertar una reunión de un miembro del secretariado de Farc con el presidente de Venezuela, y pedirle un "préstamo de 250 millones de dólares para pagarlos cuando tomemos el poder". En noviembre de ese año, Reyes aseguraba

que luego de reuniones con el presidente venezolano, este había prometido el “aporte de 300”, aunque aún faltaba esclarecer “si es un préstamo o es por solidaridad”. En sus palabras, el presidente “aprobó totalmente y sin pestañear la solicitud”. En diciembre, Reyes aseguraba haber recibido un mensaje de Caracas “donde ratifican que el compromiso 300 sigue en pie”. En febrero de 2008, Reyes aseguraba, hablando de un emisario en Venezuela, que “ya tiene disponibles los primeros 50 y tiene un cronograma para completarnos 200 en el transcurso del año”. Véase Central de Inteligencia Militar 2000a. Análisis de documentos incautados en agosto de 2000; y Reyes, Raúl 2007. Mensaje a Jorge Briceño y Mauricio Jaramillo, 18 de enero. Citado en International Institute for Strategic Studies 2011. The Farc Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of ‘Raúl Reyes’. Strategic Dossier. Londres, Venezuela Archive, 601, 777, 785, 791, 842.

[48] Dirección de Inteligencia 1993. Análisis de documentos. San José del Guaviare, 1.o de noviembre.

[49] En 1999, el Monoy Jojoy aseguraba que las conclusiones del Partido Comunista legal “no nos obligan. Entonces de ahí para acá todas las orientaciones a todas las unidades de las Farc corresponden única y exclusivamente al Estado Mayor Central y del Secretariado, a los plenos del Estado Mayor Central y a sus conferencias nacionales. Los demás documentos los tenemos como estudio pero no nos obligan”. Véase Central de Inteligencia Militar 2000a, op. cit.

[50] Comando Segunda Brigada 1998a. Oficio 0735. 2 de septiembre, 3; véase también Farc-EP 1993a, op. cit.

[51] Farc-EP 1993c, op. cit.

[52] En las zonas Centro y Occidente, las Farc crearon dos comandos conjuntos, como instancias de coordinación de frentes más pequeñas que los bloques, en sus zonas históricas. Véase Farc-EP 1993a, op. cit.

[53] Comando Segunda Brigada 1998a, op. cit., 3.

[54] Farc-EP 1993a, op. cit.

[55] Adicionalmente, el Ejército reporta un aumento en el abigeato en las zonas controladas por las Farc. Véase Farc-EP 1993a, op. cit.; y Comando del Ejército 1994c. Oficio 69176. Crecimiento delito abigeato. Bogotá, 25 de octubre.

[56] Farc-EP 1993a, op. cit.

[57] Ibídem.

[58] Comando del Ejército 1993b. Oficio 55845, Análisis de inteligencia 15, 13 de julio de 1993 EPL disidente, Bogotá. 7 de agosto, 3.

[59] Comando Compañía Motilón 1994. Envío informe Operación Alejandría. Tolemaida, 17 de mayo.

[60] Comando del Ejército 1995a. Oficio 83067. Desarrollo lucha política. Bogotá, 9 de febrero.

[61] Ibídem.

[62] Comando del Ejército 1995b. Oficio 83571. Apreciación situación nacional, 2 de marzo, 7.

[63] Comando del Ejército 1995c. Oficio 83067. Desarrollo lucha política. Bogotá, 9 de febrero, 5-6.

[64] Comando Quinta Brigada 1995. Anexo A de inteligencia al Plan Meteoro 95 para la defensa y seguridad interior, 8 de diciembre, 21.

[65] Ataques a instalaciones militares, ataques a poblaciones, emboscadas, hostigamientos y sabotaje.

[66] Echandía, Camilo 2011. Situación actual de las Farc: un análisis de los cambios en las estrategias y la territorialidad (1990-2011). Informes Fundación Ideas para la Paz 13, septiembre.

[67] Por ejemplo, véase Gómez, Hernando 1996. ¿Por qué perdemos la guerra? El Tiempo, 23 de abril. Del mismo autor 2000. El lío de Colombia. ¿Por qué no logramos salir de la crisis? Bogotá: Tercer Mundo Editores, 68.

[68] Gobierno Nacional 1995, op. cit., 399; ELN 1995. Declaración política del 14 Pleno de la Dirección Nacional, julio; y Comando del Ejército 1995d.

Apreciación coyuntural situación nacional. 2 de marzo, 12-13.

[69] El Gobierno había anunciado en mayo de 1996 su disposición a despejar La Uribe. En junio, un memorando firmado por altos mandos militares demostraba su disposición solo a un despeje limitado de parte del área rural del municipio. Véase Revista Semana 1995. Ruido de sables. Edición 687, 1.o de julio.

[70] Comando Vigésima Brigada 1997a. Análisis proyectivo. Octubre.

[71] Decretos 717 de 1995 y 900 del 22 de mayo de 1996.

[72] Comando Segunda Brigada 1994c. Oficio 990. Envío conclusiones VII Cumbre CGSB. Barranquilla, 30 de enero.

[73] En Apartadó contra desmovilizados del EPL en 1994.

[74] Existen diversas versiones de la muerte de Fidel Castaño, en la que se habla de su desaparición en las selvas de Panamá, de su muerte en combate con el EPL y hasta su asesinato a manos de su propio hermano Carlos. En 2013, la Fiscalía halló en San Pedro de Urabá unos restos que podrían ser del jefe paramilitar.

[75] Comando del Ejército 1994f. Circular 32975. Bogotá, 8 de abril.

[76] Comando del Ejército 1994f, op. cit.

[77] Comando Vigésima Brigada 1994b. Oficio 03184. Santa Marta, 5 de octubre.

[78] Gobierno Nacional 1994. Decreto 356, 11 de febrero.

[79] Secretaría de Gobierno Departamento de Antioquia 1995. Oficio 253997. Respuesta cuestionario asociaciones convivir. 26 de septiembre.

[80] Ibídem.

[81] Ministerio del Interior 1995. Intervención ante el Senado. Citado en Secretaría de Gobierno Departamento de Antioquia, op. cit.

[82] Ministerio del Interior 1997. Carta a la Corte Constitucional sobre proceso de inconstitucionalidad en contra del decreto 356 de 1994. 29 de agosto.

[83] Fiscalía General de la Nación 1997. Carta a la Corte Constitucional. 26 de agosto.

[84] Aunque el decreto del Gobierno de 1994 que daba vida a las convivir autorizaba el uso de ‘armas restringidas’ a los ‘servicios especiales de vigilancia’ y no a las ‘cooperativas de seguridad’, fue tal la confusión en el debate público que la Corte decidió dejar claro en su sentencia C-572 de 1997 que las cooperativas Convivir tampoco podrían usarlas.

[85] Comando Segunda Brigada 1996d. Oficio 0717. Valledupar, 26 de abril.

[86] Los firmantes declaran haber conocido el oficio 0360 del Comando de la Primera División, y las circulares 26463 y 27224 de Comando del Ejército que ordenan el combate "por igual a los grupos de justicia privada mal llamados paramilitares junto con las organizaciones narcoterroristas las Farc, ELN y EPL". Véase Comando Batallón de Infantería Treinta y Tres 1998. Oficio 0422, 17 de febrero.

[87] Comando General de las Fuerzas Militares 1997. Circular 16658. Órdenes permanentes sobre grupos de delincuencia organizada. Bogotá, 8 de agosto, 2.

[88] Ibídem.

[89] Comando General de las Fuerzas Militares 1999. Circular 18120. Bogotá, 27 de enero.

[90] Su plan de expansión contemplaba la zona cafetera, el norte del Valle, el noroccidente antioqueño, Guajira, el norte de Cesar, Casanare, el Bajo Magdalena, Putumayo, el noroccidente del Tolima y los Llanos. Véase Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 1996. III Cumbre Nacional. Citado en Comando General de las Fuerzas Militares 1997. Circular 16658. Bogotá, 8 de agosto.

[91] Sobre la coincidencia de las zonas de expansión paramilitar y la presencia de recursos saqueables y tierras aprovechables véase Echandía, Camilo 2013.

Narcotráfico: génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. Informe Fundación Ideas para la Paz 19. Enero.

[92] Comando Segunda Brigada 1998b. Apreciación grupo de justicia privada. Barranquilla, enero.

[93] Comando del Ejército 1997a. Oficio 21150. Informe verificación sobre hechos ocurridos en el departamento del Guaviare. Bogotá, 23 de julio.

[94] Autodefensas Unidas de Colombia 1997. Naturaleza político-militar del movimiento. Consideraciones político-ideológicas. 26 de junio.

[95] Ibídem.

[96] Gobierno Nacional 1997. Decreto 2895, 3 de diciembre.

[97] Comando Segunda Brigada 1998c. Directiva Transitoria 00422, Barranquilla 1.o de marzo.

[98] Comando del Ejército 1997b. Oficio 27432. Bogotá, 18 de diciembre. Anexo a plan de operaciones 'Águila', 8.

[99] Departamento E-3 del Ejército 2000. Acciones del Ejército de Colombia contra grupos de autodefensa ilegales. Diciembre.

[100] Policía Nacional 2001. Apreciación de inteligencia. Comportamiento de las autodefensas. Bogotá, febrero.

[101] Comando del Ejército 1997b, op. cit., 16.

[102] Comando del Ejército 1997c. Órdenes de carácter permanente. Bogotá, 17 de septiembre.

[103] Yesid Arteta.

[104] En sus regiones de influencia, las Farc amenazaban a los candidatos locales diferentes a la Unión Patriótica o al Partido Comunista. Véase Comando Séptima Brigada 1996. Oficio 006451. Villavicencio, 21 de marzo.

[105] Comando General de las Fuerzas Militares 1996. Expediente de inteligencia. Aspectos más relevantes encontrados en los documentos incautados. 25 de junio.

[106] Comando Cuarta División 1995. Apreciación sucinta de las localidades de Miraflores, Calamar y El Retorno.

[107] Comando Décimo Quinta Brigada 1998. Caso táctico El Billar, 35.

[108] Comando Batallón de Infantería 35 1996a. Oficio 3431. Marcha cultivadores de coca. Larandia, 28 de agosto.

[109] Ibídem.

[110] Comando Batallón de Infantería 35 1996b. Oficio 3432. Hechos marchas. Larandia, 28 de agosto.

[111] Ibídem.

[112] Comando Batallón de Infantería 35 1996a, op. cit.

[113] Comando Batallón de Infantería 35 1996b, op. cit.

[114] Personería Municipal Municipio de Montañita 1996. Carta a Procuraduría Departamental. 20 de agosto; Comando Batallón de Infantería 35 1996a; y Comando Batallón de Infantería 35 1996c. Informe. Santuario, 28 de agosto.

[115] Comando Grupo Mecanizado Tres Cabal 1996. Oficio 001753. Ipiales, 23 de abril.

[116] Comando Batallón de Contraguerrillas Dieciocho 1996. Caso táctico 6/96. 23 de enero.

[117] Comando Vigésima Brigada 1996a. Oficio 07870. Envío informe especial. Bogotá, 1.o de septiembre.

[118] Comando Vigésima Brigada 1997b. Oficio 001. Envío informe liberación soldados. Larandia, 20 de junio, 3-4.

[119] Véase Comando Vigésima Brigada 1996b. Oficio 08350. Envío informe especial. Bogotá, 23 de septiembre; Comando Vigésima Brigada 1997b, op. cit.; y Comando Vigésima Brigada 1997c. Oficio 00733. Envío informe de entrevista. Bogotá, 4 de febrero.

[120] Las Farc exigieron el despeje de Cartagena del Chairá y Montañitas, así como la zona del medio y bajo Caguán y las inspecciones de policía del Triunfo, Unión Penaya, San Isidro y Puerto Gaitán. En un comunicado, le advirtieron al Gobierno que dentro del medio y bajo Caguán era necesario despejar también el municipio de Remolinos del Caguán. Véase Farc-EP 1996. Comunicado Comisión internacional. Ciudad de México, 4 de diciembre.

[121] Fueron liberados sesenta soldados secuestrados en Las Delicias, y diez infantes de Marina secuestrados en enero de 1997 en Juradó, Chocó.

[122] Marulanda, Manuel 1997. Saludo enviado al acto de entrega de militares, 15 de junio.

[123] Farc-EP 1997a. Carta abierta al señor Presidente de la República de Colombia. 8 de diciembre.

[124] En febrero de 1997, un desmovilizado de las Farc le señaló al Ejército una casa ubicada en las cercanías del páramo de San Juanito, en Fusagasugá, como refugio de guerrilleros. Luego de dejar a los soldados cerca de la casa, un helicóptero fue atacado con fuego guerrillero y tuvo que salir del área. La tropa en tierra ya había sido cercada y dividida. Luego de asesinar a dieciséis militares, las Farc secuestraron a ocho más, que entregaron al día siguiente en la vereda El Tablón. Véase Departamento E-3 del Ejército 1997. Caso táctico 20/97. San Juanito (Meta). En Ejército Nacional 1999. Compilación casos tácticos 1997-1998. Bogotá: Imprenta del Ejército, 1-31.

[125] Comando Vigésima Brigada 1997d. Informe general liberación soldados secuestrados, junio.

[126] Comando Décimo Quinta Brigada 1998a. Caso táctico cerro de Patascoy, 8 de enero.

[127] En julio, una segunda inspección reiteró las recomendaciones.

[128] Comando Décimo Quinta Brigada 1998a, op. cit., 8.

[129] Comando Décimo Quinta Brigada 1998a, op. cit., 11.

[130] Comando Décimo Quinta Brigada 1998a, op. cit., 10-11.

[131] Comando Décimo Quinta Brigada 1998a, op. cit., 11.

[132] Semanas después, el Ejército supo que, un año y medio antes del ataque, un guerrillero compró un terreno en una vereda contigua al cerro, y actuó como un habitante más de la región; incluso, trabajó con los colonos en la provisión de remesas a la base. Véase ibídem.

[133] Uno de los frentes guerrilleros que participó en la toma de Patascoy había hecho parte de la emboscada en Puerres y el ataque a Las Delicias. Véase ibídem.

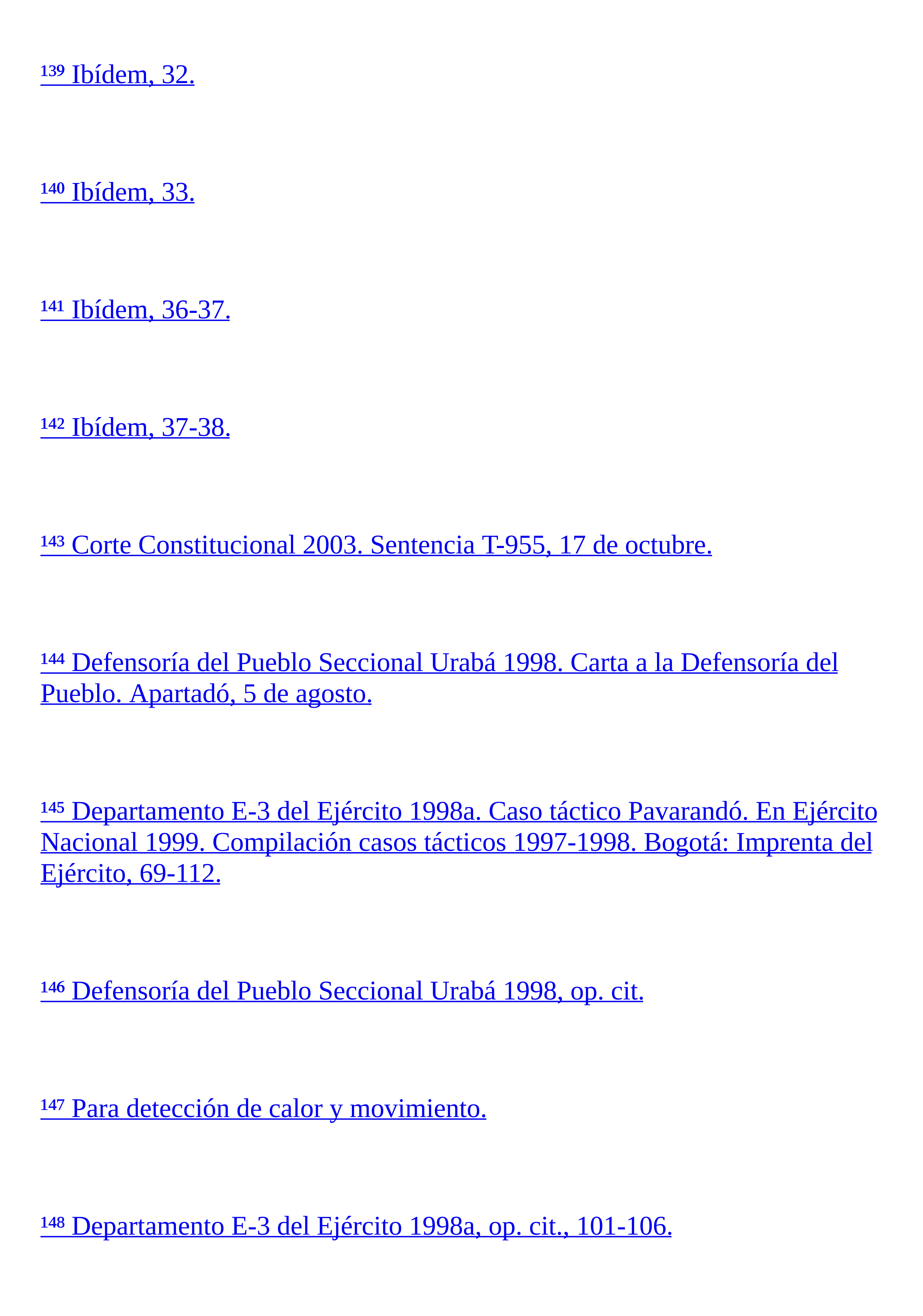
[134] Comando Décimo Quinta Brigada 1998b. Caso táctico El Billar, 27 de marzo, 15.

[135] Comando Décimo Quinta Brigada 1998b, op. cit., 28.

[136] Un reporte oficial habla de 62 militares.

[137] Esa cifra se deduce del listado de militares secuestrados incluido en Comando del Ejército 1999e. Circular 116801. Anexo 5. Relación del personal militar secuestrado por organizaciones terroristas, 24 de septiembre.

[138] Comando Décimo Quinta Brigada 1998b, op. cit., 22.



[139] Ibídem, 32.

[140] Ibídem, 33.

[141] Ibídem, 36-37.

[142] Ibídem, 37-38.

[143] Corte Constitucional 2003. Sentencia T-955, 17 de octubre.

[144] Defensoría del Pueblo Seccional Urabá 1998. Carta a la Defensoría del Pueblo. Apartadó, 5 de agosto.

[145] Departamento E-3 del Ejército 1998a. Caso táctico Pavarandó. En Ejército Nacional 1999. Compilación casos tácticos 1997-1998. Bogotá: Imprenta del Ejército, 69-112.

[146] Defensoría del Pueblo Seccional Urabá 1998, op. cit.

[147] Para detección de calor y movimiento.

[148] Departamento E-3 del Ejército 1998a, op. cit., 101-106.

[149] Departamento E-3 del Ejército 1998b. Caso táctico Tamborales. En Ejército Nacional 1999. Compilación casos tácticos 1997-1998. Bogotá: Imprenta del Ejército, 177-200.

[150] Las Farc reportaron la muerte de cincuenta y tres militares y el secuestro de veinte de ellos. Véase ibídem; y Central de Inteligencia Militar 2000b. Informe Regional de Inteligencia Seis. Medellín, 27 de septiembre.

[151] Departamento E-3 del Ejército 1998c, op. cit., 187-192.

[152] Las Farc ya habían entrado violentamente en Miraflores, Guaviare, en 1995. En aquella oportunidad, quemaron el hospital y la iglesia, y asesinaron a doce soldados y a un integrante de la Cruz Roja. Ese mismo año una patrulla de policía cayó bajo su fuego, y dos años después el turno fue para la base militar de El Retorno.

[153] Según el Ejército, el IRA inventó los cilindros bomba y luego le vendió la tecnología a las Farc. Véase Comando Sexta División 2009. Oficio 0608. Florencia, 29 de junio.

[154] Comando Batallón de Infantería Diecinueve 1998. Caso táctico de Miraflores. En Ejército Nacional 1999. Compilación casos tácticos 1997-1998. Bogotá: Imprenta del Ejército, 33-68.

[155] Departamento E-3 del Ejército 1998c. Caso táctico La Uribe. En Ejército Nacional 1999. Compilación casos tácticos 1997-1998. Bogotá: Imprenta del

Ejército, 113-170.

[156] Departamento E-3 del Ejército 1998c, op. cit., 155-156.

[157] Comando General de Fuerzas Militares 2000. Replanteamiento del nuevo modo de operar de las Farc. Retornando a la guerra de guerrillas para el conflicto irregular colombiano.

[158] Ibídem.

[159] Ibídem.

[160] Comando del Ejército 1997d. Oficio 115352. Bogotá, 1.o de julio.

[161] Ministerio de Defensa 1997. Discurso de posesión del ministro de Defensa Gilberto Echeverry. Citado en Comando del Ejército 1997e. Dirección de Inteligencia. Síntesis analítica, 10 de abril, 3-4.

[162] Ibídem, 6. Véase también referencia a esta apreciación en Comando del Ejército 1997f. Oficio 112491. Bogotá, 15 de abril.

[163] Comando del Ejército 1997g. Informe de inteligencia 032. Análisis artículo de prensa ‘Cumbre de Yerbabuena’. Reflexión sobre la paz. 14 de abril, 1-2.

[164] El preacuerdo del Palacio de Viana entre el Gobierno y el ELN, firmado en Madrid en febrero de 1998, preveía el inicio de preparativos para una Convención Nacional de diálogos de paz en todo el país a partir de junio. Fue desconocido por el ELN luego de que el Gobierno lo diera a conocer públicamente de forma unilateral.

[165] Posteriormente, un grupo de congresistas propuso que el ELN participara en audiencias en el Congreso para exponer sus puntos de vista. Véase Treinta y nueve firmantes de la sociedad y el ELN 1998. Acuerdo Puerta del Cielo. Würzburg, 15 de julio.

[166] Representantes del Consejo Nacional de Paz con miembros de la Sociedad Civil y las Autodefensas Unidas de Colombia 1998. Acuerdo de Nudo del Paramillo, 26 de julio.

[167] Autodefensas Unidas de Colombia 1998. Planteamientos sobre la solución política negociada al conflicto armado interno. Urabá, 13 de abril.

[168] Comando General de las Fuerzas Militares 1998. Oficio 015951. Bogotá, 21 de julio.

[169] Comando Quinta División 1998. Oficio 07167. Visión general de problema. Plan operacional para la seguridad interior ‘Tricolor-98’. Bogotá, 5 de octubre, 3.

[170] Comando del Ejército 1998a. Anexo A de inteligencia al plan de operaciones

001, 24 de enero.

[171] Comando del Ejército 1998b. Circular 112041. Órdenes de carácter permanente. Bogotá, 25 de marzo.

[172] Comando Segunda Brigada 1998b, op. cit., 10.

[173] El control de las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá les proveería además de una retaguardia estratégica.

[174] Véase Comando del Ejército 1999a. Apreciación Ejército de Liberación Nacional (ELN).

[175] El ELN contaba con frentes urbanos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cartagena, Cúcuta, Manizales y Pereira.

[176] El ELN esperaba acumular unas ochenta unidades guerrilleras y treinta mil combatientes para el 2007.

[177] Revista Semana 1998. Lo que vi y viví en Mainz. Por María Isabel Rueda. Edición 846, 17 de agosto.

[178] El Ejército determinó que en San Francisco el ELN realizaba un plan de ‘repoblamiento’, mediante el cual familiares de guerrilleros se empezaron a

asentar en el municipio, fortaleciendo así la capacidad logística de apoyo a la guerrilla desde dicho lugar. En abril de 1999, la guerrilla atacó el puesto de policía del municipio. Véase Comando Cuarta Brigada 2000a. Anexo A de inteligencia orden de operaciones Operación Destello. 20 de enero, 21.

[179] Comando del Ejército 1997h. Oficio 112604. Envío proyecciones. Bogotá, 21 de abril. Véase también Comando Segunda Brigada 1998d. Apreciación inteligencia. Barranquilla, 18 de febrero, 21-24.

[180] A su vez, las Farc atacaron el campamento central de las AUC en el Nudo del Paramillo en diciembre de 1998.

[181] Comando Segunda Brigada 1998e. Oficio 002180. Barranquilla, 30 de octubre.

[182] ELN 1998a. Comunicado de Guerra del ELN, 19 de octubre.

[183] ELN 1998b. Declaraciones de Gabino en video divulgado en noviembre.

[184] Comando del Ejército 1999b. Apreciación financiera del ELN. Departamento E-3, septiembre.

[185] En 1992, el ELN había secuestrado un avión entre Bogotá y Tame, Arauca. Luego de asesinar a tres militares que viajaban a bordo, los guerrilleros dejaron libres al resto de pasajeros y robaron la aeronave.

[186] Central de Inteligencia Militar 1992. Carta de José María Ballestas.

[187] Regional de Inteligencia Siete 1999. Información suministrada por pasajero del avión quien fue liberado en zona rural de Pozo Azul- sur de Bolívar, 6-9.

[188] Ibídem, 8.

[189] Comando Tercera División 2001. Oficio 0577. Envío lecciones aprendidas caso La María, Cali, 7 de febrero.

[190] Los turistas fueron liberados posteriormente tras el pago a sus captores.

[191] Comando Cuarta Brigada 2000b. Oficio 08273. Envío informe situación autopista Medellín-Bogotá. Medellín, 9 de octubre, 1.

[192] Comando Cuarta Brigada 2000c. Oficio 0630. Medellín, 13 de febrero.

[193] Comando Cuarta Brigada 2000b, op. cit., 2-6.

[194] Tres de los secuestrados murieron. Uno más, que había sido secuestrado a inicio del año y acompañaba al grupo del kilómetro 18, logró fugarse durante la persecución.

[195] Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 2000. Carta abierta al Ejército Nacional acantonado en la autopista Medellín-Bogotá.

[196] Farc-EP 2000. Pleno del Estado Mayor Conjunto, 21-25 de marzo.

[197] Ibídem.

[198] Ibídem.

[199] Desde febrero de 2000, la Asociación Civil para la Paz de Colombia (Asocipaz) tomó la vocería de ciudadanos de veintiocho municipios de la zona para movilizar a la población en contra de la desmilitarización.

[200] Comando Quinta Brigada 2001b. Boletín de actividades e informaciones, enero.

[201] Comando Quinta Brigada 2001c. Boletín de actividades e informaciones, febrero.

[202] Comando Quinta Brigada 2001d. Boletín de actividades e informaciones, abril.

[203] Los diálogos del Gobierno con el ELN se suspendieron en mayo de 2002, luego de no poder concretar acuerdos sobre la desmilitarización de una zona para un proceso de paz, ni tampoco sobre la reducción de la intensidad del conflicto.

Capítulo XII

De Mitú al Caguán

Al igual que en los años ochenta, las guerrillas tenían en los noventa más incentivos para buscar su fortalecimiento militar y financiero que para buscar una salida negociada al conflicto. Documentos de los comandantes de las Farc ponen en evidencia que, al apoderarse de la iniciativa militar en el conflicto, consideraban la concesión de una zona desmilitarizada por parte del Gobierno como una oportunidad de continuar su acumulación de fuerzas para la toma del poder, y la discusión sobre una ley de intercambio de prisioneros con el Estado como la forma de crearle una fisura a la Constitución. Para la inteligencia de las Fuerzas Militares, el ELN aspiraba también a lograr por medio de un proceso de paz la concesión de una zona desmilitarizada que le permitiera generar un corredor de movilidad entre los Santanderes y Antioquia, y acumular fuerzas sobre esas dos zonas estratégicas antes de intentar la toma de Bogotá.

De forma paralela, desde 1998, las Fuerzas Militares habían logrado detener la seguidilla de victorias militares de las Farc y activar de forma permanente instancias de coordinación entre Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que habían golpeado duramente a las guerrillas en el pasado. En pleno ascenso cualitativo, y también en tamaño humano y presupuestal, los militares aspiraban a que la pausa estratégica acordada entre el Estado y las Farc diera mejores dividendos para el Estado, hubiera o no acuerdo de paz.

Durante 1998, las Farc hicieron presencia en Vaupés a través de actividades de control poblacional, intimidación armada, asesinatos y desplazamientos, además de control de pistas de tráfico de drogas y armas. Ese año, habían logrado ingresar al país un buen número de chalecos antibalas, lanzagranadas y ametralladoras M-60. Incluso, trajeron instructores peruanos e israelíes a la selva para entrenar a sus comandos. De hecho, uno de sus centros de entrenamiento era la finca de un individuo de quien se decía era ‘brujo’. Allí contaban con una comodidad muy preciada: luz eléctrica. Durante esos meses, las Farc reclutaron unos 150 estudiantes de centros educativos de Mitú y otros municipios, “llevando campañas psicológicas a la juventud, hasta el grado que estos ven en

la subversión una profesión de mayor futuro que cualquier trabajo con el Estado”[1].

Detrás de un colegio municipal, junto al río Vaupés, un campamento de madera, bahareque y techo de zinc les servía a los guerrilleros como puesto para canoas con motores fuera de borda para controlar el río. Era tal el asentamiento en la zona, que los fines de semana los guerrilleros iban a Mitú vestidos de civil a discotecas y a pistas de tejo.

Para agosto, el Ejército conocía una concentración de unos mil quinientos guerrilleros cerca de El Retorno y San José del Guaviare que buscaba “preparar un atentado terrorista de trascendencia nacional”. En ese momento, no había operaciones de las Fuerzas Militares en Vaupés, sino tan solo presencia de la Policía[2].

El primero de noviembre de 1998, a las cinco de la mañana, Romaña lideró el ataque a Mitú. Inicialmente, los guerrilleros hicieron algunos disparos para identificar dónde y cuántos policías estaban en servicio. Luego, el ataque fue total, con cilindros de gas diferenciados por colores, según alcance y capacidad de destrucción. Los guerrilleros usaban boinas rojas y bufandas para identificarse entre sí, aunque algunos usaron brazaletes similares a los de los soldados.

Apenas llegaron las noticias del ataque, dos aviones sobrevolaron Mitú. Con ellos se estableció comunicación con el puesto de policía. Los agentes informaron que tenían cinco heridos. El apoyo de la Fuerza Aérea hizo que el fuego de las Farc disminuyera su intensidad hacia el mediodía, y permitió que aterrizara un avión de la Cruz Roja. En la tarde, los integrantes del puesto de policía asumieron su derrota y salieron del cuartel para iniciar su entrega.

La limitada autonomía de vuelo de las aeronaves militares impedía que llegaran hasta Mitú con refuerzos sin quedar varados allí por falta de combustible. Sin un lugar para abastecerse, los aviones y helicópteros se harían inservibles. En ese momento crítico, Brasil autorizó al Gobierno colombiano el uso de sus pistas aéreas como ‘apoyo humanitario’ a partir del 2 de noviembre. Aunque tal permiso les dio tiempo a los guerrilleros para destruir algunos edificios gubernamentales, cometer asesinatos selectivos y saquear el comercio y bancos[3], allanó el camino para la retoma militar. Las naves harían todo el recorrido hasta territorio brasileño, repostarían allí, y entonces de regreso a sus bases en

Colombia desembarcarían las tropas en Mitú.

El 2 de noviembre en la mañana, algunos aviones de reconocimiento empezaron a sobrevolar Mitú. Al mismo tiempo, un centenar de soldados salieron en cinco helicópteros de la pista de la base de fusileros de San Joaquín, junto al aeropuerto de Querarí, en el sitio conocido como Iquibare, en Brasil. Apoyados por dos helicópteros artillados, desembarcaron a cuatro kilómetros al sureste de la capital de Vaupés. Media hora después, llegó la segunda oleada de desembarcos al mismo lugar.

Mientras avanzaban hacia Mitú, los soldados usaron escáneres para escuchar las comunicaciones radiales de la guerrilla, y así ubicaron su presencia. Pronto iniciaron los combates. Las Farc emplearon su técnica de oleadas para arreciar contra los soldados, atacando y luego replegándose para ser reemplazados por nuevas olas de atacantes. Según el Ejército, la superioridad de las Farc en número de hombres era de una proporción de siete a uno[4]. La tercera oleada de desembarcos llegó desde Iquibare a Mitú, a la vez que los comandantes del Ejército y de la Cuarta División llegaban a San José de Guaviare para dirigir personalmente la operación.

Al oscurecer, los comandantes dieron la orden de replegarse. Para ese momento, habían fallecido dieciséis soldados y cuatro policías. Los heridos fueron evacuados a Brasil, desde donde llegaron nuevos soldados. Más tropas fueron transportadas desde San José del Guaviare. Las comunicaciones interceptadas revelaron que la guerrilla buscaba atraer las tropas hacia una zona donde esperaban aniquilarlas con su poder de fuego.

Por tercer día consecutivo, los guerrilleros combatieron a las tropas hasta que fue claro que no podrían consolidar la toma de Mitú. En la noche, las tropas ya controlaban el casco urbano y la pista de aterrizaje. Al día siguiente, el propio comandante del Ejército visitó la zona de operaciones. Un día más tarde también hizo presencia el presidente de la República. Aunque no se conocían las bajas guerrilleras, las tropas supieron que cuatro volquetas transportaban cadáveres cerca al río Vaupés, por lo que los calculaban en un centenar. En total dieciséis policías murieron en la toma y 72 fueron secuestrados, entre oficiales, suboficiales, patrulleros y auxiliares bachilleres. La retoma le costó la vida a cuatro patrulleros de policías, un suboficial y quince soldados voluntarios[5].

Según el Ejército, “aun cuando el enemigo esperaba que llegaran tropas

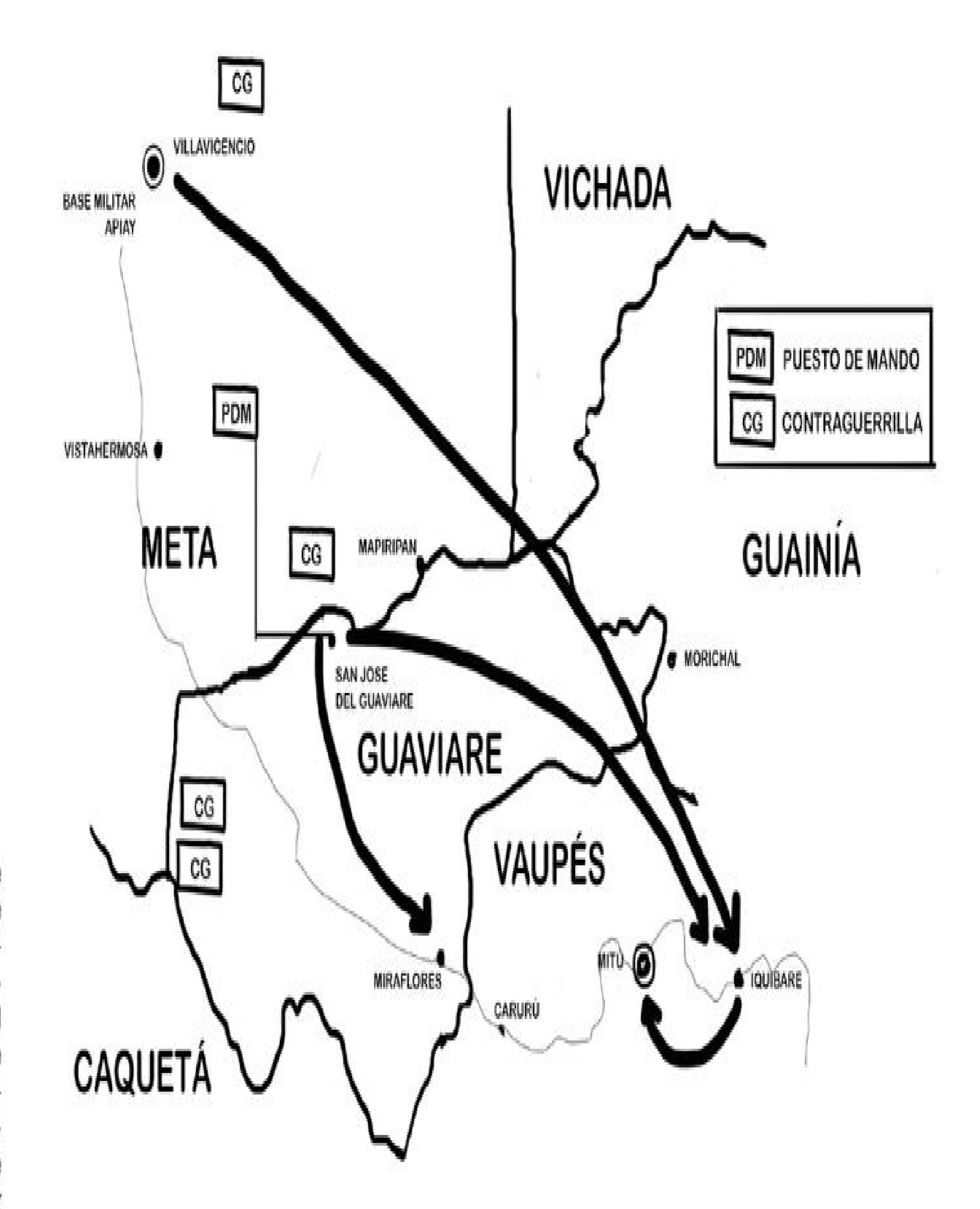
regulares al área de operaciones, nunca esperó que la reacción fuera tan rápida". Según los residentes de Mitú, "algunos guerrilleros se encontraban tomando cerveza y jugando, mientras otros pocos se dedicaban a preparar unas trincheras en los sitios donde esperaban el desembarco de las tropas. Estimaban controlar la localidad [por] una semana, haciendo declaraciones públicas nombrando a Mitú la capital de la república independiente, y [por eso] se observó la sorpresa que [les] causó el desembarco de las tropas en cercanías a la localidad"[6].

A propósito de los desastres militares anteriores, las Fuerzas Militares habían decidido hacer un reentrenamiento de sus tropas, "durante el cual se ensayaron las maniobras y técnicas que en excelente forma fueron aplicadas en los combates de Mitú", tales como las operaciones helicoportadas nocturnas. En la retoma de la capital, los soldados usaron lentes de visión nocturna y luces láser para comunicarse con los pilotos en el aire. El apoyo aéreo fue de gran precisión. A pesar de que las tropas y los guerrilleros en combate a veces estaban separados por solo veinte metros, los bombardeos solo causaron bajas en las Farc[7].

Dibujo 8.

RETOMA MILITAR DE MITÚ

1998



La retoma de Mitú por parte de las Fuerzas Militares de manos de las Farc fue posible gracias a la autorización del Gobierno de Brasil para el uso de la pista de Iquibare, cerca del aeropuerto de Querarí. Allí llegaron las aeronaves al límite del combustible, para poder poder recargar, desembarcar las tropas y retornar a sus bases.

Fuente: Elaboración propia con datos de Comando del Ejército.

Un par de días después de la retoma, entró en vigor la orden del Gobierno de desmilitarizar cinco municipios del sur del país para los diálogos de paz con las Farc. Al momento de entregar la zona desmilitarizada, había 247 secuestrados de las Fuerzas Militares y cientos más de la Policía[8]. Las Farc habían decidido presionar al Gobierno para que aceptara una ley de canje. Con esta, los militares y policías serían liberados a cambio de guerrilleros en las cárceles. “El canje de prisioneros, eso no es sencillo camaradas”, explicaba el Mono Jojoy en 1999, “porque es el rompimiento de la Constitución Nacional del estado burgués, el rompimiento de los principios de la oligarquía, de nuestros enemigos. Y si eso se rompe, se resquebraja ese poder. Se cae. El canje quiere decir una ley que se prolonga en el tiempo mientras dure la guerra”. Por eso, explicaba, “nosotros no pedimos amnistía ni indulto ni nada más sino una ley de canje, eso es lo que hay que decirles a los guerrilleros, a la población civil, a las madres de los soldados, a las de los guerrilleros y a todo el mundo”[9].

El balance de fuerzas

Según decía Manuel Marulanda en mayo de 1997, “en la historia de las Farc, hay cinco hechos muy importantes: el primero, es haber logrado la constitución de las Farc en defensa de los intereses del pueblo colombiano, en pleno auge del Frente Nacional. El segundo, es haber logrado que el Estado Mayor Central mantenga la unidad y disciplina en sus combatientes por 33 años de existencia; haber logrado el cumplimiento, en gran parte, de las metas trazadas por las ocho Conferencias Nacionales y, hoy, contar con miles de combatientes en filas y cientos de mandos, con un partido clandestino, más o menos regular, bajo nuestra dirección. El tercero, el reconocimiento hecho por el ex presidente Belisario Betancur a la insurgencia, como movimiento político alzado en armas, del cual surgió el nuevo movimiento político: Unión Patriótica. Hoy, prácticamente exterminados sus principales cuadros, la mayoría del Partido Comunista y una parte muy considerable de su militancia. El cuarto, el presidente Samper hace afirmaciones reconociéndonos como movimiento político alzado en armas, lo que posibilita en el futuro un acercamiento con un próximo Gobierno, para buscar una salida política con el fin de conseguir la paz. El quinto, las campañas militares, casi simultáneamente en todo el territorio nacional, han demostrado en cada una de ellas una mayor fortaleza, logrando en la última la captura de más de cien soldados y policías de los cuales tenemos sesenta, sin que el poder civil o militar, hasta el momento, hayan logrado la liberación por vía diplomática o militar. Este hecho nos permite ir consiguiendo el reconocimiento internacional, además de abrir amplias posibilidades para desarrollar toda una política tendiente a hacernos entender de quienes toda la vida nos han calificado de antipatriotas, narcoguerrilleros y todo lo que se les ha antojado. Ahora tendremos la oportunidad de reclamar mejor trato de los medios, de los partidos políticos y de las mismas autoridades militares, porque nadie va a entender que mientras el Presidente nos da el estatus político, otros nos siguen calumniando y tratando mal”[10].

Al margen de los elementos retóricos o ideológicos que su declaración contenía, un hecho que resaltaba en esta ocasión era el inusitado despliegue armado que había logrado consumar esa insurgencia. Este, no solo había conducido a su significativa expansión territorial, sino que había llevado a un hecho que poco o ningún antecedente tenía en la historia del conflicto armado en Colombia: la sistemática toma de guarniciones militares y el creciente secuestro de soldados y

policías, que se había convertido en una nueva faceta de la confrontación armada. El cambio de la tradicional operación de 'guerra de guerrillas' a la 'guerra de movimientos', que se amparó en su nueva forma de operar, les había dado resultados. Los ataques perpetrados desde 1996 contra varias bases militares que se hallaban acantonadas en los departamentos de Nariño, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta y Cundinamarca, no solo habían demostrado la efectividad de sus planes de guerra, sino que habían puesto bajo presión a las Fuerzas Militares y de Policía.

Según cifras militares, las acciones armadas de las Farc durante 1998 habían afectado buena parte de la infraestructura del país, y dejado un nefasto resultado tanto para la población civil —asesinato de cientos de personas, interceptación ilegal de vehículos e incineración de varios predios rurales— como para las Fuerzas Militares. Según evaluaba la inteligencia militar, debido a la aplicación de tácticas de guerra regular —movilización, concentración y masa— y guerra irregular —asedio diluido y cortinas—, habían propinado grandes golpes significativos a los militares como los de El Billar, Miraflores, Mitú y Pavarandó, "los cuales arrojaron como resultado el asesinato de 355 de sus miembros, 463 heridos y 296 secuestrados, cifra que comparada con la fuerza efectiva corresponde al uno por ciento aproximadamente, que aunque no es representativa, sí influye en forma negativa en la opinión pública nacional e internacional y da la impresión de que el grupo armado es poseedor de una gran capacidad armada"[11].

Unos meses después, la evaluación militar sugería que la escalada de las Farc "ha sido la de mayor trascendencia para el grupo, ya que nunca antes había tenido la capacidad terrorista de efectuar en forma simultánea ataques contra cuatro bases militares fijas (Uribe, Miraflores, La Linda y Pavarandó), viéndose que para la ocasión contaron con factores como la masa y el empleo adecuado de la técnica del 'asedio diluido'"[12].

Pero ¿cómo era posible que las Farc no solo lograran atacar a la Fuerza Pública con tal despliegue de fuerza, sino que tras esos ataques lograran retener a cientos de soldados y policías? En la década de los ochenta, el Estado había adquirido una pequeña flotilla de aviones Kfir y un considerable arsenal de fusiles, quizá pensando más en eventuales confrontaciones internacionales, y eso no se había traducido en la modernización que las Fuerzas requerían[13].

Luego de tantos años de lucha contrainsurgente, y según la evaluación efectuada

por los altos mandos militares, la situación era más que preocupante. Un pie de fuerza insuficiente para cubrir las más vastas zonas y regiones del territorio nacional; una tropa compuesta, mayoritariamente, por soldados regulares y bachilleres que no solo permanecían poco tiempo en las filas del Ejército —dieciocho y doce meses respectivamente—, sino que no estaba suficientemente preparada para una confrontación armada de tan singulares dimensiones; una dotación exigua que en muchas ocasiones no permitía proporcionarle una indumentaria adecuada y suficiente a los soldados; una obsolescencia tecnológica en materia de instrumentos de comunicación, armamento y medios de transporte; una diversa y entrecruzada serie de funciones asignadas a los militares y policías que los distraía de la lucha contrainsurgente —cuidado de puentes, torres eléctricas, centrales hidroeléctricas, redes viales, oleoductos, etc.—; una manifiesta imposibilidad para movilizar oportunamente las tropas que en un momento dado debían ser trasladadas con el fin de repeler las acciones de los insurgentes; una desarticulación de las tareas y misiones que debían realizar las distintas fuerzas —Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional— respecto de la lucha contrasubversiva; y, lo que quizá era más desafortunado, una caída en la moral de las tropas por los golpes recibidos.

El propósito principal que se trazó el Gobierno a finales de los años noventa fue superar cada una de esas deficiencias y adoptar una estrategia contraofensiva de grande y efectivo alcance. Si de recursos se trataba, recursos se conseguirían. La base fundamental de todo el proceso que en adelante se seguiría con respecto a la modernización de las Fuerzas Militares y de Policía sería el diseño, planeamiento, estructuración y exposición de lo que el Gobierno denominó Plan Colombia.

La primera y más urgente tarea a cumplir fue incorporar cuarenta mil soldados regulares y voluntarios a las filas de las distintas fuerzas, especialmente a las del Ejército; diez mil soldados serían incorporados por año, a fin de llenar, así fuera de manera parcial, los vacíos que tenía en muchos lugares del país. La segunda gran acción fue el diseño de un plan de incentivos económicos —salarios, remuneraciones de distinto orden, pago de prestaciones sociales, etc.— para que quienes se incorporaran permanecieran en las fuerzas. Una tercera tarea fue la de fomentar la integración de las distintas fuerzas y diseñar planes de acción conjuntos y con propósitos definidos en procura de golpear, de manera contundente el mismo objetivo. En cuarto lugar, el proyecto de reforma apuntó a crear unidades de contraguerrilla cada vez más entrenadas y especializadas en la confrontación contrainsurgente. Y, finalmente, el Estado apuntó a una

significativa y sostenida inversión económica en la adquisición de material de intendencia, municiones de todo tipo, aparatos de comunicación y medios de transporte terrestre, fluvial y aéreo.

Con los dineros públicos nacionales destinados a esa empresa, y el sustancial apoyo de los recursos internacionales del Plan Colombia, las Fuerzas Militares crecieron en número de integrantes y sus capacidades mejoraron de manera sustancial. De aproximadamente 82 mil soldados que estaban destinados a la lucha contrainsurgente propiamente dicha, se pasó a 132 mil en poco más de tres años y, adicionalmente, se crearon nuevas unidades como batallones, varias brigadas móviles de contraguerrilla y una serie de unidades de operaciones especiales.

El aporte estadunidense incluyó el envío de 74 helicópteros; cuatro buques patrulleros destinados al servicio de guardacostas; dos aviones de apoyo logístico para favorecer las labores desarrolladas por las fuerzas navales del sur y del Pacífico; cinco aeronaves para el cumplimiento de misiones varias; el entrenamiento de las tripulaciones de esas aeronaves; y la adecuación de las bases militares de Larandia y Tolemaida. Adicionalmente, y en virtud de las partidas presupuestales destinadas para tal efecto, el Gobierno adquirió doce helicópteros Black Hawk, seis helicópteros MI-17 de fabricación rusa y una flotilla de aviones para el transporte de tropa, material de guerra y abastecimiento militar. Se crearon dos batallones de alta montaña en la región de Sumapaz, en Cundinamarca y en los farallones de Valle del Cauca; se activaron cuatro brigadas móviles del Ejército Nacional; una brigada antinarcóticos y una brigada móvil de infantería de marina, a la cual se le adjudicaron 130 botes para realizar operaciones; y otra importante flotilla de embarcaciones fue adquirida para que la Armada Nacional desarrollara tareas de comando y control de zonas fluviales y marítimas. Como muestra de la sofisticación que se buscaba imprimirle a la lucha contrainsurgente, se creó la Fuerza de Despliegue Rápido, una unidad del Ejército integrada por miles de soldados altamente entrenados en el desarrollo de acciones especiales, destinada a realizar operaciones en cualquier parte del territorio nacional.

Para 2005, las Fuerzas Militares se habían vuelto mucho más operativas y sofisticadas gracias al aumento del pie de fuerza, a la reorganización y redefinición de tareas de las unidades militares, a la creación de una docena de brigadas móviles, a la conformación del Comando Conjunto del Caribe y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, a la conformación de catorce escuadrones

móviles de carabineros, y el sustancial aumento de soldados profesionales. De los 22 459 soldados profesionales que había en 1998, el Ejército pasó a contar con 79 176 en 2005.

Además, la incorporación de varios miles de integrantes más al servicio militar y policial robusteció sus sistemas de comunicación, transporte, inteligencia y operatividad, lo que les permitió afianzar el carácter ofensivo que habían asumido unos años atrás. Entre 1999 y 2005, el Plan Colombia significó la llegada de más de tres mil setecientos millones de dólares en ayuda estadounidense, de los cuales, dos mil setecientos correspondían a la ‘lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado’. Como contraparte, el Estado colombiano contribuyó con casi siete mil millones de dólares de su presupuesto[14]. Era claro que para las Fuerzas Militares atacar el narcotráfico, como lo proponía el Plan, significaba atacar las finanzas de los grupos armados ilegales[15]. En años posteriores la ecuación fue reversada, luego de que Estados Unidos aprobara el uso de recursos militares contra las guerrillas como una manera de debilitar el narcotráfico.

En el 2015, quince años después de iniciar el Plan Colombia, las Fuerzas Militares contaban ya con más de doscientos helicópteros para el transporte de tropa y suministros; las brigadas móviles, sofisticadas unidades de combate contrainsurgente, superaban las tres decenas; los batallones de alta montaña habían aumentado a ocho; los escuadrones móviles de carabineros de la Policía habían ascendido a 52 y los batallones de entrenamiento e instrucción eran más de cincuenta.

La operación Vuelo de Ángel, adelantada a finales de 1998 con el fin de recuperar la ciudad de Mitú, constituiría el punto de partida de la sistemática reacción que desde entonces las Fuerzas Militares asumirían contra las organizaciones insurgentes.

La guerra continúa

Ya las Fuerzas Militares habían detectado el daño que las operaciones nocturnas y el apoyo aerotransportado generaba en los planes militares de las Farc[16]. Durante la primera mitad de 1999, ya habían empezado a responder con vigor a la arremetida guerrillera. Durante las ofensivas contra el ELN en el sur de Bolívar y Antioquia, o contra las Farc en Urabá, Cauca, Caquetá y Meta, las bajas subversivas llegaban casi a quinientos. Gran parte de esta renovada capacidad llegaba desde el aire, la cual continuó creciendo en los años siguientes: mientras en 1999 las Fuerzas Militares disponían de unos pocos helicópteros y aviones para acciones ofensivas, inteligencia[17] y transporte, para 2004 las aeronaves llegaban a alrededor del centenar[18].

Además de los apoyos aéreos, la cualificación de las fuerzas había permitido cuadriplicar el número de soldados profesionales entre 1998 y 2005, al tiempo que se reducía la planta de soldados bachilleres. La planta total de militares pasó de casi 250 mil a 380 mil en el mismo periodo, y el porcentaje del producto interno bruto del país dedicado a defensa y seguridad pasó de 3,5 a 4,23[19].

La cualificación también se tradujo en el reforzamiento de las bases militares y puestos de mando con el uso de minas de protección, y parapetos de tierra, arena y cemento para reducir el impacto de las ondas explosivas de los cilindros de gas. Esto, sumado al uso de la táctica de 'repliegue ofensivo' contra los guerrilleros que asediaban bases y patrullas, y el uso de apoyo aéreo, detuvo la seguidilla de éxitos militares de las Farc[20]. Es significativo de este periodo el intento de toma de Hato Corozal, Casanare. Luego de dinamitar un oleoducto, unos trescientos guerrilleros de las Farc atacaron el cuartel de policía con morteros y cilindros en agosto de 1999. La inesperada llegada de una decena de helicópteros y aviones, con desembarcos diurnos y nocturnos, los obligó a desistir del ataque, dejando atrás casi cincuenta guerrilleros muertos y más de quince viviendas civiles dañadas por el ataque[21].

Los reveses militares de las Farc en el Meta, durante sus acciones lanzadas en 1999, señalaban que el escenario había cambiado[22]; sin embargo, este grupo no había perdido su capacidad ofensiva. A finales de 1999, durante tres noches, unos quinientos guerrilleros cruzaron desde el río Atrato hasta la cabecera del río Apartadó. En territorio indígena, algunos se dirigieron al puesto de policía de Juradó, Chocó y otros hacia la base de Infantería de Marina en un cerro del

pueblo. En la madrugada, el mar había inundado el canal que rodea el pueblo, dejando un puente colgante al frente de la base militar como única vía de acceso.

En medio de la lluvia y la oscuridad, granadas y fuego de fusil cayeron sobre una trinchera de la base. Pocos minutos después, cilindros de gas destrozaron parte de la edificación en la parte baja del cerro. Con granadas y ametralladoras, los infantes intentaron repeler el ataque. En la madrugada, un avión fantasma llegó lanzando bengalas y ametrallando el lugar. A pesar de eso, no pudo impedir que los guerrilleros tomaran el cerro con las primeras luces del amanecer. Desde allí cayeron nuevos cilindros a la parte baja de la base durante la tarde, hasta consolidar la toma. Murieron veintiocho militares y decenas más fueron entregados por los guerrilleros al cura párroco junto con un grupo de policías[23].

Mientras, las Fuerzas Militares denunciaban la presión armada de las Farc contra alcaldes y concejales en la zona desmilitarizada, no solo para el ejercicio cotidiano de sus funciones, sino también para la selección de los miembros de la policía cívica que prestaba seguridad[24]. Asimismo, denunciaban la presión sobre docentes y estudiantes, y la invitación a estos a hacer recorridos por los campamentos y participar de 'juegos de guerra', todo lo cual facilitaba la incorporación de jóvenes a la guerrilla durante esos años[25]. Unas quince iglesias cristianas fueron cerradas y más de veinte pastores fueron asesinados en la zona desmilitarizada entre 1999 y el 2000. Más de doce mil cabezas de ganado fueron hurtadas en la zona entre 1999 y el 2001. En ese período, el Ejército identificó unas ocho mil hectáreas y propiedades expropiadas y compradas a través de testaferros. Además, las hectáreas cultivadas de coca en la zona superaban las doce mil, lo que significaba ingresos para las Farc que se contaban en decenas de miles de millones de pesos al año[26]. Campesinos, pastores, tenderos y comerciantes estaban obligados a pagar extorsiones a los guerrilleros, en tanto que los empresarios que se negaron a cumplir con la 'Ley 002' de las Farc, de cobro a grandes patrimonios, fueron vetados, lo que afectó cientos de empleos[27].

Pero la 'Ley 002' de extorsión no había resultado efectiva, y en poco tiempo la financiación de su plan de guerra estaba estancada. En 2002, Marulanda aseguraba que "las empresas petroleras se niegan al pago y hasta ahora no hemos logrado un acuerdo definitivo con ninguno, dicen que pagan, pero no pagan. El fondo ganadero tampoco paga el impuesto y por ello, donde se pueden nos vemos obligados a confiscar el ganado, el cual solo sirve para el consumo por el momento […] Las pocas fincas que tenemos con algunas vacas solo producen uno que otro ternero para el gasto y como no somos expertos en negocios solo

nos producen pérdidas […] Los planes para sembrar yuca, plátano, caña, maíz, y arroz en algunos frentes no están dadas las condiciones y en otros se convierte en un problema porque los padres de la nueva generación de guerrilleros no los enseñaron a trabajar para crear su propio bienestar de vida y quieren que se les entregue todo servido”[28].

Respecto a los secuestros, “concluimos que todos los personajes que disponen de dinero para retenerlos ya no se encuentran en los departamentos. Y los que pueden contribuir con cuotas voluntarias para el sostenimiento del movimiento son muy pocos […] La antipopular política de retenciones todavía no hemos logrado el objetivo de suspenderla siendo hasta ahora la principal fuente de financiación por mucho más tiempo y por lo que entiendo todavía no hemos logrado recaudar siquiera el 30 por ciento para el fondo de 120 millones de dólares que mandó el pleno del 2000 al Estado Mayor Central”. Ante la posibilidad de intentos de rescates militares a los secuestrados, sentenciaba que “si los hacen matar, ellos son los responsables por no haber negociado”[29].

La estrategia de control de las Farc ordenaba a toda persona mayor de quince años a inscribirse obligatoriamente como socio de la Junta de Acción Comunal de su vereda, so pena de destierro[30]. Durante los años de la zona desmilitarizada, las Farc pretendían vigilar a vendedores ambulantes, comerciantes y visitantes sospechosos de ser informantes del Ejército o de los grupos paramilitares, y algunas personas fueron incluso encerradas en la cárcel de Vistahermosa[31]. En medio de la paranoia, los habitantes del área se enfrentaban al tiempo a las amenazas de las Farc contra quienes no se unían a su red de informantes[32], asesinatos selectivos y amenazas de la guerrilla contra concejales y alcaldes[33], y los panfletos firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia que advertían de actos de violencia contra ellos.

El Ejército evaluaba que las Farc esperaban quedarse mucho tiempo en la zona, razón por la cual “pusieron mucho empeño” en arreglar las fincas y casas asignadas a los jefes guerrilleros, casi siempre con cercas de colores negro con rojo y negro con verde. Algunas fincas tenían incluso helicópteros y avionetas. Como si fuera poco, era frecuente la participación de empresarios, artistas y otros civiles en las fiestas que organizaban los comandantes guerrilleros[34].

Durante esos años, las Farc insistieron en la consecución de armamento antiaéreo que les permitiera contrarrestar la ventaja operacional que ahora tenían las Fuerzas Militares. Para ello, construyeron rampas de lanzamiento, trincheras

y fortificaciones de concreto que los protegieran de un bombardeo. "No estamos en guerra de posiciones todavía", decía el Mono Jojoy en 1999, "a no ser que nos llegue armamento antiaéreo y entonces se les complique todo"[35]. Mientras tanto, el Mono Jojoy esperaba concentrar más de dos mil guerrilleros "para producir un golpe de grandes proporciones, o medianas proporciones, que haga estremecer nuevamente a la oligarquía de este país y les meta fuerza a las conversaciones. Y si eso da motivos para que el gobierno rompa, pues que se haga. Eso nosotros no tenemos problemas"[36].

Adicionalmente, a los cinco bloques y dos comandos conjuntos con los que las Farc pretendían dividir militarmente el país, en 1999, iniciaron la constitución del llamado 'bloque móvil uno', que contaría, al principio, con quinientos combatientes y cuya misión era tomarse las cordilleras central y occidental en las cercanías de Cali[37]. Las Farc identificaron esa segunda área de despliegue "porque lo de Bogotá, como le hemos metido tanto esfuerzo, el Ejército ha tomado muchas medidas. Entonces hay que ir buscando variantes a ese plan estratégico"[38]. En la versión más reciente de su plan, una vez acumularan 32 mil combatientes lanzarían la primera ofensiva, desplegando la mitad sobre la cordillera Oriental para intentar tomar Bogotá y aniquilar las Fuerzas Militares en Caquetá y Putumayo, aislando todo el oriente del país. Tendrían además en torno a Cali una zona para distraer y dispersar a los soldados. Al cortar la comunicación entre Bogotá y Villavicencio, tomando la vía al Llano, la de Cali a Pasto, y la carretera Panamericana, efectuarían un bloqueo a las dos ciudades capitales.

"Que eso quede bien claro en todos los estados mayores de frentes y demás comandos de unidades, para no hacerse ilusiones con estas conversaciones", advertía el Mono Jojoy en 1999. "Es un avance de orden militar el hecho de que el Gobierno, a través del régimen político, permita el despeje de cinco municipios. Ahí hay que explotar al máximo para organizar a la gente que hay dentro de estas áreas, para tomar el control territorial del poder local, pero nosotros no luchamos por el área de esos cinco municipios o San Vicente, luchamos por el poder nacional, por arrancárselo a la oligarquía y ponerlos a ustedes a gobernar"[39]. Según explicaba, "nosotros no vamos a pactar ninguna paz porque no existe, es carreta. Ni siquiera tomándonos el poder viene la paz, porque viene es la guerra con los gringos y las otras potencias, y ya están aquí; además, esta lucha es larga, prolongada y sangrienta, y para eso hay que estar uno psicológicamente preparado. Muchos de nosotros no llegaremos ni siquiera a la toma del poder"[40].

Uno de los jefes de las Farc, Simón Trinidad, aseguraba en 2001, desde la zona desmilitarizada, que “nosotros queremos gobernar, ni siquiera cogobernar. Vamos a reconstruir el país”. Según Trinidad, no ejercían solo control sobre territorios, sino que “estamos también en desarrollo de un nuevo Estado. Somos un Estado en gestación”[41].

La posición de fuerza de las Farc en esos años contrastaba con la relativa debilidad militar del ELN. El Mono Jojoy explicaba a sus guerrilleros que “el ELN tiene muchas discrepancias con nosotros: por territorio, por finanzas, por población civil y por comportamiento. Entonces se dijo que nadie volviera a utilizar el nombre de la Coordinadora Guerrillera, porque ellos estaban utilizando el nombre de la Coordinadora Guerrillera para decir: ‘la Coordinadora Guerrillera realizó tales combates’, los que nosotros hacíamos, por los medios de propaganda de ellos para darse caché. Dejamos los elenos quieticos”[42].

Infografía 4.

OPERACIÓN ORIÓN EN MEDELLÍN

2002

Entre el 16 y 18 de octubre de 2002, la Fuerza Pública y autoridades judiciales entraron a los barrios de la zona occidental de Medellín que componen la comuna 13, en la primera gran operación militar desarrollada en una ciudad contra miembros de las guerrillas y grupos armados ilegales. A estos días de ofensiva militar le siguieron meses de presencia de Fuerza Pública y autoridades.

Colombia

Departamento de Antioquia

LUGARES

- BELENCITO CORAZÓN
- BELÉN CORAZÓN
- BARRIOS INDEPENDENCIA I, II, III
- URBANIZACIÓN SAN MICHEL
- BARRIOS NUEVOS CONQUISTADORES
- URBANIZACIÓN CITARÁ
- TERRIGENOS
- CAÑALÓN Y EL SEIS
- LA ARENERA
- CUATRO ESQUINAS
- LA GALLERA
- LA ANTENA
- PLAN DEL CHE
- JUAN XXIII Y LA DIVISA
- BLANQUIZAL, OLAYA HERRERA Y EL PESEBRE
- CERRO PADRE AMAYA

PARTICIPANTES


Milicianos


Carro de combate


Ejército Nacional Número de unidades


Francotiradores Fuerza Pública


Número total de soldados y policías*


Ingreso de tropas a pie


Ingreso por Belén Corazón



Fuente: Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía Nacional, Sijin, Fiscalía General, CTI, DAS y Procuraduría.

*Para el 18 de octubre el número de soldados y policías en el área subió a 640. No se cuenta personal en los alrededores.

La noche anterior a la Operación, la Fuerza Pública hace un cierre de las vías que comunican la comuna 13 con el resto de la ciudad.

16 OCTUBRE

2:00 / Inicio de la operación Orión.
2:30 / Primeros combates.
4:00 / Primeros soldados heridos. Continúan los combates.

[illegible]

17 OCTUBRE

[illegible]

18 OCTUBRE

[illegible]

19 OCTUBRE

[illegible]

Fuente: [illegible]

En febrero de 1999, tres estadounidenses que trabajaban con la comunidad indígena U'wa, entre Boyacá y Arauca, fueron secuestrados por las Farc[43]. El presidente del cabildo indígena se encargó de informar a la embajada estadounidense. Según agentes de inteligencia del Ejército, el Mono Jojoy aprobó la ejecución de los tres, cuyos cuerpos fueron encontrados en marzo en territorio venezolano[44]. De acuerdo con las explicaciones dadas por Simón Trinidad en 2001, las Farc rechazaban la presencia de "funcionarios extranjeros que dictan cursos de preparación de líderes, y muchos de esos cursos preparan a estos líderes en contra de nuestra organización. Entonces eso es injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Estaban en un área fuera de la zona de despeje donde hay movimiento guerrillero y recursos naturales de petróleo, agua y biodiversidad inmensos. No se sabe qué están haciendo o disfrazando su actividad". Según advertía, "como nuevo Estado, pequeño, pero Estado, al fin y al cabo, se nos debe poner en conocimiento de las actividades que vienen a hacer en nuestro país cualquier extranjero. Y nuestro territorio es todo el país"[45].

Los ataques de las Farc en los alrededores de la zona desmilitarizada eran interpretados como una estrategia para intentar aumentar el radio de influencia del territorio bajo su control[46]. Por ello, el Gobierno ordenó en 2001 a las Fuerzas Militares implementar un plan para bloquear las vías terrestres y fluviales de entrada y salida a los municipios, y el control a vehículos y personas, incluyendo retenes fijos[47].

Cambia la iniciativa

Una carta de las AUC, escrita a inicios de 1999, se quejaba de los señalamientos públicos hechos por el Comando de la Cuarta Brigada contra la Casa Castaño por su responsabilidad en las masacres de civiles ocurridas en su jurisdicción en los últimos meses. “Se está poniendo en el patíbulo frente a la guerrilla a una familia totalmente inocente, víctima de la subversión y ahora del Ejército”[48], decía.

Pese a este reclamo, el Ejército advertía que los paramilitares “están en capacidad de ejecutar actos terroristas como emboscadas a convoy militar, secuestros, asesinatos, chantajes, extorsión, intimidaciones a la población civil, portando armas y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. En febrero de 1999, luego de la incursión de las AUC en territorio indígena embera-katío, en Tierralta, el Ejército descubrió que días antes habían hecho un “retén fluvial en el río Sinú”. Cuatro personas habían sido asesinadas y varias chalupas y algunas viviendas terminaron incineradas. Los indígenas fueron amenazados y obligados a abandonar la zona. “Según informaciones de la gente del sector, las personas que fueron asesinadas colaboraban con grupos al margen de la ley, dando informaciones y transportando personal armado”[49].

Al apoyarse activamente en la población civil para el desarrollo de sus actividades, los grupos armados ilegales la ponían en medio del conflicto. La guerrilla hacía presencia en los campos de desplazados en la zona de Riosucio, Turbo y Apartadó, entre Antioquia y Chocó, cerca de la frontera con Panamá. Una decena de territorios se declararon ‘comunidades de paz’ neutrales en el conflicto. Según el Ejército, en 1999 las Farc “ha colocado milicianos de su organización dentro de estas comunidades, con el fin de mantener el control de las personas que habitan en las localidades nombradas, y realizan un trabajo de masas que les permiten mantener el dominio de la zona. Se ha llegado a cometer delitos graves como secuestro, narcotráfico, asesinatos selectivos, amparados en una supuesta prohibición de no tránsito de la Fuerza Pública en dicha región”[50]. La comunidad de San José de Apartadó denunciaba ese mismo año “los atropellos que sufrimos por parte de todos los actores armados”, incluida la guerrilla y, sobre todo, retenes y asesinatos cometidos por grupos paramilitares “desde hace casi dos años”[51].

A las Fuerzas Militares les seguía incomodando la manera en que se denominaban públicamente a los ejércitos privados. “Es importante utilizar el término de ‘autodefensas’, para no hacerle el juego a la subversión, que usa el término ‘paramilitar’ como parte de la guerra política que adelanta contra el Estado colombiano, para presentarlo en el exterior como si estuviera en connivencia con estos grupos al margen de la ley”[52].

La muerte de cuatro soldados en acciones contra las AUC en Tuluá, Valle del Cauca, y Remedios, Antioquia, entre febrero y marzo de 2000, hizo parte del argumento con el que el Comando del Ejército justificó que “esta organización delincuencial está en contra de los principios, valores y normas del Estado de derecho. La que el Ejército debe combatir de manera contundente y decisiva en aras de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”. Dado que las AUC “han causado malestar a la opinión pública nacional e internacional por la violación de derechos humanos”, ordenaba no solo “adelantar operaciones militares para neutralizar las masacres, el narcotráfico y demás actividades delincuenciales de esos grupos”, sino “ejercer el control para evitar que la institución sea objeto de comprometimiento con estos antisociales, y para ello debe adelantarse una campaña individual con el fin de concientizar a nuestros hombres de que cualquier comprometimiento, ya sea con las Autodefensas Unidas de Colombia o subversión, será reprimida con todo el rigor de las normas y reglamentos de la Fuerza”. Citando las órdenes de operar contra las AUC emitidas entre 1997 y el 2000, el Comando advertía que “su incumplimiento genera el delito de desobediencia”[53]. El posible apoyo de algunos miembros de grupos de contraguerrillas a las AUC hizo parte de las investigaciones internas a mediados del 2000[54].

Al tiempo que los panfletos de las AUC advertían en veredas de todo el país que “nadie, absolutamente nadie puede permitir la entrada de guerrilleros a sus casas, ni brindarles ningún tipo de apoyo”, y que “no respondemos por nada de lo que suceda en viviendas cercanas a los campamentos guerrilleros ni en casas donde se alojen guerrilleros aunque estén de civil”[55], invitaban a los miembros de las Fuerzas Militares a no combatirse entre sí. “Soldados de Colombia”, decía uno de sus comunicados en 2000, “las autodefensas no somos sus enemigos […] Pensemos quién se beneficia de un virtual enfrentamiento entre Ejército y las autodefensas […] Lamentamos doblemente el incidente en que resultó muerto el soldado voluntario […] También la muerte de un suboficial y dos soldados […] Todas nuestras unidades tienen la orden de evitar a toda costa enfrentamientos con el Ejército y solo hacen uso de nuestras armas en caso extremo en que

nuestras vidas y libertad sean puestas en grave riesgo”[56]. Al tiempo, insistían en una campaña de propaganda para defender su estatus de actor político, presentando la Alianza por la Unidad de Colombia como su proyecto de movimiento político posterior a una eventual negociación con el Gobierno[57].

La retoma de la iniciativa militar en el conflicto por parte de las Fuerzas Militares ya era evidente en 2000. La salida de medio millar de guerrilleros desde la zona desmilitarizada en junio de ese año puso en alerta a los militares. Muchos de los insurgentes, menores de edad y recién reclutados, no superaron la prueba de fuego de iniciar una larga marcha para entrar en combate, que los desplazó desde el Meta hasta Norte de Santander, pasando por Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca. Algunos terminaron desmovilizándose con el Ejército. Con la información recogida, los militares siguieron a los grupos guerrilleros hasta el páramo Berlín, donde los combates entre noviembre y enero de 2001 provocaron la muerte de setenta guerrilleros y la desmovilización de 131, entre ellos sesenta menores[58].

Marulanda criticaba la calidad de los reclutados desde el año 2000 calificándolos de ‘exigentes’, y argumentando que “si no tienen un fusil AK último modelo no pueden pelear; y [si] por algún motivo especial les tocara consumir, maíz, café, manteca, plátano y yuca, ojalá sin carne por tres días, hasta ahí llegaría la moral revolucionaria, porque [para ellos] consumir estos artículos no tiene presentación, para eso tenemos plata para conseguir otro tipo de alimentación […] Antes los desodorantes eran polvos ahora tienen que ser desodorantes finos de 10 y doce mil pesos. Una caja dental normal ya es un deshonor tenerla, por su mala calidad no sirve. Tiene que ser de metal muy fino. Un uniforme si no es camuflado no representa nada”. En su concepto “de no corregirse a tiempo esta tendencia y comentarios, más tarde algunos pasarán al otro lado a buscar [un] mejor medio de vida porque en las Farc no lo encontró como lo había soñado”[59].

En tanto que las Farc no habían aceptado pactar un cese bilateral del fuego con el Gobierno Nacional durante los tres años que duraron los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, los militares habían continuado desarrollando acciones ofensivas y defensivas contra esa organización guerrillera. Sofisticadas operaciones militares adelantadas en Puerto Rico, Caquetá; Puerto Lleras, Meta; y Hato Corozal, Casanare, le infligieron duros golpes a la insurgencia: más de ciento cincuenta guerrilleros muertos y una cifra superior de detenidos daban cuenta del poder ofensivo que las tropas del Ejército habían adquirido.

En agosto de 2001, las operaciones adelantadas en los departamentos del Meta y Guaviare permitirían la desarticulación de dos columnas móviles de la guerrilla de las Farc. Durante ese mismo año, se llevaría a cabo una operación con la cual se logró golpear duramente a la guerrilla y desmantelar la infraestructura que esa insurgencia había levantado en medio de la selva para desarrollar actividades conexas con la producción de narcóticos. Las capturas en Vichada proporcionaron evidencias de las relaciones de tráfico de drogas[60] y armamento de las Farc con socios brasileños, venezolanos y peruanos[61]. Disfrazados de militares peruanos, guerrilleros habrían recibido en la pista aérea de Puerto Príncipe, Vichada, un cargamento de más de siete mil fusiles, ametralladoras M-60 y punto 50, morteros de sesenta milímetros, lanzagranadas y dieciocho misiles. Estos misiles "fueron lanzados sobre el río Mitú, ingresando por Puerto Inírida, saliendo por Caño Colorado hacia el área base del bandolero conocido como el Negro Acacio, quien personalmente se los llevó al Mono Jojoy, en el área de distensión. Venían las cajas con letreros borrados y dentro de ellas un misil por caja. Cada una de ellas debía ser levantada por diez hombres dado el peso. Tenían de ancho 1.50 metros y el diámetro de un ataúd. Los misiles fueron transportados en el bote tanque El Delfín"[62].

Unos meses antes, el Ejército estimaba que la poca presencia del Estado en la región de Vichada permitía a las Farc "hacer presencia y ejercer dominio entre los moradores, tanto indígenas como colonos, lo cual se observa en el respaldo que por intimidación o simpatía ofrecen a dichos grupos y que desfavorece el cumplimiento de nuestra misión"[63]. Estas condiciones además favorecían el reclutamiento de jóvenes, "aprovechando factores tales como inestabilidad económica, el espíritu aventurero de todo joven, entregándole además cierta cantidad de dinero que después, al no poder pagarlo cuando ellos dicen, queda automáticamente comprometido y es reclutado. En otras ocasiones les prometen buen salario fijo y además el derecho a desplazarse por las regiones portando un arma y defendiendo los intereses 'comunes' sin tener que trabajar"[64].

De ahí que, al iniciarse la ofensiva militar en esa zona, los jefes de las Farc "se repliegan y esconden en las fincas cercanas donde les brindan protección y les colaboran con víveres y alojamiento". Al tiempo, "los narcotraficantes encaletan la base de coca en las diferentes fincas aledañas al sector. Para esta actividad utilizan cantinas de leche, las cuales son enterradas". En el combate, si "se les presenta la oportunidad de evadir los cercos, acuden a las fincas vistiendo de civil, enterrando las armas y pasándose por trabajadores, contando con la complicidad, bien sea voluntaria o forzada, de los propietarios de las mismas o

administradores”[65].

Un cuidadoso seguimiento al accionar de las columnas y frentes de guerra de las Farc le había permitido a las Fuerzas Militares determinar cuáles eran sus zonas de injerencia, sus maneras de actuar, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, el número de sus integrantes, sus principales líderes, su dotación, sus fortalezas y sus debilidades operacionales, su capacidad y habilidad para realizar emboscadas, su forma de golpear y escabullirse, el control ejercido sobre la población civil, y la rígida y disciplinada línea de mando con que se dirigía cada una de las unidades de combate de esa guerrilla. El despliegue de las operaciones que se diseñaron e implementaron durante los años siguientes así lo confirmarían: los militares no solo golpearon de manera sistemática a los diversos frentes y columnas de la insurgencia, sino que, por primera vez, y después de tantos años de confrontación armada, le asestarían golpes definitivos a la máxima comandancia de las Farc.

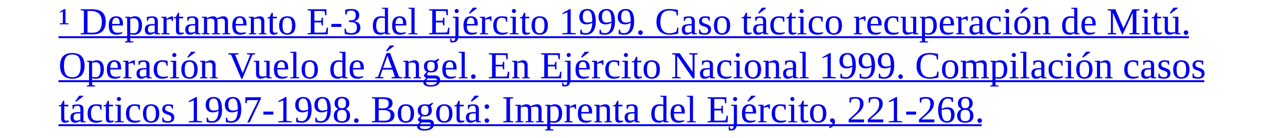
En ese contexto, un poco más de dos mil quinientas personas se desmovilizaron entre 1998 y 2001 de las Farc, el ELN y grupos paramilitares, acudiendo casi todos a las Fuerzas Militares, pero también a autoridades civiles o a la Iglesia Católica[66]. De ellos, más de una cuarta parte eran menores de edad[67].

Según el balance de Manuel Marulanda, los años de la zona desmilitarizada le habían permitido a las Farc, además de hacer política, crear nuevos frentes, compañías y columnas móviles en Caquetá, Huila, Meta, Cundinamarca; una escuela móvil de bachilleres para que en el futuro pudieran “solucionar algunas necesidades de cuadros para el futuro de los bloques”; una escuela nacional de cuadros; nuevos corredores de movilidad; hospitales clandestinos; y proyectos de fincas productivas en Meta y Caquetá “teniendo en cuenta el plan para la toma de los dos departamentos”. Además, concretaron la consecución de 10 mil fusiles “con el fin de cubrir necesidades acorde con el plan estratégico y poder seguir efectuando el reclutamiento que estaba paralizado por falta de armas”[68].

El fin de la zona desmilitarizada para los diálogos con las Farc, en febrero de 2002, significó la retirada de cuatro mil guerrilleros, incluyendo la comandancia[69]. Unos días antes, Manuel Marulanda aseguraba que, en caso de que el Gobierno decidiera terminar la desmilitarización, “tenemos pensado no hacer resistencia alguna, para evitar que nos midan el aceite y para que no digan que el Ejército está en capacidad de sacarnos de cualquier parte”[70]. Al no haber acumulado los 32 mil combatientes proyectados para lanzar su primera gran

ofensiva sobre Bogotá, las Farc decidieron entrar en una fase de protección de la fuerza acumulada y evitar la exposición al fuego militar.

Notas


[1] Departamento E-3 del Ejército 1999. Caso táctico recuperación de Mitú. Operación Vuelo de Ángel. En Ejército Nacional 1999. Compilación casos tácticos 1997-1998. Bogotá: Imprenta del Ejército, 221-268.

[2] Ibídem, 229.

[3] Ibídem, 249.

[4] Ibídem, 245.

[5] Ibídem, 221, 240.

[6] Ibídem, 241.

[7] Ibídem, 242.

[8] En 2000, el Gobierno negoció en Cuba con el ELN la liberación de 39 soldados

y policías, y tres agentes del DAS. A finales de junio de 2001, las Farc liberaron a 323 militares y policías en el marco de un acuerdo 'de carácter humanitario' firmado con el Gobierno que, sin embargo, no incluyó a decenas más que continuaron secuestrados. Unos quince guerrilleros enfermos de las Farc fueron liberados en contraprestación.

[9] Central de Inteligencia Militar 2000a, op. cit.

[10] Farc-EP 1997. Mensaje de Manuel Marulanda Vélez a los miembros de las Farc-EP, con motivo de la celebración del trigésimo tercer aniversario de esa organización guerrillera, 2 de mayo.

[11] Comando del Ejército 1999c. Análisis comportamiento armado Farc 1998. Departamento E-3. Septiembre.

[12] Comando del Ejército 1999d. Análisis de concentración Farc. Central de Inteligencia Militar. División de análisis y producción, CIME-DAP-INT1.252, 15 de febrero.

[13] Entrevista a General en retiro, excomandante de las Fuerzas Militares, 10 de octubre de 2016.

[14] Departamento Nacional de Planeación 2006a. Balance Plan Colombia. Dirección de Justicia y Seguridad. Septiembre, 11.

[15] Comando Tercera Brigada 2001a. Anexo L al Plan de Campaña 2001.

Instrucciones para el desarrollo de operaciones conjuntas contra el narcotráfico durante la ejecución de la campaña 2001. Cali, febrero.

[16] Comando del Ejército. Fuerza de Despliegue Rápido 2000. Nuevos procedimientos delictivos del enemigo. Rionegro, 23 de octubre.

[17] A partir de esos años, las Fuerzas Militares empezaron a contar con mapas satelitales de la Agencia de Mapeo Estadounidense (DMA) que les permitieron dar un salto cualitativo en precisión y conocimiento de las zonas de operaciones.

[18] Las Fuerzas militares y de Policía pasaron de tener unos 35 helicópteros en 1999 a más de doscientos en 2014. Véase Departamento Nacional de Planeación 2006a, op. cit., 23-24; y Departamento Nacional de Planeación 2016b. Plan Colombia: balance de los quince años. Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, 3.

[19] Departamento Nacional de Planeación 2006a, op. cit., 12-13, 18-19.

[20] Comando Cuarta División 1999. Boletín de instrucción 003. Las ramplas ‘cilindros de gas’.

[21] Comando Décimo Octava Brigada 1999. Caso táctico Hato Corozal. Presentación.

[22] Pese a ello, en julio de 1999 lograron asestarle un golpe al Ejército con el asesinato de 38 militares en Gutiérrez, Cundinamarca. Y en octubre de 2000,

durante la toma armada de las Farc a Dabeiba, Antioquia, perdieron la vida 54 militares.

[23] Central de Inteligencia Militar 2000b, op. cit.

[24] La desmilitarización de San Vicente del Caguán, en Caquetá, y La Macarena, Vistahermosa, La Uribe y Mesetas, en Meta, significó la salida de la Fuerza Pública, incluida la Policía, cuyas funciones fueron asumidas por miembros de la comunidad autorizados por los alcaldes.

[25] Comando Cuarta División 2001. Irregularidades en la zona de distensión. Presentación.

[26] Informes de inteligencia estimaban que los cobros anuales de las Farc al cultivo y cosecha de hoja de coca, a los laboratorios, cristalizaderos, gramaje a la base de coca y uso de pistas clandestinas sumaban a principios del siglo XXI unos 32 mil millones de pesos. El valor de la cocaína procesada podía representar hasta unos 1,7 billones de pesos adicionales. Adicionalmente, el Ejército estimaba que las Farc obtenía al año unos 250 mil millones de pesos por secuestro, 1,5 billones por extorsión, y más de doscientos mil millones por hurto de ganado, asalto a bancos, robo de combustible y rendimientos de sus inversiones legales. La suma de estas cifras sugiere que las Farc podrían recibir anualmente a principios del siglo hasta 3,8 billones de pesos al año, un 46 % por actividades relacionadas con narcotráfico, y 41 % por extorsión. Los egresos de sostenimiento de la guerrilla, en términos de alimentación, compra de armamento, salud, viajes, capacitación y apoyo a familiares de guerrilleros sumaban al año unos 126 mil millones; el material gastado en sus acciones armadas anuales ascendía a 280 mil millones; y el de sus acciones de propaganda e infiltraciones 46 mil millones. Esta contabilidad parece sin embargo contradecir las comunicaciones internas de las Farc de la época en la que se describe la falta de recursos para implementar su plan de guerra. Véase Junta de Inteligencia Conjunta 2006. Documento de análisis sobre plan

estratégico de Farc.

[27] Comando Cuarta División 2001, op. cit.

[28] Marulanda, Manuel 2002. Carta. Camaradas del Secretariado. Miembros del Estado Mayor Central y mandos, junio.

[29] Ibídem.

[30] Farc-EP s.f. Reglamento interno del buen funcionamiento de las JAC de las veredas.

[31] Comando Fuerza de Tarea Conjunta del Sur 1999. Oficio 0984. Larandia, 6 de abril; véase también Comando Cuarta División 2001, op. cit.

[32] Comando Brigada contra el Narcotráfico 2001. Oficio 1812. Larandia, 20 de noviembre. Fuerza de Tarea Conjunta del Sur.

[33] Las amenazas y ataques a concejales y alcaldes continuaron incluso después del fin de la zona desmilitarizada, por lo menos hasta el año 2009, lo cual produjo renuncias masivas como las de concejales de San Vicente del Caguán en el 2004. En el 2008 en Puerto Rico, Caquetá, las Farc entraron al Concejo Municipal en plena sesión y asesinaron a cinco concejales, e hirieron a cinco personas más. Véase Comando Batallón de Infantería de Selva Treinta y Cinco 2001. Oficio 0182. Larandia, 12 de octubre.

[34] Comando Batallón de Infantería Treinta y Seis 2002. Informe especial de inteligencia antigua Z/D, 15.

[35] Unas comunicaciones interceptadas al Mono Jojoy hablan del derribo de "un avión OV10 de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana)", lo que coincide temporalmente con la inexplicada explosión en el aire de un avión comercial en noviembre de 2000 entre Montañita y Puerto Rico, Caquetá. Véase Revista Cambio 2001. La doctrina Jojoy. Edición 396, 22-29 de enero, 18-21.

[36] Comando del Ejército. Fuerza de Despliegue Rápido 2000. Nuevos procedimientos delictivos del enemigo. Rionegro, 23 de octubre; y Central de Inteligencia Militar 2000a, op. cit.

[37] El Ejército calculaba que en el 2000 las Farc contaban con 58 estructuras móviles entre compañías y columnas. Además, habían creado cuatro bloques móviles que operaban en las regiones de Valle del Cauca y Cauca; Meta y Vichada; Magdalena Medio; y Yarí y Putumayo.

[38] Central de Inteligencia Militar 2000a, op. cit.

[39] Ibídem.

[40] Ibídem.

[41] Entrevista a Simón Trinidad en Marón, Karen 2002. Farc se declaran Estado en gestación. Tiempos del Mundo 2001, 4 de octubre.

[42] Central de Inteligencia Militar 2000a, op. cit.

[43] El territorio U'wa era de gran interés petrolero y hubo varias manifestaciones en contra de la decisión del Gobierno de conceder licencias de explotación a empresas extranjeras. Las guerrillas hacían presencia en la zona e instigaban la protesta social y el rechazo a la presencia de la Fuerza Pública.

[44] Comando Décimo Octava Brigada 1999. Cronograma del secuestro de los tres norteamericanos.

[45] Entrevista a Simón Trinidad en Marón Karen 2002, op. cit. Este comandante guerrillero fue capturado en el 2004 en Ecuador, y extraditado a Estados Unidos acusado del secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.

[46] Entre 1999 y 2001, las Farc realizaron por lo menos nueve acciones armadas en las que desplazaron un gran número de guerrilleros desde la zona desmilitarizada. En ese periodo, atacaron además 45 veces municipios aledaños a dicha zona. Véase Comando del Ejército 2001a. Escaladas armadas desde zona de distensión. Presentación; y Comando Fuerza de Despliegue Rápido 2000. Nuevos procedimientos delictivos del enemigo. Rionegro, 23 de octubre.

[47] Comando Fuerza de Tarea Conjunta del Sur 2001a. Oficio 0830. Tres Esquinas, 3 de septiembre. Presidencia de la República 2001. Oficio 023364. Carta al Ministro de Defensa Nacional. Bogotá, 7 de octubre; Comando Fuerza de Tarea Conjunta del Sur 2001b. Oficio 2078. Directiva transitoria 0021 de

2001. Control sector perimétrico zona de distensión. Tres Esquinas, 2 de noviembre.

[48] Autodefensas Unidas de Colombia 1999a. Carta firmada por el Estado Mayor, 17 de enero.

[49] Comando Compañía Águila 1999. Informe. Montería, 15 de febrero. Batallón Junín.

[50] Comando Primera División 1999. Oficio 06265. Envío apreciación. Santa Marta, 16 de septiembre.

[51] Comunidad de paz San José de Apartadó 1999. Carta al Presidente de la República. San José de Apartadó, 7 de abril.

[52] Comando del Ejército 2000. Circular 181564. Órdenes de carácter permanente. Bogotá, 15 de marzo.

[53] El Comando del Ejército se preocupaba no solo de que la acción militar contra las AUC "no ha encontrado el reconocimiento merecido ante la opinión pública", sino que "debe crearse mentalidad ofensiva a nivel de unidad táctica y fundamental en las tropas contra los grupos de autodefensas ilegales". Véase Comando del Ejército 2000, op. cit.; y Comando del Ejército 2001b. Circular 67255: Desarrollo operaciones ofensivas contra grupos de autodefensas ilegales. Bogotá, 1.o de febrero.

[54] Comando Segunda Brigada 2000. Oficio 001445. Barranquilla, 19 de julio.

[55] AUC s.f. Las AUC a los habitantes de esta región del país. Panfleto.

[56] Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 2000. Aclaración. Bloque Metro. Marzo.

[57] Autodefensas Unidas de Colombia 1999b. Alianza por la Unidad de Colombia. Colombia Libre, junio.

[58] Comando Quinta Brigada 2001a. Bloque Móvil Arturo Ruiz. Farc. Presentación. Enero.

[59] Marulanda, Manuel 2002, op. cit.

[60] Además de las capturas de narcotraficantes de varios países y de alto perfil como el brasileño Fernando D'Acosta, Fernandinho, en la operación Gato Negro se incautaron documentos de las relaciones de las Farc con ellos y se ubicaron unas 34 fincas sembradas de coca con sus respectivos laboratorios.

[61] Algunos de estos socios extranjeros eran militares.

[62] Comando Fuerza de Despliegue Rápido 2001a. Aspectos más importantes de la entrevista practicada a una fuente de alta credibilidad. Operación Gato Negro.

[63] Comando Batallón de Infantería Cuarenta y Tres 1999. Apreciación de inteligencia 001. Enero.

[64] Comando Fuerza de Despliegue Rápido 2001b. Apreciación de inteligencia. Guerima, Vichada, 5 de abril.

[65] Comando Fuerza de Despliegue Rápido 2001b, op. cit.

[66] Se incluyen los desmovilizados del Movimiento de Integración Revolucionaria-Comandos Armados del Pueblo (MIR-Coar), con quienes el Gobierno firmó un acuerdo de paz en 1998.

[67] Pinto, María Eugenia; Vergara, Andrés y Lahuerta, Yilberto 2002. Archivos de Economía 20. Departamento Nacional de Planeación, 4.

[68] Marulanda, Manuel 2002, op. cit.

[69] Luego del secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araújo, el secuestro de un avión en el que viajaba el senador Eduardo Gechem, y los incesantes ataques contra la estructura nacional y la Fuerza Pública que costaron la vida a decenas de civiles, el Gobierno optó por anunciar el fin de la zona desmilitarizada el 20 de febrero de 2002.

[70] Manuel Marulanda 2001. Palabras tomadas de documentos incautados por el

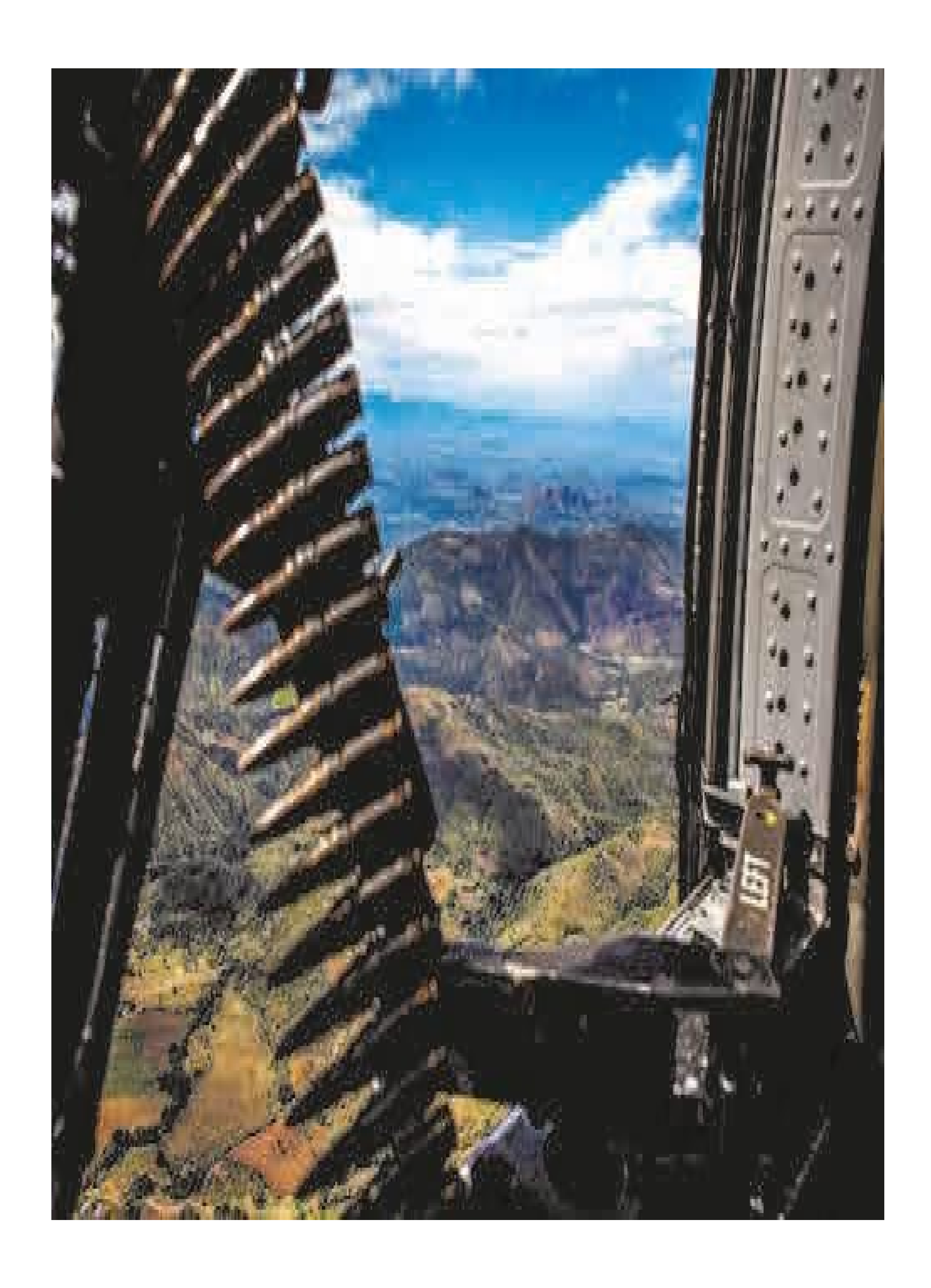
Ejército en la operación Siete de Agosto, citadas en documento Central de Inteligencia Militar 2001 Análisis escaladas terroristas realizadas por las Farc desde la activación de la zona de distensión.

PARTE V

2002-2016

LA GUERRA COMO

ESTRATEGIA DE PAZ



La efectividad de la Fuerza Aérea contribuyó al viraje que dio el conflicto armado desde finales de los años noventa a favor de las FFMM. / Foto: Álvaro Andrés Cardona Gómez.

Capítulo XIII

Punto de quiebre

La calidad del acumulado financiero y militar de las Farc durante los años de la zona desmilitarizada probó ser demasiado frágil y vulnerable a la ofensiva de las Fuerzas Militares. Aunque contaban con el mayor número de guerrilleros y milicianos de su historia, la pérdida de la zona desmilitarizada truncó sus planes de entrenamiento militar, político e ideológico para sus nuevas incorporaciones y cumplimiento de las metas de pie de fuerza y armamento necesarias para lanzar su primera ofensiva para la toma del poder contra Bogotá.

Aunque intentaron fortalecerse alrededor de su segunda zona de interés después de Bogotá, entre Valle y Cauca, para 2008 era claro que el declive militar de las Farc las había hecho retroceder al menos una década en tamaño, y de regreso a los setenta en término de correlación de fuerzas. Los gobiernos, desde 2002, optaron por acompasar esta ofensiva militar con ofrecimientos de negociación, en exploraciones que hicieron inminente una nueva zona desmilitarizada para las Farc en 2005 y el inicio de negociaciones formales con el ELN en el 2007, tras una exploración de tres años en Cuba. La disolución de casi la totalidad de grupos de autodefensas favoreció que las Farc optaran, como salida a su crisis, por un nuevo plan estratégico con un énfasis táctico en acciones no militares, con un vuelco hacia el trabajo con la población civil.

De manera determinante, las Fuerzas Militares demostraron una capacidad no vista para realizar operaciones militares sostenidas en el tiempo. Sorprendieron a unas guerrillas acostumbradas a esquivar ofensivas y a recuperar territorios perdidos en corto tiempo ante la salida de las tropas. La renovada capacidad de fuego, de coordinación terrestre, aérea y marítima, de tecnología, de inteligencia y de logística para lanzar campañas de largo aliento y permanecer en los territorios, provocó que los retrocesos guerrilleros, tras la ofensiva, fueran esta vez irreversibles.

Mapa 2.

PRESENCIA DE FARC Y ELN

2002

BOGOTÁ
MEDELLÍN
CALI
BUCARAMANGA
BARRANQUILLA

A inicios de la década del 2000, las Farc y el ELN alcanzaron su mayor presencia territorial, tamaño y número de estructuras en su historia.

FARC
20 766 Miembros
132 Estructuras

ELN
4130 Miembros
71 Estructuras

TOTAL ESTRUCTURAS: 203 | TOTAL SUBVERSIVOS: 24 896

Fuente: Elaboración propia con datos de Central de Inteligencia Militar del Ejército.

El cuidadoso seguimiento al accionar de las columnas, frentes y demás unidades de guerra de las Farc le entregó a las Fuerzas Militares el detalle de las zonas donde se desplazaban, sus maneras de actuar, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, e incluso la identidad de muchos de sus miles de integrantes, sus principales líderes, su dotación, sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades operacionales. De manera sistemática, los militares usaban ahora el conocimiento acumulado sobre la capacidad y la habilidad guerrillera para intentar explotarlo a su favor[1].

El viraje de las Farc hacia una estrategia de toma del poder donde la acción política primaría sobre lo militar obedecía tanto al impacto de la adaptación y efectiva acción de las Fuerzas Militares como a cambios internos, principalmente una renovación generacional de mandos del grupo guerrillero.

Al acudir a acciones de menor costo y exposición de su fuerza, renunciando al uso sistemático de tomas de poblaciones como en la década anterior, las Farc lograron que sus bajas fueran menores hacia finales de 2000. Esta adaptación implicaba implícitamente que, si bien no alcanzarían la victoria en el campo militar, por lo menos ya no serían vencidos por completo. Este viraje estratégico coincidió con un relevo en su liderazgo interno, que puso al frente de la organización a la generación de jóvenes que procedían del Partido Comunista, más afines a las estratégias políticas que sus antecesores.

Inicialmente, tras el fin de la zona desmilitarizada en 2002, las Farc incrementaron los ataques a la Fuerza Pública con modalidades de asesinatos selectivos, detonación de artefactos explosivos al paso de tropas y ataques a instalaciones militares, mientras las muertes de militares en combate disminuían proporcionalmente.

Al tiempo, el ELN intentó durante ese tiempo mantener un perfil bajo en acciones, ya que se encontraba en una situación crítica en la parte armada y buscaba prolongar los contactos iniciados unos años antes para iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno[2]. Tal esfuerzo se prolongó en el exterior, donde enviados buscaban concretar alianzas políticas y militares. En particular, desde 2001 el Ejército hacía seguimiento al naciente Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, cuya fundación atribuía al ELN[3].

En este escenario, las autodefensas amenazaron con lanzarse a la ofensiva contra las guerrillas no solo en la antigua zona desmilitarizada, sino en el resto del país[4]. En la mañana del 2 de mayo de 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron a cumplir su fatídica advertencia. Tras largas horas de un sostenido combate, guerrilleros de las Farc y paramilitares se enfrentaron en Bojayá, Chocó. Sin poder escapar, los pobladores se congregaron en la pequeña parroquia San Pablo Apóstol. Creyeron que en dicho refugio podrían salvaguardar sus vidas. Un cilindro bomba lanzado por las Farc, con el fin de hacer rendir al grupo de autodefensas que estaba detrás de la iglesia, impactó justamente en el techo de la sacra edificación. Murieron 49 niños y 30 adultos, y decenas de personas quedaron gravemente heridas.

Las Farc se habían planteado como objetivo abrir negociaciones con el nuevo Gobierno en el 2002, con el objetivo de “tratar de quitarnos el sambenito de terroristas en forma oficial”, lo que implicaba a su vez “una nueva política en busca del reconocimiento como fuerza beligerante al más alto nivel”[5]. A pesar de no contar con la fuerza militar para intentar la toma del poder, Marulanda proponía en 2002 “elaborar una lista de 12 personalidades de la vida política, económica, social, sindical, cultural y eclesiástica que sirvan para la conformación de un Nuevo Gobierno, incluido un miembro del secretariado nacional, todos en representación de sus partidos y organizaciones, cuya selección de personalidades lo podemos discutir en el secretariado sin afán”. De acuerdo con su plan “estas personalidades trabajarán inicialmente en la clandestinidad, hasta llegar a un acuerdo programático y político en beneficio de los colombianos. Pero su fin fundamental es salir a la Presidencia de la Republica, que tiene que ser elegido del seno y por mayoría, de uno de los 12. Escogida la lista de personalidades es necesario comenzar a hablar con ellos hasta llegar a los primeros acuerdos por separado”[6].

Simultáneamente, las Farc se lanzaron masivamente a la práctica de secuestros masivos y de alto perfil como forma de presionar por su anhelada ley de canje de prisioneros. El secuestro de doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, el 11 de abril de 2002, les permitía demostrar que no estaban derrotadas, causar impacto con sus acciones y presionar por un intercambio entre secuestrados y guerrilleros presos.

Un grupo de guerrilleros que se hicieron pasar por soldados llegaron en un bus a las instalaciones de la Asamblea gritando que había una amenaza de bomba. Entre el pánico y la confusión, los doce diputados fueron conducidos en un bus

hacia las afueras de Cali. Ya lejos del lugar de abordaje, los diputados fueron informados por el grupo guerrillero de su secuestro. Por años, las Farc le insistieron al Gobierno que promulgara una ley de canje que nunca prosperó. El 18 de junio de 2007, el grupo guerrillero emitió un comunicado donde anunciaba la muerte de los asambleístas: “Once diputados de la Asamblea del Valle, que retuvimos en abril de 2002, murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar, sin identificar hasta el momento, atacó el campamento donde se encontraban. Sobrevive el diputado Sigifredo López, quien no estaba en ese instante junto a los demás retenidos”[7].

Un correo enviado por el líder de las Farc, Alfonso Cano, a los demás miembros de la cúpula de la organización, reveló lo ocurrido: “Por una grave confusión con otra unidad de las Farc, que los confundió con ‘elenos’ y los atacó, la guardia ejecutó a once de los doce rehenes porque pensaban que el Ejército los atacaba. Grave equivocación que nos creará muchos problemas. Si hay Ejército cerca en el lugar donde ocurrieron los hechos y podemos arrastrarlos para ese lugar, le podemos echar la culpa de lo ocurrido al enemigo”[8].

Ya en el terreno militar, Manuel Marulanda estimaba que el Gobierno en 2002 “le ha dejado al sucesor tropas más que suficientes para actuar contra nosotros [por lo que] nos vemos obligados a aplicar la movilidad y así estamos cumpliendo”[9]. Teniendo como prioridad no debilitarse con la ofensiva militar, las Farc acudieron a técnicas que les permitían seguir actuando sin exponerse al combate. Sin embargo, sus ataques con cohetes por parte de guerrilleros urbanos[10], cilindros bomba[11] y otros explosivos afectaban de manera directa no sólo a militares y policías, sino a autoridades civiles y a la población.

Las Farc en esta ocasión, a diferencia de las anteriores escaladas, dirigieron su accionar contra individuos, edificaciones y la infraestructura civil del país mediante una acción coordinada y sistemática que produjo impactos de opinión más por la crueldad de las acciones que por su contundencia o efectividad[12]. En la selva, las Farc también demostraban una mayor sofisticación en el uso de explosivos, incluidos los cilindros de gas convertidos en proyectiles bomba. “Esta capacidad de acción mostrada por la organización es el resultado del entrenamiento y capacitación lograda con el concurso de terroristas extranjeros, durante la vigencia de la denominada zona de despeje, en donde se logró pasar de la tradicional ‘rampla’ a un elemento de mayor contundencia, que desequilibró los límites de seguridad impuestos, sorprendiendo no solo a las autoridades, sino también a la población civil en general”[13].

En contraste, la confrontación directa con la Fuerza Pública y sus resultados en asesinatos, heridos y secuestrados observó una reducción ostensible en 2002 con relación a la escalada de 1998: los militares asesinados disminuyeron de 134 a 10, los heridos disminuyeron de 210 a 52; y los militares secuestrados pasaron de 171 a 1[14].

Las Farc entraron en una etapa de evaluación, reorganización y reorientación de tareas para tratar de direccionar la actividad armada hacia objetivos rentables, especialmente poblaciones y puestos de policía que ofrecieran ventajas tácticas. La atención de la Fuerza Pública se concentró en la “preocupante capacidad terrorista mostrada por las Farc a través del empleo de armas sofisticadas como el mortero de 150 milímetros; de allí se puede esperar un salto cualitativo a la utilización de misiles y otras modalidades más tecnificadas, lo que le daría una mayor eficiencia a un menor costo, acrecentando la confrontación armada, ya que podrían planearse y ejecutarse atentados de difícil detección contra objetivos de gran nivel, generando la sensación de equilibrio frente al poder de confrontación de la Fuerza Pública”[15].

Tras el fin de la zona desmilitarizada y la ruptura de los diálogos de paz, el Gobierno optó por caracterizar a las guerrillas como un enemigo terrorista, y la política de seguridad viró hacia la recuperación, presencia y consolidación del territorio, mediante la capacidad disuasiva y el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la inteligencia[16].

Combate en la ciudad

Que se desataran estos cambios en la dinámica del conflicto se debió en gran medida a la nueva forma de enfrentar la guerra demostrada por las Fuerzas Militares, caracterizada por el uso de la acción ofensiva, el fortalecimiento de la inteligencia, la modernización de la aviación, el trabajo de los comandos conjuntos de Fuerza Aérea, Ejército y Armada, la creación y trabajo de las fuerzas especiales, el uso de nueva tecnología, una nueva capacidad logística de sostener campañas prolongadas y permanecer en el terreno, y el complemento con acciones de estrategia integral con las comunidades. Como efecto de la reingeniería militar producida desde finales de los años noventa, las Fuerzas Militares forzaron la reducción del número de guerrilleros de las Farc, producto de las desmovilizaciones y bajas de guerrilleros, incluidos mandos medios y comandantes, y por ende afectaron su capacidad de avanzar en el plan de guerra.

Una de las primeras operaciones que materializaron la nueva estrategia militar fue la toma de los barrios periféricos del occidente de Medellín. El principal esfuerzo de dicha operación, llamada Orión, se desarrolló entre los días 16 y 18 de octubre de 2002[17].

El Ejército había identificado en esa zona la presencia de milicianos de las Farc y el ELN, grupos armados conocidos como los Comandos Armados del Pueblo (CAP), grupos de autodefensas y grupos al servicio del narcotráfico "que vienen adelantando acciones terroristas, causando zozobra e intimidación a la población civil, a través del secuestro, extorsión y asesinato de personas, así como también están en capacidad de atacar unidades militares, de Policía y demás organismos de seguridad". En dicha evaluación, se estimaba que estos grupos "poseen armas de largo y corto alcance de diferentes calibres, explosivos, material de comunicaciones e intendencia, armas de apoyo, al igual que pueden utilizar los cilindros de gas para atacar a las bases militares, puestos de Policía Nacional y las instalaciones de las unidades tácticas de la Cuarta Brigada"[18].

El objetivo de la Operación Orión fue efectuar cierres y bloqueos de vías principales y alternas de los barrios de la comuna trece de Medellín y realizar registros y capturas[19]. Previamente a la operación, organismos del Estado desarrollaron dieciséis operaciones[20] que permitieron identificar 64 objetivos para captura y registro[21].

Si bien la operación principal se desarrolló entre el 16 y 18 de octubre, las autoridades mantuvieron su presencia durante los meses siguientes. Al 28 de octubre, habían capturado 226 personas, de las cuales 73 fueron dejadas en libertad; rescataron veinte secuestrados, entre ellos seis niños. Nueve milicianos fueron abatidos; catorce explosivos fueron desactivados, incluidos tres fuera de la zona de operaciones; siete más explotaron. Un policía y tres militares perdieron la vida y catorce fueron heridos[22].

Durante la operación, líderes de organizaciones y movimientos sociales denunciaron a diversas autoridades acusándolas de extralimitarse en el uso de la fuerza, e incluso actuar en complicidad con los paramilitares que, posteriormente a la operación, tomaron control de la zona. Autos proferidos por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, entre 2002 y 2005, han pedido aclarar casos de desaparición forzada en la comuna trece desde la toma militar.

Se rompe el cerco a Bogotá

Según el Ejército, al acabarse la zona desmilitarizada, muchos guerrilleros rasos querían desertar. "La mayoría son niños que fueron engañados y reclutados en San Vicente, quienes fueron desprendidos de sus familias al término de la zona de distensión, lo cual ha generado un descontento generalizado en muchas familias de la región"[23].

A principios del siglo XXI, las operaciones de las Fuerzas Militares encontraban, en ocasiones, la colaboración activa de la población civil con información sobre presencia de grupos armados ilegales[24], y en otras abierta hostilidad hacia la tropa[25]. En ocasiones, la falta de transporte aéreo obligaba a las tropas a caminar durante veinte horas por trochas y selva, y al llegar al objetivo "todos están muy cansados y agotados para sostener el combate y poder maniobrar con rapidez"[26].

En el periodo 1998-2001, las Fuerzas Militares actuaron en ofensiva permanente y con una reforma que reflejó la asimilación de lecciones aprendidas. En dicho periodo, el Ejército pasó de contar con ocho a diecisiete brigadas móviles, lo que les facilitó ir a la ofensiva. Luego de la operación para eliminar de Medellín el cerco de las guerrillas, las Fuerzas Militares pusieron en marcha el Plan Patriota, con el que primero buscarían romper el cerco a Bogotá por parte de las Farc, antes de ir por los territorios de retaguardia de esta guerrilla, más allá de la cordillera oriental.

El Plan Patriota identificaba tres áreas clave: la primera, en Cundinamarca, sur de Boyacá, y parte de Meta y Casanare, desde donde el cerco de diversas estructuras pretendía preparar una ofensiva para la toma de Bogotá, al tiempo que los guerrilleros realizaban tomas de poblaciones, secuestros masivos y extorsiones; la segunda, el sur oriente del país, en Meta y Caquetá, zona donde se encontraba el secretariado y la retaguardia de las Farc; y la tercera, la región de Urabá, donde había una presencia acentuada de varias estructuras del grupo guerrillero.

El primer paso del Plan Patriota consistió en desarrollar la operación militar Libertad I, para romper el cerco de Bogotá. Allí, las Fuerzas Militares pusieron en práctica casi todos los elementos de su nueva forma de hacer la guerra: la utilización de grupos pequeños; la inaugurada capacidad logística de la Fuerza de Despliegue Rápido[27] de sostener una operación militar de gran envergadura

por más de un semestre; el aislamiento de los contactos de los guerrilleros con la población; el corte de suministros de alimentos y de munición; los incentivos a la deserción, captura o abatimiento de los jefes de cada frente para los militares involucrados; y el aprovechamiento de información de los guerrilleros desmovilizados[28]. Además, uno de los éxitos de las operaciones Libertad I —y luego de su continuación, Libertad II— fue el uso masivo de soldados campesinos, que no solo servían como informantes, sino que de facto obstaculizaban la movilidad y la capacidad guerrillera de dotar de logística y víveres a sus combatientes, ahora aislados por el asedio militar[29].

Para el 2003, las Farc contaban con 122 estructuras armadas: 67 frentes rurales, veintiocho compañías, veintitrés columnas móviles y cuatro frentes móviles. Treinta de esas estructuras se encontraban en Cundinamarca[30]. “Socialmente el esquema era de temor de la población civil, de que no existía Estado, que esa representación de Estado lo tenían las Farc porque hacían sentir su fuerza, hacían sentir su voluntad de lucha”, recuerda un oficial de la época[31]. “La gente se sentía secuestrada, tenía la sensación de que las Farc iban ganando, que nos tenían rodeados. Ya habían atacado La Calera. Atacaron nuestro Centro de Instrucciones de Entrenamiento. Algo terrible para la población civil era que las Farc habían prohibido en muchas partes las ferias y las fiestas, el alma de los pueblos”[32].

El Comando del Ejército elaboró una maqueta de gran tamaño que representaba el teatro de operaciones de Libertad I. Cada movimiento de la operación se monitoreaba desde allí. Al comenzar la operación, la Décimo Tercera Brigada conformó 59 pelotones, compuestos por más de dos mil soldados regulares oriundos de la región. Estos pelotones se crearon para realizar tareas de inteligencia, recoger información sobre ubicaciones, corredores de movilidad, desplazamientos, recursos y acciones delictivas de las Farc y para patrullar vías estratégicas, con el fin de impedir el suministro de armas y víveres a las distintas estructuras[33].

La operación inició sigilosamente. Sin que las columnas de las Farc lo percibieran, los pelotones fueron ocupando áreas y, paso a paso, asfixiando a las columnas guerrilleras. Paralelamente, los militares crearon una vasta red de informantes, y un plan de recompensas, lo que produjo que la información de ubicación y movimientos de las guerrillas y sus autodefensas rurales fluyera constantemente. Poco a poco los guerrilleros debieron replegarse a los lugares más despoblados e inhóspitos del departamento. Sin los víveres y sin la

información proporcionada por sus milicianos en los pueblos, quedaron aislados[34].

Con la desarticulación de dos frentes y el retiro casi total de los guerrilleros de Cundinamarca[35], el Plan Patriota ahora se disponía a penetrar en la retaguardia de las Farc. A finales de 2003, las Fuerzas Militares desarrollaron una ofensiva de bombardeo y ametrallamiento con el objetivo de allanar el camino para la entrada de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en las selvas de Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas[36]. A partir de entonces, la llamada Operación JM, iniciada en 2004, atacaría sin cesar a los principales comandantes de las Farc por cuatro años, con el objetivo expreso de "doblegar la voluntad de lucha" de los guerrilleros y obligarlos a negociar con el Gobierno[37].

Ofensiva en la selva

Sobre la marcha, la reingeniería de las Fuerzas Militares continuaba. A la par del Plan Patriota, el Plan Cóndor no solo reorganizó la estructura de mando, para adaptarse a la nueva forma de hacer la guerra, sino que profundizó la profesionalización de los soldados mediante la creación de la Escuela de Combatientes, la modificación del servicio militar y la ampliación de la cobertura territorial con la creación de brigadas móviles y de antinarcóticos, batallones de alta montaña, más la adquisición de helicópteros, fusiles y material blindado[38].

Un tercer plan dentro de la nueva estrategia de guerra, una nueva versión del Plan Meteoro, se lanzó en agosto de 2002 para retomar el control de la seguridad en la red vial del país. La campaña de caravanas 'Vive Colombia, viaja por ella' se convirtió, de la mano de una importante ofensiva publicitaria, en uno de los resultados más visibles para los colombianos de la recuperación de la seguridad durante la primera década del nuevo siglo. Con acciones de registro y control militar del área junto a las carreteras, los militares se lanzaban con anticipación contra posibles amenazas, utilizando los métodos de infiltración y emboscadas[39].

La entrada de las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido en la zona rural del municipio de La Macarena, así como el control permanente en su zona urbana, obligaron a las Farc durante 2004 a replegarse hacia zonas en las cuales el terreno y el conocimiento de este se les presentaran favorables. Para defender el terreno, optaron por instalar campos minados y tomar posiciones propicias para hostigar y emboscar a los militares[40]. La organización y el control de la población civil que habían forjado por años en esa zona del país aún les garantizaba el apoyo logístico y la información de inteligencia necesarios para operar[41]. Las líneas de defensa guerrilleras, sin embargo, fueron insuficientes ante la magnitud de la campaña en su contra, y el avance militar se produjo más rápidamente de lo previsto[42].

A medida que avanzaban los soldados en tierra, los guerrilleros veían cómo los ríos se llenaban de infantes de marina y, desde el aire, la Fuerza Aérea no solo apoyaba las comunicaciones y el control de las tropas, sino que ingresaba nuevos soldados y ametrallaba desde las alturas. Las Farc empezaron a perder corredores de movilidad, puntos de abastecimiento y logística, contacto con la población civil, capacidad armada y otros aspectos que hicieron más difícil su

situación. Pero al mismo tiempo, el costo para las Fuerzas Militares fue bastante alto. En tan solo un año, habían tenido que ser evacuados más de mil soldados por enfermedades tropicales, y los muertos y heridos por las acciones militares y las minas se contaban por decenas.

Las Farc siguieron eludiendo los combates con los militares. Pero la activación de cargas explosivas, que afectaba a los pobladores del Meta y Caquetá, el asesinato de concejales y la instalación de minas antipersona no impedían que las tropas del Ejército hicieran presencia en sus antiguos territorios de dominio y lograran el apoyo de la población[43].

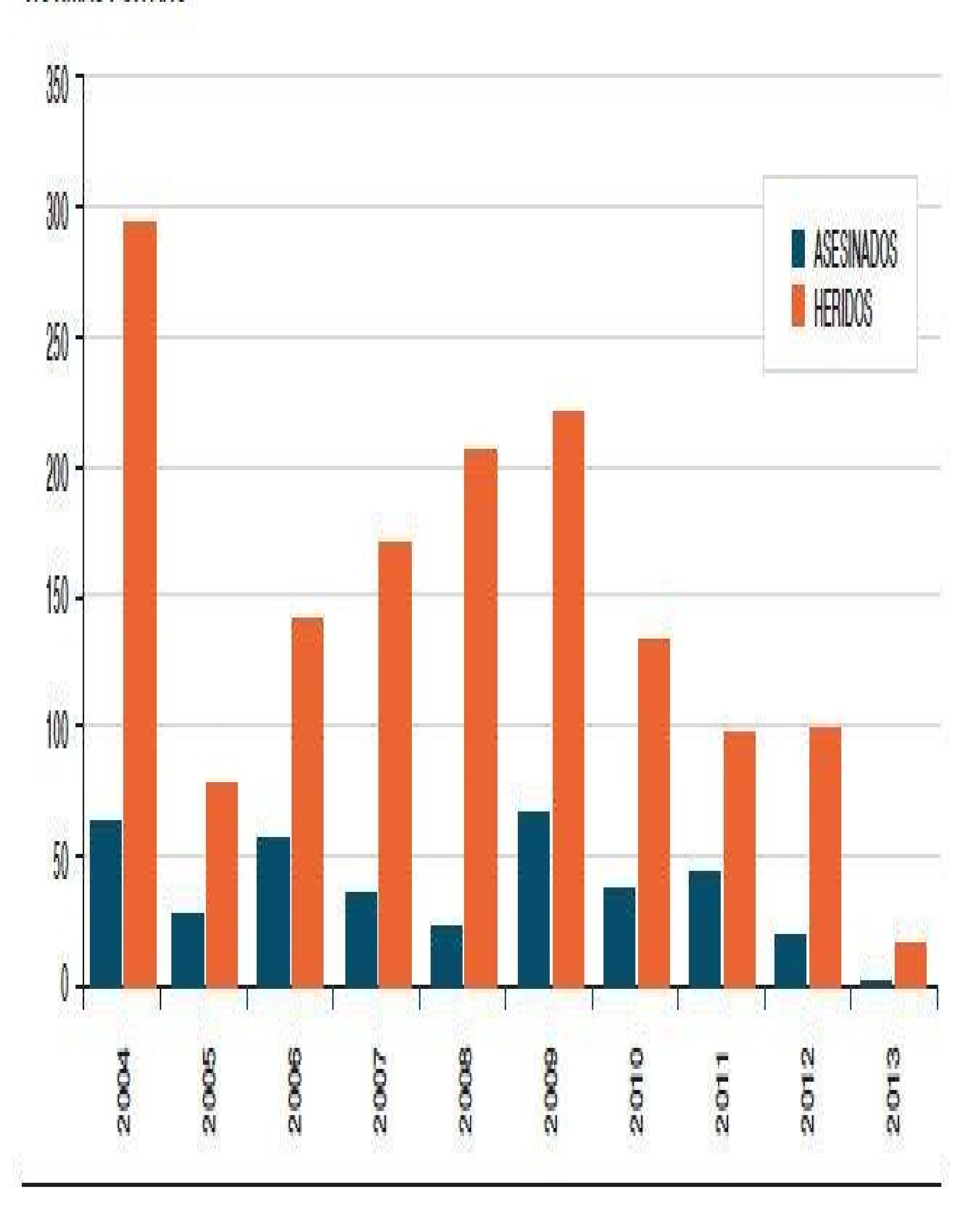
Pese a la presión militar, las Farc aún demostraban la capacidad de golpear en las zonas más desprotegidas del país, lejos del centro de la confrontación. En febrero de 2005, la indisciplina y la poca preparación y capacidad de fuego de los soldados de la base de infantería en Iscuandé, Nariño, los hizo objeto de un ataque masivo con explosivos y armas de largo alcance que destruyeron las instalaciones y causaron la muerte de dieciséis militares[44]. Donde la reingeniería militar aún no había llegado, la guerrilla aún podía asestar golpes de otra época que, sin embargo, no cambiaron el curso de la guerra.

Una de las esperanzas de las Farc para hacer que esto ocurriera consistía en neutralizar el poder aéreo de los ametrallamientos, bombardeos y abastecimiento de recursos y soldados. Ya entonces, las tropas suponían que las Farc habían obtenido misiles tierra-aire para defenderse del poder aéreo militar. Para 2004, el Ejército estimaba que las Farc, luego de hacer contactos con el mercado negro en Centro y Suramérica, habían obtenido en total unos quince misiles tipo SAM, empacados en tubos de PVC de cuarenta centímetros de diámetro, y cinco misiles Stinger, aunque no todos habrían llegado a suelo colombiano[45].

Gráfico 18.

HERIDOS Y ASESINADOS FUERZA DE TAREA OMEGA 2004-2013

La ofensiva militar en la zona de retaguardia estratégica de las Farc, detrás de la cordillera oriental, tuvo un alto costo para los soldados involucrados, en particular para la Fuerza de Tarea Omega. A partir de 2009, el mayor control territorial de los militares se refleja en menores casos de víctimas militares.


VÍCTIMAS POR AÑO
350
300
250
200
150
100
50
0
ASESINADOS
HERIDOS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuente: Elaboración propia con datos de Central de Inteligencia Militar del Ejército.

El costo de la ofensiva era alto para los militares. “Los campos minados siguen siendo uno de nuestros mayores dolores de cabeza”, se quejaba el Ejército en 2004. “Se han hecho grandes esfuerzos para prevenirlos, pero seguimos sufriendo esta desgracia”[46]. Además, el uso de francotiradores por parte de las Farc les resultaba efectivo para “frenar la ofensiva táctica, por la consecuente contingencia que se genera en el momento de evacuar muertos y/o heridos, aparte del impacto psicológico que se produce en las tropas, donde se crea zozobra”[47].

A pesar de ello, ya se había producido un cambio en la moral de la tropa y la sensación de estar ganando la guerra. “En 1988 no contábamos con el porcentaje de credibilidad y confianza que hoy tenemos [de la población]”, evaluaban las Fuerzas Militares en 2004. “La percepción del pueblo colombiano era que no podíamos ganar la guerra, que no estábamos en capacidad de ganarle a los violentos. Percepción que ha cambiado totalmente. Hoy el país nos cree”[48].

En contraste, en una extensa carta de junio de 2002, Manuel Marulanda se preguntaba “por qué nos están golpeando militarmente después de tantos éxitos”. La nueva dinámica militar “crea pánico en quienes están pensando en ingresar, además de ser malo para la política de masas y el crecimiento rápido en todos los frentes”. Según se respondía, “estamos mal de mandos experimentados, no guardamos el secreto en los desplazamientos […]; falta mejor vigilancia en las masas para impedir la infiltración. [Sufrimos] los efectos del machismo, la arrogancia y otros procedimientos en algunos mandos y guerrilleros”. En su conclusión, “la nueva generación de mandos a todos los niveles está subestimando al enemigo […] o se olvida [de] la sabia teoría del marxismo leninismo”[49].

La ‘guerra jurídica’

El militar, sin embargo, no era el único escenario de guerra. En el ámbito discursivo, los militares sentían estar perdiendo la batalla semántica, y en el terreno legal se percibían vulnerables. Preocupaba al mando militar que entre los soldados se hablara de paramilitares para referirse a las ‘autodefensas ilegales’; de comandantes para referirse a los ‘cabecillas’ de los grupos armados; de guerrilleros en vez de ‘terroristas’; y de operaciones para describir actos de ‘delincuencia’ armada[50].

Las implicaciones morales y legales para entender el conflicto y sus lógicas tuvieron en alerta a los militares por décadas. Desde los años setenta, algunas organizaciones civiles recopilaron sistemáticamente centenares de denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Militares y la Policía[51]. Estos proyectos de denuncia sistemática fueron retomados a finales de los años noventa y continuaron durante principios del siglo siguiente[52]. Como respuesta, desde 1996 el Ejército inició el lanzamiento de una colección de libros dedicados a denunciar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de las guerrillas. “No podemos esperar que una organización terrorista como las Farc tenga gestos humanitarios, respete la vida ajena o demuestra algún grado de consideración por los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario”, se lee en el prólogo de uno de sus volúmenes. “Ellos tienen por profesión el crimen y dentro de esta conducta practican los más crueles y extremos, como son las masacres, el secuestro, el reclutamiento forzado y otros no menos atroces”[53].

Como una manera de contrarrestar las denuncias en su contra, el Ejército planteó la posibilidad de que cada unidad táctica creara una ONG en su jurisdicción orientada a la promoción de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, las veedurías ciudadanas, la participación ciudadana, y el respeto, la promoción y divulgación de sus derechos económicos, culturales y del medio ambiente, contando con personas “afectas allegadas a la institución y víctimas de las organizaciones al margen de la ley”[54]. Por medio de estas ONG, el Ejército esperaba denunciar los actos atroces y relaciones con el narcotráfico de los grupos armados ilegales y contrarrestar “la acción de falsas acusaciones por organizaciones de fachada”[55].

Aun cuando los miembros de las Fuerzas Militares acusados de delitos y abusos

de derechos humanos representaban una fracción mínima respecto al tamaño de la institución[56] y el número de infracciones cometidas en el marco del conflicto[57], los militares sentían sus fallas magnificadas de manera artificial, como si de una 'guerra jurídica' se tratara.

Aun reconociendo que "algunos miembros de la Fuerza Pública sí han sido culpables de hechos punibles", asociaciones de militares retirados denunciaban lo que consideraban la conversión de "las bajas en combate en simples homicidios", la vinculación a procesos judiciales "a todo el personal de la unidad militar que lleva a cabo una operación", la "intromisión de organismos internacionales y ONG en los procesos contra personal militar", la "supuesta defensa de los derechos humanos como negocio", la "violación al fuero carcelario", las "condenas a priori" derivadas de "un despliegue periodístico que muestra al militar o militares como responsables indiscutibles del delito que se les imputa", y el uso de la Constitución de 1991 y sus normas derivadas como base de las investigaciones "cuando los hechos ocurrieron estando vigente la Constitución de 1886"[58].

Tras la desaparición de los grupos de autodefensa de los años noventa, la preocupación militar durante el nuevo siglo se centró en evitar a toda costa que se acusara a la institución de fomentar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el marco de la ofensiva militar.

En 2003, los mandos militares empezaron a circular un requerimiento para indagar denuncias recientes sobre la ejecución sumaria de civiles por parte de miembros de las Fuerzas Militares[59]. Las acusaciones presentadas por los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y diversas ONG, generaron una alarma entre los militares. Dadas las presiones e incentivos para la obtención de resultados en términos de capturas y bajas de guerrilleros[60], los mandos acudieron a una campaña interna de capacitación de militares en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para hacer "caer en cuenta de la importancia del respeto a la vida, honra y bienes de las personas no combatientes en el conflicto". Una de las actas de dicha capacitación reconoce que "si bien es cierto que muchas veces nos evalúan por las bajas proporcionadas en combate, es también cierto que no debemos caer en el desespero por resultados operacionales que muchas veces nos llevan a cometer arbitrariedades, que después repercuten en demandas y problemas que personalmente debemos afrontar, terminando, en la mayoría de los casos, destituidos de la Fuerza y afrontando problemas jurídicos"[61]. Esta

campaña contribuyó a que el fenómeno tocara techo y redujera sus proporciones a partir de 2006.

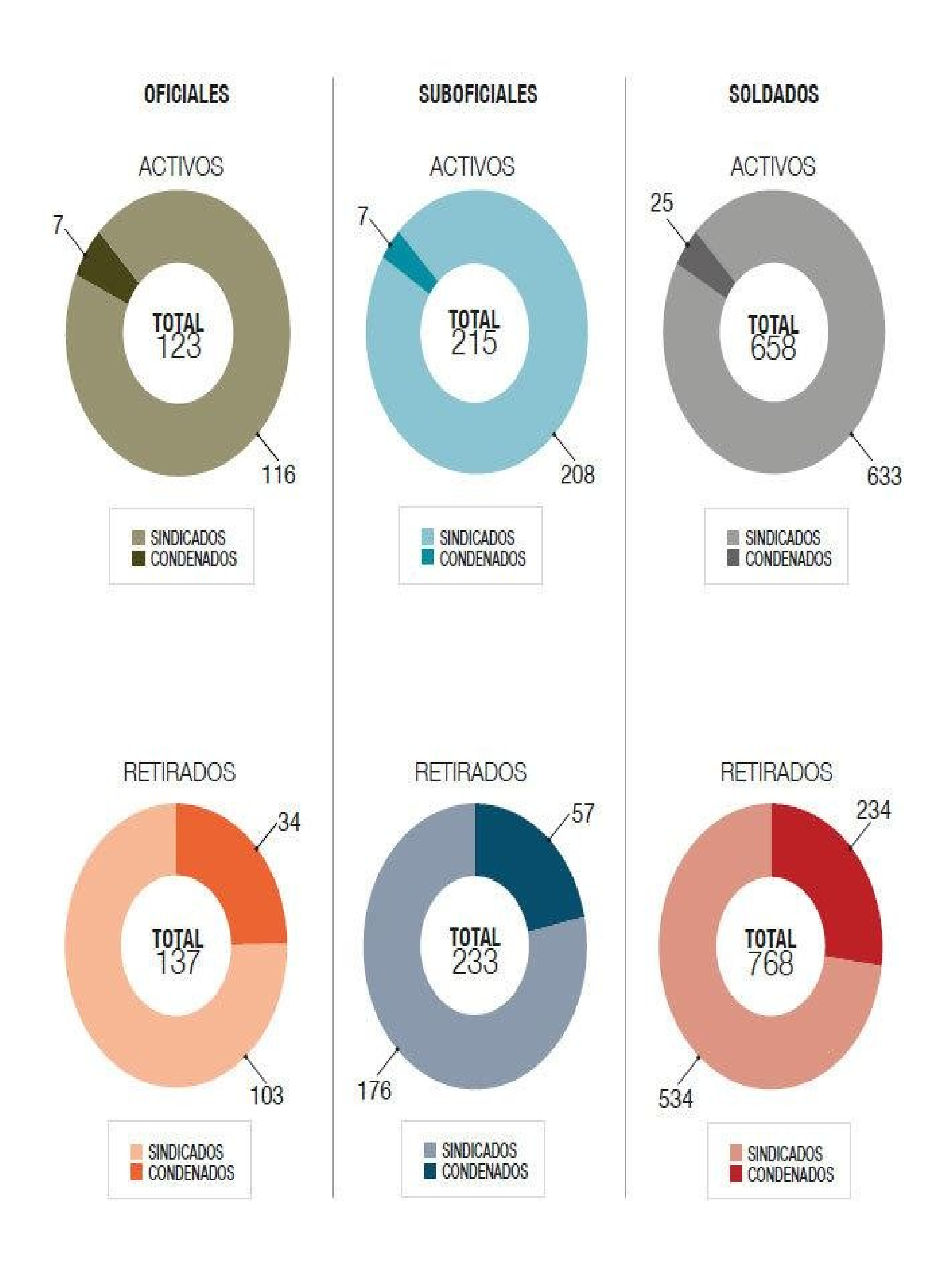
Los últimos grandes golpes

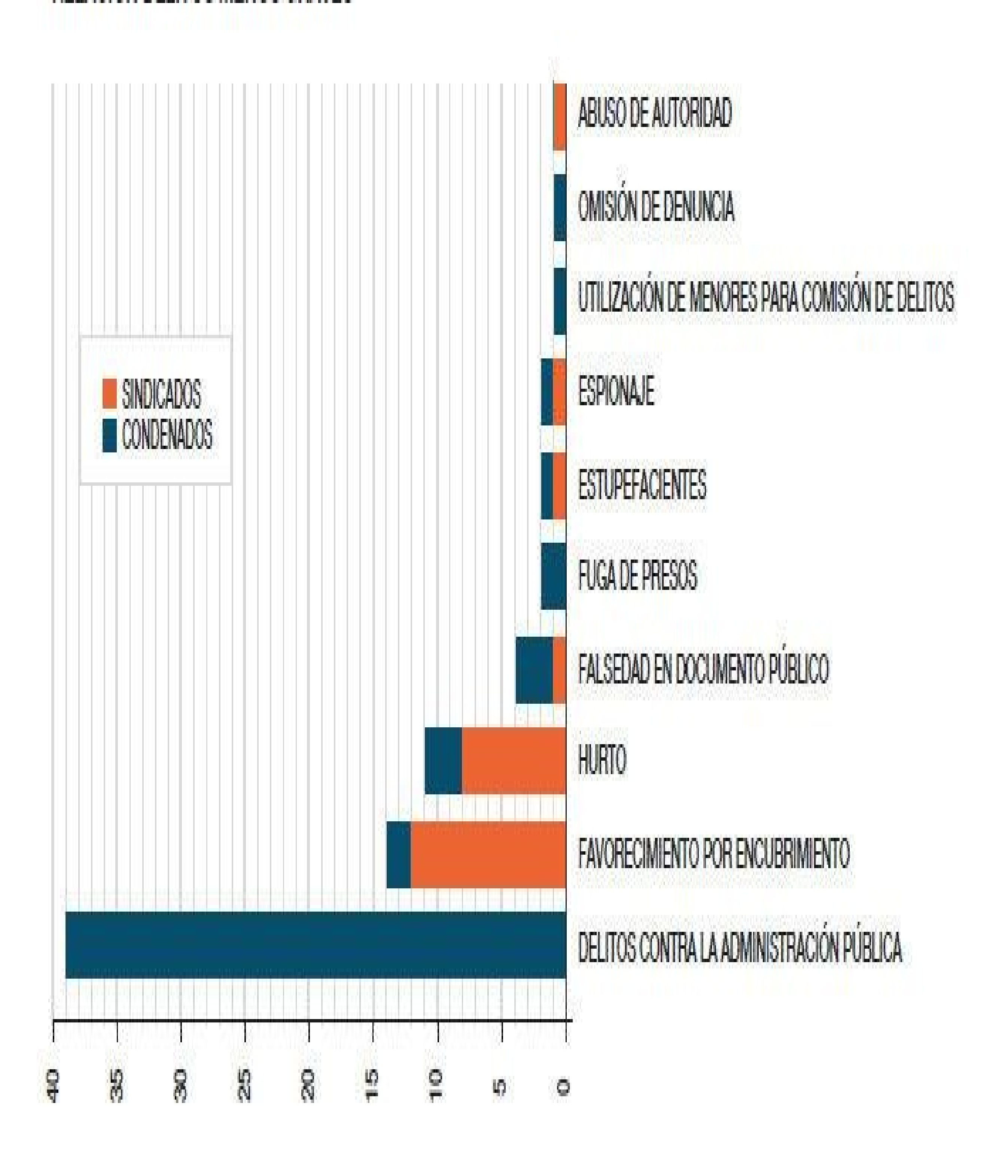
En el nuevo escenario estratégico, los grupos de autodefensa decidieron negociar con el Gobierno[62]. Entre 2004 y 2006, las Autodefensas Unidas de Colombia desmovilizaron unos 32 mil individuos que componían sus estructuras armadas y sus redes de apoyo. A partir de entonces, los reincidentes en el mercado de la violencia y los sucesores del paramilitarismo serían considerados un fenómeno exclusivamente criminal, inicialmente etiquetado por los gobiernos como 'bandas criminales' y, posteriormente, como 'grupos armados organizados' al servicio del narcotráfico[63].

Gráfico 19.

MILITARES PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN 2016

En 2016, un total de 364 militares activos y retirados permanecían privados de la libertad tras ser condenados por delitos relacionados con el conflicto.


OFICIALES
ACTIVOS
7
TOTAL
123
116
SINDICADOS
CONDENADOS
RETIRADOS
34
TOTAL
137
103
SINDICADOS
CONDENADOS
SUBOFICIALES
ACTIVOS
7
TOTAL
215
208
SINDICADOS
CONDENADOS
RETIRADOS
57
TOTAL
233
176
SINDICADOS
CONDENADOS
SOLDADOS
ACTIVOS
25
TOTAL
658
633
SINDICADOS
CONDENADOS
RETIRADOS
234
TOTAL
768
534
SINDICADOS
CONDENADOS


RELACIÓN DELITOS MENOS GRAVES
SINDICADOS
CONDENADOS
ABUSO DE AUTORIDAD
OMISIÓN DE DENUNCIA
UTILIZACIÓN DE MENORES PARA COMISIÓN DE DELITOS
ESPIONAJE
ESTUPEFACIENTES
FUGA DE PRESOS
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO
HURTO
FAVORECIMIENTO POR ENCUBRIMIENTO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
40
35
30
25
20
15
10
5
0

RELACIÓN DELITOS MÁS GRAVES



FABRICACIÓN, PORTE Y USO DE ARMAS

SECUESTRO

TORTURA

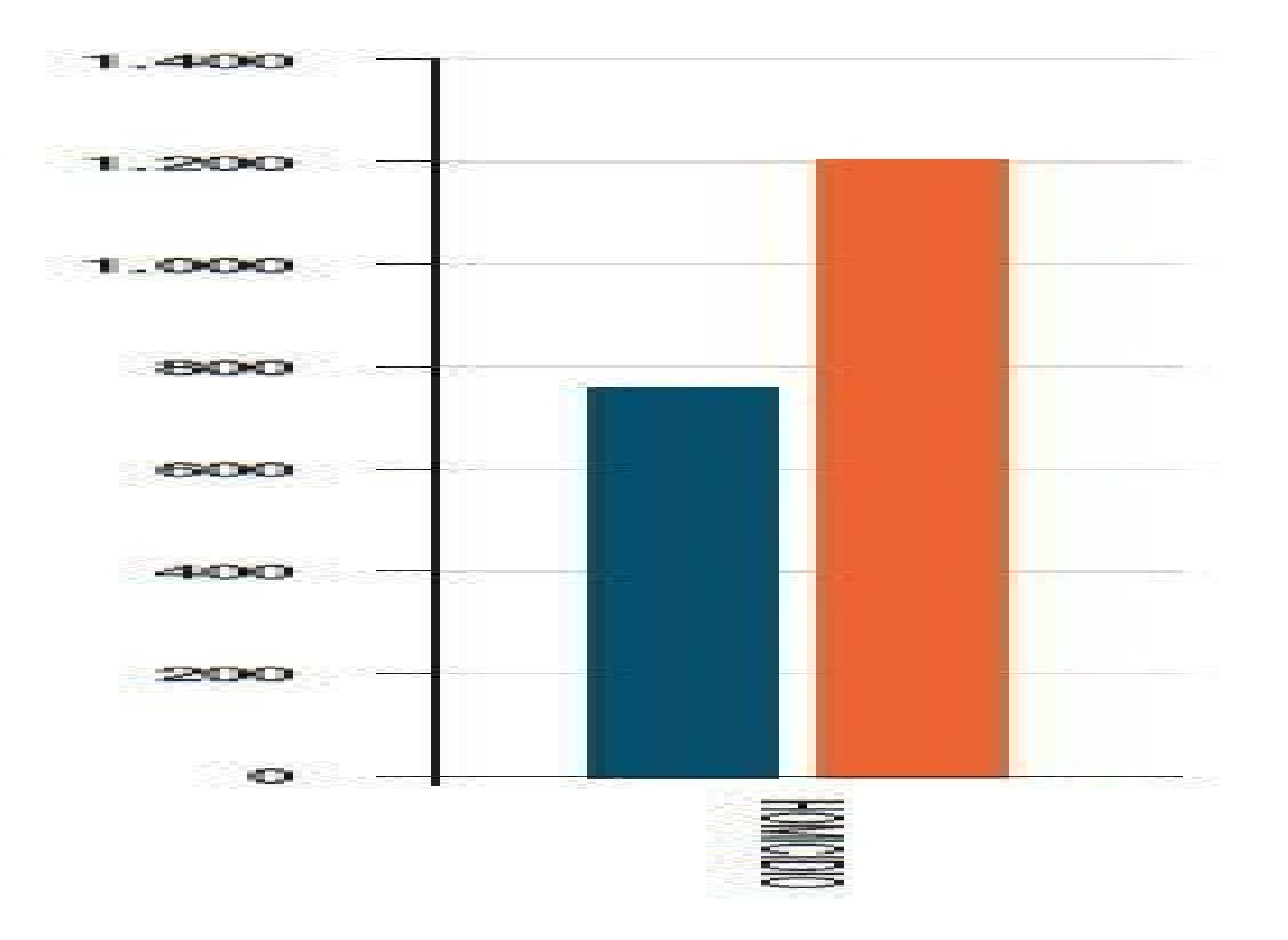
CONCIERTO PARA DELINQUIR

DELITOS SEXUALES

DESPLAZAMIENTO FORZADO

DESAPARICIÓN FORZADA

20 15 10 5 0


1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
HOMICIDIO

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Jurídico del Ejército.

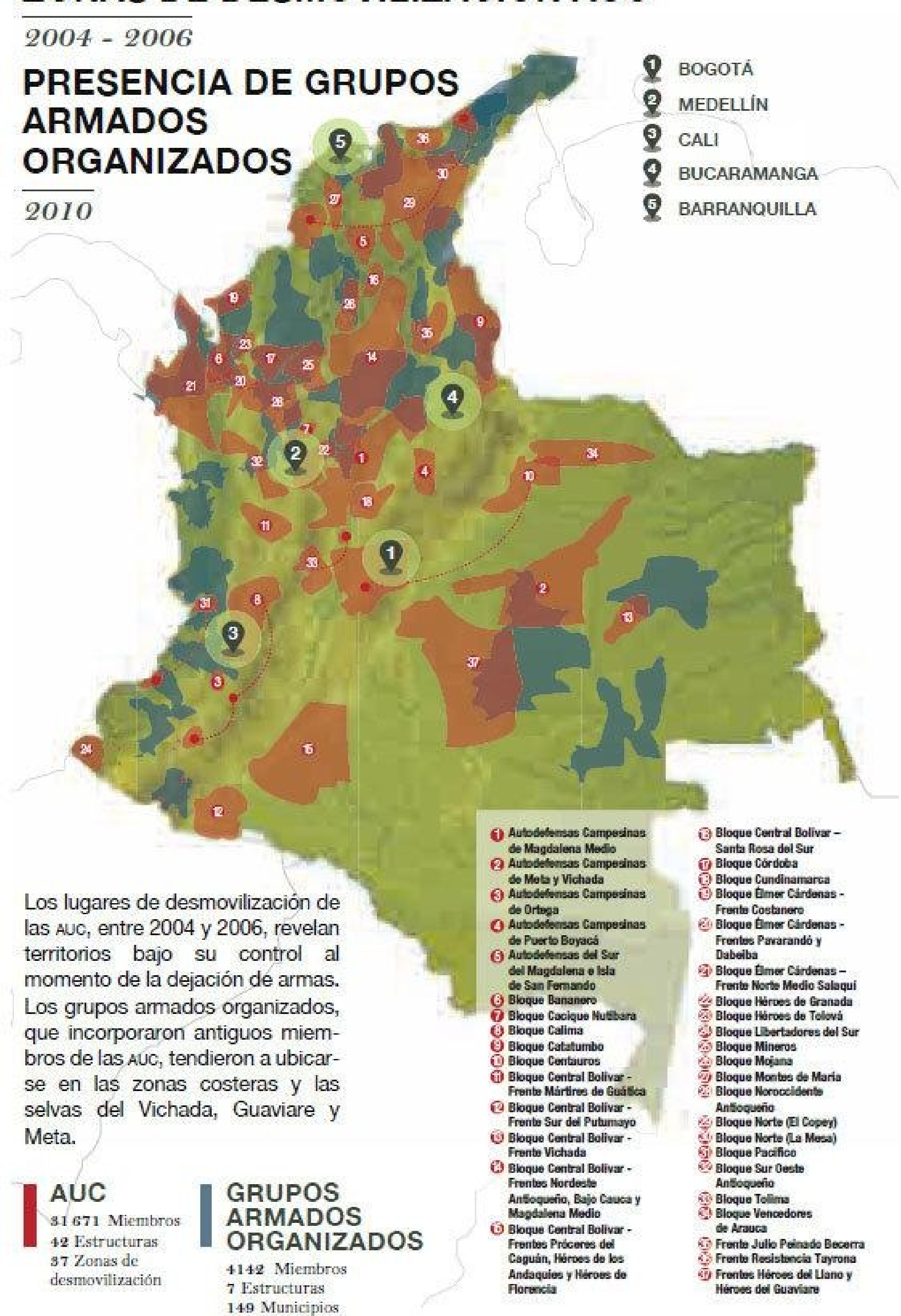
La casi total desaparición de secuestros masivos en las carreteras, ataques a poblaciones y reducción dramática de los índices de homicidio durante la primera década del siglo produjeron una sensación de disminución en la intensidad del conflicto armado, percibido ya lejos de los principales centros urbanos del país. Tal sensación se reforzaría con los grandes golpes al liderazgo de las Farc durante esos años.

Antes de 2007, las fuerzas especiales del Ejército contaban con diversos tipos de apoyo de la Fuerza Aérea. Pero a partir de ese año, la cooperación de los Estados Unidos con las Fuerzas Militares[64], en el esfuerzo de rescatar a tres estadounidenses secuestrados por las Farc desde 2003, había permitido que los sistemas de inteligencia colombianos incorporaran tecnología de última generación para el rastreo del enemigo.

Los asesores estadounidenses propusieron entonces aprovechar las tecnologías disponibles para crear ‘bombas inteligentes’. Luego de intentar adaptar sin éxito el sistema Raytheon de los aviones cazas estadounidenses F-16 a los aviones A-29 Súper Tucano colombianos, lograron que los dispositivos electrónicos GPS dirigieran bombas de quinientos libras con precisión desde los viejos aviones A-37 Dragonfly. Finalmente, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos autorizaron el uso de dicha tecnología para bombardear a los líderes y campamentos guerrilleros[65].

Mapa 3.

ZONAS DE DESMOVILIZACIÓN AUC



Fuente: Elaboración propia con datos de Central de Inteligencia Militar del Ejército y Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El Negro Acacio sería el primer comandante en caer abatido por el bombardeo inteligente. Desde una zona que abarcaba San José del Guaviare y Barrancominas, Guainía, el jefe guerrillero controlaba el narcotráfico y la adquisición ilegal de armas en el oriente del país. El 31 de agosto de 2007, el comando de la Base Aérea de Apiay, Meta, recibió la orden de alistar tripulaciones para seis aviones. Un ataque se realizaría contra un objetivo a cualquier hora desde ese momento. A la 1 a. m. del día siguiente, llegaron las coordenadas y la orden de despegue. A las 4:33 a. m., los aviones A-37 liberaron sus bombas y en seguida los A-29B liberaron las suyas[66]. Sin el peso de las bombas, la aeronave del comandante de escuadrón pudo regresar con combustible suficiente a su base. Mientras regresaban, los pilotos escucharon el reporte que confirmaba que el objetivo había sido impactado. Al presentar su misión cumplida, el comandante supo que habían dado de baja al Negro Acacio[67]. Los militares de la Armada infiltrados en la zona lograron ponerse en contacto con un hombre de extrema confianza del Negro Acacio, que empezó a suministrarles información. Con la ubicación de sus campamentos, la Fuerza Aérea produjo imágenes aéreas y satelitales que alimentaron la planeación de una misión que empezaría a cambiar de manera definitiva el rumbo del conflicto[68].

Pero las Farc no daban aún la guerra por perdida. En noviembre de 2007, en la región del Papamene, en La Uribe, Meta, el Mono Jojoy ordenó ejecutar un nuevo plan para recuperar el terreno perdido en Cundinamarca. Desde los Llanos, las Farc proyectaban enviar alrededor de novecientos guerrilleros a través de Huila, Tolima y la región del Sumapaz, e intentar acercarse al municipio de Cabrera[69]. Pero en pocos meses, el Ejército tenía lista una nueva brigada móvil, la número 21, que obligó a los guerrilleros a replegarse de nuevo en 2008 hacia el área de su retaguardia en La Uribe.

La muerte de Martín Caballero, miembro del Estado Mayor de las Farc, en un nuevo bombardeo, esta vez en Carmen de Bolívar, en octubre de 2007, se sumó a la del Negro Acacio como el preludio de los golpes más fuertes propinados a las Farc en toda su historia[70].

Meses después, en la madrugada del primero de marzo de 2008, las bombas cayeron esta vez sobre territorio ecuatoriano, al sur del Putumayo. Los archivos del Ejército decriben al menos dos campamentos en la zona de frontera en los

que los guerrilleros habrían instalado minas de protección y una fábrica de explosivos, y mantenían trece civiles y dos soldados secuestrados[71]. Raúl Reyes, miembro del máximo órgano de dirección de las Farc, el secretariado, y alrededor de diecisiete personas murieron tras el vuelo de tres A-37, seguidos de cinco Super Tucanos, sobre la zona de frontera. Cada golpe representaba además un botín de información extractada de los archivos de los líderes guerrilleros. "Cuando el enemigo toma un computador", decía Marulanda en 2002, "conoce hasta de viajes a la luna"[72].

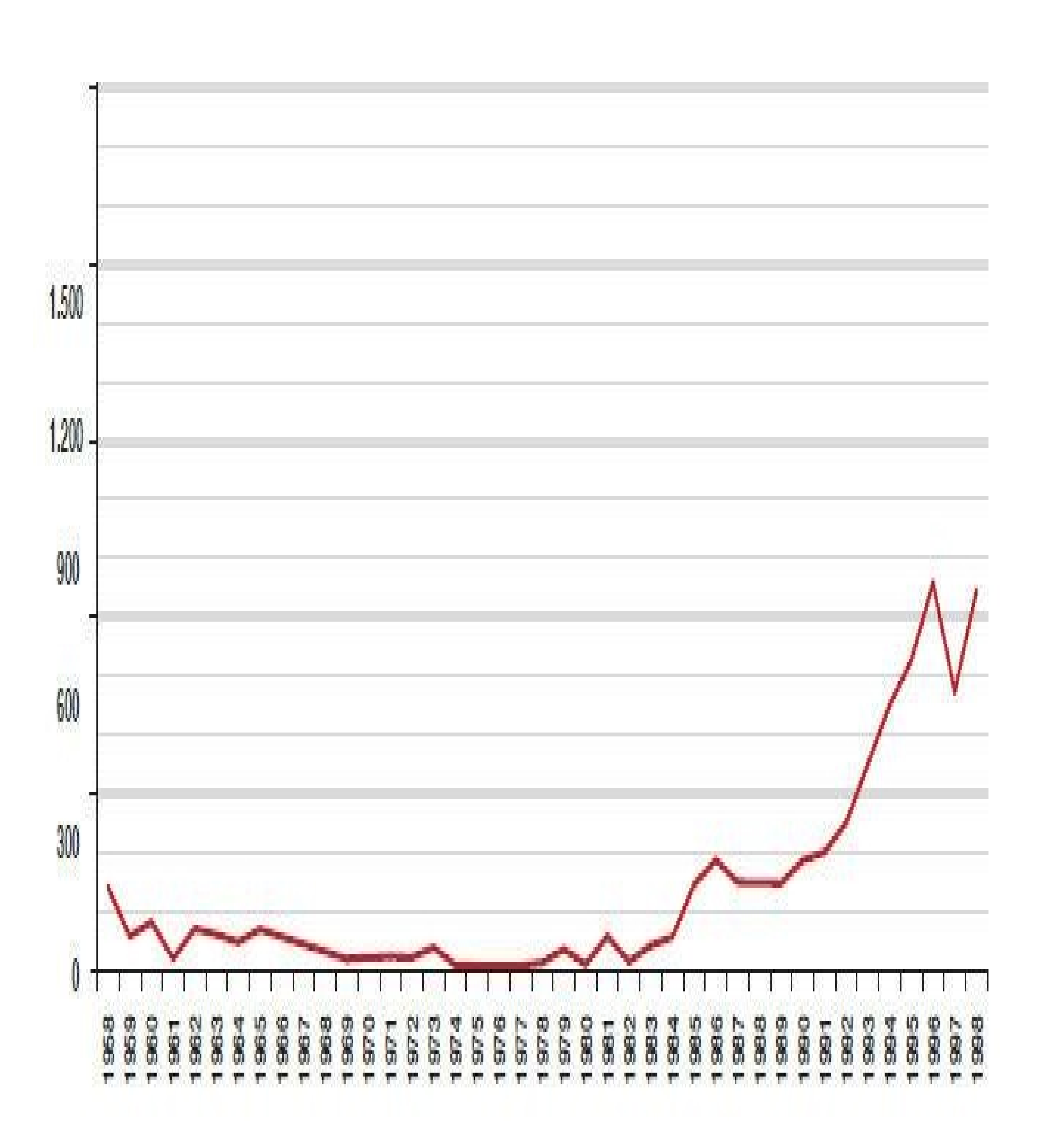
También en marzo de 2008, la presión militar a las Farc, cerca de Aguadas, Caldas, precipitó el asesinato de Iván Ríos, también miembro del Secretariado, por su propio guardaespaldas[73]. El asedio a Ríos "le estaba bloqueando la entrada de víveres y cerrando el área de tal forma que no se podía mover a grandes distancias", y a su muerte le siguieron desmovilizaciones de otros miembros de su grupo, incluyendo comandantes y mandos medios[74].

Gráfico 20.

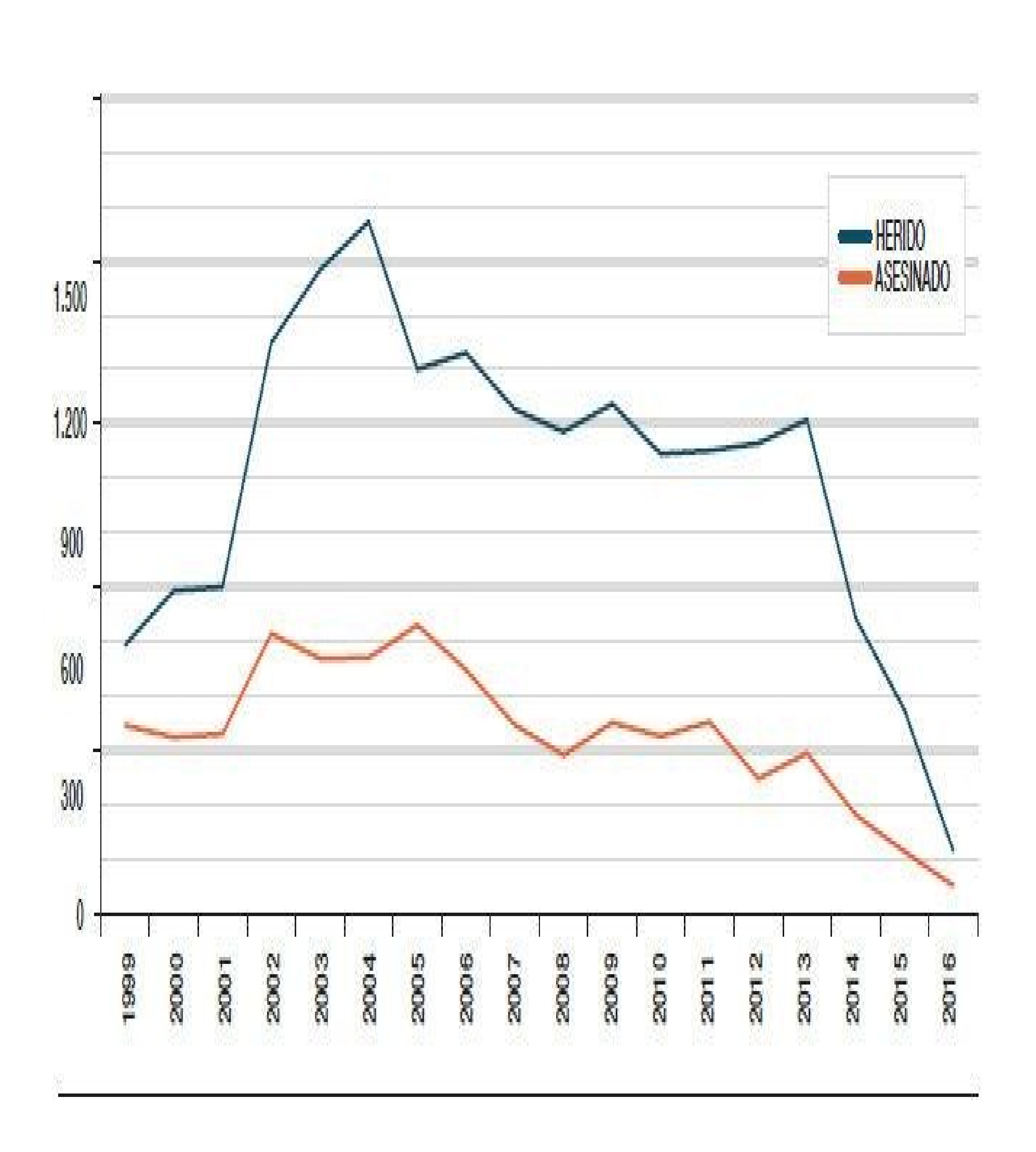
HERIDOS Y ASESINADOS DE FUERZAS MILITARES 1999-2016

Entre 2002 y 2005, las Fuerzas Militares sufrieron los picos históricos de muertes y heridos, coincidiendo con los primeros años de su ofensiva contra las guerrillas.

TOTAL ASESINADOS POR AÑO



TOTAL ASESINADOS Y HERIDOS POR AÑO 1999 - 2016



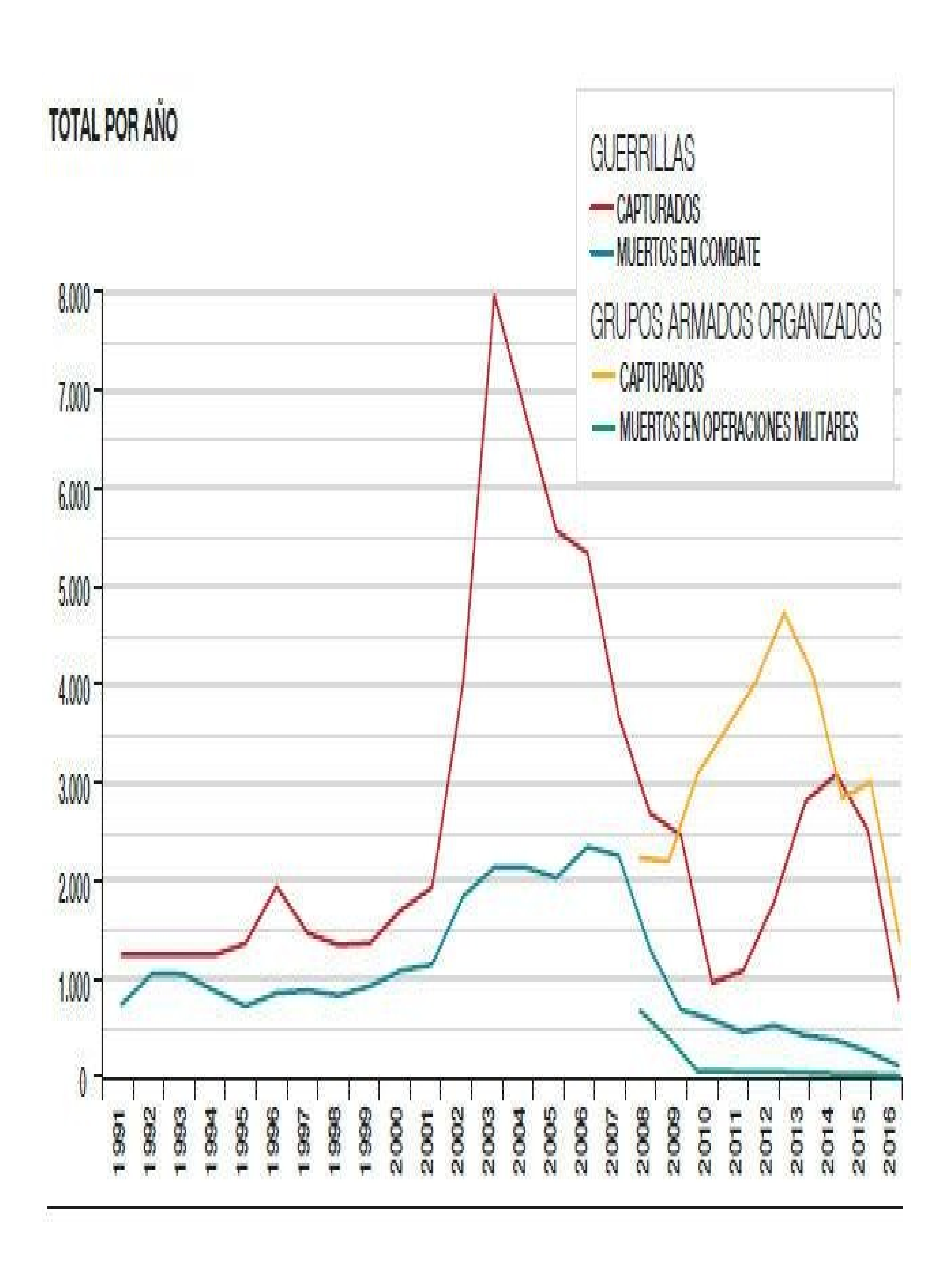
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa y Otero, Diego 2007. Las cifras del conflicto colombiano.

Bogotá: Indepaz.

Gráfico 21.

MUERTOS Y CAPTURADOS POR FUERZAS MILITARES 1999-2016

Las capturas a miembros de grupos armados organizados son mayores que a las guerrillas a partir de 2009.



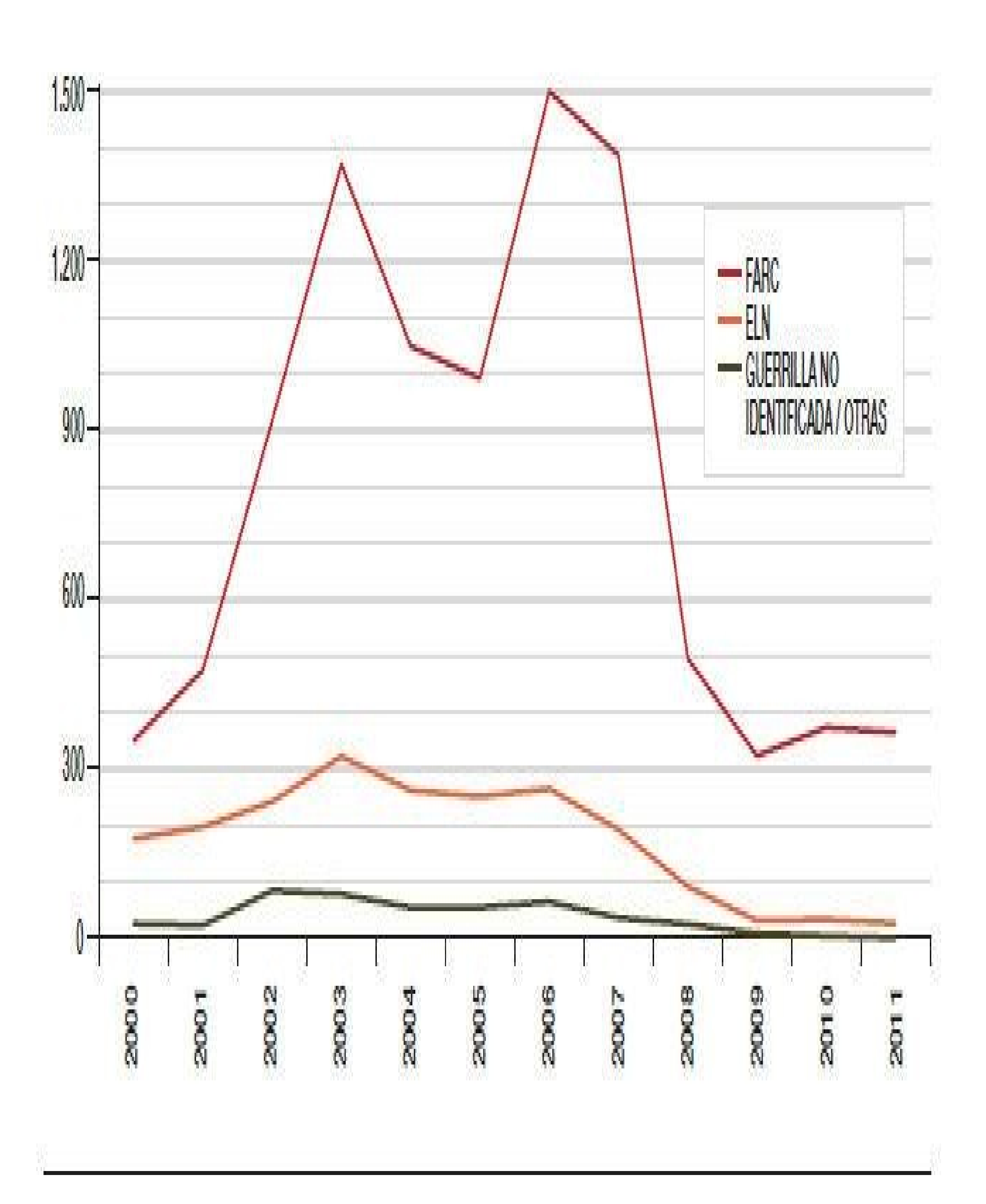
TOTAL POR AÑO
GUERRILLAS
CAPTURADOS
MUERTOS EN COMBATE
GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS
CAPTURADOS
MUERTOS EN OPERACIONES MILITARES
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa.

Gráfico 22.

COMBATES DEL EJÉRCITO 1999-2011

Los picos de combates de las Fuerzas Militares contra las guerrillas se produjeron en 2003, después del fin de la zona desmilitarizada para los diálogos con las Farc, y en 2006. Desde entonces la intensidad y cantidad de los combates entró en declive.



1.500
1.200
900
600
300
0
FARC
ELN
GUERRILLA NO IDENTIFICADA / OTRAS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República.

La muerte de Manuel Marulanda, también en marzo de 2008, a pocos meses de cumplir ochenta años en las selvas del oriente colombiano, inició el proceso de cambio de liderazgo de las Farc. A partir de entonces, solo el Mono Jojoy seguía representando la continuidad del mando en manos de campesinos nacidos y crecidos en medio de la confrontación armada, y los antiguos estudiantes de la Juventud Comunista del Partido se acercaban al poder máximo de la organización.

Las Fuerzas Militares usaron la tecnología disponible no solo para bombardear sino también para interceptar las comunicaciones de las Farc, y provocar un engaño basado en la suplantación de la voz de comandantes guerrilleros. Esto derivó en la liberación de once policías y soldados, la excongresista Íngrid Betancourt y los tres estadounidenses secuestrados. Apoyados con equipos electrónicos, militares ocultos en las selvas del Guaviare divisaron en febrero de 2008 el traslado de un grupo de secuestrados a un sitio de baño junto al río Apaporis. Entre dos cerros ubicados cerca de Tomachipán, junto al río Inírida, los guerrilleros a cargo de los secuestrados permitieron que el 2 de julio subieran a un helicóptero que los trasladaría, no a un nuevo lugar de reclusión como imaginaban, sino a la libertad. "La fuga de quince prisioneros de guerra el pasado miércoles dos de julio", explicaban luego las Farc, "fue consecuencia de la despreciable conducta de César y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó"[75], sugiriendo así la complicidad de estos dos guerrilleros con la estratagema de rescate. El éxito de la Operación Jaque, y la siguiente operación militar de liberación de secuestrados en junio del 2010, sin provocar bajas ni heridos, conocida como Camaleón[76], reflejó el nivel de sofisticación alcanzado por las tropas desde el fallido intento de rescate militar del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri y diez soldados, todos ejecutados por las Farc en mayo de 2003.

Los virajes

Después de 2008, las Farc no fueron las mismas. El regreso a las tácticas y operaciones de guerrilla móviles abrió la discusión interna sobre la posibilidad de usar un movimiento político legal como vehículo para impulsar un cambio de gobierno. Por primera vez desde su nacimiento, las Farc contemplaban que la acción política y de masas quizá debería primar sobre la armada en la lucha por la toma de poder. Ya en 2007, su renovado plan de guerra revelaba la preocupación por los efectos negativos en la población civil de sus tácticas, sobre todo las minas y otros explosivos, y a pesar de persistir en la estrategia armada, por primera vez hacían énfasis en el trabajo de su Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano con las juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, movimiento estudiantil y demás formas de organización social[77], así como la consolidación de aliados en el exterior. En el terreno militar, las Farc buscaban conservar el acumulado y detener el avance de las Fuerzas Militares mediante el uso de francotiradores, el regreso a la guerra de guerrillas, la infiltración a los militares e instituciones del Estado, el aprovicionamiento de material de guerra y comunicaciones, el uso masivo de explosivos y campos minados, y el uso de armas antiaéreas[78]. La relevancia de estas ideas fue creciendo de forma proporcional a los golpes militares recibidos. Para 2010, la dirigencia de las Farc empezó a plantear seriamente la necesidad de construir un frente amplio de izquierda que participara en elecciones, y que se apoyara en movilizaciones sociales, medios de comunicación alternativos, nuevos cuadros políticos, propaganda ideológica, aliados internacionales y un proyecto socioeconómico alternativo para proponerle al país[79].

El viraje en la estrategia de las Farc tenía su espejo en discusiones que venía planteando internamente el ELN. El plan militar de las Farc en la primera década del siglo XXI se había centrado en aumentar el número de guerrilleros mediante el reclutamiento y el no enfrentamiento con la Fuerza Pública. En su lugar, el ELN buscaba afectar la economía nacional mediante ataques a la infraestructura productiva, realizar acciones de alto impacto para obligar al Gobierno a abrir un proceso de diálogo, e intensificar el entrenamiento táctico de sus integrantes[80]. Al tiempo, la experiencia de los años noventa le animaba a intentar volcarse hacia una estrategia de diálogo con la sociedad como una manera de impulsar un movimiento de cambio y de presión en contra del Gobierno, como una vía alternativa al distante horizonte de una toma armada del poder. Lo político, decía

el ELN en 2003, era el componente ‘sustancial’ de una de estrategia de toma del poder que también contemplara la acción militar y la de masas.

El proceso de diálogo con el Gobierno en Cuba, Venezuela y México, entre 2003 y el 2007, le permitió al ELN explorar las condiciones para lanzarse de lleno al trabajo político abierto, hasta que resultó inviable para el Gobierno no exigirle paralizar su actividad militar. Para entonces, el ELN contaba aún con alrededor de 38 frentes rurales, nueve urbanos y 34 compañías móviles. Pero aferrarse a las armas resultó una apuesta riesgosa. La guerra abierta contra las Farc, desatada por el control de Arauca en 2007, podía haber significado un retroceso militar definitivo. Su inesperada victoria le permitió en 2010 acordar un pacto de no agresión que le puso de nuevo en el camino de un lento proceso de acumulación de fuerzas, particularmente en las zonas de Arauca y el Catatumbo, sin materializar todavía el paso definitivo hacia la lucha política legal.

El relevo generacional del mando de las Farc, y el viraje hacia lo político, quedaron sellados el 22 de septiembre de 2010. Las Fuerzas Militares habían detectado en La Julia, Meta, la presencia del búnker de concreto que protegía al Mono Jojoy. A un intenso bombardeo en la madrugada, le siguió la entrada al área de tropas del Ejército, infantes de la Armada y comandos de la Policía, apoyados por decenas de helicópteros y aviones. Los centenares de guerrilleros que protegían a su jefe no pudieron evitar que las tropas participantes en la Operación Sodoma confirmaran en el sitio la muerte del jefe guerrillero.

Alfonso Cano, antiguo miembro de la Juventud Comunista, era ya el jefe de las Farc tras la muerte de Manuel Marulanda, y ahora con la muerte de Jojoy su liderazgo quedaba sin competidor. Pero esto también lo convertía en el blanco militar número uno de las Fuerzas Militares. Unos treinta helicópteros Black Hawk y varios helicópteros Arpía apoyaron un ataque masivo de aviones A-37 y A-29 Super Tucanos de la Fuerza Aérea cerca de Suárez, Cauca, a mediados de octubre de 2011. Por dos semanas, unos novecientos soldados de fuerzas especiales que desembarcaron en la zona rastrearon al máximo jefe de las Farc quien, oculto entre unos matorrales, sucumbió al fuego militar el 4 de noviembre durante la llamada Operación Odiseo.

Timoleón Jiménez, otro veterano de la Juco, se convirtió en su sucesor. Justo antes de la muerte de Cano, había sido designado para explorar a nombre de las Farc la posible apertura de un nuevo intento de negociaciones con el Gobierno. Ante el revés militar, el excongresista de la Unión Patriótica y líder guerrillero

Iván Márquez lo relevó en dicha misión.

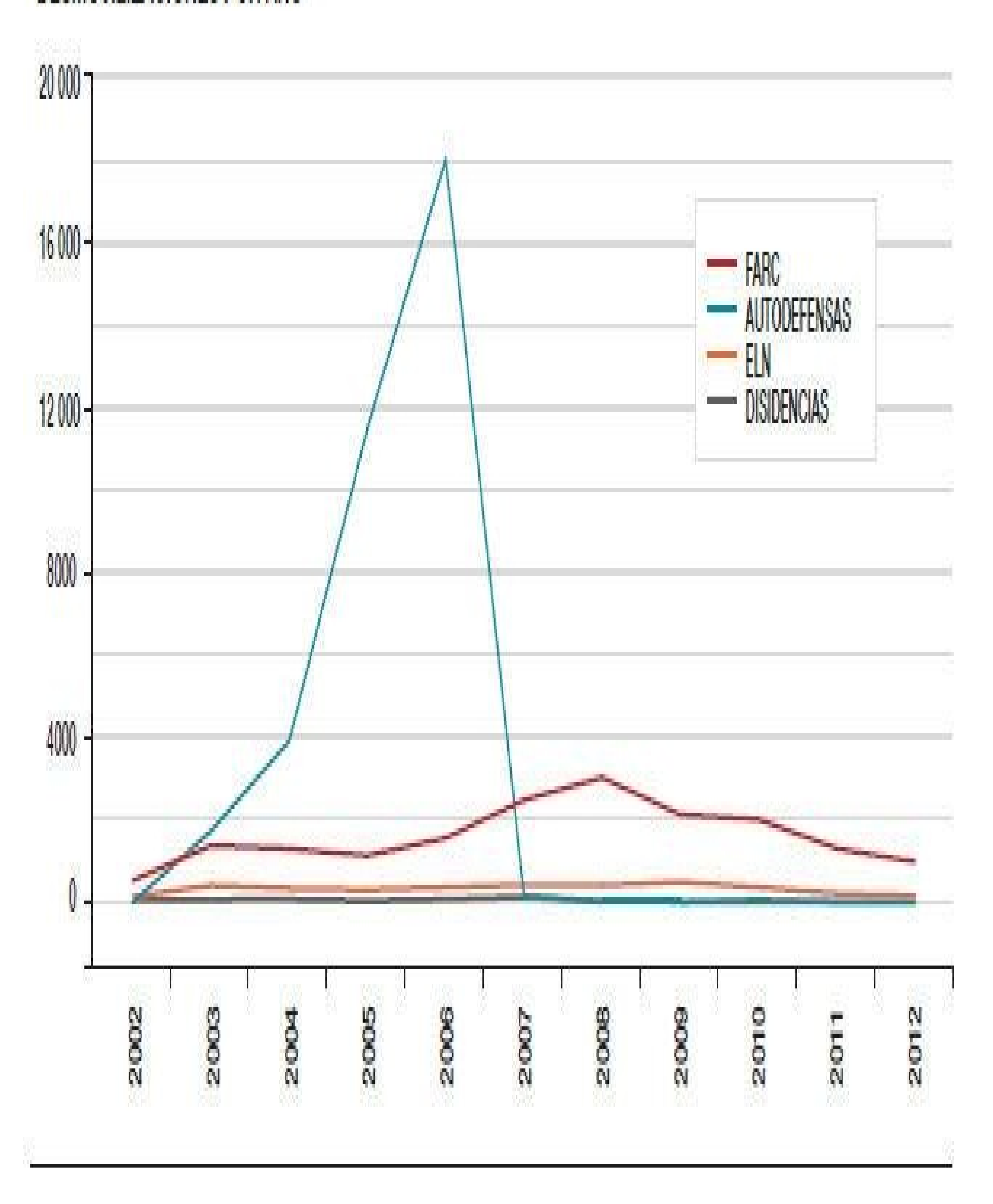
Culminados los éxitos del Plan Patriota, que habían provocado el retiro de las Farc principalmente a las zonas de frontera, el Gobierno se dispuso a consolidar la presencia de la Fuerza Pública y servicios básicos del Estado en territorios que habían sido arrebatados a las Farc. En el marco del Plan Consolidación[81], en vigencia desde 2007, las brigadas de ingenieros militares se dispusieron a realizar obras de alcantarillado, vías y acueductos en diez departamentos del país, con un presupuesto de más de 320 mil millones a ejecutarse entre el 2009 y el 2011[82]. Las áreas principales del Plan Consolidación, donde se combinaba la acción social con la militar, eran la Zona Macarena y Río Caguán, la Zona Pacífico (Nariño, Cauca, Buenaventura, Sur del Chocó), la Zona del Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba, y la Zona Sur del Tolima y Sur del Valle del Cauca[83].

La consolidación, sin embargo, no significaba el fin de la ofensiva militar. Además de las operaciones especiales contra los líderes guerrilleros, los planes de guerra entre 2007 y el 2010 hacían un fuerte énfasis en las campañas psicológicas para promover las desmovilizaciones de guerrilleros, y de propaganda y acciones cívicas entre la población civil para contrarrestar la acción política de las Farc y el ELN[84]. El objetivo del Plan consistía, al final, en la derrota de las guerrillas "mediante la neutralización de su capacidad armada y de su voluntad de lucha, para forzar su desmovilización y desarme, y obligar a su sometimiento en las condiciones del Gobierno"[85].

Gráfico 23.

DESMOVILIZACIÓN DE GRUPOS ARMADOS 2002-2012

La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia significó el ingreso de unos 31 mil desmovilizados al programa estatal de reintegración a la vida civil entre 2004 y 2006, sin contar con miembros de guerrillas y otras estructuras de autodefensa.


DESMOVILIZACIONES POR AÑO
20 000
16 000
12 000
8000
4000
0
FARC
AUTODEFENSAS
ELN
DISIDENCIAS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

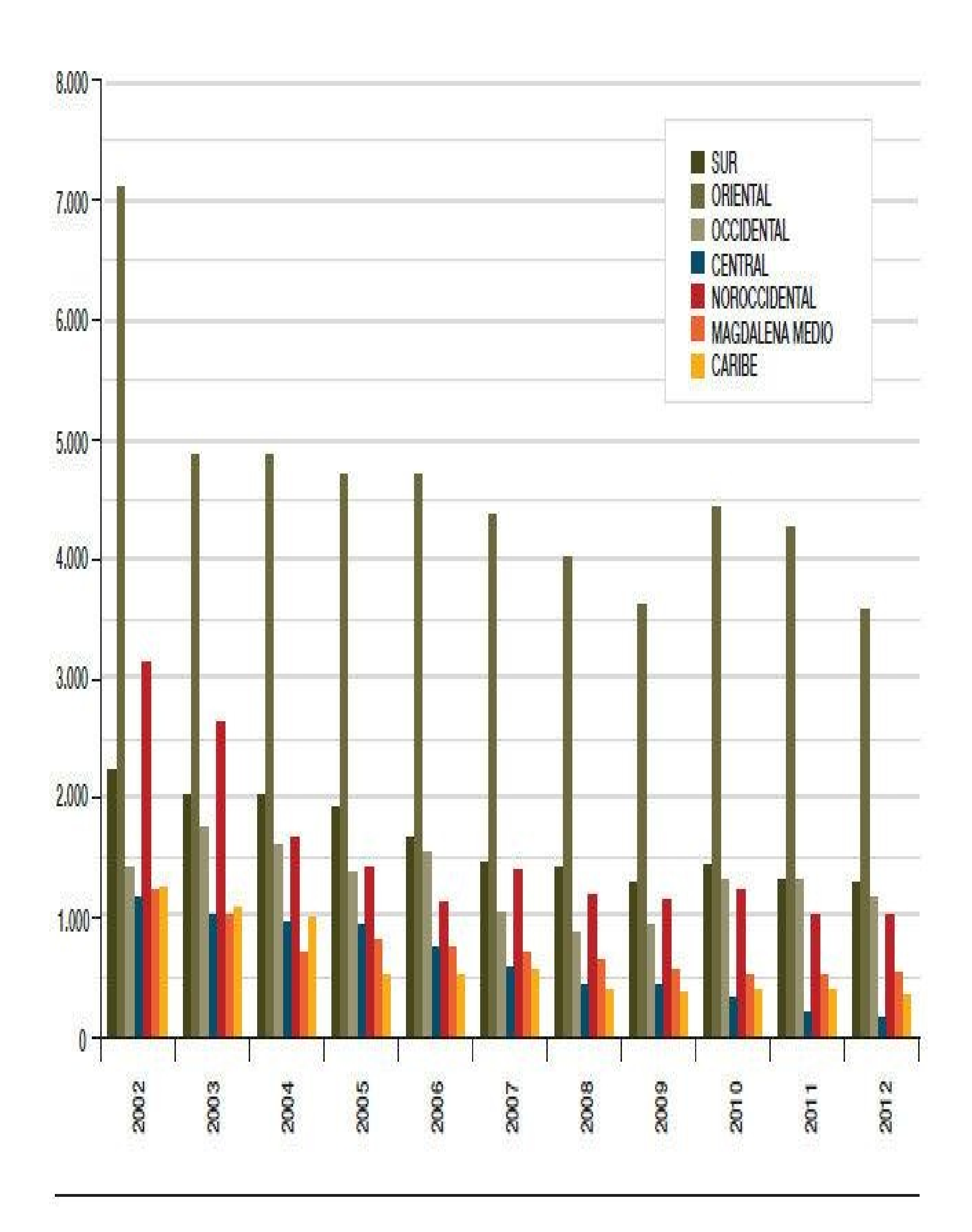
Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Defensa.

Detrás de este último planteamiento, se revela la dualidad de las estrategias gubernamentales desde 2002: el simultáneo uso decidido de la fuerza militar y la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado. La estrategia estatal de usar la fuerza militar para sentar a la guerrilla a negociar, más que para exterminarla, se evidencia en los diversos ofrecimientos públicos del Gobierno a las Farc a cambio de un proceso de paz: en 2004, la posibilidad de tener representación en el Congreso; en 2005, desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, en Valle; y en 2006, la posibilidad de abrir un proceso que derivara en una Asamblea Constituyente[86]. Tal estrategia quedó además plasmada en el proceso de diálogo directo entre el Gobierno y el ELN en Cuba, iniciado en 2002 y terminado en 2007, luego de avanzar en un borrador de agenda y diseño para el desarrollo de una fase pública de conversaciones que finalmente no prosperó.

Gráfico 24.

MIEMBROS DE FARC POR BLOQUE 2002-2012

Los bloques Oriental y Sur, los más grandes de las Farc, redujeron su tamaño a alrededor de la mitad entre 2002 y 2012. Los demás bloques sufrieron reducciones incluso más dramáticas.



8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
SUR
ORIENTAL
OCCIDENTAL
CENTRAL
NOROCCIDENTAL
MAGDALENA MEDIO
CARIBE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fuente: Elaboración propia con datos de Central de Inteligencia Militar del Ejécito.

La aparente contradicción de esta estrategia dual se manifestó con claridad en la operación que dio muerte al líder guerrillero Alfonso Cano, ocurrida en mitad de los diálogos exploratorios entre el Gobierno y las Farc en 2011. La intensidad del conflicto armado de las Fuerzas Militares con las Farc, y con el ELN, mostraba un franco descenso desde 2008, año que coincidió con los mayores triunfos militares contra los insurgentes. Esta tendencia no se detuvo con la muerte de Cano: el viraje de la guerra se mantuvo en los años por venir, si bien en 2016 resultaba aún prematuro escribir el epílogo del conflicto.



El general del Ejército Javier Flórez saluda a un grupo de guerrilleros de las Farc en la zona veredal de Pondores, en Fonseca (Guajira), donde hacían su proceso de desarme en 2016. / Foto: Mauricio Moreno. Archivo El Tiempo.

Notas

[1] Comando Fuerza de Despliegue Rápido 2001c. Apreciaciones de inteligencia Brigada Móvil Tres. Enero.

[2] Central de Inteligencia Militar 2002a. División de análisis y producción. Análisis estadístico accionar delictivo.

[3] Tres presuntos integrantes del ELN fueron capturados en 2003 en El Alto, Bolivia, uno de ellos boliviano. Los documentos de la inteligencia del Ejército describen un plan para conformar el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia con unos 310 integrantes, incluyendo 252 guerrilleros y milicianos, mediante el reclutamiento en las provincias del sur y occidente del país, y entrenamiento en las selvas de La Paz y Cochabamba. El Ejército registra la realización de catorce campamentos de formación política y militar entre el 2001 y el 2003 con la participación de 150 personas.

[4] En un comunicado del 21 de febrero de 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia respaldaron la decisión del Gobierno de terminar el proceso con las Farc, y advirtieron que la población civil debía alejarse de las áreas controladas por la guerrilla y prepararse para una ofensiva armada de las Farc.

[5] Marulanda, Manuel 2002. Carta. Camaradas del Secretariado. Miembros del Estado Mayor Central y mandos, junio.

[6] Ibídem.

[7] Farc-EP 2007. Comunicado del Comando Conjunto de Occidente. Cordillera occidental, 23 de junio.

[8] Otro secuestro masivo de alto perfil fue el de quince personas del edificio Torres Miraflores en Neiva en julio de 2001. Ese mismo año, las Farc secuestraron a los congresistas Orlando Beltrán y Consuelo González, buscando con ello presionar al Gobierno a aceptar una ley de canje de prisioneros.

[9] Marulanda, Manuel 2002, op. cit.

[10] El 7 de agosto de 2002, las Farc instalaron un centenar de morteros hechizos en una residencia del barrio Pontevedra de Bogotá, y lanzaron ocho granadas contra las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes; asimismo, en una residencia en el barrio Santa Isabel instalaron ochenta morteros, y lograron lanzar seis granadas contra la Casa de Nariño y el sector de El Cartucho, dejando como resultado veintitrés civiles asesinados. Central de Inteligencia Militar 2002b. División de análisis y producción. Análisis escalada terrorista. Agosto.

[11] El 14 de abril de 2002, el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe, fue víctima de un atentado en la calle 45 con carrera 34, sector de la plaza de mercado Barranquillita, en el puente sobre el caño de La Ahuyama de la ciudad de Barranquilla. Integrantes de las milicias bolivarianas de las Farc, activaron un cilindro bomba contra la caravana donde se desplazaba el candidato, quien salió

ileso. De este hecho resultaron tres personas asesinadas, cuatro más del esquema de seguridad heridas y catorce heridos entre la población civil. Véase Central de Inteligencia Militar 2002c. Información de Inteligencia. 14 de abril.

[12] Es el caso de la bomba al Club El Nogal en Bogotá, en febrero de 2003, que convertía en objetivo militar a un símbolo de la clase dirigente colombiana, a costa de 36 civiles muertos y casi doscientos heridos; o del atentado con una casa repleta de explosivos contra el presidente Álvaro Uribe en febrero de 2003 en Neiva, en el que murieron nueve policías y seis civiles, dejó heridas a 66 personas, y destrozos en 59 casas del barrio.

[13] Central de Inteligencia Militar 2002b, op. cit.

[14] Ibídem.

[15] Ibídem.

[16] Ministerio de Defensa Nacional 2003. Política de Seguridad Democrática, 12.

[17] Esta operación se realizó en un trabajo coordinado entre personal del Ejército Nacional, Policía Nacional, DAS, CTI, Fiscalía y otros organismos de seguridad del Estado, que se extendió meses después del 18 de octubre.

[18] Comando Cuarta Brigada 2002. Orden de Operaciones 49 Orión. Medellín, 15 de octubre.

[19] Ibídem.

[20] Central de Inteligencia Militar 2002d. Antecedentes de las operaciones urbanas realizadas en el área urbana de la ciudad de Medellín. Entre las operaciones realizadas en el 2002 previamente a la Operación Orión se encuentran: Operación Escorpión, Estopín, Fiera, Marte, Mercenario, Matrix, Apache, Metro, Firmamento, Mariscal, Jague, Saturno I, Octubre 5, y dos operaciones más de registro y una de ocupación.

[21] Antes de la operación, la Fiscalía 177 Seccional delegada ante la Cuarta Brigada emitió 120 órdenes de captura para hacerse efectivas durante la toma. Véase Central de Inteligencia Militar 2002e. Informe Especial. Operación Urbana Orión. Regional de Inteligencia 6. Medellín, 15 de octubre.

[22] Ejército Nacional 2002. Operación Conjunta Orión. Boletín 8. Informe Especial de Resultados hasta el 28 de octubre de 2002.

[23] Comando Batallón de Infantería Treinta y Seis 2002. Informe especial de inteligencia antigua Z/D, 13.

[24] Comando Batallón de Infantería Catorce 2000-2003. Informes de patrullaje: Peaje Río Blanco, 15 de junio de 2000; Bucaramanga, 8 de marzo de 2002; Bucaramanga, 30 de enero de 2003.

[25] Comando Batallón de Infantería Catorce 2000-2002. Informes de patrullaje: Matanza, 13 de febrero de 2000; Bucaramanga, 9 de julio de 2000;

Bucaramanga, 15 de abril de 2002; Bucaramanga, 15 de mayo de 2002; Bucaramanga, 27 de mayo de 2002.

[26] Comando Batallón de Infantería Catorce 2000. Informe de lecciones aprendidas. Matanza, 13 de febrero.

[27] Esta fuerza fue creada en 1999.

[28] Véase Comando del Ejército 2003a. Análisis, síntesis y experiencias. Plan de Campaña 2003.

[29] Para romper el cerco de las Farc a Bogotá, las Fuerzas Militares se apoyaron en alrededor de 1800 soldados campesinos desplegados en Boyacá, 1500 en Tolima, y unos 2100 en Cundinamarca. Para 2006, el Gobierno esperaba contar con soldados campesinos en 563 municipios, alrededor de la mitad de todo el país. Véase Comando Segunda Brigada 2004. Ficha de metas presidenciales. Oficio 006019, Barranquilla, 1.º de julio.

[30] Comando del Ejército 2003b. Orden de operaciones fragmentaria 001 complementaria al Plan de Campaña simultánea Libertad I, anexo B, 3-7.

[31] Oficial del Ejército citado en Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar 2015. Operación Libertad I. Bogotá: Imprenta del Ejército, 181

[32] Ibídem.

[33] Comando Décimo Tercera Brigada 2016. Historia de la Décimo Tercera Brigada, 187.

[34] Comando Décimo Tercera Brigada 2016, op. cit., 190.

[35] Las Farc pasaron de tener 1.130 guerrilleros en Cundinamarca en 2002 a 648 a finales de 2003. Véase Comando Décimo Tercera Brigada 2016, op. cit., 193.

[36] Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 2004. Análisis coyuntural sobre el Plan Patriota. Dirección General de Inteligencia. Frente Externo.

[37] Ibídem.

[38] Ibídem.

[39] Comando Quinta Brigada 2003. Orden de operaciones fragmentaria 146 Loto. Bucaramanga, noviembre.

[40] Comando General de las Fuerzas Militares 2004a. Fuerza de Despliegue Rápido. Boletín Diario de Informaciones No. 025. La Macarena, 3 de abril.

[41] Comando General de las Fuerzas Militares 2004b. Apreciación de la situación

del enemigo en el área de operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido. 30 de mayo.

[42] Comando General de las Fuerzas Militares 2004c. Apreciación de la situación del enemigo en el área de operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido. 27 de mayo.

[43] Después de finalizada la Operación JM, en 2007, las Fuerzas Militares dieron continuidad al esfuerzo de penetración a la retaguardia estratégica de las Farc con nuevos planes de campaña como Marte y Omega.

[44] Armada Nacional 2005. Lección Aprendida Ataque al puesto de Infantes de Marina y campesinos Municipio de Iscuandé.

[45] Comando Fuerza de Despliegue Rápido 2004. Oficio 0126. Capacidad antiaérea ONT Farc. La Macarena, 5 de junio.

[46] Comando General de las Fuerzas Militares 2004d. Análisis operacional primer trimestre. Oficio 150715, Bogotá, 14 de abril, 3.

[47] Comando del Ejército 2002b. Neutralización francotiradores grupos narcoterroristas. Oficio 70619. Bogotá, 16 de noviembre.

[48] Comando del Ejército 2004. Políticas de comando. Copia fechada en Riohacha, 7 de enero.

[49] Marulanda, Manuel 2002, op. cit.

[50] Comando Primera División 2004. Uso terminología. Riohacha, 14 de mayo.

[51] Véase por ejemplo Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 1974. El libro negro de la represión. Frente Nacional 1958-1974. Bogotá: Editorial Gráficas Mundo Nuevo.

[52] Es representativo el proyecto Colombia Nunca Más, mediante el cual más de una decena de organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaron las denuncias contra miembros de la Fuerza Pública desde los años sesenta.

[53] Oficina de Prensa Quinta División 2007. Epitafio de los inocentes. Séptima compilación de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los Derechos Humanos. Bogotá: Sección Publicaciones Ejército, 7.

[54] Comando Tercera Brigada 2001b. Apéndice 004. Esfuerzos y acciones para armonizar el trabajo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en procura de la seguridad interna de la nación al anexo E de acción integral coordinada al plan de campaña 2001. Cali, febrero, 2-3.

[55] Ibídem, 4.

[56] Según el Departamento Jurídico Integral del Ejército, el número de militares activos y retirados que permanecían privados de la libertad en sindicación o condena por delitos relacionados con el conflicto armado era de 2134 al 15 de diciembre de 2016, lo que, a manera de comparación, contrasta con el tamaño de efectivos del Ejército para ese momento, calculado en 207 345.

[57] Las víctimas oficiales del conflicto armado, que hacen parte del registro estatal, atribuían en el 2012 menos del 1 % de todos los hechos denunciados a miembros de la Fuerza Pública como presuntos responsables. Por contraste, atribuían más del 38 % de los casos denunciados a los grupos de guerrilla y 18 % a los grupos paramilitares. Es importante anotar que las víctimas que se registran ante el Estado tienen incentivos negativos para señalar a miembros de la Fuerza Pública como responsables, y por tanto estas cifras no pueden considerarse per se cómo indicadores de responsabilidad real.

[58] Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia 2009. La justicia injusta. Colecciones CGA 21, julio, segunda edición.

[59] Comando Primera División 2003 Requerimiento No. 12424. 30 de diciembre.

[60] La Presidencia de la República establecía metas trimestrales de ‘neutralizaciones’ de miembros de la guerrilla y las AUC. Para el cuatrienio 2002-2006, por ejemplo, se proponía el logro de 805 ‘neutralizaciones’ de cabecillas y 5774 desmovilizaciones. Además, en 2005, el Gobierno optó por publicar una política para el “pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. Esta política ofrecía hasta 3 815 000 pesos por “cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables materiales de desarrollar y/o apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, abigeato, actividades de inteligencia, emboscadas hostigamientos, asalto a poblaciones [y] ataques a instalaciones militares”. Las recompensas por líderes con mayores

responsabilidades de mando escalaban hasta los cinco mil millones de pesos. Véase Comando Segunda Brigada 2004, op. cit.; y Ministerio de Defensa 2005. Directiva ministerial permanente No. 29. Bogotá, 17 de noviembre.

[61] Véase Comando Batallón de Artillería Dos 2006. Acta 1199, registro folio 158. Valledupar, 16 de noviembre.

[62] Las AUC consiguieron que el Gobierno aceptar a negociar con ellos su desmovilización a cambio de beneficios legales tales como condiciones de reclusión favorables y penas máximas de hasta ocho años por crímenes de lesa humanidad y de guerra.

[63] En el 2016, las Farc aceptaron usar el término 'sucesores del paramilitarismo' en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno.

[64] Incluyendo la CIA y el Joint Special Operations Command (JSOC) de las Fuerzas Armadas de ese país.

[65] Fuerza Aérea 2015. La Fuerza Aérea Colombiana y el término del conflicto armado: Victorias desde el aire, 33.

[66] Las bombas de los A-29 Supertucanos en ocasiones no eran inteligentes, y se descargaban a baja altitud, para ocultar el uso de las bombas inteligentes lanzadas desde mayor altitud por los A-37.

[67] Fuerza Aérea Colombiana 2015, op. cit.

[68] Ibídem, 34.

[69] Comando Décimo Tercera Brigada 2004. Historia Décimo Tercera Brigada.

[70] Antes de estos dos líderes guerrilleros, las Fuerzas Militares solo habían dado de baja en un tiroteo en Bogotá a Rigoberto Lozada, Joselo, uno de los fundadores de las Farc, en octubre de 1992. Enfermo, seguía un tratamiento médico cuando fue detectado en la requisa de una patrulla.

[71] Comando Brigada Especial contra el Narcotráfico 2005. Informe actividades de frontera. Larandia, 14 de mayo.

[72] Marulanda, Manuel 2002, op. cit.

[73] El Comando de la Octava Brigada solicitó el pago de $190 millones de pesos a Rojas, guardaespaldas de Iván Ríos, quien asesino a su jefe y entregó a las autoridades la mano derecha cercenada como prueba para el reclamo de la recompensa ofrecida. Véase Comando Octava Brigada 2008a. Oficio 797. Solicitud pago de recompensa. Armenia, 18 de abril.

[74] Comando Octava Brigada 2008b. Entrevista a Pedro Pablo Montoya Cortés (a. Rojas).

[75] Farc-EP 2008. Despejando las mentiras acerca de la fuga de los quince

prisioneros de guerra. Secretariado del Estado Mayor Central, 5 de julio.

[76] Para lograr el rescate de un militar y tres policías durante la Operación Camaleón, los soldados se infiltraron en la maleza como camaleones, totalmente mimetizados durante 36 horas en las selvas del departamento del Guaviare, para seguir los pasos del grupo armado y así llegar a la ubicación exacta de los uniformados. Cuando los comandos irrumpieron en el campamento de los secuestrados, unos cuarenta guerrilleros soportaron un combate de veinticinco minutos, tras el cual se produjo la fuga de los secuestrados.

[77] Regional de Inteligencia Cinco 2008. Informe ejecutivo. Plan de trabajo para la reconsolidación del centro de despliegue estratégico. Plan de trabajo 2010 ONT Farc.

[78] Comando Ejército 2008. Plan Renacer los 14 puntos de Alfonso Cano (redireccionamiento de la defensa estratégica o complemento de la misma), Fuerza de Despliegue Rápido, mayo.

[79] Ejército Nacional 2010. Análisis plan de trabajo por la independencia definitiva 2010-2014 ONT-Farc. Presentación.

[80] Comando del Ejército 2003c. Oficio 089144. Bogotá, 1.º de diciembre.

[81] El Plan de Guerra Consolidación estuvo en vigencia desde el 2007, y se integró con los demás componentes en el Plan Nacional de Consolidación Territorial en el 2009.

[82] Jefatura de Ingenieros del Ejército 2011. Directiva transitoria 0021. Ejecución proyectos Plan Consolidación. 21 de enero.

[83] Adicionalmente, las áreas de transición hacia la consolidación era la Zona Montes de María, la Zona Sierra Nevada de Santa Marta y la Zona Oriente Antioqueño. Como áreas complementarias figuraban la Zona Arauca, la Zona Putumayo, la Zona Catatumbo y la Zona Bajo Atrato. Véase Presidencia de la República 2009. Directiva presidencial 01. Coordinación del Gobierno Nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial. 20 de marzo.

[84] Comando General de Fuerzas Militares 2007. Plan de guerra consolidación. Presentación. Octubre.

[85] Jefatura de Operaciones del Ejército 2009. Plan de campaña consolidación 2009-2010, 15 de enero, 3.

[86] Presidencia de la República 2006. Comunicado 006, 2 de octubre.

Epílogo

Hacia el fin de la vía armada en Colombia

Los archivos militares describen al adversario comunista en armas en toda su complejidad, desbordando las simplificaciones discursivas de las retóricas de guerra. El convencimiento de los revolucionarios de principios del siglo XX de la necesidad de usar la violencia masiva como vía para desarrollar su utopía fue con el tiempo mutando y sofisticando sus formas, pero sin cambiar su planteamiento esencial.

En 1947, las vías violentas de los comunistas tomaron una forma militar que se fue refinando tanto con la experiencia de la guerra propia, como con el aprendizaje de aciertos y errores de múltiples guerrillas que probaron diversas estrategias, operaciones y tácticas en el intento de vencer a las Fuerzas Militares o, en su defecto, ganarlas como aliadas en la búsqueda del poder hasta llegar a la transformación de Colombia en un Estado socialista. El camino frustrado de la aventura comunista, y la reacción estatal, dejó un traumático rastro de dolor[1], degradación humana y ambiental, y la vuelta a una realidad en la cual la victoria armada le resulta inviable.

Los archivos muestran, sin embargo, que el aprendizaje militar sobre un adversario que escapaba a las simplificaciones y equiparaciones con otros actores de violencia fue largo y tortuoso: por casi cuatro décadas, las guerrillas aprovecharon la subestimación y desconocimiento sobre sus dinámicas, lógicas, capacidades e inocultables debilidades, para crecer y convertirse en una amenaza real para la supervivencia del Estado colombiano.

La exploración de las hipótesis de trabajo mencionadas en la introducción nos permitió reconstruir una historia en la cual las capacidades de la Fuerza Pública para poner fin al conflicto armado solo empezaron a ser evidentes en el año 1999, justo en pleno apogeo guerrillero en términos estratégicos, operacionales y tácticos. Respecto a la población civil, tanto militares como guerrillas tuvieron claro, al menos desde los años sesenta, que su apoyo resultaría decisivo para inclinar la balanza de la confrontación, y el repertorio de formas de asegurarlo

fue amplio, tales como la cooptación por medio del ofrecimiento de servicios básicos materiales y de seguridad, su movilización activa como apoyo político, social o incluso armado, y distintas formas de coerción. En particular, el trato de los militares con la población civil tuvo un marco legal cambiante desde los años sesenta, según las políticas de Gobierno y la jurisprudencia de cada periodo. Así, la política gubernamental, apoyada en la jurisprudencia de las Cortes, promovía estrategias y tácticas que solo fueron proscritas con claridad a mediados de los años noventa, y que abrieron la puerta al involucramiento masivo de civiles en acciones de tipo militar. Ese marco legal y político, sumado a las acciones guerrilleras, convirtieron a los civiles en víctimas y en no pocas ocasiones en victimarios, en un contexto exacerbado por fenómenos de arraigo social tales como la emergencia de los ejércitos privados y el narcotráfico.

La segunda década del siglo XXI vio la convergencia de tres factores fundamentales que definieron el rumbo del conflicto armado: (1) el éxito estratégico de las Fuerzas Militares de hacer inviable para las guerrillas la toma del poder por vía armada; (2) la decisión de las Farc de hacer gravitar su estrategia alrededor de la acción política, incluida la legal; y (3) la decisión del Estado de ofrecer una salida negociada y una reintegración política de las guerrillas a la democracia. Estos tres factores condujeron hacia una dinámica en la que los actores del conflicto se han movido para poner fin a la vía armada en el país y, por derivación, en América Latina.

La degradación del acumulado militar tanto de las Farc como del ELN hizo retroceder a ambas guerrillas hasta llegar a un desequilibrio de fuerzas frente a las Fuerzas Militares cercano al de los años setenta. Pero de manera aun más crucial, el simultáneo crecimiento en tamaño y calidad de las Fuerzas Militares las hicieron capaces de golpear de forma contundente a las guerrillas y contrarrestar sus planes como no ocurría veinticinco años atrás.

Es debatible si el esfuerzo presupuestal del Estado frente a las Fuerzas Militares y de Policía, desde 1998 en promedio superior a los tres puntos porcentuales del PIB anual[2], así como su efectividad, podía mantenerse en el escenario de una guerrilla debilitada y en proceso de adaptación a una nueva realidad. Desde finales de la primera década del siglo XXI, el crecimiento presupuestal y de tamaño de las Fuerzas Militares había llegado a un techo histórico que se mantuvo relativamente estable hasta 2016. Justo en ese periodo, el proceso de actualización de todos los manuales y reglamentos internos de Ejército, Fuerza Aérea y Armada significaba un cambio en la definición de la amenaza de

seguridad y de las tácticas para enfrentarla, configurando de facto una reforma sistemática a la doctrina militar.

En agosto de 2016, el Comando del Ejército publicó los primeros diecisiete manuales básicos que recogen la nueva forma de operar en términos de inteligencia, defensa y ofensiva, y que en conjunto representan la revisión de la doctrina militar en curso desde 2011[3]. La nueva doctrina militar, entendida como el conjunto de formas tácticas, operativas y estratégicas de las Fuerzas Militares contenidas en sus manuales y documentos, sugiere de manera crucial una redefinición del adversario a partir de 2016. La nueva amenaza, caracterizada como 'híbrida', combina las formas de acción de las guerrillas y los ejércitos privados del narcotráfico, los cuales buscarían prosperar en un escenario de debilidad institucional. Por derivación, la acción de las Fuerzas Militares se dirigía a fortalecer la estabilidad institucional, ya fuera en Colombia o en otros países sumidos en escenarios de fragilidad, incorporando para ello principios aprendidos de la guerra contrainsurgente, tales como los de masa, economía de fuerza, sorpresa, etc., y en particular el concepto de operaciones conjuntas de las distintas armas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea[4].

De forma crucial, para el caso colombiano, los militares pasaron de identificar en los miembros de las Farc a sus principales adversarios, a proteger de facto su integridad física durante su proceso de transición a la vida civil, tal como fue pactado en las negociaciones del Gobierno y la cúpula guerrillera en La Habana entre 2012 y 2016.

Terminada en 2011 la era de los grandes golpes militares a las guerrillas, los nuevos escenarios de confrontación cambiaron drásticamente. Los ceses unilaterales al fuego ofrecidos por las Farc entre 2012 y 2016, y el cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo con el Estado de 2016, así como antes su renuncia definitiva al secuestro y liberación de los civiles, soldados y policías en su poder en 2012, son puntos que marcan el declive de la confrontación armada como escenario estratégico.

El fin definitivo la confrontación armada entre el Gobierno y las Farc, efectivo con el cese del fuego y hostilidades del 29 de agosto de 2016, representa el punto de giro hacia la desaparición del componente militar del conflicto colombiano.

Para las Farc, como para sus antiguos patrocinadores del Partido Comunista, la vía armada ya no es el camino para la toma del poder. Todavía falta ver si la

inercia de la desmilitarización del conflicto conlleva a la renuncia de la violencia como modalidad de lucha para los comunistas revolucionarios.

Los contenidos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc en septiembre de 2016, y modificados en noviembre, abrieron la puerta para que miles de militares acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario encontraran ese mismo año una salida jurídica.

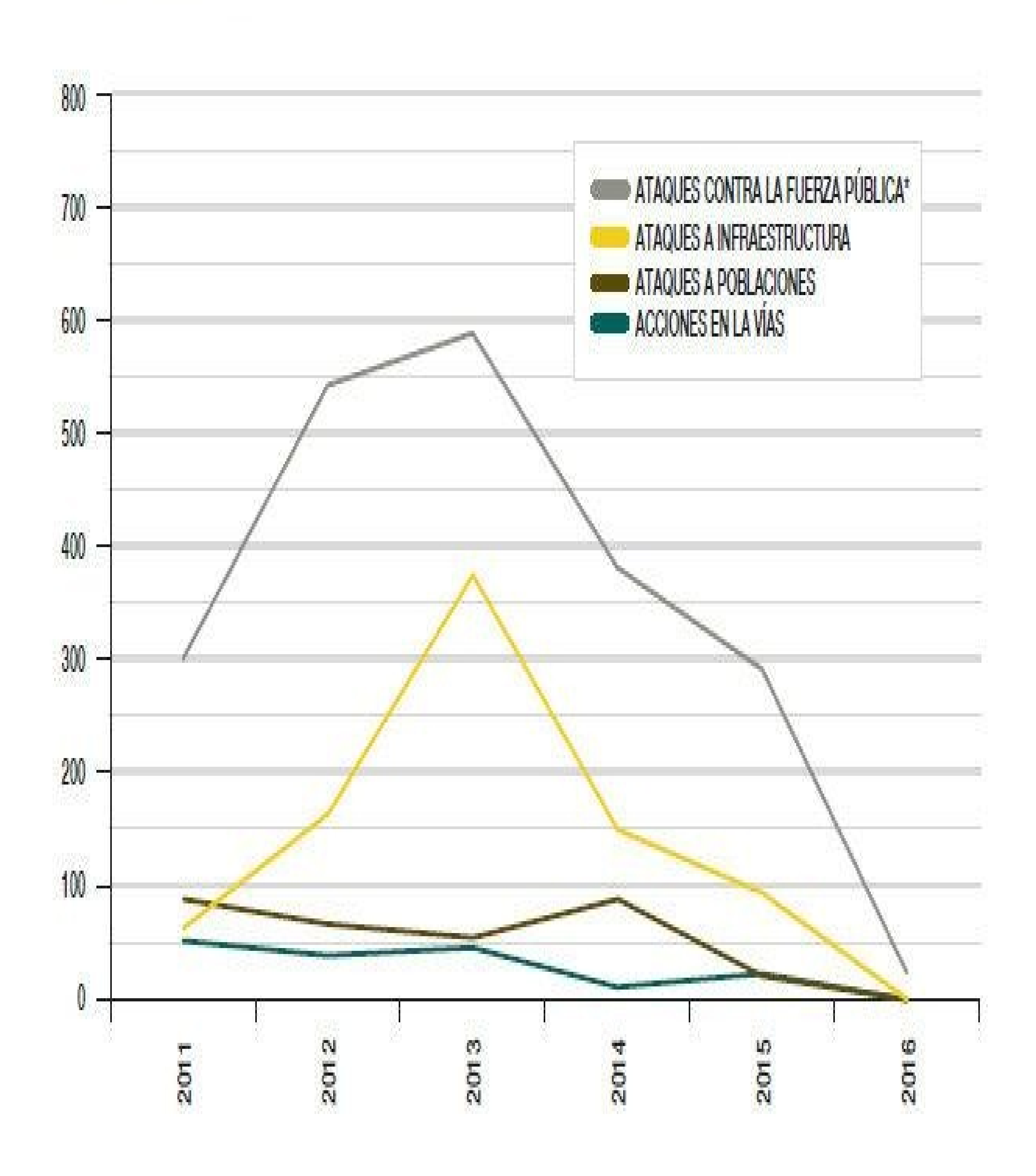
Desde el año 2010, las Farc apostaron por la infiltración de movimientos sociales y políticos locales, desde el ámbito veredal en adelante[5]. La organización de las comunidades se acompañaba en el nuevo plan de las Farc con la construcción de un frente político que aglutinara fuerzas políticas de izquierda, el impulso a organizaciones de apoyo académicas y culturales, medios de comunicación alternativos y la consecución de apoyos políticos en América Latina y Europa[6]. En los años venideros, el desarrollo de ese plan significó de facto la relegación del aparato militar como respaldo de la acción social y política clandestina. Tal viraje desembocó en la renuncia definitiva al uso de las armas por parte del grupo durante su décima y última conferencia nacional, en septiembre de 2016.

Gráfico 25.

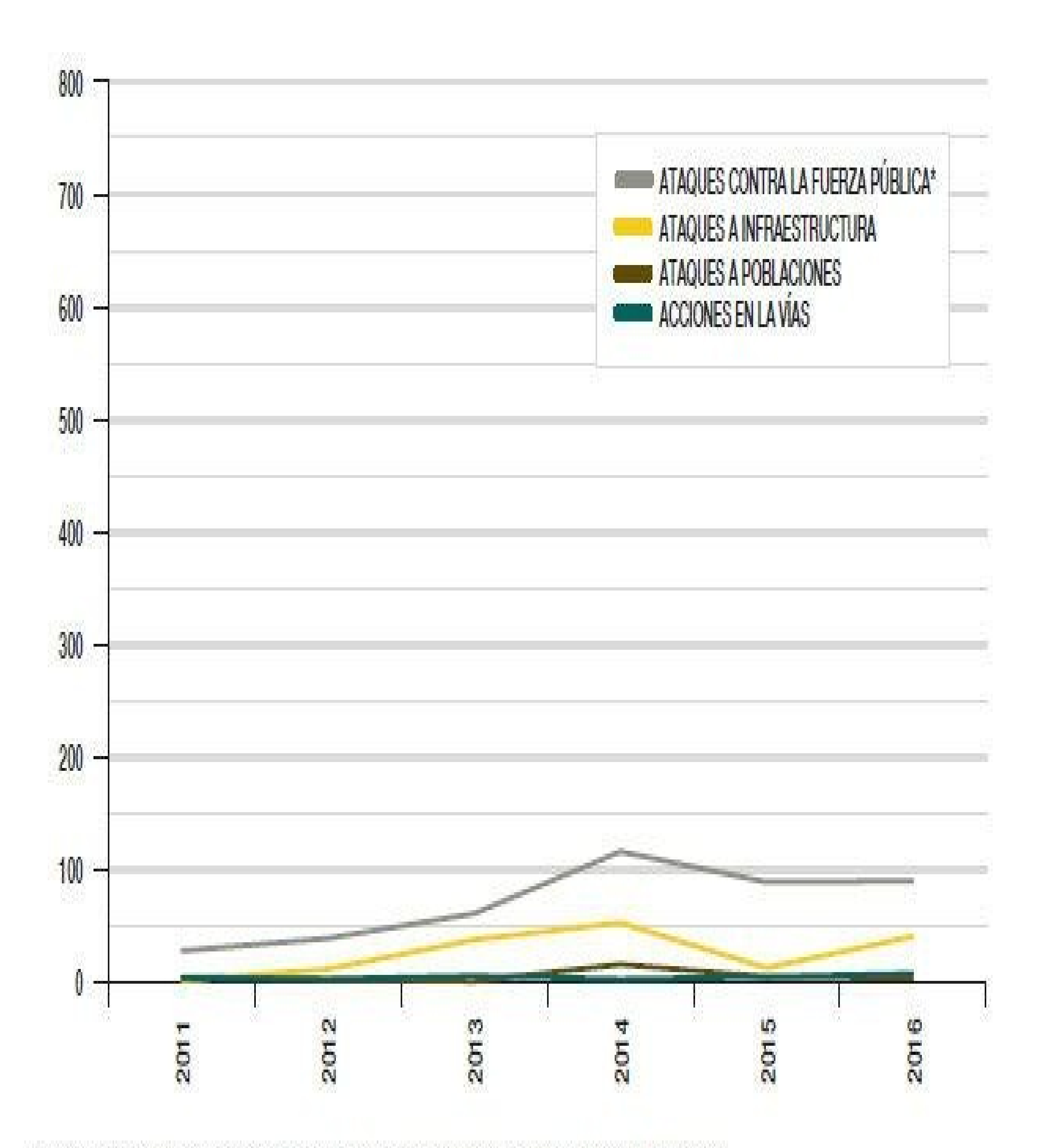
ACCIONES ARMADAS DE FARC Y ELN 2012-2016

La intensidad del conflicto armado a partir de 2012 era notablemente inferior a la de las dos décadas precedentes, hasta llegar a su terminación en el caso de la confrontación entre Fuerzas Militares y Farc en 2016.

ACCIONES ARMADAS DE FARC



ACCIONES ARMADAS DE ELN



*Incluye emboscadas, hostigamientos, ataque con armas de fuego y explosivos a patrullas y bases.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa y Otero, Diego 2007. Las cifras del conflicto colombiano. Bogotá: Indepaz.

Según las Farc, los contenidos del acuerdo de paz con el Gobierno son "una demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años", dado su potencial "para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías". La dejación de las armas, decían, "representa probablemente el momento más difícil". En su última conferencia como grupo armado, aseguraban que las armas "han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el Acuerdo Final de solución política"[7]. A finales de 2016, las Fuerzas Militares esperaban a 6263 guerrilleros en las zonas de concentración y campamentos para la dejación de las armas, y la desmovilización de 7686 milicianos.

El acuerdo entre el Gobierno y las Farc, así como el nuevo proceso de paz entre el Gobierno y el ELN acordado en marzo de 2016, permitió que se abrieran ventanas de postconflicto en casi todo el país; es decir, lugares delimitados en el territorio y el tiempo en los cuales es posible implementar medidas de construcción de paz dirigidas a impedir el regreso del conflicto. La persistencia de amenazas de tipo militar para el Estado, tales como el ELN y otros grupos armados organizados, cuestiona razonablemente si estas ventanas de postconflicto abarcan la totalidad del territorio nacional de manera duradera en el tiempo.

En los documentos públicos del ELN, última guerrilla de América Latina, es evidente desde la primera década del siglo XXI el uso creciente de una retórica que explica la lucha armada ya no solo como una manera de resistir la derrota militar y mantenerse vigente, sino también como una forma, en su concepto, de construir la paz. Resultaba incierto en 2016 si el cambio retórico hacia la idea de resistencia por la paz significaba una subordinación de la acción armada a otro tipo de acciones. Por ello, el cierre completo del conflicto armado aún quedaba por concretarse. Los últimos guerrilleros de Colombia, y quienes los comandaban, se abocaban a decidir si las condiciones que ofrecía el Estado y la sociedad representaban sustitutos estratégicos para el desarrollo de sus metas personales, y de su agenda como grupo, o si la guerra seguía siendo su opción.



Fuente: Elaboración propia con datos de Central de Inteligencia Militar del Ejército y Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Desde principios del siglo XXI, los debates internos de la organización y los documentos de su V Congreso, conocidos en 2015, demuestran la importancia que otorgaban a explorar una solución al conflicto armado por vía negociada. Pero hasta 2016, esto aún no había derivado en la decisión de dejar de usar las armas, que seguían siendo un recurso más dentro de la estrategia guerrillera para provocar un cambio de gobierno.

A pesar de empezar a experimentar cómo luciría un postconflicto, la Colombia de 2016 aún no daba el paso definitivo para culminar la guerra. “Las amenazas híbridas”, preveían entonces las Fuerzas Militares respecto a los grupos armados aun en actividad, “pueden optar por luchar un conflicto prolongado en zonas pobladas [y usar] armas de destrucción u otros métodos únicos para desafiar el dominio legítimo […] Este enemigo presenta un reto formidable”[8]. Para militares y guerrillas, la confrontación aún no había terminado. La sociedad colombiana se enfrentaba a un momento definitivo para decidir el tipo y alcance de la transformación del país en los años venideros, con el fin de asegurar que la tendencia hacia un cierre definitivo a la vía armada no presentara retrocesos, al menos no a los niveles vistos en el pasado reciente.

Notas

[1] El 1.º de enero de 2017, el registro único de víctimas del Estado contabilizaba 8 022 019 víctimas del conflicto armado, 80 % de las cuales correspondía a víctimas de desplazamiento forzado.

[2] La marca de los tres puntos se supera en el año 2001. Si se suma todo el presupuesto de defensa y seguridad, la marca sube por encima de cinco puntos. Véase Ministerio de Defensa 2009. Gasto en defensa y seguridad 1998-2011. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 23.

[3] En 2012 se publicaron además nuevos manuales de 'acción integral' para el relacionamiento con la población civil y una circular anticorrupción y de principios éticos para el manejo de casos internos.

[4] Los nuevos manuales de Ejército de 2016 aseguran que "las amenazas de seguridad que con mayor probabilidad encontrarán las unidades del Ejército se describen como amenazas híbridas. Una amenaza híbrida es la combinación diversa y dinámica de fuerzas regulares, fuerzas irregulares, fuerzas terroristas, delincuentes o una combinación de estas fuerzas y elementos unificados de todas para lograr efectos que las benefician". Véase Centro de Doctrina del Ejército 2016. Manual MFE 3-0 Operaciones. Primera edición, 7 de agosto, numeral 2-71, 6.

[5] Comando Brigada de Selva Veintisiete 2014. Respuesta plan de búsqueda socio político 2014.

[6] Central de Inteligencia Militar 2010. Análisis plan de trabajo por la independencia definitiva 2010-2014 ONT Farc. Presentación.

[7] Farc-EP 2016. X Conferencia. Tesis para la discusión.

[8] Centro de Doctrina del Ejército 2016, op. cit., numerales 2-20 y 2-22, 6-7.

Anexo

Lista de archivos militares visitados

El Comando General de las Fuerzas Militares y el Departamento Jurídico del Ejército dispusieron de once equipos regionales encargados de la recolección de los archivos militares que fueron usados en este libro. En cada archivo, se revisaron las secciones generales, de operaciones, de inteligencia y de derechos humanos, además de los libros de anotaciones.

-

Central de Inteligencia Militar del Ejército	Bogotá
Biblioteca Central de las Fuerzas Militares	Bogotá
Biblioteca Escuela Superior de Guerra	Bogotá
Primera División	
Archivo Central Primera División	Santa Marta
Batallón de Artillería 2 La Popa	Valledupar
Batallón de Infantería Mecanizada 4	Malambo
Batallón de Infantería Mecanizada 5	Santa Marta
Batallón de Infantería Mecanizada 6	Riohacha
Batallón de Ingenieros 2	Malambo
Batallón de Policía Militar 2	Barranquilla
Décima Brigada Blindada	Valledupar
Grupo Gaula Cesar	Valledupar
Grupo Gaula Magdalena	Santa Marta
Regional de Inteligencia Militar 1	Santa Marta

Segunda División	
Archivo Central Segunda División	Bucaramanga
Archivo Central Quinta Brigada	Bucaramanga
Batallón de Alta Montaña 2	El Espino
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 1	Tunja
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 5	Bucaramanga
Batallón de Artillería 1	Sogamoso
Batallón de Artillería 5	El Socorro
Batallón de Artillería de Defensa Aérea 2	Barrancabermeja
Batallón de Infantería 1	Tunja
Batallón de Infantería 14	Bucaramanga
Batallón de Infantería 2	Chiquinquirá
Batallón de Infantería 40	San Vicente del C
Batallón de Ingenieros 5	Bucaramanga
Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento 1	Samacá
Batallón de Selva 48	Santa Rosa del Su
Batallón Especial Energético y Vial 6	Miraflores
Batallón Especial Energético y Vial 7	Barrancabermeja
Grupo de Acción Unificada para la Liberación - Boyacá	Tunja
Grupo de Acción Unificada para la Liberación - Santander	Santander
Grupo de Caballería Mecanizada 1	Bonza
Tercera División	
Archivo Central Tercera Brigada	Cali
Archivo Central Tercera División	Popayán
Archivo Central Vigésima Novena Brigada	Popayán
Archivo Central Vigésima Tercera Brigada	Pasto

Batallón de Artillería 3	Buga
Batallón de Infantería 7	Popayán
Batallón de Infantería 8	Cali
Batallón de Infantería 9	Pasto
Batallón de Ingenieros 3	Palmira
Dirección de Instrucción y Entrenamiento	Bogotá
Fuerza de Tarea Apolo	Miranda
Grupo de Caballería Mecanizada 3	Ipiales
Cuarta División	
Archivo Central Séptima Brigada	Villavicencio
Archivo Central Cuarta División	Villavicencio
Batallón de Infantería 19	San José del Guav
Batallón de Infantería 21	Granada
Batallón de Infantería Servíez 20	Villavicencio
Batallón de Ingenieros 7	Villavicencio
Brigada de Fuerzas Especiales	Tolemaida
Brigada de Selva 22	San José del Guav
Brigada de Selva 31	Mitú
Fuerza de Despliegue Rápido	Tolemaida
Regional de Inteligencia Militar 4	Villavicencio
Quinta División	
Archivo Central Brigada 13	Bogotá
Archivo Central Sexta Brigada	Ibagué
Archivo Central Octava Brigada	Armenia
Archivo Central Novena Brigada	Neiva

Archivo Central Quinta División	Ibagué
Batallón de Alta Montaña 1	Sumapaz
Batallón de Alta Montaña 5	Génova
Batallón de Alta Montaña 9	Algeciras
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 13	Bogotá
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 8	Armenia
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 9	Neiva
Batallón de Artillería 13	Usme
Batallón de Artillería 8	Pereira
Batallón de Artillería 9	Neiva
Batallón de Combate Terrestre 31	Rovira
Batallón de Contraguerrillas 34	Ibagué
Batallón de Contraguerrillas 36	Ibagué
Batallón de Infantería 16	Honda
Batallón de Infantería 18	Ibagué
Batallón de Infantería 22	Caldas
Batallón de Infantería 26	Garzón
Batallón de Infantería 27	Pitalito
Batallón de Infantería 37	Bogotá
Batallón de Infantería 38	Facatativá
Batallón de Infantería 39	Fusagasugá
Batallón de Infantería de Montaña 17	Chaparral
Batallón de Ingenieros 13	Planadas
Batallón de Ingenieros 8	Pueblo Tapao
Batallón de Policía Militar 13	Bogotá
Batallón de Policía Militar 15	Bogotá

Batallón de Servicios 6	Ibagué
Batallón Especial Energético y Vial 12	Altamira
Batallón Especial Energético y Vial 2	La Jagua
Brigada de Infantería Aerotransportada 28	Tolemaida
Brigada Móvil 20	Chaparral
Brigada Móvil 21	Villarrica
Brigada Móvil 8	Planadas
Fuerza de Tarea Sumapaz	Fusagasugá
Grupo de Caballería 10	Bogotá
Grupo Gaula Cundinamarca	Bogotá
Grupo Gaula Eje Cafetero	Pereira
Grupo Gaula Huila	Neiva
Grupo Gaula Tolima	Ibagué
Sexta División	
Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas 12	Florencia
Archivo Central Sexta División	Florencia
Batallón contra el Narcotráfico 1	Larandia
Batallón contra el Narcotráfico 2	Larandia
Batallón contra el Narcotráfico 3	Larandia
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 12	Florencia
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 26	Leticia
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 27	Mocoa
Batallón de Artillería 27	Santana
Batallón de Comando Terrestre 12	La Unión
Batallón de Infantería 25	Villagarzón
Batallón de Infantería 34	Florencia

Batallón de Infantería 35	Larandia
Batallón de Infantería 36	San Vicente del C
Batallón de Infantería 49	Puerto Leguizamó
Batallón de Infantería 50	Leticia
Batallón de Infantería 8	Cali
Batallón de Ingenieros 12	Larandia
Batallón de Instrucción y Entrenamiento 12	Larandia
Batallón de Instrucción y Entrenamiento 27	Santana
Batallón Especial Energético y Vial 11	Santana
Batallón Especial Energético y Vial 19	Puerto Rico
Archivo Central Décimo Segunda Brigada	Quibdó
Brigada contra el Narcotráfico	Florencia
Brigada de Selva 27	Santana
Brigada Móvil 13	Puerto Asís
Brigada Móvil 36	San Vicente del C
Brigada Móvil 6	Popayán
Brigada Móvil 9	San Vicente del C
Comando Especifico del Caguán	San Vicente del C
Compañía Meteoro 7	Florencia
Compañía Meteoro 8	Putumayo
Fuerza de Tarea Júpiter	Florencia
Fuerza de Tarea Omega	Larandia
Grupo Gaula Caquetá	Florencia
Grupo Mecanizado 12	Larandia
Regional de Inteligencia Militar 6	Florencia

Séptima División

Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas 5	Medellín
Archivo Central Cuarta Brigada	Medellín
Archivo Central Décimo Cuarta Brigada	Puerto Berrío
Archivo Central Décimo Primera Brigada	Montería
Archivo Central Décimo Quinta Brigada	Quibdó
Archivo Central Décimo Séptima Brigada	Carepa
Archivo Central Séptima División	Medellín
Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 14	Puerto Berrío
Batallón de Artillería 4	Rionegro
Batallón de Infantería 10	Medellín
Batallón de Infantería 11	Andes
Batallón de Infantería 12	Quibdó
Batallón de Infantería 31	Caucasia
Batallón de Infantería 32	Medellín
Batallón de Infantería 33	Montería
Batallón de Infantería 42	Puerto Berrío
Batallón de Infantería 47	San Pedro de Ural
Batallón de Ingenieros 4	Bello
Batallón de Ingenieros 14	Cimitarra
Batallón de Ingenieros 17	Carepa
Batallón de Policía Militar 4	Medellín
Batallón de Servicios 4	Medellín
Batallón Especial Energético y Vial 4	San Rafael
Batallón Especial Energético y Vial 5	El Bagre
Batallón Especial Energético y Vial 8	Segovia
Batallón de Infantería 46	Carepa

Batallón Mecanizado 4	Rionegro
Brigada Móvil 16	Montería y Puerto
Compañía Meteoro 2	Puerto Valdivia
Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo	Caucasia y Urrá
Fuerza de Tarea Titán	Quibdó
Grupo Gaula Córdoba	Montería
Grupo Gaula Oriente Antioquia	Rionegro
Grupo Gaula Rural Antioquia	Medellín
Octava División	
Archivo Central Décimo Octava Brigada	Arauca
Archivo Central Décimo Sexta Brigada	Yopal
Archivo Central Octava División	Yopal
Batallón de Combate Terrestre 23	Puerto Jordán
Batallón de Combate Terrestre 29	Puerto Jordán
Batallón de Combate Terrestre 65	Arauca
Batallón de Ingenieros 19	Tame
Batallón de Infantería 44	Tauramena
Brigada Móvil 5	Tame
Fuerza de Tarea Quirón	Tame
Grupo de Caballería Mecanizado	Saravena
Grupo Montado Guías de Casanare 16	Yopal
Regional de Inteligencia Militar 8	Yopal

Tabla de Contenido

Portada

Resumen

Portadilla

Página legal

Autores

Agradecimientos

Introducción

Memoria, historia y verdad

De qué se trata este libro

Diseño de la investigación

Parte I 1958-1978 Insurrección, bandolerismo y guerrillas

1964

Capítulo I La insurrección comunista

Comunistas en armas

Capítulo II Un ‘ejército contrabandolero’

Un nuevo tipo de conflicto

Capítulo III La guerra campesina en el sur

Capítulo IV La guerra de los estudiantes del Che: el primer ELN

Operación Anorí: el fin del primer eln

Capítulo V La consecuencia de las victorias inconclusas

Parte II 1974-1985 La guerra en el campo y la ciudad

Capítulo VI La guerrilla en las ciudades

Guerra combinada

De amnistías y treguas rotas

Capítulo VII El desafío multiplicado

La nueva forma de operar de las Farc

La división maoísta

El eln en reconstrucción

La autodefensa legal y los ejércitos privados

Capítulo VIII Toma y retoma del Palacio*

Parte III 1984-1992 La paz como estrategia de guerra

Capítulo IX El fin de la guerra popular

La tregua de las Farc

Los ejércitos privados se consolidan

El fallido ‘ejército único’ del M-19

La derrota del epl

Capítulo X Fuerzas Militares a la ofensiva

La paz de la Coordinadora

Parte IV 1992-2002 Guerra total

Capítulo XI Choque de estrategias

Ideología en la post-Guerra Fría

Hacia la primera ofensiva

La confederación de autodefensas

Las Farc roban la iniciativa

La pausa estratégica

Capítulo XII De Mitú al Caguán

El balance de fuerzas

La guerra continúa

Cambia la iniciativa

Parte V 2002-2016 La guerra como estrategia de paz

Capítulo XIII Punto de quiebre

Combate en la ciudad

Se rompe el cerco a Bogotá

Ofensiva en la selva

La ‘guerra jurídica’

Los últimos grandes golpes

Los virajes

Epílogo Hacia el fin de la vía armada en Colombia

Anexo Lista de archivos militares visitados